

AL 5



REFORMA

DEL

CODIGO CIVIL



I. ANTECEDENTES — II. INFORME
III. PROYECTO



BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA	
Nº. DE ORDEN	49.541
UBICACIÓN	C185

1936
Cmo. KRAFT LTDA.
SOC. ANÓN. DE IMPRESIONES GENERALES
BUENOS AIRES



ANTECEDENTES

y

PRESENTACION AL PODER EJECUTIVO

ANTECEDENTES

Decreto N° 12.542, que designó a la Comisión Reformadora del Código Civil

Departamento
de Justicia.

Buenos Aires, 2 de julio de 1926.

Atentas las reformas introducidas en el Código Civil desde su vigencia; los proyectos en trámite ante el H. Congreso de la Nación y la conveniencia de una revisión ilustrada y serena de nuestra gran ley civil para su mejor armonía con las nuevas condiciones de la vida argentina,

El Presidente de la Nación Argentina,

DECRETA:

- Art. 1°. Designase una Comisión compuesta de siete juriconsultos, encargada del estudio de nuestro Código Civil y de aconsejar las reformas y coordinación con otras leyes que se juzguen pertinentes.
- Art. 2°. Dicha Comisión se compondrá: de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de un Vocal de cada una de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil de la Capital; de un Profesor de Derecho Civil de la Facul-

tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de otro Profesor de la misma materia de la Universidad de La Plata; de un miembro de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Buenos Aires y de un Delegado del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Dichos comisionados se designarán por los Cuerpos de su respectiva pertenencia, a los que se solicitará la concurrencia a esta patriótica labor.

- Art. 3°. Los comisionados se constituirán y actuarán en la forma que conceptúen más adecuada pero bajo la presidencia del delegado de la Suprema Corte y podrán solicitar el concurso de aquellas personas de competencia en la materia.
- Art. 4°. Las oficinas, funcionarios o empleados públicos dependientes del Poder Ejecutivo de la Nación, facilitarán a los comisionados el cumplimiento de su misión, suministrando datos e informes que no contraríen la reserva peculiar a determinados asuntos de su incumbencia. En caso de duda harán la consulta pertinente.
- Art. 5°. La Comisión se expedirá tan pronto como la índole de sus tareas lo permita, con un proyecto de ley e informe documentado.
- Art. 6°. Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

ALVEAR.

ANTONIO SAGARNA.

Decreto N° 13.156, ampliatorio del anterior

Departamento
de Justicia.

—

Buenos Aires, 16 de julio de 1926.

CONSIDERANDO:

Que hasta el Poder Ejecutivo han llegado algunas observaciones referentes al decreto de fecha 2 del actual, encaminado a proyectar la reforma, revisión y coordinación del



Código Civil, con los mayores recaudos posibles para la eficacia del trabajo, observaciones referentes a la representación de otras Universidades, a la forma del trabajo de la Comisión y a la existencia de otras iniciativas similares anteriores;

Que, desde luego, al circunscribir a dos profesores de derecho civil de las Facultades Universitarias de Buenos Aires y La Plata, la integración de la Comisión, se tuvo en cuenta la circunstancia de la proximidad de sus domicilios e institutos docentes, lo que permite un frecuente contacto y trabajo con los demás miembros. El respeto y consideración siempre testimoniado por el P. E. a las otras Universidades del país excluye el olvido de las mismas o el propósito de menoscabo de sus legítimos títulos para colaborar en una obra de cultura, de justicia y de beneficio nacional;

Que la circunstancia de haberse proyectado la reunión en la ciudad de Córdoba, de un Congreso de Derecho Civil, para el mes de mayo de 1927, no quita la oportunidad al decreto del Poder Ejecutivo ni tampoco puede suponerse a éste el efecto de desmedrar o disminuir interés a aquél, desde que sus finalidades no se excluyen, como tampoco no se excluyen ni chocan ambas con las iniciativas legislativas informadas por el mismo propósito de revisión, reforma y coordinación;

Que, a pesar de las consideraciones precedentes, es posible salvar las dificultades o prevenciones apuntadas haciendo concurrir el mayor número de esfuerzos ilustrados a la solución de un problema que despierta grande interés y preocupación y tiene verdadera importancia y trascendencia.

Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina,

DECRETA:

Art. 1°. Ampliase el decreto de fecha 2 del corriente mes en los siguientes términos:

- a) Formarán parte de la Comisión, además de los nombrados, un Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba y otro de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Litoral.
- b) Dicha Comisión funcionará en Buenos Aires y podrá encomendar a uno o más de sus miembros la tarea de preparar y proyectar las reformas, revisiones y coordinaciones necesarias o convenientes, para estudiarlo y pronunciarse después, sobre él, la Comisión en pleno.

Art. 2º. Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Registro Nacional y archívese.

ALVEAR.

ANTONIO SAGARNA.

Cumplimiento de los decretos

De acuerdo con lo dispuesto en los decretos precedentes, la Comisión Reformadora del Código Civil quedó integrada el 24 de agosto de 1926, en la forma siguiente:

PRESIDENTE: Doctor Roberto Repetto, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

VOCALES: Doctor Julián V. Pera, Vocal de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a quien sucedió el Doctor Gastón Federico Tobal.

Doctor Raymundo M. Salvat, Vocal de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a quien sucedió el Doctor César de Tezanos Pinto.

Doctor Héctor Lafaille, Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Doctor Juan Carlos Rébora, Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata.

Doctor Juan Antonio Bibiloni, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Buenos Aires.

Doctor Rodolfo Rivarola, delegado del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Doctor Enrique Martínez Paz, Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba.

Doctor José A. Gervasoni, Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Litoral.

1

LEY N° 12.183 *

Publicaciones de la Comisión Reformadora del Código Civil

Artículo 1° Autorízase al Poder Ejecutivo para entregar a la Comisión Reformadora del Código Civil, creada por decretos de fecha 2 y 16 de julio de 1926, la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional, con destino a la publicación de las actas, notas y trabajos de dicha comisión.

Art. 2° La comisión dispondrá asimismo la publicación del anteproyecto del doctor Juan Antonio Bibiloni en su forma definitiva y con inclusión de los artículos del código vigente no reformados.

Art. 3° La comisión determinará el número de ejemplares a repartirse gratuitamente, así como las personas entre las cuales deba hacerse la distribución. Los ejemplares restan-

* Esta ley tuvo origen en el proyecto que presentó el ex-diputado Dr. Pedro Buitrage, ante la Cámara de Diputados de la Nación, el 9 de agosto de 1934.

tes se ofrecerán en venta al precio de costo que resulte, debiendo su producido ingresar al fondo destinado para costear esta publicación.

Art. 4º El gasto que demande la ejecución de la presente ley, se hará de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 5º Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 6 de agosto de 1935.

JULIO A. ROCA.
Gustavo Figueroa.

MANUEL A. FRESCO.
L. Zavalla Carbó.

PRESENTACION AL PODER EJECUTIVO

Buenos Aires, octubre 1º de 1936.

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.

Dr. Jorge de la Torre.

Tenemos el honor de elevar a V. E. y por su intermedio al Señor Presidente de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 5º del decreto fecha 2 de julio de 1926, el Proyecto que la Comisión Reformadora del Código Civil propone como resultado de su tarea. Diez años de labor delicada y paciente ha invertido en su estudio, que lleva a término sin haber olvidado en ningún momento su trascendencia para la vida jurídica nacional. Las palabras que preceden al decreto del Presidente Alvear que constituyó la Comisión durante el Ministerio Sagarna, sintetizan cuanto pudiera expresarse sobre la necesidad de la reforma. Sus antecedentes mediatos constan en numerosos proyectos de ambas Cámaras Legislativas tendientes a modificar la estructura del Código, o a introducir cambios en instituciones especiales que exteriorizan en su conjunto la urgencia y oportunidad de aquella iniciativa.

El Código de Vélez Sársfield fué un exponente de altísimo valor jurídico para su época. No es exagerado decir que si el país logró alcanzar un progreso extraordinario, fué en gran parte, porque halló en las normas de aquél, reglas adecuadas que lo estimularon. El régimen de la familia y el que estableció para la propiedad y para la sucesión hereditaria, fueron organizados inspirándose en los principios que más convenían a las necesidades de nuestro pueblo, a sus sentimientos religiosos, sociales y políticos, eliminando en general de las leyes en vigor, cuanto pudiera

importar una rémora o llevar latente el gérmen de ciertas desigualdades que contrariaban el espíritu de la constitución. Fué así, como la obra del codificador, por haber auscultado los ideales y exigencias del ambiente, contribuyó de un modo efectivo a la unidad política y espiritual dentro de la Nación y al bienestar de sus habitantes. Con toda justicia pues, ha podido rendírsele en ceremonia reciente, el homenaje unánime que sintetizó el Señor Presidente de la República, General Justo, al expresar que en horas graves, fué Vélez el gran arquitecto de la construcción nacional.

Pero los códigos no son monumentos eternos. Los preceptos que ellos contienen están destinados a regir una sociedad que cambia sin cesar. Sancionado el nuestro en un período transitorio, apenas consolidada la unión de la República, los hechos habrían de amoldar por fuerza las leyes a la vida del país. Y si en los comienzos de este siglo las corrientes de la doctrina y una distinta manera de concebir las cosas, indicaron ya la necesidad de armonizarlo con las nuevas condiciones de la existencia, los efectos de la guerra europea, los profundos cambios en la economía y en el trabajo, tornaron luego indispensable la reforma. Es de lamentar, por cierto, que la vida del Código, no pueda prolongarse, en parte porque el individualismo que lo inspiró y el respeto excesivo a la libertad de las convenciones, impidieron se infiltrara el espíritu nuevo, en parte, por los reatos derivados de las normas teóricas con que Vélez encabezara sus títulos, y a las que fuera tan afecto, siguiendo, cierto es, la inclinación de su época. Por fin, la falta de una jurisprudencia que diera unidad a la interpretación del derecho común, ha influido perjudicialmente en la duración y eficacia del Código.

• • •

El proceso preparatorio de la obra que hoy presentamos a V. E., ha pasado por tres etapas sucesivas.

La primera corresponde al encargo conferido al Dr. Bibiloni, en uso de la facultad acordada por el decreto del 16 de julio de 1926, para redactar un Anteproyecto. Cada uno de los miembros de la Comisión, indicó entonces, los

puntos fundamentales que a su juicio debían ser objeto de la reforma, a fin de que fueran tenidos en cuenta. La confianza así discernida a uno de nuestros más grandes juristas., no fué defraudada. Su trabajo —que entregó en menos de seis años— pudo ser apreciado con justicia, como una magnífica plataforma de doctrina, según podrá juzgarse por la publicación metódica y completa que del mismo realizaremos, con arreglo a la ley N.º 12.183.

La segunda etapa corresponde al examen del Anteproyecto en su contenido jurídico. A medida que el autor lo redactaba, cada uno de los miembros hacía su estudio, para expresar luego sus observaciones por escrito, o verbalmente en las reuniones plenarias. Las actas, no obstante su forma sintética, instruyen de la importancia que revistió esa tarea y de la prudencia con que se ha procedido. No ha sido admitida modificación alguna al Código en vigor, sea de fondo o de valor meramente formal, sin pasarla por el tamiz de un estudio atento, en el que se procuró agotar de una manera breve, pero decisiva, las razones determinantes del voto de sus miembros. Esas actas darán cuenta igualmente, de cómo fueron puestos a contribución la doctrina, la jurisprudencia y el derecho comparado, para aceptar o rechazar los criterios o las figuras que recomiendan los autores o introducen las leyes más modernas. Pero si hemos tenido en cuenta la experiencia de otros países, nos hemos inspirado preferentemente en las exigencias del nuestro, siguiendo para ello la obra de la jurisprudencia nacional, los trabajos de nuestros comentaristas y las numerosas iniciativas parlamentarias, para innovar tan sólo en la medida indispensable. De ahí que hayamos conservado a menudo los textos del viejo Código, si bien remozando su doctrina o desenvolviéndola, para adecuarla a las circunstancias de la hora actual y al espíritu de la época, que nos reclama menos individualismo y más preocupación por el derecho de los terceros.

• • •

Aunque el presente informe comprende una relación sucinta de cada libro, y en los capítulos correlativos señalamos los puntos acerca de los cuales innova nuestro Pro-

yecto, queremos destacar en este proemio, las modificaciones de mayor trascendencia.

En primer lugar, hemos establecido, siguiendo a Bibiloni, una parte general, según lo hacen con criterio lógico los códigos alemán y del Brasil. Nos apartamos así, de los antiguos modelos que siguiera Vélez al dividir su obra. La sistematización produce ventajas manifiestas: aparecen reunidos en esa parte general, principios que el Código presentía o aplicaba en un campo, reducido por lo común, al de las obligaciones o contratos. Con este criterio, las modalidades de los actos jurídicos no habrán de referirse ya, tan sólo a las primeras, ni la prueba a los segundos. Los elementos inherentes a toda relación jurídica, figuran así, reunidos y clasificados, con un alcance y un vigor más eficaces.

El primer libro comprende después del estudio sobre las personas, que ya tratara Vélez en igual orden dentro de su Código, la sección segunda correspondiente a los bienes. En ella, luego de disposiciones comunes acerca del patrimonio, se legislan el dominio público y el privado, y en un título nuevo, el bien de familia, que no figura en el Anteproyecto. En la sección tercera se estudian los hechos, los vicios de la voluntad (error, dolo, fuerza y temor) los actos jurídicos, sus formas, la simulación, las modalidades, la representación, la nulidad y la confirmación, y termina con una serie de preceptos sobre el modo de extinguirse las relaciones jurídicas. La cuarta, trata del ejercicio y prueba de los derechos, y la quinta, de la prescripción.

Tal es el contenido de la parte general, que también se caracteriza por otra novedad, tomada del Anteproyecto y que conviene destacar: la reglamentación de los principios procesales, que por su naturaleza deben incluirse dentro de una ley nacional. Los derechos garantizados por la Constitución y los códigos podrían alterarse, y aun quedar prácticamente suprimidos, si las acciones que los protegen y los medios indispensables para demostrarlos en juicio, llegaran a depender exclusivamente de las provincias. Con el sistema propuesto, se completa pues, lo que es propio del Código Civil, que ha legislado parcialmente sobre el punto, y se imprime a esta materia la unidad de que hoy carece por el motivo señalado. De paso, generalizamos preceptos, que hoy

se encuentran aislados o circunscriptos a los contratos. Sin menoscabo por consiguiente, de las facultades de las provincias para desenvolver y aplicar estas reglas, hemos formado una sección que contiene lo referente al ejercicio de los derechos, a la prueba, a los instrumentos y escrituras públicas, instrumentos privados, cartas y otros escritos, confesión, testigos, demás elementos probatorios y cosa juzgada.

• • •

Dentro del régimen de la familia ha surgido entre nosotros la única divergencia fundamental. Si bien coincidimos en la necesidad de dignificar la unión legítima y aceptamos que ella es la base de las agrupaciones humanas, el difícil y siempre candente problema del divorcio ha dividido nuestro voto, aunque por último la mayoría resolvió mantener la indisolubilidad del vínculo; pero con modificaciones de importancia, que mejoran el sistema implantado en 1889.

Las actas expresan, no obstante que se trate prácticamente de discusiones agotadas, los motivos que inspiran a los partidarios de una u otra doctrina. Los que se inclinan a mantener el vínculo, piensan que la estabilidad de la familia debe colocarse en un plano superior a los individuos; que la admisión del divorcio absoluto no estaría justificada por un número de casos suficientemente graves. Se fundan en la experiencia ajena sobre la ineficacia de establecer causales determinadas; en los terribles peligros del abuso que presenciamos en muchos países que lo admiten; en la tradición y los sentimientos argentinos opuestos a este remedio, sobre todo en las provincias; en las soluciones que preconiza en general, nuestra enseñanza universitaria, y en lo resuelto por el Congreso de Derecho Civil celebrado en Córdoba durante el año 1927.

La doctrina opuesta, justifica su concordancia con el principio sentado en el comienzo del libro, entendiendo que con un divorcio legislado por ley nacional, que lo admita por causas extremadamente graves, se mantendrá la familia argentina, evitando que continúe disolviéndose de hecho, al amparo de legislaciones de otros países cuyos tribunales

lo conceden hasta por mutuo consentimiento. Que con él se evitará el fraude a nuestra ley, con las consecuencias prácticas que derivan de tales violaciones: la existencia de hijos manecillados por la tara de ilegítimos y con la afectación patrimonial que ello les depara. Piensan que la práctica del tribunal convence de que, en ciertos casos, es el remedio extremo pero necesario, que podrá permitir a esposos desgraciados rehacer honorablemente sus vidas, en vez de arrojarles al concubinato, con las dolorosas consecuencias que ello implica para los frutos de esas uniones.

Sin desconocer el peligro del abuso, han creído que podrían establecer los reatos necesarios para evitarlo. El divorcio constituiría, por lo demás, una opción: podrían los cónyuges elegir entre él, o aceptar que se mantuviera el vínculo. Por fin, como un límite más, la minoría ha formulado un texto que no está en Bibiloni, facultando al cónyuge a cuyo matrimonio civil hubiera seguido un casamiento religioso, celebrado de acuerdo con las reglas de la Iglesia Católica u otra confesión que establezca la indisolubilidad del vínculo, para que, demandado por divorcio absoluto, pueda oponerse a que se decrete la disolución de aquél. La sentencia tendría sólo el alcance de una separación personal. Con ello, no se ha pretendido reconocer en el orden civil y en forma indirecta, la validez de las consagraciones religiosas; se ha considerado sólo la situación del contrayente que de buena fe, celebró un matrimonio que entendió indisoluble.

En atención al interés y a la trascendencia del asunto, hemos resuelto elevar a V. E., además del proyecto que establece el divorcio limitado a la separación de cuerpos, el referente al divorcio absoluto, e indicar en el texto las modificaciones que deberían introducirse en ciertos artículos, para el caso de que se considerase conveniente admitir el segundo.

• • •

En lo que se refiere al derecho sobre las cosas, siguiendo a Bibiloni, proyectamos un Registro de Inmuebles para todo el país. La necesidad de reemplazar la tradición —

siempre equívoca e insuficiente como medio de publicidad— por los asientos de libros que pudieran llegar al conocimiento de terceros, era una exigencia ya impostergable, determinada por la necesidad de proteger a los adquirentes de buena fe, contra el peligro de reivindicaciones inesperadas y ocultas en el momento de constituirse un derecho real sobre bienes inmuebles. Esta es, sin duda, la reforma de mayor significado que experimenta el sistema del Código. El Proyecto presupone este Registro, que legisla dentro de una ley complementaria, cuyo articulado abraza además de aquél, las siguientes secciones: estado civil; embargos y limitaciones a la capacidad: inhibiciones, declaraciones de concurso e interdicciones; personas jurídicas, asociaciones, sociedades y mandatos; y por último sucesiones. Separadamente trata asimismo, del registro de semovientes y locomóviles. Al proponer una ley especial, nos hemos inspirado en la mayoría de los modelos extranjeros, teniendo muy en cuenta que el futuro ajuste de este nuevo mecanismo y los detalles que exige, impiden asignar a muchos de los preceptos los caracteres de estabilidad y precisión propios de las reglas contenidas en un Código. Los cambios que necesariamente habrán de introducirse —aun cuando sean de orden secundario — podrán hacerse con mayor facilidad, sin ofrecer las resistencias e inconvenientes de una reforma en la ley civil.

No está demás recordar que nuestro plan en este punto no se ajusta al Anteproyecto. La materia ha sido ampliada, y al mismo tiempo trasciende el propósito de centralizar en lo posible, los distintos organismos creados, sin desmedro de los derechos que corresponden a las provincias.

• • •

La tercera etapa de nuestra tarea fué dedicada a ordenar y redactar con sencillez y claridad, el contenido del Proyecto.

El propósito de unidad doctrinaria que determinó a preparar previamente un Anteproyecto, nos indujo a designar una subcomisión que diera forma definitiva al trabajo realizado. A los Dres. Lafaille y Tobal, fué confiada es-

ta difícil tarea. Para llevarla a término, tuvieron presente la primera versión del Anteproyecto así como la segunda que sólo alcanzó a los dos primeros libros, y también las indicaciones oportunamente formuladas por todos los miembros.

La obra de la subcomisión no se detuvo en ello. Recogió la crítica de los autores nacionales que, como Segovia y Colmo, observaron la técnica de Vélez; tomó en cuenta el aporte que bajo el título "Metodización y consolidación de las leyes" publicara el Instituto de Altos Estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, los análisis críticos a que esta obra diera lugar, que figuran reunidos como segundo tomo de la misma; y por fin las monografías y conclusiones de las diversas conferencias de abogados celebradas en el país, inclusive la reunida en Tucumán durante el año en curso.

Se ha realizado de esta manera, la obra paciente que significa la ordenación metódica, el empleo de la palabra precisa, del lenguaje accesible, del giro claro, procurando evitar las repeticiones, las consonancias y desaliños que suelen abundar en los textos legales. Igualmente debemos consignar que cuando algún precepto tuvo su origen inmediato en la legislación o en la doctrina germánica, se buscó reproducirlo en forma adecuada para el pensamiento y la comprensión latina.

Como consecuencia de esta labor, las más de las veces el contenido de cada título o capítulo debió ordenarse nuevamente, y como la visión de conjunto puso de relieve las antinomias o incongruencias que pudieron deslizarse en la tarea hasta entonces cumplida, esos reparos debieron nuevamente, y como la visión de conjunto puso de relieve las en las actas. La obra de la subcomisión fué de este modo, ampliada y perfeccionada, hasta llegar a su estado actual, que consideramos definitivo, no sin desconocer que aún podría alcanzarse una mayor propiedad de lenguaje, si la depuración idiomática continuara todavía.

Como resultado de ese trabajo, se llegó a distribuir en libros distintos, muchos tópicos, que detallaremos en el estudio particular de este informe, entre los cuales puede citarse la prescripción, que aparece ahora en el Libro I, si bien separada de la usucapión, que tiene cabida en los derechos reales, entre los medios de adquirir.

Nuestro Proyecto presenta, en vez de los cuatro mil ochenta y cinco artículos del Código vigente, un total de dos mil ciento cuarenta y cuatro, distribuidos así: un título preliminar con trece artículos; el Libro Primero (Parte General) con trescientos diecinueve; el Libro Segundo (De las relaciones de familia) con doscientos treinta y cuatro; el Libro Tercero (Derecho de las obligaciones) con ochocientos treinta y seis; el Libro Cuarto (Derechos sobre las cosas) con cuatrocientos cuarenta y siete; el Libro Quinto (De la sucesión hereditaria) con doscientos ochenta y ocho. Termina con un título complementario de siete artículos, a lo que se agrega el apéndice o Ley de Registro con ochenta y tres.

Los libros están divididos en secciones, éstas en títulos que a su vez forman capítulos, y los últimos excepcionalmente en párrafos, según resulta del cuadro siguiente:

TÍTULO PRELIMINAR.

LIBRO PRIMERO. PARTE GENERAL

SECCIÓN PRIMERA. DE LAS PERSONAS

TÍTULO I. De las personas naturales.

Capítulo I. Del comienzo y fin de las personas naturales.

Capítulo II. De la capacidad.

Capítulo III. Del nombre.

Capítulo IV. Del domicilio.

Capítulo V. De la prueba del nacimiento y de la muerte.

TÍTULO II. De los menores.

TÍTULO III. De la interdicción.

TÍTULO IV. De la ausencia.

Capítulo I. De la declaración de ausencia.

Capítulo II. De la presunción de fallecimiento.

TÍTULO V. De las personas jurídicas.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De las corporaciones.

Capítulo III. De las fundaciones.

Capítulo IV. De las asociaciones.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS BIENES

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. De los bienes públicos y particulares.

TÍTULO III. Del bien de familia.

SECCIÓN TERCERA. DE LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS

TÍTULO I. De los actos voluntarios.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del error.

Capítulo III. Del dolo.

Capítulo IV. De la fuerza y del temor.

TÍTULO II. De los actos jurídicos.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la forma de los actos jurídicos.

Capítulo III. De la simulación de los actos jurídicos.

TÍTULO III. De las modalidades de los actos jurídicos.

Capítulo I. De la condición.

Capítulo II. De los cargos.

Capítulo III. Del plazo.

TÍTULO IV. De la representación en los actos jurídicos.

Capítulo I. De la representación en general.

Capítulo II. De la autorización y de la aprobación.

TÍTULO V. De la nulidad de los actos jurídicos.

TÍTULO VI. De la extinción de las relaciones jurídicas.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la renuncia.

Capítulo III. De la confusión.

SECCIÓN CUARTA. DEL EJERCICIO Y PRUEBA DE LOS DERECHOS

TÍTULO I. Del ejercicio de los derechos.

TÍTULO II. De la prueba.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De los instrumentos públicos.

§ 1. Disposiciones generales.

§ 2. De las escrituras públicas.

Capítulo III. De los instrumentos privados.

§ 1. Disposiciones generales.

§ 2. De las cartas y otras pruebas escritas.

Capítulo IV. De la confesión.

Capítulo V. De los testigos.

Capítulo VI. De los otros medios de prueba.

TÍTULO III. De la cosa juzgada.

SECCIÓN QUINTA. DE LA PRESCRIPCIÓN

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. De la suspensión.

TÍTULO III. De la interrupción.

TÍTULO IV. Del tiempo de la prescripción.

LIBRO SEGUNDO. DE LAS RELACIONES DE FAMILIA

SECCIÓN PRIMERA. DEL MATRIMONIO

TÍTULO I. Régimen de las personas en el matrimonio.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De los impedimentos.

Capítulo III. De las diligencias previas.

Capítulo IV. De la celebración.

Capítulo V. De la prueba del matrimonio.

Capítulo VI. Derechos y obligaciones de los esposos.

Capítulo VII. Del divorcio.

Capítulo VIII. De la disolución del matrimonio.

Capítulo IX. De los matrimonios nulos y anulables.

TÍTULO II. Régimen de los bienes en el matrimonio.

Capítulo I. De las capitulaciones y donaciones prenupciales.

Capítulo II. De la sociedad conyugal.

§ 1. Principio de la sociedad, aportes y haber social.

§ 2. Cargas de la sociedad.

§ 3. De los bienes de la mujer.

Capítulo III. Administración de la sociedad conyugal.

§ 1. De la administración del marido.

§ 2. De los bienes administrados por la mujer.

Capítulo IV. Disolución de la sociedad conyugal.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LA FILIACIÓN

TÍTULO I. De la filiación legítima.

Capítulo I. De los hijos legítimos.

Capítulo II. De la legitimación.

TÍTULO II. De la filiación ilegítima.

Capítulo I. De los hijos naturales.

Capítulo II. De los hijos adulterinos e incestuosos.

TÍTULO III. De la adopción.

TÍTULO IV. Del parentesco y de la prestación de alimentos.

SECCIÓN TERCERA. DE LA PROTECCIÓN DE LOS INCAPACES

TÍTULO I. De la patria potestad.

TÍTULO II. De la tutela.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del comienzo de la tutela.

Capítulo III. Administración de la tutela.

Capítulo IV. Cuentas de la tutela.

Capítulo V. Terminación de la tutela.

TÍTULO III. De la curatela.

Capítulo I. De la curatela de los incapaces.

Capítulo II. De la curatela de bienes.

TÍTULO IV. De los menores emancipados.

TÍTULO V. De la autoridad y vigilancia en lo concerniente a los incapaces.

LIBRO TERCERO. DERECHO DE LAS OBLIGACIONES

SECCIÓN PRIMERA. DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

TÍTULO I. Del efecto de las obligaciones.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la garantía común para los acreedores.

Capítulo III. Del ejercicio de las acciones del deudor.

Capítulo IV. De la revocación de los actos del deudor.

TÍTULO II. De los daños y perjuicios. —

Capítulo I. De la indemnización legal.

Capítulo II. De la cláusula penal.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LAS DIVERSAS CLASES DE OBLIGACIONES

TÍTULO I. De las obligaciones con relación a su objeto.

Capítulo I. De las obligaciones de dar cosas ciertas.

Capítulo II. De las obligaciones de dar cosas inciertas.

Capítulo III. De las obligaciones de dar sumas de dinero.

Capítulo IV. De las obligaciones de hacer y de no hacer.

Capítulo V. De las obligaciones alternativas.

Capítulo VI. De las obligaciones de pago facultativo.

TÍTULO II. De la pluralidad de acreedores o deudores.

Capítulo I. De las obligaciones divisibles.

Capítulo II. De las obligaciones indivisibles.

Capítulo III. De las obligaciones solidarias.

SECCIÓN TERCERA. DE LA TRANSMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES

TÍTULO I. De la cesión de créditos.

TÍTULO II. De la transmisión de deudas.

SECCIÓN CUARTA. DE LA EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

TÍTULO I. Del pago.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del objeto del pago.

Capítulo III. Del lugar y tiempo del pago.

Capítulo IV. Del pago por consignación.

Capítulo V. De la imputación del pago.

Capítulo VI. Del pago con subrogación.

Capítulo VII. De la dación en pago.

TÍTULO II. De la novación.

TÍTULO III. De la compensación.

TÍTULO IV. De la remisión de la deuda.

SECCIÓN QUINTA. DEL CONCURSO Y DE LOS PRIVILEGIOS

TÍTULO I. Del concurso de acreedores.

TÍTULO II. Del derecho de retención.

TÍTULO III. De las causas de preferencia en el pago de los créditos.

SECCIÓN SEXTA. DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

TÍTULO I. De los contratos en general.

Capítulo I. Disposiciones comunes.

Capítulo II. Del consentimiento.

Capítulo III. Del objeto de los contratos.

Capítulo IV. De la forma de los contratos.

Capítulo V. Del efecto de los contratos.

§ 1. Disposiciones generales.

§ 2. Del efecto de los contratos bilaterales.

Capítulo VI. De los contratos a cargo o a favor de terceros.

TÍTULO II. Del enriquecimiento sin causa.

TÍTULO III. De los actos ilícitos.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De los casos de indemnización.

Capítulo III. Del ejercicio de la acción civil.

Capítulo IV. De la responsabilidad por hechos ajenos.

Capítulo V. De los daños causados por animales.

Capítulo VI. De los daños causados por cosas inanimadas.

SECCIÓN SÉPTIMA. DE CIERTAS RELACIONES OBLIGATORIAS

EN PARTICULAR

TÍTULO I. De la compraventa y de la permuta.

Capítulo I. Disposiciones generales.

§ 1. De la capacidad para comprar y vender.

§ 2. Del objeto de la compraventa.

§ 3. Del precio.

Capítulo II. De las cláusulas especiales en la compraventa.

Capítulo III. Del efecto de la compraventa.

Capítulo IV. De la permuta.

TÍTULO II. De la cesión de derechos.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del efecto de la cesión.

§ 1. De la cesión de créditos.

§ 2. De la cesión de derechos y acciones reales.

§ 3. De la cesión de herencia.

TÍTULO III. De las donaciones.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la capacidad para hacer donaciones y recibir las.

Capítulo III. Del objeto y condiciones de la donación.

Capítulo IV. De la forma de las donaciones.

Capítulo V. Del efecto de las donaciones.

Capítulo VI. De ciertas donaciones en particular.

Capítulo VII. De la reversión de las donaciones.

Capítulo VIII. De la revocación de las donaciones.

TÍTULO IV. De la locación.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del efecto de la locación.

Capítulo III. De la sublocación.

Capítulo IV. Del término de la locación.

Capítulo V. Arrendamientos de predios rústicos.

TÍTULO V. De la aparecería.

TÍTULO VI. Del contrato de trabajo.

TÍTULO VII. Del contrato de obra.

TÍTULO VIII. Del corretaje.

TÍTULO IX. Del mandato.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del efecto del mandato.

Capítulo III. De la cesación del mandato.

TÍTULO X. De la gestión de los negocios ajenos.

TÍTULO XI. Del depósito.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del efecto del depósito.

TÍTULO XII. Del préstamo.

Capítulo I. Del comodato.

§ 1. Disposiciones generales.

§ 2. Del efecto del comodato.

Capítulo II. Del mutuo.

TÍTULO XIII. De la sociedad.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la forma y prueba de la existencia de la sociedad.

Capítulo III. De los socios.

Capítulo IV. Administración de la sociedad.

Capítulo V. Del efecto de la sociedad.

§ 1. Obligaciones de los socios.

§ 2. Derechos de los socios.

§ 3. Derechos y obligaciones de la sociedad respecto de terceros.

Capítulo VI. De la disolución de la sociedad.

Capítulo VII. De la liquidación y partición.

TÍTULO XIV. De los contratos aleatorios.

Capítulo I. Del juego y apuesta.

Capítulo II. De la renta vitalicia.

TÍTULO XV. De la fianza.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del efecto de la fianza.

Capítulo III. Extinción de la fianza.

TÍTULO XVI. De las transacciones.

TÍTULO XVII. De la evicción.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la evicción en caso de venta.

Capítulo III. De la evicción entre permutantes.

Capítulo IV. De la evicción entre socios.

Capítulo V. De la evicción entre copartícipes.

Capítulo VI. De la evicción entre donantes y donatarios.

TÍTULO XVIII. De los vicios redhibitorios.

TÍTULO XIX. De las obligaciones abstractas.

TÍTULO XX. Promesa pública de recompensa.

TÍTULO XXI. De la exhibición de las cosas.

LIBRO CUARTO. DERECHOS SOBRE LAS COSAS

SECCIÓN PRIMERA. DE LA POSESIÓN

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. De la adquisición y pérdida de la posesión.

TÍTULO III. De las obligaciones y derechos inherentes a la posesión.

TÍTULO IV. De las defensas y las acciones posesorias.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LOS DERECHOS REALES

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. De la inscripción y de la prenotación de los derechos reales sobre inmuebles.

TÍTULO III. Del dominio en general.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la adquisición y pérdida del dominio sobre inmuebles.

§ 1. Disposiciones generales.

§ 2. Del aluvión y la avulsión.

§ 3. De la edificación y plantación.

Capítulo III. De la adquisición y pérdida del dominio de cosas muebles.

§ 1. De la apropiación.

§ 2. De la especificación y la adjunción.

§ 3. De la adquisición de los productos y otras partes constitutivas de las cosas.

§ 4. De la tradición.

§ 5. De la propiedad de los ganados y máquinas locomóviles.

Capítulo IV. De la usucapión.

TÍTULO IV. De las restricciones y límites del dominio.

TÍTULO V. De las aguas.

TÍTULO VI. Del condominio.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la administración de la cosa común.

Capítulo III. De la indivisión forzosa.

Capítulo IV. Del condominio de los muros, cercas y fosos.

TÍTULO VII. Del usufructo.

Capítulo I. Del usufructo de cosas.

§ 1. Disposiciones generales.

§ 2. Derechos y obligaciones del usufructuario.

§ 3. Derechos y obligaciones del nudo propietario.

§ 4. De la extinción.

Capítulo II. Del usufructo de derechos.

Capítulo III. Del usufructo sobre un patrimonio.

TÍTULO VIII. Del uso y de la habitación.

TÍTULO IX. De las servidumbres prediales.

Capítulo I. De las servidumbres prediales en general.

- § 1. Disposiciones generales.
- § 2. Adquisición de las servidumbres.
- § 3. Derechos y obligaciones.
- § 4. De la extinción.

Capítulo II. De las servidumbres prediales en particular.

- § 1. De la servidumbre de tránsito.
- § 2. De la servidumbre de acueducto.

TÍTULO X. De la hipoteca.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del efecto de la hipoteca entre las partes.

Capítulo III. Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros acreedores.

Capítulo IV. Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros poseedores.

Capítulo V. De la extinción de las hipotecas.

Capítulo VI. De la cancelación de las hipotecas.

TÍTULO XI. De los censos.

TÍTULO XII. De la prenda.

Capítulo I. De la prenda de cosas en general.

Capítulo II. De la prenda con registro.

Capítulo III. De la prenda sobre títulos de crédito.

TÍTULO XIII. De la anticresis.

SECCIÓN TERCERA. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS REALES

TÍTULO I. De la demarcación de los inmuebles.

TÍTULO II. De las acciones reales.

Capítulo I. De la acción reivindicatoria.

Capítulo II. De la acción confesoria.

Capítulo III. De la acción negatoria.

LIBRO QUINTO. DE LA SUCESION HEREDITARIA

SECCIÓN PRIMERA. DE LA TRANSMISIÓN POR CAUSA DE MUERTE

TÍTULO I. Del derecho sucesorio.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la aceptación y de la renuncia de la herencia.

Capítulo III. Del beneficio de inventario.

Capítulo IV. De la separación de patrimonios.

Capítulo V. De la indignidad.

TÍTULO II. De la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios.

Capítulo I. De las medidas conservatorias.

Capítulo II. De la declaratoria de herederos.

Capítulo III. De la petición de herencia.

TÍTULO III. De la pluralidad de herederos.

Capítulo I. Del estado de indivisión.

Capítulo II. De la partición.

Capítulo III. De la colación.

Capítulo IV. De la división hecha por los ascendientes.

Capítulo V. Del efecto de la partición.

TÍTULO IV. Régimen especial de los sepuleros.

TÍTULO V. De las sucesiones vacantes.

SECCIÓN SEGUNDA. DE LAS SUCESIONES INTESTADAS

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. De la representación.

TÍTULO III. Del orden hereditario en las sucesiones intestadas.

Capítulo I. Sucesión de los descendientes legítimos.

Capítulo II. Sucesión de los ascendientes legítimos.

Capítulo III. Sucesión de los cónyuges.

Capítulo IV. Sucesión de los hijos ilegítimos.

Capítulo V. Del derecho hereditario de los padres ilegítimos.

Capítulo VI. Sucesión de los colaterales.

TÍTULO IV. De la legítima.

SECCIÓN TERCERA. DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. De las formas de los testamentos.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del testamento ológrafo.

Capítulo III. Del testamento por escritura pública.

Capítulo IV. De los testamentos especiales.

Capítulo V. De la apertura y protocolización de algunos testamentos.

Capítulo VI. De los testigos en los testamentos.

TÍTULO III. De la institución y substitución de herederos.

TÍTULO IV. De la capacidad para recibir por testamento.

TÍTULO V. De la revocación de los testamentos.

TÍTULO VI. De los legados.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. Del efecto de los legados.

Capítulo III. Del acrecimiento.

Capítulo IV. De la caducidad.

Capítulo V. De la revocación.

TÍTULO VII. De los albaceas.

TÍTULO COMPLEMENTARIO. De la aplicación de las leyes civiles.

LEY SOBRE REGISTRO DE INSCRIPCIONES

TÍTULO I. Disposiciones generales.

TÍTULO II. Del Registro de estado civil.

Capítulo I. Reglas generales.

Capítulo II. De los nacimientos.

Capítulo III. De los matrimonios.

Capítulo IV. De las defunciones.

TÍTULO III. Del Registro de inmuebles.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Capítulo II. De la inscripción y de los trámites para obtenerla.

Capítulo III. De la prenotación.

Capítulo IV. De la cancelación.

TÍTULO IV. Del Registro de embargos y limitaciones a la capacidad.

TÍTULO V. Del Registro de personas jurídicas, sociedades y mandatos.

TÍTULO VI. Del Registro de sucesiones.

TÍTULO VII. Del Registro especial para ganados y máquinas.

TÍTULO VIII. De la aplicación del Registro

• • •

Como podrá observarse, hemos seguido en lo posible, un método uniforme dentro de cada título o capítulo, estableciendo en primer término, el concepto de la figura jurídica tratada; para proseguir luego con las reglas concernientes a la capacidad, objeto, forma y efecto. Con ello se ha logrado mayor armonía y un plan didáctico en el desarrollo. Así lo demuestran las anotaciones marginales, que el comité de redacción ha colocado a cada artículo con el único fin de facilitar el manejo del texto, pero sin pretender atribuirles un valor independiente del mismo. De esta suerte, y también con la agrupación en incisos de las normas semejantes, se habrá disminuido en mucha medida, el inevitable trastorno que trae consigo el cambio de un Código. Al mismo tiempo se ha creído facilitar el estudio para quienes se inician en la

carrera del derecho, y aun para los profanos al presentar en forma clara, accesible y metódica, las reglas objetivas en materia tan fundamental.

• • •

El trabajo que elevamos a V. E., con ser más comprensivo en su contenido que el Código que nos rige, dispone su materia como se ha dicho, en sólo dos mil ciento cuarenta y cuatro artículos. No hemos deseado, sin embargo, que la concisión fuera su única característica. Hemos querido que todos sus preceptos trasuntan las ideas fundamentales que nos guiaron: hacer un cuerpo armónico de ley, donde los derechos obtengan siempre la mayor seguridad y cuyos principios respondan al ritmo de las necesidades actuales, para coordinarlas con espíritu flexible, y lograr así una convivencia más justa. Sobre todo ello, y con desmedro a veces, de la autonomía de la voluntad y de la soberanía de los contratos, hemos deseado que nuestro Código respire un ambiente de menos individualismo, de mayor ética y solidaridad colectiva. Es así como los principios de la buena fe y los sentimientos de humanidad, inspiran constantemente las normas contractuales, a fin de limitar facultades que nos parecieron excesivas o de permitir que surjan nuevos derechos antes desconocidos. Y si con explicable prudencia, no hemos llegado a formular definitivamente las teorías más novedosas, ello no nos ha impedido recoger las aplicaciones particulares, ampliando las que halláramos en el Código, para completarlas con aquellas que nos parecieron más justificadas.

Faltaríamos a un deber de justicia, si al terminar este preámbulo, no dejásemos constancia del eficaz concurso que en todo momento nos prestó el secretario Dr. Ricardo E. Rey, tanto en las actas de las sesiones plenarias, como al secundar en sus tareas al comité redactor, y al corregir por último, la impresión de los trabajos.

Dios guarde al señor Ministro.

ROBERTO REPETTO

RODOLFO RIVAROLA

HÉCTOR LAFAILLE

ENRIQUE MARTÍNEZ PAZ

GASTÓN FEDERICO TOBAL

RICARDO E. REY

(Secretario)

INFORME DE LA COMISION

TITULO PRELIMINAR

De acuerdo con el Anteproyecto de Bibiloni, se amplía el término que establece el Código Civil para que las leyes tengan fuerza obligatoria, a fin de no distinguir entre la Capital y las provincias.

Se ha modificado la fórmula actual en lo referente a retroactividad de las leyes, en el sentido que expresa el artículo pertinente del código brasileño —más claro y comprensivo— pero suprimiendo la terminología de “derechos adquiridos”, que hoy se juzga peligrosa, para reemplazarla con preceptos concretos que figuran dentro del título complementario.

La Comisión considera inútil el agregado últimamente propuesto por Bibiloni al art. 5 del Código Civil, dado que ni siquiera las leyes de orden público pueden atentar contra los derechos garantizados en la Constitución Nacional.

Las reglas concernientes a la capacidad de hecho y de derecho aparecen reunidas en un solo artículo, suprimiendo conforme al Anteproyecto y por las razones que indica la respectiva nota, el art. 8 del Código actual.

El art. 13 ha sido también eliminado. La ley extranjera —cuando su aplicación está autorizada por la nuestra— no es un mero hecho aducido en juicio, cuya prueba incumba al litigante, sino una norma jurídica, a la cual deben ajustarse los tribunales. Esta es también la tendencia moderna, tanto en la doctrina como en la legislación.

El art. 16 aparece redactado en forma que puedan tener cabida dentro de sus términos, los criterios y métodos actuales de interpretación.

Se condensan los preceptos sobre la manera de computar los intervalos en el derecho, sin alterar substancialmente su contenido.

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

SECCION PRIMERA

DE LAS PERSONAS

TITULO I

De las personas naturales

CAPITULO 1

Del comienzo y fin de las personas naturales

Se mantiene el art. 70 del Código Civil en cuanto a su doctrina, a pesar de lo proyectado por Bibiloni. Ni el principio propuesto por éste parece más exacto, ni representa ventaja práctica alguna.

Las reglas de los arts. 67, 78, 247 y 249 motivaron críticas y su concordancia es difícil. Por ello, la Comisión ha preferido armonizarlas y unificarlas, limitando las medidas a que se refieren los dos últimos preceptos citados. También dentro del art. 67, ha suprimido lo relativo a las policiales, que se prestaba a interpretaciones diversas.

El art. 75 del Código se inspira en lo que ocurre normalmente, o sea en que la mayoría de las personas nacen con vida. Esta consideración, unida a que favorece la estabilidad de los derechos, nos determinó a conservarlo, contra la opinión del autor del Anteproyecto. Con el sistema que aceptamos, no es posible presumir el cumplimiento de la condición resolutoria.

CAPITULO II

De la capacidad

La Comisión estimó conveniente iniciar este capítulo con un principio general análogo al de los arts. 2 del código brasileño y 11 del suizo, a fin de puntualizar claramente que la capacidad siempre es la regla y que sólo la ley puede restringirla respecto de hechos determinados.

Bajo el título genérico de “sujetos a interdicción”, se comprende tanto a los alienados, como a los sordomudos, categorías que han sufrido las modificaciones que se verán más adelante.

Aparte de ésto y de la reforma que tiende a precisar el inc. 1º del art. 57, subsiste el régimen del Código Civil sobre las materias de este capítulo.

CAPITULO III

Del nombre

El Anteproyecto contiene diversos artículos de indiscutible necesidad, como que llenan un vacío dentro de nuestra legislación. Aparecen reproducidos con ligeras variantes.

Por tratarse de una característica de la personalidad, sin duda el lugar más apropiado es el que ocupa dentro del Proyecto.

Finalmente, se lo protege contra el uso indebido por parte de terceros. Quien con igual nombre intentare ejercer actividades ya explotadas por otro, podrá hacerlo mediante agregados que eviten cualquier equívoco.

CAPITULO IV

Del domicilio

Salvo ligeras modificaciones, quedan subsistentes las normas actuales, que han sido simplificadas, evitándose además repeticiones innecesarias.

Algunas reglas, como la del art. 92, aparecen corregidas, por contener errores de expresión.

En el caso de varios establecimientos o sucursales, será considerado domicilio especial para las personas jurídicas, el lugar de los respectivos asientos, en cuanto a las obligaciones allí contraídas.

No hemos juzgado oportuno adoptar la reforma propuesta por Bibiloni al art. 99, pues se llega a la misma solución, con solo armonizar los demás preceptos del capítulo: la simple voluntad no bastaría para mantener el domicilio, cuando los hechos fuesen contrarios, y revelarían el cambio de aquél.

CAPITULO V

De la prueba del nacimiento y de la muerte

Los preceptos relativos a la materia ocupan este lugar y no un párrafo del título correspondiente al Registro Civil, como lo hiciera el Anteproyecto. Nuestra ordenación parece más lógica, y se impone además, porque el título aludido estaría fuera del Código, en la ley de Registro.

Debe destacarse un precepto nuevo entre nosotros, que reviste gran utilidad práctica: la muerte de una persona cuyo cadáver no se encontrare, se juzgará probada cuando ésta hubiere desaparecido en condiciones tales, que el falle-

cimiento deba ser tenido como cierto. Figura en el Anteproyecto, y es conforme al art. 42 del código suizo, al 391 del italiano y al 58 de la ley alemana de registro civil.

TÍTULO II

De los menores

El comienzo de la mayoría de edad ha sido fijado en los veintinueve años, a fin de armonizar nuestra legislación con el término que en general se adopta en otros países.

La ingerencia creciente que cada día tienen los menores en la industria, el comercio, y en las demás actividades, nos ha inducido a permitir su emancipación cuando la solicitaren al juez de acuerdo con el padre, o la madre en su defecto. El criterio que informa los arts. 10 y siguientes del Código de Comercio se extiende así, a la materia civil. En cambio, no estimamos prudente admitir otros casos, a diferencia del art. 9 código brasileño.

Eliminada la clasificación entre menores impúberes y adultos, todos ellos reconocen como regla la incapacidad, sin perjuicio de las excepciones expresamente establecidas.

TÍTULO III

De la interdicción

Como la anarquía de pareceres torna en extremo difícil designar con un solo término genérico las perturbaciones que dan origen a esta incapacidad, hemos prescindido de toda denominación común a quienes padecen de enfermedades mentales o debilidad de espíritu, para referirnos exclusivamente al criterio que debe adoptarse como guía por los jueces, siempre que el sujeto no pueda dirigirse a sí mismo o atender sus negocios.

Como consecuencia de haberse suprimido la división de los menores en impúberes y adultos, no hay necesidad de

mencionar ningún límite de edad para declarar la insania, la cual podrá tener el propósito de impedir que se realicen los actos permitidos por la ley a quienes no alcanzaren el término de los veintiún años.

Todas las normas concernientes al procedimiento en los juicios de esta índole, han sido cuidadosamente revisadas, con el fin de rodear el fallo de las mayores garantías. Hemos permitido expresamente la intervención personal del presunto incapaz, e impuesto al juez la obligación de interrogarle por sí mismo, antes de dictar sentencia. Por estas consideraciones, se mantiene el sistema actual del curador **ad litem**, lo que nos aparta del Anteproyecto.

La designación de especialistas, siempre que ello fuere posible, responde a una necesidad sentida y a los progresos de la ciencia médica.

Se completa este régimen de seguridad, al exigir, en los casos de haberse declarado la interdicción, que el expediente sea elevado en consulta al tribunal de alzada, aunque ni el curador ni el Ministerio Público hubiesen interpuesto el recurso.

El art. 148 del Código Civil ha sido reemplazado por el 471 del mismo, que ofrece mayor protección para los bienes del presunto incapaz, y comprende virtualmente al primero.

La Comisión ha juzgado oportuno seguir el sistema de los códigos modernos que distinguen grados en esta incapacidad, ya que existen numerosos alienados que, sin llegar a un desorden completo, se encuentran en grave inferioridad mental, suficiente para determinar la ingerencia de los jueces. La poca flexibilidad de nuestra ley se ha traducido a menudo, en el hecho lamentable de que muchas personas francamente anormales puedan ejercer por sí todos los derechos civiles, precisamente por no hallarse mérito para reconocerlas como insanas. Si bien el Anteproyecto mitigaba en parte estos inconvenientes, al autorizar la entrega de la renta líquida al incapaz, no hemos vacilado en admitir que los tribunales confieran la administración total o parcial de los bienes a este último, con la anuencia del curador.

Por lo que hace a los sordomudos, teniendo en cuenta los adelantos de la pedagogía especializada, así como lo que determina el art. 917 del Código, debe reconocerse la posibilidad de manifestarse de otro modo que por escrito. En

tal sentido, se dispone que los sordomudos sólo serán declarados incapaces, cuando no pudieran exteriorizar su voluntad en forma inequívoca. Se tratará a veces de retardados mentales, pero entonces nada impedirá dictar respecto de ellos sentencia de interdicción, cuando concurrieran los extremos necesarios.

TÍTULO IV

De la ausencia

El Código Civil no ha legislado satisfactoriamente sobre este particular, ya que corresponde distinguir entre la simple ausencia y la que da origen a la presunción de fallecimiento.

Para proveer a la defensa de los intereses del mero ausente, se ha organizado un capítulo especial, de acuerdo con el Anteproyecto.

CAPÍTULO I

De la declaración de ausencia

Las reglas contenidas en este capítulo amparan los derechos de aquéllos que hubieran desaparecido de su domicilio o residencia, sin que se tuviere noticia de su paradero, como también los de quienes en circunstancias apremiantes, se hallaren imposibilitados para ocuparse de sus negocios por no encontrarse en el lugar, aunque no mediaren los demás extremos señalados.

Tanto en esta situación, como en el supuesto de juicio contra el ausente, éste deberá ser citado y designársele curador antes de dictar el fallo. Sin perjuicio de ello, los jueces quedan facultados para adoptar las medidas necesarias al cuidado de los bienes, inclusive el nombramiento de administrador.

En este capítulo la Comisión ha seguido el Anteproyecto, si bien modificando sus preceptos en cuanto a su forma y colocación.

CAPITULO II

De la presunción de fallecimiento

La facilidad de las comunicaciones y el mayor contacto entre los pueblos, justifican que se hayan reducido los términos fijados en el Código vigente, conforme a la tendencia que hoy prevalece en el derecho comparado. Así, se limitan a cuatro, diez y setenta años respectivamente, los plazos de los arts. 110 y 122. También suprimimos el requisito de que la persona presente en una acción de guerra haya sido gravemente herida, y el extremo de que en un incendio o terremoto hubieran fallecido varios sujetos. En los accidentes marítimos o aéreos, la presunción surge al cabo de un año. Por último, se prevé la hipótesis de quienes, habiendo formado parte de las tropas beligerantes, no hubieren reaparecido después de cesadas las hostilidades, estableciendo en tal supuesto un período de dos años.

Queda simplificada la materia de la posesión provisional y de la definitiva, transfiriéndose los bienes a los herederos, desde el momento en que declara la muerte presunta. Para armonizar este sistema con el régimen de publicidad, se inscribe en el Registro la providencia judicial, salvando el derecho del ausente por medio de prenotación.

TITULO V

De las personas jurídicas

CAPITULO I

Disposiciones generales

Las reformas introducidas dentro de este título conciernen a las distintas categorías de las personas jurídicas,

a la reglamentación especial para cada una de ellas y a su responsabilidad por los actos ilícitos.

Bajo el primer aspecto, quedan precisadas las diferencias entre corporaciones y fundaciones, sin perjuicio de legislar en capítulo aparte sobre las asociaciones y de considerar las sociedades anónimas y las cooperativas como exclusivamente sujetas al Código de Comercio.

En orden al art. 43 vigente, nos apartamos del Anteproyecto para consagrar el principio de que las personas jurídicas de derecho privado, responden por los actos ilícitos de sus representantes o dependientes, doctrina amplia que ha inspirado el art. 31 del código alemán, el 55 del suizo y el 15 del brasileño. Hemos excluido los casos de gestión pública por entender que corresponden al derecho administrativo.

También por ser ajena a un código civil, se elimina la cláusula del art. 41, que permite a las personas jurídicas promover acciones criminales.

CAPITULO II

De las corporaciones

El deslinde entre las corporaciones y sus miembros, se determina mediante reglas que establecen el dominio de la colectividad sobre los bienes, como también que los componentes de aquella no responden por las obligaciones de la misma.

El problema de la disolución dió lugar a un estudio prolijo. Era necesario dar seguridad a las personas jurídicas para estimular su formación y desarrollo y protegerlas contra posibles arbitrariedades, pero también debía encontrarse un medio rápido y seguro a fin de eliminar las corporaciones que resultaren perniciosas para los intereses del país.

Nuestro Proyecto distingue por una parte, los casos en que tal medida sea indispensable o conveniente para los intereses públicos, calificación que reserva para la ley y no para un simple decreto del Poder Ejecutivo. Por la otra, siempre que se hubiere abusado o incurrido en transgresio-

nes de los requisitos o cláusulas del reconocimiento, o en la hipótesis de que se tornare imposible cumplir los estatutos, cabe declararlas disueltas por la vía administrativa, pero con recurso ante el superior tribunal competente.

CAPITULO III

De las fundaciones

Como lo hacen los códigos modernos, se dictan normas adecuadas para las fundaciones que establecieren los particulares, pues las que derivan del Estado se rigen por leyes especiales.

La aprobación gubernativa será necesaria tanto para las creadas por testamento, como por donación u otros medios. Los efectos jurídicos de aquella se retrotraerán al día de la constitución o al del fallecimiento del fundador, según el caso. También se organiza la fiscalización de la autoridad, de una manera más directa y eficaz que en cuanto a las corporaciones.

CAPITULO IV

De las asociaciones

Por lo que atañe a las asociaciones, consideramos que la fórmula propuesta por Bibiloni para precisar sus fines y distinguirlas de las sociedades, es preferible a la contenida en los códigos alemán y suizo, que se fundan en el objeto económico, o a la que inspira a la legislación francesa, según que repartan o no beneficios. Por eso, llamamos sociedades a las que tengan un propósito de lucro.

Al reglamentar las asociaciones, viene a salvarse una omisión de nuestro Código, que carece de preceptos especiales sobre esta materia. Separamos las no inscriptas, de aquellas que han cumplido con tal requisito, siguiendo las normas del Anteproyecto. Las primeras serán regidas por las dis-

posiciones de los contratos en general, y en subsidio por las relativas a las sociedades; los miembros son personalmente responsables por las obligaciones de la asociación, no obstante cualquier cláusula contraria. En cambio, las registradas podrán estar en juicio, percibir las cotizaciones de sus componentes, adquirir a título gratuito u oneroso los inmuebles necesarios para cumplir sus fines, contraer préstamos o aceptar donaciones. Les será permitido asimismo, liberar a los asociados de las deudas de la colectividad.

La esfera restringida que se reconoce a las asociaciones de esta última categoría, las aproxima a las personas jurídicas, cuyas reglas les son aplicables en subsidio. Fácil es advertir, sin embargo, que no disfrutaban de la aptitud amplia conferida a las corporaciones autorizadas, ni por lo que se refiere a los contratos, ni en cuanto a la posibilidad de adquirir todo género de bienes.

SECCION SEGUNDA

DE LOS BIENES

TITULO I

Disposiciones generales

A diferencia del Anteproyecto, la Comisión ha suprimido gran número de los artículos del Código Civil, teniendo en cuenta su carácter doctrinario y su inutilidad práctica. Pero ha seguido a Bibiloni, en la reforma que propone para los inmuebles por su destino, por ser de todo punto indispensable precisar los conceptos con gran claridad, en vista de la importancia alcanzada por la industria en los últimos tiempos.

Por ello, se completa el concepto que contiene el art. 2316, en el sentido de que tales cosas deben haber sido colocadas por el propietario con destino al servicio y explotación del inmueble. A fin de prevenir dudas y discusiones, un precepto especial enumera los casos comunes en que ha-

brá de aplicarse aquella regla, apartándonos de nuestro propósito de evitar en lo posible los ejemplos, que no corresponden a la ley y son propios de la doctrina o del comentario.

TITULO II

De los bienes públicos y particulares

Hemos debido, al tratar este punto, depurar el Código de las contradicciones y obscuridades que ofrece.

Aparte de los ríos, pertenecen al dominio público las playas de los mismos, sean ellos navegables o no, y de igual modo, los lagos, de cualquier categoría, el lecho y las orillas. Los particulares sólo tienen el uso y goce de las aguas, conforme a las reglas de este Proyecto y a las contenidas en el derecho administrativo.

Dentro de la enumeración del art. 2340, se elimina el inc. 6º, que pasa al 2342, ya que las islas son bienes privados del Estado. También se modifica el inc. 7º, de acuerdo con el Anteproyecto, puesto que no toda obra construida para utilidad o comodidad común debe incluirse en el dominio público.

En el art. 2342 no puede comprenderse a las fortalezas, que no corresponden al Estado como persona jurídica, a pesar de que los particulares no disfrutaban de ellas en los términos del art. 2341.

Establecemos además, que todos los bienes no contenidos en la nómina del art. 2340, se consideran del dominio privado, como también aquellos no afectados al servicio público.

No terminaremos la referencia relativa a la enumeración de los bienes del Estado, sin dejar constancia de que la Comisión ha tenido en cuenta el serio problema que representa para nuestro país, el aprovechamiento y dilapidación del agua subterránea contenida en las napas freáticas y artesianas (surgentes y ascendentes).

Dado el régimen de las lluvias en nuestro territorio, gran parte del Nor-oeste, las provincias andinas y la casi totalidad de las altiplanicies patagónicas, constituyen regio-

nes áridas o semi-áridas en las que la agricultura, la industria y aun el establecimiento de las poblaciones se encuentran en una dependencia tiránica respecto del agua. La constitución de esas napas, independientes de las divisiones artificiales del dominio, así como el peligro de que ellas se inficionen, o sean abusivamente captadas en perjuicio de los fundos vecinos, significan otros tantos puntos de vista que inclinarían también a colocar en primer término los derechos del Estado, sin perjuicio de los correlativos que pudieron concederse en cuanto al uso y goce de ellas al dueño del suelo.

El problema, sin embargo, presenta serias dificultades, porque sería menester arbitrar los medios para que los indudables derechos que corresponden a los propietarios en las medidas de sus respectivas necesidades, no se vieran obstaculizados por una ingerencia arbitraria de los poderes públicos. Y si a ello se agrega el inconveniente de aplicar los mismos principios a regiones distintas, se encuentra justificado que hayamos creído preferible dejar a una ley especial el estudio de las reglas flexibles que la materia requiere, mas aun cuando el asunto se complica teniendo en cuenta que las investigaciones geológicas y las numerosas perforaciones realizadas en las distintas zonas del país, han puesto de relieve las diferencias de las cuencas artesianas, en lo que a la profundidad, cantidad y calidad de las aguas se refiere.

Por todo ello nos hemos limitado a consignar en este y otros títulos del Proyecto, los casos en que las aguas subterráneas pueden considerarse propiedad privada de los dueños de los terrenos, y las excepciones que era necesario establecer, fundadas en el interés público.

TÍTULO III

Del bien de familia

Las reglas que abarca este epígrafe han sido inspiradas en el proyecto de ley publicado por el Dr. Juan Alvarez en

la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas del Rosario, t. 3º, año 1934.

Ellas tienen por objeto permitir a las personas de pocos recursos, la adquisición y conservación de un inmueble, que habrá de permanecer en la familia, a pesar del fallecimiento del adquirente o de su cónyuge. De este modo se fortalecen los vínculos de la sangre y la pequeña propiedad, base de nuestra organización civil.

Las leyes N° 9.677 y 10.284 han contribuido a remediar en parte, las situaciones que se contemplaron al dictarlas; pero el proyecto aludido es más completo y reúne las ventajas de aislar el problema, de otros que se le agregan sin necesidad; de suprimir la exigencia del domicilio obligatorio sobre la finca; de fijar un límite, que la Comisión ha reducido prudentemente a 50.000 pesos; de establecer la intervención judicial; de permitir la reserva, aun sobre bienes hipotecados y de prever el caso de quien, formando parte de una familia, desea constituir la propia.

La inscripción deberá limitarse a una sola propiedad, previa orden judicial dictada con conocimiento de causa. No podrá alterarse el destino de la cosa, ni venderla, permutarla o gravarla, salvo que mediare la anuencia de todos los interesados. La inembargabilidad se refiere a las obligaciones posteriores a la inscripción y comprende los frutos en un sesenta por ciento.

Tampoco podrá ser invocado el beneficio contra la acción reivindicatoria, o las que tuviesen origen en créditos derivados de trabajos o materiales por mejoras en el inmueble, o las provenientes de impuestos fiscales, de cuotas impagas a favor de los herederos condóminos. Cesa por expropiación, a pedido del constituyente o de la mayoría de los herederos; por la venta autorizada, o cuando las mejoras introducidas hubieren duplicado el valor establecido en el Registro.

SECCION TERCERA
DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS

TITULO I

De los actos voluntarios

CAPITULO I

Disposiciones generales

Las normas del Código Civil han sido reproducidas con algunas variantes, eliminándose las de carácter puramente doctrinario.

En este capítulo se han incluido algunas reglas que en el Anteproyecto figuran dentro del título correspondiente a los actos jurídicos. Son las que atañen a la manera de transmitir la declaración de voluntad, y que por tal motivo tienen aquí su lugar adecuado.

CAPITULO II

Del error

Al tratar esta difícil materia, la Comisión ha procurado descartar en lo posible las sutilezas que resultan del sistema que inspira a nuestro Código, si bien no se ha creído prudente alterarlo en forma fundamental.

Así, se mantiene el principio del art. 923, interpretado en el sentido que explica Bibiloni en la respectiva nota: el error de derecho no podrá invocarse para impedir los efectos de los actos lícitos, regularmente concluidos, ya que tal medida aparece impuesta por la seguridad de las transacciones. Pero anula el acto que no se hubiera formado sin ese error, porque estaría viciada la voluntad que le ha dado origen. Esto no es nuevo dentro de nuestro Código, según resulta de sus arts. 20, 784, 858, 3428, etc., a pesar de que la doctrina legal —puesta de relieve por los intérpretes— no surge fácilmente, a primera vista.

Se han reunido en un solo artículo formado por varios incisos, los casos en que el error, tanto de hecho como de derecho, da lugar a la acción de nulidad. Subsisten de este modo, las reglas de los arts. 924 y 925, ampliada la última para comprender también las disposiciones testamentarias.

El art. 926 ha sido reformado con tendencia a substituir el criterio subjetivo por otro más práctico, en consonancia con legislaciones como la suiza y la húngara. La cualidad de la cosa que contempla el Proyecto, es aquélla que en la práctica de los negocios debe ser considerada como principal. De tal manera, desaparecen los inconvenientes para establecer “la cualidad que se tuvo en mira”, como reza el texto que ahora rige.

Se conserva el art. 927, con el aditamento de un inciso tomado del código suizo de las obligaciones (arts. 24, N° 4, y 27) relativo a las circunstancias que de buena fe pudo juzgar el agente como necesarias para el acto, así como a las declaraciones de voluntad transmitidas de una manera inexacta.

Otro artículo nuevo propuesto por Bibiloni, quien lo tomó del 25 código suizo citado, tiende a evitar que pueda invocarse el error contra las reglas de la buena fe.

En cambio, se deja subsistente el art. 929 que ha tenido fecundas aplicaciones entre nosotros. En vez de substituirlo, como aconseja el Anteproyecto, se obliga tan sólo, a la parte que alegara la nulidad, a resarcir a la otra cuando ésta no hubiere conocido el error, o debido conocerlo.

CAPITULO III

Del dolo

Sólo se han introducido algunas variantes de redacción.

CAPITULO IV

De la fuerza y del temor

El art. 939 actual ha sido modificado, a fin de que comprenda únicamente el ejercicio regular de los derechos, con lo cual armoniza dentro del sistema que inspira nuestro Proyecto y que ha motivado la supresión del art. 1071. Además, cuando el agente hubiere empleado las facultades que la ley le confiere, con el propósito de intimidar y de obtener ventajas excesivas, la violencia moral será considerada suficiente para anular el acto.

TITULO II

De los actos jurídicos

CAPITULO I

Disposiciones generales

Han sido suprimidos, como en otros casos, los preceptos de orden teórico.

Con el fin de unificar las disposiciones relativas a la ley que gobierna la validez y efecto de los actos jurídicos,

se acepta el criterio del Anteproyecto, que se ajusta a lo enseñado por Savigny y Story, o sea la *lex loci executionis*, con la reserva de las disposiciones de última voluntad y de los derechos de familia, que obedecen a reglas especiales. Quedan firmes sin embargo, los actos celebrados en el país y para producir efecto dentro de su territorio, por personas, que no siendo capaces según las leyes de su domicilio, lo serían en virtud de las nuestras.

El art. 953, cuya importancia es inútil encarecer, ha sido materia de dos agregados. El primero, se inspira en el 526 y fué propuesto por Bibiloni. El segundo contiene la doctrina del 138 alemán, cuyo valor y alcance son bien conocidos y que la Comisión ha estimado conveniente reproducir. De esta suerte, no podrá subsistir la menor duda acerca de que tales situaciones quedan comprendidas en la ley, como lo había ya resuelto en parte la jurisprudencia, especialmente para combatir la usura.

En punto a la interpretación de los actos jurídicos, se ha introducido asimismo, un principio cuyos corolarios aparecen dispersos en nuestro Código (arts. 529, 569, 1326 etc.): la errónea calificación de las partes no perjudica la eficacia del acto, que debe ser apreciado según el contenido real del mismo. Es también una regla saludable, la contenida en la segunda parte del art. 157, que hace prevalecer la intención reflejada en el acto, sobre las palabras que se utilizan en el instrumento, cuando no armonicen con aquélla.

CAPITULO II

De la forma de los actos jurídicos

Proponemos únicamente modificaciones para abreviar o aclarar los preceptos.

CAPITULO III

De la simulación de los actos jurídicos

Los arts. 955 y 956 han sido eliminados por tratarse de reglas innecesarias.

El art. 959 exige una nueva redacción, para establecer en forma inequívoca la verdadera doctrina que contiene. Tal como ha quedado se entiende, sin duda alguna, que en la simulación ilícita no puede exigirse el cumplimiento del acto aparente, porque está viciado de nulidad (Cód. Civil 953). Sólo hay acción para que ésta se declare y se restituyan los bienes entregados a la otra parte o que ella hubiere adquirido en virtud del acto. Consecuentes con la norma adoptada al tratar de la causa ilícita, hemos introducido aquí las modificaciones necesarias.

Finalmente, se incluye un precepto nuevo, aconsejado por Bibiloni, con el propósito de amparar a los terceros de buena fe, que hubieren celebrado actos a título oneroso ignorando la simulación.

TÍTULO III

De las modalidades de los actos jurídicos

CAPÍTULO I

De la condición

Este punto corresponde a la parte general, ya que se refiere a todos los actos jurídicos, y no solamente a las obligaciones.

Hemos adoptado casi todas las reformas del Anteproyecto. Para aclarar el art. 531 inc. 3, se determina que es válida la condición de casarse, en general. En cuanto al requisito del dolo, que exige la última parte del art. 537, se ha dejado sin efecto, en virtud de lo establecido en el 538, que dentro de su amplitud comprende aquella hipótesis.

Las reglas sobre retroactividad han sido fundamentalmente modificadas, con arreglo a la orientación de la doctrina moderna y a lo dispuesto en los códigos suizo y alemán. Los efectos de la condición sólo se producen a partir del cumplimiento de aquélla, sea resolutoria o suspensiva. Sin embargo, se permite a las partes estipular lo contrario con re-

lación a ellas, sin que tal cláusula pueda perjudicar a terceros.

CAPITULO II

De los cargos

No hay modificación en el fondo

CAPITULO III

Del plazo

Los casos previstos en el art. 572 han sido ampliados conforme al 3161, generalizando la solución de este último. El texto, así modificado, pasa al capítulo del pago, donde tiene su más adecuada colocación.

Los actos bajo término suspensivo o resolutorio, quedan sujetos a las normas que rigen las condiciones de igual naturaleza. Hemos incorporado al Proyecto esta regla, que consagra el art. 163 del código alemán.

TITULO IV

De la representación en los actos jurídicos

CAPITULO I

De la representación en general

Las normas que integran el presente título responden a manifiestas necesidades de orden práctico, que la jurisprudencia ha contribuido a remediar en parte, merced a los preceptos del mandato (art. 1870, Cód. Civil) y unas pocas reglas dispersas en la ley.

Como principio general se declara que los actos jurídicos pueden realizarse por representación, salvo los de última voluntad, en que nunca es admitida aquélla, y los que conciernen a las relaciones de familia, en que sólo procede cuando expresamente lo autorice el Proyecto. Con ello se invierten los términos del art. 1890 del Código Civil.

Por lo demás, se han reunido aquí, generalizándolas, varias reglas del mandato, como la del art. 1897 sobre incapacidad del apoderado; la del 1946 en cuanto al alcance de los actos del mismo, con un aditamento que se toma del código alemán; las contenidas en los arts. 1938 y 1939, si bien modificando el primero para que las personas que hubieren contratado con el representante, puedan dejar sin efecto su manifestación de voluntad, cuando aquél no acreditare su carácter; la del 1934, siempre que los terceros procedieren de buena fe; la del 1931, sin exigir el requisito de que la otra parte conociera los poderes; la del 1936, extendida a los supuestos de concurso y de ejecución forzada; la del 1935, que se modifica a fin de facultar al contratante para requerir la ratificación, dentro de un plazo, transcurrido el cual el silencio se interpreta como una negativa. Esta última solución, contenida en el art. 177 alemán, es preferible a la proyectada por Bibiloni.

Se reproducen las normas de los arts. 1932 y 1933, pudiendo el tercero deducir indistintamente cualquiera de las acciones que autoriza el art. 1932. Quien hubiera conocido la falta de poderes es equiparado a quien hubiera debido conocerla, sin que la mera circunstancia de no haber recabado la presentación de aquéllos, se reputé suficiente para presumir la culpa.

El criterio de la prioridad en el tiempo, que surge del art. 1943, ha sido substituído por el que rige para las obligaciones de dar y se modifica el 1944, ya que, siendo obligatorio para el mandante el acto del mandatario, aquél debe responder siempre cuando el segundo procedió dentro de los límites de sus atribuciones, sin perjuicio de la responsabilidad del agente hacia el representado.

La regla del art. 1918, circumscripita a la compraventa, se extiende a los demás contratos, por mediar análogas razones.

La representación termina con la causa que la originó o de la cual deriva, debiendo restituirse al representado los instrumentos que la acreditan, sin que pueda hacerse valer ningún derecho de retención. Respecto de terceros, es menester que hayan sabido o debido saber dicha terminación; de lo contrario, los actos del representante —aún ulteriores— obligan al comitente.

La Comisión agregó un artículo que extiende a todos los supuestos de representación —necesaria o voluntaria— las reglas del presente título, con reserva de lo establecido al legislar particularmente para cada una de ellas; debiendo aplicarse en subsidio las normas del mandato.

CAPÍTULO II

De la autorización y de la aprobación

En este capítulo incluimos aquellas figuras jurídicas que exigen la venia, ya de las autoridades que vigilan a los representantes necesarios, ya de quienes compete permitir el acto, sea en fin, del titular de los derechos o bienes, de los cuales se hubiere dispuesto sin título.

El asentimiento del tercero puede preceder al negociado, y se llamará entonces, autorización; o bien seguirlo, supuesto en que lleva el nombre de ratificación, cuyo efecto retrotrae a la fecha en que el acto fué celebrado.

Generalizamos además, la norma del art. 1330 del Código Civil, relativa a la venta, pues no hay motivos para limitarla a esa única hipótesis.

TÍTULO V

De la nulidad de los actos jurídicos

El Anteproyecto conserva la doble clasificación que Vélez tomara de Freitas. También introduce las reformas tendientes a evitar las confusiones que han tornado tan oscura esta materia, difícil y ardua en todos los códigos.

Hemos preferido, por nuestra parte, limitar la clasificación a los actos nulos y anulables, con la reserva de los casos especiales en que el acto nulo es susceptible de confirmación y el anulable no puede ser subsanado por este medio.

Después de fijar el principio contenido en el art. 1037, reproducimos en un solo precepto los 1038 y 1046, en términos que permitan distinguir ambas categorías, para enumerar luego en dos disposiciones únicas, los actos nulos y los actos anulables, respectivamente. En la primera de ellas quedan incluidas todas las situaciones previstas en los arts. 1041 a 1044 del Código, pero se agrega la de aquellos actos practicados contra la prohibición general o especial de enajenar o de gravar dictada por juez competente. Nuestro Código no lo establece en forma expresa, y por el contrario, el art. 1174 se inclina a la solución opuesta, sin duda equivocada, pues ni la anticresis, ni la hipoteca, ni el embargo, pueden quedar sin efecto por la transferencia de la cosa sobre la cual recaen.

La categoría de los actos anulables comprende los que enumera el art. 1045.

Adoptado como principio general el de la asimilación del acto nulo al de nulidad absoluta, con la salvedad consignada precedentemente, ha sido necesario redactar el art. 1047 para que armonice con el nuevo sistema. Así se prescribe en su lugar, que la nulidad deberá ser declarada por el juez, cuando aparezca manifiesta en el acto o resultare del expediente, pudiendo por lo demás, ser alegada por el Ministerio Público o por todos los interesados. Es decir, que se incluye también al que realizó el acto conociendo el vicio que lo invalidaba, a la inversa de lo prescripto en el texto en vigor, pero de acuerdo con Freitas, solución más jurídica, como lo demuestra Bibiloni.

En los actos anulables no podrá procederse de oficio, y sí a requerimiento de las personas que la ley designa. Se conserva la norma de los arts. 1049, 1164 y 1166 del Código, con exclusión de toda referencia a la nulidad absoluta.

La regla es que los actos nulos no son susceptibles de confirmación. A pesar de ello, podrán serlo cuando los hubieren ejecutado incapaces, que procedieran con discernimiento, o siempre que se tratare de actos practicados contra la prohibición de disponer emanada del juez.

Los actos anulables pueden ser confirmados, salvo aquellos casos en que la incapacidad de derecho en el autor o la falta de objeto, no fueren conocidos al celebrarse, por requerirse para ello una investigación de hecho.

La solución aceptada en cuanto a la posibilidad de confirmar coincide como se ve, con la propuesta por Bibiloni.

Por lo que hace a los efectos de las nulidades, hemos resuelto limitar estas reglas generales a las estrictamente necesarias, sea en lo que concierne a las partes, como a los terceros, y a la determinación de que los actos nulos o anulables pueden producir consecuencias como actos ilícitos.

La variedad que este problema ofrece a través del Código, torna sumamente difícil la generalización, habiendo sido justamente observadas las normas legales, porque no ofrecen una síntesis exacta de la materia, cuando no se oponen a preceptos expresos dictados sobre categorías especiales.

En virtud de lo expuesto, quedan eliminados los arts. 1053, 1054, 1055, y 1057 del Código Civil.

Para atenuar el rigor excesivo del principio consignado en el art. 1051, la Comisión aceptó la reforma propuesta por Bibiloni, según la cual los adquirentes podrán siempre ampararse en las reglas que protegen la buena fe.

La segunda cláusula del art. 1039 queda circunscripta a los testamentos, conforme el Anteproyecto. En cuanto a los actos entre vivos, se resuelve que la nulidad parcial determina la del conjunto, salvo que mediare conformidad del damnificado, o que de su contexto resultare que lo mismo se hubiera concluido la operación sin la parte invalidada.

TÍTULO VI

De la extinción de las relaciones jurídicas

Ni el Código que nos rige, ni el Anteproyecto, contienen este título, que es sin embargo, necesario. No basta

con legislar sobre los medios de extinguir los derechos creditorios y disponer aisladamente sobre casos particulares, puesto que existen reglas generales para poner fin a todas las relaciones jurídicas, y la confusión, como la renuncia y la imposibilidad, no pueden limitarse a ciertos géneros de aquéllas.

A continuación del capítulo I, formado con algunos principios relativos a toda esta materia, se trata en el II y en el III de la renuncia y de la confusión.

Bibiloni ha reunido en un solo título denominado "De la remisión de la deuda", los artículos que Vélez incluyera en los XXI y XXII, sección primera de las obligaciones. En virtud del nuevo plan, la Comisión separa las normas propias de la renuncia, para colocarlas en la Parte General, de manera que se trasladan aquí con algunos cambios, los preceptos de los arts. 868, 869, 873, 874 y 875 del Código Civil.

También se han reproducido en el capítulo III, los arts. 862, 864 y 867 del mismo Código, comprendiéndose además, el supuesto de consolidarse un derecho real, y agregándose una regla tendiente a prever el caso en que se hubiera inscripto la extinción en el Registro.

SECCION CUARTA

DEL EJERCICIO Y PRUEBA DE LOS DERECHOS

TITULO I

Del ejercicio de los derechos

Por las razones que aduce, Bibiloni se revela como decididamente contrario a introducir en el Código el principio de la extralimitación o abuso del derecho. Por ello proyectaba establecer que "los derechos pueden ser ejercidos en la extensión de sus límites legales, aunque de ello resulte perjuicio a tercero".

En la Comisión los pareceres estaban divididos. Por una parte, se proponía formular en términos generales esa regla, cuyas consecuencias aparecen a través de diversas disposiciones, tanto en la ley actual, como en el mismo Anteproyecto, a fin de extenderlas a otros casos no previstos especialmente, pero tan dignos de amparo como los demás. Ello podía lograrse, mediante un simple agregado al artículo transcrito: "si no mediare abuso de parte del agente". Como antes lo hiciera el código suizo (art. 2) no se definía esta figura para facilitar la elaboración científica y dejar cierta latitud a la jurisprudencia. Otros miembros sólo admitían el abuso del derecho como excepción a las reglas generales, en aquellos supuestos especialmente determinados por la ley. Dado, sin embargo, que todos conocían el peligro que podría originar el texto de Bibiloni, coincidieron los votos en el sentido de suprimirlo, lo mismo que el art. 1071 del Código Civil.

Comienza el título con un precepto aparentemente doctrinario, pero que reviste importancia fundamental, como lo es el que prohíbe hacerse justicia por sí mismo. Es menester recurrir a la autoridad, para el ejercicio de un derecho que se contrapone a otro. No obstante, queda facultado el titular para prescindir de este requisito, cuando se tratare de actos impuestos por la propia defensa, entre ellos los previstos por los arts. 2470 y 3944 del Código, es decir, necesarios para repeler un ataque actual e ilegítimo contra la persona, los bienes o los derechos. A fin de prevenir los excesos posibles con una excepción tan amplia, se fijan taxativamente los casos que deben considerarse comprendidos en ella.

La justicia personal no podrá, desde luego, exceder de lo indispensable para excluir el peligro, y su ejercicio está sujeto a reglas estrictas tendientes a dar inmediata intervención a la autoridad.

También abarca este título algunos preceptos relativos a las acciones judiciales. Así, las medidas conservatorias corresponden a todo titular, aunque los derechos dependan de condición o de término; la acción de jactancia procede cuando alguien pretendiere vínculos de familia o alegare títulos sobre bienes de otro; los efectos de la demanda surgirán de la notificación, y una vez trabada la li-

tis, no podrá ella modificarse sin la conformidad del demandado, o la venia del tribunal, cuando a juicio de éste, ello no alterase gravemente la defensa de la otra parte; de igual modo, pendiente el pleito, no será lícito innovar en el estado de la cosa o derecho litigioso; por último las acciones deducidas se transmiten a los herederos, aunque sean de aquéllas que sólo podía iniciar el causante.

TITULO II

De la prueba

CAPITULO I

Disposiciones generales

Dentro de este título figuran los medios autorizados para probar los hechos, los requisitos que deben revestir, y el valor de aquéllos en juicio. El capítulo I reúne algunos preceptos tomados del Anteproyecto, con variantes en su redacción y ordenamiento.

CAPITULO II

De los instrumentos públicos

§ 1. — Disposiciones generales

La enumeración de estos instrumentos ha sufrido algunos cambios necesarios para reducir ciertos casos a sus justos límites, verbigracia el de los instrumentos expedidos por funcionarios públicos, y también para comprender otros que no aparecen en el texto del Código de un modo categórico, como las diligencias y planos de mensura aprobados por la autoridad competente; todas las actuaciones judiciales, y no sólo las actas, como reza el art. 979 actual; los

asientos de los matrimonios en los libros pertenecientes a templos de comuniones no católicas.

Consideraciones de método aconsejaron reunir en un solo precepto, los requisitos para la validez de los instrumentos, que no difieren de los que fija el Código Civil, si bien se requiere de un modo expreso la firma del funcionario y de todos los que aparezcan como parte. Asimismo, en las dos disposiciones subsiguientes, se han agrupado los casos de nulidad y anulabilidad, que hoy se encuentran dispersos.

En cuanto a la fe de los instrumentos públicos, de acuerdo con el Anteproyecto, se aclaran los términos un tanto oscuros del art. 993; de modo que no pueda entenderse que es indispensable promover la acción en juicio especial e independiente, ya que el punto puede dilucidarse en el mismo litigio que dió lugar a ella, y en este último caso, no sería más que un episodio de la prueba. Por otra parte, se autoriza a los jueces para que de oficio declaren la falsedad del instrumento, siempre que ella fuere evidente, todo ello según las conclusiones de la doctrina francesa en torno al art. 1319 del Código Napoleón.

Con el propósito de suprimir radicalmente la formalidad de la protocolización, hemos aprobado el artículo propuesto por Bibiloni, en el cual se declara que los instrumentos públicos otorgados en el país, hacen plena fe en todo su territorio, siempre que se presentaren legalizados; no así cuando fueren extendidos en el extranjero, caso en el cual será menester protocolizarlos por mandato judicial.

La regla del art. 1011 del Código Civil, sobre pérdida o extravío de las escrituras, debe ser extendida a todos los instrumentos públicos. Así lo proyectamos, agregando una norma sobre los medios para probar la existencia del acto, cuando faltare copia del instrumento perdido. De ese modo se resuelve una situación que como lo expresa Bibiloni, suele presentarse con mayor frecuencia de la que permite suponer el silencio de nuestra ley.

§ 2. — De las escrituras públicas

La importancia de las escrituras públicas obliga a modificar algunos textos actuales, para establecer que los no-

tarios deberán recibir en persona las declaraciones de las partes, y que serán responsables de la redacción y contenido del instrumento, si bien este último podrá ser extendido por los empleados.

Queda simplificado el otorgamiento de escrituras por personas que no conocen el idioma nacional. Suprimimos, en efecto, la formalidad de la traducción, siempre que el escribano y los testigos conocieren la lengua en que se expresan los interesados. De igual manera, no exigimos la minuta, cuando en el mismo supuesto las partes no supieren escribir; se aplica lo previsto para los que no saben firmar. En cambio, conforme a lo proyectado por Bibiloni, no se consideró prudente autorizar el empleo de intérpretes, cuando no pudieran ser entendidos por el autorizante, porque se trataría de simples testigos, o sea de una garantía insuficiente. Con respecto a los sordos, a los mudos y a los sordomudos, se prescribe que deberán leer por sí la escritura y hacer constar de su puño esta circunstancia, según lo determina el art. 57 de la ley italiana.

Se han aclarado además, los preceptos relativos a la forma en que deberá proceder el escribano, cuando las partes intervengan por medio de representantes, lo mismo que si ellas acompañaren documentos relacionados con el acto que se realiza.

Por lo que hace al contenido de la escritura, el art. 1001 del Código Civil, con las modificaciones de la ley 9151, ha sido todavía mejorado, con el fin de hacer constar en el acto el nombre del esposo; de asegurar que los escribanos reciban personalmente las declaraciones de los interesados, y de que se proceda a la lectura en presencia de ellos y de los testigos; de que se llene el requisito del domicilio para estos últimos, así como algunos detalles que siempre revisan importancia en esta clase de instrumentos. Se prevé también, el supuesto de que una de las partes, aunque sepa firmar, no pueda hacerlo por ser ciega o por cualquier otro impedimento.

Finalmente, se determinan con toda precisión los casos de nulidad, ya por faltar en la escritura alguno de los requisitos fundamentales, ya por la incapacidad de algún testigo, o por no aparecer el instrumento en el lugar que le corresponda dentro del protocolo, por orden cronológico.

La inobservancia de otras formalidades, que no invaliden el instrumento, dará lugar a una pena para los funcionarios que lo autoricen .

CAPITULO III

De los instrumentos privados

§ 1. — Disposiciones generales

En los instrumentos privados exigimos que en cada ejemplar conste el número de los que fueren suscriptos, lo que salva una omisión del art. 1021. La falta de este requisito no podrá ser invocada por quien presentare el documento, que sólo valdrá como principio de prueba.

Aunque es indiscutible y lo consagra la nota al art. 1026, ha parecido conveniente consignar de un modo expreso, que el instrumento privado reconocido en juicio vale también respecto de terceros, como si fuera público.

La firma del acreedor en las apuntaciones a que se refiere el art. 1030, no debe ser exigida, pues se trata de un evidente error de doctrina. Así lo resolvemos, de acuerdo con el Anteproyecto, reconociendo además, idéntica eficacia a las notas existentes en el instrumento que se encuentre en poder del titular. Pero cuando éstas últimas estuvieren inutilizadas, no probarán en ningún caso, según lo enseñan casi todos los autores.

Con referencia a la fecha cierta, extendemos el art. 1035 a diversas hipótesis no mencionadas en aquél, pero generalmente admitidas. Se agrega por ello, en el inc. 1º, la anotación o inventario del documento; y en el 4º, la imposibilidad física de las personas enunciadas en el mismo.

Por último, se añade una disposición nueva, tomada por Babiloni del art. 1340 del código italiano, que corrige los defectos señalados por los escritores franceses al comentar el art. 1337 del Código Napoleón, en cuanto éste exige presentar el título primordial, cuando su tenor no ha sido especialmente relatado en el de reconocimiento. Según nuestro texto, éste último o el de renovación hacen fe hasta que se de-

muestra, al confrontarlos con el principal, que hubo error o exceso en aquél.

§ 2. — De las cartas y otras pruebas escritas

En vista de la importancia que tienen estos documentos, regidos además por normas especiales, la Comisión ha resuelto seguir en cierta medida, el método del Anteproyecto, y dedicarles el segundo párrafo relativo a los instrumentos privados.

Las normas admitidas son las consagradas por la doctrina, como lo demuestra Bibiloni en sus notas.

La determinación expresa de los casos en que una carta podrá ser admitida como prueba, está destinada a salvar muchas controversias. Además, la negativa del destinatario es considerada como un impedimento insalvable, y de igual modo, el carácter confidencial de la misiva.

El valor probatorio de las cartas es independiente de las formas que revistan. No se aplican, pues, las reglas destinadas a los instrumentos privados, pudiendo ser invocadas, aunque falte la firma, salvo que se tratare de simples proyectos.

En todo caso, el juez apreciará el mérito de estos elementos probatorios, y podrá rechazarlos de plano, si no reunieren las condiciones indispensables.

También ha sido menester ocuparse de los libros de comercio, respecto de quienes no ejercen la profesión mercantil, materia que no legisla el código respectivo y que compete al nuestro. Lo mismo acontece con los que pueden llevar los particulares, quienes sin embargo, no están obligados a exhibirlos, a menos que fueren comunes con otra persona.

Los telegramas han sido objeto de una disposición por la cual se les reconoce el mismo valor que a los instrumentos privados, cuando el remitente hubiere subscripto el original que se conserva en la oficina, presumiéndose que con él está conforme la copia entregada al destinatario.

CAPITULO IV

De la confesión

Comenzamos por fijar los requisitos necesarios para que la confesión produzca plena prueba contra quien la efectúa. Además de la capacidad en la persona que la presta, se exige que lo haga por sí misma o por mandatario especial, ante el magistrado —aunque fuere incompetente— porque de este modo se procede con mayor conciencia de su importancia, factor que no se aprecia en general, cuando se realiza en forma privada. La confesión extrajudicial será juzgada por el juez de acuerdo con las reglas sobre la prueba, si fuere escrita. De otro modo, sólo producirá efecto en los casos en que proceda la prueba de testigos.

No se requiere, en cambio, que los hechos materia de la confesión, sean de índole personal; basta con que se refieran a la causa, porque de tal modo podrá consignar cuáles quedan fuera de la controversia y cuáles se mantienen como litigiosos, sin perjuicio de que si el citado ignorase las circunstancias que no le sean propias, lo haga constar en su respuesta.

Después de indicar en términos generales los hechos que no pueden ser objeto de confesión, así como el efecto de la inasistencia y de la negativa a contestar, se establece que este medio de prueba es irrevocable, salvo que mediare error, dolo o violencia, pues se trata de una manifestación de voluntad, regida por los principios aplicables a ésta.

El carácter indivisible es inherente a la confesión. La conocida controversia doctrinaria en torno de este punto, no ha podido suministrar un criterio firme y claro para admitir la tesis opuesta.

CAPITULO V

De los testigos

La Comisión ha estimado conveniente el límite que fija nuestra ley para la eficacia de este medio de prueba; y si bien establece la suma de quinientos pesos, como en el Anteproyecto, se trata de convertir a su valor actual la cifra de doscientos señalada dentro del Código.

No son admitidos los testigos para contradecir el contenido de un instrumento público o privado, regla que además de responder a razones evidentes, armoniza con lo expuesto por Vélez en la nota a su art. 992.

Con referencia a los actos jurídicos que no reunieren las formalidades prescriptas, esta prueba como toda otra, será procedente en los casos que determinan los arts. 1191 y 1192 del Código Civil, en el primero de los cuales se ha salvado el error de redacción que señala Bibiloni en su nota al art. 8 (primera forma) y que es fácil advertir cotejando el texto con el art. 1492 de Freitas.

Se agrega el supuesto de incapacidad accidental, omitido en el art. 1191 del Código pero previsto en el 1045, y un inciso nuevo tomado por el Anteproyecto del art. 1348 inc. 4º del código francés.

El concepto contenido en el art. 1192 del Código, acerca del principio de prueba por escrito —sin duda erróneo— se ha reformado restringiendo su alcance a los documentos que emanen del adversario, su autor o representante, excluyendo a otras partes, por interesadas que fueren.

La Comisión considera que no hay motivos suficientes para prohibir que presten declaración, los cónyuges, consanguíneos y afines en línea recta, si bien no debe obligárseles a hacerlo, salvo cuando se tratase del nacimiento o muerte de sus deudos.

CAPITULO VI

De los otros medios de prueba

En este capítulo se han colocado algunas reglas referentes a las presunciones; a la inspección ocular; a la prueba pericial y al juramento estimatorio, habiendo resuelto no incluir el decisorio, en razón de los serios reparos de que es susceptible y de las grandes vacilaciones que al respecto se notan en los autores, que más bien tienden a eliminarlo como medio de prueba.

TITULO III

De la cosa juzgada

Hemos reproducido aquí, con variantes de redacción, las reglas que propone Bibiloni, extensamente fundadas por éste en las notas de su Anteproyecto. Con todo acierto, y de acuerdo con las críticas formuladas por Maynz contra los requisitos de identidad, que los antiguos tratadistas habían señalado como indispensables, ha prescindido de ellos, estableciendo tan sólo que la sentencia resuelve definitivamente las relaciones discutidas en el juicio, sin que la misma cuestión pueda ser renovada. El efecto de la cosa juzgada se extiende a las partes y sus herederos. También alcanza a los sucesores particulares, cuando sus títulos hubieran adquirido eficacia contra terceros recién después de interpuesta la demanda, y finalmente a los que, en igual caso, se tornaren detentadores de cosas litigiosas, todo sin perjuicio de las reglas que amparan la buena fe.

Sin embargo, las sentencias constitutivas producen su efecto aun contra terceros, como resulta de numerosas dis-

posiciones de nuestro Código Civil, varias de las cuales cita Bibiloni en su nota al art. 3 de este título (primera redacción).

SECCION QUINTA

DE LA PRESCRIPCION

TITULO I

Disposiciones generales

Separada la prescripción adquisitiva de la usucapión, según se explicó en el preámbulo de este informe, en la parte general sólo tratamos de la primera reservando la segunda para los derechos reales, como uno de los modos de adquirirlos.

El primer título reúne una parte de los preceptos comprendidos en el Código. Ha sido necesario discriminar con cuidado aquéllos que se refieren a la prescripción adquisitiva, y que aparecen confundidos dentro de la ley actual, para conservar tan sólo normas concernientes a la liberatoria, o aplicables a una y otra, con cargo de establecer más tarde la referencia en el título sobre la usucapión.

En el primer artículo hemos omitido deliberadamente la exigencia de que el deudor deba oponer este derecho por vía de excepción, a pesar de que así lo consigna el Anteproyecto. La doctrina y la jurisprudencia admiten, sin embargo, la posibilidad de utilizarlo en forma de acción y por ello nos inclinamos a ese segundo criterio.

De acuerdo con Bibiloni, distinguimos en otro artículo, la prescripción y los términos de caducidad, aunque para estos últimos rijan igualmente, las normas sobre interrupción en el cómputo del tiempo.

Con referencia al momento en que comienza a correr el plazo, hemos agrupado en un solo artículo una serie de aplicaciones del principio, que evitan reglas inútiles y facilitan la interpretación legal.

De esta suerte, queda considerablemente reducido el número de los artículos que comprende el título del Código, pues aparte de los mencionados restan únicamente otros dos, que se vinculan con el ejercicio y la renuncia de la prescripción.

TITULO II

De la suspensión

En vista de las justificadas críticas que ha suscitado el art. 3966, que no armoniza con el régimen de protección para los incapaces, y de lo que también propone el Anteproyecto, hemos modificado substancialmente dicha regla y seguido lo dispuesto por el código alemán. El incapaz o el ausente, declarado o no, tendrá derecho a este beneficio, en el único supuesto de carecer de representante legal. Transcurridos seis meses desde la adquisición de la capacidad o del nombramiento del tutor o curador, se aplicarán los principios generales. Una solución semejante se extiende a la masa hereditaria, fijándose el mismo término a partir de que fuere aceptada la herencia o declarado el concurso.

No obstante las dificultades que pudiera originar, nos hemos inclinado a mantener el art. 3980, si bien atenuando esta excepción que deberá ser aplicada en forma restrictiva.

TITULO III

De la interrupción

Ha sido necesario eliminar una serie de disposiciones que, a semejanza de los arts. 3984 y 3985, conciernen exclusivamente a la prescripción adquisitiva.

Con esta reserva, seguimos en general, la doctrina del Anteproyecto, que aclara y extiende los arts. 3986 y 3987, si bien reformamos su redacción y establecemos un orden distinto dentro del título, que nos ha parecido más práctico y metódico.

TÍTULO IV

Del tiempo de la prescripción

Entre el sistema de establecer al tratar de cada acción el plazo en que ella prescribe, y el de reunir en una sección especial todas las reglas que se relacionan con este punto, hemos optado por el segundo, que es el de nuestro Código y también el que aconseja el Anteproyecto.

Figuran, pues, en primer lugar, las acciones imprescriptibles, y luego las que se extinguen por el transcurso del tiempo, clasificándose en progresión decreciente. En este sentido hemos alterado el orden en que aparecen los preceptos dentro de la ley actual, como también en la obra de Babiloni.

Con referencia a la prescripción de diez años, se ha reformado el inc. 1º. a fin de que comprenda a todos los incapaces. Como último apartado, agregamos la regla del art. 4023, en cuya virtud se extinguen al finalizar este plazo, todas las acciones que carezcan de término expreso dentro de la ley.

Al legislar sobre la prescripción de dos años, aclaramos el inc. 2º —cuya redacción es un tanto confusa en el Anteproyecto— para referirlo a todas las acciones emergentes de obligaciones contraídas por incapaces o por menores emancipados, señalando igualmente, el momento a partir del cual deberá computarse el tiempo.

Para poner término a discusiones, hemos incorporado a la ley lo resuelto por la jurisprudencia, en el sentido de que los honorarios médicos, cuando se trate de asistencia continuada, prescribirán para cada período, a contar del 31 de diciembre.

Por lo que se refiere al plazo anual para la revocatoria de una donación por causa de ingratitud, el punto de arranque

debe ser el día en que el acto se cometió o llegó a conocimiento del autor o de sus herederos.

El art. 4039 contiene una doctrina errónea, al declarar prescriptible la acción reivindicatoria. Lo que corresponde es dar por adquirido el derecho a favor del ribereño, una vez transcurridos los seis meses sin que el otro haya ejercido la acción. Es materia que debe ser tratada en la prescripción adquisitiva.

LIBRO SEGUNDO

DE LAS RELACIONES DE FAMILIA

SECCION PRIMERA

DEL MATRIMONIO

TITULO I

Régimen de las personas en el matrimonio

CAPITULO I

Disposiciones generales

El criterio con que la Comisión ha tratado el libro de familia, puede encontrar una traducción fiel en el artículo nuevo que proyecta y con el que ha querido iniciarlo. No figuraba ni en la obra de Vélez Sársfield, ni en la Ley de Matrimonio Civil, ni tampoco en el Anteproyecto. El texto, destinado a poner de relieve la primacía del orden social sobre los intereses puramente individuales, dice así: "Este Código reconoce en la familia legítima la base primordial de la sociedad, y en el matrimonio la fuente de aquélla". El párrafo que le sigue, permite alejar la crítica que pudiera hacersele: de que sólo encierra una declaración doctrinaria, cuando agrega: "Las leyes que rigen estas relaciones son de orden público, sujetas a lo dispuesto en los arts. 10 y 12".

Dentro de este capítulo, se han reunido los principios generales referentes a la jurisdicción, los que regían las cuestiones sobre nulidad de matrimonios realizados an-

tes del 1º de diciembre de 1889, los relativos al domicilio conyugal, y finalmente, un artículo comprensivo de las normas con arreglo a las que se aplicarán en esta materia las leyes nacionales y extranjeras. Se restablece, siguiendo a Bibiloni, el antiguo artículo 160 del Código, relativo a las leyes que rigen los derechos y deberes de los cónyuges, precepto alterado por el art. 3º de la ley actual. También aparece substituído el art. 4 de la misma, por una norma en consonancia con el 1220.

Termina el capítulo con una regla que se aparta del Anteproyecto. Decide con él que no habrá acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio, pero suprime toda referencia a la prohibición de reclamar daños y perjuicios derivados de esa causa, dejando que se gobiernen, si fueren procedentes, por los principios generales.

CAPITULO II

De los impedimentos

Hemos introducido respecto de la Ley de Matrimonio y del Anteproyecto, reformas encaminadas a metodizar esta materia tan engorrosa por los detalles.

Suprímense entre los impedimentos, la identidad de sexos en ambos contrayentes (inc. 8º del art. 481 de Bibiloni), inútil, desde que en todo caso implicaría una causa fundamental de invalidez. En cuanto a las modificaciones de doctrina, respecto de la ley actual, ellas son las que siguen: la edad de las partes, que de acuerdo con los códigos más modernos, el Anteproyecto fija en dieciséis años para la mujer y dieciocho para el hombre; la interdicción, que se establece como impedimento, o sea la declarada judicialmente, bien por insania o por sordomudez. Quiere ello decir que un alienado no podrá celebrar matrimonio, aunque fuese en intervalo lúcido, mientras no se le rehabilite. También se considera como impedimento, el estado no pasajero de perturbación enfermiza del espíritu, cuando impida discernir o afecte la voluntad.

La embriaguez habitual y la toxicomanía tenían en el Anteproyecto las mismas consecuencias que la insania. Por razones de método, la Comisión ha formado con ellos un inciso aparte. Nos fundamos en que interesa al cónyuge alegar la interdicción, ya que por ese estado no pudo expresar válidamente su consentimiento, en tanto que en los otros supuestos, quien contrajo matrimonio con el ebrio o toxicómano habitual, será quien tenga interés en invocar esa causa.

El capítulo, por fin, prevé la situación de los menores que se casaron sin estar autorizados, y permite al juez que les fije una cuota mensual a tomarse de la renta líquida de los bienes de aquéllos, o del capital, si fuese necesario.

CAPÍTULO III

De las diligencias previas

Salvo las modificaciones de forma y la metodización de la materia, pocos cambios de fondo aparecen en lo que atañe a las diligencias previas. Colocamos en este número, el referente a la obligatoria publicación del matrimonio, que no impone la ley actual, requisito que como es lógico, cede ante el caso de peligro de muerte de alguno de los contrayentes.

Conviene destacar también que nos hemos apartado del Anteproyecto y que, coincidiendo con el espíritu que otras veces se manifestara ya en el Código, acordamos más ingerencia a la autoridad en los asuntos que se refieren al derecho de familia, y así se establece que aun cuando los padres se opongan al matrimonio, corresponderá a los jueces resolver si tal actitud es o no fundada. Al mismo tiempo, se faculta al magistrado para suspender por un plazo prudencial su decisión al respecto.

Siguiendo a Bibiloni, se ha eliminado el distinguo de la ley actual, que tenía en cuenta si el padre gozaba o no del usufructo. Asimismo se modifica el texto, en cuanto no se limitan las causales de oposición que puedan invocar los padres.

CAPITULO IV

De la celebración

El capítulo se inicia con el artículo que requiere el consentimiento de los contrayentes. Por razones de método, se han eliminado las disposiciones que se referían a los vicios, para darles un lugar más adecuado en el que trata de los matrimonios nulos o anulables. Con el propósito de evitar una práctica que puede originar consecuencias graves, se ha prohibido la celebración del matrimonio fuera de la oficina del Registro Civil, adoptándose, además, medidas encaminadas a obtener que el acto se realice con mayor publicidad. La Comisión ha querido que la ceremonia en que se consagre el matrimonio se rodee de la solemnidad necesaria a un acto de esa trascendencia, para que no aparezca ante las partes, como el cumplimiento de una mera formalidad. Para ello, hemos determinado las palabras que el oficial público ha de pronunciar antes de que interroge a los cónyuges si quieren tomarse por marido y mujer, indicándose luego las demás formalidades que han de cumplirse.

Conviene puntualizar que por respeto a una situación que lógicamente puede presentarse, el oficial público quedará autorizado para levantar, a solicitud de parte, un acta especial, por separado, del reconocimiento de los hijos naturales que los padres verifiquen al contraer el matrimonio, debiendo omitirse en el caso toda mención en el acta de aquél.

CAPITULO V

De la prueba del matrimonio

Las disposiciones vigentes se modifican con el único fin de acordarles mayor amplitud, para que comprendan todos

los matrimonios y no únicamente los celebrados con posterioridad a la sanción de la ley actual.

Se precisan los casos en que debe admitirse la prueba del matrimonio por otros medios, excluyéndose el inc. 3º del actual art. 98, que aparte de su error implica un peligro.

Respecto de la posesión de estado, se aclara el art. 101, para establecer en forma precisa que lo salvado con ella son las irregularidades del acta de celebración.

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones de los esposos

Comienza el capítulo con un artículo comprensivo de los derechos y obligaciones fundamentales que el matrimonio crea entre los esposos. Este precepto, según se dispone, será aquel que habrá de leerse durante la celebración del matrimonio, reemplazando a los 50, 51 y 53 de la ley vigente.

Ha sido modificado el art. 53 de la ley actual en el sentido de prohibir toda medida de compulsión, para que la esposa se restituya al hogar, y se permite que aquélla pueda ser eximida de habitar con su marido cuando existan motivos graves, lo que implica un criterio más amplio y comprensivo de las circunstancias que pueden presentarse. También figura en este capítulo un texto nuevo, que prevé el caso del cónyuge que faltare a los deberes de asistencia para con el otro o para con sus hijos. Dispone que incurrirá en las sanciones de los artículos referentes al abandono y que podrá privársele de los derechos de la patria potestad, facultando la intervención judicial a requerimiento de aquel de los esposos a quien la conducta del otro, comporte peligro, deshonra o daño.

Siguiendo a Bibiloni y al código suizo, conferimos a cualquiera de los cónyuges indistintamente, la representación del matrimonio en lo relativo a los actos de la vida doméstica. Es una solución práctica destinada a evitar dificultades y que no ofrece peligro, toda vez que si es cierto que el texto determina que cuando la esposa contratara dentro de ese límite obligará al marido, también lo es que contiene

una salvedad para el caso de que el abuso de poderes hubiera podido ser apreciado por el tercero.

Si colocamos a la mujer frente al marido en una situación de reciprocidad en los derechos y deberes, no hemos podido sin embargo, dejar de reconocer que la cohesión de la familia, impone la necesidad de otorgar al segundo la primacía en ciertos derechos. El artículo inicial declara que es facultad de aquél, fijar el domicilio conyugal, y el que nos ocupa establece un límite a la capacidad civil de la mujer casada, en lo que hace al desempeño de profesiones o industrias. En esta materia hemos preferido seguir la tradición, que por otra parte, concuerda con lo que disponen casi todos los códigos, inclusive el de México, que en su art. 169 permite a la mujer desempeñar empleos, ejercer profesiones, industria, oficio o comercio, cuando no exista incompatibilidad con la tarea de dirigir y cuidar los trabajos domésticos. Sólo el soviético no establece reatos para la elección de ocupaciones por parte de los cónyuges.

La circunstancia de que en el libro de familia, hayamos resuelto tratar también el régimen económico del matrimonio, ha permitido que nuestro art. 365, pueda haber reunido en un solo texto, separados en incisos, todos los casos en que se requiere la conformidad de ambos cónyuges para que la mujer casada pueda realizar ciertos actos. De los seis, tres corresponden al acuerdo requerido para el desempeño de trabajos fuera de la casa común o constitución de sociedades. Los restantes, a ciertos actos de disposición de bienes que exigen esa conformidad.

El citado artículo declara que será necesario el acuerdo para que la mujer pueda válidamente ejercer profesión, comercio o industria por cuenta propia o efectuar trabajos fuera de la casa común. Hemos seguido con algunas variantes el sistema de Bibiloni, que funda la nota respectiva, entendiendo que él se impone por las necesidades de la familia, y nos hemos apartado así voluntariamente, de la disposición del art. 3º, inc. 2º, letra a, de la ley 11.357, volviendo al régimen del art. 56 de la Ley de Matrimonio y 13 y 18 del Código de Comercio, que modificamos en lo que hace a las condiciones y efectos de la conformidad y el acto revocatorio de la misma. Así, luego de suponer que el acuerdo puede ser expreso o tácito y fijar su alcance, no se somete

a la esposa al capricho del marido, pues disponemos que en todos los supuestos en que aquél se exige, si fuera negado o no pudiese prestarlo se permitirá a la mujer requerirlo judicialmente.

Establecemos que la conformidad del esposo se presumirá cuando la mujer ejerciere profesión, industria o comercio por cuenta propia, o efectuar trabajos fuera de la casa común, personalmente y a nombre propio, como también si continuare ejerciendo las actividades en que se ocupaba al contraer matrimonio. En estos casos el marido no podrá retirar el acuerdo: deberá dirigirse al juez, que resolverá teniendo en cuenta si el retiro responde a razones atendibles.

Como antes se dijo, esta Comisión creyó que convenía reunir en un artículo todos los casos en que se necesita la conformidad de ambos cónyuges para que la mujer casada pueda realizar ciertos actos. Es por ello que encuentran ubicación dentro de él, algunos supuestos que Bibiloni colocaba en el título de la sociedad conyugal. De ahí que se establezca que la esposa necesita el asentimiento del marido, para renunciar herencias o aceptarlas sin beneficio de inventario o hacer donaciones de los bienes que ella administre.

También proyectamos que el acuerdo, su revocación y el restablecimiento de él, requieren para producir efectos en cuanto a terceros de buena fe, que se inscriban en el Registro de la Propiedad o en el de Comercio, según el caso. El capítulo contempla algunas situaciones en las cuales la mujer no necesita esta formalidad. Tal los supuestos de la inversión de los provechos que ella obtenga de su trabajo o comercio o de los bienes que administre y de sus frutos.

CAPITULO VII

Del divorcio

Como se expresa en la parte general de este informe, la Comisión eleva dos proyectos a los que nos referimos separadamente.

Tanto en uno como en otro, se han eliminado los divorcios por mútuo consentimiento, y para ambos rigen las mismas causas con carácter taxativo. Dentro de éstas, se precisaran con más amplitud las situaciones en que la vida conyu-

gal se torna imposible, debido a la conducta de uno o de ambos cónyuges y un texto determina más exactamente lo que constituye el abandono voluntario y malicioso, colocándose como una nueva causa el estado habitual de embriaguez o el uso indebido de tóxicos enervantes.

Figura en ambos proyectos, un mismo artículo relativo a la jurisdicción, que decide que la demanda debe deducirse ante el juez del último domicilio común de los cónyuges. El texto agrega que será nula la sentencia que dictare cualquier otro juez, aunque ambos esposos concurrieren ante él, o cambiaren su residencia para obtener el divorcio, siempre que el último domicilio común se hubiere hallado en el territorio argentino.

Respecto del trámite de la causa, se establece que el juez deberá convocar a las partes para procurar su conciliación, permitiéndole que lo haga en la oportunidad que estime más conveniente. Se prevén asimismo las medidas a tomar durante la secuela del pleito, relativas a la residencia de la esposa y de los hijos, alimentos, expensas, y prueba de la causa, fijándose respecto de ésta una amplitud que sólo excluye la confesión o juramento judicialmente exigido y el testimonio de los ascendientes y descendientes de los litigantes. También se determina que el juez podrá denegar el divorcio, cuando estime que media colusión, a menos que la prueba justifique la existencia de motivos bastantes para decretarlo.

Un artículo prescribe que según la naturaleza de las causales que el texto señala, podrá el juez suspender el fallo por un plazo que no exceda de un año, y que transcurrido ese término, se dictará la sentencia si una de las partes lo solicitare y no hubiere mediado reconciliación.

Hemos creído oportuno apartarnos del Anteproyecto y no fijar plazo para que se deduzca la demanda de divorcio, con el propósito de favorecer al cónyuge inocente, que muchas veces puede haber dejado transcurrir un tiempo sin iniciarla, en la espera de que una mudanza en la conducta del otro, pudiese permitir la continuación de la vida conyugal. Se prevén también, los efectos de la reconciliación, determinándose que estos regirán tanto en el caso de perdón por parte del cónyuge ofendido, como en el de restablecimiento de la vida común.

Siguiendo a Bibiloni, un artículo nuevo establece que la acción de divorcio pendiente de sentencia, si bien en principio queda extinguida por la muerte de uno de los esposos, puede sin embargo, si estuviere iniciada y fuese prejudicial a otra relativa al patrimonio, continuar a este solo efecto por o contra los herederos y legatarios, del fallecido. La misma disposición resuelve que también será lícito proseguirla, al cónyuge demandado o a los herederos, cuando la imputación en que se funde importe grave daño para el honor de aquél.

En lo que atañe a la sentencia, el Proyecto dispone que a pedido del demandado, el juez podrá aun sin contrademanda declarar culpable al actor, cuando se justificaren hechos suficientes y se hubiere oído sobre ellos al imputado.

Acerca de los efectos de la sentencia, la Comisión ha entendido que convenía clasificarlos reuniéndolos en un solo artículo, que dividido en incisos contemplase la capacidad de los cónyuges, su libertad para cambiar el domicilio, el deber de alimentos, apartándose en este punto de Bibiloni para volver al art. 80 de la ley actual, si bien en el proyecto que acepta el divorcio absoluto, la obligación alimentaria cesaría con la celebración de un nuevo matrimonio por la persona que gozare de ellos. Lo fundamental en estos efectos comunes, es que la sentencia de divorcio disuelve de pleno derecho la sociedad conyugal, solución que hemos adoptado por entender que en tal caso, no puede considerarse que exista el *affectus societatis*, y no hay motivo que indique la conveniencia de que la sociedad continúe, cuando ha concluido la vida en común de los cónyuges.

El artículo reglamenta luego la situación de los hijos, determinando que los menores de cinco años quedarán a cargo de la madre, y los mayores de esa edad, a falta de acuerdo, en poder del cónyuge más idóneo. La Comisión ha creído prudente acordar mayor libertad a los jueces, para que éstos aprecien las conveniencias del menor y decidan según ellas. Por eso, el texto termina estableciendo que podrá modificarse el régimen de este artículo, en vista de las circunstancias, de la salud moral y material de los incapaces y de la buena administración de sus bienes. Sin embargo—agrega—no podrá acordarse la guarda al cónyuge que hubiere sido condenado a reclusión, prisión o deportación.

Por fin, advertimos que cada vez que empleamos los términos "separación judicial" o "separación personal", tanto en el proyecto que llamamos de divorcio limitado, como en el de divorcio absoluto, entendemos referirnos solamente al divorcio que no produce ruptura de vínculo.

Proyecto de divorcio limitado

Debemos destacar que si bien el Proyecto mantiene la indisolubilidad del vínculo, el divorcio adquiere un alcance mucho más amplio que en la ley actual, al relacionarse con otras disposiciones del presente libro. Así, en lo que hace a la nulidad, como lo expresaremos con más detalle en el título respectivo, las nuevas reglas sobre vicios del consentimiento, permiten una más justa aplicación de los principios que rigen la buena fe, sin que hayamos olvidado que la nulidad sólo debe contemplar la situación de los cónyuges al contraer el matrimonio.

Otra reforma digna de consignarse, es que se acepta, de acuerdo con las enseñanzas de nuestros autores de derecho internacional privado, la disolución de matrimonios celebrados en la República, cuando los esposos con domicilio en otro país, hubieren obtenido el divorcio absoluto que permita el derecho local. Esta regla no es aplicable a los divorcios relativos a matrimonios celebrados en la Argentina, cuando el marido o ambos cónyuges se hubieren alejado del país, para trasladarse al extranjero y obtenerlo manteniendo su domicilio en la República. En este caso, el art. 373 niega eficacia a tales sentencias de disolución. Asimismo, consideramos que no podrán ampararse en aquel precepto, los divorcios obtenidos en naciones con las cuales nos vinculan tratados que, como el de Derecho Internacional de Montevideo, extienden el imperio de nuestra ley. Esta fué la solución sustentada por la jurisprudencia en el caso Kusehnir de Rosenblit contra Rosenblit, (Gaceta del Foro de mayo 26 y 27 de 1934, pág. 193).

Por fin, cabe recordar que el art. 472 equipara los hijos adulterinos reconocidos, a los naturales, y vale como reconocimiento la inscripción que los padres hagan en el Registro Civil de los nacidos de uniones celebradas en el ex-

tranjero, violando las normas vigentes sobre indisolubilidad del vínculo. Quedarían en este mismo caso, los hijos nacidos de uniones celebradas en fraude de la ley.

Proyecto que reconoce el divorcio absoluto

Si bien el proyecto permite la ruptura del vínculo, contiene restricciones que limitan su alcance, las que podrían sintetizarse así:

1º El divorcio absoluto no constituye la única solución: las partes pueden optar por él o por la separación de cuerpos.

2º La disolución del vínculo para las uniones celebradas en el país, sólo podrá admitirse en virtud de las causales que autoriza el proyecto (inc. 2º del art. 337).

Ello implica que no serán reconocidos aquellos divorcios que se obtengan en el extranjero por mutuo consentimiento.

3º Se declara nula la sentencia de divorcio que dictare el juez que no fuere el del último domicilio común de los cónyuges, aun cuando ambos esposos concurrieran ante él o cambiaran su residencia para obtenerlo, siempre que el último domicilio común se hubiere hallado en el territorio de la Nación.

4º El cónyuge declarado culpable en dos divorcios, o el marido que lo hubiera sido por incitar a la esposa a cometer adulterio, no podrá contraer nuevo matrimonio.

5º Cuando al casamiento civil hubiere seguido la consagración religiosa de cualquier comunión que establezca la indisolubilidad del vínculo, podrá el cónyuge demandado oponerse al divorcio absoluto, y la sentencia que se dictare, sólo implicará la separación de cuerpos.

CAPÍTULO VIII

De la disolución del matrimonio

El matrimonio se disuelve únicamente por la muerte natural de uno de los cónyuges, pero advertiremos que el rigor que *prima facie* pareciera mantenerse para el caso en que

uno de los contrayentes hubiera desaparecido sin poder constatar el deceso con la vista del cadáver, queda mitigado en la práctica con el juego de otros artículos del proyecto y de la ley adicional. En efecto, recuérdese que el art. 41 establece que aunque no se hallare el cuerpo de una persona, se juzgará probado su fallecimiento cuando aquélla hubiere desaparecido en condiciones tales, que deba ser tenido como cierto, y en la ley de Registro, el art. 31 preceptúa que cuando una persona hubiere desaparecido en tales circunstancias, el fallecimiento podrá ser inscripto en el Registro, a requerimiento de la autoridad judicial que levantó el sumario.

CAPÍTULO IX

De los matrimonios nulos y anulables

En este capítulo, la Comisión concordando con el criterio que adoptara respecto de los actos ejecutados por los que se hallan en estado de perturbación mental, ha debido incluir en la enumeración de los impedimentos, la interdicción declarada judicialmente, quedando para el supuesto de anulación, el de aquéllos que no obstante hallarse en ese estado, no hubieren sido declarados incapaces.

Dentro de los incisos que prevén los matrimonios anulables, se incluye la posibilidad de que lo sea a instancia de la parte que ignorase que el otro contrayente se encontrara en el caso de embriaguez o uso indebido y habitual de tóxicos enervantes. Además, se precisa en otro inciso, que es causa de anulación tanto la impotencia del marido como la esterilidad de la mujer cuando ambas sean absolutas y manifiestas, siempre que fueren anteriores a la celebración del matrimonio. También se considera causa de anulación, el celebrado sin la publicidad necesaria, cuando ello hubiere respondido al propósito doloso de substraerse a una oposición.

Hemos creído conveniente puntualizar con más precisión que Bibiloni, siguiendo al código del Brasil, los vicios del consentimiento. En un artículo dividido en incisos, se ha legislado la materia, e innecesario resulta llamar la aten-

ción con respecto al alcance del texto y las ventajas prácticas que él está llamado a reportar.

El capítulo termina estableciendo quiénes podrán intentar la acción de nulidad, y entre qué partes habrán de substantiarse luego los efectos de la sentencia, con la indicación de cuándo habrá mala fe, supuesto que naturalmente modifica las consecuencias del fallo.

TITULO II

Régimen de los bienes en el matrimonio

CAPITULO I

De las capitulaciones y donaciones prenupciales

La Comisión ha considerado necesario reformar el método del codificador, en lo que se refiere a los efectos del matrimonio respecto de los bienes. De ahí que apartándose de la colocación que hoy tiene en el Código la sociedad conyugal, haya situado la materia inmediatamente después de los efectos relativos a las personas de los cónyuges. Pero ha mantenido el régimen de Vélez, considerando que no había interés en modificarlo para dar cabida a estatutos distintos, que se explican en otros países de costumbres y tradiciones diferentes. No quiere ello decir que no haya tenido en cuenta las modificaciones profundas establecidas por la ley 11.357, pues se la conservó en todo aquéllo que era compatible, eliminando los errores que contiene.

Comienza el capítulo determinando qué convenciones únicamente serán válidas. Quedan, pues, reunidas las capitulaciones y donaciones, obedeciendo a un mejor ordenamiento de la materia.

Se ha incluido, no obstante la opinión de Bibiloni, un inciso que permite a la mujer la reserva de alguno o de todos los bienes dotales, y se ha eliminado el inc. 4º referente a las donaciones que los esposos se hicieran de los bienes que dejaren por su fallecimiento, pues es justa la crítica que de

él se hace en el Anteproyecto, toda vez que admitirlo implica aceptar como válido un contrato sobre herencia futura, aparte de que es un precepto que no concuerda con nuestras costumbres.

Se determina qué convenios serán nulos; luego la forma y requisitos que deben llenar las convenciones matrimoniales y se concluye con un texto que priva de valor a todos estos actos, si el matrimonio no fuere celebrado. Cumplido éste, se declaran irrevocables, salvo que estuvieren sometidos a condición.

CAPITULO II

De la sociedad conyugal

En lo que se refiere al principio de la sociedad, aporte y haber social, luego de establecer que la sociedad sólo comienza con la celebración del matrimonio, y que le serán aplicables las reglas de este título, y en subsidio las del contrato de sociedad, se determina en dos artículos, los bienes propios y los gananciales, para reunir luego en un tercero aquéllos que siendo propios, conviene destacarlos en ese carácter, por las circunstancias en que fueron adquiridos, previniendo confusiones. Con idéntico criterio hemos procedido en cuanto a los bienes gananciales.

Siguiendo a Bibiloni, añadimos disposiciones nuevas para prever ciertas hipótesis, en que los bienes deben considerarse propios. Tales son las que enumera el art. 609 de la segunda redacción del Anteproyecto, pero suprimimos todo lo relativo a los derechos de autor. Ello obedece a que según nuestro criterio, debe formar parte de una ley especial.

Si reproducimos el principio del art. 1273 del Código, juzgando adquiridos durante el matrimonio los bienes que debieran serlo por la sociedad conyugal y que de hecho lo fueron después de disuelta, hemos eliminado toda la parte final del texto, que en verdad limitaba su alcance a los dos casos allí previstos. Nuestro artículo termina con una regla referente a la prueba de los bienes en el matrimonio, resolviendo un punto discutido. Así, después de sentar que se

presumen gananciales los bienes existentes al terminar la comunidad, establece que la prueba contraria será apreciada según las disposiciones de este párrafo, pero que no valdrá contra los acreedores sociales o del marido, la sola confesión de éste, cuando no fuere confirmada por otros medios, excepto el juramento.

Respecto de las cargas de la sociedad, la enumeración comprensiva de ellas ha sido ampliada, con otras hipótesis, como las que contienen los arts. 617 y 636 de la segunda redacción del Anteproyecto.

Acerca de los bienes de la mujer, hemos refundido los arts. 1244 y 1245, pero reduciendo la extensión que les asignara el Anteproyecto.

CAPÍTULO III

Administración de la sociedad conyugal

§ 1. — De la administración del marido

Como se dijo antes, si bien conservamos el régimen del Código, se han aceptado en cuanto se estimaron compatibles, las modificaciones de la ley 11.357. De ahí que aparezcan reducidas las facultades de disposición del marido y correlativamente ampliadas las de contralor de la esposa, a quien se le permite oponerse a la ejecución de actos que le fueren perjudiciales.

Es así como se ha creído llegar a la solución más conveniente, evitando las dificultades que traería la administración conjunta, especialmente respecto de terceros. Permitimos al marido en ejercicio de la administración, que enajene y obligue a título oneroso, los bienes adquiridos durante el matrimonio, salvo los derechos de la mujer, cuando estos actos fueren en fraude de ella. Le facultamos para hacer donaciones de sus bienes propios, pero exigimos la conformidad de la esposa respecto de los gananciales.

Como podrá observarse comparando el Anteproyecto, nos hemos apartado de Bibiloni, que en su art. 625, segunda redacción, permitía a la mujer oponerse a todos los

actos del marido, que constituyeran "excesos o irregularidad de la gestión en perjuicio de los intereses administrados", y del 626, que prohibía al marido o a la mujer enajenar, afectar u obligar sus bienes propios o gananciales, si no lo hicieren conjuntamente o con el consentimiento del otro cónyuge. Hemos creído que estos textos, serían un origen continuo de conflictos y pleitos; que la mujer tiene a mano el recurso más radical de privar al marido de la administración y que lo dispuesto en el art. 626 de Babiloni, se explicaría más bien en un régimen de comunidad universal.

Con arreglo al criterio que hemos seguido, se explica la supresión de los arts. 627, 629 y 632 de la segunda redacción del Anteproyecto, y las modificaciones con que aparecen aceptados algunos otros artículos, como el 630.

Respecto del Código, hemos entendido que convenía eliminar el art. 1283, que facultaba a los acreedores de la mujer, por obligaciones anteriores al matrimonio, para exigir el pago con los bienes adquiridos durante el mismo, si la esposa no los tuviere propios, porque nos parece perjudicial para la sociedad. Los acreedores deben esperar que ésta se disuelva y liquide. Por tal motivo, nuestro texto establece que el marido será responsable por las obligaciones contraídas por la mujer, antes o después del matrimonio, sin perjuicio de los reembolsos que correspondan.

El Proyecto determina que los bienes de la esposa, responderán por los actos regulares de administración realizados por el marido, pero no por las extralimitaciones de aquél, salvo en caso de enriquecimiento. Los bienes de los cónyuges y los comunes, sólo se afectarán por las obligaciones que contrajere la mujer después del matrimonio, cuando hubiere conformidad del marido, a menos que se tratase de gastos domésticos corrientes o que mediara autorización judicial.

Respecto de la administración de la mujer, cuando fuere nombrada curadora del marido o a éste se le declarase ausente, se dispone que aquélla tendrá en tal caso los mismos derechos y responsabilidades que su consorte. Es el principio del actual art. 1284 ampliado a la hipótesis de curatela por ausencia, pero como hemos suprimido los reatos de los arts. 1285 y 1286, la equiparación de las facultades de la mujer a las del marido, resulta entonces completa.

El artículo final, reproduce unidos, con variantes de forma, los 1289 y 1290. Queda así autorizada la mujer para reclamar la disolución de la sociedad conyugal, cuando por incapacidad o excusa de ella, se hubiere encomendado a otra persona, la curatela del esposo, y no estuviere conforme en avenirse a la gestión de ese curador.

§ 2. — De los bienes administrados por la mujer

Este párrafo comienza por enumerar con claridad los bienes que administra la mujer. El Proyecto sienta como regla que dicha administración debe ajustarse a las normas establecidas para la que desempeña el marido. Quiere ello decir, que separándonos de Bibiloni, permitimos a la esposa que disponga libremente a título oneroso de esos bienes. Advertimos asimismo, que el abuso de tal facultad, queda prevenido con las disposiciones que acuerdan al esposo el derecho de pedir el retiro de esa administración, si fuere perjudicial, culpable o dispendiosa, y que aun antes de pronunciarse el fallo, se suspenda en caso de urgencia, la ejecución de los actos pendientes. Para facilitar el uso de este derecho, se permite al marido en todo momento, informarse de la gestión realizada por la mujer y requerir los detalles pertinentes.

Los demás artículos reproducen con variantes de forma, otros del Anteproyecto, tendientes a dejar consignado en los actos que realice la mujer, la calidad de los bienes que administra, para impedir cuestiones con terceros. Con el fin de evitar la mala fe de los cónyuges, se dispone que cuando se afirmare el carácter reservado de un bien, corresponderá demostrarlo según las reglas generales de la prueba, no siendo admitida la confesión ni el juramento de los cónyuges, si el litigio fuere con extraños. El Proyecto determina que los bienes administrados por la mujer responden por las obligaciones que ella hubiere contraído, antes o después del matrimonio, más no por las de su esposo o de la sociedad conyugal que él administre. A su vez, se establece que el marido no se responsabilizará con sus bienes ni la sociedad con los que él manejare, por las deudas que hubiere contraído la mujer en la gestión a su cargo.

Finalmente, un texto prescribe que la mujer podrá asumir en todo tiempo la administración de sus bienes propios, inscribiendo la declaración de su voluntad en el Registro. Será permitido al esposo oponerse al cambio, cuando estimare que es intempestivo o perjudicial para los negocios pendientes de la sociedad, o para los intereses de cualquiera de los cónyuges, y en todo caso, podrá pedir la separación de bienes.

CAPITULO IV

Disolución de la sociedad conyugal

Enumeramos en forma metódica, las causas por las que termina la sociedad conyugal, y dividimos luego los distintos casos en que procede la separación judicial de bienes. Además, aparecen ampliadas las causas que dan base a esta última, como en el caso en que se permite al esposo solicitar la separación (art. 434). Podrá también decretarse a requerimiento de cualquiera de los cónyuges en el supuesto de concurso, y por fin se contempla la hipótesis de que una de las partes hubiere sido declarada ausente con presunción de fallecimiento y se faculta a la otra a pedir la separación.

No se ha reproducido el art. 1298, como lo hiciera Babiloni, porque hemos entendido que en los casos de separación de bienes, deben aplicarse las reglas de la acción revocatoria, y la norma citada, sólo viene a contener una mera aplicación referente al marido. El precepto tendrá así un alcance más general, al referirse tanto a los actos del esposo como a los de la mujer.

Ampliamos el art. 674 de la segunda redacción del Anteproyecto. Si en él, se reconocía a la mujer separada de bienes, el goce de su capacidad civil, le imponía sin embargo un límite a ésta, al prohibirle que efectuare donaciones o las aceptare sin la venia del juez.

Los efectos de la disolución, se producirán entre las partes desde el día del fallo; y respecto de terceros, a contar del momento en que fuera inscripto o prenotado.

Hemos establecido en artículo nuevo, que al procederse a la liquidación de la sociedad conyugal, cuando los esposos hubieren vivido separados de hecho, el que fuere culpable del abandono no tendrá participación en los gananciales después de producido aquél, los que se dispone acrecerán a la parte del otro cónyuge.

En el artículo correspondiente al 1316 del Código, que prevé un matrimonio nulo por causas de bigamia ignorada por el otro contrayente, se establece que el verdadero cónyuge tendrá derecho a la mitad de los gananciales, en tanto que aquel que sufrió el engaño con el matrimonio aparente, podrá repetir contra la parte del bígamo y contra los bienes propios introducidos por éste a la sociedad legítima, el importe que le hubiere correspondido durante la comunidad. La innovación consiste en que el texto finaliza estableciendo que el beneficio del artículo no regirá, cuando quedaren descendientes de cualquiera de estas uniones.

SECCION SEGUNDA

DE LA FILIACION

TITULO I

De la filiación legítima

CAPITULO I

De los hijos legítimos

Definida la filiación legítima se han reunido en un solo artículo las distintas presunciones que sienta la ley, tanto las que no admiten prueba en contra, como aquéllas que la autorizan. Con el propósito de no repetir disposiciones ya consignadas en el libro primero, se ha omitido las referentes a los plazos máximo y mínimo del embarazo. Trátanse luego las acciones a que puede dar origen la filiación, separando en forma más clara los supuestos en que el padre puede des-

conocer la paternidad. Como podrá observarse, se mantienen los principios tradicionales, pero la forma en que ellos se expresan, evita el casuismo y aclara la materia de suyo engorrosa.

Quedan incluidas entre las circunstancias que permiten el ejercicio de esta acción, la de haberse hallado los cónyuges separados de hecho, el abandono del hogar, la ausencia del esposo o de la mujer, siempre que el período de la concepción coincidiera con el de la separación efectiva. En tales supuestos, no será necesaria otra prueba, pero si se acredita que durante ese tiempo, los cónyuges hubieren reanudado privadamente las relaciones matrimoniales, se estará a la regla general que reproduce el principio "**pater is est, quem nuptiæ demonstrant**".

Reglamentamos el ejercicio de la acción de desconocimiento de paternidad, los plazos en que ella ha de hacerse valer, y considerando el caso de fallecimiento del marido, se permite que continúen la iniciada por éste, sus herederos presuntivos que debieren concurrir con el hijo o ser excluidos por él, así como a los ascendientes del causante, aunque no le sucedan. Esta ampliación se justifica no sólo por el interés moral de que no se introduzcan en la familia elementos extraños, sino también por el patrimonial de que ese hijo espúreo, podría representar al padre en la sucesión de los ascendientes, y aun en vida de éstos, demandarles por alimentos.

Se prohíbe que si el marido hubiere reconocido su paternidad expresa o tácitamente, pueda deducirse la acción, a menos que tal conducta se debiere a error o fraude sufrido por aquél y se dispone, que la acción por desconocimiento, deba entablarse tanto por el marido, como por sus ascendientes o herederos, dentro de los noventa días desde que el error o fraude fueron conocidos.

Trátase luego la acción de desconocimiento de legitimidad, enumerándose los supuestos en que ella procede. Si bien el Proyecto sigue el art. 257 del Código, al referirse al supuesto de no haber sido concebido el hijo durante el matrimonio, se aclara el caso, indicándose en vez de la frase de Vélez, otra que lo limita, o sea al de aquél en que el hijo ha nacido después de los trescientos días subsiguientes al de la disolución del matrimonio. Con ello, la hipótesis

del hijo concebido antes del matrimonio y nacido después, queda comprendida en la acción de desconocimiento de la paternidad.

Prevé el Proyecto que pueda impugnarse el estado que goce el hijo, aunque fuere conforme a la partida de su nacimiento y aun faculta al padre o madre a que pudieren hacerlo, concretando los casos en que se permite.

Bibiloni, en su nota al art. 14, primera forma. expresaba, que aun cuando los padres fueren los autores de la posesión de estado del hijo y le hubieren declarado como tal al inscribirlo, no debería prohibírseles esa impugnación. Los motivos que él diera, se vinculaban a su propósito de excluir, como lo hizo, de su Anteproyecto, a la adopción. Tal motivo no existiría para nosotros, que la aceptamos. Creemos conveniente, sin embargo, mantenerla no sólo por lo que el estado de las personas significa, sino también porque al crear esa nueva figura, debe empleársela en las formas que se indican, con las ventajas que se acuerdan luego para la ruptura del vínculo.

Se incluyen también en este capítulo, normas relativas a la reclamación del estado de hijos legítimos, que pueden ejercer éstos cuando fueren desconocidos. El texto reforma el 259, indicando el supuesto en que los herederos del hijo pueden intentarla o proseguirla.

Una larga nota explicativa de Bibiloni, (al art. 15 de su capítulo I), estudia los dos efectos de la acción de filiación, en cuanto crea relaciones de familia a favor de los hijos, y luego en cuanto los constituye herederos de los padres y sus consanguíneos. De ahí el distinguo que contienen los inc. 2º y 3º de nuestro artículo, entre descendientes legítimos, por una parte, y por otra, la de todos los herederos del hijo.

El art. 259 del Código, declaraba imprescriptible la demanda para reclamar la filiación legítima. Nuestro texto fija, para las acciones que acuerda, un plazo de dos años contados de la mayor edad del hijo, conforme a lo que establecen casi todos los Códigos, teniendo en cuenta que mientras fuera menor no podría obrar por sí solo, y disponemos que si el hijo mayor dejare pasar dos años sin deducirla, no podrán hacerlo sus descendientes, porque el silencio ha de interpretarse como un asentimiento de su estado;

y por lo tanto, de su falta de derecho. Asimismo se dispone que si la acción no fuere intentada dentro del año de la muerte del hijo, se extinguirá la de petición de herencia que corresponde a los herederos de aquél.

Otro artículo se refiere a la prueba de la filiación, indicándose cómo ésta puede ser justificada. Se establece así una enumeración de las circunstancias más corrientes, que no es taxativa. Luego se refiere el Proyecto a los testigos, que únicamente se admiten en casos bien determinados, y aun así, se expresa que será indispensable el principio de prueba por escrito, o que las presunciones resultantes de los hechos demostrados por otros elementos, sean suficientemente graves para determinar su aceptación.

Por fin, de acuerdo con Bibiloni, se decide que en las causas de desconocimiento de la paternidad, cuando se reclame o impugne la filiación, la existencia o inexistencia de relaciones jurídicas, originadas en la filiación legítima, deberá citarse personalmente a todos los herederos y a los ascendientes y descendientes más próximos de los padres en cada línea, a fin de que puedan intervenir en tales juicios y ello con el propósito de que la sentencia firme que recayere, pueda oponerse contra todos, con economía de tiempo, y para ahorrar las intranquilidades que esta clase de acciones siempre traen consigo.

CAPITULO II

De la legitimación

Substituimos el art. 311 del Código, por otro más preciso que se refiere tanto a los hijos naturales como a aquéllos adulterinos o incestuosos que puedan ser legitimados. Respecto de los primeros, declaramos que la legitimación se opera por el subsiguiente matrimonio de los padres y acerca de los segundos, por uno putativo. También se amplía el alcance del texto, para comprender el supuesto de un casamiento que legitimará al hijo adulterino, si a la época de la concepción uno de los padres ignoraba la existencia de unión legítima subsistente respecto del otro.

El Anteproyecto distingue entre impugnar la legitimación y repudiarla. Lo primero resulta de la facultad que se concede al interesado, para aceptar o reclamar la legitimación que le corresponde. En cuanto a lo segundo, la mayoría de la Comisión ha entendido que era preferible eliminar el art. 320 y el correlativo de Bibiloni, que aunque con variantes, aceptaba el repudio, por considerar que no es por la voluntad del interesado, sino por una disposición de la ley que la legitimación se produce, y que el único motivo legítimo que podría tener una persona para ejercer ese repudio, es no ser hijo de quien contrajo el matrimonio del que resultó la legitimación. Ahora bien; en este caso, el repudio vendría como consecuencia del ejercicio de la facultad de impugnar la legitimación. Más como ello equivale a una demanda de filiación del interesado, se explica que también en este punto se haya suprimido el texto de Bibiloni por innecesario, desde que las normas para dicha acción, vienen a hallarse incluidas en el capítulo anterior.

TÍTULO II

De la filiación ilegítima

CAPÍTULO I

De los hijos naturales

En este capítulo, las disposiciones del Código metodizadas y completadas con las conclusiones de la jurisprudencia, se han articulado estableciendo cuáles son los principios que gobiernan el reconocimiento voluntario y los efectos del mismo. La amplitud del art. 332 del Código, que se refería al reconocimiento “de otra manera”, se ha limitado, para precisar cómo debe hacerse el voluntario del hijo. Además, se dispone que cuando el padre, temiendo fallecer antes de que nazca el hijo concebido quisiere reconocerlo, le será lícito consignar el nombre de la madre, en quien lo hubiere engendrado.

Se determina que el reconocimiento del padre o de la madre, podrá también acreditarse mediante la posesión de estado resultante de un conjunto suficiente de hechos, que según las circunstancias sean demostrativos de un vínculo cierto de filiación entre el hijo y la persona de quien pretende descender. Finalmente, si bien se reproduce el artículo de Vélez, que no permite la indagación de la maternidad, cuando tuviere por fin atribuir el hijo a una mujer casada, se evita, siguiendo una jurisprudencia más justa la errónea aplicación de este principio, determinando que la mujer que hubiere contraído matrimonio puede reconocer a sus hijos naturales, derecho que también corresponde a los menores en edad de casarse.

CAPÍTULO II

De los hijos adulterinos e incestuosos

Este breve capítulo contiene, sin embargo, modificaciones importantes. Equiparamos el hijo adulterino o incestuoso reconocido, al hijo natural, con todas las ventajas económicas y sociales que ello reporta: seguimos la orientación general de las leyes de otros países. En un nuevo artículo resolvemos el caso particular que nos afecta, en lo que hace a los hijos nacidos de matrimonios celebrados en el extranjero contrariando las normas sobre indisolubilidad del vínculo y consideramos que tendrá el efecto de un reconocimiento, la inscripción de esos hijos realizada por los padres en el Registro Civil.

Finalmente, se determina que los fallos definitivos que declaren la existencia o inexistencia de la filiación natural, adulterina o incestuosa, en pleitos seguidos con parte legítima, reconocen un estado y producirán efectos contra todos.

TÍTULO III

De la adopción

Este título no figuraba en el Código, ni en la obra de Bibiloni. Hemos incorporado el viejo principio romano de la

adopción, siguiendo más de cerca al del Brasil, que como el alemán (art. 1741), el suizo (art. 264) y el de México (actual 390) la establecen. Si esta figura jurídica no se explica como consecuencia de los inconvenientes que en la familia romana creara la agnación, ni por los motivos religiosos que también la inspiraron, responde, no hay duda, a una tendencia natural y respetable que los hombres suelen abrigar, especialmente cuando el matrimonio no ha traído el fruto esperado. Contemplamos, por otra parte, situaciones que están en nuestras costumbres, al extremo de que en varios casos para llenar el propósito de la adopción se ha llegado hasta incurrir en sanciones penales, falseando el estado civil de las personas. El articulado de este capítulo tiende tan sólo a favorecerlas, en los casos en que no implique apartar al adoptante del matrimonio. Así, sólo se le permite cuando el que habrá de adoptar hubiere cumplido cincuenta años y careciere de descendencia legítima, y siguiendo la máxima de que con la adopción se imita a la naturaleza, se exige que el adoptante debe ser por lo menos diez y ocho años mayor que el adoptado. Además, se determina que la adopción debe hacerse por escritura pública o ante el Registro, y que no podrá sujetarse a condición o término.

Excepcionalmente se modifica la edad mínima, para el caso en que marido y mujer adopten a una persona. Ello ocurre cuando aquélla fuere mayor de cuarenta años y hubieren transcurrido más de diez desde la celebración del matrimonio. Otros artículos fijan los efectos de la adopción y los casos en que el vínculo puede quedar disuelto.

TÍTULO IV

Del parentesco y de la prestación de alimentos

Este título metodiza la materia en diez artículos, habiendo eliminado disposiciones del Código, doctrinarias e inútiles.

Respecto de los alimentos, se fija la regla a que se ajustará su prestación, quiénes están obligados y en qué orden,

sin perjuicio de que éste pueda alterarse si alguna de las personas a quienes correspondiera, careciere de medios suficientes para prestarlos, o cuando mediare grave dificultad para demandar a cualquiera de ellas.

Se ha excluido en la enumeración de los parientes ilegítimos, al abuelo respecto de los nietos naturales, desde que dichos nietos no le heredan ni forman parte de la familia legítima.

El Proyecto faculta al juez para que dentro del trámite sumario —que también se establece para el juicio de cesación de alimentos— pueda suspender en forma transitoria el pago de las cuotas.

SECCION TERCERA

DE LA PROTECCION DE LOS INCAPACES

TITULO I

De la patria potestad

La patria potestad, ha sido organizada de acuerdo con la corriente que iniciara la ley 10.903. La materia aparece distribuida con el siguiente criterio: se ha considerado previamente todo lo que se relaciona con el concepto de la patria potestad; luego su amplitud; la forma de ejercerse; la representación según los casos; los derechos y deberes de los padres para con sus hijos, sus facultades sobre los bienes, la administración de ellos, el usufructo, y por fin, los supuestos en que pueden incurrir en sanciones, que impliquen la suspensión o la pérdida de la patria potestad.

De acuerdo con este criterio, se han establecido modificaciones importantes respecto del Anteproyecto, debiendo señalar en primer término, la que hemos introducido en lo tocante a la administración de los padres. Bibiloni determinaba que ella se gobernaría por las normas de la tutela, queriendo unificar las reglas referentes a los bienes de los menores, pero creemos que no fué acertado al establecer

dicho estatuto en aquel título, y pensamos que correspondía al de la patria potestad, por ser el más importante.

Nuestro Proyecto determina que los padres tienen la administración de los bienes de sus hijos, puntualizando los casos en que no les corresponde; luego se prevén los supuestos en que necesitan la autorización judicial, y finalmente, se enumeran los actos que no podrán realizar aunque los autorice el juez.

Con el fin de evitar los abusos en perjuicio del interés de los menores, se han limitado las facultades del padre de acuerdo con la orientación de nuestra jurisprudencia, al disponer que los dineros de aquéllos deben ser depositados en las cuentas respectivas, hasta que se inviertan, lo que deberá efectuarse con la autorización del juez.

Otra regla prescribe que el usufructo del padre, termina con el matrimonio del hijo menor de edad, pero que cuando éste lo celebrare sin la venia necesaria, el poder paterno continuará respecto de los bienes con el carácter y efectos de una tutela.

Luego de prever cuáles son los casos en que la administración y usufructo de los bienes corresponde a los hijos, se metodiza la materia reproduciendo en lo que hace a la suspensión, pérdida y fin de la patria potestad, las reglas del Código modificadas por la ley 10.903.

TÍTULO II

De la tutela

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Todo este título ofrece una ordenación metódica, que ubica de acuerdo con un criterio más lógico, los distintos preceptos que contiene el Código y reproduce el Anteproyecto. No figura en el nuestro la incapacidad con que el art. 383 afecta a la madre que hubiere contraído nuevas

nupcias, a quien aquel texto no permitía designar tutores a sus hijos. En la tutela legítima, a la nómina del art. 390, se han agregado los tíos, determinándose siempre que la prelación que se establece, no limitará el arbitrio del juez, para que éste elija a la persona más capacitada por sus aptitudes, responsabilidad o buen concepto, y el artículo termina con la declaración de que él no rige para los hijos ilegítimos.

Se determina a qué personas no podrá conferirse la tutela dativa, y se prevé en una serie de incisos, quiénes no pueden ser tutores, determinándose los supuestos en que procederá la designación de tutores especiales.

No hemos dejado de considerar la conveniencia de una sanción adecuada para aquellos parientes del incapaz, que no se preocuparon de solicitar el nombramiento de un tutor para aquél. Tal vez, una multa hubiera podido constituirlo, pero nos detuvo la dificultad de graduarla según los casos. Igualmente, hemos desechado el hacer de ella una causa de indignidad, o de privación de los derechos hereditarios, juzgando que las más de las veces sería ilusoria, sin perjuicio de tornarse excesiva en otras. De ahí, pues, que solo nos hayamos limitado a establecer una causal de incapacidad para el ejercicio de la tutela.

Como lo consignamos al tratar de la patria potestad, en el título que a ésta concierne quedaron fijados los principios referentes a los intereses de los incapaces. De ahí, pues, que unificadas las reglas relativas a esos bienes se explique en la tutela el reenvío a los artículos pertinentes.

CAPITULO II

Del comienzo de la tutela

Imponemos la exigencia del discernimiento de la tutela como también el inventario de los bienes antes de entregarlos al tutor, valuándose los muebles, a menos que estas operaciones ya se hubiesen realizado, para no recargar inútilmente el patrimonio del incapaz. Establecemos asimismo, que si el tutor sucede a otro o al padre, deberá pedir al subs-

tituído o a sus herederos, la rendición judicial de las cuentas y entrega de los bienes.

CAPITULO III

Administración de la tutela

Consignamos en forma precisa el alcance de la representación del tutor, al preceptuar que aquél es el representante legítimo del pupilo, en todos los actos jurídicos relativos a la administración y gobierno de los bienes, que no estuvieren exceptuados.

Bibiloni ha explicado la conveniencia de puntualizar la representación que corresponde al tutor, destacando en una nota, (la del art. 19 del capítulo III, sobre administración de la tutela), las diferencias que existen entre ésta última y la patria potestad. De ahí la ventaja de haber modificado en esa forma el art. 411 del Código.

Además de la regla general consignada en el capítulo I, un artículo prevé todos los casos en que será necesaria la autorización judicial, para que el tutor efectúe los actos que se enumeran. En diversos artículos, se contempla la situación de los bienes que constituyen la fortuna del pupilo, y se fijan los principios que determinan su suerte. Se ha previsto especialmente, el caso de que al menor le correspondiera algún comercio o industria, o una parte de él y se establecen las normas que regirán esos casos. Asimismo se prevé el honorario que corresponde al tutor, y los supuestos en que no tendrá derecho a remuneración alguna.

CAPITULO IV

Cuentas de la tutela

Luego de considerar lo relativo a ellas, se declara nulo todo convenio celebrado antes o dentro de los treinta días de la rendición de cuentas, entre el tutor y el pupilo mayor o

emancipado, que versare sobre la administración de la tutela o el ajuste de aquéllas.

CAPITULO V

Terminación de la tutela

El Proyecto prevé los casos en que la tutela concluye, conteniéndose una enumeración más comprensiva que la del art. 455. Entre estas nuevas causas, se agrega la declaración del presunto fallecimiento del menor y el cese de la incapacidad del padre, o su reintegro a la patria potestad, y la emancipación del menor con la venia necesaria, prescribiéndose que si ésta hubiese faltado, la tutela continuará en cuanto a la administración de los bienes, cesando sólo respecto de la persona del pupilo.

TITULO III

De la curatela

CAPITULO I

De la curatela de los incapaces

El artículo primero determina que los sujetos a interdicción por insania o sordomudez, serán considerados como menores en cuanto a sus personas y bienes. El segundo declara que los referidos incapaces, conservarán la libertad y sólo podrán ser reclusos o asilados, en virtud de resolución judicial, cuando fuere de temer algún daño para ellos o para terceros, o lo exigiere su tratamiento. No bastará, pues, la interdicción para que se les prive de la libertad. Todo dependerá de las circunstancias.

En la nómina de quienes podrá ser curadores legítimos se incluyen las hijas legítimas, que podrán serlo respecto de

sus padres, en los mismos casos en que se les faculta para desempeñar la tutela. Idéntico criterio se establece luego a favor de las hermanas y las tías.

CAPÍTULO II

De la curatela de bienes

Acerca de la curatela de bienes, se prescribe que se dará curador en los casos autorizados por el Proyecto, y que si hubiere designación en el testamento, o pariente idóneo del principal interesado, serán preferidos para el cargo, pudiendo ser varios, cuando lo exigiere la naturaleza de la administración.

TÍTULO IV

De los menores emancipados

Como el libro primero trata en el título relativo a los menores, la forma de la emancipación, y los efectos que ésta produce, el presente sólo prevé las limitaciones impuestas a su capacidad, que obedecen al propósito de defenderles contra la inexperiencia que les es propia. Por ello, se determina primeramente qué actos no pueden realizar los menores incapacitados, para luego, en un segundo artículo, enumerar aquéllos que pueden ejecutar, siempre que obtengan la autorización del juez. Sin embargo, en estos casos, en los que se reproducen con otra forma, las prescripciones de los arts. 134 y 135 del Código, se ha suprimido el inciso referente a los pagos que pasen de \$ 1.000 y se ha extendido a cuatro años el plazo para los arrendamientos. Se ha juzgado innecesario referirse a la facultad para estar en juicio, porque el menor emancipado, aunque sufra limitaciones, es sin embargo capaz respecto de los actos que no le fueren expresamente prohibidos, y esta Comisión considera que no hay motivo para privarles de ese derecho.

TITULO V

De la autoridad y vigilancia en lo concerniente a los incapaces

Este título evidencia la orientación que hemos querido acentuar en toda la materia, relativa a la patria potestad, tutela y curatela. Nos referimos a la intervención del Estado, en el interés de los incapaces, por medio del patronato nacional o provincial, que ejercen los jueces con audiencia del Ministerio Público.

Por ello se reproduce el art. 59 del Código, y luego de fijar las funciones del Ministerio Público, se reduce a cinco artículos, todo un largo título de Bibiloni, en el que se introducía el consejo de familia. Hemos creído que acerca de este último punto, podríamos limitarnos a nuestro artículo 566, que dice así: "Podrá instituirse un consejo de familia en los siguientes casos: 1º Cuando el padre o la madre legítimos lo hubieran dispuesto. 2º Cuando el juez lo ordenare respecto de administraciones complicadas o que exijan conocimientos especiales.

Los miembros del consejo de familia, sólo tendrán voto consultivo".

LIBRO TERCERO

DERECHO DE LAS OBLIGACIONES

SECCION PRIMERA

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

TITULO I

Del efecto de las obligaciones

CAPITULO I

Disposiciones generales

Eliminados los arts. 495 a 498, que son puramente didácticos, y suprimidos también los 499 a 502, cuyo alcance ha dado origen a tanta controversia, hemos consignado una disposición especial relativa a la fuente de las obligaciones. Advertimos que la palabra *causa* ha sido siempre empleada en el Proyecto, en el sentido de finalidad, con lo cual se evita atribuirle aquel significado.

Después de reproducir en términos más breves el art. 505 del Código, se establece en un sólo precepto la responsabilidad por culpa o dolo, englobando así los arts. 506, 507, 511 y 512 y se introduce otro, contenido en el Anteproyecto y en los códigos suizo y alemán, por el cual se extiende aquélla a los casos de culpa o dolo de los representantes o de la persona que el deudor hubiere empleado para cumplir la obligación.

Con respecto a la mora nos inclinamos a mantener el sistema del Código, que en principio exige la interpelación para

que ella se produzca. Aunque doctrinariamente parece más conveniente la doctrina de la mora *ex re*, preferimos exigir aquel requisito, tanto en virtud de nuestras prácticas como por las graves consecuencias que se derivan. Además, salvo en las hipótesis contenidas en la ley, las partes conservan entera libertad para pactar que la mora se determine por el simple vencimiento del plazo.

A las excepciones del art. 509, añadimos los supuestos en que el crédito se funde en un acto ilícito, o en que por ausencia u ocultación del deudor no fuere posible interpellarlo, caso este último en que será suficiente proceder por vía de declaración. Bibiloni incluía igualmente el supuesto en que el obligado a no hacer, ejecutara el hecho; pero es más exacto considerarlo como ejemplo de incumplimiento.

Al final del capítulo — después de las reglas concernientes al caso fortuito y a la fuerza mayor, que no han sido modificadas — se consigna el principio general que deriva de los arts. 524 y 525. Se suprimen los 523 y 526, que con aquéllos forman el título IV “De las obligaciones principales y accesorias” del Código, por ser doctrinario el uno y por haberse incluido el otro en el precepto relativo al objeto de los actos jurídicos.

CAPITULO II

De la garantía común para los acreedores

Se han reunido en este capítulo diferentes reglas dispersas en el Código, o que resultan de la coordinación de sus preceptos.

Establecemos que la garantía común de los acreedores consiste en los bienes pertenecientes al deudor, o que pudiera adquirir luego (art. 2092, código francés).

En armonía con la parte general de este Proyecto, título I “Del ejercicio de los derechos”, se autoriza a todo acreedor para solicitar medidas conservatorias, aunque su derecho dependa de condición o término, lo mismo que para que se limiten las facultades del deudor en la administración o disposición de sus bienes, cuando sus actos hicieren peligrar el pa-

go de los créditos. En ese mismo carácter, le es permitido intervenir en forma coadyuvante en los pleitos en que el obligado fuere parte y que se relacionaren con el patrimonio del mismo, o deducir oposición en su caso. Por último, corresponde el desapoderamiento de bienes del deudor, cuando deba entregar cosas que se hallaren en su poder, o si la prestación consistiere en la transferencia de un crédito, ya que el principio general es el del cumplimiento siempre que pueda ser obtenido. Por ello, tales medidas sólo proceden en los casos mencionados, debiendo regir en los demás lo que determina el art. 630 para las obligaciones de hacer.

No obstante el principio de que los bienes del deudor forman la garantía común de los acreedores, es indiscutible que la venta judicial de aquéllos sólo procede en cuanto sea necesario para satisfacer el crédito. Corresponde igualmente, señalar aquellos objetos que no pueden ser ejecutados: así lo hace el Anteproyecto, y de acuerdo con él, la Comisión.

Se ha considerado prudente comprender entre los bienes exentos de embargo, a los derechos patrimoniales resultantes de las relaciones de familia, así como los de usufructo, uso y habitación y también las servidumbres prediales separadas del inmueble a que corresponden. De igual modo la porción hereditaria, la de un socio o de un partícipe en una comunidad de bienes y el derecho del condómino, antes de haberse realizado la división definitiva; no menos que los litigiosos mientras no hubiere fallo de última instancia, y los créditos contra terceros, salvo los pignorados y los títulos al portador, criterio que tiende a impedir la iniquidad de una venta que por referirse a valores eventuales o indeterminados, sólo puede realizarse por precios irrisorios y no atrae generalmente, más que a los especuladores o a los usureros. Además, en los supuestos de comunidad o de indivisión, los interesados restantes deberían liquidar y partir con extraños y absolutamente desvinculados, y con los cuales tal vez no habrían querido tener negocios de tal naturaleza. Con razón ha dicho Bibiloni que enajenar en estas circunstancias, irrogaría daño evidente al obligado, sin satisfacer un derecho respetable del acreedor.

También comprendemos en la excepción el bien de familia, los útiles de trabajo y los muebles indispensables.

Cuando la traba se cumpliera sobre rentas o frutos, se autoriza al juez — si no hubiera reglas especiales — a fin de que excluya la parte indispensable para las necesidades del deudor y de su familia.

CAPITULO III

Del ejercicio de las acciones del deudor

Comienza este capítulo con el precepto que contiene el art. 1196 acerca de los contratos, que debe extenderse a todas las obligaciones. Por tratarse de una medida simplemente conservatoria, se declara que pueden también usar de ella los acreedores condicionales, tal como lo determina el Anteproyecto.

Ante las numerosas discusiones y dificultades suscitadas por la reserva que figura en la parte final de aquella regla, se ha preferido enumerar los derechos y acciones que escapan a la misma. Quedan excluidos los de administración y disposición de los bienes; las facultades inherentes a la capacidad jurídica y al estado civil; lo que no esté afectado al pago de los créditos, como el derecho a los alimentos, los sueldos, salarios y pensiones en la parte exceptuada por leyes especiales o en la que fije el juez a falta de aquéllas. Los acreedores podrán ejercer estas facultades con cargo de entregar al obligado la porción inembargable. El mismo principio se aplica a las facultades que mientras viva el titular, sólo pueden ser usadas por él. Sin embargo, podrá admitirse la acción subrogatoria en esta última hipótesis, siempre que el deudor hubiere ejercido dichos derechos o los hubiere transmitido a sus herederos.

Los acreedores sólo podrán reemplazar al deudor en caso de inacción de este último, y siempre deberán citarlo para que intervenga en el juicio, tanto en virtud del interés directo que le compete, como para que la cosa juzgada produzca efecto en su contra.

CAPITULO IV

De la revocación de los actos del deudor

La acción pauliana debe conferirse a todo acreedor, aunque sea privilegiado y aunque su crédito dependa de condición o término. Se justifica que los primeros puedan ejercerla, porque no siendo la preferencia una causa de persecución, no habrá otro modo de evitar que fueren colocados en inferioridad respecto de los quirografarios, y que el derecho que les asiste pueda ser burlado por el fraude del deudor. En cuanto a los segundos, baste decir que si les fuera negada esta protección, se les privaría de la única medida conservatoria de sus derechos. Adoptamos, pues, íntegramente el sistema del Anteproyecto.

Se reproducen los requisitos exigidos por el art. 962 del Código, pero se atribuye un carácter general a la excepción del art. 963, que se agrega al inc. 3º.

Los demás preceptos de nuestra ley no han sufrido modificaciones de doctrina, aunque sí de forma, sobre todo el art. 964, por cuanto no expresa con exactitud la regla que ha entendido enunciar.

TITULO II

De los daños y perjuicios

CAPITULO I

De la indemnización legal

En este capítulo, la Comisión ha unificado las reglas sobre el resarcimiento de los daños y perjuicios, procedan ellos

de la mora o de no haberse cumplido los contratos, o bien de los actos ilícitos. La pluralidad de los preceptos contenidos en el Código ha sido fuente de múltiples vacilaciones y dificultades a las cuales conviene poner término, ya que en rigor, el principio general es siempre el mismo, y así lo disponen las legislaciones modernas.

La indemnización debe consistir en una suma de dinero, a menos que la ley lo disponga de otra manera.

Se han agregado las normas referentes a los daños y perjuicios en las obligaciones a pagarse en moneda nacional o extranjera. En lugar del art. 622 del Código se determina que si no hubiere réditos convenidos, se aplicarán los compensatorios del contrato, y a falta de ellos, los corrientes en el lugar del cumplimiento, según la tasa del Banco de la Nación para sus préstamos ordinarios. Los intereses se deberán en todo caso, sin necesidad de justificar el daño, pero no podrá el acreedor exigir otra indemnización.

CAPITULO II

De la cláusula penal

Forman este capítulo los artículos respectivos del Código, que reproducimos con algunas variantes, a fin de simplificarlos y de que ofrezcan mayor claridad.

Sin embargo, se ha modificado el art. 654 y suprimido el 655, para mantener la armonía con los principios relativos a la mora y así se ha dispuesto que sólo incurre en la pena el deudor que hubiere sido constituido en tal situación según las reglas del capítulo respectivo, salvo que se tratase de obligaciones a término, caso en que podrá exigirse el pago de la multa desde su vencimiento, porque esa fué sin duda, la intención de las partes.

También se reglamentan los supuestos en que un tercero se hubiere obligado a pagar la pena.

Por último, se concilia el art. 661 con el 698, de acuerdo con una acertada observación del Dr. Bibiloni.

SECCION SEGUNDA

DE LAS DIVERSAS CLASES DE OBLIGACIONES

TITULO I

De las obligaciones con relación a su objeto

CAPITULO I

De las obligaciones de dar cosas ciertas

La reorganización de la materia que comprende el presente título es doblemente indispensable, tanto por la necesidad de coordinar y simplificar los preceptos legales, como por las reformas que se adoptan para la transmisión de los derechos reales y para la publicidad de los mismos.

Nos hemos ajustado a esta doctrina, que también inspira al Anteproyecto, reduciendo considerablemente el número de los preceptos. Así, después de reunir el art. 583 del Código al 575, y de aclarar este último para establecer con mayor exactitud que sólo deben reputarse accesorios, aquéllos que revestían tal carácter al constituirse la deuda, se dispone que es nula toda obligación de entregar inmuebles que no estén individualmente determinados. Tal requisito es necesario en efecto, dentro del sistema del registro, como es consecuencia de este último la regla según la cual, mientras no se efectúe la inscripción impuesta por la ley, el deudor no quedará liberado — trátase de derechos reales o personales — aun cuando mediare entrega de la cosa.

También fluye del mismo régimen el precepto según el cual entre varios acreedores con derecho a un inmueble, será preferido el que hubiere inscripto primeramente su título.

Por más que uno de aquéllos conociere la existencia de otras obligaciones, anteriores o no, tal circunstancia será indiferente para los efectos legales, con lo cual se evitan los inconvenientes que pueden resultar del art. 594 del Código Civil, absolutamente incompatibles, por otra parte, con la economía del Proyecto. Igual criterio se adopta en cuanto a las cosas muebles, reconociéndose preferencia — si no hubiere tradición — al dueño, a quien deberán ser restituídas, y en su defecto, al acreedor de título más antiguo.

CAPITULO II

De las obligaciones de dar cosas inciertas

No existe razón valedera para separar las reglas que gobiernan las obligaciones relativas a las cosas inciertas no fungibles y las de dar cantidades de cosas. Por ello se han refundido los capítulos II y III del Código en pocos artículos, que concretan los principios legales.

Si bien no es indiferente que se indique o no en la obligación la especie y cantidad de las cosas, se ha omitido consignar en el Proyecto esta exigencia, en vista — como bien lo dice Bibiloni — de la gran variedad que ofrecen las formas de negociar en nuestros días. Al legislar sobre los contratos, se dispone lo pertinente para proveer a tal situación y evitar la ineficacia de dichos actos jurídicos, cuando no se hubiera determinado alguno de aquéllos factores.

CAPITULO III

De las obligaciones de dar sumas de dinero

Ya se ha dicho que las normas relativas a los daños y perjuicios en esta clase de obligaciones, han sido trasladadas al título que trata de esa materia en general.

Los otros artículos del Código aparecen reproducidos, algunos con reformas de doctrina, los más de redacción, lo

que ha permitido simplificarlos y al mismo tiempo, coordinarlos con los preceptos dispersos en otros títulos del Proyecto.

Ha sido eliminado el 618, que no armoniza con lo que se dispone en el título del pago respecto del lugar en que éste debe realizarse. En lugar del art. 619, se ha establecido que en los casos en que la prestación fuere una suma de especie o calidad determinada en moneda nacional, el deudor podrá entregarla de esa especie o de cualquier otra con curso legal en el territorio de la Nación, al cambio que corresponda según las leyes monetarias vigentes.

CAPITULO IV

De las obligaciones de hacer y de no hacer

No tienen cabida en nuestro Proyecto, por ser meras aplicaciones de reglas más generales, ciertos artículos como los 628, 630, 631. Los restantes, sólo han sufrido reformas de redacción.

Incluimos — a propuesta de Bibiloni — un nuevo precepto para los casos en que la obligación consistiere en tolerar actos determinados del acreedor o el uso de cosas del deudor por parte de aquél. Podrá entonces, exigirse la ejecución forzada, aunque fuere menester el empleo de la violencia, debiendo procederse de igual modo cuando la prestación tuviera por objeto no comerciar en cierta zona, o durante cierto tiempo o en cuanto a determinadas cosas, u otras abstenciones análogas. Con ello no se modifica en realidad, el sistema del Código, pero se consagra de un modo inequívoco lo que resulta de los arts. 633 y 634 y del silencio de aquél respecto de estas situaciones.

CAPITULO V

De las obligaciones alternativas

Los arts. 635 a 637 han sido reunidos en uno sólo, que con mayor brevedad y exactitud, fija los caracteres de esta clase de obligaciones.

La opción se formaliza, haciéndola saber a la otra parte. Una vez efectuada, será irrevocable, juzgándose que la prestación elegida fué única desde un principio. Esta regla que agregamos, fué tomada por Bibiloni de Ihering y del código alemán.

A fin de impedir que el deudor por su inacción pueda irrogar perjuicio al acreedor, se autoriza especialmente a éste para reclamar ante la justicia cualquiera de las prestaciones, si bien podrá el primero liberarse mediante la entrega de la otra, con tal que el segundo no hubiera recibido todo o parte de la exigida.

Por último, se requiere la unanimidad cuando la elección dependa de varios deudores o acreedores, y se establece asimismo, el carácter alternativo de la obligación a que hace referencia el art. 893 del Código Civil.

CAPITULO VI

De las obligaciones facultativas

Introducimos variantes de forma en los arts. 647 y 648, que se amplían para comprender otros casos de responsabilidad.

Los arts. 645, 649 y 650 han sido eliminados, por cuanto se limitan a repetir lo dispuesto para las obligaciones principales y accesorias.

TITULO II

De la pluralidad de acreedores o deudores

CAPITULO I

De las obligaciones divisibles

Hemos unificado las disposiciones que el Código Civil contiene en los arts. 667 y siguientes y del 690 en adelante.

para reglamentar luego en concreto y sin repeticiones, los dos aspectos de la indivisibilidad y de la solidaridad.

Así, comenzamos por reproducir en este capítulo, los arts. 667 a 671; y suprimimos por inútiles los 672 y 673; se reemplazan los 674, 675, 677, 678, 690 a 697, por uno sólo que establece el principio, o sea la división en deudas independientes, aclarando el art. 676 para evitar las interpretaciones erróneas.

CAPITULO II

De las obligaciones indivisibles

En este capítulo hemos eliminado algunas disposiciones repetidas.

Se conserva la regla del art. 686, pues ofrece la ventaja de facilitar la gestión de los intereses de todos los acreedores, y se hace extensiva la del art. 687 a la dación en pago, novación y transferencia de deuda.

El art. 689 pasa al capítulo de las obligaciones solidarias, cuyas reglas en principio son aplicables a las indivisibles.

CAPITULO III

De las obligaciones solidarias

Casi todas las normas que establece el Código en esta materia han sido conservadas, si bien con modificaciones tendientes a precisar mejor los conceptos.

De acuerdo con lo proyectado por Bibiloni, se ha resuelto la antinomia existente entre los arts. 707 y 866, mediante la supresión de este último, que encierra una doctrina errónea.

También se ha completado el art. 708 para armonizarlo con los 707 y 717. Cuando un acreedor solidario recibiere un cuerpo cierto, lo poseerá por cuenta común de los demás. Quedan refundidos en uno los arts. 689, 716 y 717.

La solución de nuestro Código, en virtud de la cual responden todos los deudores, por la culpa o por la mora de uno de ellos, es substituída por otra más justa, como lo demuestra la nota de Bibiloni que circunscribe al autor el deber de resarcir el perjuicio en semejantes casos.

Por fin, ha sido profundamente modificada la doctrina legal, en cuanto a los efectos de la sentencia recaída en juicio seguido por el acreedor contra uno de los deudores solidarios, o por uno de los acreedores solidarios contra el deudor. De acuerdo con el Anteproyecto, extensamente fundado, se ha resuelto que en el primer caso, el fallo no producirá efecto contra los demandados, quienes sin embargo, podrán invocarlo cuando no se fundara en una causa personal para el actor.

SECCION TERCERA

DE LA TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I

De la cesión de créditos

De acuerdo con el plan adoptado, hemos incluído solamente aquellos preceptos que en la transferencia de los créditos rigen la forma y notificación. Los demás se trasladan al título de la cesión de derechos. Así, reproducimos con ciertos retoques, casi todos los artículos desde el 1458 al 1475, con el agregado de algunas reglas referentes a la manera de efectuar la notificación.

TITULO II

De la transmisión de deudas

Comprende este título una serie de normas tomadas de los códigos suizo y alemán, que reglamentan los casos en

que el deudor es substituído por otro, que se hace cargo de la obligación, quedando liberado el primero o comprometidos ambos.

Sea por las dificultades que ofrece el asunto, sea porque los principios generales pertinentes no han tenido hasta hoy aplicación en el país, ha sido necesario proceder con gran cautela al redactarlos, con el fin de que sean realmente útiles y no se conviertan en fuente de dificultades y controversias.

En la disposición final, se prevé especialmente el caso de transferencia por contrato de un patrimonio o una empresa. No obstante cualquier cláusula distinta, el adquirente responderá por todas las deudas, a partir de la transmisión, sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe al antiguo obligado.

SECCION CUARTA

DE LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I

Del pago

CAPITULO I

Disposiciones generales

Este epígrafe abraza los artículos que en el Código actual preceden al capítulo I, salvo los 724 y 739, suprimidos como innecesarios. Los demás aparecen condensados en pocos preceptos.

Se permite al acreedor que rechace el pago ofrecido por un extraño, cuando el obligado se opusiere a ello.

También se dispone que los derechos del tercero pagador se determinen por las relaciones jurídicas existentes entre él y el obligado, y si no las hubiere, podrá exigir de

éste último el importe de lo que realmente desembolsare, Aún mediando oposición del segundo, deberá siempre éste restituir hasta concurrencia de la utilidad recibida.

Entre las personas a quienes debe efectuarse el pago, incluimos al que presenta la factura o el título de crédito o el recibo del acreedor, salvo que el deudor tuviere fundada sospecha de que no le pertenece el documento o que no está autorizado para cobrar.

Los inc. 2º y 5º del art. 731 han sido eliminados por estar comprendidos en el 1º.

CAPITULO II

Del objeto del pago

A excepción del 745 que suprimimos, sólo ha sido alterada la forma de los artículos.

CAPITULO III

Del lugar y tiempo del pago

Se conserva el principio contenido en el art. 747, que viene así a comprender también las prestaciones en dinero, por haber sido eliminado el 618.

La misma regla que el 748 fija para el cambio del domicilio en el deudor, se aplica respecto del acreedor.

El 751 ha sido modificado para adaptarlo a la doctrina que hoy prevalece. A falta de plazo establecido, podrá exigirse o verificarse el pago inmediato de modo que la oportunidad para efectuarlo no queda librada al arbitrio judicial.

Se reforma el art. 753 para establecer que el pago podrá ser reclamado antes del vencimiento, cuando el deudor cayere en insolvencia, o hubieren disminuído las garantías estipuladas, o no se dieran las prometidas.

Teniendo en cuenta los abusos que podría cometer el acreedor si conservare el título de su crédito, a pesar de

haber cobrado, agregamos un artículo que figura en el Anteproyecto, y que autoriza el pago por consignación.

También se ha creído conveniente determinar los supuestos de mora por parte del acreedor, a fin de poner un límite a la responsabilidad del obligado, quien después de constituida aquélla, sólo deberá restituir los productos de la cosa, realmente percibidos, y tendrá derecho a que se le indemnice por los gastos de conservación y guarda, así como los del requerimiento efectuado.

CAPÍTULO IV

Del pago por consignación

Hemos determinado, como lo hacen los arts. 757 y 758 actuales, cuándo procede la consignación y los requisitos para que revista fuerza de pago. Debemos advertir que pasan al capítulo III, los arts 764 a 766 sobre la mora del acreedor.

Tomamos en cuenta las múltiples dificultades que en el presente ofrece entre nosotros esta forma de pago, por las peculiaridades del territorio, la población y los medios de comunicarse. Con estos antecedentes se ha procurado reglamentar la materia de manera que los juicios relativos a la misma puedan ser resueltos fácil y rápidamente. Por ello queda suprimida la imposición de las costas contenida en el 760, y prescribimos que una vez efectuado el depósito, deberá notificarse al acreedor para que proceda a recibirlo dentro del plazo que le fuere asignado: sólo en el supuesto de que vencido éste, no se presentare a retirarlo el interesado, proseguirá el trámite en forma de juicio sumario.

El art. 759 ha sido también modificado, para corregir un error de doctrina, estableciéndose que la consignación no impugnada, o admitida por sentencia, producirá efecto desde el día en que se verificó.

CAPITULO V

De la imputación del pago

Con escasas alteraciones, hemos reproducido los artículos del Código.

CAPITULO VI

Del pago por subrogación

De acuerdo con el Anteproyecto, proponemos aquí, algunas reformas de importancia.

La segunda parte del art. 769 ha sido eliminada, ya que se trata de un pago y no de una cesión. Tanto quien lo hace, como quien lo recibe, entienden extinguir entre ellos el vínculo obligatorio, con la reserva de los derechos del tercero respecto del deudor u otros responsables de la obligación, a fin de hacerlos valer en la medida necesaria para cubrir el desembolso efectuado (art. 771, inc. 1). Si en la parte eliminada ha querido expresarse que las reglas de la cesión se aplicarán subsidiariamente y en cuanto fueren compatibles con la figura de que tratamos, es inútil y peligroso mantenerlo en los términos actuales, según lo demuestra Bibiloni.

También ha sido reformado el art. 770, pues no exige las precauciones que juiciosamente prescriben los 3927 y 3932, simples casos particulares de aquel principio. Conforme al 3927, se dispone que no es necesario declarar expresamente la subrogación en los derechos del acreedor.

El art. 771 recibe diversos agregados, para que no pueda interpretárselo erróneamente. Ellos tienden a establecer que no sólo se subroga contra los deudores directos y subsidiarios; que el efecto de la subrogación legal podrá ser alterado por acuerdo del acreedor o del deudor con el tercero:

a limitar el alcance de la subrogación a favor del adquirente de un inmueble hipotecado por el deudor principal, con respecto al fiador, que no podrá ser perseguido por aquél; a determinar que el garante que paga la deuda asegurada con hipoteca constituida por el deudor, podrá subrogarlo contra el tercero poseedor; a delimitar las relaciones de este último cuando existieren varios inmuebles hipotecados, por lo que se refiere a los otros poseedores; y por fin a prever distintas hipótesis de subrogación, con el objeto de evitar dificultades.

Por último, se consigna expresamente la regla fundamental de la subrogación, a saber, que los derechos transmitidos en esta forma no pueden ejercerse en daño del acreedor, por lo que se refiere al crédito que la motivó.

CAPITULO VII

De la dación en pago

Modificamos preceptos erróneos, como el del art. 779, que excluye de la dación en pago las entregas de dinero, y se refiere a "cosas" en un sentido distinto del que en realidad corresponde. De igual modo el 780, que contempla tan sólo los créditos a favor del deudor. Nuestro Proyecto contiene también reglas nuevas, entre ellas la que impone al acreedor la carga de probar que lo recibido por él no reviste valor de pago, y otra que determina el carácter real de esta figura.

TITULO II

De la novación

Una vez organizada la transmisión de deudas, la importancia de la novación debió necesariamente limitarse y es así como a sólo dos artículos que corresponden a los 801, 803 y 812 del Código, se ha reducido lo referente a esta materia. Ellos bastan para establecer el concepto de esta figura y sus consecuencias legales.

TÍTULO III

De la compensación

Los principios que contiene el Código han sido modificados, teniendo especialmente en cuenta que la compensación no es tan sólo una manera de reemplazar el pago, que permite satisfacer el crédito evitando gastos y traslados inútiles de valores, sino que es también una garantía pues el acreedor cuenta con que podrá cubrir su crédito con lo que debe.

No cabe admitir que la compensación se produzca *ipso jure*, como en varios casos se ha resuelto interpretando las disposiciones actuales. Es menester que sea opuesta por el deudor, y entonces, sus efectos se producirán desde la fecha en que ambas deudas coexistieron como susceptibles de ser compensadas, ya que a partir de ese momento, tenía cada acreedor en su poder lo que su crédito debía proporcionarle.

De los requisitos enumerados en los arts. 818, 819 y 820, sólo se indican en el Proyecto los realmente necesarios. Y así: no se exige que las causas de las obligaciones sean las mismas; no se dice que las deudas deben ser civilmente subsistentes, de plazo vencido, y en caso de ser condicionales, que esté cumplida la condición, porque ésto resulta del requisito de la exigibilidad.

Tampoco se impone que las deudas sean líquidas. No solamente es difícil explicar esta exigencia, como ya lo decía Demolombe, sino que origina en la práctica las más graves injusticias, favoreciendo la mala fe ya que incurre en ella quien pretende cobrar lo que debe restituir. Por otra parte, la doctrina de la liquidez es contradictoria, desde que no exige dicho extremo para las demandas reconventionales. Los códigos suizo y alemán lo han eliminado agregando — como lo hace también el Proyecto — que la compensación procederá aunque las deudas fueren impugnadas.

El art. 822 del Código sólo debe referirse a casos excepcionales, por lo cual ha sido restringido su alcance esta-

bleciéndose que —reunidos los extremos legales— ambos créditos quedarán extinguidos, sin que obste a ello la prescripción, ni el embargo sobrevinientes, como tampoco la transferencia, a menos que hubiere sido notificado al deudor antes de haber adquirido éste el crédito que pretende compensar.

Las disposiciones de los arts. 824 y 825 han sido ampliadas para comprender otros casos semejantes, prescribiéndose que no podrán compensarse los créditos inembargables, ni las deudas nacidas de los delitos.

El art. 828 ha sido fundamentalmente reformado, porque la solución que contiene peca por injusta y excesiva. Tan es así que en el derecho francés, del cual fué tomado el precepto, se han admitido diversas atenuaciones al margen de esa regla, para evitar las consecuencias que algún autor ha calificado de inicuas en ciertas hipótesis.

De acuerdo con lo que proyectara Bibiloni, inspirado en la legislación suiza, se ha resuelto que mediando concurso del obligado, los acreedores podrán compensar sus créditos con los que aquél tuviera contra ellos, aunque no fueren exigibles al dictarse el auto declarativo. Desde luego, ello no será posible cuando los créditos y deudas fueren ulteriores al auto declarativo, salvo que en tal caso el deudor llegare a obtener el crédito por subrogación legal, o como garantía, o tercer poseedor de bienes hipotecados, en virtud de actos preexistentes celebrados de buena fe.

La regla del art. 830 ha sido reemplazada por la opuesta, que se considera más exacta, ya que el deudor debe pagar con lo que le pertenece y no con lo ajeno, de qué no puede disponer, ni sería conveniente que lo pudiera, porque importaría restringir la capacidad de los obligados. Con razón dice Dernburg —según lo recuerda Bibiloni— que admitir esta forma de compensar, es como hacer pagos con el bolsillo de los otros.

TÍTULO IV

De la remisión de la deuda

Las normas correlativas del Código han sido modificadas: 1º para señalar expresamente el carácter gratuito de

la remisión; 2º para establecer que si bien ella no está sujeta a formalidad alguna, cuando el crédito o los derechos accesorios constaren en escritura pública, deberá ser otorgada en la misma forma para ser válida, inscribiéndose en su caso en el Registro; 3º para suprimir la última parte del art. 877 que es inexacta, pues no basta con la simple alegación del deudor, debiendo exigirse la prueba de que ha pagado. Pensamos que es suficiente con establecer que la entrega del instrumento del crédito, realizada voluntariamente por el acreedor al obligado, prueba la liberación, presumiéndose que reviste dichos requisitos cuando el documento se encuentra en poder del deudor.

Los arts. 879 a 885 y 888 a 895, han sido suprimidos por innecesarios o por no ser siempre ajustados a derecho. Algunas de estas reglas como la del 889, sin embargo, se reproducen con modificaciones al legislar sobre el efecto de los contratos.

SECCION QUINTA

DEL CONCURSO Y DE LOS PRIVILEGIOS

TITULO I

Del concurso de acreedores

Convencidos de la manifiesta utilidad de unificar la legislación, tanto para los concursos civiles y comerciales, como respecto de los privilegios, hubiéramos proyectado la ley correspondiente, si a nuestro juicio la Comisión hubiera tenido facultades para ello. Por tal motivo nos limitamos a establecer en este Proyecto las reglas fundamentales sobre los respectivos derechos del deudor y de los acreedores, procurando en lo posible armonizarlas con las que figuran dentro de la ley de quiebras.

Se dispone en consecuencia, que procederá declarar el concurso: a) cuando el deudor lo pidiere o cedere judicialmente sus bienes a los acreedores; b) siempre que lo solici-

tare un acreedor por suma que, además de líquida fuere exigible en el acto o al vencimiento de un plazo, con título que llevare aparejada ejecución o la determinare al vencer el crédito. El acreedor deberá justificar previamente, alguna de las circunstancias que se enumeran en un artículo especial, tomado de las leyes inglesas y norteamericana, como demostrativas de la cesación de pagos.

Con arreglo a la ley inglesa, se ha considerado justo en tales casos, que los favorecidos con privilegio especial, puedan intervenir como quirografarios por el excelente no garantizado, siempre que hicieren estimar los bienes afectados y los créditos preferentes a los suyos.

El deudor podrá pedir al juez, hasta tres días después de haber suspendido los pagos, la reunión de sus acreedores, debiendo entonces procederse conforme a lo establecido en la ley de quiebras.

Se determinan con todo cuidado los efectos de la declaración del concurso, en cuanto al desapoderamiento del deudor, a la exigibilidad de los créditos a plazo, modo de proceder con respecto a los condicionales, a la suspensión de los juicios ejecutivos, a la competencia, a los intereses y cláusula penal y a las funciones del síndico, dejando a salvo el derecho del concursado para adoptar las medidas conservatorias y promover las acciones extrañas al concurso.

Por lo que hace a la nulidad de los actos realizados por el deudor, el Proyecto se aparta del sistema establecido por el art. 77 de la antigua ley de quiebras y por el 110 de la actual. En vez de referirse a los negocios efectuados después de la presentación o de haber suspendido los pagos, toma como punto de partida la fecha del auto declarativo. De esta suerte, no se perjudica el interés legítimo de los terceros que hubieran contratado de buena fe.

Dentro de la misma categoría hemos incluido ciertos actos formalizados con anterioridad al concurso, pero después de haberlo pedido el deudor o de incurrir éste en insolvencia. Así, las enajenaciones a título gratuito o los actos asimilados a ellas, el pago de obligaciones no vencidas, o mediante prestaciones diversas de las estipuladas, lo mismo que los derechos reales constituidos en garantía de créditos quirografarios. Además, queda facultado el juez para anular ciertas operaciones cumplidas durante ese período.

Para dar estabilidad a los actos susceptibles de estas impugnaciones, se ha fijado un término breve —el de un año— dentro del cual deberá ser deducida la nulidad. La situación de los terceros ha sido contemplada de una manera especial en nuestro Proyecto, y conforme con el principio del enriquecimiento sin causa, se les concede en los casos de nulidad, derecho para obtener que la masa le restituya lo entregado o su equivalente; como también se deja a salvo a los sucesores singulares a título oneroso y de buena fe.

Reproduciendo los artículos del Anteproyecto, se han previsto diversas cuestiones que suelen presentarse en los concursos, como ser las herencias o legados a favor del deudor, deferidos con posterioridad al auto declarativo; la liquidación de una sociedad o condominio; el cumplimiento y resolución de los contratos bilaterales; la suerte de los arrendamientos y otras operaciones de tracto sucesivo.

Por fin, para unificar los procedimientos en los concursos civiles y comerciales, se prescribe que las reglas de la ley de quiebras serán subsidiariamente aplicables a los primeros, mientras fueren compatibles con las disposiciones del Proyecto, en cuanto a la verificación de créditos, administración y liquidación de los bienes, concordato, terminación del concurso y rehabilitación y también en lo referente a los trámites judiciales.

TITULO II

Del derecho de retención

Las reglas del Código han sido modificadas principalmente con un doble objeto: precisar por una parte, el concepto de este derecho, su alcance y consecuencias, e impedir por la otra, que pueda ser utilizado como un medio de explotación.

Pensamos con Bibiloni, que es meramente doctrinario el problema sobre la naturaleza real o personal del derecho de retención, y que no debe ser objeto de un precepto legislativo.

Luego de establecer que este derecho corresponde a quien obligado a restituir una cosa, tuviere un crédito exigible por gastos efectuados en ella o con motivo del daño causado por la misma, se determina que en su virtud, el detentador sólo deberá restituir contra la prestación que reclama, o a cambio de una garantía real suficiente.

De acuerdo con el Anteproyecto, se deja a salvo en el art. 3942, la situación de los terceros titulares de derechos reales sobre inmuebles, cuando aquéllos estuvieren inscritos antes de nacer el crédito del que pretendió ejercer la retención, y de igual modo modo, si este último derecho hubiera sido prenotado en tiempo útil. El art. 3946 es substituído por la regla opuesta, según la doctrina sustentada por Moulon.

TÍTULO III

De las causas de preferencia en el pago de los créditos

Las reformas proyectadas en esta materia revisten fundamental importancia. Ellas responden especialmente al sistema de publicidad adoptado con respecto a los derechos reales, que es incompatible con la admisión de preferencias derivadas de causas ocultas.

Como imponemos el registro para los privilegios sobre inmuebles, y los sometemos al orden de prelación, que resulta de aquél, por ello aparecen tratados en el libro referente a los derechos sobre las cosas, junto con la hipoteca. Aquí sólo nos remitimos al título respectivo.

Los arts. 3875 a 3877 quedan refundidos en uno solo, que hemos procurado ofrezca mayor claridad y exactitud, dentro de la concepción.

Los privilegios generales sobre la totalidad de los bienes, son inconciliables con una buena organización del crédito, según lo expresa Bibiloni al fundar esta parte del Anteproyecto. Con ello y el traslado de los relativos a inmuebles, quedan tan sólo aquellas preferencias sobre ciertos y determinados muebles, que enumeramos en el orden propuesto por aquél.

Los gastos de justicia para realizar un bien y distribuir su precio, ocupan desde luego, el primer lugar. Figuran inmediatamente los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales o municipales, sobre los objetos que se hallaren en las aduanas o establecimientos del Fisco, mientras no hubieran salido del poder de éste. Si bien es verdad que tal regla puede ser modificada por leyes especiales, ha parecido conveniente establecerla, siguiendo al Código y al Anteproyecto, porque es indispensable reglar el orden de prelación con los demás privilegios emanados de relaciones jurídicas distintas, y esta materia corresponde exclusivamente a la legislación civil. Todo el régimen fiscal debe quedar subordinado a esa coordinación sistemática, consagrando así, una doctrina que no es nueva entre nosotros y que surge del Código de Vélez. En cuanto a la enumeración propuesta, ha sido tomada de la ley alemana y tiende a prevenir los notorios inconvenientes derivados de sistemas como el que nos rige, puestos de relieve en la respectiva nota del Anteproyecto.

El tercer rango corresponde a los créditos garantizados con prenda, en atención a la gran importancia que ésta reviste para la industria, el comercio y la agricultura y por tratarse de un medio de crédito que conviene estimular, entre otros motivos porque nada tiene de oculto ni de imprevisible y ofrece al acreedor la mayor seguridad, puesto que puede reivindicar hasta tres años después de haber sido desposeído.

Ocupan el cuarto lugar los créditos por gastos de conservación, fabricación o mejora de cosas muebles, siempre que se encuentren en poder del acreedor, requisito que se ha establecido contra lo dispuesto en el art. 3392, pero de acuerdo con la doctrina del 3891.

En quinto y sexto término respectivamente, se enumeran los créditos por hospedaje —entrando en igual orden los de asistencia médica y sepultura del que se enfermó o falleció en la hostería— y los correspondientes a transportes terrestres o fluviales a que se refiere el art. 3387, si bien queda reducido a tres días el plazo de quince que éste señala.

A los créditos privilegiados por el precio de la semilla, gastos de cultivo y recolección o prima del seguro, sobre

los frutos de la cosecha del año que conservare el deudor en su poder, pertenece el séptimo lugar, aclarándose el texto de los artículos 3888, 3911 y 3912 y teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 3863.

Las reglas del Código referentes al privilegio del locador —que ocupa el octavo lugar— han sido objeto de considerables modificaciones. Se han limitado por de pronto, los términos excesivos del art. 3883, fijándolos en uno y dos años respectivamente, siempre con el agregado del que estuviere en curso, hasta tanto se efectúe el desalojo. De esta manera no se estimula la inacción del locador y se ampara a los demás acreedores, que no deben sufrir perjuicios por la incuria de aquél. El privilegio garantiza las demás obligaciones a cargo del inquilino; pero no los alquileres de las propiedades urbanas después del desahucio; ni tampoco el resarcimiento por la rescisión anticipada. Ello se explica, porque restituído un inmueble de tal calidad, hállase el locador en situación de alquilarlo inmediatamente; pero si es rural, esto dependerá de la época en que se realice el desalojo.

El derecho que el art. 3885 reconoce, ha sido limitado, con el fin de proteger el interés de los terceros de buena fe, ya que no hay razón para restringir los principios generales, como surge de la última frase del mencionado texto.

Se completa la enumeración de que tratamos, con el crédito del dueño de la cosa vendida por el depositario, sobre el precio que adeudare el comprador (Código Civil, art. 3897) y con el de los terceros damnificados en caso de seguro, respecto del importe del resarcimiento por responsabilidad civil, hasta concurrencia del mismo.

Hemos suprimido con Bibiloni, el privilegio acordado al vendedor de cosas muebles entregadas al comprador. El primero se ha desprendido del bien que representaba su garantía, colocándose en la misma situación que todos los acreedores comunes, al conceder crédito al deudor. Se armoniza además, el Código Civil con el de Comercio (art. 466).

Hemos incluido una regla tomada del proyecto de la Comisión francesa extraparlamentaria de catastro. Ella se refiere al seguro y a toda indemnización tendiente a resarcir el daño causado en cosas muebles sobre las cuales exis-

tieran créditos privilegiados. En este caso dicho importe reemplazará a los objetos.

Siguen luego, diversos artículos que reconocen preferencia a las deudas y gastos de la masa, indicando expresamente cuáles se consideran incluidos en estas categorías, así como también el orden que deberá seguirse para el pago de los créditos contra el concursado, que no figuran en la enumeración anterior, como los de sepultura y salarios (primer rango); los de la última enfermedad y alimentos (segundo); los demás pertenecientes a la Nación, provincias y municipalidades por el año en curso y el anterior (tercero), y todos los casos restantes (cuarto).

Se ha procurado armonizar en lo posible, el interés del acreedor con privilegio especial sobre diversos muebles y el de aquellos que tuvieron sobre los mismos, preferencias de grado inferior, mediante una fórmula que asegura el derecho del primero sin causar daño indebido a los otros.

Dejamos subsistentes, los privilegios marítimos y los demás reconocidos en el Código de Comercio y leyes especiales, en cuanto no se opusieren a las reglas del Código.

•

SECCION SEXTA

DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I

De los contratos en general

CAPITULO I

Disposiciones comunes

Los arts. 1137 a 1139 han sido eliminados por tratarse de preceptos exclusivamente didácticos.

Se ha considerado en cambio, de utilidad, encabezar este capítulo con una disposición tomada del art. 305 del C6-

digo alemán, para que no pueda atribuirse carácter general a lo que importa una excepción. El contrato es el medio regular de constituir o modificar obligaciones por actos entre vivos, en tanto que la voluntad unilateral sólo produce efecto en los casos determinados por la ley.

El art. 1143—puramente preceptivo—ha sido substituído por otro tendiente a señalar las reglas que se aplican a los contratos innominados.

CAPITULO II

Del consentimiento

Los artículos del Código han sufrido las modificaciones necesarias para armonizarlos entre ellos y evitar errores en cuanto a su alcance. Hemos concordado el 1149 con los 1154 y 1156, al expresar que la oferta quedará sin efecto si antes de la aceptación, alguna de las partes falleciere o perdiere su capacidad para contratar.

En vez del art. 1150, reproducido en el Anteproyecto, hemos aceptado la fórmula del 1080 del código brasileño, que prescribe el carácter obligatorio de la propuesta para quien la hubiere formulado. Se agregan las reglas contenidas en los arts. 5, 7 y 9 del código suizo, en cuanto a los contratos entre ausentes, al envío de tarifas y listas de precios y al retiro de la oferta.

El art. 1151 ha sido aclarado, en el sentido de que cauea la propuesta en las hipótesis allí previstas. El 1154 se reproduce, añadiendo una frase para determinar el momento en que se reputa concluído el contrato, cuando el autor de la oferta no deba esperar, por la naturaleza del asunto u otra circunstancia, una aceptación expresa, habiéndose adoptado para ese fin, la fecha en que se recibió la propuesta.

El art. 1156 fué también modificado para precisar el concepto del interés negativo y fijarle un límite: el del interés positivo o de ejecución. Y así, en el supuesto que prevé dicha regla, el aceptante sólo tendrá derecho a que se le indemnice el perjuicio que no habría sufrido si no le hubiera hecho la oferta, sin que pueda el resarcimiento exceder del

interés que habría tenido el mismo aceptante, en caso de perfeccionarse el contrato.

El art. 1155 —que colocamos después del anterior— ha sido objeto de una importante reforma, que suprime la segunda parte, por inútil y peligrosa. En el primer período del texto —único que subsiste— no se requiere como en el Código, que la retractación llegue a conocimiento del proponente, pues ha parecido más sencillo y práctico, exigir tan sólo que la respuesta se encuentre en poder del ofertante.

Suprimimos los arts. 1157 a 1160 y 1164 a 1166, por ser meras aplicaciones de los principios contenidos en el título sobre la nulidad.

Se han agregado, por último, algunas breves reglas referentes a los contratos de adhesión.

CAPÍTULO III

Del objeto de los contratos

De acuerdo con el Anteproyecto, eliminamos los arts. 1167, 1168 y 1169, los dos primeros por inútiles, y el último porque no concuerda con lo dispuesto en cuanto al objeto de los actos jurídicos, que también debe regir para los contratos.

El art. 1171 autoriza al juez para fijar la cantidad, por sí o por medio de peritos, cuando no la determinare el tercero designado para ello por los contratantes. Pensamos como Bibiloni, que sólo podrá llenar el magistrado esta función cuando se hubieren convenido de antemano las bases para ello, debiendo quedar el contrato sin efecto en otro caso. El art. 1172 ha sido modificado: se refiere a uno de los diversos casos comprendidos en el 953, que prescribe la nulidad de los actos, cuyo objeto fuere física o legalmente imposible, de lo que el texto actual hace derivar el deber de resarcir el daño causado, sin establecer distinción entre la buena y la mala fe del promitente. Ahora bien, teniendo en cuenta que puede mediar responsabilidad, aún en los supuestos de ignorancia justificada, y que por otra parte, quien sufrió perjuicio por creer en la validez del contrato debe ser



Indemnizado, hemos admitido la regla del Anteproyecto, según la cual quien ofreció una prestación, conociendo o debiendo conocer que ella era ilícita o imposible, deberá reparar el perjuicio sufrido por el aceptante. Sin duda, la responsabilidad no podrá exceder del interés que el lesionado tenía en la ejecución, y tampoco será exigible cuando aquél supo o pudo saber el vicio que afectaba al objeto. La solución que contiene el art. 1173, ha sido circumscripta al caso en que la entrega de cosas futuras dependa de circunstancias extrañas a quien se obligó a suministrarlas. Es innegable que si ella derivara exclusivamente de su industria, no sería exacta la regla citada, puesto que la obligación debería considerarse entonces, como pura y simple.

Los arts. 1174 y 1179 han sido combinados para formar uno sólo, en el cual se ajusta la responsabilidad al principio establecido para los casos de cumplimiento imposible.

El 1175 lleva un agregado, que tiende a consignar una regla, cuyos corolarios aparecen en diversas disposiciones del Código. Por ella, se declara nulo el contrato en que una persona se obliga a transmitir o afectar total o parcialmente, los bienes que llegare a obtener en el futuro.

Se traslada al título respectivo el 1177, por cuanto se refiere al supuesto en que el objeto consistiere en prestaciones de terceros. Queda suprimido el 1178, porque el mismo asunto está legislado en el capítulo de la compraventa, con mayor detalle y precisión.

CAPÍTULO IV

De la forma de los contratos

Hemos reproducido el articulado del Código, con algunos cambios y eliminado diversos preceptos innecesarios, como los arts. 1182, 1183 y 1189. En el 1184, elevamos a dos mil pesos la suma a que se refieren varios incisos.

En lo que concierne al 1187, pensamos que no hay razones serias para autorizar la resolución del contrato mediante el pago de los daños y perjuicios, cuando negándose el obligado a firmar la escritura, pudiera ella ser

otorgada por el juez. Unicamente en el supuesto de que hubiera necesidad de emplear violencia contra la persona, podría admitirse aquella solución. Para mantener la igualdad entre las partes, se ha dispuesto que ordenada la escritura por sentencia, el magistrado sólo firmará por el deudor, una vez cumplidas todas las condiciones del contrato. Con igual propósito, hemos colocado en este artículo un párrafo sobre el modo de proceder en la compraventa, caso de aplicación más frecuente.

CAPITULO V

Del efecto de los contratos

Los art. 1197 y 1198, que forman uno sólo en el Proyecto, contienen el agregado propuesto por Bibiloni: los contratos deben ser cumplidos de buena fe. Esta es una regla tradicional, de alto valor ético y jurídico, que —como lo recuerda una de las notas— constituye la base para el arbitrio judicial y permite resolver las dificultades que la astucia, la usura y la falta de probidad, se ingenian en acumular a través de las convenciones, para luego fundar en ellas exigencias desproporcionadas. El criterio excesivamente subjetivo del art. 1198, ha sido atenuado, ya que se tienen en cuenta los usos del lugar para apreciar las consecuencias que deben considerarse virtualmente comprendidas en las convenciones.

Después de reproducir el art. 1201 con las reformas que el Anteproyecto tomó del 320 del código alemán, se generaliza la regla de nuestro 1419, conforme al 83 suizo y al 49 de Bibiloni.

Como se explica en el Anteproyecto, la imposibilidad en el cumplimiento de las prestaciones contractuales, puede responder a motivos preexistentes o ulteriores a la celebración. Acerca de los primeros, las normas legales determinan la nulidad del acto por carecer de objeto. Por lo que hace a los segundos, rigen los arts. 627 y 888 del Código actual. La solución que adoptamos es la del 895, cuyo fundamento expusiera Vélez; pero tomamos en cuenta la hipóte-

sis de imposibilidad parcial, aplicando el principio del 1328, que con acierto ha preferido Bibiloni al art. 323 del código alemán.

Reproducimos el art. 889, modificado con arreglo a la doctrina del 1184 francés. A continuación, se añade un precepto análogo al del 324 alemán.

Según lo prescripto en el art. 216 del Código de Comercio y lo que resulta de numerosas disposiciones del Código Civil, se ha decidido considerar implícito el pacto comisorio en los contratos bilaterales, modificándose en tal sentido el art. 1204. Es la solución que más armoniza con la lealtad comercial y la buena fe. La reforma ha conducido, desde luego, a reglamentar el ejercicio de este derecho y sus consecuencias legales. Hemos aceptado los diversos artículos del Anteproyecto, si bien variando su forma y reduciendo su número.

El contratante que se hallare en retardo, podrá ser requerido por el otro para que cumpla su prestación dentro del plazo razonable que le acuerde, previniéndole que si no lo hiciere, procederá a optar entre la demanda por cumplimiento o la de resolución, siempre con los daños y perjuicios. Si mediere mora, no habrá necesidad de fijar término.

En virtud de la resolución, las partes deberán restituirse lo recibido, conforme a las reglas señaladas por los actos jurídicos condicionales; pero aquélla no producirá efecto contra los adquirentes de bienes transmitidos en virtud del contrato, o respecto de los que hubieren constituido derechos reales sobre los mismos, a menos de convención expresa que así lo estableciere, debidamente inscrita en el Registro.

Los arts. 1205 a 1207 y 1209 a 1211 han sido eliminados, por cuanto las situaciones que contemplan aparecen previstas en los títulos de los actos jurídicos y de los instrumentos públicos.

CAPÍTULO VI

De los contratos a cargo o a favor de terceros

La falta de una reglamentación en el Código, nos ha obligado a metodizar los diversos preceptos del mismo, y a

completarlos con otros inspirados en las legislaciones extranjeras y en la doctrina, a fin de adaptarlos a las necesidades modernas, que han dado gran impulso a este género de contratos.

El artículo que encabeza el capítulo fué proyectado por Bibiloni, de acuerdo con las enseñanzas de Windscheid (párrafo 317) y lo expuesto en una nota de Kipp, que condensa la opinión de los juriconsultos franceses y alemanes sobre este asunto. Por ello, establecemos el carácter obligatorio del acto celebrado a nombre propio con promesa de la prestación de un tercero, siempre que se garantice la ratificación o el cumplimiento por parte de éste.

Nos ocupamos igualmente de la estipulación a favor de un tercero, quien podrá obtener directamente los derechos derivados del contrato, según los términos del mismo, o en su defecto por lo que resulte de las circunstancias y objeto de la convención.

También ha sido considerada la hipótesis de un seguro de vida o constitución de renta vitalicia, en que se estipulara a favor de un tercero, definiéndose los derechos de éste y los que incumben a los contratantes.

TITULO II

Del enriquecimiento sin causa

Cabe aquí igual observación que para el título anterior en cuanto a los inconvenientes que ofrece el Código. Las normas que a este punto se refieren, están dispersas en las obligaciones de dar, en el pago, en las nulidades, en los diversos contratos, en la gestión de negocios, en los derechos reales, etc. Fué pues, necesario sistematizar todas estas reglas, y desde luego, establecer el principio, a fin de aplicarlo en las situaciones particulares. No debe olvidarse que la importancia de esta materia se acrecienta por su vinculación con la estabilidad de las relaciones jurídicas, tanto en el dominio y sus derivados, como en los derechos creditorios.

Con arreglo a la técnica de los códigos suizo y alemán, nos hemos apartado del método que sigue Bibiloni en punto a obligaciones naturales. Se ha tenido en cuenta, para ello, que una de sus características es la de dar causa legítima al pago; de suerte que pueden ser legisladas aquí con ventaja. a título de excepción, lo que permite de paso, eliminar una terminología abandonada en la doctrina y en el derecho positivo.

El pago sin causa puede ser repetido aunque no hubiere mediado error, según lo determinan los arts. 792 y 793 del Código Civil.

En cambio, innovamos acerca de la repetición del pago efectuado por causa ilícita (arts. 794 y 795). Bibiloni lo autoriza, aún en el supuesto de que ambas partes hubieran incurrido en la transgresión. A nuestra vez, sin aceptar el criterio que ahora prevalece en el Código, consideramos las utilidades de este género como bienes vacantes, que deben beneficiar a la Nación o a las provincias. En los títulos relativos al mandato y a la sociedad, aplicamos el mismo principio.

Enumera el Proyecto las diversas hipótesis en que por mediar obligación natural, no procede repetir el pago efectuado voluntariamente, omitiéndose el fundamento de aquéllas, por ser una cuestión de orden doctrinario y muy discutida. Como no es posible prever todos los supuestos, hemos evitado los inconvenientes de una nómina cerrada, al agregar que se comprenden todos los pagos que tuvieren por fin satisfacer deberes morales o de conciencia. Eliminamos las deudas de juego previstas en el inc. 5, art. 515 del Código, pues no cabe equipararlas a las obligaciones de que tratamos, y deben por el contrario, quedar sujetas a lo dispuesto sobre la causa ilícita.

Hemos adoptado la norma que el Anteproyecto reproduce del art. 814 del código alemán. De acuerdo con ella, no procede repetir lo satisfecho en virtud de una obligación, cuando el pagador conocía la inexistencia de ésta. Sin duda, la prueba de tal extremo es por cuenta de quien se niega a restituir.

Los demás casos previstos en el título son los reglados por los arts. 785 y 791, inc. 1º, con el aditamento de otros dos a que hace referencia Bibiloni: el pago a consecuencia de una obligación nula, siempre que ella fuere confirmable y el efectuado en vista de un propósito que no llegó a realizarse, cuando desde el comienzo lo sabía el deudor, o si éste impidió de mala fe su cumplimiento (815 alemán y 792 nuestro).

En el art. 790, al consignar los supuestos en que procede la repetición, se ha modificado el inc. 1º para referirse tan sólo a las condiciones suspensivas, como corresponde.

Admitimos la repetición del pago sin causa, efectuado bajo la inminencia de un apremio judicial o administrativo, con arreglo a las conclusiones de los tribunales franceses.

Como es frecuente otorgar documentos a la orden o al portador, por actos que son anulados o que sólo producen los efectos previstos, admitimos la solución del Anteproyecto, o sea que el pago pueda ser repetido contra la persona con quien se trabó originariamente la relación de derecho.

También se ha introducido una regla tomada del art. 816 alemán, en virtud de la cual la persona que sin estar facultada para ello disponga de un bien perteneciente a otro, deberá restituírle cuanto hubiere obtenido por tal causa, quedando de igual modo obligado el tercer adquirente a título gratuito.

Los arts. 786 788 y 789 han sido reemplazados por otros más breves y simples, que remiten a lo prescripto sobre el poseedor de buena o de mala fe. Esta última consiste en el conocimiento de la falta de causa, desde el instante en que se tuviere.

El art. 787 aparece substituído por el correlativo del Anteproyecto, según el cual en las transmisiones a título oneroso, no procede repetir el pago, ni tampoco perseguir la cosa contra los adquirentes de buena fe.

En los arts. 796 y 798 queda suprimida la exigencia del doble error, por ser ella absolutamente innecesaria. Incorporamos asimismo, una regla análoga al 821 alemán que autoriza a rehusar el cumplimiento de una obligación sin causa, aunque esté prescripta la acción que permita liberarse.

TÍTULO III

De los actos ilícitos

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

El concepto del acto ilícito que señala nuestro Código, no ha sufrido alteración, si bien al reunirse los arts. 1066, 1067, 1073 y 1074, hemos ampliado lo dispuesto en los dos primeros, a fin de que comprendan, además de los policiales, otros reglamentos que contienen penalidades determinadas por la autoridad pública; de suerte que las simples contravenciones, cuando revistan los caracteres legales, quedarían incluidas dentro del presente título.

No condice sin embargo, el Proyecto con la ley actual ni con Bibiloni en cuanto a la extensión del daño, pues consideramos justo y conveniente prescindir de la exigencia relativa a la apreciación pecuniaria, y establecer que debe indemnizarse todo perjuicio, material o moral, que se ocasiona a otro en las cosas de su dominio o posesión o por el detrimento causado a su persona o a sus derechos o facultades. Como ya se dijo en este informe al tratar de los daños y perjuicios, se han unificado las reglas sobre el resarcimiento, derive éste de los contratos o de los actos ilícitos. Si bien como regla general, deberá consistir en una suma de dinero, se reserva especialmente la hipótesis en que la ley dispusiera de otra manera. Es cabalmente lo que ocurre en la situación que analizamos, cuando decide que se indemnizará por los medios adecuados a la naturaleza del caso, y en subsidio, con un pago en efectivo.

Hemos substituído los arts. 1081 y 1082, por un precepto que impone la obligación de reparar solidariamente el

perjuicio, a las personas que se hubieren concertado para ejecutar un acto ilícito; pero autoriza a quien hubiere pagado la indemnización, para repetir contra los restantes en la medida que determine el juez, según la participación que cada cual tuviere en el hecho.

La regla del art. 1111 se conserva con carácter general, es decir, para todos los actos ilícitos, con un agregado proveniente del art. 254 alemán, que resuelve el supuesto de culpa concurrente.

Se mantienen los arts. 1070 y 1076, con el aditamento de una categoría especial para los sordomudos y las personas comprendidas entre los diez y los dieciocho años, de acuerdo con el art. 828 alemán y el Anteproyecto.

CAPITULO II

De los casos de indemnización

Este epígrafe —más exacto que los del Código Civil— abraza las disposiciones que en él forman los capítulos II y III, del título referente a los actos ilícitos.

El art. 1084 ha sido objeto de varios agregados, tendientes a incluir en forma clara el agravio moral, así como el perjuicio derivado de la incapacidad para el trabajo, si la muerte no hubiere ocurrido inmediatamente. También se reconoce el derecho de cobrar los gastos, a quien los hubiere pagado, aunque fuera en virtud de una obligación legal, de acuerdo con lo prescripto por el art. 1085 en su primera parte.

El 1086 queda subsistente, con algunas modificaciones que el Anteproyecto adoptara, de acuerdo con los códigos alemán, suizo y austríaco. Una de ellas contempla el resarcimiento derivado de la disminución de aptitud para el trabajo, del aumento que pudieran experimentar las necesidades de la víctima, o de su debilidad física o mental. Otra prevé el supuesto de haber quedado alguna desfiguración al paciente. En ambas hipótesis determina las bases para la indemnización.

Como a menudo, por desconocer las ulterioridades del daño sufrido, no es posible fijar en el momento de la sentencia el monto a pagarse, se autoriza al juez para determinarlo provisionalmente, reservando hacerlo en definitiva dentro de un plazo prudencial de dos años. Es lo que prescribe el art. 46 del código suizo.

Con la segunda parte del 1085, hemos formado un artículo especial que extiende la regla de aquél a las lesiones, y reconoce derecho para reclamar indemnización a quienes lo tuvieron para pedir alimentos al damnificado.

Bajo una nueva forma, el art. 1088 comprende los engaños desleales a mujer honesta, así como el abuso de autoridad o dependencia, de acuerdo con el Anteproyecto y lo que disponen los códigos alemán y austriaco.

Los arts. 1089 y 1090 han sido también reformados, a fin de que el primero comprenda todos los casos de descrédito profesional o industrial, así como la acusación calumniosa y el uso ilícito del nombre. Se permite sin embargo, dentro de un límite razonable, la comunicación de informes bancarios, mercantiles, etc.

Los arts. 1091 a 1094 han sido substituídos por el que propusiera Bibiloni, con el fin de subsanar algunos errores y omisiones evidentes.

Hemos procurado asimismo, reglamentar con mayor detalle y precisión, la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, prevista dentro del art. 1112.

CAPÍTULO III

Del ejercicio de la acción civil

En este capítulo han debido introducirse diversos cambios para conciliar, en primer término, la regla del art. 1096 con las que establecen los Códigos Penal y de Procedimientos en lo criminal; extender las disposiciones a todos los actos ilícitos; subsanar los errores tan conocidos y criticados de los arts. 1101 y 1103, y suprimir finalmente las cuestiones

prejudiciales, para que en lo sucesivo sean resueltas por los jueces del crimen, que como tales deben aplicar tanto el Código Penal, como las demás leyes de la Nación. Por consiguiente, en la investigación para determinar la existencia de un delito, se hallan facultados para examinar y resolver las cuestiones civiles que fuere necesario.

CAPÍTULO IV

De la responsabilidad por hechos ajenos

La regla, sin duda deficiente, del art. 1113 del Código Civil, ha sido modificada en forma fundamental, adoptándose en su reemplazo la que proyectó Bibiloni, que a juicio de la mayoría de la Comisión resuelve en forma acertada y con fundamentos serios, el complicado problema de la responsabilidad por los hechos ajenos, sin perjuicio de lo que dispongan leyes especiales, con respecto a las circunstancias que deberán ser tomadas en cuenta para establecer la responsabilidad en casos determinados.

Los arts. 1114 a 1117 han sido refundidos con modificaciones tendientes a prever el supuesto de separación de los padres, judicial o no, a determinar la responsabilidad de aquéllos por los hechos de los hijos que abandonen sin vigilancia, y a suprimir la limitación de los diez años que erróneamente establece el art. 1117. Los padres quedan dispensados del resarcimiento, en los mismos casos que los directores de colegios y maestros artesanos.

El art. 1118 ha sido eliminado, porque las situaciones por él previstas se hallan regidas con más exactitud por el art. 2230 y los que le siguen, así como por el que se ha proyectado en reemplazo del art. 1113.

También se han suprimido los dos primeros párrafos del 1119, por referirse a cuestiones previstas con mayor detalle en el Código de Comercio y en leyes especiales, reformándose el resto del artículo para evitar las inexactitudes que contiene.

CAPITULO V

De los daños causados por animales

De acuerdo con el Anteproyecto, se ha formado un solo artículo con los 1124 a 1126, cambiando desde luego, su redacción con el objeto de que no pueda entenderse que el daño causado por el animal queda en todos los casos a cargo de su dueño, como parece resultar de la frase final del 1124. Responde en realidad su propietario, o el que se sirve de él, o el tercero que lo excitó.

Se agrega una disposición tomada por Bibiloni del código de Chile, art. 2326, en virtud de la cual se concede al tenedor recurso contra el poseedor del animal, si el daño sobreviene por una calidad o vicio que el segundo, con mediana prudencia o cuidado, hubiera debido conocer o prever y que omitió indicar al primero.

CAPITULO VI

De los daños causados por cosas inanimadas

Como Bibiloni, hemos considerado necesario reformar el art. 1132, que obliga al dueño del inmueble a permanecer de brazos cruzados ante el peligro, con el objeto de establecer en forma expresa, que podrá pedir las medidas de seguridad autorizadas en el título relativo a las restricciones del dominio, como también para hacer extensiva esa facultad a todo vecino, sea o no dueño.

El art. 1134 ha sido suprimido, porque evidentemente no responde al mismo concepto que el 1133, que por otra parte se modifica para armonizarlo con la regla proyectada en substitución del 1113.

SECCION SEPTIMA

DE CIERTAS RELACIONES OBLIGATORIAS EN PARTICULAR

TITULO I

De la compraventa y de la permuta

CAPITULO I

Disposiciones generales

Se amplía el concepto del art. 1323 del Código Civil, que no concuerda con lo expuesto por Vélez en la nota al 1327. La reforma consiste en extender el objeto de la compraventa: la habrá cuando se convenga en transferir, sea la propiedad de una cosa, como dice el Código, sea la de cualquier derecho patrimonial, siempre que se realice con carácter definitivo.

Cuando se tratare de una cosa, el vendedor queda obligado a transmitir el dominio de ella al comprador, desde luego, por los medios y en la forma que establece el libro respectivo; si fuera un derecho, debe conferirlo al adquirente, y si aquél implicara la posesión, tendrá que otorgársela de igual manera.

En armonía con el carácter obligatorio de la oferta (modificación al art. 1150) se reglamenta la promesa unilateral, fijando los requisitos que debe reunir para ser válida.

Hemos previsto especialmente la aplicación de las reglas de este título a otras relaciones jurídicas, y modificando el art. 1325, para completarlo de modo que comprenda los supuestos de expropiación, ejecución judicial y concurso, así como la dación en pago.

Se ha juzgado oportuno reglamentar los casos de compra en comisión, muy corriente entre nosotros, prescribiéndose que el comprador quedará personalmente obligado si no presentare dentro del plazo la confirmación del comitente. Teniendo las partes a su alcance los medios para asegurar el cumplimiento del acto, no se ha estimado necesario establecer la responsabilidad del comisionista, para el supuesto en que aprobado aquél por el verdadero titular, no llegare a ejecutarse por cualquier motivo.

El art. 1324 ha sido eliminado por innecesario, según lo demuestra Bibiloni en su nota, lo mismo que el 1326, que es una mera aplicación de la regla general contenida en el libro primero.

§ 1. — De la capacidad para comprar y vender

La Comisión ha simplificado mucho los preceptos del Código, evitando que se repitan o se limiten a corolarios de normas ya establecidas.

Se ha redactado el art. 1361 con el carácter de una disposición sintética general, a la que puede hacerse referencia dentro de los títulos correspondientes a los demás contratos. Se corrige también el error tan criticado del inc. 6º, aplicando la buena doctrina. Por último, han sido previstos los casos especiales en que los padres o tutores pueden adquirir los bienes de los incapaces que se encuentren bajo su guarda, suprimiéndose lo relativo a la subrogación, por ser innecesario referirse a ella en el presente párrafo.

§ 2. — Del objeto de la compraventa

Ha sido menester en primer término, modificar las disposiciones, de acuerdo con la amplitud reconocida al contrato, que abarca en el Proyecto toda clase de bienes.

Con respecto a la venta de la cosa ajena como propia, la solución del art. 1329 se halla substituída por otra. Antes de entregar la cosa, cualquiera de las partes puede pedir la nulidad, aunque haya procedido de mala fe; pero en este

caso, el vendedor debería indemnizar plenamente, y en el contrario, tan sólo el daño negativo. En cambio, el comprador de mala fe no tiene derecho a resarcimiento. Después de recibir la cosa, el contrato sólo podrá quedar sin efecto a instancia de la parte que hubiere procedido de buena fe, debiendo el adquirente ser indemnizado como si hubiere evicción. Hemos juzgado práctico autorizar la nulidad a pedido del vendedor de mala fe antes de la entrega, para evitar que aumenten los daños por el transcurso del tiempo.

Los arts. 1339 a 1343, tomados del código francés, han sido suprimidos, por cuanto son doctrinarios y responden a un sistema distinto del nuestro, y que se funda en la transmisión del dominio por medio del contrato, sin otro requisito.

En cuanto a la venta de inmuebles, se modifica el art. 1345, determinándose que en caso de resultar una superficie mayor, el adquirente deberá tomar el exceso y pagarlo al precio convenido, con lo cual no podrá obligarse al vendedor —como hoy ocurre— a quedarse con una fracción pequeña que le sería completamente inútil. También se agrega que si el déficit fuere menor que un vigésimo, lo mismo podrá el comprador resolver el contrato si probare que la superficie es insuficiente para el objeto a que destinaba la cosa, pues se ha querido favorecer en lo posible el aprovechamiento y la utilización de los inmuebles.

El art. 1346 aparece corregido, para limitarlo a determinadas hipótesis y desvanecer el equívoco a que hoy se presta. Se establece luego, en un texto separado que tal disposición no se aplica en el caso del art. 1344, inc. 6°.

La Comisión propone una regla más justa que la contenida en el art. 1348. Es preferible compensar los valores y no las superficies.

En el caso de venderse varios inmuebles indicando solamente el área total y no las parciales, ya no cabe hacer distinciones que originarían múltiples dificultades y pleitos complicados. Por ello se dispone que se calculará el vigésimo sobre el conjunto.

Por último se han previsto cuidadosamente las consecuencias de la resolución del contrato, así como de la rebaja o aumento del precio.

§ 3. — Del precio

No obstante la opinión de Bibiloni, admitimos un recurso contra la estimación del tercero, apartándonos también del art. 1351; de suerte que cuando aquélla fuera notoriamente desproporcionada, podrá quedar sin efecto el contrato. Se espera evitar así, que la imprudencia de una parte pueda originarle una situación ruinosa.

CAPITULO II

De las cláusulas especiales en la compraventa

Los artículos referentes a la compraventa bajo condición, han sido ordenados con pequeños cambios en cuanto a la suspensiva, y de mayor importancia por lo que hace a la resolutoria, de acuerdo con el régimen de los derechos reales.

En contra del art. 1371, se dispone que pendiente la condición no habrá transferencia de dominio, aunque mediar la entrega de la cosa. Con ello, como dice Bibiloni, los muebles quedan en la situación ordinaria: el comprador condicional está en el caso del art. 2414, y los adquirentes en el previsto por los 2413, 2766 y 2767.

Se mantiene el art. 1364, a pesar del Anteproyecto, que extendía la prohibición, aún cuando se tratara de personas determinadas. A nuestro juicio, esta cláusula puede ser útil para satisfacer legítimas exigencias del vendedor.

Ampliase el término de la retroventa hasta cinco años, suprimiéndose las repeticiones, como ser las contenidas en los arts. 1385 y 1386. El 1388 ha sido corregido para armonizarlo con el sistema de publicidad. La retroventa prenotada podrá ser opuesta a los terceros, aunque no constare en el instrumento del contrato. Se prevé por fin, la venta de la parte indivisa por el condómino, bajo dicho pacto, de acuerdo con el art. 1667 francés, cuya disposición se amplía.

Respecto del pacto de preferencia, queda suprimida la injustificada distinción entre muebles e inmuebles, que surge del art. 1395.

Por lo que se refiere a la venta de inmuebles a pagar en cuotas sucesivas, adoptamos, salvo detalles, el proyecto que presentara el doctor Rodolfo Moreno ante la Cámara de Diputados de la Nación.

CAPITULO III

Del efecto de la compraventa

El número de los artículos queda reducido considerablemente por la eliminación de muchos innecesarios, y en virtud de haber sido incorporados en términos más generales, algunos otros al capítulo del efecto de los contratos.

Fuera de ello, se han introducido las modificaciones indispensables para concordar las reglas del Código, con las proyectadas sobre la compraventa y la publicidad de los derechos reales.

CAPITULO IV

De la permuta

Esta figura jurídica queda legislada en un solo artículo, que se limita a declarar aplicables los preceptos sobre la compraventa. Suprimimos la peligrosa disposición del art. 1487, que no armoniza con el sistema adoptado en el Proyecto para la transmisión del dominio.

TITULO II

De la cesión de derechos

CAPITULO I

Disposiciones generales

Tratamos aquí, de la transferencia de derechos bajo su aspecto meramente contractual. En vez de organizar una

categoría autónoma, como lo hace el Anteproyecto, hemos considerado que dentro del sistema admitido por Bibiloni y por nosotros mismos, habría compraventa, permuta o donación, según los casos, con prescindencia de que el objeto consista en una cosa o en un bien incorporal. Por ello, se modifica el articulado en el sentido que indicamos, y en el presente título figuran las normas sobre el efecto que produce aquella convención cuando se refiere a un derecho. Puesto que la cesión es una consecuencia abstracta de contratos diversos, es innecesario repetir quienes pueden ceder y quienes pueden adquirir por este medio. Las disposiciones relativas a tales materias deben ser, pues eliminadas.

Por razones de método se han reunido en un artículo los derechos que pueden cederse, y en otro, aquellos que no pueden ser objeto de transferencia, sin que dichas enumeraciones deban considerarse taxativas. Prohibimos la cesión de alimentos, tanto futuros como devengados, pues cabe el abuso aun respecto de éstos.

Finalmente, hemos incorporado al Proyecto un texto que permite la cesión en todo o en parte, para garantizar un derecho, rigiendo entonces lo dispuesto sobre la prenda.

CAPÍTULO II

Del efecto de la cesión

Para unificar esta materia, consideramos en este capítulo, la transferencia, tanto de créditos como de derechos y acciones reales y la relativa a herencias, que de otro modo debieran legislarse en forma separada y en cada uno de los libros respectivos.

§ 1. — De la cesión de créditos

Conviene señalar dos modificaciones principales. Refiérese la primera al caso en que el cedente garantice la solvencia del deudor, debiendo entenderse que sólo responde

de la actual y no de la futura. En virtud de la segunda, no podrá el cesionario recurrir contra el cedente en el caso del art. 2106.

§ 2. — De la cesión de derechos y acciones reales

Hemos previsto en dos artículos los efectos de esta clase de transferencias, que el Código no legisla expresamente. De acuerdo con el sistema de publicidad de los derechos reales, se exige la inscripción de aquéllas en el Registro.

§ 3. — De la cesión de herencia

Las reglas contenidas en el Proyecto han sido tomadas principalmente de Bibiloni, pues Vélez omitió legislar sobre este asunto, no obstante lo declarado en la nota final del título respectivo.

La cesión debe ser inscripta en el Registro, para que tenga validez entre los contratantes, y además, presentado en el expediente sucesorio el testimonio de la escritura de traspaso, para ser oponible a los coherederos, legatarios y acreedores de la masa.

Para evitar dudas, se determinan los bienes no comprendidos en la cesión, como los papeles y recuerdos de familia, e igualmente la parte hereditaria adquirida con posterioridad a la transferencia.

Réglanse también las obligaciones del cedente: entrega de los bienes, reintegro de lo consumido o gastado, garantía, etc. De igual modo, se fijan los derechos respectivos sobre los frutos y productos anteriores, y se establece quién debe soportar las cargas de la explotación.

Quedan asimismo, enumerados los deberes del adquirente: pago de las deudas hereditarias, sin perjuicio de la responsabilidad del enajenante hacia los acreedores; reembolso de las mejoras necesarias y gastos que aumentaron el valor de la cosa; pago del impuesto a la herencia y de las cargas aplicadas al capital.

TÍTULO III

De las donaciones

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

En lugar del concepto restringido que surge de los arts. 1789 y 1791 del Código Civil, incorporamos al Proyecto el más amplio del código brasileño, que se aproxima al aconsejado por Bibiloni.

Así, pues, la donación podrá tener por objeto cualquier derecho patrimonial, y no solamente las cosas. Queda comprendida en el presente título la renuncia gratuita con ánimo de beneficiar.

Apartándonos del Anteproyecto, hemos eliminado el caso de omisión en el ejercicio de los derechos patrimoniales, con voluntad de favorecer a otro. Pensamos que la prueba de este último extremo daría lugar a graves inconvenientes y que con ello se extendería en forma excesiva el deber de colacionar, impuesto a ciertos herederos.

En cuanto a la aceptación del donatario, debe distinguirse entre las donaciones directas y las derivadas de renuncia. Para el primer supuesto, aquel requisito es indispensable; para el segundo, bastará con que el favorecido no manifieste el propósito de rechazar la liberalidad.

El art. 1797 no debe subsistir, pues las donaciones engendran deberes que exceden la órbita de un poder para administrar. El inc. 5º del art. 1808 ha sido en cambio, conservado, para puntualizar la exigencia de un mandato especial.

CAPITULO II

De la capacidad para hacer donaciones y recibirlas

En el art. 1807 se amplía el inc. 1º. a fin de que pueda comprender a los hijos naturales de un cónyuge, además de los nacidos en otro matrimonio. En cuanto al inc. 2º. ha sido modificado para ajustarlo al régimen de la sociedad conyugal.

CAPITULO III

Del objeto y condiciones de la donación

De acuerdo con el art. 1175 brasileño, declaramos la nulidad de la donación que comprenda todos los bienes presentes, cuando no contenga reserva de parte o renta bastante para la subsistencia del autor, criterio claro y simple que elimina las dificultades que sin duda originaría el propuesto en el Anteproyecto.

El art. 1803 ha sido mejorado, teniendo presente que los actos en él comprendidos no son donaciones por causa de muerte.

CAPITULO IV

De la forma de las donaciones

El art. 1810 ha sido objeto de algunos cambios. Por una parte suprimimos el inc. 4º, dado que el Proyecto no admite la institución contractual. Por otra, y por motivos eviden-

tes, quedan exceptuadas en el inc. 2º, las donaciones manuales. También excluimos las renunciaciones, a fin de no aplicarles las formalidades establecidas para las donaciones directas.

El art. 1817 no ha sido reproducido en el Proyecto, por considerar errónea su doctrina, según lo han demostrado Segovia y Bibiloni. También desaparece el 1818, pues las presunciones que contiene son peligrosas.

CAPÍTULO V

Del efecto de las donaciones

Se reconoce el beneficio de competencia en favor del donante, autorizándole para rehusar la prestación, cuando no pueda cumplirla sin comprometer la propia subsistencia o la de aquellos a quienes debe prestar alimentos. Si hubiera mora, queda también eximido de pagar intereses o frutos.

Tanto Bibiloni como nuestro Proyecto, prevén el caso de donaciones por entregas periódicas, y establecen, a semejanza de los códigos alemán y austríaco, que se extinguen con el fallecimiento de cualquiera de las partes.

CAPÍTULO VI

De ciertas donaciones en particular

Por razones de método, reunimos en un solo capítulo las reglas referentes a las diversas clases de donaciones y simplificamos en lo posible los preceptos del Código.

En cuanto a las donaciones remuneratorias, consideramos innecesario el agregado propuesto por Bibiloni al art. 1822.

La situación prevista por el art. 1829 está comprendida en el régimen de los contratos a favor de terceros, habiéndose adoptado al tratar de éstos, una regla distinta de la contenida en aquél. Esto explica su eliminación.

A pesar del Anteproyecto, mantenemos lo prescripto en el Código Civil sobre donaciones inoficiosas, siguiendo el criterio del art. 1832, inc. 1°, de nuestra ley y del 1176, brasileño. Combinados ambos, evitan las serias objeciones formuladas contra el sistema actual, que obliga a esperar el fallecimiento del donante para que el beneficiario perfeccione su título.

CAPITULO VII

De la reversión de las donaciones

Hemos subsanado el error cometido en el art. 1841 del Código, al referirse a “herederos” del donatario, cláusula que tornaría ilusoria la reserva. Por ello, sustituímos aquella palabra por “descendientes”, según ya lo hiciera Bibiloni.

Se ha modificado además, el art. 1847, para concordarlo con las reformas al sistema de publicidad de los derechos reales, y evitar los inconvenientes que hoy derivan de la reversión. Lo mismo se proyecta en cuanto a las donaciones condicionales.

CAPITULO VIII

De la revocación de las donaciones

Después de reproducir, simplificados, varios de los preceptos del Código, se faculta en forma expresa a la autoridad competente, para exigir la ejecución de los cargos, una vez fallecido el donante, cuando ellos fueren de interés público.

Los arts. 1855, 1856 y 1857 del Código Civil han sido armonizados con las reglas sobre transmisión. Por ello se dispone para el incumplimiento de los cargos, que deben aplicarse los principios sobre resolución de los contratos si-

nalagmáticos, y en cuanto a los bienes restituidos, las reglas que gobiernan el enriquecimiento sin causa.

Por razones obvias, ampliase el art. 1858, para comprender entre las causales de ingratitud hacia el donante, los mismos hechos que afecten a las personas de su familia.

Se modifica el art. 1864, para restringir los casos en que los herederos pueden demandar la revocación, por cuanto la injuria y demás faltas del donatario, deben considerarse exclusivamente con referencia al donante. Por lo tanto, sólo a éste incumbe la facultad de dejar sin efecto el acto; a menos que, conociendo los antecedentes, hubiera perdonado, o renunciado a ese derecho, o dejado transcurrir un año sin ejercerlo. En principio, la revocación no puede ser solicitada por los acreedores ni por los herederos, salvo los supuestos que expresamente se determinan.

TITULO IV

De la locación

CAPITULO I

Disposiciones generales

Las diversas modificaciones proyectadas responden a las necesidades que la experiencia revelara en estos últimos años. Hemos establecido igualmente, una ordenación racional de los preceptos y tomado en cuenta las reformas introducidas por leyes posteriores al Código. Muchos artículos innecesarios han sido suprimidos y otros condensados en uno solo.

La locación comprende todos los bienes cuyo uso puede ser cedido. Nos conformamos así, al amplio criterio del Anteproyecto.

El plazo de diez años, límite que señala el art. 1505, podrá ser extendido hasta veinte cuando se tratare de un inmueble urbano arrendado para levantar en él edificios, o de fundos que se hubieren dado en locación con el fin de rea-

lizar plantaciones que exijan largo tiempo para obtener un resultado productivo, como yerbales, viñedos, bosques, etc. De tal manera, ponemos remedio a casos que obligan a valerse de expedientes diversos y no se crea un derecho enfiteutico.

El art. 1502 ha sido reducido a sus verdaderos términos para referirlo estrictamente a los bienes nacionales, provinciales, municipales y a los que pertenezcan a entidades del derecho público.

El precio de la locación debe consistir en dinero; pero las reglas del presente título se aplicarán a los contratos en que la retribución convenida por el uso y goce consista en otra clase de cosas o en prestaciones de hacer o de no hacer.

Restablecemos el art. 1507 en su redacción anterior a la Ley N° 11.156, como se propone en el Anteproyecto. Pensamos que debe mantenerse la igualdad entre las partes, sin perjuicio de que, cuando sobrevinieren situaciones anormales, puedan dictarse reglas distintas, como las contenidas en la mencionada ley.

CAPITULO II

Del efecto de la locación

De acuerdo con Bibiloni, aclaramos las normas del Código en el sentido de que este contrato autoriza al uso y goce de la cosa según su condición en el momento de celebrarlo. Se establece, además, como regla general, la contraria a la del art. 1495, última parte, o sea que en caso de aluvión el locatario tendrá el uso del terreno acrecido, debiendo pagar mayor precio cuando el aumento fuere de importancia.

Al establecer los derechos y obligaciones del locador y del locatario, hemos tenido en cuenta las atinadas reformas del Anteproyecto en cuanto a los arts. 1526 y 1527, para restablecer el sentido de los 1726 y 1727 del código francés, que les sirvieron de fuente, tal como lo explican Aubry y Rau, con una variante inspirada en Marcadé.

En forma expresa declaramos que el locatario debe informar al locador, sobre cualquier vicio de la cosa que exija medidas para protegerla contra un peligro imprevisto; así también como cuando un tercero se arrogare derechos sobre ella, quedando si no lo hiciere, responsable por el daño producido y sin facultad para exigir rebaja en el precio ni resarcimiento alguno.

Las disposiciones relativas a las mejoras introducidas en la cosa durante la locación, han sido agrupadas en forma clara y ordenada.

El art. 1535 del Código Civil, es, como bien lo observa Bibiloni, una disposición excesiva e inconciliable con el derecho de propiedad, y aun con el de uso, único que corresponde al locatario. Por ello, lo hemos suprimido, y a semejanza de lo dispuesto en el proyecto franco-italiano de código de las obligaciones, reconocemos un derecho a la indemnización por aquellas mejoras que valoricen el inmueble, con conocimiento y sin oposición del dueño. El Anteproyecto substituye el art. 1572, por otro según el cual en caso de incendio, no se presume la culpa del locatario o de las personas por quienes responde, entendiéndose dejar así, el caso regido por los principios generales. Estimamos en cambio que por corresponder al locatario el cuidado y conservación de la cosa, es más lógico resolver como el código del Brasil, que para no incurrir en responsabilidad, debe aquél probar que el hecho se ha producido por caso fortuito, fuerza mayor, vicio de construcción o que el fuego se propagó desde un inmueble vecino, u otra causa semejante.

Con el fin de prevenir los fraudes que frecuentemente se cometen en los pagos anticipados de arrendamientos, hemos reemplazado las normas del Código por otras contenidas en el Anteproyecto. Los terceros podrán impugnar estas entregas anticipadas, conforme al derecho común; pero serán válidas aquellas que se hubieren efectuado hasta seis meses para los inmuebles urbanos y un año para los rústicos, en los casos que taxativamente se enumeran, con respecto a los acreedores hipotecarios, a los adquirentes de la cosa o a los representantes, tratése de mandantes o de incapaces.

Al formarse un capítulo especial para los arrendamientos rurales, han debido trasladarse varios artículos del Código, con ventaja para la claridad y el método.

CAPITULO III

De la sublocación

Fuera de la supresión del art. 1598, que además de consagrar una doctrina equivocada y contraria a la del 1602, no está de acuerdo con lo expuesto por los autores que menciona la nota, se reproducen con simples variantes de forma las demás disposiciones de este capítulo del Código Civil.

No se trata aquí de la cesión del arrendamiento, pues ella queda sujeta a las reglas sobre la cesión de derechos.

CAPITULO IV

Del término de la locación

Aun cuando Bibiloni aconseja suprimir totalmente las disposiciones de las leyes especiales dictadas en 1921, hemos estimado que convenía reproducir en el Proyecto algunas de ellas, como las relativas al plazo para el desahucio, de igual modo que antes habíamos insertado varias otras, pudiendo citarse el agregado al art. 1504 del Código.

Fallecido el locatario antes de terminar el contrato, si bien admitimos en principio que no concluye la locación, juzgamos prudente autorizar a los herederos, cuando el subarriendo estuviere prohibido, para rescindirlo dentro de los seis meses, sin abonar daños y perjuicios si probaren que a consecuencia del deceso no pueden soportar las cargas del arrendamiento o que la finca no responde a sus necesidades actuales.

Esta regla ha sido tomada del proyecto franco-italiano, del código alemán y del código suizo.

CAPITULO V

Arrendamientos de predios rústicos

La Comisión considera acertado el método del Anteproyecto, en vista de que los arrendamientos rurales ofrecen peculiaridades, que a menudo exigen reglas propias, sin perjuicio de seguir en general, las comunes a la locación de cosas. En cambio, incorporamos parcialmente a nuestro Proyecto las disposiciones de la ley 11627, que Bibiloni suprimía por completo.

Respecto de los fundos cuya superficie no excediese de 300 hectáreas, el plazo mínimo para los arrendamientos queda fijado en cinco años, término obligatorio para ambas partes.

Después de prohibir al arrendatario alterar el destino económico del inmueble, o introducir mejoras que pudieran modificar la explotación al vencimiento del contrato, se reproducen los arts. 1537 y 1560, con el agregado de lo que prescribe el 2873, si existiere un monte tallar.

Completan este capítulo varias disposiciones inspiradas en el código suizo, que tienden a delimitar los deberes del arrendatario en cuanto al cuidado y conservación del inmueble, así como de los elementos de trabajo y de los animales de labor o de cría.

TITULO V

De la aparcería

Si bien al legislar sobre la locación el Anteproyecto comprende las reglas referentes a la aparcería, consideramos que este contrato reviste caracteres autónomos y que debe ser objeto de un título especial.

Se comienza por determinar el concepto de la aparecía: entrega de un predio rústico para su explotación agrícola o ganadera, dividiéndose los frutos entre ambas partes. A falta de convención o de uso local, régulanse luego las facultades y obligaciones de quien da el predio: suministrar al aparecero habitación adecuada, abstenerse de transferir sus derechos y de constituir otra aparecía, compartir los gastos de semillas, fertilizantes, destrucción de plagas y los relativos a la cosecha, cuando se emplearen elementos que no estuvieren dentro del fundo. También figuran especificados los deberes y atribuciones del colono: soportar los gastos ordinarios del trabajo y recolección, suministrando los animales e instrumentos de labor. Los beneficios deberán ser liquidados al finalizar cada año.

Por último, se han establecido reglas inspiradas en el proyecto franco-italiano, sobre la terminación del contrato en caso de muerte del colono o incapacidad del mismo cuando no pueda ser substituído por un miembro de su familia que habite con él.

TÍTULO VI

Del contrato de trabajo

Esta parte del Proyecto contiene los principios básicos que rigen la locación de servicios, sin perjuicio de lo que prescriben las leyes especiales, como las que reglamentan el trabajo, la forma de pago, los accidentes y otras análogas, todas las cuales se conservan en vigor por un precepto expreso.

La primera norma que proponemos obedece al propósito de separar en forma clara, esta figura de la locación de obra. Por el contrato de trabajo se obliga una de las partes a prestar servicios continuos, por tiempo determinado o no, bajo la dirección de otra, mediante el pago de un salario en moneda nacional, exigencia esta última que la Comisión agregó al Anteproyecto de acuerdo con las leyes 11278 y 11337. Además, inspirándonos en el código suizo, hemos con-

siderado el trabajo del obrero por piezas a domicilio, como comprendido en el caso común.

Fijase en cinco años el término máximo de este contrato, para el cual no se exigen formas ni pruebas especiales.

Los arts. 1625 y 1627 han sido reproducidos, suprimiéndose, en cambio, los 1626 y 1628 por inútiles, y el segundo, además como peligroso.

Declárase intransmisible el derecho a la prestación de los servicios (art. 613 cód. alemán) salvo cuando hubiere transferencia del establecimiento en el cual se prestaren aquéllos.

Se legisla sobre la oportunidad en que debe ser satisfecho el salario a falta de convenio, según que se haya fijado por día, por mes o por pieza.

El patrón está obligado a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos de la explotación, y a procurar que el trabajo se realice en locales adecuados e higiénicos. También responde por los accidentes ocurridos a sus empleados y obreros durante el contrato, ya con motivo y en ejercicio de sus tareas, ya por caso fortuito o fuerza mayor inherente a las mismas; a menos que el hecho se debiera exclusivamente al dolo o a la culpa de la víctima o de quienes deban reclamar la indemnización o si proviniera de fuerza mayor extraña al trabajo. En este punto hemos disentido con el Anteproyecto para ajustarnos a los arts. 1 y 5 de la ley N° 9688.

El derecho del patrón para compensar su crédito contra empleados u obreros, se reduce a la quinta parte del sueldo o salario de éstos, excepto cuando se tratare de daños causados intencionalmente.

Cabe señalar una norma tomada por Bibiloni de los códigos alemán y suizo, en cuya virtud se impone al patrón constituido en mora por no proporcionar trabajo, la obligación de retribuir los salarios correspondientes, deduciendo lo que economizó el acreedor al no prestar los servicios, lo que hubiere ganado entretanto con otra actividad y lo que maliciosamente dejó de obtener.

Los deberes del locador también han sido reglados, así como lo relativo a la terminación del contrato. Para darle fin, si no hubiere plazo convenido, se impone el preaviso, va-

riando los términos, según que se trate de empleados, obreros o domésticos.

A imitación del código suizo, establecemos un período de prueba o de ensayo, durante el cual podrán las partes desligarse del contrato, con anuncio previo de tres días.

TITULO VII

Del contrato de obra

La noción que se desprende del art. 1629 del Código Civil, ha sido ampliada para comprender sin dificultad todo género de obras, como las relativas a las profesiones liberales, y distinguir esta figura del contrato de trabajo y del mandato.

Hemos señalado también las obligaciones del empresario: ejecución personal de la obra bajo las cláusulas convenidas, y a falta de ellas, según las costumbres del lugar y el precio fijado, entrega dentro del término, responsabilidad por las condiciones del trabajo y de los materiales que provee, por la ruina total o parcial, determinada ya por esta última circunstancia, ya por defecto de ejecución o por vicio del suelo.

A fin de proteger la buena fe —ya que como dice Bibiloni el dueño descansa en la competencia y lealtad del local— se dispone que para modificar el Proyecto es menester el permiso escrito del propietario, y que deberá comunicarse a éste cualquier alteración imposible de prever al celebrarse el contrato, cuando fuere indispensable introducirla. Si las partes no llegaren a un acuerdo, decidirá el juez en juicio sumario.

Del proyecto franco-italiano proviene la precedente regla, así como también otra en virtud de la cual la recepción de la obra libera al empresario por los vicios aparentes. En cuanto a los ocultos o a las diferencias que no pudieron advertirse en el momento de la entrega, se autoriza al dueño

para que los denuncie dentro de los sesenta días de haberlos conocido.

Después de reunir en un artículo los preceptos del Código sobre la terminación del contrato, se prescribe que las normas de este título serán aplicables a los arquitectos o ingenieros que proyecten o vigilen las obras.

TÍTULO VIII

Del corretaje

El Código Civil no legisla en particular sobre el corretaje, y las disposiciones del Código de Comercio no suplen este vacío, tanto más sensible ante la frecuencia de operaciones de suma importancia, como las que versan sobre inmuebles (venta, hipoteca, arrendamiento, etc.) y también las que se relacionan con las agencias de colocaciones y en general, con todo el ramo del trabajo.

Por ello el Anteproyecto, imitando a los códigos alemán y suizo contiene diversas reglas, que hemos reproducido con ciertas reformas.

Determinamos los casos en que es obligatorio el pago de comisión, a quien indique la oportunidad de celebrar un contrato o sirva de intermediario para tramitarlo, agregándose que los gastos del corredor no serán reembolsables a falta de pacto expreso.

Para prevenir los abusos que suelen cometerse, explotando la necesidad de las personas, especialmente en los contratos de trabajo y en la venta de tierras, incorporamos un precepto que hacemos extensivo a todos los supuestos en que la retribución sea desproporcionada, autorizando al juez para reducirla a pedido del deudor.

Por último, se legisla sobre las circunstancias que hacen perder al corredor todo derecho a retribución y al pago de los gastos en su caso y se dispone que las reglas del contrato de trabajo serán aplicables en lo pertinente al corretaje.

TITULO IX

Del mandato

CAPITULO I

Disposiciones generales

A pesar del Anteproyecto, que adopta la solución del código suizo, consideramos el carácter representativo como esencial en el mandato, siguiendo así la doctrina de Vélez (ver nota al art. 1871).

La circunstancia de haberse incluido en la parte general un título sobre la representación, evita reproducir en el presente, numerosos artículos que han sido colocados en aquél. Los que conservamos del Código han sido en su mayor parte modificados por lo que se refiere a su forma.

Quedan suprimidos los distingos que los arts. 1877 y 1878 señalan entre presentes y ausentes, para presumir si el mandato ha sido o no aceptado.

Exigimos poder especial para los actos que se relacionan con el derecho de familia, cuando ellos son susceptibles de celebrarse por medio de terceros. En cada caso se determinan los requisitos necesarios.

Al finalizar el capítulo se dispone que las reglas de este título se aplicarán a las procuraciones judiciales, quedando prohibido a los abogados y mandatarios de aquella índole, el pacto de *quota litis*. Se autoriza también a los jueces para fijar el estipendio que corresponda al apoderado, a falta de convenio, así como para reducir el establecido, cuando fuere excesivo.

CAPITULO II

Del efecto del mandato

Comienza este capítulo por puntualizar las obligaciones del mandatario, de acuerdo con el Código Civil, cuyos preceptos han sufrido tan sólo variantes de redacción, salvo contados casos.

En cuanto a las ganancias provenientes de un mandato contrario a las leyes, se aplica el mismo criterio que se ha indicado al tratar de la causa torpe en el pago indebido.

El art. 1921, ha sido aclarado y simplificado, teniendo en cuenta que para el mandato solidario rigen los principios relativos a las obligaciones de este carácter, que es inútil repetir. La fuente del artículo citado, según lo explica Bibilioni en su nota, dispone que si uno de los mandatarios causare daño al proceder por separado, la responsabilidad le incumbe exclusivamente. Así lo proyectamos.

CAPITULO III

De la cesación del mandato

Los artículos actuales aparecen reproducidos con algunos cambios de redacción.

TITULO X

De la gestión de negocios ajenos

El concepto excesivamente elástico del art. 2288 ha sido objeto de una doble limitación: exigimos primero que se tra-

te de un asunto ajeno, que el dueño no esté en condiciones de atender o dirigir, y segundo, que el gestor deba dar aviso previo, siempre que ello fuere posible, absteniéndose de intervenir mientras no reciba respuesta, salvo caso de urgencia.

Se cumple, así, el propósito de colocar esta figura dentro de su verdadera finalidad, que ya fijara el derecho romano, o sea la de evitar mediante la ingerencia oficiosa de terceros, los daños que una persona pudiera sufrir por desatender sus intereses en un momento dado, o en virtud de una situación de imposibilidad que suele prolongarse.

No hemos creído necesario puntualizar las circunstancias en que debe considerarse cumplido el primer requisito. El peligro de que los extraños se inmiscuyan sin razón atendible en los asuntos ajenos, se evitará así con el régimen adoptado dentro de este título.

Si el gestor actuare antes de obtener respuesta, será responsable de cualquier daño, aun si proviniera de caso fortuito. Sin embargo podrá proceder, no obstante la negativa del dueño, cuando un deber de orden público, o de dar sepultura, o de prestar alimentos, corrieran el riesgo de no ser cumplidos en tiempo útil. Siempre que la gestión hubiera tenido la finalidad de evitar un peligro inminente, el resarcimiento se limitará al supuesto de dolo o de culpa.

El art. 2302 queda simplificado, al comprender dentro de sus términos todos los casos en que se no se tenga propósito de cobrar. Se considera que no hay gestión cuando alguien entienda manejar sus propios asuntos o los comunes a él y otro. No podrá entonces, reclamar contra el dueño, sin perjuicio de que éste pueda hacerlo a su vez contra el que intervino en sus negocios.

En cuanto al art. 2306, lo suprimimos, porque no es exacto con tal amplitud, y contradice además la doctrina de la gestión de negocios según lo demuestra Bibiloni en su nota. No es suficiente que un gasto haya sido útil a otro, para cobrárselo, pues no habría gestión, y no debe permitirse a los terceros que intervengan libremente en los intereses ajenos. Los abusos que pudieran producirse se corrigen con la aplicación de las reglas sobre el enriquecimiento sin causa.

TÍTULO XI

Del depósito

El carácter real que nuestro Código atribuye al contrato de depósito, ha sido conservado en el Proyecto. Sin embargo, para salvar algunos inconvenientes que de ello derivan, se dispone que la negativa a recibir la cosa por quien se hubiere obligado a guardarla, dará lugar a resarcimiento.

Se admite que el depositario tenga derecho a remuneración cuando lo estipuló expresamente, o si recibiere depósitos en forma habitual, lo que no desnaturaliza los caracteres de esta figura jurídica. Se diferencia entonces de la locación por la naturaleza del servicio, aparte de que el contrato sería real.

Casi todos los artículos del Código han sido reproducidos con cambios de forma.

TÍTULO XII

Del préstamo

Dado que el comodato y el mutuo están sujetos a varias reglas comunes, la Comisión ha resuelto reunirlos bajo un mismo título. Este procedimiento ofrece la ventaja de simplificar la reglamentación.

CAPÍTULO I

Del comodato

El código ha experimentado pocos cambios en lo que concierne a este capítulo. Entre las reformas conviene señalar

lar la que proponemos en cuanto a la segunda parte del art. 2256, para establecer la doctrina opuesta, que es la aconsejada por el Anteproyecto. El Código no reconoce efecto jurídico a la promesa de comodato y exige en todos los casos, la entrega del objeto. Desde luego para perfeccionar el contrato es indispensable este último requisito, pero ello no impide acordar validez a la obligación aludida, como lo admite la doctrina contemporánea. Exceptuamos la hipótesis de que sobrevenga alguna modificación en la fortuna de quien deba recibir la cosa, y también los casos previstos en el art. 2284.

El art. 2265 ha sido modificado en cuanto a la terminología, para armonizarlo con la que se adopta en materia de posesión. De igual modo se ha procedido con el 2274, a fin de que se ajuste a la reforma sobre el ejercicio de la acción civil en los actos ilícitos.

CAPITULO II

Del mutuo

Por las mismas razones aducidas en cuanto al comodato, seguimos la regla opuesta a la del art. 2244, para establecer el carácter obligatorio de la promesa de mutuo. Autorízase desde luego, al prometiende, para negarse a la entrega cuando el que hubiera de recibir el préstamo experimentara una disminución de responsabilidad, susceptible de hacer peligrar el reintegro, como también si tal situación existiere al hacerse la promesa, ignorándola aquél.

El art. 2246 ha sido reformado, a fin de que la prueba del mútuo sea regida por los principios generales, como acontece en todas las legislaciones.

TITULO XIII

De la sociedad

Las disposiciones del Código han sufrido reformas de trascendencia en cuanto a la doctrina, y han sido agrupadas de una manera más metódica.

Entre las modificaciones de fondo, cumple mencionar la del art. 1653 destinada a establecer la nulidad del contrato, de acuerdo con Freitas, en lugar de limitarla a determinadas cláusulas. Separándonos del Código, incluimos entre las causales de ineficacia, las contenidas en el art. 1654 incs. 2 y 3, por ser la primera incompatible con el 1652, y la segunda, opuesta al sistema hereditario admitido por Vélez y por este Proyecto.

No obstante, la sociedad nula por cualquiera de los motivos indicados en los respectivos artículos, podrá producir el efecto de otro contrato, si como tal pudiere valer.

El inc. 4º del art. 1654 es peligroso para los herederos. en cuanto favorece la simulación en perjuicio de ellos. Por lo tanto, no se autoriza a las partes para señalar una cantidad determinada, pero sí la que resulte del último balance, cláusula que el uso consagra y que garantiza los intereses de todos.

Entre las estipulaciones válidas, insertamos la que permite a uno o varios de los socios capitalistas, responder solamente con su aporte en caso de pérdida del patrimonio común, siempre que por lo menos uno de los miembros lo haga ilimitadamente.

Los socios podrán alegar entre ellos la nulidad de los contratos ilícitos, con el fin de eximirse de cumplir las obligaciones emergentes; pero según el criterio establecido para casos análogos, si bien pueden retirar sus aportes, las utilidades así obtenidas, deben ingresar en el tesoro de las escuelas primarias de la Nación o de las provincias.

Para prevenir los litigios que pudieran suscitarse cuando se trata de resolver si una sociedad es civil o comercial, enuméranse en el Proyecto las comprendidas en la primera categoría. Figuran entre ellas las que tienen por objeto constituir derechos reales sobre inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento, habiéndose excluido las que se ocupan de construir edificios, según lo tiene establecido la jurisprudencia. Son también civiles las dedicadas a la industria ganadera o agrícola o forestal, las de artesanos o profesionales para el trabajo o ejercicio de las actividades de los componentes, las que sostienen establecimientos educativos o los explotan, así como los yacimientos o aguas minerales o termales.

Exigimos la forma escrita para la validez del contrato, modificando en tal sentido el art. 1662, primera parte, y su correlativo el 1663, todo según lo propone Bibiloni.

Se determina además, la inscripción en el Registro para las sociedades a que se refiere el art. 1185 inc. 3 y 10, y en cuanto a las de comandita simple, cuando cada aporte comanditario sea mayor de mil pesos y menor de dos mil, siempre que constare en instrumento privado. Si bien la falta de aquel requisito no invalida el contrato, impide en cambio a la entidad obtener el dominio sobre los bienes raíces que allegaren los socios. No podrá tampoco en tal caso, oponerse a terceros cualquier escrituración que difiera del régimen establecido en el Código sobre la materia, o que restrinja los derechos de aquéllos contra la compañía o los miembros, así como los poderes conferidos al administrador.

En los demás artículos, hemos salvado algunos errores notorios y aclarado varios preceptos. Exceptuamos así, al comanditario, de lo prescripto en el 1713. Incorporamos también lo dispuesto en el 364 del Código de Comercio, que debe ser un principio general para todas las sociedades. De igual modo, se llenan diversas omisiones del Código, como la referente a las ganancias del socio industrial, a falta de cláusula en el contrato.

TÍTULO XIV

De los contratos aleatorios

Bajo este epígrafe hemos reunido en dos capítulos, las disposiciones referentes al juego y apuesta por una parte, y por otra, la renta vitalicia, que es también de carácter aleatorio.

CAPÍTULO I

Del juego y apuesta

Después de reformar el art. 2051, en cuanto dispone erróneamente que el riesgo puede referirse a uno solo de los contratantes, se determina en forma categórica, que no se con-

cederá acción por deudas de este origen, aunque el juego o apuesta se realizaren con permiso de la autoridad administrativa. En efecto, no pudiendo quedar supeditado el Código Civil a las reglamentaciones locales, no es suficiente que una de ellas los permita, para considerarlos lícitos.

Sin perjuicio de tales preceptos, se conserva la excepción del art. 2055 para los juegos que impliquen ejercicios corporales, que deben ser estimulados, y no pueden confundirse con los de mero azar.

La norma del art. 2057 ha sido extendida a la transacción, y se modifica el 2060 con el objeto de comprender en este capítulo el préstamo contraído con un tercero, sabedor de que lo hacía para jugar o apostar.

CAPÍTULO II

De la renta vitalicia

Con arreglo al Anteproyecto y al art. 1969 francés, se autoriza la constitución de renta vitalicia a título gratuito, por donación o testamento, debiendo regir entonces las normas especiales para esos actos, y en subsidio, las de este capítulo. Habrá donación cuando las prestaciones periódicas sean inferiores o iguales al interés legal del dinero o a la renta de los bienes entregados. Este precepto tiene como fuente el artículo respectivo del Anteproyecto.

Los arts. 2087 y 2088 aparecen modificados, para que armonicen con la posibilidad de rentas vitalicias constituidas a título gratuito.

TÍTULO XV

De la fianza

En el caso de obligaciones eventuales o de valor incierto, hemos exigido, de acuerdo con el art. 493 suizo, que se fije una suma limitada, dentro de la cual quede obligado el fiador. Es una restricción necesaria a la libertad de contratar, para prevenir consecuencias imprevistas y desproporcionadas.

La redacción del art. 1993 no traduce exactamente la regla que tuvo en mira: la garantía de la indemnización emergente de un acto ilícito. Ha sido aclarado el texto en tal sentido.

Según las opiniones de Laurent y de Baudry Lacantinerie, invocadas por Bibiloni, queda suprimido el art. 1990, que consagra la tesis contraria a la sostenida por aquellos autores.

Las demás disposiciones del Código han sido casi siempre reproducidas, si bien en un orden más lógico y con una redacción más clara, tendiente a evitar las dificultades que han surgido al aplicar las actuales.

Con respecto a la extinción de la fianza, hemos incorporado un artículo, a fin de resolver los casos tan frecuentes de los contratos de locación en que se establece un término para la garantía. Se entenderá en tal supuesto, que el fiador responde también por el tiempo necesario para el desahucio. De tal manera, la fianza alcanzará efectivamente los propósitos que se tuvieron en mira al exigirla.

En el art. 2046 hemos agregado un párrafo, a fin de excluir aquellas prórrogas tendientes a facilitar el pago de los atrasos, cuando ellas no excedieren de dos meses.

Se determina igualmente, que la falta de aviso al fiador, sobre la demora en que hubiere incurrido el obligado siempre que adeudare más de dos períodos, produce la extinción de la garantía para el futuro.

TÍTULO XVI

De las transacciones

La primera reforma que proponemos en el presente título, tiende a permitir que por la transacción se extingan no solamente las obligaciones, sino también todo género de derechos patrimoniales: cuestiones de dominio, reivindicación, prenda, hipoteca o cualquier gravamen; herencias abiertas e intereses pecuniarios vinculados con las cuestiones de estado. Suprimimos diversas reglas, que se limitan a repetir principios ya establecidos en otras partes del Código, como las que contienen los arts. 839, 848, 849, 851, etc.

El art. 838 ha sido modificado en cuanto a las transacciones celebradas por escritura pública, pues se les reconoce validez entre las partes, aun antes de ser presentadas al juez de la causa; no así, respecto de terceros.

Queda eliminada la incapacidad que prescribe el art. 841 respecto de los menores emancipados, pues les son permitidos en principio todos los actos de la vida civil y pueden realizar transacciones con la venia del juez.

De acuerdo con el Anteproyecto se extiende la regla del art. 853 a los deudores y acreedores en las obligaciones indivisibles, y a todos los que puedan invocar las sentencias recaídas en litigios a que fueren extraños.

TÍTULO XVII

De la evicción

La garantía de evicción reconoce por causa, determina actos jurídicos y en particular, los contratos a título oneroso, de los cuales es una consecuencia natural. La ubicación del correspondiente título dentro del Código, debe pues, responder a este principio, y no al criterio de Freitas que la consideraba como derivada de los hechos que no son actos, sistema que refuta acertadamente Bibiloni.

Casi todas las reglas generales del Código quedan subsistentes, salvo algunas suprimidas por innecesarias, como los arts. 2090, 2094, 2113, 2114, y otras pocas, modificadas para mejorar la doctrina. Esto último ha ocurrido con el art. 2095, que peca por su vaguedad. En su reemplazo se determina que si el derecho que causó la evicción fuere de origen anterior a la transferencia de la cosa, pero adquirido luego, no responderá el que transmitió o dividió los bienes cuando llegare a consolidarse por incuria del vencido. Los jueces, en presencia de las circunstancias, resolverán si procede o no hacer efectiva la responsabilidad.

Respecto de las disposiciones especiales, hemos eliminado muchas que figuran en otros títulos o que contradicen las normas contenidas en éstos. Entre las últimas, cabe señalar las que figuran en los arts. 2135 y 2136, inspirados en Massé y Vergé, cuya opinión no aceptan los demás autores. De acuerdo con la doctrina de Duvergier, Pont y otros.

no establecemos distinción entre las cosas destinadas a ser vendidas (art. 2135) y los objetos determinados, disponiéndose en cambio, que el socio podrá reemplazar el bien que hubiera perdido la sociedad en virtud de la evicción, por otro del todo semejante: de modo que respondería solamente por los demás daños producidos.

TITULO XVIII

De los vicios redhibitorios

El concepto subjetivo de estos vicios ha sido atenuado, al establecer que no procederá la responsabilidad cuando la disminución del valor fuere de poca importancia.

Hemos suprimido el art. 2165, que es una mera repetición. Añadimos un nuevo precepto referente a la venta sobre muestras o modelos, pues en tal caso deberá entenderse que las cualidades han sido garantizadas.

TITULO XIX

De las obligaciones abstractas

Bajo la denominación "promesa y reconocimiento de deuda", Bibiloni, inspirado en el código alemán, proyectó algunos artículos relativos a lo que en el derecho moderno se denomina "obligaciones abstractas", esto es, que existen por sí, con prescindencia de su causa generadora.

Agrupamos en el presente título estas normas con ciertos cambios de redacción, bajo el nombre últimamente indicado, por considerarlo más correcto y conveniente.

TITULO XX

Promesa pública de recompensa

De acuerdo con el Anteproyecto, hemos juzgado necesario reglamentar la promesa de recompensa, como estimu-

lo a la actividad humana y porque su difusión es cada vez mayor.

Cuando se hubiere ofrecido mediante anuncio público, retribuir o gratificar a quien llenare ciertas condiciones o ejecutare un hecho, el autor de la promesa quedará obligado a cumplirla, aun a favor de quien procediere sin interés por la recompensa. La revocación será admitida, mientras no se hubieren realizado los hechos o cumplido los requisitos exigidos y con tal de que se utilizare la misma publicidad. A pesar de que el Anteproyecto niega en tal caso, todo derecho a resarcimiento por daños o desembolso, proponemos, siguiendo al código suizo, que la retractación obligue al oferente a cubrir los anticipos realizados de buena fe, hasta concurrencia del monto de la promesa, a menos de probarse la imposibilidad del solicitante para obtener el resultado que se esperaba.

Las distintas situaciones que pueden presentarse en cuanto al plazo de la oferta, o al cumplimiento de la prestación por más de una persona, han sido previstas en diversos artículos, tomados del código alemán, y también se reglamenta cuanto se refiere a los concursos.

TÍTULO XXI

De la exhibición de las cosas

Nuestro Código menciona incidentalmente la **actio ad exhibendum** en el art. 2417, pero la limita a las cosas muebles.

Es necesario establecer una regla de carácter general que comprenda los documentos, a semejanza de las leyes españolas. Deben igualmente indicarse los casos en que procede la exhibición y los requisitos de la misma, para no dejar librada esta importante materia a los códigos rurales y de procedimiento. Así resulta del Anteproyecto, cuyas disposiciones hemos aceptado, con algunas reformas inspiradas en el proyecto franco-italiano.

LIBRO CUARTO

DERECHOS SOBRE LAS COSAS

En este libro, que aparece bajo un nuevo epígrafe, la transformación fundamental que introducimos siguiendo a Bibiloni, se refiere a la creación del Registro de Inmuebles. Fuera de ella, contiene otros cambios igualmente importantes.

Anotaremos aquí, que desaparece no sólo el título I "De las cosas consideradas en sí mismas o en relación a los derechos", que ya eliminara Bibiloni, sino también el que figuraba como I en el Anteproyecto: "De las cosas consideradas con relación a las personas", cuya materia, por razones de método, trasladamos a la parte general.

SECCION PRIMERA

DE LA POSESION

TITULO I

Disposiciones generales

Una reforma fundamental consagra este título, al abandonar la doctrina tradicionalista que inspiró a Vélez. Bibiloni ha expuesto en la nota respectiva, las razones que abonan este cambio que concuerda con el sistema de los códigos suizo y brasileño. La teoría objetiva anima las nuevas disposiciones, y de acuerdo con ella, esta figura jurídica no se legisla teniendo en cuenta únicamente que es el medio de llegar a la usucapión. Su fin es ahora más amplio: proteger

a aquel que ejerza un poder efectivo, pleno o no, respecto de todas o de alguna de las facultades inherentes al dominio.

Nuestro art. 1403 contiene un concepto preciso de la posesión, que no está en Bibiloni, pero que hemos considerado necesario sentar como consecuencia de la nueva teoría adoptada. Fijamos luego las situaciones del poseedor inmediato y mediato, procurando una mayor claridad que aquella que puede encontrarse en los códigos que sirvieron de modelo, incluyendo el alemán. La terminología que adoptamos: "poseedor mediato e inmediato", no impone como único supuesto para el primer caso, la transmisión realizada por un poseedor originario, comprendiendo también aquellas hipótesis en que puede existir la doble posesión sin una transferencia efectuada por el mediato al inmediato. En otros términos, para nosotros, posesión inmediata no equivaldrá siempre a posesión derivada.

Dentro de las disposiciones generales de este título, se agrupan los principios básicos de la materia, con las reformas doctrinarias que el cambio de concepto impone. Se determinan los casos en que se puede ejercer un poder de hecho, sin que él implique posesión; luego las cosas que son susceptibles de ser poseídas. Se reproduce el principio "posee porque posee" del 2363, y sus consecuencias relativas a la exhibición del título, con simples variantes de forma. Se incluyen igualmente las máximas tradicionales de los arts. 2353 y 2354, unidos en un solo texto, con cambios no solamente de forma, sino también con los doctrinarios indispensables. Aparecen eliminadas las definiciones de posesión legítima e ilegítima, tanto para evitar los conceptos puramente didácticos, como para prevenir la confusión que suelen traer aquellos que resultan paralelos. Se determina luego cuándo el poseedor será de buena o mala fe, con indicación de cómo ha de entenderse la buena fe del adquirente a título particular y la buena fe en cuanto a los frutos.

Las disposiciones adoptadas, han tendido al propósito de aclarar con exactitud los conceptos de la buena o mala fe, más necesarios aún con el sistema de registro que introduce el Código. De ahí la lógica con que se ha establecido que será poseedor de mala fe, no sólo el que conozca la ilegitimidad de su título, sino también quién debió conocerla, con la ven-

taja de que es menos difícil probar esto último que justificar lo primero. Se reproduce el art. 2357 aligerado en la forma y reemplazando las "razones suficientes" por "razones atendibles", que evita el carácter demasiado subjetivo de la "creencia razonable" con que lo substituye Babiloni.

El Proyecto se aparta del criterio del art. 2360, que determina que en la posesión de las corporaciones y sociedades, aquélla será de mala fe cuando el mayor número de sus miembros supiere la ilegitimidad de esa posesión. Se resuelve aplicar en estos casos la regla del título de la representación, esto es, que las consecuencias jurídicas de una declaración de voluntad, ya por vicios de la misma ya por haberse conocido o debido conocer determinadas circunstancias, serán consideradas en la persona del representante y no en la del representado.

Contiene el capítulo disposiciones relativas a la posesión viciosa y a la posesión clandestina, para terminar con otros preceptos que establecen que si fueren varios los poseedores de una cosa, la naturaleza de la posesión se juzgará respecto de cada uno de ellos, y que no pueden poseerse a título de dueño, partes materiales de cosas que integren un solo cuerpo, sin perjuicio de que en la posesión de éstas por otro título, la de partes materiales y determinadas se juzgue según la naturaleza y contenido del derecho que se ejerza. Es una aplicación del nuevo concepto posesorio que inspira al Proyecto, y que lógicamente tenía que apartarse del art. 2405.

TÍTULO II

De la adquisición y pérdida de la posesión

Se reúnen aquí, algunas de las disposiciones que Vélez separa en dos capítulos, al tratar en el primero, cómo se adquiere la posesión, y en el segundo, cómo se conserva y pierde.

El concepto de la aprehensión se ajusta al que inspira la nueva doctrina, cuidando sin embargo, de no circunscribir en una definición, lo que necesariamente debe resolverse con

la amplitud de criterio que requieren las cuestiones de hecho. La reducción de artículos no sólo aparece favorecida por el método empleado, sino también porque han debido eliminarse muchas disposiciones del Código, incompatibles con el Proyecto; porque otros han encontrado mejor ubicación en los capítulos referentes a la entrega e individualización de las cosas designadas por su género o cantidad, o bien porque han sido trasladados al título del pago.

Determinados los actos posesorios, se prevé la transmisión de la posesión, contemplando los casos en que ella se efectúa a los sucesores universales, aquellos en que puede producirse por convenio entre poseedor y adquirente, como también supuestos en que la posesión mediata puede ser transferida al poseedor inmediato o a cualquier otra persona. Nos ocupamos luego de la capacidad para las transmisiones, del caso en que dos o más personas tomen en común la posesión de una cosa, de los principios que reglan la forma en que se conserva la posesión, y finalmente, de los hechos que causan su pérdida.

Un precepto nuevo, obliga al poseedor inmediato a entregar la cosa al mediato, terminada su posesión de acuerdo con el título o causa constitutiva, pero le reconoce la facultad de retenerla, si tuviere derecho a retribución o a reembolso por gastos o mejoras.

TÍTULO III

De las obligaciones y derechos inherentes a la posesión

El Proyecto se limita en este punto, a determinar las facultades y obligaciones que corresponden a quien ejerciere la posesión de una cosa a título de derecho real, para luego establecer que esos mismos derechos y obligaciones se extienden a los poseedores a título personal, en tanto lo permita la naturaleza de los derechos en cuya virtud posean.

Queda, como se ve, fuera de este capítulo, toda la materia relativa a la presunción de propiedad de las cosas mue-

bles, que legislan los arts. 2412 y siguientes del Código. Estos textos se colocan en supuestos de una acción reivindicatoria ya que tienden en realidad a amparar el dominio.

Siguiendo a Bibiloni, se han trasladado también a otros capítulos, los artículos referentes a la adquisición de frutos y a las indemnizaciones a que puede dar lugar la sentencia que se dicte en el juicio reivindicatorio.

TITULO IV

De las defensas y las acciones posesorias

El Proyecto reproduce con más orden, la mayoría de los principios que contiene el Código, y luego de fijar el alcance del **jus possidendi** conferido por un título válido, y de señalar que el hecho de la posesión acuerda el derecho de protegerse en ella, modificamos la norma del art. 2471, para evitar que se confundan el derecho de poseer y el hecho de la posesión. El nuevo texto reproduce la primera parte de aquél, estableciendo que para el caso de que fuere dudoso el estado de la posesión entre el que se dice poseedor y quien pretenda despojarlo o turbarlo, se juzgará que la tiene quien probare una más antigua; pero se modifica la segunda parte, evitando la confusión doctrinaria a que antes se aludiera, disponiéndose que cuando no fuere posible determinar quién tiene la posesión actual, o cuál de las dos es la más caracterizada, el juez ordenará que las partes ventilen su derecho en el petitorio, disponiendo el secuestro de la cosa a las resultas de aquel juicio.

Como un principio básico, se determina que comete acto ilícito quien sin consentimiento del poseedor, le turbare en la posesión o le privare de ella, a menos que hubiere procedido autorizado por la ley. Luego el Proyecto establece con claridad, los requisitos para las acciones posesorias, prescribiendo que la posesión que dé lugar a ellas debe ser pública e inequívoca, sin exigir la buena fe. Asimismo, nos apartamos del Código respecto de la anualidad, aceptando para no establecerla los motivos que expone Bibiloni para rechazarla, concordando con los códigos alemán y suizo.

Se determina luego qué poseedores no pueden ser protegidos, y se metodizan en un solo texto las normas con arreglo a las cuales, el turbado o desposeído que tuviere derecho a poseer, podrá intentar la acción **in rem** que le compete o servirse de las acciones posesorias.

Una modificación del Proyecto consiste en permitir las acciones posesorias respecto de los muebles, excluidas por los arts. 2487 y 2488. Con ello juzgamos que se obtendrá una defensa más rápida que la derivada del actual art. 2412.

El cambio de doctrina respecto de la posesión, explica las modificaciones introducidas en el art. 2489. El nuevo texto permite a cualquiera de los coposeedores, las acciones posesorias contra terceros sin el concurso de los otros, y también contra éstos, si le excluyeren o turbaren en el ejercicio de la posesión común. Nótese que aquí no se exige, como en el 2489, que el coposeedor manifieste pretensiones a un derecho exclusivo sobre el inmueble. El nuestro es más amplio, no sólo porque se refiere a todo coposeedor, sino también porque le permite el ejercicio de la acción, siempre que fuere excluido o turbado de hecho, sin preocuparse de que estos actos se realicen con o sin **animo domini**.

Se generaliza para todas las acciones posesorias, el plazo del año que el 2493 establece sólo para la de despojo. El nuevo precepto decide que las acciones posesorias, se extinguirán por no haberse deducido dentro del año siguiente al hecho que las autorizare, añadiendo como otra causa de extinción, la sentencia firme posterior a los hechos, siempre que decidiere que al autor de ellos le asistía un derecho sobre las cosas, susceptible de facultarle para exigir el restablecimiento de la posesión.

Se acuerdan las acciones posesorias a favor de quienes posean partes materiales de una cosa, como también a los poseedores mediatos, quienes podrán ejercerlas por hechos producidos contra el poseedor inmediato. Por fin, se puntualiza el carácter sumario del juicio, disponiéndose que la sentencia se tendrá por definitiva, salvo el derecho de las partes para intentar las acciones reales que pudieren corresponderles. Con ello pondremos término a la discusión doctrinaria, acerca de si existen una o dos instancias en materia posesoria.

SECCION SEGUNDA

DE LOS DERECHOS REALES

TITULO I

Disposiciones generales

Este capítulo se limita a establecer que la ley es la única fuente de los derechos reales, y a enumerar luego cuáles son ellos. En esa nómina se incluye, siguiendo a Bibilini, una categoría nueva: los censos.

TITULO II

De la inscripción y de la prenotación de los derechos reales sobre inmuebles

La modificación fundamental que el Proyecto introduce en este libro, explica que en el título de los derechos reales figure un capítulo destinado al régimen inmobiliario.

Exigimos, sentando un principio general, que para transferir el dominio de un inmueble, gravarlo con derechos reales y transmitir o afectar estos últimos por actos entre vivos, será necesario primero, el consentimiento de las partes sobre esa transmisión o afectación, y segundo que a ese acuerdo de voluntad siga la correspondiente inscripción en el Registro de Inmuebles. El contrato no inscripto, engendrará únicamente obligaciones personales, y sólo cuando fuere otorgado por escritura pública, autorizará a exigir la inscripción.

Conviene destacar que el texto, siguiendo la llamada teoría del consentimiento, sólo requiere como necesario el

acuerdo de las partes sobre la transmisión o afectación, prescindiendo de que el contrato sea o no válido. La doctrina que informa el principio, separa así, los efectos reales del acto en que ellos se originan, de los contratos en que podría buscarse su causa, lo que implica que el valor de la inscripción dependerá exclusivamente del acuerdo abstracto de las partes. El asiento del Registro, de este modo se independiza de los vicios que pueda tener el título en cuya virtud se efectuará. La nulidad o anulación del contrato, sin afectar entonces la validez de la inscripción, podrá originar sólo acciones personales entre los contratantes. El texto exige exclusivamente el consentimiento, desligándolo de la causa jurídica, y evita que la enajenación o la constitución de un derecho real, pueda sufrir las consecuencias de la nulidad del título que los determinara. La teoría del código alemán es, por consiguiente, la fuente inspiradora del Proyecto.

Separadamente se prevén dos categorías de asientos: las inscripciones y las prenotaciones. Las primeras referentes a los actos firmes, las otras a derechos en potencia o no efectivos. Metódicamente se trata en primer término, lo relativo a las inscripciones; los actos jurídicos que deben necesariamente inscribirse, los efectos de la inscripción y el caso de la renuncia a un derecho real sobre inmuebles, como también el supuesto en que se intente efectuar la inscripción de un derecho, sin estarlo el que le sirva de antecedente. Por fin, un texto determina que la acción reivindicatoria del legítimo propietario o cualquiera otra real, así como las de nulidad, resolución o revocación de los actos jurídicos y la de reducción de las donaciones, no podrán intentarse contra terceros ni producir efectos en cuanto a ellos, salvo el supuesto que prevé el artículo.

Los preceptos que siguen se ocupan de las prenotaciones. El Proyecto determina los casos en que podrán efectuarse, para tratar luego del efecto de las mismas, considerando también el alcance que corresponde atribuir al conocimiento de los terceros sobre la existencia del derecho, por otras vías que las del Registro.

Otro artículo enumera los dos fines que pueden llevar las prenotaciones: primero, asegurar el establecimiento, modificación, gravamen o extinción de un derecho real inmobiliario, o para alterar su rango, y segundo, dar seguridad

a los derechos reales o a los actos jurídicos que los modifican, sujetos a condición suspensiva o resolutoria, y que por tal causa no pueden inscribirse.

Si comparamos el contenido de este capítulo con el párrafo simétrico del Anteproyecto, podrá notarse que se ha eliminado el art. 22 de Bibiloni, que permitía al acreedor de toda clase de créditos, solicitar judicialmente una prenotación, para asegurar el cumplimiento de ellos. Bibiloni agregaba que en tal caso, la prenotación produciría el efecto de limitar la capacidad del deudor para disponer de sus bienes en perjuicio del acreedor.

Esta conducta responde a un propósito: hemos querido separar del capítulo esta clase de prenotaciones, por entender que el lugar más apropiado para ellas, se encuentra en la ley de Registro, donde aparecen trasladadas.

TITULO III

Del dominio en general

CAPITULO I

Disposiciones generales

Nuestro capítulo introduce modificaciones al proyecto de Bibiloni, que tan de cerca siguiera al Código en esta materia, al reproducir una disposición tan justamente criticada como la del art. 2513. Mantenemos los caracteres tradicionales, pero evitamos aferrarnos al régimen asaz individualista del Código.

El contenido social que hoy inspira el derecho, explica que hayamos suprimido los arts. 2513 y 2514; que hayamos modificado, siguiendo al código del Brasil, el art. 12 del Anteproyecto, relativo a la extensión del derecho de propiedad; como también que contempláramos con Bibiloni, el caso bien frecuente del propietario de un fundo que al construir en él sin dolo o negligencia grave de su parte, invade la propiedad vecina. Al mismo propósito, responde el

artículo que prohíbe al propietario impedir a otro el uso de su cosa, cuando le fuere indispensable al segundo para evitar un peligro actual, incomparablemente mayor que el daño que sufra con ello.

También traduce nuestro Proyecto otra idea fundamental que nos guiara: evitar en lo posible que la propiedad resulte gravada o sujeta a condiciones o términos. De ahí, que luego de reproducir las prohibiciones contenidas en los arts. 2614 y 2617 del Código, trasladados del título "De las restricciones y límites del dominio" y concretadas en un solo artículo, establezcamos que las condiciones resolutorias, que permitieran resolver el dominio a voluntad del propietario enajenante, han de entenderse limitadas al término de cinco años, aunque no pudiera realizarse el hecho previsto, dentro de aquel plazo, o éste sea mayor o incierto. Fijamos también igual término para los fideicomisos simples, y determinamos que las prohibiciones de enajenar y las cláusulas de no poder ser vendidos los bienes en caso de ejecutarse por deudas, se tendrán como no escritas, y el dominio por definitivo desde su constitución.

El capítulo contiene un precepto en el cual se han reproducido en orden lógico los arts. 2520 y 2519, pero corrigiendo el último para evitar la doctrina equivocada que él contenía. Así no decimos que las construcciones, plantaciones y obras existentes en la superficie se presumen hechas por el propietario, y que a él le pertenecen si no se probare lo contrario. Nuestro texto dispone que ellas corresponden al propietario, sin admitir prueba en contra, sin perjuicio del derecho de los usufructuarios y locatarios y de las indemnizaciones que procedan a favor de tercero, según las reglas de este Código.

Acercas de la expropiación, podrá notarse el cambio que nuestro artículo introduce con respecto al correlativo del Código. Decimos en vez de la clásica fórmula de Vélez (nadie puede ser privado de su propiedad) "nadie puede ser privado del dominio o de alguna de sus facultades", etc. Con ello, hemos querido enunciar el principio con más flexibilidad, previendo no sólo la expropiación de la cosa que legisla el Código, sino también la que pueda establecerse limitada al uso y goce considerados como desmembraciones del derecho

del propietario. Las leyes que han permitido la construcción de subterráneos han dado la pauta en tal sentido. Quiere decir que, en estos casos, no habrá expropiación de parte del subsuelo, sino que éste se encontrará sujeto a restricciones simétricas a aquellas que, en otro supuesto, restringen el derecho de los propietarios ribereños: los caminos de sirga, y como los titulares conservarán el dominio, si llegare a cesar la obra que motivó tales limitaciones, podrá entonces retornar al uso exclusivo de todas sus facultades.

CAPITULO II

De la adquisición y pérdida del dominio sobre inmuebles

Hemos modificado nuestro primitivo plan, ya que al discutirse este libro, se había resuelto tratar separadamente la adquisición y la pérdida del dominio. Razones prácticas así lo aconsejaron, fuera de que las más de las veces, cuando al quien adquiere el dominio, es porque otro lo pierde.

El Proyecto enumera los medios de adquirir la propiedad inmueble, para determinar luego que la transmisión del dominio cuando fuese convenida entre el enajenante y el adquirente, ha de realizarse por la inscripción del acuerdo en el Registro. Se explica que el cambio de sistema haya eliminado a la tradición, indispensable en el Código.

Consideramos el acuerdo de las partes en el sentido de que la transferencia comprenda a los accesorios del inmueble. Determinamos luego, que los principios generales sobre la posesión de las cosas muebles, regirán en caso de que el adquirente se hubiere apropiado de accesorios que no pertenecieren al enajenante o que estuvieren gravados en provecho de terceros.

El penúltimo artículo contiene una enumeración de los modos como se pierde el dominio, y el último dispone que los inmuebles abandonados pertenecen al Estado Nacional o a las provincias en cuya jurisdicción inmediata se encuentran, previendo con Bibilóni que si lo abandonado fuere la parte de un condominio, ella acrecerá proporcionalmente a la de los otros comuneros.

§ 2. — Del aluvión y de la avulsión

Siguiendo al Anteproyecto nos separamos del Código, concediendo a favor de los particulares los acrecentamientos que reciban las heredades confinantes con ríos navegables o no, arroyos y torrentes, cuando él se produjere por efecto de la sedimentación o retiro natural de las aguas, regla que se aplica también a los lagos.

Al enumerar los aluviones que corresponden al Estado, indicamos en el inc. 1º al que accediere a un camino del dominio público. Al limitar a este punto la disposición del art. 2575, eliminando toda referencia a la Municipalidad, aceptamos las observaciones de Bibiloni en su nota al art. 22, considerando que no corresponde al Código Civil determinar cuáles son los bienes municipales o cuáles han de serlo. También se notará que nuestro Proyecto no habla del aluvión que se produce paulatina e insensiblemente, como lo hicieran los arts. 2572 y 2573, pues compartimos la teoría de Demolombe, que sólo exige que el depósito sea el resultado de fuerzas naturales.

También se prevé la formación de una isla debida a corrientes de aguas que, al abrirse un nuevo cauce, la separan del primitivo fundo, para disponer que mientras ella pertenecerá al dueño de la tierra, el álveo entrará al dominio público sin indemnización.

Un artículo especial referente al cauce abandonado, decide que si lo fuere por las aguas de los ríos y lagos, pasará al dominio privado de la Nación, perteneciendo a los propietarios ribereños si fuere de arroyos y lagunas.

§ 3. — De la edificación y plantación

La principal reforma en este párrafo, consiste en la agrupación que él contiene de reglas que aparecían ya en esta parte del Código, ya en la correspondiente a las obligaciones y derechos del poseedor de buena o mala fe, las que hemos reunido y armonizado.

El texto prevé los casos que pueden presentarse, a saber, que se plante, siembre o edifique en terreno propio con material ajeno, el que se lo haga de buena fe en tie-

rra ajena, o bien de mala fe, o cuando concurre la mala fe del dueño y la del tercero. En lo que hace a la indemnización, se determina que cuando proceda el pago a quien hubiere sembrado, edificado o plantado en terreno ajeno, se fijará el monto, ateniéndose al mayor valor adquirido por la cosa con dichos trabajos, sin que la buena o mala fe modifique el criterio, pero determinando que en el primer caso, el dueño que quiera adquirir lo hecho y oponerse al **jus tollendi**, deberá pagar el rescacimiento, en tanto que en el segundo no estará obligado a hacerlo, y aun más, tendrá derecho para obligar al edificante a que reponga las cosas en el anterior estado.

La referencia a la acusación criminal que contenía el art. 2587, ha desaparecido en el texto correlativo, porque resulta extraña a la materia civil; pero en cambio, generalizamos el principio del **jus retentionis**, que consagra el art. 2440.

CAPITULO III

De la adquisición y pérdida del dominio de cosas muebles

§ 1. — De la apropiación

La tarea en este párrafo, se ha dedicado a simplificar y ordenar las disposiciones del Código, tanto en lo que se refiere a la apropiación de muebles sin dueño o cosas abandonadas, como en lo que hace a la caza, pesca y tesoros. La única modificación de importancia, consiste en haber eliminado la parte del art. 2532, que sanciona con excesivo rigor la conducta del que hallare una cosa perdida en la hipótesis en que se coloca el texto. Otro artículo considera apropiación ilícita a la que no se ajustare a las disposiciones que establece el Proyecto.

También se reduce el término que el art. 2535 concedía al dueño para presentarse a reclamar la cosa.

§ 2. -- De la especificación y la adjunción

El Proyecto ha abandonado el criterio que distinguía si la cosa nueva era susceptible o no de reducirse a su forma anterior, que el Código adopta en parte en su art. 2568.

Hemos preferido la teoría de los proculeyanos, y nuestro único artículo que se ocupa de la especificación, decide en todos los casos, que la propiedad de la *species nova*, quedará para el especificador, salvo el derecho del propietario de la materia para obtener lo que valiere aquélla, agregando el Proyecto, que en caso de mala fe tendrá derecho a ser indemnizado de todo daño, si no prefiriese tomar la cosa, pagando el mayor valor adquirido.

La doctrina del art. 947 del código alemán, que inspiró a Bibiloni, ha sido adoptada para precisar mejor el concepto de la adjunción, que existirá cuando las cosas estén unidas y formen un conjunto, esto es, partes integrantes de una sola.

Decidimos que el dueño de la principal lo será del todo, pagando el importe de la accesión, y previendo un caso no contemplado en el Código, aceptamos el principio de los arts. 572 y 573 del francés, estableciendo que cuando no fuere posible determinar cuál de las cosas es la principal, los dueños quedarán en condominio proporcionalmente al valor de ellas en el momento de la unión.

Aplicamos a la mezcla o confusión los mismos principios, para el caso en que las cosas fueren materialmente inseparables o cuando la división sólo pudiera hacerse con gastos desproporcionados. Se prevé que las lesiones sufridas por alguna de las partes, darán lugar a resarcimientos que se determinan según los casos, ya con arreglo a las normas del enriquecimiento sin causa, ya a las de los actos ilícitos.

Se contempla asimismo, el supuesto de que se tratare de cosas robadas o perdidas, para decidir que las disposiciones del capítulo, sólo se aplicarán al poseedor de buena fe que hubiere efectuado la especificación o adjunción.

Por fin, inspirados en el § 949 del código alemán, determinamos que cuando se extinguiere el dominio en las cosas objeto de especificación o adjunción, también fenecearán los otros derechos reales que las afectaren, continuando, si hubiere condominio, sobre la parte indivisa, pero se prevé la hipótesis de que el dueño de un objeto adquiera el conjunto o la nueva especie, y entonces los derechos se extienden a ella o al total.

§ 3. — De la adquisición de los productos y otras partes constitutivas de las cosas

En este párrafo, hemos reunido normas que se hallaban dispersas, para comprender dentro de él, las distintas situaciones que pueden presentarse. Sentamos, como es lógico, el principio general de que pertenecen al propietario de una cosa, los productos y las partes constitutivas de ella, aun después de separados, pero dejamos a salvo las excepciones relativas al poseedor de buena fe y a los terceros con derecho al goce. Los artículos siguientes no hacen otra cosa que metodizar la materia, y exponer las excepciones en los distintos casos que pueden presentarse. En ellos se establece, además, el modo y la oportunidad en que se adquieren tales frutos y productos, como también las indemnizaciones con que deben resarcirse los gastos efectuados para obtenerlos, contemplando la situación de quienes poseyeren inmuebles de buena fe, pero sin título como también la simétrica de los que fueren de mala fe.

§ 4. — De la tradición

Se establece como requisito necesario para que la tradición de una cosa permita adquirir el dominio, la existencia del acuerdo entre las partes. En otros términos, se vuelve al concepto de la **justa causa traditionis**, que sólo requería la voluntad coincidente, en el **tradens**, de transferir la propiedad, en el **accipiens** la de recibirla, lo que implica que el efecto traslativo se realizará entre las partes cuando se reuna ese requisito, con independencia del título o causa en virtud del cual hayan las partes podido llegar al acuerdo. Es una situación concordante con aquella que contemplamos al sentar en el título de los derechos reales, que para transferir el dominio de un inmueble, gravarlo con un derecho real y transmitir o afectar este último por actos entre vivos, se requiere también el simple acuerdo, que en ese caso se completa con la inscripción en el Registro.

Señalamos los casos en que no se requerirá la entrega material, agregando a las viejas excepciones del constituto

posesorio y la *traditio brevi manu*, el de la cesión de las acciones de restitución, determinándose las variantes que pueden presentarse. También encuentra ubicación en este párrafo, la regla según la cual aunque la cosa no perteneciere a quien la transfirió, el adquirente de buena fe la hará suya, salvo que fuere robada o perdida.

Siguiendo a Bibiloni, determinamos la improcedencia contra el adquirente de buena fe, de las acciones de resolución, nulidad o rescisión a que estuviere sometido el enajenante, salvo que se impugnare la validez del acuerdo y el vicio de nulidad excluyera la buena fe. Se prevé el efecto extintivo que la transferencia de la cosa produce, en lo que hace a los derechos reales que la gravaran, como también se determina en qué debe consistir la buena fe del adquirente y la oportunidad en que habrá de existir, como asimismo las cosas a las cuales no se aplican las disposiciones anteriores.

§ 5. — De la propiedad de los ganados y máquinas locomóviles

Este párrafo sólo contiene principios generales relativos a los ganados y a las máquinas locomóviles, porque la Comisión ha juzgado que las reglamentaciones sólo cuadran en una ley especial. Introducimos con el Anteproyecto, un cambio al sistema del Código, que comprende esta materia dentro de las reglas generales que corresponden a la posesión de cosas muebles, circunstancia que explica que las provincias hayan tratado de salvar ese vacío, no obstante que, como lo hace notar Bibiloni, carecen de facultades constitucionales para legislar sobre la condición jurídica patrimonial de los ganados, o para prescribir cuándo y cómo se adquieren y transmiten.

El Proyecto determina que la marca o señal, probará la propiedad del ganado mayor o menor que las llevar, en beneficio de quien la tuviere registrada, determinándose luego que la transferencia del dominio de los ganados, convenida entre el enajenante y el adquirente, deberá realizarse por la inscripción en el Registro.

Acerca de la propiedad de toda clase de máquinas locomóviles, el único artículo que la trata, la subordina también a igual inscripción en el registro respectivo.

CAPITULO IV

De la usucapión

Como ya lo expusimos en la parte general, nos hemos apartado de Babiloni y del Código, al separar la usucapión de la prescripción liberatoria. Juzgamos que la primera encuentra aquí un lugar más apropiado.

Tratamos primero la usucapión de muebles, luego de la de inmuebles, en este orden: primero la larga, después la corta, para considerar enseguida las disposiciones generales.

Llenamos un vacío al referirnos al término en que podrán usucapirse las cosas muebles que hubieren sido robadas o perdidas, y el de dos años que fijamos para aquellas cuya transferencia exigiere inscripción, se amplía en uno más, respecto de las que no requieran ese extremo; pero en los dos casos se exige posesión de buena fe continua, **animo domini**.

Reducimos a veinte años el plazo de treinta que establece el art. 4015, siempre que el inmueble o el derecho real se hubiere poseído de un modo público, continuo y excluyente. El mismo término fijamos para el caso previsto en los arts. 3460 y 3461, de modo que el coheredero o copartícipe en una masa de bienes y el condómino de un inmueble, podrán adquirir el derecho que detentaron a partir de la interversión que hubieren realizado, siempre que por tal causa cesare la indivisión.

Un artículo establece los extremos que habrán de observarse, en el trámite destinado a obtener el reconocimiento de la usucapión. Procuramos así, evitar para el futuro vicios asaz frecuentes en los juicios informativos, que han redundado en el descrédito de los títulos mediante usucapión. La circunstancia de que se trate del dominio y la materia se vincule a los demás derechos reales, nos ha permitido esta-

blecer esas normas, ya que estamos en un terreno en el que corresponde legislar a la Nación, aparte de que se evitarán con ellas los inconvenientes aludidos, protegiéndose a la propiedad con beneficio del crédito real. Al mismo propósito, responde el rigor con que se limitan las probanzas en esta clase de juicios.

Acerca de la prescripción corta, mantenemos los requisitos tradicionales, pero en lo que hace al tiempo, eliminamos, siguiendo a Bibiloni y al código suizo, el distingo entre presentes y ausentes.

Los textos del Código que reproducimos, han sido objeto no tan sólo de modificaciones de forma. Se notará en ellos, que aparecen adecuados a los principios que inspiran nuestro sistema de derechos reales.

Con el propósito de obtener una mayor seriedad, exigimos que, cuando para la perfección del título, fuera necesaria la forma instrumental, habrá de inscribirse el documento. La falta de éste, sólo podrá ser suplida con arreglo a lo que se dispone en el Proyecto, y en ningún caso por información de testigos.

Disposiciones relativas a la interrupción, completan el capítulo. Se reproducen allí los principios de los arts. 3984, 3985 y 3992, con modificaciones de forma.

TÍTULO IV

De las restricciones y límites del dominio

Este título, que en el Código contenía numerosos artículos, aparece muy reducido, no tan sólo porque la metodización permitió limitarlos, sino también porque los textos referentes a las aguas, han sido colocados en uno nuevo a continuación.

Eliminados los arts. 2612 y 2613 del Código, que no armonizan con los principios que sigue el Proyecto en materia de inmuebles, generalizamos el del 2618, para extenderlo a otras situaciones análogas y reemplazamos la norma del 2626, trasladándola al capítulo del condominio de los muros, donde encuentra ubicación más apropiada.

Dentro de este título, establecemos una regla que no figuraba en el Código, ni en el Anteproyecto. Ella tiene su origen en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios de la Capital Federal, que han contemplado el caso tan frecuente en la edificación moderna: las aberturas para recibir aire y luz que no constituyen vistas, y que acostumbran dejarse en los muros levantados a menos de tres metros del límite separativo de la finca vecina. Se dispone que en estos casos podrán dejarse dichas aberturas, pero siempre que ellas disten por lo menos un metro ochenta centímetros del suelo de la habitación o dependencia que benefician.

TÍTULO V

De las aguas

La importancia de la materia nos ha llevado a crear este título, para colocar en él todos los textos que se refieren a las aguas. Se legisla así el uso y goce de los lagos, la propiedad de las vertientes, caminos de sirga, las prohibiciones a los propietarios ribereños, el régimen de las aguas pluviales, etc.

Reproducimos el principio del 2349, pero de acuerdo con la ley de cabotaje, fijamos que la calidad de no ser navegable por embarcaciones de más de cien toneladas de registro bruto, es la que determinará que el uso y goce de los lagos se asigne a los propietarios ribereños. También se reproduce el régimen del camino de sirga del 2639, pero eliminando de esa restricción, a los propietarios limítrofes con canales. Es un punto que trata Bibiloni, con argumentos que aceptamos. Como novedad, en el artículo aparece un agregado que puntualiza, concordando con la jurisprudencia de la Corte, la naturaleza de esa restricción y así decimos refiriéndonos a los propietarios comprendidos en el artículo que "aunque conservan el dominio de esas bandas, no podrán levantar construcciones en ellas", etc. Resulta así claro, que el camino no priva de la propiedad a los titulares de dichos terrenos.

Podrá notarse que en nuestro artículo correlativo al 2637, aparece eliminada la última parte de éste, que suje-

taba a expropiación por causas de utilidad pública las aguas que brotando en fundos privados, fueren el principal alimento de un río o necesarias para algún pueblo. La supresión obedece al sistema que ahora proyectamos. Por lo demás, Bibiloni ha demostrado en su nota, cómo el codificador incurrió en lo que él llama grave y peligrosa inadvertencia. Nuestro Proyecto incluye dicho artículo prescribiendo que, cuando esos cursos de agua corrieren por cauces naturales, pertenecen al dominio público, no siéndoles permitido a los dueños de los terrenos cambiar su dirección, aunque se les faculte el uso de las aguas de esas fuentes, para las necesidades de su heredad.

TÍTULO VI

Del condominio

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

El texto con que se inicia el capítulo expresa que cuando la propiedad de una cosa perteneciere en común a varias personas, corresponderá a éstas, un derecho de condominio en la medida de su interés respectivo. Con este párrafo y el que sigue, hemos querido sin definir esta figura jurídica, precisar su concepto con más exactitud, dejando establecido que las proporciones de cada condómino constituyen lo que en el Código se denomina parte indivisa.

Suprimimos con Bibiloni el 2675, innecesario desde que el condominio se adquiere por los mismos medios que el dominio.

Podrá observarse que no aparece en el Proyecto la excesiva facultad que el art. 2677 acuerda a los acreedores, al permitirles que pueden vender la parte de un condominio antes de efectuarse la división entre los comuneros. Esta supresión concuerda con lo establecido al respecto, en el libro de las obligaciones.

Se enumeran en forma metódica y precisa, las facultades que corresponden a los condóminos, y se dispone que ca-

da uno de éstos podrá hacer valer frente a terceros, los derechos resultantes del dominio respecto de la totalidad de la cosa. Seguimos así la solución preconizada por Savigny y Windscheid, que conceptuamos la más conforme a la naturaleza jurídica del condominio. En realidad, es también la doctrina del 2679 del Código respecto de la acción reivindicatoria, si bien la limitación que traen otros textos del mismo cuerpo legal, han permitido interpretaciones distintas. Conforme con el Anteproyecto, establecemos que si la cosa hubiere de restituirse, la entrega se hará por consignación o secuestro por cuenta de todos los coparticipes, con arreglo a los principios sobre cosa juzgada en materia de obligaciones indivisibles. Bibiloni, en la nota respectiva, ha expuesto los motivos que le inclinan a apartarse de Savigny, quien sostiene que la sentencia de absolución del demandado, puede oponerse a los condóminos que no intervinieron en el juicio. Siguiendo a Windscheid y a Dernburg, conceptuamos que no debe hacer cosa juzgada respecto de los condóminos que no fueron oídos en juicio, esto es, aplicamos para el caso, las reglas comunes.

La incorrección que se nota en el art. 2690 ha sido subsanada, estableciéndose de acuerdo con Pothier — su modelo — que lo que se divide entre los demás condóminos, es la deuda y no la cosa, aclarándose que la cuota que por insolvencia de alguno se reparte entre los demás, es la que corresponde a obligaciones originadas por la indivisión.

CAPITULO II

De la administración de la cosa común

Tres artículos sintetizan en forma metódica la materia, habiéndose eliminado algunas disposiciones inútiles.

CAPITULO III

De la indivisión forzosa

El mismo criterio que inspiró la ordenación del capítulo anterior, ha presidido la del presente.

CAPITULO IV

Del condominio de los muros, cercas y fosos

Esta materia tan engorrosa en el Código, y por ello fuente de continuas y encontradas interpretaciones, ha sido expuesta y dividida con más claridad. Con este fin, voluntariamente debimos apartarnos de nuestra norma, fijando definiciones. Tal conducta la justifica la materia, en cierto modo municipal. Por otra parte, las más de las veces nos hemos limitado a puntualizar conceptos, que aun cuando no muy claros, aparecían en el Código.

Estudiamos sucesivamente los muros *exclusivos* en las tres hipótesis en que pueden presentarse (levantamiento en terreno propio y los dos casos de abandono que se especifican), luego el *muro común* ya originario en tal carácter ya porque lo tomó al perder el de exclusivo que tuviera en su comienzo, y por fin, el muro a la vez *común* y *medianero*, aclarándose bien que toda pared levantada en la banda colindante de las dos heredades es siempre común, y que la medianería importa sólo un crédito a favor del vecino que tenga derecho a cobrarlo.

Al aceptar esta doctrina y sentarla definitivamente hemos pensado que nos ajustábamos a los principios generales que gobiernan el dominio y la accesión, y también que de esta suerte podían resolverse con más lógica y equidad, las situaciones que suelen presentarse.

Tratadas las clases de muros, la división de la materia obedeció a este plan: adquisición de la medianería; casos en que se presume esta última; facultades de cada condómino; reparaciones y reconstrucciones de paredes medianeras; cerramientos de propiedades rurales, y por fin, inscripción de la medianería en el Registro. natural consecuencia del sistema adoptado. Hacemos extensivo este requisito al abandono, y decidimos que en los casos de cons-

trucción de muros o cercas divisorios y en el previsto por el art. 1598 el deber de contribuir a los gastos comunes, no podrá hacerse efectivo en perjuicio de terceros, cuando no se hubiere anotado preventivamente la deuda que por tal concepto existiere.

Decidimos, siguiendo una doctrina que conceptuamos más justa, que si debiere reconstruirse un muro exclusivo, podrá también demolerlo el vecino que no fuere su dueño, quien en tal caso, tendrá que pagar al otro la mitad de su valor. Agregamos que si la pared quedare emplazada en el mismo lugar de la antigua, ha de abonarse el precio del terreno en igual proporción, sin perjuicio de que pueda asentarla en terreno de ambas heredades, de modo que el eje coincida con la línea separativa, siempre que el espesor no excediere de cuarenta y cinco centímetros.

Modificamos los arts. 2732 y 2733, para establecer que el vecino que elevó la pared ya existente, deberá cargar con el aumento de gastos de conservación que por tal causa se originen e indemnizar los embarazos que la obra ocasionare al otro, en el único caso en que por haberse omitido las precauciones necesarias para reducir las molestias, ella hubiere disminuído o impedido excesivamente el uso de la heredad.

TÍTULO VII

Del usufructo

CAPÍTULO I

Del usufructo de cosas

§ 1. — Disposiciones generales

Como separamos el usufructo que recae sobre cosas, del que se ejerce sobre derechos y aquel que pueda tener por objeto un patrimonio, en este primer capítulo reunimos todo lo que se refiere a la primera categoría, eliminando una serie de disposiciones del Código, que resultaban innecesarias.

En el precepto inicial aparecen normas que el Código consignaba en varios artículos (2808, 2810, 2811, 2871, 2879, 2844 y 2845) con la ventaja de que se ha tomado lo que realmente se refería al usufructo de cosas, para formular un precepto más exacto y comprensivo. Decidimos que si el usufructo recayere sobre objetos consumibles, la propiedad de éstos será transferida al usufructuario, no porque le resulten inútiles, como erróneamente expresa el 2808, sino porque como lo reconoce la doctrina más exacta del 2871, ellos por su naturaleza sólo pueden utilizarse consumiéndose con el primer uso.

Acercas del término, mantenemos el plazo máximo de la vida del beneficiario para cuando no hubiere otro establecido, pero supeditando siempre a la muerte de aquél, todo otro plazo. Tratándose de personas jurídicas, sociedades o asociaciones no lucrativas registradas, fijamos el de veinte años, extendiendo así el del 2828, todo ello sin perjuicio de disponer que la disolución de la entidad favorecida, causará el fin del usufructo. Respecto de los modos de adquirir, reunimos las reglas de los arts. 2817 a 2820, distinguiendo los dos supuestos: cuando se tratare de usufructo sobre muebles y sobre raíces. En el primer caso, si fuere constituido por contrato, establecemos la necesidad de la tradición en las mismas condiciones que para el dominio, y en el segundo, ordenamos la inscripción en el Registro.

La doctrina de la segunda parte del 2829, se modifica para resolver con el código de Chile (art. 768), que no obstará a la validez del usufructo constituido por testamento, las condiciones o plazos que hubieren suspendido el ejercicio del derecho, pero siempre que la condición se hubiere cumplido o expirado el plazo antes de fallecer el otorgante.

§ 2. — Derechos y obligaciones del usufructuario

Una agrupación sistemática distribuye la materia de este párrafo, una vez sentada la regla general que prescribe que los derechos y obligaciones del usufructuario, se ajustarán a lo dispuesto en el título constitutivo. Sólo en subsidio se dispone que habrá de acudirse a las estableci-

das en este párrafo, ya por defecto o insuficiencia de aquél.

Tratamos primeramente lo relativo a inventario y fianza, luego las facultades del titular, sus obligaciones, y por fin las distintas hipótesis que conviene prever.

Mantenemos las tradicionales cauciones pretorianas, obligando al usufructuario a prestarlas para asegurar que las cosas serán conservadas y restituidas al fin del usufructo. Eximimos de ellas a las personas que en el texto se enumeran, pero decidiendo que el beneficio cesará en caso de peligro justificado. La teoría que sienta nuestro artículo, no es la del 2851, ya que liberamos de la fianza a aquellos a quienes el propietario hubiere dispensado de prestarla, pero tampoco es la del Anteproyecto, pues en éste se exige que el propietario tenga motivos suficientes para temer que el usufructuario le ocasionará perjuicios. Asimismo, nótese que con nuestro texto se eliminan el 2860, la segunda parte del 2858 y también la segunda del 2859 y que a las personas que los arts. 2857, 2858 y 2859 eximen de fianza, si les mantenemos en esa facultad, es siempre que no medie el caso de peligro justificado, a que alude nuestro artículo.

En lo tocante a los derechos del usufructuario, al regular el reembolso de los gastos que se efectuaron para preparar los frutos cosechados, modificamos —siguiendo a Babiloni— el sistema de los arts. 2863 y 2864, para adoptar la solución de Pothier, que es también la de los códigos español y alemán.

Completando el 2865, se ha previsto el caso de usufructo de un establecimiento de comercio, fabril o agrícola, apartándonos del 2866 al disponer en cuanto a los productos de minas y canteras que ellos no corresponderán en general al usufructuario, salvo que otra cosa se hubiere dispuesto o que el usufructo fuere universal o legal. Entendemos conciliar así, las reglas del Código Civil con las del Código de Minas.

Un artículo prevé la suerte de los contratos de locación que de buena fe celebrare el usufructuario, y las distintas soluciones variables según las hipótesis, coinciden en tender a facilitar la explotación de los inmuebles dados en arriendo, sin agravar la condición del nudo propietario.

Respecto de las mejoras, atenuamos el rigor del 2874, agregando con Bibiloni que si el propietario quisiera conservar aquéllas que pueden ser retiradas, se procederá con el mismo criterio que prescribe el 2589.

En el art. 2867, suprimimos la inútil referencia al aluvión, desde que se determina que el usufructuario tendrá derecho al uso y goce de los aumentos que la cosa recibiere en virtud del principio: *accessio cedit principali*. En ese mismo inciso, se decide que no lo tendrá respecto de la parte que al propietario le corresponda en el tesoro que se hallare en el fundo, ni lo que a éste se le abonare por su crédito de medianería o cercas. Queda pues, aclarado el 2868, para que se entienda que el usufructuario ni tiene parte en el tesoro, ni usufructo sobre él.

Por fin, acordamos al titular, como lo establece Bibiloni, conforme al art. 800 del código de Chile, un *jus retentionis* sobre la cosa fructuaria, hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones que le deba el propietario.

En lo que atañe a los deberes del usufructuario, se dispone que estará obligado a usar y gozar de la cosa, según sea el destino que ella tuviere al serle entregada y conforme a las reglas de una prudente administración. Con ello fijamos un criterio más objetivo, que el tradicional que informa el 2878.

Mantenemos en cuanto a las reparaciones, las normas de los arts. 2881, 2883 y 2886, suprimiendo el 2882 y el 2884; el primero, siguiendo a Demolombe, el segundo, por estimar infundado el reato que en ese texto se consigna.

Conservamos también los arts. 2894 y 2895, pero en vez del 2896, adoptamos el 609 del código francés, porque es más claro al establecer de que modo debe el usufructuario contribuir a los gastos y cargas a que se refiere.

Algunos principios que el Anteproyecto tomara del código alemán, aparecen luego para prever situaciones interesantes, y también los arts. 2899, 2888, 2889, 2860 y 2873 del Código, a los que se agrega una regla análoga a la del 484 español.

Un texto contempla el supuesto de que el usufructo recaiga sobre mercaderías, cosas fungibles o consumibles por el primer uso. El reemplaza con más exactitud a los arts. 2871, 2808 segunda parte, 2809 y 2811, pues Bibiloni con

razón observa que las cosas quæ in abusu consistunt, no son las únicas que imponen un usufructo de disposición. El artículo prescribe que el beneficiario adquiere el dominio de las cosas que allí se enumeran, con cargo de restituir al fin del usufructo el valor inventariado. Si no se avaluaron, tendrá que devolver otras de igual clase y calidad, o pagar el precio corriente al cesar el usufructo, y en su caso, con los daños e intereses.

El supuesto de un establecimiento de comercio, fabril o agrícola, aparece regido por las soluciones que Bibiloni tomara de Demolombe y Laurent, y el referente al usufructo de un rebaño o de un conjunto de animales, por un precepto que modifica el principio del 2902, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 788 del código de Chile y 499 del código español.

Siguiendo a Bibiloni, prevemos el caso de usufructo de parte indivisa, para acordar a quien lo tenga, derechos semejantes a los que prescriben los arts. 490 del código español y 1066 del alemán. Por fin, hemos decidido, ampliando el 2877, que cuando el usufructuario hubiere ejercido las acciones inherentes a los derechos comprendidos en el usufructo, o intentado las posesorias y petitorias que el nudo propietario estaría obligado a deducir, y en tales supuestos el propietario no hubiere intervenido en los juicios, podrá beneficiarse con la sentencia favorable en el petitorio o en el posesorio, pero no le afectará la dictada contra el usufructuario.

§ 3. — Derechos y obligaciones del nudo propietario

La materia del Código aparece metodizada, habiendo eliminado como inútiles artículos como el 2910 y el 2915.

Para formular el principio general referente a las obligaciones del nudo propietario, hemos tenido en cuenta que ellas derivan del usufructo mismo y no de los actos jurídicos que pudieron darle origen. El texto expresa que aquél no podrá dañar o restringir los derechos del usufructuario, ni hacer reformas en la cosa, aunque no perjudiquen a éste.

§ 4. — De la extinción

Este párrafo, que en nuestro Proyecto sólo cuenta con tres artículos, contrasta con la frondosidad que trae el Código al prever dentro de él, situaciones para las que se repiten reglas generales o corolarios lógicos de ellas, o bien principios referentes a la constitución del usufructo.

De nuestros tres preceptos, el primero prevé los supuestos de extinción. El segundo, el principio general que obliga a dejar libre el bien y restituirlo al nudo propietario, así como los frutos e intereses desde que terminó el usufructo. El tercero, decide que la familia del titular, cuando el usufructo finalizara por la muerte de aquél, tendrá noventa días para el desahucio de la finca que habitara, e igual término las personas jurídicas, asociaciones registradas y sociedades, para el desalojo del inmueble en que funcionaren, cuando la disolución se produjere antes de vencer el usufructo.

CAPÍTULO II

Del usufructo de derechos

El código civil alemán ha inspirado al Anteproyecto en este punto, ya que el nuestro sólo se refería a dicho supuesto en forma sumaria.

Una disposición general establece que se aplicará al usufructo de derechos lo prescripto sobre el de cosas, con las salvedades contenidas en el capítulo y luego de sentar que los derechos intransmisibles no pueden ser objeto de él, se dispone que para constituirlo se aplicarán las reglas de la cesión de derechos.

Se prevén asimismo algunos casos especiales, con las soluciones respectivas para el cobro, que, o bien se atribuyen exclusivamente al usufructuario, o bien a éste conjuntamente con el acreedor.

El art. 2875, si dispone que cuando el usufructo fuere sobre créditos o rentas, los títulos deben ser entregados notificándose a los deudores, en cambio prohíbe al usufructua-

rio que pueda cobrarlo judicialmente sin el concurso del nudo propietario. En nuestro texto, las soluciones varían según los casos. Así decimos que cuando el usufructo tuviere por objeto créditos por sumas productivas de intereses, el deudor deberá pagar el capital al acreedor y al usufructuario conjuntamente, y que cualquiera de ellos podrá reclamar que el pago se haga en esa forma o por consignación en cuenta común.

En cambio, en otro artículo se faculta al usufructuario de un crédito no comprendido en el supuesto anterior, para cobrarlo, y por fin, en el caso de rentas, pensiones u otros derechos semejantes, se establece que la prestación que pueda exigirse corresponderá al usufructuario.

Como puede observarse, nuestras soluciones difieren del 2875, pero en cambio están de acuerdo con la doctrina del 2906 que resulta más lógica, desde que las ventajas que tales créditos acuerdan al usufructuario, únicamente se hacen efectivas por la percepción del objeto debido. Con todo, es más justo que cuando el deudor deba pagar el capital, lo haga conjuntamente a su acreedor y al usufructuario, como también la obligación que impone en estos casos, de reinvertir el capital, regla que se extiende al usufructo de títulos al portador, cuando éstos llegaren a reembolsarse.

CAPITULO III

Del usufructo sobre un patrimonio

Eliminamos por su mero carácter preceptivo el art. 2827, que distingue el usufructo universal del particular, para disponer en cambio, una norma tendiente a establecer que esta clase de usufructo se regirá por los principios consignados en el capítulo, y subsidiariamente, en cuante fueren compatibles con ellas, por las contenidas en los dos anteriores. Luego se exponen en forma metódica los arts. 2869, 2898 y 2900, con variantes destinadas a precisar más los casos que prevén, y a ello se agrega una disposición general, inspirada en el 1086 del código alemán, según la cual el usufructo de todos los bienes establecidos a título gratuito, no obstará para que los acreedores ya existentes de quien lo constituyó, reclamen sobre dichos bienes el pago de

sus créditos o sobre el valor de las cosas consumibles, cuya propiedad hubiere adquirido el usufructuario.

TÍTULO VIII

Del uso y de la habitación

En este título la materia se desarrolla conforme al siguiente plan: alcance y límites del derecho; concepto de cómo han de interpretarse las necesidades del usuario y su familia —puntos en los que se observa una amplitud que difiere de la del 2953— deberes y derechos del titular: forma de constitución; casos especiales, y extinción.

En nuestro texto no figura el art. 2951, que como observa Bibiloni habla de cosas fungibles, confundiéndolas con las consumibles a que se refiriera Demolombe.

Como novedad, introducimos una norma que tomamos del Anteproyecto, en cuya virtud el derecho de habitación, se extingue por el abuso grave del habitador, que el juez calificará según las circunstancias, y asimismo, la que se inspira en el art. 1090 del código alemán, para decidir que podrá gravarse un inmueble a favor de tercero, con el fin de concederle el derecho de usarlo en cierta manera, o de gozar otra facultad susceptible de constituir el objeto de una servidumbre predial. El texto agrega que la extensión de estas cargas, en caso de duda, se determinará según las necesidades personales del titular, no pudiendo cederse ni en su existencia, ni en su ejercicio.

TÍTULO IX

De las servidumbres prediales

CAPÍTULO I

De las servidumbres prediales en general

§ 1. — Disposiciones generales

Se reúnen aquí en cuatro artículos, normas destinadas a fijar el concepto de la servidumbre, sus caracteres, de-

nominaciones, y un texto final que determina que no importará servidumbre el gravámen que consiste en cualquier obligación de hacer.

El art. 1673 al no admitir otras servidumbres que las prediales, evita la confusión que en el Código produce el 2972, que define la servidumbre personal, como aquella que se constituye en utilidad de alguna persona determinada, sin dependencia de la posesión de un inmueble y que acaba con ella. Con el nuevo precepto se llegará a lo que deseaba Bibiloni: dejar bien establecido que sólo hay servidumbres sobre inmuebles y para la utilidad de éstos.

§ 2. — Adquisición de las servidumbres

El cambio de régimen en materia inmobiliaria, se traduce aquí en modificaciones fundamentales con respecto al Código.

En primer término, se establece que sólo podrán constituir servidumbres, los propietarios de los inmuebles que hayan de ser beneficiados o gravados con ellas, lo que implica que hemos debido eliminar el 3013 del Código, porque con el sistema del Registro, para inscribir una servidumbre el dueño debe gozar de su inscripción como tal, lo que importa que no podrá constituirla cualquier poseedor. También resulta lógico que las establecidas a favor del fundo por el usufructuario, usuario o acreedor anticresista expresando que estipulan para el dueño, sólo producirán efecto cuando se inscribiere en el Registro la ratificación de aquél, si bien se decide que a falta de ese extremo valdrán personalmente para quienes las estipularon, siempre que mediare prenotación. Como se ve, el nuevo sistema nos obligó a adaptar así los arts. 2984 y 3016. Lo mismo se ha hecho respecto del art. 3017, al añadirle que todos los actos constitutivos de servidumbre deben ser inscriptos para su validez.

Siguiendo al Anteproyecto, se dispone que las servidumbres no perjudicarán los derechos reales ya inscriptos. Ello no sólo tiene la ventaja de sentar un criterio uniforme, sino también la de eliminar numerosas disposiciones del Código.

Separándonos en parte, de la reforma que proyectara Bibiloni en cuanto a los arts. 2978 y 2994 a 2997, hemos conservado el 2995, referente a la servidumbre por destino del padre de familia. Agregamos con el Anteproyecto, que ella debe ser inscripta para que produzca sus efectos, y se faculta a cada uno de los propietarios para exigir judicialmente dicha inscripción.

§ 3. — Derechos y obligaciones

El precepto inicial concreta, en cuanto a la extensión de las servidumbres, las normas que contienen los arts. 3019, 3025, 3026 y 3027 del Código. Viene luego un texto que, dividido en incisos, enumera los derechos que corresponden al titular. Uno de ellos le faculta para ejercer la servidumbre en la extensión compatible con la naturaleza del inmueble dominante, aunque las necesidades de éste hubieren acrecentado desde la época en que se constituyó el gravamen, pero esta regla, que se inspira en el propósito de beneficiar las necesidades económicas que dieron origen a la servidumbre, tiene su límite, y es el que prescribe la disposición con que finaliza el inciso, cuando establece que si ese acrecentamiento proviniera de cambios en el destino o en la condición del inmueble, que agrava sen de una manera anormal la carga del predio sirviente, el juez podrá limitar el uso, y si ello fuere imposible, declarar extinguido el derecho real.

Acerc a los remedios y acciones posesorias, la modificación que introducimos al 3034, se explica por los motivos que expone Bibiloni en su nota. Por nuestro texto, no sólo los dueños de los inmuebles dominantes tendrán el uso de tales defensas: la facultad se acuerda a los titulares de las servidumbres, aclarándose que la tendrán tanto los poseedores mediatos, como los inmediatos de las heredades dominantes, siempre que fueren turbados o impedidos de usar las servidumbres inscriptas y hubieren ejercido estas últimas dentro del año, aunque fuere una sola vez.

No incluimos la referencia a las acciones y excepciones reales a que alude el 3034, porque de ellas nos hemos ocupado en su lugar respectivo.

Siguiendo a Bibiloni, eliminamos el art. 3020, que si en su disposición rigurosa parece establecer un efecto natural de la servidumbre como gravámen sobre todo el fundo sirviente, responde a circunscribir el derecho a sus justos límites. Por ello consignamos como principio general, que el propietario de la heredad dominante deberá ejercer la servidumbre del modo menos perjudicial para el fundo sirviente. A pesar de la cita de textos legales recientes y de autores modernos que contiene la nota de Bibiloni, es el viejo principio romano que preceptuara el uso *civiliter modo* a que se refiere Celso.

Para el caso en que la manera de ejercer la servidumbre, no estuviera designada por el título o fuese de otro modo incierta, un artículo, refundiendo los 3021 y 3037, consigna la solución legal, con algunas reformas destinadas a favorecer la explotación del fundo sirviente, sin obstaculizar, sin embargo, el ejercicio de la servidumbre.

Los arts. 3028 a 3033, han sido reemplazados por el que consigna una regla general aplicable para el supuesto en que se divida el fundo dominante: la servidumbre subsistirá en beneficio de cada lote, pero sin que este hecho pueda agravar la condición del fundo sirviente. También se decide, que cuando la servidumbre sólo aprovecharse a una de las fracciones, o debiera ejercerse por cierta parte del fundo, quedará extinguida respecto de las restantes, norma que se aplica igualmente cuando fuere dividido el predio sirviente.

En lo que hace a las obligaciones y a los derechos del dueño del fundo gravado, podrá notarse que se conservan, si bien con un carácter más general, las reglas del Código. Sólo se agrega de acuerdo con Bibiloni, un artículo que establece que los poseedores de fundos sobre los cuales se pretendiere ejercer servidumbres no inscritas, podrán usar de los remedios y acciones posesorias para impedirlo, y, en caso de no hallarse registradas, para limitar su ejercicio.

El artículo final, también tomado del Anteproyecto, reemplaza y completa el 3023, modificándolo en la última parte que se refiere al abandono del muro sirviente. Con ello Vélez ha caído, como bien lo hace notar Bibiloni, en

una reminiscencia de los escritores franceses, para quienes esos casos son de servidumbre legal.

§ 4. — De la extinción

Eliminados los arts. 3045 y 3046 por tratarse de simples aplicaciones de reglas generales, los demás que el Código contiene en este capítulo, han sido, o bien modificados para adaptarlos al sistema del Registro, o bien refundidos en normas de un carácter más amplio.

CAPITULO II

De las servidumbres prediales en particular

§ 1. — De la servidumbre de tránsito

El precepto con que se inicia este párrafo resume la doctrina de los arts. 3068, 3070, 3071 y 3075.

De acuerdo con Bibiloni, si conservamos la norma del 3069, eliminamos en cambio el 3072, que prohíbe al propietario de un fundo de tierra que mediante construcciones sobre él, pueda crearse un derecho de tránsito más extenso que el que le competía, según la naturaleza originaria de su heredad. Creemos que la imposición de esta clase de servidumbres, como que obedece a razones de interés público, no debe hallarse sometida a reatos que puedan obstaculizarlas. Puede decirse que la mayor parte de las disposiciones del Código han sido conservadas, algunas con modificaciones de fondo; varias suprimidas totalmente como los arts. 3077, 3080 y 3078, otras sólo en parte como el 3079. En cambio, hemos ampliado la doctrina del 3073, para todos los actos de adquisición susceptibles de producir encerramiento.

De los arts. 3081 y 3076, hemos formado uno solo, eliminando las excepciones que contenía en su primera parte el segundo texto.

§ 2. — De la servidumbre de acueducto

Se mantienen las disposiciones del Código, modificadas a veces, de acuerdo con ciertas normas incluídas en los códigos de Chile y de Italia y en las leyes de aguas dictadas en España y en Francia. El primer precepto determina los casos en que la servidumbre será obligatoria, conteniendo el último apartado las excepciones a la regla. Su materia es la de los arts. 3082 y 3084.

El 3083 da base a otro artículo, pero hemos eliminado de él, su primera parte, inútil, como también la referencia que contenía a las aguas de uso público, desde que entre nosotros tienen ese carácter todas las corrientes.

El código de Chile —863 y 864— inspira dos nuevas normas respecto a cómo han de conducirse las aguas, debiéndose las modificaciones que introducimos al 3085, a los principios del 865 chileno y 603 italiano.

El derecho del dueño o poseedor del fundo, sobre el cual se pretende construir el acueducto, para oponerse al mismo, se ha reglamentado como lo hace el 80 de la ley española, cuyo art. 85 también inspira nuestro precepto relativo a la forma como el acueducto ha de construirse.

Conservamos modificados los arts. 3089 y 3090. El cambio del primero, proviene de la ley española y del código italiano; el segundo de una observación consignada por Demolombe.

También el 3087 aparece corregido. De acuerdo con el código italiano y la ley española, se dispone que no podrá establecerse servidumbre de acueducto dentro de otro preexistente. Asimismo, suprimimos las correcciones que Vélez introdujo en el 868 código de Chile, al tomarlo para el citado 3087.

Figuran como artículos nuevos un texto de Bibiloni inspirado en el 85 de la ley española, y otro por el cual se dispone que el propietario de un fundo privado de acceso a la vía pública, podrá según las reglas del presente párrafo, exigir la instalación de conductores de energía eléctrica u otra análoga, ya aéreos, ya subterráneos, según lo decida el juez, teniendo en cuenta las circunstancias y la seguridad del fundo sirviente.

TÍTULO X

De la hipoteca

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Si bien conservamos en lo que hace a esta institución, los lineamientos generales del Código, el número de artículos aparece reducido, y ello por una doble causa: primero porque la circunstancia de haber adoptado reglas generales, relativas a cómo se constituyen y caducan los derechos reales (aplicables a la hipoteca) han tornado innecesarios muchos textos esparcidos en los tres primeros capítulos del Código, y segundo, porque el cambio de sistema en cuanto al régimen de los derechos reales en general, ha impuesto la eliminación de otros.

En nuestro Proyecto, la hipoteca continúa siendo accesorio y convencional. Por ello mantenemos la doctrina de los arts. 3108 y 3115, así como las exigencias del 3109, pero modificamos lo dispuesto en los 3128 y 3130, entendiendo con Bihiloni que no cabe constituir hipoteca por otro instrumento que no sea escritura pública. En cuanto al cambio del 3130, él se justifica porque la regla que contiene en su última parte, no puede coexistir con la exigencia de la escritura pública requerida para la constitución. De ahí, que con más lógica hayamos establecido que la hipoteca sólo producirá efecto desde su registro y que no será exigible la promesa de constituirla.

El texto que indica aquello que no puede hipotecarse, amplía la nómina del 3120 para hacerla más completa, pues comprende además las cosas inmovilizadas por accesión, que no podrán gravarse separadamente del inmueble principal, las partes de un condominio de indivisión forzosa y

las materiales de un inmueble, a no ser que formaren fracciones determinadas de una extensión mayor, susceptibles por sí mismas de constituir el objeto de un dominio independiente.

La extensión de la hipoteca también aparece reglamentada con más cuidado. Tal lo prueba el caso del seguro, ya que en vez de limitarnos a enunciar como el 3110, que el gravámen se extiende al importe de la indemnización concedida o debida por los aseguradores del inmueble, agregamos que el pago no será válido cuando se efectuare sin la intervención del acreedor hipotecario, a menos que con noticia de éste, su importe se empleare en reconstruir o reponer la cosa afectada.

Otro artículo que no aparece es el 3111. Ello se debe a que al tratar de los efectos de la hipoteca, se ha reunido la doctrina de ese texto con la de los arts. 3152 y 3936.

También se prevé el caso de los productos y cosas accesorias del inmueble, disponiéndose que ambos quedarán libres de hipoteca una vez enajenados y extraídos del principal. Nuestros preceptos en este punto, contienen una solución que concuerda tanto con las reglas de los arts. 3160, 3162, 2413 y 3157 del Código, como con los arts. 1121 y 1122 del código alemán, que inspiraron las disposiciones correlativas del Anteproyecto.

Acercas de la indivisibilidad, que Bibiloni mantiene con el alcance del Código, hemos creído conveniente suavizar el rigor del principio, disponiendo que si al ejecutarse el crédito o al dividirse el inmueble gravado, éste fuere susceptible de un cómodo fraccionamiento, la venta o la partición se realizarán en esa forma. Es también la doctrina de la ley N° 11.725.

Una atenuación correlativa mitiga la regla de los arts. 3113 y 3114, pues proyectamos respecto del acreedor cuya hipoteca comprenda varios inmuebles, que si bien estará facultado a su elección, para perseguirlos a todos simultáneamente o sólo a uno de ellos, el juez podrá no obstante, con conocimiento de causa, fijar un orden para la venta de los bienes afectados.

Persiguiendo igual propósito de buscar soluciones más equitativas, hemos ampliado el contenido del art. 3171. La extendemos a todos los propietarios de inmuebles afectos.

tados, suprimiendo la exigencia del artículo, referente a la oposición al pago o al abandono del inmueble. Nuestro texto dispone entonces, que si fueren varios los bienes gravados en garantía de un mismo crédito, el propietario de uno de ellos contra quien se dirigiere la acción, podrá exigir que se cite al juicio a los otros propietarios, para que contribuyan al pago de la deuda proporcionalmente al valor de cada bien.

Luego de prescribir en forma metódica, los requisitos que debe contener el instrumento constitutivo de la hipoteca, en otro precepto hemos reunido las cláusulas nulas, ampliando el número de aquellas a las que Bibiloni asignaba ese efecto, todo ello con el fin de evitar la extorsión de los acreedores poco escrupulosos.

No hemos dejado de abrigar serias dudas, acerca de si convenia o no establecer como límite de la responsabilidad del deudor, el inmueble hipotecado. Primó la tesis que se inclinara por el mantenimiento del régimen actual, pero no impedimos con ello, que las partes puedan convenir esa limitación. Otro texto, redactado sobre la base del 3202 del Código y 46 a 48 del proyecto de la Comisión extraparlamentaria francesa de catastro, permite que al constituirse la hipoteca, puedan otorgarse letras o títulos a la orden o pagarés simples por el importe de la deuda, siempre que ésta no sea condicional ni eventual. Para evitar defraudaciones, se ordena que dichos documentos deben anotarse en el Registro y subscribirse por el encargado, y que sin esa formalidad no serán tomados en cuenta. Se agrega que si fueren a la orden, serán regidos por el Código de Comercio, y en los demás casos, por los preceptos de la cesión de créditos.

El texto que corresponde al 3129, contiene una modificación tendiente a refirmar en forma más categórica, el principio de que los derechos reales se gobiernan por la ley del lugar en que los bienes se encuentran situados. Por fin, el artículo con que termina el capítulo, al decidir que las inscripciones hipotecarias conservarán sus efectos hasta su cancelación dentro de los términos del art. 1757, adelanta una norma contraria a lo que preceptúan los 3151 y 3197 del Código, pero que armoniza con lo que se dispone sobre la extinción de las hipotecas.

CAPITULO II

Del efecto de la hipoteca entre las partes

El precepto inicial, inspirado en la doctrina de los arts. 3162 y 3934, establece el derecho preferente que la hipoteca inscripta confiere al acreedor. Luego en otro se determina la extensión de la garantía hipotecaria, artículo que ha venido a substituir a los 3111, 3152 y 3156, con la ventaja de armonizarlos y eliminar el error que contenía el primero de ellos. En efecto, el referido 3111 sólo dice que los daños e intereses a que puede ser condenado el deudor, gozan de privilegio, pero como bien lo hace notar Bibiloni, el texto aunque inspirado en Aubry y Rau, omite el complemento que señalan estos autores, al indicar que era necesario para que los daños e intereses pudieran reclamarse, que se les hubiera estimado al constituirse la hipoteca. Nuestro artículo completa esa omisión y decide, además, que si ellos no estuvieren convenidos, los intereses garantizados por la hipoteca no podrán exceder de los legales.

También se determina que el propietario conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes al dominio, pero que no podrá con detrimento del acreedor hipotecario, efectuar ningún acto de disposición material o jurídica que disminuya el valor del inmueble. Con el fin de evitar éstos, se prescriben luego con más amplitud que en el art. 3158, las medidas conservatorias de que puede hacer uso el acreedor hipotecario. También el art. 3159 aparece modificado, para permitir en forma más amplia el ejercicio de los derechos que se reconocen al referido acreedor.

El Anteproyecto dispone en su art. 29, que los frutos y productos del inmueble quedan inmovilizados, sin que pueda el deudor disponer de ellos a partir de la intimación de pago. Bibiloni se apoya en Aubry y Rau, pero hemos considerado excesivo ese precepto a la vez que innecesario. Lo primero, porque concebido con tal ampli-

tud podría dar base a verdaderas arbitrariedades; lo segundo porque a la misma garantía puede llegarse con el embargo de esos frutos.

CAPITULO III

Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros acreedores

Como es notorio, existe una tendencia en la doctrina y en la legislación moderna, a no reconocer otros privilegios sobre inmuebles que los resultantes de la hipoteca, de los gastos de justicia y algunos impuestos. Ello no implica privar de protección al vendedor, al donante, al constructor y al copartícipe, sólo que tal garantía pueden buscarla ellos mismos, mediante la constitución de una hipoteca contemporánea al contrato.

Dado que en este lugar, siguiendo a Bibiloni, hemos creído más conveniente reglamentar lo relativo a los privilegios sobre inmuebles, la eliminación de los arts. 3925 a 3933 se explica porque no se avienen con el criterio restrictivo que antes hemos señalado.

Luego de establecer que el privilegio reconocido al acreedor hipotecario, se ejercerá sobre el precio del inmueble en el orden determinado por las fechas de las inscripciones respectivas, se fijan en tres incisos los créditos que tienen prelación sobre el hipotecario. Entran en ese carácter los gastos de justicia devengados para la realización del inmueble, las cargas e impuestos fiscales o municipales que pasaren directamente sobre el bien siempre que, anteriores a la constitución de la hipoteca, aparecieren consignados en las certificaciones que se exigen para otorgar una escritura.

Es este un distingo que se impone por lógica, porque si el Estado padeciera error al otorgar tales certificados, no sería razonable que recaigan las consecuencias sobre quien ajustara convenciones haciendo fe a esas constancias. Asimismo, se establece acerca de las cargas e impuestos posteriores a la hipoteca si fueren periódicos, que ellos sólo tendrán prelación por los dos últimos años y por el tiempo que transcurriera durante el juicio. Por fin, conforme al Anteproyecto, se acuerda también prelación al derecho

del propietario vecino que construyera el muro divisorio, siempre que su crédito hubiere sido prenotado en el Registro, en la hipótesis de haberse levantado antes de constituirse la hipoteca.

Como lo expresa la nota de Bibiloni, el levantamiento de un muro divisorio no puede equipararse a una construcción ordinaria, cuyo crédito puede ser garantizado mediante una hipoteca. Equivale, en cambio, a una carga real de la propiedad.

CAPÍTULO IV

Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros poseedores

Generalizando un principio que los arts. 3162 y 3163 limitan sin motivo, a los terceros que hubieran adquirido del deudor el inmueble ya hipotecado, comprendemos todos los casos en que el bien sometido al derecho real de hipoteca, llegue a estar en todo o en parte en poder de terceros. Ello implica que el texto se extiende a los que sin ser adquirentes, constituyeron la hipoteca en garantía de una deuda ajena, y a todos los poseedores a quienes alcanza el gravamen, aunque no tengan a su favor un título adquisitivo otorgado por el dueño del inmueble. El precepto concuerda así, con la amplitud del art. 2419.

También en este capítulo se ordenan las demás disposiciones del correlativo del Código, si bien metodizadas y con variantes de forma. El artículo final, decide, que en las transmisiones a título gratuito de fincas hipotecadas, se presume que el adquirente toma sobre sí la obligación que la hipoteca garantiza, hasta la concurrencia del valor del inmueble, a menos que del acto constitutivo resultare lo contrario.

CAPÍTULO V

De la extinción de las hipotecas

Salvo el art. 3202 que ha sido modificado, los restantes de este capítulo en el Código (3199 a 3203), únicamente

han sufrido variantes de colocación y de forma. Acerca del 3202, hemos dispuesto en el caso de que se hubieran otorgado letras o pagarés por el importe de la deuda, y éstos se hallaren registrados, que al pedir la cancelación de la hipoteca, el deudor deberá entregar al registrador las letras o pagarés, para que aquél los archive, haciendo constar en ellos que representan el importe íntegro de la deuda hipotecaria.

Como es fácil advertirlo, este nuevo requisito constituye una precaución, ya que con el archivo de los papeles queda justificada la extinción de la deuda. También se prevé que las letras o pagarés sólo representen parte de aquélla. El texto decide entonces, que la hipoteca no se cancelará, pero determina que el registrador que los reciba deberá anotar el valor de ellos en la inscripción inicial, imponiéndole el deber de archivarlos.

TÍTULO XI

De los Censos

La Comisión ha aceptado la reforma del Anteproyecto, introduciendo un título bajo este epígrafe.

El primer artículo indica que tales censos se aplicarán a inmuebles que continúan en poder del deudor, y que ellos sólo podrán consistir en el pago periódico de cierta suma de dinero, ya por término fijo, ya por la vida del titular, pero dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta años. El precepto termina indicando que los censos deberán inscribirse como las hipotecas, y que les serán aplicables las demás reglas relativas a ellas, en cuanto no estuvieren modificadas en este título.

Acerca de la inscripción, se exige que conste la cantidad del gravamen, prescribiéndose que las partes deberán establecerla. Para el caso de que en un censo constituido por testamento, se hubiera omitido dicha suma, se resuelve que se inscribirá la que resulte de la capitalización de la renta en el año, calculada al tipo de interés que cobra a sus deudores el Banco Hipotecario Nacional.

Respecto de la redención, se determina que ha de estar-se a las reglas del título constitutivo, y a falta de convenciones, un texto resuelve qué normas han de aplicarse según fuere el censo a término fijo, o se tratare de renta vitalicia. Asimismo, se considera el supuesto de redención de los censos consignativos perpétuos, constituidos antes de la sanción de este Código, como también el caso de los reservativos perpétuos y las capellanías de igual carácter, fijándose las reglas respectivas.

Se prevé por último, la falta de pago a las rentas periódicas, disponiéndose que cuando se adeudaran durante dos años, el acreedor podrá pedir la ejecución del bien.

TITULO XII

De la prenda

CAPITULO I

De la prenda de cosas en general

En este párrafo, si bien hemos introducido algunos artículos, se mantienen en general los del Código, aun cuando metodizados y con modificaciones tendientes a darles una mayor precisión.

Luego de fijar el concepto de la prenda convencional, única que el Código reconoce, se establece la capacidad requerida en el constituyente y la forma en que debe constar la prenda, prescribiéndose al igual de lo que se resolvió en la hipoteca, qué cláusulas se consideran prohibidas. Los artículos que reglan lo relativo a la garantía que la prenda concede al acreedor, contienen una disposición nueva tomada del párrafo 210 alemán y del art. 891 suizo. Ella establece que la prenda garantiza no sólo el pago preferente de la deuda, sino también sus intereses convencionales y moratorios, las cláusulas penales, y en su caso, los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, así como los gastos judiciales de la ejecución. El texto añade que si la prenda

la constituyó un tercero, la garantía no podrá ser extendida en virtud de actos jurídicos posteriores del deudor.

Como puede notarse, este artículo se coloca en el caso de que la prenda pueda ser constituida por un tercero. Es éste un supuesto que se contempla también en el artículo inicial, salvando así una omisión del Código, que sólo consideraba la concedida por el deudor.

En forma ordenada se exponen luego las obligaciones del acreedor como depositario de la prenda, y también los derechos que puede tener sobre la cosa. Se prevén los posibles abusos por parte de aquél y las facultades que en esta hipótesis se acuerdan al deudor. Podrá notarse que el art. 3230, ha sido ampliado conforme al párrafo 1217 alemán. para comprender otros supuestos en que el acreedor si bien no abusa de la prenda, perjudica sin derecho al dueño de la cosa, ya porque no percibe los frutos, ya porque coloque al objeto en riesgo de pérdida o deterioro. En todas esas hipótesis, el dueño de la cosa podrá pedir el secuestro a costa del acreedor, y también la restitución mediante el pago. No obstará a ello, el que la deuda no estuviere vencida, sólo que entonces se descontarán los intereses correspondientes al tiempo que faltare.

Otra disposición nueva, que Bibiloni toma de los arts. 681 y 682 del proyecto franco-italiano de las obligaciones, y de los párrafos 1218 y 1219 del código alemán, prescribe que si hubiere motivo para temer la pérdida o deterioro considerable de la cosa, el acreedor debe dar aviso inmediato al propietario, quien podrá exigir que le sea restituida mediante el establecimiento de otras garantías reales, o solicitar su venta, derecho que también se concede en iguales circunstancias al acreedor, si el constituyente no diera una garantía real bastante. La prenda se traslada entonces al precio, que habrá de depositarse en consignación.

También de acuerdo con el mismo proyecto franco-italiano (art. 683), el constituyente queda facultado si mediare ocasión favorable, para pedir al juez que autorice la venta de la cosa, previa audiencia del acreedor. En este caso, la prenda subsiste sobre el precio que debe consignarse.

CAPITULO II

De la prenda con registro

En una larga nota, Bibiloni critica el régimen establecido por la ley 9644. Como síntesis de ella, los cinco artículos que en el Anteproyecto dedica a esta prenda, la limitan a las máquinas locomóviles y fijas, haciéndolas objeto de una individualización prolija tendiente a determinar la clase de ellas, lugar y número de fabricación.

Sin desconocer la importancia de algunas críticas que contiene la nota, corroboradas por la experiencia de esa ley durante más de veinte años, no hemos seguido a Babiloni, orientándonos más bien hacia el modelo que ofrece el código del Brasil, que implica en realidad un término medio entre el régimen del Anteproyecto y el de la ley.

Por ello, luego de indicar que bastará para constituir la prenda sin desplazamiento, la inscripción en el Registro, y que el deudor conservará en su poder los objetos pignoratícios, a título de depositario regular, con las obligaciones y derechos inherentes a ese carácter, el art. 2 determina que esa prenda podrá recaer sobre los objetos siguientes: máquinas locomóviles e instrumentos de labranza; máquinas fijas que pertenecieran a arrendatarios, usuarios o usufructuarios, con excepción de las que hubieran introducido a los inmuebles en cumplimiento de los respectivos contratos; frutos de cualquier naturaleza que correspondan al año agrícola en que el convenio se realizare, así estén pendientes o separados de las plantas, como también las maderas, los productos de la minería y los de la industria nacional, y por fin, los bienes semovientes de todo género.

Se determina luego, la forma en que habrán de individualizarse los objetos prendados, disponiéndose que cumplidos los requisitos que se ordenan a ese fin, el acreedor impago podrá perseguir la cosa en manos de los terceros adquirentes. Un último artículo contempla la situación del ti-

tular del derecho frente al locador, determinándose que la prenda no afectará a dicho privilegio correspondiente a un año de arrendamiento vencido, ni la cantidad pagadera en especie por el uso o goce de la cosa durante el mismo tiempo, siempre que en ambos casos se adeudaren al constituirse el gravamen y que el contrato respectivo tuviera fecha cierta anterior a la inscripción de la prenda.

CAPÍTULO III

De la prenda sobre títulos de crédito

Bibiloni creyó necesario suplir el vacío del Código, legislando sobre materia tan interesante. La importancia de la prenda en el derecho moderno y la extensión que han adquirido, no tan sólo los títulos al portador con sus efectos sobre las relaciones bancarias, sino también los créditos por materias primas y sus consecuencias, justifican estas disposiciones, las que hemos resuelto reunir en un capítulo aparte.

Los artículos pertinentes del Anteproyecto se inspiran en el franco-italiano, el Código alemán y nuestro Código de comercio. El punto fundamental, o sea los derechos del acreedor prendario frente al título dado en prenda, lo hemos resuelto aceptando la doctrina del art. 587 del Código de Comercio, concordante con el 691 del citado proyecto. La nota de Bibiloni explica los motivos que compartimos al apartarnos del sistema francés, que fluye del art. 2078 del Código Napoleón, y que niega al acreedor el derecho de recibir el capital adeudado. Nuestro texto le permite cobrarlo en todos los casos sea o no exigible el crédito que aquél garantiza.

En dos artículos se determina cómo quedará constituido el gravamen y cuáles son los derechos del acreedor. Se cuenta entre éstos el de notificar al deudor cuando el crédito fuere exigible antes que la prenda, para que pague por consignación a nombre conjunto de él y de quien fuere acreedor. como también el de requerir el pago del crédito, sin perjuicio de lo que antes se expone, para el supuesto de que el suyo no fuere exigible.

Otro precepto determina que cuanto el crédito que se dió en prenda pudiera reclamarse antes que el garantizado, la suma percibida se colocará en usuras pupilares o en valores según las reglas establecidas para la inversión de fondos de incapaces, por el tiempo que faltare hasta poder demandar el crédito.

Observamos que si bien queda facultado el acreedor para exigir el cumplimiento, no puede en cambio pretender la venta o la adjudicación.

Los restantes artículos inspirados casi siempre en el código alemán, contemplan distintas situaciones a saber: las consecuencias que pueden producirse una vez cubierto el crédito dado en garantía, según la prestación consista en muebles, inmuebles o dinero; cuando el crédito se hallare prendado a la vez a más de un acreedor; el caso de que la exigibilidad del crédito pignorado dependiera de una opción o declaración del deudor. Por fin, se dispone que en esta prenda se aplicarán subsidiariamente las normas relativas a la de cosas.

TITULO XIII

De la anticresis

Este título mantiene la anticresis con el mismo carácter con que la legisla el Código. De ahí, que los artículos de éste, aparezcan reproducidos si bien con variantes tendientes ya a simplificarlos, ya a ponerlos en armonía con el régimen que inspira el Proyecto en materia de derechos reales.

Bibiloni, en su nota, demuestra como fué errónea la creencia en cuya virtud dicha figura jurídica fué eliminada del código alemán. Las cosas se encargaron bien pronto de demostrar que la anticresis, lejos de ser una institución muerta, resurgía con las necesidades de la vida moderna como un medio más adecuado para ciertos casos, que la misma hipoteca.

Nuestro Proyecto, que mantiene la anticresis como derecho real sobre inmuebles, creado convencionalmente, establece las formalidades necesarias para constituirla, así como

las cláusulas que en ella son prohibidas, y fija en forma metódica, tanto los derechos como las obligaciones del acreedor.

Como variante respecto del Código, cabe señalar que ha sido eliminado el art. 3250, para adoptar la solución opuesta, propiciada por la misma doctrina francesa no obstante la tesis de Aubry y Rau que sirviera de modelo. Nuestro texto, que juzgamos más ajustado a las reglas de la buena fe, determina que el acreedor no puede cobrar las mejoras útiles, aunque hubieren acrecido el valor del inmueble. Podrán sí, descontar de los frutos percibidos, el importe de los gastos de conservación y reclamarlos al deudor, si aquéllos fuesen insuficientes, a menos que se hubiere convenido que en su totalidad se compensarían con los intereses.

También aparece suprimida, de acuerdo con Bibiloni, la segunda parte del art. 3261, por incompatible con el sistema de publicidad de los derechos reales sobre inmuebles, que hemos adoptado.

SECCION TERCERA

PROTECCION DE LOS DERECHOS REALES

TITULO I

De la demarcación de los inmuebles

Este título, que Vélez colocara en el del condominio y Bibiloni en el correspondiente a las restricciones y límites de la propiedad, encuentra a nuestro juicio una ubicación más lógica dentro del que se refiere a la protección de los derechos reales. Nos ha parecido errónea la asignada por el Código, porque en el supuesto que contempla el artículo primero, no existe condominio alguno, y por lo tanto, no se trata de partir lo común, sino simplemente de fijar lo que es propio de cada vecino.

Demarcar por un lado lo que es de dos y dividir lo indiviso, son acciones independientes, y como la primera nace de un derecho que es a la vez carga originada por las relaciones de la vecindad, su ejercicio implica poner en juego,

un medio que protege al dominio. La circunstancia de que la determinación de los límites no sólo interese a los particulares, sino también al público, explica que el Proyecto acentúe la intervención judicial y administrativa. De ahí que en un artículo se establezcan los trámites para el deslinde, y se disponga que la mensura homologada judicialmente, si la demarcación fuere convencional, como el fallo respectivo, si fuere judicial, constituirán el título de propiedad entre las partes y sucesores, siempre que se hubieren inscripto en el Registro.

También se decide cómo los vecinos habrán de concurrir a los gastos, y por fin, prevemos que cuando el desacuerdo de las partes, no se refiera al trazado de los límites en el terreno, sino a la extensión del dominio de cada cual, sea el juez quien decida, sobre la base de los títulos, de la posesión en su defecto, o finalmente por las circunstancias del caso, con arreglo a los hechos demostrados.

TÍTULO II

De las acciones reales

El artículo único que contiene este capítulo, se propone destacar el doble propósito que con Bibiloni asignamos a las acciones reales: declarar la existencia, plenitud y libertad de esa clase de derechos, y a la vez impedir los hechos que se opongan a su libre ejercicio o puedan perturbarlo. Nos apartamos así del 2756, que sólo les reconoce un carácter puramente declarativo, y al mismo tiempo evitamos que surja en nuestro derecho, el distingo que sobrevino en el alemán, con la teoría de la acción declarativa. Al aceptar la fórmula de Bibiloni, obtendremos todas las ventajas del modelo pero evitando el inconveniente apuntado.

La eliminación del art. 2757 no sólo obedece a su carácter doctrinario: responde asimismo, a su concepto erróneamente limitado, desde que las acciones reales no nacen sólo del dominio.

CAPÍTULO I

De la acción reivindicatoria

No consignamos una definición que entendemos innecesaria, y en cuanto a la materia, ella aparece como siempre distribuída con un orden lógico: quiénes pueden ejercer la acción; contra quién; qué cosas pueden ser objeto de ella; cómo se ejerce y cuáles son sus efectos.

De acuerdo con la amplitud que reconocemos a la acción reivindicatoria, se explica que el artículo inicial la extiende no sólo al propietario de la cosa, sino a todos los titulares de derechos reales que se ejerzan por la posesión, y por último al acreedor hipotecario. Dependerá, como es natural, en cada caso, del derecho puesto en juego, la finalidad que corresponda, coincidente siempre en obtener el pleno uso del derecho en que la acción se funde.

El artículo que establece quiénes no pueden reivindicar, fija claramente que la acción requiere tanto el derecho a poseer la cosa cuando se inicia la demanda, como al fallarse la causa.

Si bien es principio que por el hecho de inscribirse un título no adquiere validez, ello no implica que sea igual la situación de quien reivindicar en todos los casos. Aquella varía según que el poseedor haya obtenido el bien del reivindicante, o en razón de la naturaleza del título por el cual lo hubo, y de la circunstancia de que pueda o no invocarse la fe pública derivada del Registro. En realidad, vinculando las reglas que aquí se establecen, con las que aparecen formuladas en el título II de la Sección Segunda, puede concluirse que la reivindicación procederá contra los terceros que no puedan ampararse en la presunción derivada del Registro, en tanto que no podrá prosperar contra quienes ignorando los vicios del título de su autor, por acto a título oneroso hubieren adquirido derechos de los que aparecen en el Registro en condiciones de constituirlos.

Podrá notarse que hemos eliminado distintos artículos del Código, los unos por defectuosos o incompatibles con el nuevo sistema (2776 a 2778), o bien porque se hallaban comprendidos en otros, como el 2760; pero mantenemos el 2759, no obstante la opinión en contra de Bibiloni, y hemos modificado el 2762 para sentar que los títulos al portador pueden ser reivindicados cuando su identificación fuere posible.

Se ocupa nuestro Proyecto, de la reivindicación de muebles, y luego de establecer el principio de los arts. 2412 a 2414, se puntualizan los casos en que procede tal reivindicación. Extendemos el alcance del 2781 a todos los poseedores mediatos e inmediatos, siguiendo la doctrina de los códigos alemán y suizo; pero sentamos que tratándose de muebles para cuya transmisión se exige el registro, se presumirá que la propiedad pertenece a quien los tuviere anotados a su nombre o a quien corresponda la marca inscripta.

Acercas de la reivindicación de las cosas muebles robadas o perdidas, mantenemos el 2768, sin la exigencia equivocada de que la cosa se hubiere vendido con otras iguales, y se agrega el supuesto de las ferias o mercados, como lo hacen los códigos francés, español y suizo, para impedir que se pretenda aplicar la norma del 2771, como lo dice Bibiloni, so pretexto de que en ferias y mercados existen vendedores ambulantes.

Eliminamos el art. 2769, reproduciendo con variantes los 2779 y 2780, reformando el 2789 que erróneamente sólo se refiere al poseedor de mala fe, y substituimos el 2787 por reglas que permiten al poseedor inmediato defender en el juicio los derechos que pueden corresponderle en virtud de la posesión.

También suprimimos por inútil y peligroso el 2783, como lo demuestra Bibiloni, y reunimos los 2784 y 2785, corrigiendo la doctrina equivocada del último, ya que lo único que puede exigirse de quien dejó de poseer la cosa, es la reparación del daño causado por la mala fe.

Por fin, luego de unificar los arts. 2788 y 2786, se permite expresamente al actor que pueda también deducir conjuntamente con la reivindicación las demandas accesorias, que puedan corresponder según los casos.

A continuación, el Proyecto trata, modificando fundamentalmente los preceptos del Código, la materia de la prueba, con arreglo al sistema que supone el Registro. Diversos incisos detallan con toda claridad los casos. Como regla general se prescribe que el reivindicante debe probar su derecho con la inscripción, así como el demandado respecto del título que oponga. Vienen luego los supuestos de excepción con sus reglas particulares.

Se detallan las normas a que habrá de ajustarse el cumplimiento de la sentencia, apareciendo consignadas en primer término, las que corresponden a los arts. 2793 y 2794. Colocamos luego, con más lógica, otras que el Código trae en el título de la posesión, y reproducimos en cuanto a los frutos, los arts. 2433 y 2439, manteniendo — no obstante la opinión contraria de Bibiloni — la regla del 2435, que responsabiliza al poseedor de mala fe, por la ruina o deterioro ocasionados por caso fortuito. Seguimos en cambio, la doctrina del Anteproyecto, al eliminar los arts. 2434 y 2436, por considerar erróneo el primero y excesivo el segundo.

Los últimos incisos legislan con más método lo relativo a gastos o mejoras, distinguiéndose las impensas efectuadas en el bien, según el estado en que se encontraba al iniciarse la posesión del reivindicado, y las consistentes en construcciones o trabajos nuevos, tanto necesarias como útiles. Con más amplitud que en el Código, se admite la compensación entre reivindicante y poseedor en cuanto a las sumas que respectivamente debieren pagarse, y se permite que el segundo pueda retener la cosa hasta percibir el importe de las indemnizaciones que le correspondan, todo ello sin reproducir los reatos de los arts. 2428 y 2440.

También disponemos que en caso de que la retención procediere, podrá el poseedor estimar su crédito y requerir la conformidad del dueño dentro de un plazo prudencial. Transcurrido éste, se le faculta a que persiga el pago sobre la cosa, derecho que naturalmente no se acuerda cuando el dueño objeta la liquidación. En este caso, ha de ser previo el fallo judicial.

Por fin, permitimos que el abandono de la cosa libere al propietario respecto del poseedor, todo ello como consecuencia de que el vínculo de la obligación que les une, reside únicamente en el bien reivindicado.

CAPITULO II

De la acción confesoria

En este capítulo se expone la materia pertinente desarrollada así: contra quién procede; a quiénes compete; qué debe probarse, y finalmente, se prevé el supuesto de que el inmueble dominante o sirviente perteneciere a poseedores con derecho a poseer, para reglar entonces sus respectivos intereses.

CAPITULO III

De la acción negatoria

Con igual criterio que en el capítulo anterior, reproducimos simplificados los preceptos correlativos del Código.

Debemos consignar que un artículo final del capítulo de la acción reivindicatoria, deja establecido que lo dispuesto respecto de ella se aplicará en lo pertinente, a las acciones confesoria y negatoria.

LIBRO QUINTO

DE LA SUCESION HEREDITARIA

El libro IV del Código que ahora nos rige, contiene un título preliminar denominado: "De la transmisión de los derechos en general". Como Bibiloni, la Comisión entiende que los preceptos en él comprendidos son superfluos y hasta peligrosos, pues importan generalizar principios que con menor extensión y mayor exactitud, ha establecido en particular la ley, cuando reglamenta los contratos o los derechos reales. Ofrece el sistema, también, el inconveniente de presentar como necesarias en todo traspaso, normas que en realidad son limitadas, en virtud de lo que el propio Código determina, y el serio peligro de inspirar más de una solución injusta, según lo ha demostrado la práctica.

SECCION PRIMERA

DE LA TRANSMISION POR CAUSA DE MUERTE

TITULO I

Del derecho sucesorio

Con un método que considera más lógico que el adoptado por el Código Civil y el que aconseja el Anteproyecto, la Comisión ha distribuido la materia de este título en la siguiente forma: Capítulo I: Disposiciones generales. Capítulo II: De la aceptación y de la renuncia de la herencia. Capítulo III: Del beneficio de inventario. Capítulo IV: De la separación de patrimonios. Capítulo V: De la indignidad.

Hemos dejado para el título siguiente lo que concierne a la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos

hereditarios, o sean las medidas conservatorias, la declaración de herederos y la petición de herencia.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Eliminados los arts. 3279 a 3281 —de carácter más bien doctrinario— comenzamos el capítulo con un precepto, cuya primera parte equivale al 3282 y la segunda contiene la noción de la herencia. Siguen luego las normas sobre la capacidad para suceder, acerca de la cual reproducimos los arts. 3287 y 3288, y las referentes a la transmisión *ipso jure* de la herencia, en cuya virtud los herederos de toda especie quedan investidos del patrimonio del causante a partir del momento del deceso.

El art. (1855) del Proyecto se inspira en una regla que propone Bibiloni y que a la vez armoniza con el 3588 actual. Los arts. 3283 y 3284 han sido conservados, suprimiéndose en cambio el 3286, por ser incongruente con el primero de aquéllos. Así también resulta del Anteproyecto.

Termina el capítulo con una norma que tiene por objeto mantener dentro del país, la unidad de jurisdicción en materia sucesoria. Forma la parte final del art. (1856).

CAPITULO II

De la aceptación y de la renuncia de la herencia

De acuerdo con el Código y el Anteproyecto, mantenemos la responsabilidad *ultra vires* del heredero, si bien atenuándola en la forma que se verá más adelante. Estimamos que no son suficientes los motivos que se invocan, para abandonar un sistema que robustece los vínculos de familia y se ajusta a nuestras modalidades y tradiciones. Para liberar a sus bienes, el llamado a la herencia tiene la facultad de renunciar a ella o el derecho de acogerse al beneficio

de inventario, que en el respectivo capítulo aparece considerablemente facilitado. Debe observarse además, que la confusión de patrimonios no se produce cuando el autor falleciere en estado de concurso, o si el auto declarativo de éste se dictare dentro de los seis meses de abierta la sucesión.

Las dudas y controversias que han suscitado los textos de nuestro Código, en cuanto a la situación del heredero que no manifestare la voluntad de aceptar o repudiar, quedan descartadas en vista de la regla que proponemos y que también resulta del trabajo de Bibiloni: por la muerte del causante, el llamado a la sucesión adquiere la herencia *ipso jure*, pudiendo renunciarla dentro de los ciento veinte días contados desde que conoció el deceso y el título que le correspondía. Transcurrido ese plazo —o el de ciento ochenta días para quien se hallare en el extranjero— se le tendrá como aceptante, si no hubiere expresado una voluntad distinta.

Se autoriza al heredero para obtener la formación de inventario, a fin de resolver dentro de los mismos términos (que podrán ser ampliados en ciertos casos) si acepta o repudia la herencia.

Por más que conservamos en principio la obligación del aceptante consignada en el art. 3343, restringimos el alcance que éste le reconoce. Así, en lo que se refiere a los legados, la limitamos al valor del activo hereditario. Han sido generales las críticas formuladas contra la tesis opuesta, ya que el testador, si puede hacer liberalidades con sus bienes propios, no está autorizado para imponerlas al heredero, a fin de que las satisfaga con su patrimonio personal.

De los artículos finales, el uno substituye a los 3335 a 3337, y 3350 del Código, sobre la nulidad de la aceptación y de la renuncia; los otros dos, reproducen los arts. 3340 y 3341.

CAPITULO III

Del beneficio del inventario

Hemos procurado remover los inconvenientes y trabas que actualmente se oponen al ejercicio de este derecho, así

como corregir las contradicciones y obscuridades que ofrece el Código.

Permitimos al heredero aceptar con beneficio de inventario, dentro del mismo plazo fijado para la renuncia, y disponemos que esta declaración sólo producirá efecto desde que fuere anotada en el Registro, formalidad que los jueces ordenarán de oficio.

Los concursados, los incapaces y las mujeres casadas (salvo en este último caso, con la autorización del marido o del juez) sólo podrán aceptar herencias con beneficio de inventario, y gozarán de él aunque no se hubieren cumplido las formalidades legales por los respectivos representantes, quienes responderán a los acreedores por el daño que con ello les irrogaren. Seguimos aquí lo consignado en el código español y en el Anteproyecto.

De acuerdo con Bibiloni, reemplazamos los arts. 3371 y 3373 a 3376 por uno solo, en el cual se determina claramente que, producida la aceptación beneficiaria, quedarán separados los patrimonios del causante y del heredero, quien conservará sus derechos contra la sucesión y sólo responderá por las deudas y cargas, con los bienes que hubiere recibido por herencia. Entre estos últimos no se comprenden los que el causante le hubiere entregado en vida, aunque deban ser reintegrados a la masa; ni tampoco aquellos cuya colación pueda exigir a los demás herederos.

Queda suspendido el derecho de ejecución particular para los legatarios y acreedores que carezcan de garantías reales, pudiendo el juez paralizar por sesenta días los juicios de quienes las tuvieren. Es el principio adoptado por el proyecto belga, que también recomienda Bibiloni. Como la aceptación beneficiaria se produce, por lo general, ante una masa insolvente o de difícil liquidación, parece razonable aplicar al caso los principios relativos a los concursos. Las normas sobre administración y liquidación de estos últimos regirán en subsidio, dentro de lo pertinente. De esta suerte, todos estos trámites quedan sujetos a la autoridad y vigilancia del juez, a cuya orden deberá el heredero depositar las sumas que perciba, rindiendo cuenta trimestral, sin perjuicio de la que habrá de presentar al término de su gestión.

El heredero beneficiario podrá ser removido de la administración siempre que por su incapacidad, insolvencia o irregularidades, hiciere peligrar los derechos de algún interesado, o diere motivos para temerlo.

Bibiloni no admite el derecho que los arts. 3379 y 3380 acuerdan al heredero para hacer abandono de los bienes sucesorios y liberarse del pago de las deudas. Por el contrario, establece en su Anteproyecto que sólo podrá solicitarse su reemplazo en la administración, justificando las causas que enumera. Se atiene pues, con todo rigor, al principio de que la aceptación beneficiaria se establece, tanto en interés del heredero como de las otras partes, y que los deberes administrativos de aquél importan una carga que no puede ser declinada arbitrariamente. Juzgamos este criterio demasiado estricto y que conviene mantener el sistema actual.

Después de prever los supuestos en que se pierde el beneficio de inventario, se dispone que el heredero será entonces, considerado aceptante puro y simple, con la reserva a favor de los acreedores de su derecho para exigir se mantenga la separación de los patrimonios. No obstante la doctrina que sustenta el autor del Anteproyecto en una de sus notas, no reconocemos a esta última un carácter irrevocable; de suerte que, cesado el beneficio, no subsiste tal situación; a menos que los acreedores así lo exijan. El resultado que consagra Bibiloni en su art. 67 no armoniza con el principio antedicho.

CAPÍTULO IV

De la separación de patrimonios

Hemos modificado profundamente el sistema del Código Civil, apartándonos del código francés, que considera la separación de patrimonios como una medida de carácter individual y de efecto limitados al acreedor solicitante.

Consagramos con el Anteproyecto justamente la regla contraria, como más lógica y jurídica: la separación de patrimonios produce consecuencias en cuanto al peticionante

y también respecto de todos los demás interesados. En virtud de ella, los respectivos acervos mantienen su independencia, quedan limitadas las facultades del heredero para administrar y disponer; y los bienes dejados por el causante al morir (no los que hubiere donado en vida) responden preferentemente al pago de los acreedores de la sucesión.

Dicha medida deberá ser prenotada en el Registro, por lo cual se modifica el art. 3440 del Código, para referirlo a la fecha en que se produce aquélla, en lugar de la providencia en que se decreta la separación.

Por fin, cabe señalar que no habiendo motivo suficiente para establecer normas distintas de las que rigen para el beneficio de inventario, la Comisión ha dispuesto, de acuerdo con Bibiloni y el proyecto belga, que ellas serán extensivas a estos casos en lo que no esté previsto dentro del presente título.

CAPITULO V

De la indignidad

Al redactar este Proyecto, la Comisión ha reunido en un solo artículo las distintas causales de indignidad, ampliándolas para comprender algunos supuestos no incluidos en las disposiciones del Código.

Así, reputamos indigno al heredero que fué autor o cómplice de cualquier delito contra la persona o la honestedad del causante, su cónyuge, ascendientes o descendientes, aún cuando no medie condenación en juicio criminal.

El art. 3295 ha sido objeto de reforma, porque no es indispensable que el causante abandonado fuere demente: bastará la concurrencia de ese abandono con el supuesto de necesidad.

También ha sido rectificado el error contenido en el art. 3301 con respecto a los descendientes del indigno, determinándose que, llamados a heredar en defecto de este último, no serán perjudicados por sus faltas, y que sucederán al causante por derecho de representación.

No habiendo en realidad, motivos para fijar nuevas reglas sobre la devolución de los bienes recibidos por el

indigno, disponemos con Bibiloni que regirán en tal caso las disposiciones relativas a la posesión de mala fe.

En punto a la cesación de la indignidad, conforme al Anteproyecto, se incluye el perdón entre las causales, modificando así el art. 3297 del Código, cuyos términos han suscitado justas críticas.

TÍTULO II

De la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios

CAPÍTULO I

De las medidas conservatorias

Se han reunido en este capítulo disposiciones tomadas ya de nuestra legislación, ya de la suiza y la alemana, que tienen por objeto asegurar la conservación de los bienes dejados por el causante. Así, queda autorizado el juez para tomarlas de oficio, en los casos de incapacidad del heredero y de ausencia prolongada del mismo sin haber dejado mandatario, como también respecto de bienes abandonados o en poder de intrusos.

Facultamos al magistrado para autorizar la venta de los muebles, siempre que lo exijan por su naturaleza, y la prosecución del comercio o de la industria del causante, en su caso.

Por razones obvias, se establece con carácter de indispensable la publicidad de edictos en todo juicio sucesorio, sea **ab intestato** o testamentario. Se prevén además, los casos en que procede nombrar un curador, cuya misión terminará con la declaratoria de herederos.

CAPÍTULO II

De la declaratoria de herederos

El Proyecto legaliza nuestra práctica en cuanto a la declaratoria de herederos, que exigimos tanto para los juicios

sucesorios **ab intestato** como para los testamentarios, detallando los requisitos que es menester cumplir para llegar a obtenerla.

Como en el Anteproyecto, autorizamos al juez de la sucesión para suspender la declaratoria, hasta que se resuelva el pleito entablado con respecto al derecho hereditario. Podrá también, decidir sumariamente cualquier incidencia que surja entre los pretendientes, debiendo abstenerse de dictar la declaratoria hasta que desaparezca la incertidumbre, cuando existiere un heredero eventual concebido, que si naciera con vida excluiría a los otros.

Dictado el auto, se presume que el heredero es titular del derecho sucesorio, sin perjuicio de la impugnación de que pueda ser objeto en juicio ordinario. Con arreglo al sistema de publicidad introducido, tanto la declaratoria como las sentencias que la rectifiquen o anulen, deberán ser inscriptas en el Registro.

Este régimen legal permite resolver con facilidad y acierto la cuestión relativa al heredero aparente, sin distinguir entre el testamentario y el de sangre, pues podrá invocar la declaratoria todo aquel que por un acto jurídico a título oneroso, hubiere adquirido un bien del acervo o algún derecho sobre él, o una liberación de un crédito comprendido en la herencia. Los terceros pueden, así, contratar sin temor con la persona declarada, pues no podrán ser impugnados los actos que realizare en tal carácter.

CAPITULO III

De la petición de herencia

Comenzamos por establecer el concepto de la petición de herencia y los casos en que ella procede, teniendo en cuenta que puede dirigirse, tanto contra quien se dice heredero como respecto de cualquier poseedor de bienes hereditarios que, sin derecho suficiente, los tuviere como sucesor del causante; aún con relación a quien, poseyendo bienes hereditarios a la muerte del autor, callare su título; y por último, contra el que los hubiere substraído o apoderádose de ellos indebidamente.

En la misma forma se enumeran las consecuencias legales de la petición de herencia, reproduciendo algunos principios que Bibiloni tomara de Aubry y Rau o de los códigos suizo y alemán. Así, para el caso de que no fuere posible la restitución a que se refiere el art. 3422, se determina que se aplicarán las reglas del enriquecimiento sin causa.

En lugar de los arts. 3425, 3426 y 3427, se dispone, con mejor criterio, que rijan los preceptos sobre la reivindicación, en cuanto no estén modificados en el presente capítulo.

Contra lo que resulta de los arts. 3425, 3426 y 3427, se declara poseedor de mala fe a quien conozca o deba conocer la existencia de herederos preferentes o la de legatarios, a quienes haya omitido citar para impedirles el ejercicio de su derecho. Se enmienda de tal modo, un error de nuestro Código, incompatible con el régimen de publicidad contenido en el Proyecto, evitándose también los pleitos difíciles y complicados que pueden fundarse en los textos actuales.

Nos ha parecido útil consignar que las normas relativas a las acciones posesorias, beneficiarán al heredero para ser mantenido o reintegrado en el ejercicio de sus derechos, o en el uso y goce de los bienes comprendidos en el activo de la sucesión.

TÍTULO III

De la pluralidad de herederos

Dos reformas se destacan por su importancia entre las propuestas con referencia a esta materia. La primera es la que suprime la división *ipso jure* de los créditos y deudas, que actualmente se produce entre los herederos por la muerte del causante. La segunda concierne a la colación, cuyas reglas actuales han sido depuradas de errores e incongruencias.

CAPÍTULO I

Del estado de indivisión

De acuerdo con lo expresado, el primer artículo de este capítulo prescribe que cuando dos o más personas concurran

simultáneamente a la herencia, la masa les pertenecerá en común hasta que se realice la partición. Así pues, cada heredero podrá disponer de sus derechos, pero no de parte alguna, materialmente determinada, sobre los bienes de la sucesión.

Después de enumerar los elementos que integran ese conjunto, se dispone que mientras dure la indivisión, dicho patrimonio será administrado en común por los herederos. Si no hubiere consenso unánime, esa función será ejercida por el cónyuge supérstite, y en su defecto, o no siendo idóneo, por quien determine la mayoría, salvo que existieran razones especiales para no designarlo. La solución propuesta representa un término medio conveniente entre el principio del libre veto y el que hace prevalecer el número o el interés de los comuneros, aprovechando las ventajas que ambos ofrecen.

Cada heredero está obligado a prestar su concurso al administrador, en cuanto se requiera para el desempeño de su cometido. En subsidio, regirán los principios relativos al condominio.

Las partes conservan las acciones conducentes a la seguridad de los derechos hereditarios, sin que sea menester la anuencia de los demás interesados. De igual modo pueden ejercer la petición hereditaria, las acciones reales y las posesorias que correspondan a la masa, sin que ello impida a los otros coherederos intervenir dentro de los respectivos juicios.

Incorporado al Proyecto el bien de familia, correspondía incluir en este capítulo las normas referentes a la indivisión del mismo en caso de muerte de su dueño. Entre otras, facultamos al juez para resolver con el criterio de un buen padre, las controversias relacionadas con la administración del inmueble.

Los bienes hereditarios están indivisiblemente afectados a las deudas contraídas por el causante. Los acreedores particulares de los herederos no pueden ejercer antes de la partición sus acciones sobre el acervo; ni los acreedores de la masa podrán dirigir las suyas contra el patrimonio personal de los herederos. Estos últimos, como los titulares de créditos y los legatarios, podrán exigir el pago de las obligaciones y de las mandas, antes de la partición. Deberá en-

tonces, liquidarse el activo en la medida necesaria para tal fin, siendo menester la vía judicial cuando hubiere incapaces o ausentes, o siempre que alguno de los interesados lo pidiera.

En ningún caso podrán dividirse los bienes sin dejar los bastantes para cubrir las deudas y legados, aunque ellos sean litigiosos o pendientes de plazo o condición.

De acuerdo con el Anteproyecto se prevén los supuestos en que procede suspender la partición, a mérito de existir incertidumbre sobre las partes hereditarias, ya por esperarse un nacimiento, el fallo de algún litigio, se autorice alguna fundación instituida por el causante, o en fin, porque no se hubieren aún publicado los edictos de rigor.

Hemos aceptado con ciertas limitaciones, un artículo de Bibiloni que restablecía el retracto a favor de los coherederos. Sin hacer revivir una institución que no armoniza con nuestras costumbres, y que perturbaría la negociabilidad de los bienes, declaramos nula toda transferencia que el heredero hiciere de su parte indivisa a favor de extraños, sin haberla ofrecido antes a los demás copartícipes, a quienes deberá preferirse en igualdad de condiciones.

CAPÍTULO II

De la partición

Hemos armonizado las reglas de los arts. 3452, 2675, 2693 y 2694, limitando el alcance del primero a los herederos forzosos. La indivisión ha sido mantenida siempre que tal estado pudiere convenir a las partes y a la economía nacional. Así, proyectamos que a falta de legitimación, sea lícito disponer por testamento la prohibición de partir por un término que no exceda de diez años, y aún hasta que el último de los menores alcance la mayoría de edad; pero solamente respecto de un bien determinado o de un establecimiento industrial o mercantil. El mismo límite rige igualmente, cuando mediar convenio entre coherederos, el cual podrá celebrarse cuando existan incapaces, con la intervención de sus representantes, debiendo ser aprobado por el juez.

En todos los supuestos antedichos, se autoriza a los tribunales para permitir la partición, cuando sobrevinieren circunstancias graves y urgentes que la tornaran necesaria.

Al comparar nuestro Proyecto con el de Bibiloni, puede notarse que los preceptos de este último han sido atenuados, para reducir los casos de indivisión a los que juzgamos realmente beneficiosos, eliminando los inconvenientes que ocasionaría una regla más extensa.

Los principios del Código sobre la partición convencional y la judicial, han sufrido también diversos cambios. En virtud de ellos, exigimos el acuerdo de todos los herederos (no de la mayoría como dice el art. 3462) para la división privada. Los menores emancipados, que menciona el 3465, no necesitan curador especial, por lo que debe suprimirse el 3456, que así lo impone. Incluimos en el 3457, aparte de los presuntos fallecidos, a los herederos y legatarios ausentes. Tanto las cláusulas del testamento, como los acuerdos entre partes en cuanto a la indivisión, revisten valor contra todos, inclusive los acreedores, que no podrían entonces reclamar se divida la herencia, según lo determina el 3452 actual.

Nos apartamos del Anteproyecto, que eliminaba a los partidores, para conservar el régimen actual, que no ha producido mayores inconvenientes y que se encuentra incorporado a nuestras prácticas judiciales. Por lo demás, estimamos que no sería posible recargar las tareas de los jueces imponiéndoles la de realizar directamente la división, y que en el hecho esto se traduciría en nombramientos de oficio, que en lo posible tratamos de evitar.

Hemos admitido en general, las reglas indicadas en el Anteproyecto como base para las particiones judiciales.

CAPITULO III

De la colación

La variedad de las fuentes que inspiraron a Vélez, unida a la reforma que se introdujo en el art. 3476 al aprobar la Ley Fe de Erratas, han dado margen a una serie de confusiones y de obscuridades, a las que debía ponerse término, restableciendo el verdadero concepto de la colación.

El autor del Anteproyecto emprendió esa tarea, y hemos aceptado en general, sus conclusiones. El carácter de esta figura y su principal fundamento, resultan asimismo de los arts. 1805 y 3524. Por más que la imputación a la legítima se hace interpretando el silencio del causante, no puede perderse totalmente de vista la necesidad de asegurar la igualdad entre los herederos. De ahí que nos apartemos del modelo, cuando exonera a los ascendientes del deber de reunir a la masa los valores dados en vida por el difunto.

La cantidad a colacionar será considerada como anticipo, salvo el caso de dispensa en el testamento o en el título constitutivo de la liberalidad, completando así, los preceptos que nos rigen. Añadimos que las donaciones simuladas por interpuesta persona o por transferencias a título oneroso, no importan dispensa de colacionar. Resolvemos así, el problema planteado por el art. 3604, en el sentido de que estos valores no deben cargarse a la porción disponible, criterio que preferimos al del Código, que admite Bibiloni con variantes de mero detalle.

Al indicar quiénes pueden pedir esta medida, se agrega otro requisito al establecido en la segunda parte del 3483, y es que no medie separación de patrimonios.

Entre los obligados a colacionar incluimos al heredero que, no siendo presuntivo en el momento de la liberalidad, resultare forzoso al abrirse la sucesión, todo de acuerdo con el código francés.

En un solo artículo agrupamos los casos de colación. Figuran entre ellos, las sumas invertidas por el autor para establecer a sus hijos en forma independiente, sea con motivo del matrimonio, para una explotación económica o para mejorar sus bienes.

También prevenimos los supuestos de liberalidades bajo la apariencia de actos a título oneroso, como aquellos de que resulte enriquecimiento, cesión gratuita de un crédito, renuncia del que tenía el causante contra el heredero, así como el pago que el ascendiente hiciere de las deudas de aquél con ánimo de beneficiarle, pues estas tres hipótesis son verdaderas donaciones. En otro precepto determinamos aquello que no debe colacionarse, como el importe del seguro de vida constituido por el causante a favor del descen-

diente, aunque corresponde reintegrar a la masa las primas pagadas por aquél.

Conforme a la nota del art. 3477 y a lo propuesto por Bibiloni, se dispone que la colación debe hacerse por el valor que los bienes tenían cuando fueron donados, aunque hubieren ya perecido.

Cierran el capítulo dos reglas tomadas por el Anteproyecto, de Aubry y Rau y de Demolombe, que la Comisión ha considerado conveniente reproducir.

CAPITULO IV

De la división hechas por los ascendientes

Aunque no sea común esta manera de dividir los bienes hereditarios, hemos creído razonable conservarla, si bien reducida a límites más estrechos que los actuales, para prevenir las dificultades y trastornos que suele ocasionar.

Respondiendo a este criterio, hemos eliminado la parte final del art. 3514 y todo el 3515, que el Anteproyecto reproducía con algunas modificaciones.

La partición debe comprender al otro cónyuge, y puede extenderse a las personas a quienes el causante deseara favorecer dentro de su porción disponible. Después de reproducir el 3530, se establece conforme al código suizo y a la tendencia de la literatura jurídica moderna, que será lícito adjudicar a uno o más descendientes o al cónyuge, una explotación industrial, agrícola o fabril, cubriendo la parte de los demás con otros bienes o imponiendo a los adjudicatarios el pago de lo que sea menester para ese fin.

Régase luego, lo relativo a la partición por actos entre vivos: requisitos, efecto, revocación y reintegro de la legítima, debiendo señalarse un agregado al art. 3522, tendiente a restringir el efecto de la revocación por ingratitud, para el donatario que ha dado lugar a la misma, y también un precepto según el cual, si aquélla no subsistiera al fallecer el donante, podrá el heredero cobrarse con lo que restare indiviso, y si no fuere suficiente, dirigirse contra los demás donatarios.

Los preceptos sobre partición testamentaria, han sido también reunidos para mayor sencillez y claridad. El art. 3524, que se mantiene en cuanto a las donaciones, es objeto de una reforma, para decidir con más lógica y justicia, que si el lote atribuido a un heredero contuviere excedente, se imputará a su respectivo haber, y cuando él no alcanzare, a la cuota disponible.

De acuerdo en parte con Bibiloni, autorizamos a los esposos para dividir de común acuerdo y por donación, los bienes propios y gananciales entre sus descendientes. No así por testamento, acto que reviste caracteres especiales que impiden sea otorgado conjuntamente.

Los cónyuges podrán reservarse el usufructo de los bienes, o afectarlos a una renta vitalicia a favor de cualquiera de ellos o del sobreviviente, así como revocar la donación por las causales que la ley autoriza, ello en cuanto a la parte que a cada uno corresponde.

También se autoriza al supérstite para dividir los bienes del fallecido, sea cual fuere la naturaleza de ellos, y comprenderlos en el reparto por donación que hiciere de su patrimonio personal.

Termina este Capítulo con dos reglas, relativas la primera a los casos en que la partición quedará sin efecto (arts. 3528 y 3529) y la segunda, a la rescisión de la misma (art. 3536), derecho que también puede ejercer el supérstite cuando resulte perjudicado.

CAPITULO V

Del efecto de la partición

La reforma principal que se ha introducido en este punto, consiste en suprimir la ficción inútil y dañosa de la retroactividad: la partición, según lo propone Bibiloni y lo establece el Proyecto, confiere la propiedad exclusiva de los bienes comprendidos en cada lote, desde que fuera inscrita en el Registro.

El mismo efecto se reconoce a todo acto oneroso que pusiere fin a la indivisión y adjudicare bienes en propiedad exclusiva a un heredero.

Las demás normas de este Capítulo, relativas a la garantía recíproca, son las de nuestro Código, con sencillas variantes de redacción.

TÍTULO IV

Régimen especial de los sepulcros

Las reglas que establecemos son las del Anteproyecto con algunas modificaciones, y responden a la necesidad de prevenir los diversos conflictos que se plantean con motivo de los sepulcros, cuya solución ofrece hoy serias dificultades por la falta de normas adecuadas. Declárase carga de la masa hereditaria, la sepultura del causante en la tumba de su familia, y a falta de ella, en la que corresponda según su condición y fortuna, siendo por cuenta de los herederos y de los sucesores de éstos abonar los gastos para mantenerla.

Se conserva el principio de la ley N° 4128 sobre inembargabilidad de los sepulcros, exceptuándose el caso de adueñarse el precio de su venta o construcción. Además, se fija como criterio general el de la inalienabilidad, si bien admitimos con la jurisprudencia, no obstante la opinión de Biliboni, que podrá ser autorizada la venta por el juez, siempre que se trasladaren los restos a otra tumba adecuada y con tal que el dueño del sepulcro no hubiere dispuesto que no habría de enajenarse, cláusula que se extiende al término de la concesión administrativa. También podrá procederse a dividir los sepulcros, cuando los herederos estuvieren de acuerdo.

Para evitar divergencias muy frecuentes entre los comuneros, se exige la conformidad de todos ellos para inhumar en el sepulcro cadáveres que no sean el del cónyuge del causante fundador, de los esposos de los herederos y sus descendientes.

En previsión de casos como los que en más de una oportunidad se han planteado, hemos estimado justo y conveniente que a falta de disposición del causante sobre su cadáver, tendrá derecho para adoptarla el cónyuge supérstite, y en su defecto, los descendientes y ascendientes por el or-

den en que son llamados en las sucesiones intestadas, siempre que no hubiere motivos especiales, sujetos a la apreciación judicial. •

• • •

A continuación de las reglas concernientes a esta materia, Bibiloni proyectaba otras sobre la sucesión en los derechos de autor. De acuerdo con el concepto ya expuesto en otra parte de este informe, hemos resuelto eliminarlas.

TÍTULO V

De las sucesiones vacantes

Determinados los casos en que la sucesión deberá reputarse vacante, autorizamos, a falta de albacea, que el juez designe curador de oficio o por aplicación de leyes especiales.

Réglese a continuación lo referente a las facultades del curador, sea para medidas precautorias o en cuanto a la administración, que se rige por las normas del beneficio de inventario. Reproducimos también, los preceptos sobre declaración de vacancia, aparición de herederos, etc., con escasas reformas.

Como el Anteproyecto, suprimimos todo lo relativo a la sucesión del fisco, por ser innecesario, ya que se determina que en estos casos los bienes pasarán a propiedad de aquél. Además, descartamos así la discutida doctrina que hace del Estado un heredero.

SECCION SEGUNDA

DE LAS SUCESIONES INTESTADAS

Las modificaciones más importantes que se han introducido en esta sección, son las relativas al orden hereditario, para propender a una distribución más justa, sobre todo en cuanto al cónyuge, a los colaterales y a los hijos ilegítimos. También se amplía en ciertos casos, la porción disponible del causante.

TITULO I

Disposiciones generales

En lo substancial, quedan reproducidas las normas de los arts. 3545 a 3548.

TITULO II

De la representación

Las disposiciones reformadas o substituídas dentro de este capítulo, obedecen al propósito de aclarar los preceptos actuales. Algunas de ellas, sin embargo, determinan con mayor exactitud los principios que gobiernan la materia. Por tal motivo, se rectifica el art. 3549, para consignar que debe tratarse de herederos legítimos, y también, que procede la representación del indigno por sus herederos. De igual modo, suprimimos la parte final del 3560. Con arreglo al sistema implantado para la sucesión de los sobrinos, se elimina el 3561 y se modifica el 3563.

TITULO III

Del orden hereditario en las sucesiones intestadas

CAPITULO I

Sucesión de los descendientes legítimos

Sólo ha variado la forma de los arts. 3565 y 3566. No hemos creído necesario agregar un texto referente a los

hijos adoptivos, por cuanto el derecho sucesorio de éstos surge de lo dispuesto en el art. 478.

CAPITULO II

Sucesión de los ascendientes legítimos

De acuerdo con el Anteproyecto, decimos “ascendientes legítimos” y no simplemente “ascendientes” como el Código, a fin de prevenir dudas y discusiones. Con esta salvedad, reproducimos los arts. 3567 a 3569.

CAPITULO III

Sucesión de los cónyuges

El derecho hereditario del viudo o viuda queda fijado en el tercio o la mitad de los bienes respectivamente, según que sobrevivieren al causante, el padre y la madre del mismo, o solamente uno de ellos. Si hubieren fallecido los dos suegros y concurrieren otros ascendientes, corresponderá al cónyuge la mitad de la herencia. Estas reglas suprimen las notorias injusticias del régimen actual.

Variamos los términos del art. 3573 sobre el matrimonio *in extremis*, para armonizarlos con la jurisprudencia y con la finalidad que persigue. Establecemos expresamente, que la disposición no rige cuando los interesados hubieren procedido con el propósito de legitimar una situación de hecho.

Un artículo nuevo contempla el caso de la viuda que permaneciere en ese estado, sin hijos, o que habiéndolos tenido, no sobrevivieren al abrirse la sucesión de los suegros. Estimamos razonable reconocerle derecho a la cuarta parte de los bienes que hubieren correspondido al esposo en aquellas herencias.

CAPITULO IV

De la sucesión de los hijos ilegítimos

Conforme a la opinión de Bibiloni, mantenemos el art. 3577, y redactamos el 3578 en forma de que no haya duda acerca del derecho acordado al supérstite sobre los gananciales; de modo que los hijos ilegítimos dividan con él tan sólo la herencia propiamente dicha.

La cuota de estos hijos se fija en la mitad de la que recibe el descendiente legítimo, según la tendencia que prevalece en la legislación moderna.

La regla del 3581, evidentemente injusta y desigual, tampoco subsiste en el Proyecto. Si concurren padres legítimos y cónyuges, la división se hará por cabeza con el hijo; si hubiere varios de éstos, se distribuirá entre ellos la porción que hubiera correspondido a uno solo. Si por último, en lugar de los padres hubieren otros ascendientes legítimos, sólo tendrán derecho entre todos éstos, a la parte que habría sido adjudicada al último de los padres sobrevivientes en concurrencia con el esposo o el hijo ilegítimo.

Los hijos adulterinos o incestuosos, reconocidos en instrumento público o privado o por testamento, tendrán iguales derechos que los hijos naturales.

CAPITULO V

Del derecho hereditario de los padres ilegítimos

La única disposición que al respecto contiene nuestro Código, es la del art. 3584, que declara heredero del hijo natural fallecido sin posteridad, al padre o madre que lo reconoció.

Hemos seguido al Anteproyecto, para exigir en este caso, que durante la vida del causante haya existido posesión

de estado, a fin de que la paternidad no se convierta tan sólo en fuente de beneficios, para quienes no se hubieran conducido como verdaderos padres.

En el supuesto de concurrir los padres ilegítimos y el cónyuge, heredará éste una mitad y aquéllos la otra, adjudicándose en cambio, dos terceras partes al viudo cuando sólo hubiere padre o madre.

CAPÍTULO VI

Sucesión de los colaterales

Dos reformas importantes merecen señalarse. La primera resuelve el problema de cómo heredan los sobrinos. Entendemos que la solución más justa consiste en dividir por cabeza cuando sólo haya sobrinos herederos, y por stirpe cuando aquéllos concurren con los tíos. En tal sentido modificamos el art. 3585, e introducimos en el capítulo "De la representación" los cambios de que ya se ha dado cuenta.

Por lo que se refiere a los medios hermanos, excluidos de la herencia por el hermano de padre y madre, según el 3586, proyectamos de acuerdo con Bibiloni, que los primeros heredarán la mitad de lo que corresponda a los segundos.

Señalamos por último, una disposición nueva, que de acuerdo con la jurisprudencia, despeja las dudas originadas por el art. 3585, en cuanto a saber si también se refiere a los hermanos ilegítimos. Determinamos claramente que a falta de las personas mencionadas en este título, concurrirán a la herencia del hijo ilegítimo, sus hermanos ilegítimos, y por representación, los descendientes legítimos de éstos.

* * *

No insertamos ningún precepto sobre la sucesión del Fisco, ni en cuanto a los bienes reservados. Lo primero, por considerar que el Fisco no hereda, y que habiéndose organizado las reglas referentes a las sucesiones vacantes, es inoficioso reproducir los arts. 3588 y 3589. Lo segundo, por los múltiples y notorios inconvenientes de todo orden, y en

especial de carácter económico, que ofrece el sistema de la reserva.

TITULO IV

De la legítima

Hemos comenzado por establecer en la forma que nos ha parecido más clara y precisa, el concepto de la legítima, a fin de evitar las dudas que origina la redacción confusa de los textos actuales. Para ello, partimos en principio de lo dispuesto en el art. 3591 y eliminamos el 3354, que permite renunciar la herencia, reteniendo la legítima. Esta última viene a ser en el Proyecto, un derecho de sucesión a determinada parte de los bienes, de la cual no podría disponer el causante gratuitamente, ni gravarla, ni someterla a condición.

De acuerdo con Bibiloni, reducimos a los dos tercios la porción de los descendientes legítimos; a la mitad, la fijada para los ascendientes, lo mismo que la del supérstite cuando no concurren ascendientes ni descendientes legítimos, aunque se trate de gananciales que pertenezcan al causante. Para los hijos ilegítimos, consiste en la mitad de su cuota, siempre que no intervengan descendientes ni ascendientes legítimos o cónyuge. Igual proporción se concede a los padres ilegítimos.

No seguimos al Anteproyecto, cuando autoriza la cláusula de indivisión, aunque afecte el derecho de los herederos forzosos; ni cuando faculta al testador para conceder al cónyuge durante la vida de éste, la administración del caudal hereditario. Con el régimen del bien de familia y las reglas que proponemos dentro del capítulo sobre partición, queda salvada a nuestro juicio, la dificultad que entendió subsanarse, evitando el grave inconveniente de lesionar la legítima.

Los arts. 3599 y 3600 han sido suprimidos por inútiles, y el 3601, mejorado en su redacción, para aproximarlos al 920 francés, que incluye los actos entre vivos, según corresponde. Hemos completado igualmente el 3602 con una disposición que propusiera Bibiloni, según la cual no serán com-

putables los derechos y obligaciones dudosos o perdidos, ni aquellos que estuvieren en litigio o pendientes de condición suspensiva.

Las dificultades que surgen del art. 3603, en cuanto impone que el valor del usufructo exceda de la porción disponible, han sido evitadas en el Proyecto, que suprime tal exigencia. Además, teniendo en cuenta que el legado sobre la nuda propiedad ofrece caracteres análogos, equiparamos ambos casos, salvo cuando deban reducirse las disposiciones testamentarias o las donaciones entre los favorecidos con ellas.

De igual manera que en el Anteproyecto, determinamos que el renunciante y el indigno no serán tomados en cuenta para fijar la legítima. No aparece en nuestra redacción definitiva, la reserva formulada en cuanto al primero, por haber sido eliminado el art. 3354.

Por lo que se refiere al art. 3604, ya dijimos al ocuparnos de la colación, que la transferencia de bienes a título oneroso para encubrir una liberalidad, no importa dispensa y debe regirse por los principios generales.

Termina el título con un artículo equivalente al 3605, pero antes agregamos una regla tomada del código alemán, con el propósito de puntualizar el carácter personal de la acción de reducción y reintegro, así como quienes pueden ser demandados y el supuesto en que procede el abandono.

SECCION TERCERA DE LA SUCESION TESTAMENTARIA

TITULO I

Disposiciones generales

En reemplazo de los arts. 3606, 3607, 3609 y 3610, proponemos uno sólo, que reconoce el principio de la libertad y declara de aplicación las reglas sobre los actos jurídicos, en cuanto no estuvieren especialmente modificadas.

Disponemos que la capacidad de hecho, como la de derecho, deben concurrir a la fecha de testar, aunque se pierda luego la primera; no así la segunda, que deberá existir en el momento de la muerte.

La capacidad de hecho se juzgará por la ley del domicilio del otorgante al tiempo del acto; la de derecho, el con-

tenido, la validez o invalidez del testamento, por la misma ley con relación al día del deceso.

Los dementes declarados en juicio no podrán otorgar testamento, ni aun en intervalos lúcidos, criterio que además de ser el más lógico, evita pleitos enojosos y frecuentes.

Los arts. 3608, 3614, 3615, 3616 con la reforma indicada, el 3617 con la introducida en el Proyecto respecto de los sordomudos, y los 3618 a 3621 del Código, se reproducen, ordenados y corregidos convenientemente.

Cabe agregar que la Comisión no acepta el testamento conjunto, ni siquiera en el caso que proyectaba Bibiloni, de división hecha por los padres, pues entiende que los perjuicios y dificultades que de ello resultaría, serían mayores que las ventajas esperadas.

También debemos señalar el agregado al art. 3619, que anula la cláusula o el testamento según los supuestos, cuando mediare maniobra dolosa de captación realizada por los beneficiarios o terceros.

TITULO II

De las formas de los testamentos

Conservamos las formas corrientes u ordinarias de nuestro Código, salvo el testamento cerrado, que ofrece dificultades y se practica en muy raras ocasiones. También subsisten los caracteres de este acto: especialidad, indelegabilidad, unilateralidad, etc.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Determinamos como el Anteproyecto, que los herederos no podrán atacar el testamento por defecto de forma, cuando lo hubieren ejecutado con conocimiento de causa.

El art. 3633 ha sufrido una modificación, para evitar la nulidad por errores ortográficos o en virtud de haberse omitido alguna letra en la firma, dejando al criterio judi-

cial la facultad de resolver en cada caso, según las circunstancias. Es la opinión de Aubry y Rau.

Suprimimos el agregado de Bibiloni sobre la "alteración manifiesta de la firma", que determinaría la ineficacia del acto. Pensamos que ésto es peligroso, lo que no impedirá tener presente dicha circunstancia, como elemento de juicio para establecer la falta de discernimiento del testador.

El art. 3638 ha sido objeto de una reforma, contenida en el Anteproyecto, para negar valor a los testamentos verbales u otorgados por mandatarios fuera de nuestro país, aunque estén autorizados por las leyes extranjeras: será siempre menester que los escriba u otorgue el testador en persona.

CAPÍTULO II

Del testamento ológrafo

Este capítulo reproduce el correlativo del Código, con variantes de redacción y algún cambio encaminado a evitar las controversias que han surgido en el país o fuera de él. Así, el referente al art. 3642 que permite insertar la fecha antes o después de la firma. Lo mismo el del art. 3643, parte final, que restablece la doctrina exacta, expuesta por Aubry y Rau.

Debemos recordar por último, la modificación del art. 3648 en el sentido de que, si bien el testamento ológrafo puede revestir la forma de carta misiva o figurar dentro de un libro doméstico, las disposiciones contenidas en él sólo valdrán cuando la voluntad del otorgante fuere inequívoca.

CAPÍTULO III

Del testamento por escritura pública

Queda subsistente el principio de que los testamentos de esta categoría deben ser extendidos ante escribano pú-

blico, permitiéndose que los autorice el juez de paz, o en su defecto un miembro de la municipalidad, cuando faltare notario en el lugar. El testamento debe por lo tanto, sujetarse a las reglas sobre escrituras públicas.

En contra de lo que prescribe nuestro Código, el Proyecto permite testar al mudo, al sordo y al sordomudo, cuando sepa darse a entender por escrito, observando las formalidades que especialmente se establecen para garantizar la seriedad del acto.

Cabe añadir que, imitando a las legislaciones modernas, hemos incorporado diversas reglas que responden al propósito de asegurar la libre voluntad del testador: tales son las referentes a la entrega de la minuta, a la necesidad de protocolizarla, así como a la presencia de los testigos durante todo el dictado, redacción y firma del testamento. En cambio, varias exigencias contenidas en el Anteproyecto, no han sido aceptadas por considerarlas excesivas, pudiendo servir de ejemplo la formalidad de la escritura del testamento por el notario en persona.

En caso de urgencia, autorizamos a los escribanos para recibir las últimas voluntades del otorgante, aún cuando no les constare la identidad del mismo y faltaren testigos de conocimiento. En tal supuesto aquel extremo deberá ser acreditado por la persona que invocare el testamento.

CAPITULO IV

De los testamentos especiales

Los artículos del Código apenas han sufrido modificaciones de forma y algunas tendientes a facilitar el otorgamiento de estos actos.

CAPITULO V

De la apertura y protocolización de algunos testamentos

Sobre las disposiciones de este capítulo, podemos decir lo mismo que acerca de las contenidas en el anterior, salvo

en cuanto al art. 3692, que ha sido reformado, disponiendo que no se permitirá protocolizar el instrumento que careciere de fecha o que se hallare roto, cancelado o testado.

CAPITULO VI

De los testigos en los testamentos

Las pequeñas alteraciones que se notan en este capítulo, tienden a simplificar las normas del Código, sin que por ello dejen de mantenerse las garantías necesarias para la seguridad de los testamentos.

TITULO III

De la institución y substitución de herederos

Luego de reproducir con variantes de mero detalle los arts. 3710 y 3712, reemplazamos la última frase del 3717, para prescribir que toda otra disposición de las que allí se enumeran, será considerada a título particular y acordará tan sólo a la persona favorecida, la calidad de legatario.

Con referencia al art. 3719, seguimos al Anteproyecto para dirimir la compleja cuestión del legatario de cuota. Entendemos que debe aclararse la ley para asignarle la calidad de heredero, y tomamos del código alemán diversas reglas que resuelven los casos especiales.

El 3722 ha sido notablemente reformado. Si consideramos nula toda disposición testamentaria en beneficio de personas inciertas o colectivamente designadas, o de entidades no investidas con personería jurídica, nos apartamos del modelo para respetar la voluntad presunta del otorgante. Por ello, cuando se tratare de congregaciones o instituciones religiosas que no estuvieren reconocidas, se entenderá a favor del diocesano del lugar o de las autoridades del respectivo culto, a fin de que cumplan bajo su responsabilidad los fines designados por el causante.

El legado a los pobres, salvo disposición del testador, se destinará a la beneficencia pública para el sostenimiento de hospitales, hospicios o asilos, dentro del Municipio donde estuvo domiciliado el causante. En cuanto a las disposiciones para el alma, serán invertidos los bienes en fondos productivos de réditos, con intervención del prelado del último domicilio, debiendo aplicarse las rentas a sufragios o limosnas e ingresar el capital en depósitos judiciales.

En punto a substitución de herederos se han reproducido los arts. 3723 a 3730 y 3732 del Código.

TITULO IV

De la capacidad para recibir por testamento

También en este título se han suprimido diversos artículos, por ser la repetición de principios consignados en otras secciones del Proyecto.

Si bien Bibiloni propuso eliminar el 3735 por la razón apuntada, hemos creído de utilidad conservarlo, con un agregado sobre la prole eventual, a la manera del código del Brasil.

TITULO V

De la revocación de los testamentos

La revocación de un testamento por persona domicilia da o no en el país, será válida cuando se realizare según las formas de la ley del lugar donde se hizo, o en que estuviere radicado el causante, o de acuerdo con las reglas de este Código. En tal sentido se reforma el art. 3825.

Cuando redactó el libro de sucesiones, Bibiloni conservó los arts. 3827 a 3832. Al revisar su trabajo consideró nuevamente la cuestión y proyectó modificar por completo el 3828, en el sentido de que el testamento ulterior no revoca el precedente, salvo en cuanto éste se hallare en contradicción con el primero; como también que si el último fuere revocado,

subsistirá el anterior. Aceptamos estas conclusiones por juzgarlas muy justificadas, tanto en virtud de los fundamentos expuestos por el autor del Anteproyecto, como por los abusos que en la práctica ha suscitado la norma que hoy nos rige.

Cuando el testamento ológrafo fuere cancelado, rasgado o tachado en su contenido, fecha o firma, habiendo un solo original, o si en el caso de existir varios, todos se inutilizaran en alguna de estas formas, el acto quedará revocado. No obstará a dicha solución, si por engaño o fraude del testador, alguno de los ejemplares hubiere permanecido intacto. En tal sentido se aclara el texto del art. 3833, al cual añadimos por nuestra parte, que si las alteraciones o supresiones fueren de carácter parcial, sin afectar los elementos constitutivos del acto, la revocación quedará limitada en esa misma medida.

Desde luego, no habrá revocación cuando las alteraciones se debieren a un accidente, o al hecho de un extraño que hubiera procedido sin orden escrita, fechada y firmada por el testador.

TÍTULO VI

De los legados

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Hemos autorizado, mediante un artículo especial, que puedan legarse los sepulcros, la correspondencia y los objetos que constituyen recuerdos personales o de familia, según se proponía en el Anteproyecto.

La segunda parte del 3752 aparece reformada, para consignar justamente la solución contraria. Afirma con razón Bibiloni, que no hay motivo para declarar nulo el legado de cosa cierta, que ha venido a ser propiedad del causante después de otorgar el testamento y con anterioridad al deceso.

El 3753 también ha sido objeto de una modificación importante, en el sentido de que el legado de una cosa que el testador tuviere en comunidad con otros, sólo importa la transmisión de los derechos de aquél. Si el bien estuviere comprendido en una masa común a varios copartícipes, valdrá por el importe que pertenecía al causante, si éste no hubiere dispuesto de otro modo.

Hemos dado al art. 3755, relativo a las mandas de cosas gravadas, una redacción más precisa, en el sentido de que el beneficiario deberá hacerse cargo de la hipoteca, prenda, etc., con lo que estimamos haber puesto fin a la discusión planteada sobre el alcance de dicho precepto, tanto más cuanto lo declaramos personalmente responsable por la obligación, hasta concurrencia del valor de la cosa.

En lugar del art. 3758, proyectamos que tanto para el legado de cosas a tomar de las de cierta especie que se encontraren en la masa, como para el de carácter alternativo, se aplicarán las reglas establecidas en cuanto a las obligaciones de esta última calidad.

Insertamos un texto nuevo sobre el legado de parte de un fundo, o de otro contiguo al que perteneciere al testador, considerando entonces, comprendidas en la liberalidad, las servidumbres de tránsito y de acueducto necesarias para su goce o cultivo.

CAPÍTULO II

Del efecto de los legados

Aparte de los cambios relativos a la redacción u ordenamiento, hemos modificado algunas reglas, como la del art. 3702 sobre las construcciones agregadas a la cosa, que consideramos comprendidas en la manda si el testador no hubiere modificado sus disposiciones.

CAPÍTULO III

Del acrecimiento

Las reglas concernientes a este punto quedan reducidas a dos. En los diversos incisos del primer artículo, reuni-

mos las normas supletorias de la voluntad del causante. Ante todo se determina en forma clara y precisa, que el acrecimiento tendrá efecto únicamente cuando un mismo objeto hubiere sido legado a varias personas y alguna de ellas no pudiese recoger su parte; luego nos ocupamos de la proporción en que se realiza; de la preferencia; de las obligaciones de los favorecidos y de la transmisión del derecho de acrecer. Cerramos el capítulo con una disposición sobre el legado de usufructo, en la cual, de acuerdo con el Anteproyecto, suprimimos la última parte del art. 3818.

Nos hemos abstenido de incorporar algunos textos tomados por Bibiloni de los arts. 2151 y 2152 del código alemán, por considerarlos ajenos a la materia.

CAPITULO IV

De la caducidad

Alteramos la forma y colocación de los artículos. Además, el 3804 recibe un agregado, a fin de que el heredero pueda compeler al legatario a que opte dentro de un plazo de treinta días, bajo apercibimiento de que se le tenga como aceptante. Para que el 3806 no dé lugar a interpretaciones encontradas, lo suprimimos, aplicándose de esta suerte, los principios generales sobre la renuncia, que por lo demás, se declara irrevocable.

CAPITULO V

De la revocación

Reproducimos las reglas pertinentes del Código, diferenciando aquellas que afectan a todo el testamento, de las que se relacionan tan sólo con los legados. Las primeras forman el Título IV, y las segundas son las únicas comprendidas en este capítulo.

En el art. 3838 se prevé de un modo expreso la enajenación parcial de la cosa, determinando que sólo revocará el legado en esa misma medida.

TITULO VII

De los albaceas

Como en nuestro concepto, este cargo no debe ser desempeñado por menores emancipados, ni por aquellas personas que no pueden recibir mandas del causante, así lo consignamos al comienzo del título.

De acuerdo con el Anteproyecto, autorizamos ampliamente al testador para conferir a su albacea todo género de facultades. Aparte de que ello es conveniente para el fiel cumplimiento de la voluntad expresada y para la mejor liquidación de los bienes, los herederos disponen de los medios para fiscalizar la gestión del ejecutor. Se establece, además, que éste no podrá hacer pagos o deducir demandas sin la conformidad de aquéllos; que les deberá cuenta de su cometido y que podrá incurrir en responsabilidad o ser exonerado por incompetencia, incuria, mala conducta o si cayere en concurso. También disponemos que tanto los herederos como los legatarios, podrán exigir garantías en caso de justo temor sobre la seguridad de los bienes, y que aun los primeros estarán facultados para rehusarse a la entrega de los fondos para el pago de las mandas, cuando se perjudicaren sus legítimas.

Fijamos en un año el término para que el albacea realice la misión encomendada por el testador. El juez podrá ampliar ese período, si hubieren surgido dificultades graves.

La remuneración del ejecutor testamentario será fijada por los tribunales, si no resultare del testamento.

TITULO COMPLEMENTARIO

De la aplicación de las leyes civiles

Pocos artículos compendian las normas que entendemos deben gobernar la materia, y que si tienden en concreto a resolver el problema que comporta la sanción prevista del nuevo Código, bajo la amplitud del epígrafe, adquieren también un significado más general.

La cuestión es por cierto, delicada. Bibiloni en interesante nota, ha expuesto las dificultades que el problema plantea, como que en síntesis, se trata de fijar los principios reguladores del arbitrio legislativo con respecto a la retroactividad de la ley. Felizmente para nosotros, el problema se simplifica con las bases prefijadas por la Constitución Nacional.

El primer artículo enumera en cinco incisos, los casos que serán regidos por las leyes nuevas. Fieles a nuestro método, concretamos en él, normas que aparecen dispersas en el modelo. El precepto se refiere a la capacidad y estado civil de las personas; a los derechos de familia; al contenido y extensión de los derechos reales, aun constituidos con anterioridad; a las sucesiones ya abiertas, pero sólo en cuanto al beneficio de inventario, a la separación de patrimonios y a la división de los bienes solicitados después de su vigencia; y por fin a las relaciones jurídicas que la ley establezca con abstracción de la voluntad de las partes, aun cuando se aplicaren a los actos ulteriores. Dejamos sin embargo, bien establecido que en los casos de los incs. 1° y 2° las nuevas leyes regirán, aun cuando abroguen o modifiquen las cualidades establecidas por las antiguas, pero sólo en lo que concierne a los actos y consecuencias ulteriores.

Simétricamente prevemos los casos en que las leyes abrogadas continúan con imperio, estableciendo en artículos diversos, distintas reglas según se trate de actos jurídicos, o derechos reales, o prescripciones cumplidas o iniciadas bajo el imperio de leyes precedentes, pero señalando en este último caso, el vigor de las nuevas, cuando los términos que ellas fijaren fueren más breves.

Acerca de la usucapión, un precepto dispone que cuando ella se funde en título, el valor de éste será juzgado de acuerdo con la ley bajo cuyo imperio se constituyó, y que en los demás supuestos, la prueba se regirá por la ley nueva, salvo el caso de sentencia firme dictada en pleito contra el dueño del bien.

En otro de los artículos de este título, se resuelve uno de los puntos más delicados: la facultad de la ley posterior, para modificar las posibilidades que pudieron presentarse bajo el imperio de las precedentes, siempre que no hubieren sido ejercidas. Es una limitación que alcanza, pues, a lo que se tuvo en potencia, pero que no llegó a traducirse en actos. Este precepto, que en suma limita sólo las facultades no ejercidas, armoniza pues, con el que en el título preliminar dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo.

Queda establecido entonces, que dentro de los límites constitucionales, la ley nueva deberá aplicarse aun cuando prive a las personas de facultades que les eran propias, siempre que no las hubieren ya utilizado o que no hayan producido efecto. Seguimos pues, la doctrina del 4055, si bien con la aclaración que formula Bibiloni en su texto correlativo, al intercalar el reato que implica consignar "dentro de los límites constitucionales".

Termina este título con un precepto, según el cual "quedan derogadas todas las disposiciones anteriormente en vigor sobre materias legisladas en este Código".

LEY SOBRE REGISTROS DE INSCRIPCIONES

TITULO I

Disposiciones generales

Como ya lo expusimos en el proemio, nuestro Proyecto de Código presupone una ley nacional sobre Registro de Incripciones. Bibiloni, que también la prevé con igual carácter al reconocer que dentro de la reforma, el Registro ha debido extenderse al campo entero del derecho privado, se refiere tanto a la necesidad imprescindible a que responde, como a las dificultades que su implantación comporta, sosteniendo que las distintas categorías que deben establecerse, requieren reglamentaciones diversas.

La nota a que venimos refiriéndonos, aunque con vehemencia sin duda excesiva, pone de relieve los inconvenientes de la situación creada con la doble omisión del Código, que prescindiera del Registro como medio de publicidad para transmitir derechos reales, y de la declaratoria de herederos prescripta por las Leyes de Indias, para substituir esta última por la *saisine* del derecho francés. Bibiloni preconiza en cambio el sistema de la inscripción para los dos casos, como un medio de poner término a los inconvenientes de orden constitucional y a las deficiencias que han traído las leyes locales que trataron de remediar ese estado de cosas, creando los actuales Registros de la Propiedad en la Capital y provincias.

Los reparos que contiene la nota son en el fondo exactos. Esos Registros ni protegen el derecho inscripto, ni lo gran plenamente la identificación del bien. Como lo expresa el autor, el dominio no tiene historia en ellos, y la inscripción que poco o nada garantiza ha venido en el hecho a convertirse en un nuevo gravamen. Tal es el estado de cosas que esta ley adicional se propone remediar. Veamos ahora,

los principios con arreglo a los cuales se articulan sus reglas.

La primera norma prescribe que tanto la Nación como las provincias, deberán establecer en las respectivas capitales y en cada territorio, registros que funcionarán bajo la superintendencia de la autoridad judicial competente. Quiere esto último decir, que la exacta aplicación de las disposiciones que gobernarán ese organismo ha de hallarse bajo la superintendencia de la autoridad judicial, a la que se confía dicha vigilancia, pero sin que ello implique restar a la autoridad administrativa local el nombramiento de empleados, régimen de gastos, percepción de rentas, etc. Como lo recuerda la nota, no es otro el sistema de las leyes alemanas y el de la ley y reglamento franceses para Alsacia-Lorena.

Se consignan luego, las secciones que comprenderá el Registro y en esa enumeración podrá notarse que mientras incluimos como primera la del estado civil que no figuraba en la ley de Bibiloni, eliminamos la última categoría de ésta: la referente a registro de propiedad de ganados y máquinas locomóviles. Hacemos de ella un registro aparte del que se relaciona con las personas y los derechos reales sobre inmuebles, pero dándole una amplitud mayor en lo que hace a las máquinas, al suprimirles toda calificación para concordar el registro de ellas, con la amplitud que atribuimos a la prenda sin desplazamiento, en el libro IV.

Acerca del Registro Civil, la importancia que él asume dentro del Código explica que figure en primer término. Por otra parte, si con el propósito que puntualizaremos luego, de crear un organismo que comprenda el conjunto de las inscripciones del país, proyectamos la formación de un archivo general, es indudable que no podría faltar en él, la más fundamental de ellas.

Establecidas las secciones, un artículo consigna con claridad el propósito de la ley: crear el Registro, como una sola unidad en toda la Nación. No hay duda de que la naturaleza de las inscripciones obligará a establecer sedes distintas, y como consecuencia las actas y documentos deberán llevarse no tan sólo en las capitales, sino también en cada municipio de sus respectivos estados, en otros tantos volúmenes, pero esa división local no será óbice para que

se considere la unidad del conjunto y pueda verse en cada libro y en cada oficina, partes integrantes de un solo cuerpo. Se explica así que un artículo decida que todo asiento en el Registro se labrará en dos ejemplares, debiendo uno de ellos ser remitido al Distrito Federal para su archivo y la formación de ese organismo comprensivo del conjunto de todas las inscripciones.

También decidimos que la Nación y las provincias, responderán directamente por cualquier deficiencia en los Registros y del daño que sus funcionarios y empleados causaren en el desempeño de su cometido, fijando además la prescripción a que está sujeto el particular, como el término para la caducidad del derecho del Estado para resarcirse.

TITULO II

Del Registro del Estado Civil

CAPITULO I

Reglas generales

Establece este capítulo que se llevarán los libros correspondientes a nacimientos, matrimonios y defunciones con las formalidades que en él se consignan; cómo deben asentarse las actas, con qué requisitos; el orden que habrá de seguirse, y que los registros deberán cerrarse al finalizar cada año.

Teniendo en cuenta la importancia que reviste el Registro Civil, se explica que la ley prevea la necesidad de practicar inspecciones que impone a la autoridad competente, y establezca que todo delito o contravención dará lugar a procedimiento de oficio por intermedio del Ministerio Público, disponiéndose que a las partes interesadas les será permitido perseguir a los funcionarios por cualquier irregularidad, y que cuando ésto no fuere posible, la demanda deberá intentarse contra el Ministerio Público a fin de obtener la inscripción o rectificación. En este caso, el fa-

llo que admita la existencia del hecho denunciado se inscribirá en el Registro, para reemplazar el acta omitida o corregir la irregularidad.

CAPITULO II

De los nacimientos

Se dispone que todo nacimiento deberá declararse ante el encargado del Registro, señalándose los plazos según las localidades y distancias, transcurridos los cuales la inscripción sólo podrá realizarse por mandato judicial.

Otro texto prescribe quiénes son las personas obligadas a declarar los nacimientos, y los recaudos con los que deberá hacerse; como también los extremos que mencionará el acta, y resolvemos que declarado un nacimiento legítimo no se permitirá impugnar la filiación en el acta ni por asiento separado, debiendo quedar el punto sujeto a decisión judicial.

En cuanto al reconocimiento de filiación ilegítima, se prescribe que en cualquier tiempo será permitido hacerlo al padre o madre ante el encargado del Registro, quien deberá levantar acta, anotando tal constancia en la partida de nacimiento, requisito que también se impone respecto de las escrituras públicas o cláusulas de testamentos que reconozcan la paternidad o maternidad. En estos supuestos el registro se hará a solicitud del autorizante en el primer caso, o por mandato judicial en el segundo.

De igual modo se procederá con la legitimación, insertándose nota en las actas de matrimonio y nacimiento, y cuando los asientos existieren dentro del territorio de la Nación, pero en registro distinto, se remitirán los testimonios necesarios para formular la constancia marginal. Como casos especiales se prevén otras inscripciones; tales la de sentencias que declaren o rectifiquen la filiación legítima, las que ordenen la legitimación, cambien o reformen el nombre de las personas, indicándose cómo se practicarán las anotaciones respectivas. También se legisla acerca de los nacimientos ocurridos en buques nacionales durante el viaje, y en cuanto a los de hijos de militares en campaña.

CAPITULO III

De los matrimonios

De los dos artículos de que consta este párrafo, el primero determina aquello que se inscribirá en el libro respectivo, y el segundo prescribe que en cada oficina del Registro Civil deberá llevarse, aparte del libro de matrimonios, otro especial para insertar en él todas las actas de diligencias previas, que se registrarán con expresión de fecha y de acuerdo con lo ordenado por el artículo de nuestro Proyecto.

CAPITULO IV

De las defunciones

Se determina en primer lugar quienes deben declarar el fallecimiento ante el encargado del Registro. Se impone al facultativo que hubiere asistido en la última enfermedad y a falta de él, a cualquier otro solicitado al efecto, la obligación de examinar el cadáver y expedir el certificado de defunción con la constancia de la hora en que acaeció y de la causa atribuída a la misma, para ser presentado al Registro, disponiéndose que cuando no hubiera sido posible obtenerlo, el encargado podrá exigirlo de oficio.

Luego de indicarse cual debe ser el contenido del acta, se prevén distintos casos, a saber: cuando no pudiese establecerse la identidad del cadáver, las defunciones ocurridas en alta mar, las de militares en campaña, y finalmente el caso de no haberse podido hallar el cadáver.

TITULO III

Del Registro de Inmuebles

CAPITULO I

Disposiciones generales

Es indudable que el propósito de todo registro sobre inmuebles es no sólo inscribirlos, sino también identificarlos para que el asiento sirva a la vez que de publicidad, de garantía *erga omnes*.

Para lograr ese fin, llegó a pensarse que era menester la triangulación previa del territorio y formar así un catastro científico y general. Pero lo costoso de ese trámite, y aún las dificultades que tal base comporta, ha hecho que aun los países que cuentan con él no lo empleen con tal objeto, y hayan preferido en cambio formar el catastro a los efectos del Registro, con las mensuras e inscripciones particulares. Es el procedimiento seguido por los países que han adoptado el sistema Torrens.

Nuestro primer artículo determina que el Registro de Inmuebles consignará el estado del dominio y demás derechos reales sobre tales bienes, disponiendo luego que formarán parte del mismo, el libro de inscripciones, el diario y los índices.

Cada inmueble deberá ser individualizado en el libro de inscripciones en hoja independiente y bajo número distinto, y todas las ulteriores anotaciones hacerse en la hoja abierta con el primer asiento. Sólo cuando se agotare el espacio, se permite la continuación de los asientos en un nuevo folio con las constancias correspondientes, siempre bajo el número originario.

El requisito de la hoja especial, sobre el que tanto insiste Bibiloni, tiende a obtener lo que en otro lugar él mis-

mo denominara el conocimiento de la historia del dominio. Se explica así, que sea una prescripción que aparezca tanto en el código civil suizo (art. 945) como en la ordenanza federal (art. 95) y en la ley alemana de Registro (arts. 2 y 3). Las inscripciones en distintos lugares impiden conocer el estado jurídico de un bien, no permiten remontarse a las adquisiciones anteriores, ni conocer siempre las cargas inscriptas.

Acerca de los dos índices, se prescribe que en uno, se registrará cada inmueble inscripto con expresión del libro y folio en que esté su registro, mientras que el otro se llevará por personas, debiendo ajustarse los registros a los modelos establecidos por las disposiciones reglamentarias.

Aparte de las prescripciones referentes a cómo deben cumplirse los requisitos que en este párrafo se establecen, se determina que el tribunal que ejerza superintendencia debe conocer de los reclamos por inobservancia de las formas establecidas, pero sin que sus resoluciones hagan cosa juzgada, pues se concede al perjudicado por cualquier inscripción o prenotación que juzgue indebida, la facultad de exigir judicialmente que ellas sean canceladas o que se anote su propio derecho con arreglo a lo dispuesto en el libro IV. En este caso, la demanda deberá intentarse contra quienes hubieren obtenido los asientos que se procura anular, ante el juez que los ordenó o el competente en virtud de la situación del inmueble.

También se dispone que los escribanos no podrán autorizar escrituras relativas a los actos que deban inscribirse, sin previa certificación del Registro de la que resulte el estado del dominio y derechos reales sobre el inmueble, así como la libertad de quienes deban otorgarlas.

Se ordena que para la validez de los instrumentos destinados a constituir el dominio o derechos reales, será menester que el autorizante consigne los anteriores propietarios, remontando por lo menos, a veinte años, con los títulos respectivos, y que dé fe de haberlos examinado y encontrado en forma legal, debiendo cuando los protocolos se hallaren fuera de su distrito, agregarse la atestación de otro notario del lugar donde ellos se encontraren. Asimismo, se impone al escribano que hubiere otorgado instrumento que constituya, modifique, transmita o extinga el

dominio u otro derecho real, el deber de dejar nota firmada al margen de los testimonios que devuelva al interesado, con mención de las personas, lugar y fecha de la escritura. El texto finaliza disponiendo que el incumplimiento de este deber, será considerado falta grave y hará responsable al notario de todo perjuicio.

CAPITULO II

De la inscripción y de los trámites para obtenerla

La Comisión ha considerado conveniente reunir en párrafo aparte, todo lo relativo a la inscripción y a los trámites necesarios para obtenerla, agrupando artículos que Bibiloni incluía dentro de las disposiciones generales referentes al Registro de Inmuebles.

Definida la inscripción y fijados los requisitos que se exigen, tanto en lo que hace al bien como a la persona de su titular, se enumera luego todo lo que podrá ser materia de inscripción en el Registro, y después lo excluido de éste. Se determina enseguida el trámite para las inscripciones, comenzando por fijar quiénes estarán facultados para pedir las, para luego imponer al escribano autorizante de un instrumento que deba inscribirse, la obligación de presentar inmediatamente testimonio en forma para tal efecto, agregando el artículo que dicho escribano se juzgará mandatario de las partes en todos los trámites exigidos para obtener el asiento o la prenotación del título en su caso.

Prevedemos también cómo habrán de anotarse en el libro diario los pedidos de inscripciones y los requisitos que han de acompañar la solicitud. Decidimos que la inscripción de un inmueble debe efectuarse en el registro del distrito en que esté ubicado, ordenando que el asiento originario de cada folio habrá de referirse a un plano del inmueble, ejecutado con arreglo a una mensura judicial o administrativa debidamente aprobada, y que si ya hubiere registro gráfico oficial y en él figurase el bien bajo el nombre del recurrente o de sus autores comprobados, bastará tal circunstancia para que pueda inscribírselo.

Como observa Bibiloni, la solución de este texto es la general de todas las legislaciones, con la sola diferencia de que mientras unas exigen mensuras generales de todo o parte de un distrito para el establecimiento del registro, otras se limitan a requerir la mensura particular de cada bien que haya de registrarse. La primera exigencia tornaría imposible la reforma; la segunda, que adoptamos, es la regla común del sistema Torrens y de los países en que ha sido aplicado.

También decidimos que en la sección urbana de los distritos, bastará con designar el inmueble con referencia al catastro fiscal si lo hubiere, debiendo en su defecto acompañarse un plano firmado por peritos con determinación de medidas, calle y número, u otros datos para ubicarlo e individualizarlo.

El Proyecto prevé otras cuestiones interesantes relacionadas con la inscripción, como la relativa al número individual que debe atribuirse a cada bien; los recaudos con que han de inscribirse los instrumentos públicos otorgados en el país o en el extranjero; el caso en que los actos sean realizados por mandatarios o representantes de personas jurídicas o sociedades anónimas o compañías civiles o comerciales o por quien tenga la calidad de heredero, determinándose a este respecto que esta última sólo podrá resultar de una declaratoria dictada por el juez de la sucesión, sin admitirse en ningún caso procedimientos informativos ante un tribunal distinto.

CAPÍTULO III

De la prenotación

De los dos artículos de que consta este párrafo, el primero se destina a enumerar qué actos han de prenotarse en el libro respectivo, y el segundo declara aplicable a las prenotaciones las reglas contenidas en el párrafo anterior.

CAPITULO IV

De la cancelación

Distinguimos las cancelaciones que el encargado del Registro podrá efectuar por su propia autoridad, de aquellas que, prenotadas por decisión judicial, puedan cancelarse en igual forma. En el primer caso, un artículo distribuido en incisos establece las inscripciones y prenotaciones que encuadran en el referido supuesto.

TITULO IV

Del Registro de Embargos y Limitaciones a la Capacidad

Dispone el primer artículo que en el registro especial a que se refiere el epígrafe, se anotarán las providencias judiciales que establezcan la inhibición general de una persona; los embargos, ordenando que si fueren de inmuebles o de ganados o locomóviles se anotarán en la foja de los respectivos Registros; los concursos; los autos de interdicción por causa de insania o sordomudez; las aceptaciones beneficiarias de herencias y las separaciones de patrimonios.

Otro texto impone la necesidad de consignar todos los datos necesarios para que puedan individualizarse las personas a que los asientos se refieren, extremos que cuidadosamente se mencionan.

También se prescribe que todas las restricciones aludidas en el capítulo serán inscriptas en el registro del lugar donde tuviere su asiento el juez que las ordenare, y que las relativas a bienes situados fuera de la jurisdicción de aquél, se cumplirán por vía de exhorto.

TITULO V

Del Registro de Personas Jurídicas, Sociedades y Mandatos

Luego de indicar el contenido de las inscripciones que se anotarán en este Registro, la forma en que se llevarán los asientos y las menciones que en cada supuesto se prescriben como necesarias, se declara que será de rigor el índice personal conforme a lo que establece el art. 34.

Consignaremos que en este Registro se comprende también la inscripción de los instrumentos con que las mujeres casadas declaren asumir la administración de sus bienes, como asimismo que serán registradas en él, las sentencias de divorcio o las que priven al marido o a la mujer de sus facultades, o las limiten.

TITULO VI

Del Registro de Sucesiones

La enumeración que contiene el primer artículo, luego de indicar los actos más importantes del trámite sucesorio que habrán de registrarse, incluye a los testamentos públicos y a aquellos que otorgados bajo otra forma, presenten voluntariamente sus autores. Con ello proyectamos una medida de seguridad que evitará al mismo tiempo los actos de ocultación que pudieran producirse.

Conviene destacar que en este Registro deberá inscribirse la iniciación de todo juicio sucesorio, sistema de publicidad que unido al de los edictos, nos parece más eficaz que el adoptado actualmente.

TITULO VII

Del Registro especial para ganados y máquinas

Como antes lo hemos consignado, creamos un Registro especial para la inscripción de los muebles a que se refiere este epígrafe, imponiendo a la Nación y a las provincias el deber de establecerlos en cada municipio, para inscribir en ellos los actos jurídicos que determina el Código, conforme a los reglamentos que se dictaren y bajo la vigilancia y superintendencia que las leyes locales determinen.

Dentro de lo que será objeto de inscripción, se cuentan en primer término las marcas, señales y otros distintivos autorizados para acreditar el dominio de semovientes, como también las operaciones de transferencias relativas a éstos. También se comprende en esa nómina las prendas, tanto sobre máquinas como las referentes a ganados.

Se dispone asimismo, que quien hubiere adquirido semovientes inscriptos bajo marcas de un tercero, deberá presentar los instrumentos que justifiquen ese derecho para su debido registro, y el mismo texto agrega que no podrá extraerse ganado del municipio en que se hallare inscripto, sin la certificación que lo autorice, expedida por el registrador en virtud de los documentos que otorgare el propietario.

De acuerdo con Bibiloni, disponemos para el mejor orden del Registro, que los ganados y las máquinas ocuparán secciones distintas, y que las normas relativas a aquéllos serán aplicables a los cueros, en cuanto fuere pertinente.

Un artículo prescribe que la Nación y las provincias reglamentarán por ley las marcas, señales y signos admitidos para establecer la propiedad de los ganados, los requisitos de la marcación o señalamiento y los casos en que será obligatoria la contramarca. El texto responde a evitar los inconvenientes a que Bibiloni alude en una nota, al puntualizar que en materia de semovientes tanto la Nación

como las provincias, se han apartado del régimen constitucional, invadiendo esferas que les estaban vedadas. Por ello, nos limitamos a fijar en la ley nacional, la exigencia del Registro y lo que en él habrá de inscribirse, pero sin afectar las jurisdicciones de las provincias en cuanto signifiquen la aplicación, que reconocemos corresponde a los poderes locales.

No pondremos término a esta nota sin consignar que hubiera sido nuestro propósito establecer prescripciones tendientes a la unificación de las marcas en toda la República. Como lo reconoce Bibiloni, sería una facultad constitucional la que ejercería el Congreso al dictar una ley de este carácter, evitando que una marca pueda concederse a distintas personas dentro del territorio de la República, según se encuentren en una u otra provincia.

Debe todo ello ser materia de una ley futura cuando pueda lograrse un sistema ingenioso y sencillo que permita multiplicar los signos para evitar que ellos se repitan como hasta ahora.

TITULO VIII

De la aplicación del Registro

Los artículos aquí reunidos prevén las consecuencias derivadas de la creación del Registro General que proyectamos.

Como resultarían incompatibles los dos regímenes, esto es nuestro Registro General con los locales que hoy existen, decidimos en el art. 77, que al constituirse el primero quedarán clausurados todos los existentes sobre las materias comprendidas en el mismo.

Acerca de las inscripciones de derechos reales relativas a inmuebles, preceptuamos que las ya efectuadas en los registros deberán ajustarse para su validez a los principios del Código Civil y de la presente ley. Es ello una consecuencia del carácter general de las nuevas disposiciones destinadas a suplantar a las que en la actualidad existen, con los inconvenientes constitucionales que antes señalamos.

Este artículo inspirado en los 21 y 23 de Bibiloni, se propone obtener en materia de registro de inmuebles una reorganización necesaria y completa. En otros términos, una reinscripción de todas las propiedades. Para facilitar esa tarea se dispone que las mensuras aprobadas y los planos catastrales se trasladarán al nuevo Registro, y con arreglo a ellos serán abiertas las inscripciones. Asimismo se exige cuando se tratare de predios urbanos, que se agregue un gráfico de su planta con firma de perito. Haremos notar que éstas como las demás exigencias, son siempre relativas a inmuebles, pues se declara en cuanto a las hipotecas que su anotación será regida por las normas vigentes en el momento de constituirse, y acerca de las demás inscripciones ordenadas en esta ley, que ellas serán válidas siempre que se ajustaren a las normas existentes cuando fueren cumplidas.

Por fin, en el último artículo dejamos consignada la necesidad de que una ley del Congreso reglamente el nuevo Código Civil y la presente en lo que se refiere al Registro de Inscripciones, contemplando cuanto fuere menester para su aplicación, la forma en que se han de practicar las mensuras y demás extremos para la formación del catastro.

ROBERTO REPETTO

RODOLFO RIVAROLA

HÉCTOR LAFAILLE

ENRIQUE MARTÍNEZ PAZ

GASTÓN FEDERICO TOBAL

RICARDO E. REY

(Secretario)

PROYECTO
DE
CODIGO CIVIL

TITULO PRELIMINAR

Carácter obligatorio de la ley.

1. Las leyes obligan a todos los que habitan en el territorio de la Nación. Rigen después de publicadas, desde la fecha que ellas determinen; cuando no designen tiempo, a contar de los treinta días de su publicación en la Capital Federal.

Régimen de la capacidad.

2. Las leyes de la Nación regirán siempre la capacidad o incapacidad de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero el ejercicio de los derechos por sí, quedará sujeto a la ley del respectivo domicilio.

Principios a que deben ajustarse las leyes.

3. Las leyes deben ajustarse a los derechos y garantías declarados en la Constitución Nacional. No tienen efecto retroactivo; no alteran la cosa juzgada, ni el acto jurídico perfecto, ni las consecuencias de este último.

Nadie podrá alegar derechos irrevocables contra una ley de orden público.

Régimen de los bienes.

4. Los bienes se regirán de acuerdo con los principios que siguen:

1° Por las leyes de la Nación exclusivamente, los inmuebles situados en su territorio, con respecto a su calidad de tales, a la capacidad para adquirirlos, a los derechos de las partes sobre ellos, a los modos de transferirlos y a las formas que deben acompañar a esos actos.

2° Por las leyes del lugar, los muebles que tengan una situación permanente, y los que no teniéndola, se conserven por el propietario sin ánimo de trasladarlos.

3° Por las leyes del domicilio del dueño, aquellos muebles que éste llevare consigo, los que fueren de su uso personal, y los que destine al comercio o a ser transportados.

Forma de los actos jurídicos.

5. Las formas de los actos jurídicos, quedan sometidas a las leyes del lugar; pero los otorgados en el extranjero con

las solemnidades prescriptas en este Código o ante los funcionarios diplomáticos o consulares de la Nación, serán válidos aunque no llenaren las exigencias de la ley local.

6. Las leyes extranjeras no serán aplicables:

Leyes extranjeras inaplicables.

1º Cuando se opusieren al derecho público, a la moral o a las buenas costumbres.

2º En caso de ser incompatibles con el espíritu de este Código.

3º Si fueren de mero privilegio.

4º Siempre que las leyes del país, en oposición con aquéllas, favorecieren la validez de los actos.

7. Los jueces no se abstendrán de juzgar por silencio, obscuridad o insuficiencia de las leyes.

Reglas para los jueces.

Cuando una cuestión civil no pudiese resolverse dentro de los preceptos legales, se atenderá a lo dispuesto por otros análogos, y en último término, a los principios generales del derecho, con arreglo a las circunstancias del caso.

8. Las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes. El uso, la costumbre o la práctica, no crean derechos, salvo cuando la ley se refiera a ellos.

Derogación de las leyes.

9. Los actos prohibidos por la ley carecen de valor, si ella no determinare otro efecto.

Actos prohibidos por la ley.

10. Es nula la renuncia general de las leyes. Será válida la relativa a derechos conferidos por ellas, cuando no fuere prohibida y sólo afectare intereses privados.

Renuncia a las leyes.

11. La ignorancia de las leyes no servirá de excusa, a no ser que la excepción estuviere expresamente autorizada.

Ignorancia de la ley.

12. Los actos jurídicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público o las buenas costumbres.

Limitación a la libertad de contratar.

13. Todo plazo se cuenta:

Modo de contar los plazos.

1º Cuando fuere de días, desde la media noche.

2º Si fuere de meses, a partir del día señalado, finalizando con aquél del mismo número que corresponda al mes de su vencimiento.

3º Cuando se tratare de años, se aplicará la regla del inciso precedente.

Todos los plazos son continuos y expiran a medianoche del último día. Los feriados quedan comprendidos en ellos, a no ser que hayan sido excluidos expresamente.

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

SECCION PRIMERA

DE LAS PERSONAS

TITULO I

De las personas naturales

CAPITULO I

Del comienzo y fin de las personas naturales

- | | |
|--|--|
| Comienzo y término. | 14. La existencia de las personas naturales, empieza desde la concepción y termina con la muerte. |
| Período de la concepción. | 15. El período de la concepción comprende todo el tiempo entre el máximo y el mínimo fijados para el embarazo. Se presume, sin admitir prueba en contra, que el primero es de trescientos días y el segundo de ciento ochenta, excluyendo el del nacimiento. |
| Capacidad de las personas concebidas. | 16. Las personas concebidas sólo podrán adquirir bienes por donación, herencia o legado. Estos derechos quedarán irrevocables, si nacieren con vida. |
| Reconocimiento del embarazo. | 17. Se tendrá por reconocido el embarazo, mediante declaración de la madre, del marido de ésta, de los parientes del concebido, del Ministerio Público o de cuantos tuvieren un interés jurídico vinculado con el nacimiento. |
| Acciones postergadas hasta después del nacimiento. | 18. Hasta después del nacimiento, no podrán ser impugnadas la concepción ni la filiación, ni suscitarse pleito sobre ellas. |

19. No se decretará el reconocimiento judicial del embarazo, ni medidas análogas. Los interesados podrán pedir al juez de la residencia de la madre, disposiciones tendientes a garantizar la efectividad del parto, proteger la vida del recién nacido, y asegurar que el nacimiento ocurrió dentro del plazo legal. El trámite será sumario.

Medidas prohibidas y autorizadas.

20. Se presume el nacimiento con vida. No importará que el niño nazca espontáneamente o mediante operación quirúrgica, ni que tenga o no aptitud para prolongar la existencia.

Presunción de vida.

21. Los nacidos en un solo parto serán considerados de igual edad.

Nacidos en un solo parto.

CAPITULO II

De la capacidad

22. Sólo la ley puede privar a una persona de su capacidad jurídica, respecto de hechos determinados.

Límites a la capacidad de derecho.

23. Las personas naturales pueden ejercer por sí mismas sus derechos, con excepción de aquellas a quienes la ley declara incapaces. Se consideran tales:

Incapacidades de hecho.

- 1° Las personas por nacer.
- 2° Los menores.
- 3° Los sujetos a interdicción.
- 4° Los ausentes declarados en juicio.

La mujer casada, lo será tan sólo en los casos declarados en el presente Código.

24. Los incapaces podrán adquirir derechos o contraer obligaciones, por medio de representantes necesarios. Lo son:

Representantes necesarios.

- 1° Respecto de las personas por nacer, los padres, y por incapacidad de éstos, los curadores que se les nombre.
- 2° De los menores, los padres, y en defecto de ellos, los tutores.
- 3° De los sujetos a interdicción y de los ausentes, los curadores respectivos.

Curadores especiales.

25. Cuando los intereses de los incapaces estuvieren en oposición con los de sus representantes, éstos serán substituidos por curadores especiales.

CAPITULO III

Del nombre

Derechos relativos al nombre.

26. Toda persona tiene derecho de usar el nombre que le corresponda. Cuando le fuere discutido podrá demandar su reconocimiento, y, en caso de ser perjudicada por usurpación, exigir que ésta cese, con el pago de los daños y perjuicios.

Uso del nombre en actividades ya explotadas.

27. Quien intentare ejercer bajo su nombre actividades ya explotadas por otro con igual designación, podrá hacerlo mediante agregados o supresiones que eviten confundirlo.

A quienes corresponde el uso del apellido.

28. Corresponde el uso del apellido:

1° A la mujer casada, el del esposo.

2° A los hijos legítimos, el paterno y el materno.

3° A los naturales, el del padre o de la madre que los hubiere reconocido, voluntariamente o por sentencia.

Cambios. Procedimiento.

29. El juez del domicilio podrá permitir el cambio de nombre, si mediare motivo razonable. Toda oposición deberá deducirse dentro del año a partir del término de los edictos que se publicarán en los diarios del lugar.

CAPITULO IV

Del domicilio

Domicilios real y de origen.

30. El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios; el de origen, es el que tuvo el padre en el día del nacimiento del hijo.

31. El domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside permanentemente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y así lo tendrán:

Domicilio legal. Casos.

- 1° Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, donde deban llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas o de simple comisión.
- 2° Los militares en servicio activo, donde lo prestaren, si no tuvieran domicilio real.
- 3° La mujer casada, en el de su marido, aun cuando con su licencia se hallare en otro sitio.
- 4° Los incapaces, en el de sus representantes.
- 5° Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante y aquéllos cuyo domicilio no fuere conocido, en su residencia actual.
- 6° Los mayores de edad que sirvan, trabajen, o estén agregados en casa de otros, en el de las personas allí domiciliadas, siempre que habitaren en la misma finca o sus dependencias, salvo lo dispuesto en el inc. 3°.

32. La residencia que cause domicilio, debe ser habitual y no transitoria.

Residencia que causa domicilio.

En caso de habitación alternativa, el domicilio será el lugar donde se tuviere la familia o el principal establecimiento. Prevalecerá el primero respecto del segundo.

33. El domicilio se conserva por la sola intención de no variarlo. El cambio se verifica instantáneamente, por el hecho de trasladar la residencia de un punto a otro, con ánimo de permanecer en él y tener allí su principal establecimiento. Esta facultad no puede ser limitada.

Conservación y cambio.

La residencia involuntaria no altera el domicilio anterior, siempre que se conserve en éste la familia o el asiento principal de los negocios.

34. Regirá el último domicilio conocido de una persona, cuando fuere ignorado el nuevo.

Domicilio que prevalece.

El domicilio de origen regirá desde que se abandonare el establecido en el extranjero, sin ánimo de regresar a él.

35. El domicilio legal y el real, determinan la competencia de las autoridades en las relaciones de derecho. Sin

El domicilio y la competencia. Domicilio especial.

embargo, las personas podrán elegir en los actos jurídicos, uno especial para determinados efectos, y ello importará prorrogar la jurisdicción.

En caso de varios establecimientos o sucursales, será considerado domicilio especial el asiento de los mismos, respecto de las obligaciones allí contraídas.

CAPITULO V

De la prueba del nacimiento y de la muerte

**Prueba del nacimiento.
Casos.**

36. Pruébese el día del nacimiento, así como las circunstancias de lugar, sexo, nombre, paternidad y maternidad:

- 1° En cuanto a los argentinos nativos, por las certificaciones del Registro Civil, y respecto de los nacidos antes de su establecimiento, por las constancias de los libros parroquiales.
- 2° Respecto de los que nacieren en alta mar, por las copias auténticas que expidieren los oficiales autorizados en los buques de guerra y el capitán en los mercantes, conforme a la respectiva legislación.
- 3° De los nacidos fuera del territorio de la Nación, sean argentinos o extranjeros, por certificaciones de los registros consulares o por los instrumentos que se otorgaren de acuerdo con las leyes locales, debidamente legalizados.
- 4° De los hijos de militares en campaña fuera del territorio de la Nación, y demás personas en servicio del ejército, por certificaciones de los registros correspondientes, según los reglamentos militares.

Prueba supletoria.

37. A falta de registros o de asientos, o no hallándose éstos en debida forma, podrá justificarse por otros medios el día del nacimiento, o por lo menos el mes o el año.

**Determinación
sentencia. p o r**

38. Cuando no fuere posible establecer la edad por cualquiera de los medios indicados en el presente capítulo, y sea indispensable su determinación, se fijará por sentencia, previo dictamen de peritos.

39. La muerte de las personas se probará:

Prueba del fallecimiento.

- 1º En cuanto a los fallecidos dentro del territorio de la Nación, en alta mar o en país extranjero, por los mismos medios que el nacimiento.
- 2º Respecto de los militares cuyo deceso hubiere ocurrido dentro del territorio de la Nación, o en campaña, y de los empleados en servicio del ejército, por certificaciones de los respectivos registros de los hospitales o ambulancias.
- 3º De los militares muertos en combate, cuando no hubiere sido posible formalizar asiento, por lo que conste en el Ministerio de Guerra.
- 4º De los fallecidos en conventos, cuarteles, prisiones, fortalezas, hospitales o lazaretos, por lo que resulte de los respectivos asientos.

A falta de los referidos antecedentes, el deceso podrá demostrarse por otros medios de prueba.

40. Se presumirá que murieron al mismo tiempo, las personas que hubieren perecido en un desastre común o en cualquier otro suceso, cuando no pudiese determinarse lo contrario.

Presunción de fallecimiento simultáneo.

41. Aunque no se hallare el cadáver de una persona, se juzgará probado el deceso, cuando hubiere desaparecido en condiciones tales que éste deba ser tenido como cierto.

Caso de no hallarse el cadáver.

TITULO II**De los menores**

42. La minoridad de las personas subsiste hasta los veintiún años cumplidos. A partir de esa fecha serán hábiles para todos los actos de la vida civil, sin depender de formalidad alguna.

Mayoría de edad.

43. Cesa la incapacidad de los menores:

Cesación de la incapacidad de los menores.

- 1º De pleno derecho, por su matrimonio.
- 2º Si cumplidos dieciocho años, hubieren solicitado este beneficio de acuerdo con el padre, o la madre

en su defecto, y así lo dispusiere el juez. En caso de tutela, deberá oírse previamente al representante legal.

En ambas situaciones, serán aplicables los arts. 560 y 561.

Cláusula de entrega a la mayor edad.

44. Lo que fuere debido al menor con cláusula de entregarlo a su mayor edad, no será exigible antes de cumplida ésta, aunque mediare emancipación.

Irrevocabilidad.

45. Si un menor alcanzare la mayor edad, u obtuviere la emancipación por la ley de su domicilio, ellas serán irrevocables, aunque se trasladare a territorio argentino.

TÍTULO III

De la interdicción

Quienes pueden ser declarados interdictos.

46. Todo aquel que por enfermedad mental, insuficiencia, desequilibrio o debilitación de sus facultades, no se hallare en condiciones de dirigirse a sí mismo o de manejar sus negocios, podrá ser declarado incapaz por el juez de su domicilio, a instancia de parte interesada.

Procederá la interdicción si el estado morboso es habitual, aunque no fuere completo, o existieren intervalos lúcidos.

Partes interesadas para solicitarla.

47. Son partes interesadas:

- 1º El cónyuge no divorciado.
- 2º Los parientes en grado sucesible.
- 3º El Ministerio Público.
- 4º Cualquiera del pueblo, cuando el enfermo fuere furioso o incomedare a sus vecinos.

Segunda denuncia inadmisble.

48. Desestimada una denuncia no se admitirá otra, aunque procediere de persona distinta, salvo que fueren alegados hechos ulteriores.

Procedimiento.

49. Recibida la solicitud, se dará intervención al Ministerio Público y se nombrará un curador provisional para que defienda al presunto incapaz.

El denunciado será oído en el juicio cuando compareciere, y el juez le interrogará personalmente antes de dictar sentencia.

50. En cualquier estado de la causa, el denunciante podrá suministrar elementos para apoyar sus afirmaciones y aclarar los hechos que se investiguen. Será también oído antes de la sentencia en ambas instancias.

Intervención del denunciante.

51. La interdicción no podrá ser declarada sin previo examen médico, que deberá expresar por escrito la causa de la incapacidad y, además, si corresponde que el paciente sea recluso. Los peritos serán en lo posible, especialistas, y su designación se hará con arreglo a las leyes locales.

Peritos y su designación.

52. Si el juez lo estimare necesario, nombrará curador interino de los bienes del presunto incapaz, o un interventor en la administración de ellos. Aun después de la sentencia, podrá proveer a la internación del enfermo o hacerla cesar, en su caso.

Curador e interventor en los bienes. Internación del enfermo.

53. Decretada la interdicción, aunque hubiere conformidad del curador y del Ministerio Público, los autos serán elevados en consulta al tribunal de alzada, el cual se pronunciará con audiencia de las partes.

Consulta al tribunal de alzada.

54. De igual modo, serán declarados incapaces los sordomudos, cuando no supieren manifestar su voluntad en forma inequívoca, por escrito o de otra manera.

Sordomudos interdictos.

55. La sentencia que declare la interdicción podrá, según las circunstancias, autorizar al incapaz para que, con la conformidad del curador, administre sus bienes en los términos del art. 1106, o realice determinados actos que no fueren de disposición, y también, a fin de que invierta por sí mismo las rentas líquidas.

Facultades que pueden dejarse al incapaz.

56. Los actos posteriores a la sentencia, quedarán sujetos a las reglas del Título V "De la nulidad de los actos jurídicos". Los anteriores a ella podrán ser anulados, siempre que la causa de la interdicción hubiere existido públicamente cuando se realizaron.

Actos posteriores y anteriores a la sentencia.

57. Los actos entre vivos de una persona fallecida sin haberse declarado su interdicción, sólo podrán impugnarse cuando la incapacidad resultare de los mismos o si aquéllos se hubieren efectuado pendiente el juicio de insania.

Actos impugnables de un causante no interdicto.

58. En caso de restablecimiento completo del incapaz, el juez que declaró la interdicción podrá levantarla, previo examen médico y audiencia del Ministerio Público.

Rehabilitación.

TÍTULO IV

De la ausencia

CAPÍTULO I

De la declaración de ausencia

Casos y competencia.

59. Cuando una persona hubiere desaparecido de su domicilio o residencia, sin tenerse noticia de ella, procederá la designación de un curador a instancia de parte, siempre que el cuidado de sus bienes lo exigiere, o si en iguales circunstancias el apoderado no desempeñare su mandato, o éste hubiere caducado.

Será competente el juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del denunciado, si éste hubiera tenido uno u otra en el país. Si no se le conocieren, intervendrá el juez del lugar en que existan bienes abandonados.

Situación de apremio.

60. Procederá también el nombramiento de curador, aún conocido el actual paradero del ausente, si hubiere urgencia y éste se hallare en la imposibilidad de proveer al cuidado de sus bienes.

Quiénes pueden solicitar la declaración de ausencia.

61. Podrán solicitar la declaración:

- 1º El cónyuge.
- 2º Los herederos presuntos.
- 3º Los acreedores, aunque fueren condicionales.
- 4º Toda persona que tuviere interés legítimo respecto de los bienes.
- 5º El Ministerio Público.

Trámite. Medidas precautorias.

62. Citado el presunto ausente por breve plazo, y vencido éste, se le designará defensor en el juicio y en los que se le entablaren. El nombramiento recaerá en el funcionario que desempeñe tal cargo, cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción. En caso de urgencia, se adoptarán las medidas

que las circunstancias aconsejen, inclusive el nombramiento de un administrador.

63. Cumplidos los extremos legales, será declarada la ausencia y nombrado el curador, o bien se procederá conforme a lo dispuesto en la parte final del artículo precedente.

Declaración.

64. Terminará esta curatela:

Término de la curatela.

- 1° Por presentación del ausente, sea en persona o por mandatario, o cuando cesare la imposibilidad a que se refiere el art. 60.
- 2° Por muerte de aquél.
- 3° Por declaración del fallecimiento presunto.

CAPITULO II

De la presunción de fallecimiento

65. Se presume que un ausente ha fallecido:

Casos y términos.

- 1° Cuando hallándose en accidente terrestre, marítimo o aéreo, no hubiera llegado a destino después de transcurrido un año del suceso.
- 2° Si habiendo tomado parte en una guerra, no reapareciere dos años después del término de ella.
- 3° Siempre que encontrándose en un combate, incendio, terremoto u otro hecho análogo, susceptible de ocasionar la muerte, no se hubiere tenido noticia de él por dos años consecutivos.
- 4° En el caso de que, desaparecido de su domicilio o residencia, dejando o no representante, no se tuviere noticia suya durante cuatro años.

En los supuestos de los incs. 1° y 3°, el plazo se contará desde el día del hecho, o si no fuere conocido, a partir del término medio de la época en que ocurrió o pudo producirse, según las circunstancias. En el del inc. 4°, desde el día de la ausencia, o desde la fecha de la última noticia.

Quiénes pueden solicitar la declaración.

66. Podrán denunciar el hecho y requerir ante el juez del domicilio la declaración del día presuntivo del fallecimiento:

- 1° El cónyuge.
- 2° Los presuntos herederos ab intestato.
- 3° Los instituidos como tales y los legatarios.
- 4° Quiénes tuvierén derecho a los bienes poseídos por el ausente.
- 5° Los titulares de derechos reales o creditorios, sujetos a la condición del deceso.
- 6° El Ministerio Público.

Trámite y pruebas.

67. El solicitante deberá justificar el extremo que invocare del art. 65, así como las diligencias practicadas para conocer el paradero del ausente.

El juez nombrará defensor al denunciado o dará intervención al respectivo funcionario, si lo hubiere; designará, además, curador para los bienes, cuando no quedare representante, y citará al ausente por edictos, una vez por mes, durante seis meses.

Declaración. Día presuntivo del fallecimiento.

68. Cumplidos los trámites y oído el defensor, el juez dictará la declaratoria, si hubiere lugar a ella, fijando el día presuntivo del fallecimiento.

En el caso del inc. 2° del art. 65, esta fecha será la del fin de la guerra; en el del inc. 4°, el último día de los primeros dos años, y en los previstos por los incs. 1° y 3°, aquel en que se produjo el hecho, si fuere conocido, o el término medio entre el principio y fin de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido.

Poseción de los bienes.

69. Establecido el día presuntivo del fallecimiento, los herederos del ausente en esa fecha o los sucesores de éstos y los legatarios, recibirán los bienes, cuyo dominio será inscripto a su nombre en el Registro, con la prenotación del caso. Deberán formar inventario y dar la caución que el juez estimare conveniente, pudiendo designarse un administrador cuando no la prestaren. Les será permitido hacer partición provisional, pero no enajenar ni gravar los bienes sin la venia del juez.

Reaparición del ausente. Herederos preferentes y concurrentes.

70. Si cumplido lo dispuesto en el artículo anterior, compareciere el ausente o hubiere noticia cierta de él, le serán devueltos los bienes.

Cuando se presentaren herederos preferentes o de igual grado, recibirán los bienes o se les hará participar en la transmisión de los mismos, según su título.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 434. inc. 3º. letra e) y 435, se aplicará a las rentas percibidas, lo que establece el art. 1919, inc. 3º.

71. Transcurridos diez años desde la desaparición o de la última noticia, o bien setenta a contar del nacimiento del ausente, caducará la garantía exigida en el art. 69 y quedará sin efecto la prenotación, pudiendo disponerse libremente de los bienes.

Disposición libre de los bienes.

72. Si el ausente se presentare con posterioridad a los plazos del artículo anterior, sólo podrá reclamar los bienes que existieren, tal como se hallaren; los adquiridos con el valor de los que faltan, y las rentas e intereses no consumidos.

Reaparición después de haberse dispuesto de los bienes.

Si en iguales circunstancias aparecieren herederos preferentes o con el mismo derecho que los poseedores, podrán iniciar petición de herencia.

Herederos preferentes y concurrentes.

En ambos casos regirá lo dispuesto en el título de la reivindicación.

73. Siempre que debieren concurrir a una sucesión, personas de existencia incierta, la parte de ellas acrecerá a la de quienes tuvieren derecho a la herencia. Estos deberán formar inventario judicial de cuanto reciban, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer los interesados o sus causahabientes.

Sucesión con herederos de existencia incierta.

TÍTULO V

De las personas jurídicas

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

74. Son personas jurídicas:

Enumeración.

- 1º El Estado.
- 2º Las provincias.
- 3º Los municipios.
- 4º La Iglesia.

- 5° Los establecimientos y fundaciones de utilidad pública, religiosos o piadosos, científicos o literarios, u otros que tengan por objeto el bien común, con tal que dispongan según sus estatutos, de recursos propios y no subsistan solamente de asignaciones del Estado.
- 6° Las corporaciones y asociaciones con los mismos fines y requisitos exigidos en el inciso precedente.
- 7° Las sociedades anónimas y las cooperativas destinadas a cualquier fin de industria o de comercio, que serán regidas por las disposiciones del respectivo Código.

Personas jurídicas
constituidas en el
extranjero.

75. Son también personas jurídicas los estados extranjeros, sus provincias y municipios, los establecimientos, corporaciones o asociaciones existentes en ellos, con iguales requisitos que los exigidos por el artículo anterior.

Comienzo de su existencia.

76. Comenzará la existencia de las personas jurídicas, desde el día en que fueren autorizadas por la ley o por el Poder Ejecutivo, cuando no requieran, además, ser confirmadas por el prelado, en la parte religiosa.

La decisión corresponderá a la autoridad pública del territorio en que haya de establecerse el asiento principal.

Nombre de las personas jurídicas.

77. Las personas jurídicas adoptarán al constituirse, una designación especial, debiendo aplicarse en lo pertinente lo dispuesto en los arts. 26 y 27.

Domicilio.

78. Las personas jurídicas tienen su domicilio en el lugar de la respectiva dirección o administración, si en los estatutos o al ser autorizadas no se hubiere fijado uno distinto. Las entidades extranjeras lo tendrán en el lugar de su principal asiento, en el territorio de la Nación.

Capacidad.

79. Las personas jurídicas gozarán, dentro de los fines de su institución, de igual capacidad que las naturales para adquirir bienes y ejercer derechos o contraer obligaciones, actuando por medio de sus representantes. Podrán intentar, en igual forma, las acciones que les correspondan, y ser demandadas civilmente.

Poderes de los representantes.

80. Si los poderes de los representantes no hubieren sido expresamente consignados en los respectivos estatutos, o en los instrumentos que los autorizaren, la validez de sus actos será regida por las disposiciones del Título IV, Sección III, Libro I.

81. Las personas jurídicas responden del daño que sus representantes o agentes ocasionaren a terceros, por hechos o actos realizados en el ejercicio de sus funciones, que obliguen al resarcimiento. En los casos de gestión pública, se aplicarán los principios del derecho administrativo.

Responsabilidad por
actos ilícitos.

CAPITULO II

De las corporaciones

82. Las corporaciones deben ser constituídas mediante escritura pública y se registrarán por sus estatutos en lo que no estuviere dispuesto dentro del presente título.

Constitución. Régimen.

83. Los bienes de la entidad no pertenecen a sus miembros. Estos, ni individual ni conjuntamente, responden por las obligaciones de aquélla, salvo que las tomaran a su cargo en forma directa o subsidiaria.

La entidad y sus
miembros.

84. Es facultad implícita de las corporaciones, admitir nuevos miembros en lugar de los salientes o fallecidos, con tal que no excedan del número determinado en los estatutos.

Admisión de nuevos
miembros.

85. La dirección estará constituida por uno o varios miembros de la entidad que designe la asamblea, la cual podrá removerlos, como también nombrar y revocar los mandatarios, que para asuntos determinados, autoricen los estatutos.

Dirección. Substitución
provisional.

La persona jurídica será representada por la dirección. Cuando ésta fuere colegiada, sus acuerdos se adoptarán conforme al art. 87, inc. 1°. Si dejare de existir o hubiere litigio acerca de ella, el juez del domicilio designará en caso necesario, la persona que deba sustituirla provisionalmente.

86. La autoridad suprema de la corporación reside en la asamblea. Esta será citada por la dirección en los casos que determine el estatuto, o cuando lo solicitare por escrito la quinta parte, por lo menos, de sus miembros. Todos tendrán igual voto en ella, y serán convocados con indicación de los asuntos a tratarse, careciendo de valor cuanto se resolviera sobre materia distinta.

Asamblea. Forma de
convocarla.

Los peticionantes en el supuesto anterior, podrán ser autorizados judicialmente para hacer la citación por ellos

mismos y nombrar la persona que presidirá el acto, circunstancias que se expresarán en aquélla.

Reglas de su funcionamiento.

87. Salvo disposición de los estatutos, la asamblea funcionará:

- 1º Con la mitad más uno de sus miembros, para quedar constituida. Si no se obtuviera este número, se realizará con los que concurran a una segunda citación. Las resoluciones serán adoptadas por mayoría de los votos presentes.
- 2º Especialmente convocada y con las tres cuartas partes de los asociados, para toda reforma del acto constitutivo o la disolución de la entidad. Para modificar su objeto será necesario el asentimiento unánime de aquéllos, pudiendo en este caso prestarlo por escrito.

La validez de tales reformas dependerá de la aprobación del Poder Ejecutivo.

Asuntos en que no pueden intervenir los directores.

88. Los directores no podrán intervenir en aquellos asuntos de la corporación en que tuvieren algún interés personal, ni tampoco tendrán voto los miembros en el mismo caso.

Derechos de los asociados.

89. Los derechos de los asociados se determinan por el objeto de la corporación y lo que prescriban los estatutos. Se juzgarán siempre tales:

- 1º Formar parte de la asamblea y votar en la misma, con arreglo a los arts. 86, 87 y 88.
- 2º Demandar la nulidad de lo resuelto por la asamblea o la dirección, cuando no habiendo prestado su conformidad se violare la ley o el estatuto. Tal demanda deberá promoverse dentro de los tres meses contados desde la providencia impugnada.
- 3º Retirarse de la entidad, con pérdida de cualquier derecho o beneficio reservado por el estatuto a los componentes para el caso de disolución.

Los derechos de los asociados serán intransmisibles, por actos entre vivos o por herencia, a no ser que los estatutos autorizaren lo contrario.

90. Termina la existencia de las corporaciones:**Término de las corporaciones.**

- 1° En virtud de resolución de sus miembros, aprobada por el Poder Ejecutivo.
- 2° Por disposición de la ley, a pesar de la voluntad de los asociados, cuando fuere necesario o conveniente a los intereses públicos.
- 3° Por haberlo así dispuesto el Poder Ejecutivo que las reconoció, siempre que se hubiere abusado o incurrido en transgresiones de los requisitos o cláusulas del reconocimiento, o imposibilidad de cumplir los estatutos. El decreto que recayere, será apelable dentro de diez días, al sólo efecto devolutivo, ante el Tribunal Superior que corresponda según el domicilio de la corporación.
- 4° Por insuficiencia de los bienes destinados a sostenerlas, o por el auto declarativo del concurso.

91. No termina la existencia de una corporación, por fallecimiento de sus miembros, aunque no pudiera llenarse el fin de su instituto. Corresponderá al Poder Ejecutivo, si otra cosa no se hubiera previsto, declararla disuelta o resolver la forma de integrarla.

Integración de las corporaciones. Facultades del Poder Ejecutivo.

92. Terminada o disuelta una corporación, los bienes de la misma tendrán el destino indicado en sus estatutos, y si nada hubieren dispuesto, serán considerados vacantes y aplicados a los fines que prescriba la ley, salvo todo perjuicio a tercero y a los miembros existentes.

Destino de los bienes.

CAPITULO III

De las fundaciones

93. Sea por testamento, sea mediante escritura pública por acto entre vivos, podrán constituirse fundaciones para realizar determinados fines, siempre que para ello se destinaren bienes en plena propiedad y concurriere la aprobación del Poder Ejecutivo.

Requisitos.

Revocación.

94. El constituyente podrá revocar las fundaciones que revistan forma de donación, comunicándolo al Poder Ejecutivo antes de que las apruebe. Los herederos tendrán el mismo derecho, siempre que aquél no hubiere pedido el reconocimiento o encomendado al escribano notificar a la autoridad. También les será lícito exigir se reduzcan, si hubiere lugar a ello, como a los acreedores promover la acción de fraude.

Reducción.**Autorización en las constituidas por testamento.**

95. En las fundaciones por testamento, la autorización oficial será recabada por los herederos o albaceas, y en su defecto, por el juez, de oficio.

Autorización retroactiva.

96. Aprobada la fundación, los efectos de ella se retrotraen al día en que fué establecida o al del fallecimiento del constituyente, en su caso. Este o sus herederos deberán entregar los bienes afectados, si otra cosa no dispusiere su estatuto.

Régimen de las fundaciones.

97. Las fundaciones se regirán por lo que hubieren dispuesto los actos constitutivos. Cuando en ellos no se determinare la forma de nombrar la dirección, las facultades de la misma o las reglas para el funcionamiento de la persona jurídica, las fijará el Poder Ejecutivo de acuerdo con lo que hubiere manifestado el fundador y con los fines para que fué erigida. Estas entidades quedarán sometidas a la vigilancia de la autoridad administrativa.

Modificación de los estatutos y del objeto.

98. Los estatutos de las fundaciones, y aun el objeto de ellas, podrán ser modificados por el juez del domicilio, a instancia de la dirección, cuando fuere manifiestamente imposible conservar los bienes o realizar los fines propuestos.

En los mismos casos, podrán ser autorizadas para enajenar todo o parte del activo, con tal de aplicarlo al objeto designado, o al que se determine en su reemplazo.

Término de las fundaciones.

99. Se aplicarán a estas entidades, en lo pertinente, las reglas sobre extinción de las corporaciones. No obstante, el Poder Ejecutivo podrá, a falta de cláusula del estatuto, entregar los bienes a otra entidad, cuyo objeto sea el más análogo posible al expresado por el fundador. El respectivo decreto será apelable en el plazo y ante el tribunal que establece el art. 90, inc. 5°.

Fundaciones del Estado.

100. Los establecimientos con personería jurídica, fundados por el Estado, se regirán por la ley de su creación.

CAPITULO IV

De las asociaciones

101. Las asociaciones políticas, religiosas, científicas, artísticas, de beneficencia, recreo u otras, que no tengan fin lucrativo y no hayan obtenido personería jurídica, estarán regidas por los principios de los contratos en general, y subsidiariamente, por las disposiciones relativas al de sociedad.

Normas que las rigen.

102. Las asociaciones a que se refiere el artículo anterior, podrán gozar de los derechos conferidos en el art. 103, sin necesidad de autorización alguna, si, constituidas por escritura pública, ésta y sus estatutos se inscribieren en el registro respectivo. La escritura consignará el nombre y objeto de la entidad, su domicilio y las condiciones generales de su funcionamiento, siempre que ellas no resultaren de la carta orgánica.

Formalidades impuestas.

Mientras no se verifique la inscripción, los componentes responderán de las deudas comunes, no obstante cualquier cláusula en contrario.

Obligaciones de los componentes mientras no se cumplan.

103. Toda asociación inscripta tendrá los siguientes derechos:

Derechos de la asociación.

- 1º Estar en juicio como actora o demandada.
- 2º Percibir las contribuciones de los asociados.
- 3º Adquirir a título gratuito u oneroso, el local para la administración y las reuniones de sus miembros, como también los inmuebles necesarios para llenar sus fines.
- 4º Aceptar donaciones manuales.
- 5º Tomar dinero prestado, con garantía real o sin ella, para efectuar las adquisiciones previstas en el inc. 3º.

Podrá establecerse en la constitución o estatuto, que los componentes no responderán por las deudas contraídas a nombre de la entidad, ni tendrán parte alguna en sus bienes, sin perjuicio de lo que se disponga para el caso de disolución.

Reglas aplicables.

104. Son aplicables a las asociaciones inscriptas, las reglas de las personas jurídicas en general y de las corporaciones en particular, en cuanto a representación, gobierno, responsabilidad y término de las mismas. Ellas quedarán sometidas a la vigilancia del Poder Ejecutivo, y podrá requerirse las medidas judiciales necesarias para el cumplimiento de la ley y de los estatutos.

Asociaciones capaces de recibir por donación o testamento.

105. Solamente las asociaciones con personería jurídica, podrán recibir bienes por donación o testamento. Se entenderá, sin embargo, que las liberalidades a favor de las no autorizadas, se realizan con el fin de obtener tal requisito, salvo cláusula en contrario.

SECCION SEGUNDA

DE LOS BIENES

TITULO I

Disposiciones generales

Patrimonio. Bienes.
Cosas.

106. El conjunto de bienes y obligaciones de una persona, constituye su patrimonio. Entiéndese por bienes, los objetos materiales o inmateriales susceptibles de valor. A los primeros, se les llama cosas en este Código.

Inmuebles por naturaleza.

107. Son cosas inmuebles por su naturaleza, aquellas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, lo incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentre en el interior de la tierra, sin el hecho del hombre.

Idem. por accesión.

108. Son inmuebles por accesión, los muebles que se encuentren real y permanentemente inmovilizados por su adherencia física al suelo.

Los muebles colocados con el propósito de afectarlos al servicio y explotación de un inmueble, por el dueño del mismo, se tendrán por accesorios de la cosa; formarán un todo con ella, y sin la voluntad del propietario, no podrán ser objeto de un derecho independiente.

109. Se considera que sirven para la explotación de un inmueble: Casos.

- 1° En edificios dispuestos de manera permanente para la industria, las máquinas y otros utensilios que ésta exija.
- 2° En establecimientos agrícolas, los instrumentos, maquinarias, enseres, ganado de labor y cuanto sea menester para cultivar el fundo y aprovechar las cosechas.

110. Son inmuebles por su carácter representativo, los instrumentos públicos en los que constare la adquisición de derechos reales sobre tales cosas, salvo los de hipoteca y anticresis.

Inmuebles por su carácter representativo.

111. En los muebles de una casa no se comprenderá: el dinero, los documentos y papeles, los retratos y recuerdos de familia, las colecciones científicas o artísticas, los libros y sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, ninguna clase de ropa de uso, los granos, caldos, mercaderías, ni, en general, otras cosas fuera de las que integran el ajuar de una casa.

Concepto de los muebles de una casa.

112. Los frutos naturales y las producciones orgánicas de una cosa formarán un todo con ella, mientras no estuvieren separados.

Frutos naturales y productos.

113. Cuando una cosa mueble adhiera a otra de la misma naturaleza sin alterarse la substancia, será considerada accesorio aquella que se hubiere unido con fines de uso, ornato, complemento o conservación.

Muebles principales y accesorios.

En caso de formar un todo sin poderse distinguir entre ellas, se tendrá por principal la de más valor; si fueren equivalentes, la de mayor volumen; si unos y otros resultaren iguales, no habrá cosa principal ni accesorio.

114. Son cosas accesorias en calidad de frutos civiles, las que proceden del uso y goce de bienes concedidos a otro, y también las derivadas de la privación de aquéllos. Se considerarán igualmente frutos civiles, los honorarios y salarios.

Frutos civiles.

115. Las pinturas, esculturas, escritos e impresos, se juzgarán principales con respecto a la materia, cuando el arte tuviere mayor valor e importancia que ésta.

Pinturas, esculturas, escritos, etc.

Cosas fuera del comercio.

116. Están fuera del comercio las cosas cuya enajenación fuere expresamente prohibida por la ley, o por actos jurídicos, en cuanto el presente Código autorice tales restricciones.

TÍTULO II

De los bienes públicos y particulares

Caracteres de los bienes públicos.

117. Los bienes del dominio público son inalienables e imprescriptibles.

Derechos de los particulares.

Los particulares tienen el uso y goce de ellos, conforme a las disposiciones administrativas y a las contenidas en este Código.

Enumeración de los bienes públicos.

118. Quedan comprendidos entre los bienes públicos de la Nación o de las provincias:

- 1º Los mares territoriales hasta diez millas contadas desde la línea de la más baja marea; sin perjuicio del derecho de policía para los fines de seguridad y la observancia de las leyes fiscales.
- 2º Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y fondeaderos.
- 3º Los ríos y todas las aguas que corren naturalmente, así como los respectivos cauces mientras no estén abandonados por ellas.
- 4º Las playas del mar y de los ríos, entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan en las más altas mareas o crecidas ordinarias, y no durante las tempestades.
- 5º Los lagos y sus lechos.
- 6º Los caminos, calles, plazas, puentes, canales, y todas las obras afectadas al uso común y al servicio público.

Bienes privados de la Nación y de las provincias.

119. Son bienes privados de la Nación o de las provincias:

- 1º Todos los inmuebles que, situados dentro de los respectivos límites territoriales, carecieren de otro dueño.

- 2º Los bienes vacantes o mostrencos y los de quienes fallecieren sin herederos.
- 3º Las islas que se formen en mar territorial y en los ríos o lagos, cuando ellas no pertenezcan a particulares.
- 4º Las embarcaciones que dieren en las costas de los mares o ríos, sus fragmentos y los objetos comprendidos en la carga, siempre que pertenecieran a enemigos o corsarios.
- 5º Los meteoritos.
- 6º Todos los bienes nacionales o provinciales no comprendidos en el artículo anterior, o no afectados al servicio público.

120. Son susceptibles de apropiación privada:

Bienes susceptibles de apropiación privada.

- 1º Los peces de los mares, ríos y lagos, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1510.
- 2º Los enjambres de abejas, conforme al art. 1509.
- 3º Las piedras, conchas u otras substancias que el mar arroja, cuando no presentaren signos de un dominio anterior.
- 4º Las plantas y hierbas que crezcan en las costas del mar, y también las que cubrieran las aguas del mismo o de los ríos o lagos.
- 5º Los tesoros, observándose lo dispuesto en los arts. 1511 y siguientes.

121. Son bienes municipales, aquellos que la Nación o las provincias hubieren puesto bajo el dominio de las comunas. Podrán enajenarse en el modo y forma que determinen las leyes respectivas.

Bienes municipales.

122. Los templos y las cosas sagradas y religiosas del culto católico, podrán ser enajenadas conforme a los cánones de la Iglesia y a las leyes que rigen el patronato nacional; los de otras comuniones, con arreglo a sus estatutos.

Enajenación de templos, cosas sagradas.

123. Los puentes, caminos y cualesquiera otras construcciones efectuadas a expensas de particulares, en terreno que les pertenezca, son del dominio de ellos, aunque autoricen el uso y goce para todos.

Puentes y caminos particulares.

TÍTULO III

Del bien de familia

Necesidad de la inscripción.

124. Para constituir el bien de familia, a fin de gozar de los beneficios que este Código le reconoce, será necesaria la inscripción del mismo con ese carácter, en el Registro de Inmuebles.

Quiénes pueden pedirla.

125. El derecho de solicitar la inscripción corresponderá al propietario del inmueble, al representante de la sociedad conyugal, en su caso, como también a los hermanos respecto del bien que hubieren heredado en común, dentro de la sucesión paterna o materna.

Requisitos.

126. Para que un inmueble pueda inscribirse como bien de familia, será menester que su valor no exceda de la suma de cincuenta mil pesos, y que no exista otro registrado con igual carácter por el mismo titular. No obstará a la inscripción, la circunstancia de que el solicitante pueda tener derechos eventuales como hijo de familia, sobre determinada parte de otro inmueble anteriormente inscripto.

Fijación del valor.

127. La suma que se establece en el artículo anterior, se fijará por el avalúo para el impuesto territorial del año en que se solicite el registro. No se deducirá cantidad alguna por concepto de hipoteca u otro gravamen.

Efectos de la inscripción.

128. La inscripción produce los siguientes efectos:

- 1º El bien no será embargable por deudas posteriores, ni podrá ejecutarse, aun en caso de concurso del titular.
- 2º Tampoco lo serán los frutos en un sesenta por ciento de su producción anual.
- 3º No podrá alterarse el destino del inmueble, ni ser éste vendido o permutado en todo o en parte, ni gravárselo con hipotecas, salvo que mediare consentimiento unánime de los interesados o sus representantes legales.

129. La inscripción se gestionará ante el juez del lugar donde esté situado el inmueble, acompañando el respectivo título y la boleta fiscal del año, con expresión de las personas que inicialmente deban gozar del beneficio, así como de las hipotecas o gravámenes que pesen sobre el bien. Previa publicación de edictos y audiencia sumaria de las partes, se ordenará el registro. En caso de controversia, se resolverá lo más conveniente para los intereses de la familia.

Trámite.

130. No podrá invocarse el beneficio del presente título, contra las siguientes acciones:

Acciones ante las cuales cede el beneficio.

- 1º La reivindicatoria, relativa al inmueble.
- 2º Las que provinieren de obligaciones anteriores a la fecha del registro.
- 3º Las originadas por créditos procedentes de salarios o materiales invertidos en el inmueble para su beneficio.
- 4º Las que persigan el cobro de impuestos fiscales.
- 5º Las que procedan de las cuotas impagas reconocidas a favor de los herederos condóminos por el inc. 4º del art. 1941.

131. Cesará el beneficio:

Extinción.

- 1º Por la expropiación del bien.
- 2º Por la reivindicación.
- 3º Por pedido del propietario que solicitó la inscripción. Si el bien fuere ganancial, se exigirá el consentimiento del otro cónyuge.
- 4º Por acuerdo de los herederos del constituyente o por la mayoría de ellos, siempre que se tenga la conformidad del cónyuge supérstite.
- 5º Por venta judicial en los casos autorizados por el art. 130.
- 6º Cuando se hubieren efectuado mejoras o construcciones que duplicaran el valor inicial consignado en el Registro.

SECCION TERCERA

DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS

TITULO I

De los actos voluntarios

CAPITULO I

Disposiciones generales

Concepto.	132. Los actos voluntarios previstos en este Código. son aquéllos que, ejecutados con discernimiento, intención y libertad, determinan una adquisición, modificación o extinción de derechos. Los que no reúnan tales requisitos, no producirán por sí, efecto alguno.
Actos lícitos sin finalidad jurídica.	133. Cuando los actos lícitos no tuviesen por fin inmediato adquirir, modificar o extinguir derechos, sólo producirán estos efectos, en los casos expresamente legislados.
Limitaciones a la libertad ajena.	134. Nadie puede ser compelido a ejecutar un acto, o limitado en su libertad, sin que se haya constituido un derecho al efecto. Quien por ley tenga facultad para dirigir las acciones de otro, podrá impedirle por la fuerza que se dañe a sí mismo. También será permitido hacerlo, a todo aquel que tuviere noticia de un acto ilícito, cuando no sea posible a la autoridad pública intervenir oportunamente.
Manifestación de la voluntad.	135. La voluntad podrá manifestarse, ya en un hecho material consumado o comenzado, ya simplemente en su expresión positiva o tácita.
Manifestación positiva.	136. Se tendrá como declaración positiva de la voluntad, aquella que se manifieste verbalmente, o por escrito, o por signos inequívocos con referencia a determinados objetos. No valdrá, sin embargo, aquella que no revista las solemnidades prescritas.

dades prescriptas, cuando la ley exigiere una forma determinada para ciertos actos jurídicos.

137. La manifestación tácita, resultará de aquellos actos por los cuales se pueda conocer con certidumbre la existencia de la voluntad, siempre que no se exija una declaración positiva, o no exista otra expresa en sentido contrario.

Manifestación tácita.

El silencio será juzgado como asentimiento a un acto o a una pregunta, cuando exista deber legal de explicarse, o bien a causa de la relación entre el silencio actual y la conducta anterior del agente.

La manifestación de voluntad sólo puede ser presumida en casos previstos por ley expresa.

138. Sin perjuicio de reglas especiales, la declaración de voluntad se considera transmitida cuando fuere notificada por telegrama colacionado o por intermedio de escribano, según las normas procesales referentes a las citaciones.

Casos en que la declaración se juzga transmitida.

139. La declaración de voluntad a una persona ausente, será válida desde que llegue a su poder; pero quedará sin efecto, cuando se notificare la revocación antes o simultáneamente con aquélla.

Declaración a persona ausente.

Si la declaración tuviere que notificarse a persona desconocida o de domicilio ignorado, podrá hacerse por la vía judicial, bajo las formas que autorizan las leyes de procedimiento. Será competente, en el primer caso, el juez del domicilio o residencia del declarante, y en el segundo, el del domicilio o residencia de la persona a quien se trate de notificar.

140. Los actos se juzgarán ejecutados sin discernimiento:

Actos que se juzgan sin discernimiento, sin intención y sin libertad.

- 1º Cuando fueren lícitos y sus agentes no hubieren cumplido catorce años, o diez en los ilícitos.
- 2º Cuando sus autores, por cualquier causa estuvieren privados de razón.
- 3º Si procedieren de persona sujeta a interdicción, salvo en los casos previstos por el art. 55.

Se tendrán por cumplidos sin intención, los viciados por error o dolo, y sin libertad cuando mediare fuerza o temor.

CAPÍTULO II

Del error

Error de derecho.

141. La ignorancia de las leyes o el error de derecho, en ningún caso impedirá el efecto de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los ilícitos.

Error de hecho o de derecho que invalida la declaración.

142. No será válida la declaración de voluntad cuando el error, de hecho o de derecho, versare sobre alguno de los puntos siguientes:

- 1º La naturaleza del acto.
- 2º La persona con quien se formó la relación de derecho, o a la cual ella se refiera.
- 3º La causa principal del acto, o la cualidad que verosísimamente se tuvo en mira como substancial, según la práctica de los negocios.
- 4º El objeto, en el caso de haberse indicado un bien diverso o de distinta especie, o diferente cantidad, extensión o suma, u otro hecho que no sea aquel que se intentó designar.
- 5º Cualquier otra circunstancia que, de buena fe, pudo considerar el agente como elemento necesario de la operación realizada.

Estas mismas reglas serán aplicables al caso de haberse transmitido con inexactitud la declaración de voluntad.

Error sobre cualidades de la cosa que no causa nulidad.

143. No causa nulidad el error que versare sobre cualidades de la cosa no comprendidas en el inc. 3º del artículo precedente, aunque hubiere sido motivo determinante del acto; a no ser que mediare garantía expresa, o que el agente se hubiere decidido por dolo, o que tales elementos revistieren el carácter de una condición.

Aplicación de las reglas de la buena fe.

144. Quien padeció error no podrá prevalerse de él contra las reglas de la buena fe. Quedará obligado a ejecutar

la prestación a que entendió comprometerse, siempre que la otra parte se allanare al cumplimiento.

145. El error no perjudica si hubo razón para errar, pero no podrá ser alegado cuando procediere de negligencia imputable. En este caso, quien invocare la nulidad para substraerse a los efectos del acto, deberá indemnizar a la otra parte, siempre que ella no lo hubiere conocido o debido conocerlo. No será admitido este resarcimiento en las disposiciones de última voluntad. Error excusable.

CAPITULO III

Del dolo

146. Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese fin. Concepto.

Las reglas de este capítulo se aplican igualmente a las omisiones.

147. Para que el dolo pueda causar la nulidad de un acto, se requiere: Requisitos para causar nulidad.

- 1º Que sea grave.
- 2º Que haya determinado la declaración de voluntad.
- 3º Que ocasione un daño apreciable.

El dolo incidente, sólo obligará al resarcimiento del perjuicio.

- **148.** El dolo afectará la validez de los actos, bien provenza de las partes o de un tercero. Se aplicará en este caso lo dispuesto en el art. 151. Dolo de parte o de tercero.

CAPITULO IV

De la fuerza y del temor

149. Habrá falta de libertad en el agente, cuando se empleare contra él fuerza irresistible. Se juzgará que hubo intimidación cuando por injustas amenazas, alguien le causa- Concepto.

re temor fundado de sufrir cualquier mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes, o en la de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos.

Injustas amenazas.

150. El ejercicio normal de los derechos no podrá determinar injustas amenazas. Sin embargo, cuando por este medio se hubieren arrancado a la otra parte ventajas excesivas, la violencia moral podrá ser considerada suficiente para anular el acto.

Intervención de u. l. tercero. Resarcimiento.

151. La fuerza o la intimidación tornan el acto anulable, aunque se hayan empleado por un tercero. Cuando una de las partes hubiere tenido conocimiento de ello, ésta responderá solidariamente con el autor por los daños y perjuicios. En los demás casos, el resarcimiento será por cuenta exclusiva del causante.

TÍTULO II

De los actos jurídicos

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Concepto.

152. Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o extinguir derechos.

Las omisiones que revistan los mismos caracteres, están sujetas a las reglas del presente título.

Régimen.

153. Sin perjuicio de lo dispuesto sobre la capacidad de las personas y la forma de los actos jurídicos, éstos serán exclusivamente regidos en cuanto a la celebración, prueba, validez y efecto, por las leyes del país, cuando hubieren de ser ejecutados en él o se promovieren demandas fundadas en los mismos.

Este principio no es aplicable a las disposiciones de última voluntad, que se gobiernan por lo establecido en el Libro V.

154. El incapaz de hecho o de derecho según las leyes de su domicilio, que hubiere celebrado un acto jurídico en el territorio de la Nación para producir efecto en él, será, no obstante, considerado capaz, si lo fuere de acuerdo con lo dispuesto en el presente Código.

Actos válidos del incapaz.

155. No podrá ser objeto de los actos jurídicos:

Objeto de los actos jurídicos.

1° Aquello que no esté dentro del comercio.

2° Lo comprendido en una prohibición de la ley.

3° Los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral o a las buenas costumbres, o que perjudiquen los derechos de tercero.

La inobservancia de esta regla causa la nulidad del acto, y de igual modo, las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones, contravengan lo dispuesto por este artículo.

Sanción.

156. Se juzgará especialmente contrario a las buenas costumbres, el acto jurídico por el cual alguien, explotando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia ajenas, se hiciere prometer u otorgar para sí o para un tercero, a cambio de una prestación, ventajas de orden patrimonial evidentemente desproporcionadas.

Actos que se juzgan contrarios a las buenas costumbres.

157. La equivocada calificación jurídica de las partes no perjudica la eficacia del acto, que se juzgará según el contenido real del mismo.

Interpretación de los actos jurídicos.

Cuando hubiere en un instrumento palabras que no armonizaren con la intención reflejada en el acto, ésta prevalecerá sobre aquéllas.

158. Los actos jurídicos producen el efecto declarado, el virtualmente comprendido en ellos, y el que les asigne la ley.

Efectos de los actos jurídicos.

CAPÍTULO II

De la forma de los actos jurídicos

159. En la celebración de los actos jurídicos, deberán observarse las solemnidades prescriptas por la ley. A falta de regla especial, las partes podrán emplear las formas que estimaren conveniente.

Prescripciones que deben observarse.

Forma instrumental
ordenada o conveni-
da.

160. Cuando la forma instrumental fuere exclusiva-mente ordenada o convenida, no podrá suplírsela por otra, aunque las partes se hubieren comprometido por escrito a su otorgamiento en un tiempo determinado, e impuesto cualquier pena. Esta cláusula y el acto mismo, serán nulos.

Prohibición de substi-
tuir un instrumento
por otro.

De igual modo, un instrumento público no podrá substituirse por otro; ni una clase especial de aquél, por una especie diferente.

Libertad para elegir
forma en los actos
escritos.

161. La expresión por escrito podrá revestir la forma de instrumento público o privado, a no ser que la primera hubiere sido expresamente exigida.

CAPÍTULO III

De la simulación de los actos jurídicos

Casos de anulabilidad.

162. Será anulable el acto jurídico, cuando por la simulación se intente perjudicar a tercero o se persiga un fin ilícito. En tal caso, los autores de aquélla sólo podrán ejercer entre sí, la acción tendiente a obtener la nulidad, y regirá lo dispuesto en el art. 853.

Contradocumento u
otra prueba escrita.

163. Si hubiere sobre la simulación un contradocumento firmado por alguna de las partes, u otra prueba escrita, para dejar sin efecto el acto simulado cuando éste hubiere sido ilícito, o si fuere lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces podrán conocer respecto de ellos y de la simulación, siempre que nada contuvieren contra las leyes, ni contra los derechos de tercero.

Derechos de los ter-
ceros perjudicados.

164. Los terceros perjudicados por la simulación, podrán demandar la nulidad, pero ella no afectará a los actos a título oneroso, de cualquier naturaleza, concluidos con personas de buena fe. Esta regla será también aplicable cuando por acuerdo de partes, hubiere quedado sin efecto la operación.

TITULO III

De las modalidades de los actos jurídicos

CAPITULO I

De la condición

165. En los actos jurídicos, las partes podrán subordinar a un acontecimiento futuro e incierto, la existencia o la resolución de sus efectos. Concepto.

Cuando el hecho futuro fuere necesario, valdrá como plazo, aunque se hubiere designado como condición.

166. La condición de un hecho imposible, contrario a la moral o a las buenas costumbres o prohibido por las leyes, deja sin efecto el acto jurídico. Condiciones prohibidas. 1

Quedan especialmente prohibidas las siguientes:

- 1º Habitar siempre un lugar determinado, o someter la elección del domicilio a la voluntad de un tercero.
- 2º Mudar o no de religión.
- 3º Casarse con determinada persona o con aprobación de un tercero, o en cierto lugar o tiempo. Será, no obstante, válida, la general de contraer matrimonio.
- 4º Vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada, o divorciarse.

- La condición de no realizar un hecho imposible, no perjudicará la eficacia del acto.

167. Es nulo el acto jurídico sometido a una condición que lo haga depender absolutamente de la voluntad del obligado; pero valdrá si la condición consistiere en un hecho que pueda o no ejecutar aquél. Condiciones potestativas.

168. En el cumplimiento de las condiciones se observarán las reglas siguientes: Reglas para el cumplimiento de las condiciones.

- 1º Deberán realizarse del modo que las partes lo quisieron y entendieron verosimilmente.

- 2º Se juzgará su ejecución indivisible; de suerte que llenadas parcialmente, no surgirá o no se resolverá en igual medida, el efecto del acto jurídico.
- 3º Si fueren disyuntivas, bastará que una de ellas se realice; si conjuntas, será menester el concurso de todas.
- 4º Se tendrán por cumplidas, cuando las partes a quienes su ejecución beneficie, las renuncien voluntariamente; o bien si, dependiendo del hecho de un tercero, éste se negare al acto o rehusare su consentimiento.
- 5º Se tendrán asimismo, por cumplidas, cuando por hecho u omisión imputable, lo hubiere impedido aquél a quien perjudicaren; pero no, si la realización fuere determinada por el beneficiario. Esta regla no se aplicará cuando una u otra parte se limitare al ejercicio regular de un derecho.
- 6º Las que debieran ocurrir en un tiempo fijo, caducarán vencido ese término, o desde que sea indudable que el hecho no se producirá. A falta de plazo, se aplicará el inc. 1º.

Efecto del cumplimiento en las suspensivas y en las resolutorias.

169. En la condición suspensiva, el efecto que dependa del acaecimiento de ella, sólo se producirá a partir de entonces. En la resolutoria, dichas consecuencias cesarán a contar de su realización, restableciéndose el estado anterior al acto celebrado.

Retroactividad convenida.

170. Podrá establecerse que la condición tenga efecto retroactivo. Realizado el hecho, las partes deberán entregarse recíprocamente cuanto les habría correspondido, si el cumplimiento se hubiere verificado al formarse el acto.

Inexigibilidad pendiente la condición.

171. Pendiente la condición suspensiva, no será exigible el cumplimiento del acto y podrá repetirse lo que las partes hubieren entregado en ejecución de él; pendiente la resolutoria, se procederá como si la relación jurídica fuera pura y simple.

Medidas conservatorias.

En ambos supuestos, los interesados podrán solicitar medidas conservatorias; pero deberán abstenerse de cualquier acto susceptible de perjudicar los derechos que hubieren de existir o de restablecerse, por el acaecimiento de la condición. En caso contrario, responderán por los daños y perjuicios.

172. Se extinguirá el efecto de la condición cuando pendiente ésta, pereciere sin culpa de las partes el objeto determinado en el acto jurídico. Si mediare culpa, el deudor responderá al acreedor por el equivalente de la cosa y los daños y perjuicios, siempre que se cumpliera la condición.

Destrucción de la cosa pendiente la condición.

173. Enajenado un bien bajo condición suspensiva, todo acto por el cual se disponga del mismo, pendiente aquélla, podrá anularse, una vez cumplida, siempre que con él se imposibilitare o menoscabare el efecto que debió producir dicha condición. Esta regla se aplicará a la resolutoria, en cuanto a los actos realizados por el que tuviere derechos que cesaren con el cumplimiento de ella.

Disposición de un bien enajenado bajo condición suspensiva o resolutoria.

174. El artículo anterior regirá las consecuencias de las ejecuciones, embargos, y de los procedimientos en concurso civil o comercial.

Extensión del artículo anterior.

Se observarán los preceptos de este Código que protegen a quienes hubieren obtenido su derecho de persona que no pudo transmitir.

175. Cumplida la condición suspensiva o resolutoria, subsistirán los actos de administración ejecutados por el propietario durante el intervalo, así como los contratos de arrendamiento exentos de fraude, y le pertenecerán los frutos percibidos.

Actos que subsisten cumplida la condición.

176. Si la condición suspensiva no llegare a cumplirse, se procederá como si el acto nunca se hubiere realizado. En el caso de la resolutoria, se tendrá por inexistente la condición.

Condición no cumplida.

CAPÍTULO II

De los cargos

177. Los cargos impuestos sólo impedirán el efecto del acto jurídico, cuando importaren condición suspensiva. En la duda, se entenderá que tal condición no ha existido.

Cargos que importan condición suspensiva.

178. Cuando el hecho que constituye el cargo fuere imposible, ilícito o inmoral, el acto jurídico será nulo. Si esta imposibilidad no alcanzare a ser absoluta, pero llegare a ser-

Cargos imposibles, ilícitos o inmorales.

lo después sin culpa del adquirente, la transferencia subsistirá y los bienes no reconocerán cargo alguno.

Plazo para el cumplimiento.

179. A falta de plazo, los cargos deberán cumplirse dentro del señalado por el juez.

Efecto de la inejecución.

180. El incumplimiento de los cargos autoriza a la otra parte para proceder conforme a lo dispuesto en el art. 829, inc. 1°.

Cargos transmisibles a los herederos.

181. La obligación de cumplir los cargos impuestos para adquirir un derecho, pasa a los herederos, a no ser que sólo pudieren ser ejecutados por el deudor. Cuando éste falleciere sin hacerlo, la transferencia quedará sin efecto, volviendo los bienes al titular originario o a los sucesores de éste. En cuanto a los terceros, les serán aplicables los principios de la condición resolutoria.

CAPÍTULO III

Del plazo

Concepto.

182. En los actos jurídicos podrá establecerse que su efecto no será exigible hasta cumplirse un plazo, o que se extinguirá al vencimiento de éste.

Dicho término podrá referirse a una fecha dada o a un acontecimiento futuro y necesario, aunque se ignore cuando habrá de realizarse.

A favor de quien se presume.

183. El plazo en los actos jurídicos se presume a favor de todos los interesados, a no ser que resultare lo contrario del objeto de aquéllos o de otras circunstancias.

En las obligaciones, el pago no podrá verificarse antes del vencimiento, sin acuerdo de partes.

Transmisión de los derechos sujetos a plazo.

184. Son transmisibles los derechos sujetos a plazo suspensivo o resolutorio, aún cuando fuere tan prolongado que las partes no puedan sobrevivir a su vencimiento.

Normas que se aplican a los plazos.

185. Se aplicarán, en lo pertinente, las reglas sobre condiciones suspensivas y resolutorias.

TITULO IV

De la representación en los actos jurídicos

CAPITULO I

De la representación en general

186. Podrán celebrarse por medio de representantes los actos jurídicos entre vivos. Los que versaren sobre derechos de familia, sólo admiten representación en los casos expresamente autorizados por este Código.

Actos jurídicos que admiten representación.

187. Las consecuencias jurídicas de una declaración de voluntad, serán consideradas sólo en la persona del representante, en lo concerniente a los vicios de la misma o al conocimiento que se tuvo o debió tener de ciertas circunstancias. Aunque el representante fuere incapaz, valdrá el acto que realice a nombre de su representado.

Casos en que se considera o no la persona del representante.

188. Los actos del representante se reputarán como celebrados por su comitente, siempre que los ejecutare dentro de los límites de sus poderes. Cuando se excediere de ellos, pero los terceros fueren de buena fe, se estimará que obró dentro de sus facultades, obligando a su principal si el acto quedare comprendido dentro de su título habilitante. En caso de duda se entenderá que procedió por cuenta propia.

Efecto de los actos celebrados por el representante.

El error del agente acerca de la existencia y alcance de sus facultades, se juzgará con arreglo a los arts. 141 y siguientes.

189. El comitente deberá atenerse a la fecha de los instrumentos que su representante hubiere subscripto, y será a su cargo la prueba de que aquéllos fueron antedatados.

Fecha de los instrumentos suscritos por el representante.

190. El representante deberá:

Obligaciones del representante.

1º Limitarse a sus poderes, no obligándose el principal por lo que hiciere sin facultades o fuera de ellas, salvo ratificación.

- 2º Abstenerse de formalizar consigo mismo un acto jurídico, sea por cuenta propia o de tercero, sin que el principal le hubiere autorizado o lo ratificare, a menos que se tratase de cumplir una obligación.
- 3º Cuando el encargo fuere de colocar fondos a réditos, abstenerse de aplicarlos a sus negocios propios o a los de otros también representados por él, de no mediar conformidad expresa del comitente; pero cuando se le hubiere encomendado tomar dinero en préstamo, podrá él mismo facilitarlos al interés en curso.
- 4º No usar de sus poderes en beneficio propio. Los actos celebrados con quienes supieran o debieran saber las circunstancias mencionadas en los incs. 2º, 3º y 4º no obligarán al comitente.
- 5º Devolver los instrumentos que le habilitaren, al cesar su cargo, sin que proceda respecto de ellos derecho de retención en garantía de su crédito.

Ratificación.

191. Cuando en el supuesto del inc. 1º del artículo anterior, mediare ratificación del comitente, o en su caso, la autoridad judicial o administrativa ratificaren lo obrado, tales conformidades suplirán la representación, como si hubiera existido en la fecha de celebrarse el acto, pero no perjudicarán los derechos legítimamente constituidos por el representante en el intervalo a favor de terceros, ni afectarán las consecuencias de la ejecución forzada, de los embarcos o del concurso.

Importará ratificación, la voluntad que manifestare el principal, ya en forma expresa, ya por cualquier hecho que necesariamente signifique aprobar lo actuado por el representante.

Conformidad requerida al titular.

192. Cuando fuere necesaria la ratificación, tanto el mandatario como el tercero interesado podrán requerirla del titular, comunicándole lo cumplido a su nombre. Si transcurrieren quince días sin llegar respuesta, el silencio se juzgará como una negativa. Si la ratificación dependiere de la autoridad, el plazo será de noventa días. En ningún supuesto, la otra parte estará obligada a esperar el vencimiento, salvo cláusula expresa.

Ratificación denegada.

193. Negada la ratificación el representante no será responsable, siempre que hubiere hecho saber al tercero la

falta o deficiencia de sus poderes, pero lo será si por escrito tomó a su cargo el negocio o se comprometió a obtener la conformidad. De igual modo podrá exigírsele el cumplimiento, o el pago de daños y perjuicios, en el caso de que la otra parte no hubiere conocido o debido conocer la extralimitación, sin que baste el hecho de no haber ella exigido los documentos habilitantes.

194. Cuando una persona tratara el mismo asunto con el representante y otra con el representado y no pudieran coexistir ambos actos, se aplicarán las reglas de este Código sobre obligaciones de dar; pero el principal será siempre responsable para con el tercero, cuando el contrato no llegare a formalizarse.

Tratos del representante y representado con distintas personas.

195. El cometido del representante termina con la relación jurídica que le dió causa, o de la cual derive. Respecto de terceros, se juzgará concluido, cuando éstos supieron o debieron saber necesariamente que la representación se había extinguido.

Fin de la representación.

196. Las reglas de este título se aplicarán a todos los representantes, siempre que no hubiere normas especiales. Regirán subsidiariamente las del mandato.

Extensión de las reglas de este título.

Normas subsidiarias.

CAPÍTULO II

De la autorización y de la aprobación

197. Cuando la eficacia de cualquier acto jurídico dependa del asentimiento de un tercero, éste podrá declarar a cualquiera de las partes su voluntad de prestarlo o de rehusarlo.

Actos que dependen del asentimiento de un tercero.

198. El asentimiento previo podrá retractarse, manifestándolo a cualquiera de las partes antes de que el acto se realice, salvo que resulte lo contrario de la relación que le sirvió de base.

Forma de retractarlo.

La conformidad ulterior producirá efecto retroactivo al momento en que fué celebrado el acto. Será aplicable lo dispuesto en el art. 191.

Asentimiento ulterior.

Validación de actos
efectuados sin facul-
tades.

199. Llegará a ser válida la disposición de un derecho por quien no pudiese hacerlo legalmente:

- 1º Cuando lo hubiere autorizado el titular, o mediar su ratificación.
- 2º Si luego adquiriere el objeto.
- 3º Siempre que heredare al dueño, con tal que la aceptación de la herencia no fuere bajo beneficio de inventario.

En los casos de estos dos últimos incisos, cuando se hubieren realizado varios actos de disposición sobre la misma cosa y ellos no pudieren coexistir, se aplicarán las reglas de las obligaciones de dar.

Formas.

200. El asentimiento previo o ulterior no exige formas especiales; pero si fuere relativo a cualquier acto que deba celebrarse por escritura pública, será nulo cuando se otorgare sin ese requisito. Salvo estos casos, la conformidad podrá prestarse aún tácitamente, rigiendo lo dispuesto en el art. 191, último párrafo, y 192.

TÍTULO V

De la nulidad de los actos jurídicos

Las nulidades deben
surgir de la ley.

201. Sólo puede ser declarada la nulidad de un acto jurídico, en los casos establecidos por este Código.

Acto nulo y anulable:
efectos.

202. Un acto es nulo cuando la ley expresamente así lo ha declarado. Actos tales no producen efecto, aunque su nulidad no haya sido juzgada.

Los actos anulables se reputan válidos, mientras no sean anulados, y sólo se tendrán por nulos, una vez pronunciada la sentencia.

Cuando el acto es
nulo.

203. Es nulo el acto jurídico:

- 1º Cuando lo hubiere realizado un incapaz.
- 2º Si el acto o su objeto, fueran ilícitos o imposibles.
- 3º En caso de no revestir la forma prescripta.
- 4º Si, dependiendo para su validez de la forma instrumental, fuere nulo el instrumento respectivo.

- 5° Cuando el agente procediere con simulación o fraude, presumidos por la ley.
- 6° Si fuere practicado contra la prohibición general o especial de disponer, dictada por juez competente.

204. Es anulable el acto jurídico:

Cuando anulable.

- 1° Cuando el agente obrase con incapacidad accidental, como si por cualquier causa, se hallara privado de su razón.
- 2° Siempre que al celebrarse el acto, no fuere conocida la incapacidad de derecho del autor o la falta de objeto, por requerirse para ello una investigación de hecho.
- 3° Si estuviere viciado por error, dolo, violencia, fraude o simulación.
- 4° Cuando, dependiendo su validez de la forma instrumental, fuere anulable el instrumento respectivo.

205. La nulidad puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca manifiesta en el acto o demostrada en juicio. El Ministerio Público y todos los interesados tendrán derecho para alegarla.

Nulidad de oficio.

En el acto anulable no podrá procederse de oficio, y sí tan sólo a instancia de las personas designadas por la ley. El Ministerio Público lo hará cuando afectare a incapaces o menores emancipados.

206. Los actos nulos no son susceptibles de confirmación, salvo cuando fueron ejecutados por incapaces que procedan con discernimiento o en el caso del art. 203, inc. 6°.

Actos nulos inconfirmables. Confirmación de anulables. Excepciones.

- Los actos anulables pueden ser confirmados, con excepción del supuesto previsto en el art. 204, inc. 2°.

207. En los actos ejecutados por incapaces, la nulidad sólo podrá ser invocada por el agente y sus representantes o sucesores, a título universal o singular. Cuando el incapaz hubiera procedido con dolo para determinar a la otra parte, no le asistirá ese derecho, ni tampoco a las personas antes expresadas. En el caso de un menor, la mera afirmación de la mayoría de edad no se tendrá por engaño suficiente.

Actos ejecutados por incapaces.

Si mediaren vicios de la voluntad, competará alegarlos exclusivamente al damnificado.

Actos nulos o anulables por incapacidad de hecho.

208. Si el acto fuere nulo o anulable por incapacidad de hecho, la parte capaz no podrá exigir la restitución de lo entregado, ni el reembolso de los gastos, salvo si probare que aun existe en poder del incapaz lo que le hubiere dado, o que el acto rédundó en provecho manifiesto del mismo.

Efecto de la nulidad entre partes.

209. La nulidad impone a las partes la mútua restitución de cuanto hubieren recibido, en virtud o a consecuencia del acto nulo o anulado.

Las reglas del pago sin causa se aplicarán al efectuado como consecuencia de los actos previstos en este artículo.

Efecto respecto de terceros.

210. Los derechos reales y personales transmitidos a terceros sobre un inmueble, por quien llegó a ser propietario en virtud del acto nulo o anulado, quedarán sin ningún valor y podrán ser reclamados directamente del poseedor actual.

Los adquirentes podrán siempre ampararse en las reglas que protegen la buena fe en las transmisiones.

Nulidad total o parcial.

211. La nulidad de un acto jurídico puede ser total o parcial.

En los testamentos, la ineficacia de una disposición particular no afectará la validez de las otras, con tal que sean separables.

Con relación a los actos entre vivos, la nulidad parcial los invalidará totalmente, a menos que de su contexto resulte que sin esa parte también se hubieran concluido, o que el perjudicado optare por mantenerlos.

Efecto como actos ilícitos.

212. Los actos nulos o anulados, aunque no produzcan el efecto que se tuvo en mira, tendrán el que les asigne la ley, y en todo caso, el propio de los actos ilícitos o de los hechos en general, cuyas consecuencias deban ser reparadas.

Confirmación. Forma y efecto.

213. Se tendrá por confirmado un acto, cuando por otro válido, quien tuviere derecho para pedir o alegar la nulidad del primero, hiciere desaparecer los vicios, siempre que lo realizare después de cesar la incapacidad o defecto de que provenía la invalidez. No será necesario el concurso de la parte a quien favorece la confirmación.

Especies.

214. La confirmación puede ser expresa o tácita. En la primera, el instrumento, para ser válido, deberá reunir las mismas solemnidades exigidas respecto del acto que se procure subsanar y contendrá, además, mención de la subs-

tancia de éste, del vicio de que adolecía y del propósito de repararlo.

La confirmación tácita resultará del cumplimiento voluntario, total o parcial, del acto afectado por la nulidad.

215. La confirmación tendrá efecto retroactivo al día en que fueron celebrados los actos entre vivos, y en las disposiciones de última voluntad regirá desde el fallecimiento del causante. En ambos casos, no perjudicará los derechos de terceros.

Efecto retroactivo.

TITULO VI

De la extinción de las relaciones jurídicas

CAPITULO I

Disposiciones generales

216. Las relaciones jurídicas se extinguen por los hechos o por los actos que este Código determine para cada caso particular.

Modos determinados por el Código.

Cuando se trate de actos jurídicos destinados a producir tal efecto, se aplicará lo dispuesto en el título II de esta sección.

217. Las relaciones jurídicas quedarán extinguidas cuando, sin culpa de las partes, se tornaren física o legalmente imposibles. El fallecimiento les pondrá fin, siempre que se trate de derechos intransmisibles por herencia. En los demás casos, pasarán a los sucesores universales.

Imposibilidad.

218. La transacción extingue los derechos litigiosos o dudosos, conforme a las disposiciones contenidas en los arts. 1342 y siguientes.

Transacción.

CAPITULO II

De la renuncia

219. Toda persona capaz de hacer o aceptar donaciones, podrá renunciar a título gratuito, cualquier derecho que

Capacidad para renunciar.

sólo afecte su interés individual, siempre que no medie una prohibición de la ley.

Casos que no importan renuncia.

No se juzgará renuncia, la que se hiciere a cambio de una ventaja cualquiera. En este caso, regirán los preceptos sobre contratos a título oneroso.

Cuando la renuncia se efectuare con ánimo de beneficiar a otro, será donación o legado, según corresponda.

Formas.

220. La renuncia no está sujeta a formalidad alguna y puede hacerse aún tácitamente, cuando la ley no exija una declaración expresa.

No se presume.

La voluntad de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzcan a reconocerla, debe ser restrictiva.

Retractación: efecto.

221. La renuncia puede retractarse mientras no haya sido aceptada por la persona favorecida, salvo los derechos adquiridos por tercero durante el intervalo, a consecuencia de ella.

CAPÍTULO III

De la confusión

Concepto. Especies.

222. Cuando la calidad de acreedor y deudor, o el dominio y una de sus desmembraciones, se reunieren en la misma persona, quedará extinguida la obligación en el primer caso, y en el segundo, consolidado el derecho real. La confusión podrá producirse en todo o en parte.

Cesación.

223. Cesará la confusión, siempre que por un acontecimiento ulterior, se restablecieran las calidades originarias de las partes, y revivirán los derechos que en un principio correspondían a las mismas. Cuando la extinción se hubiere inscripto en el Registro, será menester un nuevo asiento para producir aquel efecto, que no podrá, sin embargo, perjudicar a terceros.

SECCION CUARTA

DEL EJERCICIO Y PRUEBA DE LOS DERECHOS

TITULO I

Del ejercicio de los derechos

224. Será siempre necesario el concurso de la autoridad, para obtener de otro un hecho o una abstención. Fuera de los casos mencionados en el presente título, queda prohibido hacerse justicia por sí mismo y usar de medios no permitidos.

Prohibición de hacerse
justicia por mano
propia.

225. No son ilícitos los actos impuestos por la propia defensa. Se tendrán por tales, los exigidos para repeler por sí o por otro, un ataque actual e ilegítimo contra la persona, los bienes o los derechos.

Excepciones.

No concurriendo los requisitos expresados, responderá el agente, salvo error excusable.

226. Sólo quedan comprendidos en el artículo anterior:

Alcance del artículo
anterior.

- 1º El apoderamiento, destrucción o deterioro de una cosa, cuando no hubiere sido posible requerir el oportuno auxilio de la autoridad, y existiere peligro de imposibilitar la realización de un derecho o de tornarla sumamente dificultosa.
- 2º Cuando en las mismas circunstancias del inciso precedente, alguien detuviere a persona sometida a una obligación, por temor a su fuga, o si venciere la resistencia opuesta a un hecho que otro debía tolerar.
- 3º El deterioro o destrucción de cosa ajena, cuando sea necesario para evitar al agente o a otro, el peligro que con ella amenace, siempre que el daño producido no esté fuera de proporción con aquél. Si el riesgo fué determinado por culpa del autor, éste deberá los daños y perjuicios.

Casos en que procede el resarcimiento.

227. Todo aquel que por error hubiere procedido en la creencia de hallarse en las condiciones de los incs. 1º y 2º del artículo precedente, deberá reparar el daño causado, aunque no existiere culpa de su parte.

El error no imputable dispensa de toda responsabilidad, aun cuando no medien las condiciones exigidas en el inc. 3º del artículo anterior.

Deberes y límites de la justicia personal.

228. La justicia personal no podrá exceder de lo que exija la exclusión del peligro. Si hubiere apoderamiento de cosa ajena, deberá inmediatamente solicitarse el embargo judicial de ella; si detención de una persona, presentarla sin demora a la autoridad competente y requerir su arresto. Cuando estos pedidos fueren desestimados o hubiere retardado en proveer, se procederá enseguida a restituir los bienes al propietario y la libertad al secuestrado.

Jactancia.

229. Si alguien, fuera de juicio, se atribuyere derecho sobre bienes ajenos, le será permitido al interesado citar en justicia al autor de la jactancia, para que entable las acciones correspondientes dentro de un término prudencial. Vencido el plazo, a petición del actor podrá el juez declarar que el jactancioso ha perdido el ejercicio de los derechos pretendidos.

Medidas conservatorias.

230. Todo titular de derechos podrá adoptar medidas conservatorias respecto de ellos, aunque se hallaren sujetos a condición o término.

Efecto de la notificación.

231. Sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en este Código, el efecto legal de la demanda se produce con su notificación. El mero hecho de presentarla será, sin embargo, suficiente para observar un término o para interrumpirlo.

Relación efectos.

procesal:

232. Trabada la litis, no será posible modificar la acción deducida, salvo acuerdo del demandado. El consentimiento de éste podrá resultar de su silencio. En caso de disconformidad, será permitido el cambio con la venia del tribunal, cuando se juzgare que no se altera la defensa de la otra parte.

Derechos litigiosos.

Pueden cederse o enajenarse los derechos litigiosos, pero esta transferencia no producirá efecto en el proceso. Sin el asentimiento del contrario, el adquirente sólo podrá intervenir en forma coadyuvante.

Cuando el actor hubiere realizado el traspaso, y la sentencia no afectare a los causahabientes conforme al art. 300, procederá contra él la falta de acción.

233. Durante el pleito, no podrán las partes innovar en el estado de la cosa o derecho litigioso. Estarán facultadas para solicitar las medidas conservatorias tendientes a impedirlo, y asegurar el efecto de la sentencia contra los terceros adquirentes, como también la anotación preventiva de la causa en el Registro.

Derechos de las partes durante el pleito.

234. Las acciones deducidas se transmiten a los herederos de las partes, aunque sean de aquellas que sólo podía intentar el causante.

Transmisión a los herederos de las acciones promovidas.

TITULO II

De la prueba

CAPITULO I

Disposiciones generales

235. Todo aquel que pretenda en juicio un derecho, deberá producir la prueba de los extremos en que entienda fundarlo; y a quien alegue que él ha cesado o que no es válido, corresponderá justificar estas circunstancias.

A quienes corresponde probar.

236. La prueba a que se refiere el artículo anterior, deberá ser producida por las partes con arreglo a las leyes procesales, por los medios que siguen:

Medios de prueba.

- 1º Instrumentos públicos.
- 2º Instrumentos privados.
- 3º Escritos emanados de la parte a quien se opongan.
lleven o no firma.
- 4º Confesión.
- 5º Testigos.
- 6º Presunciones.
- 7º Juramento.
- 8º Informes periciales.

Realizadas las probanzas, deberá el juez apreciarlas conforme a la sana crítica, y según los casos, podrá agregar a ellas su inspección ocular.

Reglas para la prueba
de los actos jurídicos.

237. En la prueba de los actos jurídicos se observarán las siguientes reglas:

- 1º Si tuvieren una forma prescripta por la ley, deberán justificarse mediante el instrumento que acredite haberla cumplido.
- 2º Cuando fuere impuesto un medio de prueba especial, no podrá utilizarse otro distinto.
- 3º Siempre que su valor excediere de quinientos pesos y no fuere exigida una forma determinada, deberán constar en instrumento privado. En este caso no será admitida la prueba de testigos.

238. Los hechos simples podrán acreditarse por todos los medios; los mixtos, sólo conforme a lo prescripto en el artículo anterior, inc. 3º.

CAPÍTULO II

De los instrumentos públicos

§ 1. — Disposiciones generales

Enumeración.

239. Son instrumentos públicos:

- 1º Las escrituras públicas.
- 2º Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos, en las condiciones determinadas por las leyes.
- 3º Las diligencias y planos de mensuras, aprobados por la autoridad administrativa o judicial, así como las copias expedidas por órden de ellas.
- 4º Las actuaciones judiciales de toda especie.
- 5º Las letras aceptadas por el Gobierno o sus delegados; los billetes o cualquier título de crédito emitido por el tesoro público, y las cuentas que se sacaren de los libros fiscales, autorizadas por el encargado de llevarlas.

- 6° Las letras de particulares entregadas en pago de impuestos, si en ellas constare que pertenecen al tesoro público.
- 7° Las inscripciones de la deuda pública, nacionales o provinciales.
- 8° Las acciones de las personas jurídicas especialmente facultadas, y con arreglo a sus estatutos.
- 9° Los billetes, libretas y cédulas emitidos por los bancos autorizados para tal fin.
- 10° Los asientos de los matrimonios efectuados en los libros parroquiales, o en los pertenecientes a los templos de comuniones no católicas, con anterioridad al primero de diciembre de 1889, así como los relativos a nacimientos y defunciones en las mismas circunstancias, ya insertos al establecerse el Registro Civil.
- 11° Los asientos de matrimonios, nacimientos y defunciones en el Registro Civil, y donde no lo hubiere, las actas de uniones celebradas ante la autoridad competente.
- 12° El instrumento privado que debiera protocolizarse en virtud de orden judicial, pero sólo a partir de la fecha en que ésta se dictó.
- 13° Las copias de los instrumentos públicos, debidamente expedidas. Siempre que ellas no coincidieren con el original, prevalecerá éste último.

240. La validez del instrumento público requiere:

Requisitos.

- 1° Que el autorizante obre en los límites de sus atribuciones en cuanto a la naturaleza del acto.
- 2° Que se extienda dentro del territorio en que el oficial deba ejercer sus funciones, salvo que el lugar fuese generalmente considerado como comprendido en aquél.
- 3° Que llenadas las formas legales, contenga las firmas del funcionario autorizante, así como las de todos los que aparezcan como parte o testigos en él. Si alguno de los cointerésados no lo subscribiere, carecerá de valor para todos.

La falta en el oficial público de las cualidades o condiciones necesarias para el desempeño del cargo, o cualquiera otra irregularidad en su nombramiento o recepción del empleo, no afectará la eficacia del acto.

Instrumentos nulos.

241. Son instrumentos nulos:

- 1º Los que el oficial público autorizó después de serle comunicada la suspensión, reemplazo o destitución del cargo, o luego de aceptada su renuncia.
- 2º Aquellos en que el autorizante, su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado, tuvieron interés personal respecto del asunto a que se refiere, salvo que se tratase de sociedades anónimas, o fueren gerentes o directores de ellas.
- 3º Los que no hubieren llenado las condiciones del art. 240.

Instrumentos anulables.

242. Serán anulables:

- 1º Si el oficial público, las partes o los testigos, los hubieran autorizado o subscripto por error, dolo o violencia.
- 2º Siempre que tuvieran enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en puntos capitales, no salvadas antes de las firmas.
- 3º En el caso de que alguno de los otorgantes los arguyese de falsos en el todo o en parte principal.

Instrumentos públicos que pueden valer como privados.

243. El instrumento autorizado por oficial incompetente, o que no tuviere las formas legales, valdrá sin embargo, como documento privado, si lo hubieren subscripto las partes, aunque no reúna los requisitos exigidos para estos últimos.

Quienes no pueden ser testigos.

244. No podrán ser testigos en los instrumentos públicos:

- 1º Los menores de edad, aunque fueren emancipados.
- 2º Los sujetos a interdicción.
- 3º Los ciegos.
- 4º Los que no supieren firmar.

- 5º Los dependientes del autorizante o de otras oficinas donde se otorgaren iguales instrumentos.
- 6º El cónyuge, y los parientes del oficial público y de las partes, dentro del cuarto grado.
- 7º Los fallidos no rehabilitados, salvo el caso de quiebra casual.
- 8º Los que por sentencia se hallaren inhabilitados para ser testigos en los instrumentos públicos.

El error común sobre la capacidad de los testigos, salva la nulidad de los instrumentos en que hubieren intervenido.

245. Los testigos de un instrumento y el funcionario que lo autorizó, no podrán contradecir, variar ni alterar su contenido, a no ser que lo hubieren subscripto por dolo o por violencia.

Personas que no pueden impugnar el acto.

246. El instrumento público hará plena fe mientras no fuere argüido de falso por acción criminal o civil, en juicio principal o en incidente, sobre la realidad de los hechos que el autorizante enunciaré como cumplidos por él o pasados en su presencia. Interpuesta tal solicitud, el juez, atendidas las circunstancias, podrá ordenar que se suspenda provisoriamente el cumplimiento del acto a que ella se refiera.

Redargución de falsedad.

247. Los jueces podrán declarar, aun sin pedido de parte, la falsedad del instrumento público presentado en juicio, siempre que ella fuere evidente.

Falsedad evidente.

Cuando se arguyere de falsedad una copia autorizada, bastará su cotejo con el original, diligencia que el juez podrá ordenar de oficio.

248. Los instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes y contra terceros:

Fe respecto de las partes y de terceros.

- 1º En cuanto a la circunstancia de haberse ejecutado el acto.
- 2º Respecto de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, y demás declaraciones contenidas en ellos.
- 3º Acerca de las enunciaciones de hechos directamente relativos al acto jurídico que forma el objeto principal.

249. El contenido de un instrumento público puede modificarse o quedar sin efecto, mediante un contradocumento.

Contradocumento.

Cuando éste fuere privado, no podrá oponerse a los sucesos a título singular. Si quien lo otorgó se hubiere concurrido, podrá el juez tenerlo en cuenta, según las circunstancias. En el caso de una contraescritura pública, será menester que su contenido se halle anotado en la matriz y en la copia que utilizó el tercero, contra quien se invoca.

Pérdida del instrumento original.

250. Cuando se probare que no existe ya el instrumento público original, pero sí copia autorizada del mismo, podrá el juez disponer, previa citación y audiencia de los interesados y del Ministerio Público, que ésta sea archivada en reemplazo de aquél.

Prueba supletoria.

251. En el caso del artículo anterior, si no hubiere copia, será lícito probar el acto jurídico por los medios que siguen, cuyo valor apreciará el juez:

- 1º Referencias contenidas en otros instrumentos públicos con respecto al desaparecido.
- 2º Constancias de los registros y archivos públicos y de libros de sentencia.
- 3º Publicaciones oficiales, o periódicos, en los cuales se hubieren transcritos o mencionado detalladamente los instrumentos o los datos que ellos contenían.

Fe dentro del territorio.

252. Los instrumentos públicos otorgados en cualquier lugar del país, harán plena fe en todo el territorio de la Nación, y producirán sus efectos sin otra formalidad que la de ser legalizados, en su caso. Aquellos que deban registrarse, lo serán de inmediato y sin más trámite.

Actos jurídicos celebrados en el extranjero.

253. Los actos jurídicos celebrados en el extranjero, relativos a inmuebles sitos en territorio de la Nación, serán válidos, siempre que constaren en instrumentos públicos debidamente legalizados, pero sólo producirán efecto una vez que se protocolicen por orden del juez competente.

§ 2. — De las escrituras públicas

Quiénes deben hacerlas y con qué requisitos.

254. Las escrituras públicas sólo pueden ser hechas por escribanos públicos u otros funcionarios autorizados, extendiéndolas en el protocolo correspondiente, que deberán llevar con los números, rúbricas y sellos, de acuerdo con la ley respectiva.

El autorizante recibirá por sí mismo las declaraciones de las partes. Será responsable de su redacción y de la exactitud del contenido, aunque fueren escritos por sus dependientes.

255. Las escrituras públicas deberán extenderse en idioma nacional. Cuando los comparecientes no supieren hablarlo, se procederá como sigue:

Caso en que las partes no conozcan el idioma nacional.

- 1º Si el notario y los testigos conocieren el lenguaje de las partes, deberá otorgarse la escritura conforme a una minuta, cuyas firmas reconocerán aquéllas ante el escribano, a menos que la hubieren subscripto en su presencia.
- 2º Cuando en el caso del inciso anterior, las partes no supieren escribir, la minuta no será necesaria.
- 3º Si el escribano o alguno de los testigos no conociere el idioma extranjero, deberá vertirse la minuta al castellano, mediante traductor público, o, donde no lo hubiere, por el experto que designe el juez. El notario dará fe de todas las circunstancias mencionadas en el presente artículo, y, en su caso, protocolizará la minuta, así como su traducción.

256. En el supuesto de que una o ambas partes fueren sordomudos o mudos, pero que supieren expresar su voluntad por escrito en forma inequívoca, la escritura se hará de acuerdo a una minuta, cuyas firmas deberán reconocer ante el notario, cuando no la hubieren subscripto en su presencia. Aquéllos, y también el sordo, deberán leer por sí mismos la escritura, y, siempre que supieren hacerlo, escribirán de puño y letra antes de las firmas, que la han leído y están conformes con ella. El escribano dará fe de las circunstancias mencionadas y protocolizará la minuta.

Otorgantes mudos, sordos o sordomudos.

257. Cuando el escribano no conociere a las partes, éstas deberán justificar su identidad con libreta de enrolamiento o cédula policial, o, en último caso, con dos testigos que aquél conozca, de lo cual dará fe, haciendo constar, además, en la escritura, el nombre y residencia de los mismos.

Justificación de la identidad.

Reglas para
intervengan
representantes.

cuando
repre-

258. En el caso de que las partes actuaran por medio de representantes, el notario procederá con arreglo a las siguientes normas:

- 1º Si fuere menester la entrega de los poderes y documentos habilitantes, expresará el cumplimiento de esta circunstancia y los agregará al protocolo.
- 2º Cuando se tratare de procuraciones generales, los transcribirá en su registro y pondrá en ellos nota de haberlo efectuado.
- 3º En el caso de que los poderes y documentos se hubieren otorgado en su oficina, o se hallaren protocolizados o transcritos en su registro, expresará este antecedente, indicando el tomo y el folio respectivos.
- 4º Si tuviere que devolver instrumentos otorgados por escribanos o funcionarios del lugar en que ejerce sus funciones, podrá limitarse a dar fe de haberlos confrontado con la matriz o el original.

Lo dispuesto en los incs. 1º y 2º, se aplicará con respecto a los documentos que los interesados le presentaren como parte integrante de sus manifestaciones.

Constancias neces-
rias. Requisitos que
deben cumplirse.

259. La escritura pública deberá expresar:

- 1º Los nombres y apellidos de las partes; si son mayores de edad, su estado civil, y cuando fueren casadas o viudas, el nombre y apellido del cónyuge, su domicilio y vecindad.
- 2º El lugar y fecha en que se firmaren, pudiendo serlo aun en día feriado.
- 3º La naturaleza y objeto del acto.
- 4º La ubicación, medidas y linderos de los inmuebles, en su caso.
- 5º Las cantidades a que se haga referencia, en letras y no en números.

El escribano deberá dar fe de que conoce a las partes, como también de que ellas le han manifestado personalmente lo que consigna la escritura. Concluida ésta, la leerá a los otorgantes en presencia de los testigos, salvando al final de la misma, de su puño y letra, antes de las firmas, lo escrito

entre líneas, las testaciones, enmiendas y raspaduras que se hubieren hecho.

La escritura será firmada en presencia del escribano, por los interesados y dos testigos, cuyos nombres y domicilios constarán en ella. Si alguna de las partes no supiere o no pudiere firmar, lo hará en su nombre otra persona, que no sea ninguno de los testigos, debiendo el autorizante expresar la causa del impedimento.

260. Si las partes decidieren después de firmada la escritura, pero antes de que lo hubiere hecho el notario, corregirla o hacerle agregados, éstos sólo valdrán si fueren extendidos a continuación por aquél, leídos en presencia de los testigos, subscriptos por todos los comparecientes y autorizados por el escribano.

Agregados posteriores a la firma de las partes y previos a la del escribano.

261. Sin perjuicio de lo dispuesto en el § 1 de este capítulo, la escritura será nula:

Causales de nulidad.

1º Si faltara alguno de los siguientes requisitos:

- a) La fecha y lugar en que fué otorgada.
- b) Los nombres de las partes, de los representantes, en su caso, y de los testigos instrumentales y de conocimiento.
- c) El objeto y la naturaleza del acto.
- d) La mención, en su caso, de que los poderes y documentos habilitantes se encuentran en el protocolo del notario que la autoriza.
- e) La atestación del notario de que conoce a las partes y, en su caso, el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 257; de haber recibido en persona las declaraciones de los otorgantes, y presenciado las entregas que según la escritura se hubieren hecho en el acto; como asimismo de que ha leído la escritura a los interesados, ante los testigos instrumentales.
- f) La firma de las partes en la forma que prescribe el art. 259, con indicación de la causa del impedimento en el caso de firma a ruego.
- g) La firma del escribano.

2º Si en ella no constare que se han cumplido las exigencias establecidas en el art. 255.

3º Cuando alguno de los testigos fuere incapaz.

4º Si no se hallare en la página del protocolo que corresponde según el orden cronológico.

La inobservancia de otras formalidades no anulará la escritura. Los escribanos y funcionarios que la autorizaren, podrán ser penados por sus omisiones, con una multa que no excederá de quinientos pesos.

Copias. Nuevos testimonios.

262. El escribano deberá dar copia autorizada de la escritura a las partes que la solicitaren.

Cuando se pidiere otro testimonio por haber desaparecido el primero, lo entregará haciendo constar en él esa circunstancia. Sin embargo, cuando alguno de los otorgantes hubiere contraído en la escritura, obligación de dar o hacer, no podrá expedirse sin orden judicial, citando previamente a los interesados, quienes tendrán derecho para confrontar la copia con la matriz. En caso de hallarse éstos ausentes, el juez estará facultado para designar un oficial público a ese efecto.

Protocolización.

263. La protocolización de documentos exigida por la ley, se hará en virtud de orden judicial. El notario deberá agregar el instrumento a su protocolo, mediante un acta que sólo contenga los datos necesarios para identificarlo, y entregar testimonio a los interesados que lo pidieren.

CAPITULO III

De los instrumentos privados

§ 1. — Disposiciones generales

Instrumentos privados.
Necesidad de la firma.

264. Los instrumentos privados podrán otorgarse en cualquier día, y ser redactados en la forma e idioma que las partes juzguen conveniente, pero la firma de ellos será requisito indispensable para su validez, sin que sea permitido sustituirla por signos, ni por las iniciales de los nombres o apellidos.

Instrumentos que contienen convenciones bilaterales.

265. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los instrumentos que contengan convenciones bilaterales, deberán redactarse en tantos ejemplares como partes inter-

vengan con interés distinto, expresándose en cada uno, el número de los subscriptos.

En tal caso, no importará que falte la firma del poseedor del documento, siempre que figuren las de los otros obligados.

A falta de los requisitos que enuncia este artículo, el instrumento sólo podrá valer, en su caso, como principio de prueba por escrito.

266. La omisión de las exigencias contenidas en el artículo precedente, no perjudica la validez del acto:

Casos en que puede prescindirse del ejemplar múltiple.

- 1º Cuando uno de los otorgantes haya cumplido todas sus obligaciones al redactarse el instrumento o antes de ello.
- 2º Siempre que por otras pruebas se demuestre que el acto fué concluído de una manera definitiva.
- 3º Si, de común acuerdo, las partes depositaron el instrumento en poder de un escribano, o de otra persona encargada de conservarlo.
- 4º Cuando los otorgantes cumplieron con posterioridad, en todo o en parte, las convenciones contenidas en el documento. La ejecución por uno de ellos sin que concurra o intervenga el otro, no impide que el vicio subsista respecto del último.
- 5º Si quien alegare la falta del requisito, presenta su respectivo ejemplar.

267. Los instrumentos privados podrán firmarse en blanco antes de redactarlos, y en tal caso, harán fe, una vez llenados y reconocidas las firmas.

Firma en blanco.

El signatario podrá, sin embargo, oponerse al contenido del documento, probando que no tuvo la intención de manifestar lo que en él se consigna, o de contraer las obligaciones que resulten del mismo. No bastará el dicho de los testigos, a menos que existiere principio de prueba por escrito.

La nulidad que el juez decretare, no producirá efecto contra terceros que hubieren contratado de buena fe.

268. Substraído fraudulentamente el documento firmado en blanco, a la persona encargada de guardarlo, y llenado por un tercero contra la voluntad de aquélla, será lícito

Substracción fraudulenta de un documento en blanco.

probar ambas circunstancias por medio de testigos. En tal caso, no podrá oponerse el contenido del instrumento al notario, aunque los terceros fueren de buena fe.

Reconocimiento de la firma.

269. Toda persona contra quien se presente en juicio un instrumento privado subscripto por ella, deberá declarar si la firma es o no suya.

Los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran aquella circunstancia.

En caso de que la firma no fuere reconocida, se ordenará el cotejo de la letra, sin perjuicio de los demás medios de prueba para acreditar la autenticidad.

El reconocimiento judicial de la firma importa el del cuerpo del instrumento.

Cuando no podrá exigirse el reconocimiento.

270. No podrá exigirse que sea reconocido el documento subscripto por signos o iniciales, como tampoco aquellos cuyos firmantes no fueren capaces, aunque lo hubieren sido al subscribirlos. En el primer caso, será lícito reconocerlos voluntariamente.

Valor del instrumento reconocido judicialmente.

271. El documento reconocido o declarado auténtico judicialmente, tiene el mismo valor que el instrumento público, tanto entre quienes lo subscribieren y sus sucesores, como en cuanto a terceros.

La prueba que resulte del reconocimiento es indivisible y reviste igual fuerza con respecto a sus firmantes y a quienes lo presentaron.

Fecha cierta.

272. Los instrumentos privados, aun reconocidos, no prueban contra los terceros o los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos. Su fecha cierta será respecto de dichas personas:

- 1º La de su exhibición en juicio, o en una repartición pública, si allí quedare archivado.
- 2º La de su reconocimiento ante un notario y dos testigos que lo firmaren.
- 3º La de su transcripción en cualquier registro público.
- 4º La del fallecimiento, o aquella en que sobrevino imposibilidad física para escribir, a cualquiera de sus firmantes o a la persona que lo extendió.

Notas escritas o firmadas por el acreedor.

273. Las notas escritas o firmadas por el acreedor en el margen, dorso, o a continuación de un documento priva-

do en poder del deudor, probarán para liberar a éste, mas no para establecer una obligación adicional.

Lo mismo se entenderá con respecto a las notas escritas o firmadas en igual forma por el acreedor, en instrumento existente en su poder.

En ambos casos, las notas canceladas o inutilizadas carecerán de mérito probatorio.

274. El escrito de reconocimiento o de renovación, hará fe contra el deudor, sus sucesores y causahabientes, a menos que éstos probaren con el documento original, que hubo error o exceso en aquéllos.

Fe del escrito de reconocimiento o renovación.

275. Los documentos subscriptos por analfabetos con sus impresiones digitales, tendrán los mismos efectos que los instrumentos firmados.

Valor de las impresiones digitales de analfabetos.

§ 2. — De las cartas y otras pruebas escritas

276. Las cartas serán admitidas como prueba en juicio :

Cartas que valen como prueba.

- 1º Cuando, presentadas por su destinatario, constituyeren un medio de prueba dentro del pleito en que aquél tuviere interés.
- 2º Si el tercero a quien fueron dirigidas, prestare su consentimiento para que se acompañen, no obstante ser ajeno al litigio.
- 3º Cuando el contenido de la carta deba considerarse común al tenedor de la misma y al destinatario, o si aquél la tuviere por entrega de éste.
- 4º Siempre que hubieran sido presentadas por el destinatario o un tercero, en otro juicio donde fuera parte el litigante que pretenda valerse de ellas.

Con excepción de los casos mencionados en los incs. 3º y 4º, la negativa del destinatario para autorizar el uso de las cartas, no será suplida en forma alguna.

277. La carta, que en virtud de su contenido sea considerada confidencial por el juez, no podrá utilizarse por un tercero en juicio, ni con el asentimiento del destinatario. Será permitido rechazar de plano, el documento que no reuna los requisitos necesarios para su admisión.

Cartas confidenciales.

Valor probatorio de las cartas. Misivas a terceros.

278. El valor probatorio de las cartas no dependerá de formalidad alguna, pudiendo admitírselas aunque carezcan de firma o sólo estén subscriptas por signos o iniciales. Las dirigidas a terceros, aunque se refieran a obligaciones, no serán consideradas como instrumentos sujetos a las reglas de los arts. 269 última parte y 271 primera parte, y su mérito se juzgará conforme a lo dispuesto en el presente párrafo.

Mérito de los libros de comercio.

279. Los libros de los comerciantes probarán contra ellos, pero la persona que los invoque también deberá aceptarlos, aun cuando le perjudiquen. No bastarán por sí solos, para demostrar los suministros efectuados a quienes no ejerzan la profesión mercantil.

Libros o registros domésticos.

280. Los no comerciantes podrán excusarse de presentar sus libros o registros domésticos, a menos que fueren comunes a otras personas. Ellos no probarán en su favor frente a terceros, pero será lícito a éstos invocarlos, sin perjuicio de que su dueño demuestre lo contrario cuando enuncien un pago formalmente, o en el caso de que consignen de un modo expreso cualquier obligación contraída.

Quien los adujere como prueba, también deberá aceptarlos en la parte que le perjudique. El juez podrá, según las circunstancias, considerar como presunciones los asientos que favorezcan al dueño.

Anotaciones domésticas en hojas sueltas.

281. Las anotaciones domésticas en hojas sueltas, escritas o firmadas por su tenedor, podrán considerarse como prueba en los casos del artículo precedente.

Valor probatorio de los telegramas.

282. Los telegramas sólo tendrán el valor probatorio de los escritos privados, cuando el original existente en la oficina en que se despachó, contuviere la firma. Se presume que la copia entregada al destinatario es conforme al original.

CAPITULO IV

De la confesión

Requisitos.

283. Cuando alguien reconociere en forma expresa ante juez, aunque fuere incompetente, hechos relativos a una causa, tal confesión producirá plena prueba en su contra, siempre que concurran los extremos siguientes:

- 1º Capacidad de disponer en quien la preste.
- 2º Que se efectúe personalmente, o por medio de mandatario con poder especial.
- 3º Que se trate de actos o hechos susceptibles de reconocimiento en juicio.

284. No podrán ser objeto de confesión:

Confesiones inadmisibles.

1º Los hechos o actos, cuya prueba no fuere permitida por la ley.

2º Aquellos para los cuales estuviere excluido este medio.

3º Los que no revistan la forma exclusivamente requerida.

4º Cuando el reconocimiento pueda comprometer derechos no susceptibles de renuncia o transacción.

285. Los representantes de personas jurídicas, de incapaces, y los mandatarios de todo género, podrán reconocer los hechos personalmente ejecutados en ese carácter, si ejercieren tales funciones en el acto de ser examinados.

Reconocimiento de representantes.

286. Cuando un litigante citado para su interrogatorio, no compareciere o no contestare categóricamente a las preguntas del juez, podrá ser declarado confeso en la sentencia, respecto de los hechos personales que constaren del cuestionario. Será permitido igualmente, considerar que su actitud importa principio de prueba por escrito.

Confesión ficta.

287. La confesión judicial es indivisible. Se la tendrá por irrevocable, excepto cuando fuere impugnada por error, dolo o violencia.

Indivisibilidad.

288. La confesión verbal fuera de juicio no producirá efecto, salvo el caso de actos jurídicos que puedan ser probados por testigos; la escrita será apreciada por el juez según su contenido, dentro de las reglas sobre la prueba.

Valor de la confesión extrajudicial.

CAPITULO V

De los testigos

289. La prueba de testigos no será admitida:

Prueba de testigos inadmisibles.

- 1º Cuando el importe del acto exceda de la tasa legal, aunque medie conformidad de los litigantes, o el actor reduzca sus pretensiones a ese límite.

- 2° Si la suma reclamada fuere parte o saldo de cantidad superior a quinientos pesos.
- 3° Siempre que en un mismo juicio se acumularen varias demandas por actos que no consten por escrito, cuyo valor exceda de la tasa, a no ser que los derechos provengan de distintas personas, en virtud de sucesión universal o singular.
- 4° En el caso de ser invocada contra el tenor de un instrumento público o privado, o como complemento de éste, o bien para demostrar lo que pudo decirse antes, al tiempo o después de otorgarse aquéllos, sea cual fuere el valor de la operación.

Casos en que se admite toda clase de prueba.

290. Cuando se trate de actos jurídicos que no tuvieron forma especial ordenada por la ley, se admitirá toda clase de prueba, cualquiera sea su monto, pero sólo en los supuestos siguientes:

- 1° Si hubiere imposibilidad para obtener la prueba escrita. Se juzgará que la hay en el depósito necesario, o cuando se tratare de obligaciones contraídas por incidentes imprevistos, en que no hubiere sido posible llenar aquella formalidad.
- 2° Siempre que existiere principio de prueba por escrito. Considérase tal, cualquier documento emanado del adversario, su autor o su representante, que haga verosímil el hecho litigioso.
- 3° En caso de versar el asunto sobre incapacidad accidental o no conocida de una de las partes, o sobre los vicios de error, dolo, violencia, fraude, simulación del acto, o falsedad del instrumento público o privado en que constare; como también respecto de la ilicitud de aquél.
- 4° Siempre que cualquiera de los interesados hubiere recibido alguna prestación en virtud del contrato y se negara a cumplirlo.
- 5° Cuando en los actos entre vivos, una de las partes hubiere perdido el instrumento privado que lo acreditaba, o se destruyere por caso fortuito o fuerza mayor.

291. El cónyuge de una de las partes, aun separado por sentencia, los consanguíneos y los afines en línea directa, no podrán ser obligados a declarar como testigos, salvo que se tratare de causas relativas al nacimiento o muerte de sus deudos, o de los supuestos previstos en este Código.

Quiénes no pueden ser citados a declarar.

CAPITULO VI

De los otros medios de prueba

292. Para que las presunciones sean admisibles, el hecho de que se infieran debe estar legalmente probado. Las establecidas por la ley dispensarán de otra prueba a los beneficiados con ellas. Podrán, sin embargo, ser destruidas por demostración contraria, si ello no estuviere prohibido. o cuando en virtud de las mismas, se anulen ciertos actos o se impida promover determinadas acciones.

Presunciones admisibles. Valor de las presunciones legales.

293. Las presunciones sólo podrán constituir medio de prueba, cuando estuviere autorizada la testimonial, y siempre que fueren graves, precisas, concordantes y directamente deducidas del hecho en que se funden.

Cuando pueden constituir medio de prueba.

294. Los jueces no podrán, de oficio ni a instancia de parte, librar la decisión de la causa al juramento de los litigantes.

Prohibición del juramento decisorio.

295. Cuando la sentencia hubiere reconocido derecho al valor de un objeto o al resarcimiento de daños y perjuicios, y, en uno y otro caso, el monto no llegare a establecerse por otro medio, podrá de oficio deferirse al juramento del vencedor, dentro de una cantidad máxima que fijará el juez. No será permitido atribuir dicho juramento al adversario.

Juramento del vencedor.

296. Es aplicable al juramento lo dispuesto en el art. 283, incs. 1º y 2º.

Reglas aplicables al juramento.

297. Si los hechos o circunstancias referentes al litigio fueren susceptibles de examen material, el juez podrá realizarlo de oficio o a requerimiento de parte.

Inspección ocular.

298. Siempre que la apreciación de los hechos controvertidos o las circunstancias del pleito exigieren, para ser verificados o apreciados, conocimientos científicos, artísti-

Prueba pericial.

cos o prácticos, procederá la prueba pericial. El juez podrá apartarse de sus conclusiones, fundando las propias.

TÍTULO III

De la cosa juzgada

Efecto de la sentencia firme.

299. La sentencia firme resuelve definitivamente las relaciones controvertidas en el juicio. Produce efecto a favor o en contra de las partes y sus herederos, sin que la misma cuestión pueda luego ser renovada.

Contra quienes vale también la sentencia firme.

300. La sentencia valdrá igualmente respecto de los sucesores particulares, cuyo título hubiere adquirido eficacia contra terceros después de iniciada la demanda, así como para quienes, en igual caso, se tornaren detentadores de la cosa litigiosa, todo sin perjuicio de las reglas que amparan la buena fe.

Sentencias constitutivas de derechos.

301. Las sentencias constitutivas de derechos, producen su efecto también con relación a terceros.

Acción revocatoria.

302. Cuando hubiere connivencia fraudulenta entre las partes, los terceros perjudicados podrán ejercer la acción revocatoria.

Laudos arbitrales.

303. Las disposiciones que anteceden, se aplicarán a los laudos arbitrales, salvo la contenida en el art. 301.

SECCION QUINTA

DE LA PRESCRIPCION

TÍTULO I

Disposiciones generales

Quienes pueden alegar la prescripción.

304. Todo aquel a quien se le exigiere que realice un hecho o que se abstenga de efectuarlo, podrá alegar la prescripción con arreglo a las normas del presente título.

305. Los derechos que en virtud de la ley o del acto jurídico constitutivo, sólo existan por tiempo determinado o deban ser ejercidos dentro de él, no están sujetos a prescribir. Caducan por el vencimiento del plazo y les son aplicables la reglas sobre interrupción.

Caducidad.

306. La prescripción deberá computarse desde que el derecho se tornare exigible, y para las omisiones, desde que el obligado realizó el acto. En consecuencia, comenzará a correr:

Desde cuando debe computarse el tiempo.

- 1º Para las acciones de garantía o saneamiento, a partir de la evicción, o una vez conocido el vicio redhibitorio.
- 2º Respecto de los derechos sujetos a condición o término, desde el cumplimiento de aquélla o de éste.
- 3º En cuanto a las rendiciones de cuentas, desde el día en que los obligados finalizaron su cometido. En las concernientes al cobro del saldo, cuando hubiere reconocimiento del mismo o ejecutoria judicial.
- 4º En las obligaciones que devengaren intereses o renta, la del capital correrá desde el último pago de aquéllos.
- 5º Para la restitución de cosas gravadas con usufructo, uso, prenda o anticresis, a contar del día en que tales derechos se extinguieron, o del pago de los créditos por ellos garantizados.
- 6º Cuando dependiere de una acción de nulidad, a partir del momento de estar aquélla expedita.
- 7º Siempre que fuere necesaria una intimación previa, desde el momento en que ella pudo realizarse, y si aquélla fijare plazo, una vez vencido éste.

307. Será lícito a las partes invocar la prescripción en cualquier estado de la causa, hasta la sentencia definitiva; pero ante los tribunales superiores, sólo podrá oponerse cuando resultare de pruebas aportadas en primera instancia. Al juez no le será permitido suplirla de oficio.

Cuándo y cómo debe invocarse la prescripción.

308. No es dado renunciar a una prescripción futura, ni convenir términos distintos de los legales. La ya cumpli-

Convenciones prohibidas. Renuncia de la prescripción.

da es susceptible de renuncia expresa o tácita, por las personas capaces de administrar, o por sus representantes con facultad de libre gestión.

Los acreedores de quienes hubieren renunciado, podrán, sin embargo, oponer la prescripción.

Bienes del dominio
privado de la Nación.
provincias o municipalidades.

309. La prescripción corre a favor y en contra de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, cuando ellas actuaren como personas jurídicas.

TÍTULO II

De la suspensión

Incapaces o ausentes
sin representante legal.

310. Respecto del incapaz o del ausente, declarado o no, que se encontrare sin representante legal, la prescripción sólo se cumplirá después de los seis meses ulteriores a la adquisición de la capacidad o al nombramiento de aquél.

Acciones a favor o en
contra de una sucesión.

311. Las acciones a favor o en contra de una sucesión, sólo prescribirán seis meses después de haber sido declarada en concurso o de producirse la aceptación del heredero. Igual término se observará cuando aquélla, para estar en juicio, necesitare un representante. El plazo correrá desde el nombramiento de éste.

Casos de suspensión.

312. El curso de la prescripción quedará suspendido:

- 1º Entre esposos, durante el matrimonio, aunque estén separados judicialmente. El mismo principio se aplicará cuando la acción de la mujer durante la unión conyugal, hubiere de recaer sobre los bienes del marido por garantía, resarcimiento u otra causa.
- 2º Entre los incapaces y sus respectivos representantes, mientras éstos desempeñaren su cometido.
- 3º Entre la sucesión y el heredero beneficiario. El término legal no se suspende durante la indivisión hereditaria, a favor del aceptante puro y simple, para el ejercicio de sus derechos contra la masa.
- 4º Cuando así lo resolviera el juez con respecto al acreedor o propietario que, en virtud de dificultades de hecho, no hubiere podido ejercer una acción y la intentare inmediatamente de cesar aquéllas.

313. La prescripción corre a favor y en contra de los bienes del concursado. Bienes del concursado.

314. La suspensión de la prescripción sólo podrá ser invocada a favor o en contra de aquéllos a beneficio o en perjuicio de quienes estuviere instituida, y no por sus cointeresados o contra los mismos. Quedan exceptuadas las obligaciones indivisibles. Quienes pueden invocar la suspensión.

315. El tiempo de la suspensión no se contará para prescribir, pero será computado el ulterior, lo mismo que el precedente. Cómputo del tiempo.

TITULO III

De la interrupción

316. La prescripción se interrumpe por demanda, aunque sea interpuesta ante juez incompetente, o nula por defecto de forma, o porque el actor no hubiere tenido capacidad para promoverla. Casos de interrupción.

Quedan comprendidas en el presente artículo:

- 1º La intimación de pago en el juicio ejecutivo.
- 2º La presentación del crédito en un concurso.
- 3º La compensación alegada judicialmente.

317. El otorgamiento de un compromiso arbitral interrumpe la prescripción. Cuando no designare árbitros, o por cualquier circunstancia fuere menester nombrarlos, o si la jurisdicción arbitral sólo pudiera actuar, después de cumplida una condición, bastará que el interesado haga cuanto de él dependa para la marcha del procedimiento. Compromiso arbitral.

318. Se tendrá por no sucedida la interrupción: Interrupción no computable.

- 1º En cuanto a la producida por demanda, siempre que la instancia hubiere terminado por desistimiento del actor, perención, o sentencia definitiva absolutoria.
- 2º Por lo que se refiere a la derivada de la intimación de pago, una vez extinguidos los efectos de la litis pendencia.
- 3º Para la que resultó de presentar el crédito en un concurso, cuando éste hubiere terminado.

4º En cuanto a la motivada por compensación, al finalizar el pleito en que ella se opuso.

Cuando la sentencia no hubiere resuelto sobre el fondo del asunto, se juzgará interrumpida la prescripción por la demanda judicial, siempre que la ulterior gestión fuere intentada dentro de los seis meses, a contar del fallo.

A quienes aprovecha la interrupción por demanda.

319. La interrupción causada por demanda sólo aprovecha al actor y a sus causahabientes.

Reconocimiento del derecho.

320. La prescripción se interrumpe por las entregas a cuenta, o el pago de intereses, o la constitución de garantías, o de cualquier otra manera que una persona reconozca el derecho que se pretende.

Efecto de la interrupción.

321. Interrumpida la prescripción, no se tendrá en cuenta el tiempo corrido con anterioridad al hecho que la determinara. Para que proceda aquélla, será menester el transcurso de un nuevo término.

TÍTULO IV

Del tiempo de la prescripción

Inacción del titular: juramento prohibido.

322. La prescripción se produce por la inacción del titular del derecho durante el término legal.

No será permitido deferir al juramento del obligado, la prueba de que el derecho no se ha extinguido.

Acciones imprescriptibles.

323. No prescriben:

- 1º La acción del ausente reaparecido, para que se le restituyan sus bienes.
- 2º Las relativas a derechos sobre cosas que no están en el comercio, y para las del dominio público, mientras no hayan sido desafectadas.
- 3º La facultad de impugnar un acto nulo.
- 4º Las acciones inherentes a los derechos de familia.
- 5º Las acciones reales derivadas del dominio, salvo en caso de oponerse la usucapión.
- 6º La negatoria de servidumbre prediales, que no pueden adquirirse por prescripción.
- 7º La de partición de bienes hereditarios, en condominio o comunidad, mientras se encuentren indivisos.

- 8º La de exigir el deslinde y también el levantamiento de muros o cercas divisorios.
- 9º Las tendientes a obtener el acceso a la vía pública para un fundo encerrado, o la construcción de un acueducto.
- 10º La separación de patrimonios, en cuanto a los inmuebles que permanecieren en poder de los herederos.

324. Prescriben por diez años:**Prescripción decenal.**

- 1º Las acciones de los incapaces contra sus representantes, por las cuentas de las gestiones respectivas, y recíprocamente. El plazo corre desde el día del fallecimiento del representado, o de la fecha en que obtuvo su capacidad, y no se interrumpirá por el acuerdo entre las partes, producido antes de rendirse dichas cuentas.
- 2º La derivada del derecho reconocido por sentencia firme, aunque por sí mismo estuviere sujeto a un plazo más corto. Esta regla se aplicará a las transacciones y a los créditos verificados dentro de un curso.
- 3º La del usufructuario para entrar en el goce de su derecho.
- 4º Todas las acciones que no tengan fijado otro término expreso en la ley.

325. Prescribe por cinco años la obligación de pagar los atrasos:**Acciones que prescriben a los cinco años.**

- 1º De pensiones alimenticias.
- 2º De arrendamientos o alquileres.
- 3º De todo lo que, no siendo capital, deba pagarse por años o plazos periódicos más cortos.

326. Prescribe por cuatro años, la acción de los herederos para reducir la parte asignada a uno de ellos, cuando éste hubiere recibido un exceso respecto de lo disponible, en la división que practicare el ascendiente.**Prescripción de cuatro años.****327. Prescriben por dos años:****Prescripción bienal.**

- 1º Las acciones para obtener la nulidad de los actos jurídicos por error, dolo, violencia o falsa causa, con-

- tados desde que cesó la fuerza o la intimidación, o desde que fueron conocidos los demás vicios;
- 2º Las emergentes de obligaciones sujetas a venia, o contraídas por incapaces, o por menores emancipados, violando lo dispuesto en los arts. 560 y 561. En los dos primeros casos, el término será computado desde el día en que pudo reclamarse personalmente la medida, y en el tercero, desde que se cumplieron los veintiún años.
- 3º La derivada de honorarios o derechos a favor de los árbitros, conjueces, abogados, procuradores y toda clase de peritos. El plazo se computará desde que feneció el pleito por sentencia o transacción, o cesaron los poderes del procurador, o que el abogado terminó su ministerio, o el experto presentó su pericia.
- 4º La de los escribanos, por el cobro de los derechos que les correspondan en los instrumentos que autorizaren, corriendo el tiempo a partir de la fecha de los mismos.
- 5º La acción de los agentes de negocios por sus honorarios o comisiones, desde que los devengaron.
- 6º La concedida a los médicos, cirujanos, boticarios, parteros y dentistas, por sus visitas, asistencia, operaciones o medicamentos, contados desde los actos que crearon la deuda. Pero cuando se tratare de asistencia continuada, la prescripción correrá desde el treinta y uno de diciembre de cada año, para el respectivo período.
- 7º La de los agrimensores, arquitectos y todos los que desempeñen profesiones liberales por sus honorarios. El tiempo se computará desde la terminación del trabajo.

Acciones que prescriben al año.

328. Prescriben por un año:

- 1º La acción revocatoria de los acreedores en caso de fraude, desde que el acto se realizó o el damnificado tuvo conocimiento del hecho.
- 2º La tendiente a dejar sin efecto una donación o legado por causa de ingratitud, corriendo el término

desde que el acto se cometió, o llegó a conocimiento del autor de la liberalidad o de sus herederos.

- 3º La, de los hoteleros, fonderos, dueños de pensión, sanatorios u otros establecimientos análogos, por la comida, alojamiento y cuidados médicos que suministraron, así como por los gastos derivados.
- 4º La correspondiente a los institutos de enseñanza o aprendizaje, por el precio de la instrucción, internado y gastos correlativos.
- 5º La de criados, domésticos, enfermeros, obreros industriales o manuales, jornaleros, y en general, cuantos prestan servicios bajo la dirección de otro, por el importe de sus salarios o trabajos, ajustados por tarea, anualmente o por menos tiempo.
- 6º La de resarcimiento en virtud de los actos ilícitos. Cuando se hubiere promovido la acción criminal en los casos del art. 382 del presente Código, sólo se computará el término después de la sentencia, salvo lo dispuesto en el mismo para el caso de muerte del acusado.
- 7º Las acciones posesorias.

329. Prescribe por seis meses la acción del comprador para rescindir el contrato, o ser indemnizado por la carga o servidumbre no aparente que se omitió mencionar.

Prescripción de seis meses.

330. Prescriben por tres meses la acción redhibitoria y la destinada a obtener rebaja de precio por el vicio oculto.

Prescripción de tres meses.

331. La prescripción en los casos de los incs. 4º, 5º y 6º del art. 327 y 3º, 4º y 5º del 328 correrá, no obstante proseguir los servicios o suministros, salvo que fuere interrumpida.

Prescripción que corre no obstante proseguir los servicios.

332. Cumplida la prescripción extintiva, la persona obligada a realizar un hecho podrá rehusarse a ello, y la que debía abstenerse quedará libre para ejecutarlo.

Efecto de la prescripción extintiva.

No procede la repetición de lo entregado en cumplimiento de un derecho prescripto, aunque esta defensa no hubiere sido opuesta o el pagador ignorase el hecho. Tampoco será permitido anular por tal causa, un reconocimiento o la constitución de cualquier garantía.

LIBRO SEGUNDO

DE LAS RELACIONES DE FAMILIA

SECCION PRIMERA

DEL MATRIMONIO

TITULO I

Régimen de las personas en el matrimonio

CAPITULO I

Disposiciones generales

Concepto del matrimonio.

333. Este Código reconoce en la familia legítima la base primordial de la sociedad, y en el matrimonio la fuente de aquélla.

Carácter de las leyes que rigen la familia.

Las leyes que rigen estas relaciones son de orden público, sujetas a lo dispuesto por los arts. 10 y 12.

Jurisdicción Civil. Ministerio Público.

334. Todas las causas referentes al matrimonio corresponden a la jurisdicción civil. El Ministerio Público será parte necesaria en ellas.

Leyes aplicables a la nulidad.

335. En las cuestiones sobre nulidad de matrimonios celebrados antes del primero de diciembre de 1889, se aplicarán las reglas de este Código, siempre que se alegare cualquier impedimento; mas cuando sólo fueren defectos de forma, los cánones y ritos de la religión a que pertenecieren los contrayentes. Si uno de éstos fuere católico y cristiano disidente el otro, se estará a lo dispuesto en los arts. 180 y 181 del Código Civil, que rigieron hasta la fecha indicada.

336. El domicilio de los cónyuges determina la competencia de los jueces. Si por abandono, ausencia u otro motivo análogo, uno de los esposos dejare de residir en él, regirá el último domicilio común. Cuando después de la separación judicial, cualquiera de los consortes hubiera constituido uno nuevo, será competente el juez del domicilio de la parte demandada.

Competencia.

337. La aplicación de las leyes nacionales y extranjeras con referencia al matrimonio, se ajustará a las reglas siguientes:

Leyes aplicables.

- | | |
|---|---|
| 1º La eficacia del acto, no concurriendo ninguno de los impedimentos previstos en los incs. 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del art. 339, será juzgada por la ley del lugar de la celebración, aunque los contrayentes hubieren abandonado su domicilio para substraerse a sus preceptos (1). | a) Validez del acto. |
| 2º Los derechos y deberes de los cónyuges, serán regidos por la ley del domicilio del marido. | b) Derechos y obligaciones de los cónyuges. |
| 3º La validez y efecto de las convenciones matrimoniales otorgadas en el extranjero, se juzgarán según lo dispuesto en el art. 153. | c) Convenciones matrimoniales otorgadas en el extranjero. |
| 4º Los bienes de los cónyuges se registrarán por las siguientes normas: | d) Bienes. |
- a) Los muebles, por lo que determine la convención matrimonial, y, en defecto de ella, por la ley del domicilio de los cónyuges. Si éste se mudare, la del anterior gobernará los adquiridos hasta la fecha del cambio; las del nuevo, los habidos con posterioridad.
 - b) Los inmuebles, por la ley del lugar de su situación.

(1) En el caso de admitirse el divorcio absoluto, habría que agregar a continuación de este inciso, el siguiente:
 "2º La disolución del vínculo para las uniones celebradas en "el país, sólo podrá admitirse en virtud de las causales que "autoriza el presente Código".

- c) Los muebles que tuvieran situación permanente en el territorio argentino, por las leyes de este Código.

Promesa de matrimonio.

338. No habrá acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio.

CAPITULO II

De los impedimentos

Enumeración.

339. Son impedimentos para el matrimonio:

- 1º La consanguinidad entre ascendientes y descendientes, sean legítimos o ilegítimos.
- 2º La consanguinidad entre hermanos o medios hermanos legítimos o ilegítimos.
- 3º La afinidad en línea recta.
- 4º No tener la mujer dieciséis años cumplidos y el hombre dieciocho.
- 5º El matrimonio anterior, mientras subsista.
- 6º Haber sido autor voluntario o cómplice en el homicidio del cónyuge de uno de los contrayentes.
- 7º La interdicción por insania o sordomudez.
- 8º El estado de perturbación enfermiza del espíritu, excluyente del discernimiento o de la voluntad, a menos de ser transitorio.
- 9º La embriaguez consuetudinaria y el uso indebido y habitual de tóxicos enervantes. (1)

Menores. Venia necesaria.

340. Los menores que hubieren cumplido la edad exigida por el inc. 4º del precedente artículo, no podrán casarse sin el consentimiento del padre legítimo, o del natural que los hubiere reconocido, o sin el de la madre a falta del

(1) En el caso de admitirse el divorcio absoluto, habría que agregar el siguiente inciso:

“10º El hallarse comprendido en alguno de los casos del “art. 385”.

padre, o, en defecto de ambos, sin el del tutor, y en último término, sin la venia judicial.

341. Cuando los menores hubieren contraído matrimonio sin la venia requerida, no se les entregará los bienes, ni la administración de ellos hasta la mayor edad. La falta de aquel extremo no podrá ser subsanada.

Matrimonio contraído
sin venia.

El juez fijará, según las circunstancias, la cuota alimenticia que deba darse al menor, la cual se tomará de sus rentas líquidas, o del capital en caso necesario.

CAPITULO III

De las diligencias previas

342. Quienes intentaren contraer matrimonio, deberán manifestar verbalmente ese propósito, ante el oficial público encargado del Registro Civil del domicilio de cualquiera de las partes. Los futuros esposos presentarán en el mismo acto:

Declaración ante el
oficial público. Re-
quisitos.

- 1º Testimonio de las respectivas partidas de nacimiento.
- 2º Si uno o ambos fueren menores, la declaración auténtica de las personas cuyo consentimiento se exija para contraer matrimonio, a no ser que, presentes en el acto, lo expresaren verbalmente. Si hubiere venia judicial, se acompañará copia certificada del auto correspondiente.
- 3º Copia de la sentencia firme que anuló o disolvió el matrimonio precedente, y, en su caso, el instrumento que acredite la muerte del cónyuge anterior.

Los comparecientes acreditarán por medio de dos testigos, su identidad y habilidad para contraer matrimonio.

343. Se labrará un acta con la declaración de los futuros esposos, que firmarán éstos, el oficial público y los testigos, así como las personas que prestaren su consentimiento en el caso del inc. 2º del artículo anterior. Cuando cualquiera de ellos o de los contrayentes no supiere firmar, lo hará a su ruego uno de los testigos.

Acta Contenido.

El acta consignará sin abreviaturas:

- 1º El nombre y apellido de los que intentaren casarse, su edad, nacionalidad, domicilio, profesión y lugar de nacimiento.
- 2º El nombre y apellido, nacionalidad, profesión y domicilio de los padres, cuando tales datos fueren conocidos.
- 3º Si alguno de los futuros esposos o ambos hubieren sido casados, el nombre y apellido del cónyuge o cónyuges anteriores, lugar y fecha de los matrimonios respectivos y la causa de su disolución.

Publicidad.

344. Cumplidas las formalidades de los artículos precedentes, el oficial público hará conocer el propósito de contraer matrimonio, por medio de edictos fijados en el exterior de su oficina durante diez días. En ellos se expresará circunstanciadamente el nombre y apellido de los futuros esposos, su profesión, domicilio y residencia, así como la fecha en que habrá de celebrarse el matrimonio.

Oposición.

345. Durante el término de los edictos, podrá deducirse oposición al matrimonio, ante el oficial público que intervino en las diligencias previas. Este derecho compete:

- 1º Al cónyuge de la persona que intenta contraer nuevas nupcias.
- 2º A los parientes de cualquiera de las partes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.
- 3º Al Ministerio Público, que deberá deducirla, siempre que tuviere noticia de algún impedimento.
- 4º A los parientes del marido en grado sucesible, cuando la viuda intentare contraer matrimonio en violación del art. 398.

Sólo podrán alegarse como motivos, los impedimentos establecidos en este Código.

Falta de venia. Facultades judiciales.

346. Los padres tendrán derecho para invocar, además, su falta de consentimiento; pero el juez suplirá esta denegación cuando la juzgue infundada, con recurso para ante el Superior.

Los tutores y curadores estarán facultados para oponerse en interés de sus pupilos; pero el juez de la tutela o curatela podrá autorizar el matrimonio, previa audiencia del incapaz y de los opositores.

En todos los casos, será permitido al juez suspender la decisión por un término prudencial, sin necesidad de fundar tal medida.

347. El presentante formulará su oposición de palabra Forma de la oposición. o por escrito, expresando:

- 1º Su nombre, edad, estado, profesión y domicilio.
- 2º El título o carácter, en cuya virtud proceda.
- 3º El impedimento que invoque, los motivos y pruebas.

Deducida en forma verbal, el oficial público levantará acta circunstanciada, firmándola con el oponente, o dos testigos, cuando éste no pudiere hacerlo. Presentada por escrito, se transcribirá en el libro de actas con las mismas formalidades.

348. Cuando la oposición no se fundare según lo prevenido, o procediere de persona no facultada para ello, el oficial público la rechazará de oficio. Rechazo de oficio.

Si estuviere en forma, dará conocimiento de la misma a los contrayentes, y, si fuere aceptada la existencia del impedimento, el matrimonio no podrá celebrarse. Trámite de la oposición.

Siempre que los futuros esposos no admitieran que media la causal invocada, deberán expresarlo dentro de tercero día, debiendo entonces remitirse al juez de lo civil copia de las actuaciones, así como los documentos presentados.

Se procederá de igual manera cuando los padres opusieran la falta del consentimiento.

De todas las incidencias mencionadas en este artículo, se dejará constancia en acta.

349. La oposición será resuelta en juicio sumario. Dicado el fallo, se remitirá testimonio al oficial público que intervino en el caso, a fin de que lo archive y anote la parte dispositiva al margen del acta prevista en el art. 348. El matrimonio no podrá realizarse, mientras no medie fallo que desestime la oposición. Si fuere rechazada, su autor, no sien- Juicio sumario. Suspensión del matrimonio.

do un ascendiente o el Ministerio Público, podrá ser condenado al resarcimiento que se fijará según las circunstancias.

Denuncia de impedimento. Trámite.

350. Cualquier persona está autorizada para denunciar la existencia de un impedimento legal, incurriendo en responsabilidad si procediera con malicia. Recibida la denuncia por escrito, o firmada el acta respectiva, el encargado del Registro la remitirá al juez, quien dará vista al Ministerio Público, para que si la estimare fundada, formalice oposición dentro de tercero día.

CAPÍTULO IV

De la celebración

Consentimiento.

351. Es indispensable para la existencia del matrimonio, el consentimiento de los contrayentes expresado ante el oficial público a cargo del Registro Civil. La buena fe de las partes no valida el acto que no se ajuste a la presente disposición.

El consentimiento podrá manifestarse mediante apoderado, constituido por escritura pública, en la que deberá constar la persona con la cual haya de casarse el mandante.

Celebración en la oficina.

352. El matrimonio deberá celebrarse públicamente en la oficina del Registro Civil, vencidos los edictos del art. 344, ante el funcionario que intervino en las diligencias previas, compareciendo los contrayentes o sus mandatarios, en presencia de dos testigos, mayores de edad, y con las demás formalidades que este Código prescribe.

Excepción

353. Sólo podrá celebrarse el matrimonio fuera de la oficina, en caso de enfermedad justificada por certificado médico, o de impedimento grave. El certificado se archivará.

En tal supuesto, la casa quedará abierta al libre acceso del público, realizándose el acto en presencia de cuatro testigos mayores de edad, de los cuales dos por lo menos no serán parientes de los cónyuges.

El acta de celebración consignará el lugar en que se efectúa, la causal invocada, y el nombre del facultativo que hubiere expedido el certificado.

354. Para celebrar el matrimonio, el oficial público, en presencia de los contrayentes y de los testigos, pronunciará las siguientes palabras: "El acto que voy a realizar, transcendental para vosotros, lo es también para el Estado, que ve en la familia legítima la base primordial de la sociedad y en el matrimonio la fuente de aquélla. La Nación os confía parte del futuro, porque su engrandecimiento es la obra común de las generaciones". Luego leerá el art. 361 de este Código e interrogará a los que han de ser cónyuges llamándoles por sus nombres y apellidos, uno después del otro, si quieren tomarse por marido y mujer y con sus respuestas afirmativas, pronunciará que ante la ley quedan unidos en matrimonio. El asentimiento de las partes no podrá sujetarse a término ni condición; el acto no será interrumpido, y una vez finalizado, los esposos tendrán derecho a que en el mismo lugar, un ministro de su culto consagre religiosamente las nupcias.

Formalidades que deben cumplirse en el acto.

355. El acta de celebración se hará por separado de la relativa a las diligencias previas, debiendo ser labrada y subscripta inmediatamente por todos los que intervinieren en ella, o por otros a ruego de los que no pudieren hacerlo, y contendrá:

Acta de celebración.

- 1º La fecha y lugar del acto.
- 2º El nombre y apellido en todas sus letras, edad, profesión, domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes.
- 3º El nombre y apellido, profesión, domicilio y nacionalidad de los padres de los respectivos esposos, cuando tales datos fueren conocidos.
- 4º El nombre y apellido del cónyuge anterior, si alguno de los contrayentes hubiere sido casado.
- 5º El consentimiento de los padres, tutores, o del juez en su caso.
- 6º La nota de si hubo o no oposición y la de su rechazo, como también de haberse efectuado las publicaciones requeridas.
- 7º La declaración de que los esposos manifestaron su voluntad de tomarse como tales, y la del oficial público de quedar unidos en nombre de la ley.
- 8º El nombre y apellido, edad, estado, profesión y domicilio de los testigos, y si son o no parientes de las partes.

9º En caso de celebrarse el matrimonio por apoderado. la mención del poder, con la fecha, lugar y oficial público ante quien se otorgó, debiendo archivar-se en la oficina copia autorizada del mismo.

10º El reconocimiento por los contrayentes, de los hijos naturales, si los tuvieren. A petición de parte podrá ser omitida esta cláusula y levantarse por separado un acta especial.

El oficial público entregará a los esposos copia autorizada en papel común, del acta de celebración.

Matrimonio in extremis.

356. Podrá prescindirse de todas o algunas de las diligencias que deben preceder al casamiento, cuando se justifique por certificado médico —y donde no hubiere facultativo, con el testimonio de dos vecinos— que uno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte, lo que se hará constar en el acta, archivándose aquel documento.

Será también competente en este caso, cualquier funcionario judicial, quien levantará acta con los requisitos del art. 355 y la remitirá a la sección correspondiente del Registro Civil, para ser allí protocolizada.

En los supuestos de este artículo, el matrimonio se publicará durante ocho días, por avisos fijados en la puerta del Registro Civil.

Gratuidad de las actuaciones. Registro.

357. Todas las actuaciones relativas a la celebración del matrimonio, excepto las seguidas ante los jueces, serán gratuitas, se realizarán ante el oficial público y se extenderán en libros encuadernados y foliados en la forma que disponga la ley.

Donde no hubiere Registro Civil, estas funciones serán desempeñadas por la autoridad judicial, que procederá conforme a lo dispuesto en este título.

CAPITULO V

De la prueba del matrimonio

Copia o certificación del acta.

358. El matrimonio sólo puede justificarse con la copia o certificado del acta inserta en el Registro.

El celebrado fuera del país se probará con la copia del instrumento correspondiente, expedido conforme a las leyes del lugar.

359. Ni los esposos, ni los terceros podrán invocar la posesión de estado, para acreditar el matrimonio o reclamar sus efectos civiles. Sin embargo, con ella quedarán cubiertas las irregularidades del acta de celebración.

Poseción de estado.

360. Cuando no existiere Registro, o se hubiere destruido en todo o en parte, o llevado con irregularidad, podrán probarse estas circunstancias por documentos o por testigos. En tales casos, será permitido justificar el matrimonio con cualquier género de pruebas.

Prueba supletoria.

Si hubiere juicio criminal por la destrucción, falsificación o pérdida de un acta, el fallo que reconozca la existencia del matrimonio hará las veces de aquélla, y deberá ser inscripto en el Registro.

CAPITULO VI

Derechos y obligaciones de los esposos

361. El matrimonio crea entre los esposos una comunidad que les obliga a la vida conyugal, a dignificar la casa, y a su mutua protección, fidelidad y asistencia, así como a proveer al sustento, la guarda y educación de los hijos.

Efecto del matrimonio en cuanto a los conyuges. Deberes y deberes de ambos.

Es deber del marido aportar los recursos necesarios para estos fines.

La esposa tendrá el derecho y el deber de prestar, en la medida de sus fuerzas, su consejo y ayuda para la prosperidad común, y el de atender la casa, realizando los trabajos domésticos que permita la condición de las partes.

Corresponde al marido la facultad de fijar el domicilio conyugal.

362. El juez puede, según las circunstancias y a pedido de la esposa, eximirla de la obligación de habitar con

Exoneración del deber de cohabitar.

su marido, cuando medien causas graves que lo justifiquen, y también fijarle alimentos provisionales.

No se aplicarán medidas de compulsión personal para reintegrar a la mujer a la vida común.

Incumplimiento del deber de asistencia.

363. El cónyuge que faltare a los deberes de asistencia para con el otro o para con sus hijos, o que, condenado a pasar alimentos, se hallare en mora por más de tres meses sin razón suficiente, se juzgará comprendido en el art. 372, inc. 5º, y podrá privársele de los derechos de la patria potestad. En tal caso, o cuando expusiera al otro esposo a peligro, deshonor o daño, podrá éste requerir la intervención del juez para que llame al culpable a sus deberes, o tome las medidas prevenidas en el art. 375.

Actos de la vida doméstica.

364. Tanto el marido como la mujer representan al matrimonio, en lo que concierne a los actos de la vida doméstica. Cuando la esposa contratare dentro de este límite, obligará al marido, a menos que el tercero hubiera conocido el abuso.

Necesidad del acuerdo de los cónyuges.

365. Será necesaria la conformidad de ambos cónyuges, para que la mujer pueda válidamente realizar los actos siguientes:

- 1º Ejercer profesión, industria, o comercio por cuenta propia, o efectuar trabajos fuera de la casa común.
- 2º Dar sus servicios en locación.
- 3º Constituir sociedades colectivas, de capital e industria o en comandita, civiles o comerciales.
- 4º Aceptar donaciones y también herencias sin beneficio de inventario.
- 5º Renunciar las herencias o legados que le sean deferidos.
- 6º Disponer a título gratuito por actos entre vivos, de los bienes que ella administre, conforme a lo dispuesto en el art. 425.

En todos los supuestos en que se exija el acuerdo del marido, si éste lo negare, o no pudiera prestarlo, podrá la

mujer requerirlo al juez, que se lo prestará cuando la petición respondiera a las necesidades o intereses del hogar.

366. Se presumirá que existe el asentimiento de ambos cónyuges, únicamente en los casos siguientes: **Acuerdo presunto.**

1º Cuando la esposa ejerciere profesión, industria o comercio por cuenta propia, o efectuare trabajos fuera de la casa común, personalmente y a su nombre.

2º Si continuare ejerciendo las actividades en que se ocupaba al contraer matrimonio.

Cuando en los casos previstos en este artículo, el marido quisiera retirar el acuerdo y la mujer no estuviere conforme, aquél deberá requerir la intervención del juez, quien resolverá teniendo en cuenta si el retiro responde a razones atendibles. La sola oposición del marido no bastará para que la esposa cese en el desempeño de sus actividades.

367. Para que el acuerdo, su revocación y restablecimiento, produzcan efecto en cuanto a terceros de buena fe, será menester que se inscriban en el Registro de la Propiedad, o en el de Comercio, según el caso. **Inscripción del acuerdo y su retiro.**

368. La mujer no necesita conformidad del marido para disponer a título oneroso de los bienes comprendidos en el art. 425, ni tampoco para invertir los frutos de aquéllos, ni los provechos que obtenga de su trabajo, o del comercio que ella administre. **Actos que no requieren acuerdo.**

369. Sólo el marido puede impugnar los actos de la mujer casada que requieran su conformidad; no así sus herederos, a menos que aquél hubiera formalizado oposición. En este caso, les será permitido ejercer las acciones patrimoniales que derivaren de esos hechos. **Impugnación de los actos realizados sin conformidad.**

370. Las cuestiones entre cónyuges, previstas en los artículos anteriores, serán resueltas sumariamente por el juez, previa audiencia de los interesados. Cuando hubiere perjuicio en la demora, podrá disponerse que antes de la decisión, queden suspendidos los actos motivo de la incidencia. **Procedimiento sumario.**

CAPITULO VII (1)

Del divorcio

Efecto.

371. El divorcio que este Código autoriza, se limita a la separación personal de los cónyuges en virtud de sentencia. No lo habrá por el mutuo consentimiento de éstos, y será nulo todo acuerdo para restringir o ampliar el derecho a solicitarlo.

Separación de hecho.

Cuando de hecho se hubiera producido la separación, ésta sólo tendrá efecto, siempre que lo determinare la ley.

Causales de divorcio.

372. El derecho a demandar por divorcio corresponde exclusivamente a los cónyuges, y sólo por los motivos que a continuación se expresan:

- 1º Adulterio, u otro acto carnal de naturaleza semejante con persona de cualquier sexo, siempre que el actor no lo hubiere provocado o favorecido.

(1) En el caso de admitirse el divorcio absoluto, habría que reemplazar este capítulo por el siguiente, debiendo también restablecerse la numeración corrida:

CAPITULO VII

Del divorcio

Efecto.

371. “Este Código autoriza, ya el divorcio absoluto, “ya la separación personal de los cónyuges, siempre en virtud de sentencia firme dictada por juez competente.

“No habrá divorcio por mutuo consentimiento de los “esposos, y será nulo todo acuerdo para restringir o ampliar “el derecho a solicitarlo.

Separación de hecho.

“Tampoco podrá convenirse la separación, pero cuando de hecho se hubiera producido, sólo tendrá los efectos “determinados en la ley para casos especiales.

- 2º La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que, fundado en ella, pueda ejercer cualquiera de los esposos.
- 3º Delito o tentativa contra la persona del demandante.
- 4º Violación grave de los deberes nacidos del matrimonio, o conducta deshonrosa o inmoral, susceptible de turbar profundamente las relaciones conyugales, e impedir para la otra parte la posibilidad de la vida común. Las sevicias y las injurias graves quedan comprendidas en este inciso.

372. "El derecho a demandar por divorcio corresponde exclusivamente a los cónyuges, y sólo por los motivos que a continuación se expresan: Causales de divorcio.

- "1º Adulterio u otro acto carnal de naturaleza semejante con persona de cualquier sexo, siempre que el actor no lo hubiere provocado o favorecido.
- "2º La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que fundado en ella pueda ejercer cualquiera de los esposos.
- "3º Delito o tentativa contra la persona del demandante.
- "4º Violación grave de los deberes nacidos del matrimonio o conducta deshonrosa o inmoral, susceptible de turbar profundamente las relaciones conyugales e impedir para la otra parte, la posibilidad de la vida común. Las sevicias y las injurias graves quedarán comprendidas en este inciso.
- "5º El abandono malicioso. Sólo se juzgará tal:
 - "a) Cuando intencionalmente, contra la voluntad del demandante, el otro cónyuge se ausenta del país o a lugar ignorado, y transcurriere el término de un año.
 - "b) Si en las relaciones de los cónyuges se produjere el caso previsto en el art. 363.
 - "c) Cuando el cónyuge no hubiere cumplido durante un año, la sentencia firme que dispuso el

5º El abandono malicioso. Sólo se juzgará tal:

- a) Cuando intencionalmente, contra la voluntad del demandante, el otro cónyuge se ausentare del país, o a lugar ignorado, y transcurriera el término de un año.
- b) Si en las relaciones de los cónyuges, se produjere el caso previsto en el art. 363.
- c) Cuando el cónyuge no hubiere cumplido durante un año, la sentencia firme que dispuso el reintegro a la vida común, siempre que no mediare cau-

“reintegro a la vida común, siempre que no mediare causa justificada, ulterior al fallo. El año comenzará a contarse desde que éste cause ejecutoria.

6º El estado habitual de embriaguez, o el uso indebidamente de tóxicos enervantes.

Juez competente.

373. “La demanda de divorcio, ya se limite a la separación personal, ya persiga la ruptura del vínculo, debe deducirse ante el juez del último domicilio común de los cónyuges.

“Será nula la sentencia dictada por cualquier otro juez, aunque ambos esposos concurrieran ante él o cambiaran su residencia para obtener el divorcio, siempre que el último domicilio común estuviere en el territorio de la Nación.

Audiencia de conciliación.

374. “El juez deberá convocar a las partes para procurar su conciliación, en la oportunidad que estimare conveniente.

Medidas provisionales.

375. “Promovida la acción de divorcio, o antes de ella en caso de urgencia, podrá el juez, a instancia de parte, decretar la separación personal de los esposos y autorizar la residencia de la mujer en casa honesta dentro de los límites de su jurisdicción, si no dispusiere que el marido dejare el domicilio conyugal. Podrá también determinar el cuidado de los hijos, los alimentos que deban prestarse a ellos y a la mujer, así como las expensas necesarias a ésta durante el pleito.

sa justificada; ulterior al fallo. El año comenzará a contarse desde que éste causó ejecutoria.

6º El estado habitual de embriaguez, o el uso indebido de tóxicos enervantes.

373. La demanda de divorcio, debe deducirse ante el Juez competente. juez del último domicilio común de los cónyuges.

Será nula la sentencia dictada por cualquier otro juez, aunque ambos esposos concurrieran ante él o cambiaran su residencia para obtener el divorcio, siempre que el último domicilio común estuviere en el territorio de la Nación.

376. "Se admitirá en el juicio de divorcio toda clase de pruebas, pero no bastará la de confesión por sí sola. Ni ésta, ni la de juramento podrán ser tampoco, judicialmente exigidas.

"Serán admitidos a declarar los parientes y domésticos de los cónyuges, pero no los ascendientes ni los descendientes de los litigantes.

"Cuando el juez estimare que existe colusión entre las partes, denegará el divorcio, a menos que la prueba justifique la existencia de causales bastantes para decretarlo. "Los hechos sobre los cuales no pudo basarse la demanda cuando ella fué promovida, podrán, sin embargo, alegarse para corroborar la fundada en otros motivos.

377. "Cuando se invocare las causales previstas en los inc. 3º, 4º y 5º del art. 372, podrá el juez suspender el fallo por un plazo que no exceda de un año. Transcurrido éste, dictará sentencia, si una de las partes lo solicitare, y no hubiere mediado reconciliación.

Facultad del juez para aplazar el fallo.

"Este artículo no regirá en el caso de haber atentado uno de los cónyuges contra la vida del otro.

378. "La reconciliación de los esposos, después de los hechos que motivaron la demanda, extingue la acción intentada, aunque estuviere pendiente de sentencia. Se aplicará este artículo, tanto al caso de perdón por parte del cónyuge ofendido, como al de restablecimiento de la vida común.

Reconciliación. Efectos.

379. "La acción de divorcio, aun pendiente de sentencia, quedará extinguida por la muerte de uno de los esposos.

Extinción por muerte de uno de los cónyuges.

Audiencia de conciliación.

374. El juez deberá convocar a las partes para procurar su conciliación, en la oportunidad que estimare conveniente.

Medidas provisionales.

375. Promovida la acción de divorcio, o antes de ella en caso de urgencia, podrá el juez, a instancia de parte, decretar la separación personal de los esposos y autorizar la residencia de la mujer en casa honesta dentro de los límites de su jurisdicción, si no dispusiere que el marido dejare el domicilio conyugal. Podrá también determinar el cuidado de los hijos, los alimentos que deban prestarse a ellos y a la mujer, así como las expensas necesarias a ésta durante el pleito.

“sos; pero si ella estuviere iniciada y fuere prejudicial de otra relativa al patrimonio, podrá continuar a este solo efecto por o contra los herederos del fallecido. También será lícito proseguirla al cónyuge demandado o a los herederos, cuando la imputación en que se funde importe grave daño para el honor de aquél.

Medidas precautorias.

380. “Si durante el juicio, la conducta de cualquiera de los esposos hiciere temer enajenaciones fraudulentas o la disipación del acervo común, podrá el otro solicitar se forme inventario de los bienes y se pongan a cargo de un administrador, siempre que el cónyuge no diere garantía suficiente por el valor de aquéllos.

Sentencia. Extremos que debe consignar.

381. “La sentencia que declare el divorcio o la separación personal, deberá expresar la causal en que se funde y pronunciarse sobre la culpabilidad del cónyuge que hubiere incurrido en falta. Si mediare reconvencción y el fallo hiciere lugar a ella, será permitido establecer la responsabilidad de ambos esposos. Aun sin contrademanda, el actor podrá ser reconocido culpable a instancia de parte. “cuando se justificaren hechos suficientes y se hubiere oído sobre ellos al imputado. Igual regla se aplicará, si aquél no hubiere podido solicitar el divorcio por existir perdón.

Efectos de la sentencia.

382. “La sentencia, así fuere de divorcio como de separación personal, tendrá los efectos siguientes:

“1° La mujer mayor de edad podrá ejercer por sí todos los actos de la vida civil. Los esposos meno-

376. Se admitirá en el juicio de divorcio toda clase de pruebas, pero no bastará la de confesión por sí sola. Ni ésta, ni la de juramento, podrán ser tampoco, judicialmente exigidas. Prueba.

Serán admitidos a declarar los parientes y domésticos de los cónyuges, pero no los ascendientes ni los descendientes de los litigantes.

Cuando el juez estimare que existe colusión entre las partes, denegará el divorcio, a menos que la prueba justifique la existencia de causales bastantes para decretarlo. Los hechos sobre los cuales no pudo basarse la demanda cuando ella fué promovida, podrán, sin embargo, alegarse para corroborar la fundada en otros motivos.

- “res seguirán sometidos al régimen de los emancipados.
- “2º Las partes podrán ausentarse y fijar libremente su domicilio, pero si tuvieren hijos a su cargo, no les será permitido trasladarlos sin licencia del juez que conoció en la causa.
- “3º El cónyuge culpable deberá contribuir a la subsistencia del otro, cuando éste no tuviere medios propios suficientes. El derecho a los alimentos cesará por un nuevo matrimonio.
- “4º La sociedad conyugal quedará disuelta de pleno derecho y separados los bienes de los esposos.
- “5º El padre y la madre permanecerán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de los hijos, sea cual fuere el causante del divorcio o de la separación.
- “6º Cuando uno de los cónyuges hubiere sido declarado culpable, podrá el otro revocar las donaciones o ventajas que hubiere otorgado a favor de aquél. Este derecho compete igualmente a los herederos.

383. “En el divorcio absoluto, el matrimonio queda disuelto, las partes excluidas recíprocamente de la sucesión y la mujer privada de usar el apellido marital. El esposo culpable sólo podrá contraer otro enlace, transcurrido un año a partir de la ejecutoria. En todos los casos, regirá para la mujer lo dispuesto por el art. 398. Disolución del matrimonio.

Facultad del juez para aplazar el fallo.

377. Cuando se invocare las causales previstas en los arts. 3º, 4º y 5º del art. 372, podrá el juez suspender el fallo por un plazo que no exceda de un año. Transcurrido éste, dictará sentencia, si una de las partes lo solicitare y no hubiere mediado reconciliación.

Reconciliación. Efectos.

Este artículo no regirá en el caso de haber atentado uno de los cónyuges contra la vida del otro:

378. La reconciliación de los esposos, después de los hechos que motivaron la demanda, extingue la acción intentada, aunque estuviere pendiente de sentencia. Se aplicará este artículo, tanto al caso de perdón por parte del cónyuge ofendido, como al de restablecimiento de la vida común.

“El cónyuge declarado culpable en dos divorcios, o el marido que lo hubiere sido por incitar a la esposa a cometer adulterio, no podrá celebrar nuevo matrimonio.

Tenencia de los hijos.

384. “Tanto en el divorcio como en la separación personal, los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre, y los mayores de esa edad, a falta de acuerdo, en poder del cónyuge más idóneo para educarlos.

Arbitrio del juez.

“El juez podrá modificar el régimen de este artículo, en vista de las circunstancias, la salud moral y material de los incapaces y la buena administración de sus bienes. Sin embargo, no podrá acordarse la guarda al cónyuge que hubiere sido condenado a reclusión, prisión o deportación.

Derecho del cónyuge inocente.

385. “En la separación personal, subsistirá el derecho hereditario a favor del cónyuge inocente, y si lo fuere la mujer, podrá conservar el apellido del marido.

“Los efectos de la sentencia cesarán con el restablecimiento de la vida común.

Conversión en divorcio absoluto.

386. “La sentencia de separación personal no impedirá solicitar el divorcio absoluto, por causa ulterior o ignorada al promoverse la primera demanda.

“Cualquiera de los cónyuges, incluso el culpable, podrá también pedir que dicha sentencia se convierta en disolución del vínculo, transcurridos tres años desde la ejecución, siempre que los esposos no hubieran restablecido la

379. La acción de divorcio, aun pendiente de sentencia, quedará extinguida por la muerte de uno de los esposos; pero si ella estuviere iniciada y fuere prejudicial de otra relativa al patrimonio, podrá continuar a este solo efecto por o contra los herederos del fallecido. También será lícito proseguirla al cónyuge demandado o a los herederos, cuando la imputación en que se funde importe grave daño para el honor de aquél.

Extinción por muerte de uno de los cónyuges.

380. Si durante el juicio, la conducta de cualquiera de los esposos hiciere temer enajenaciones fraudulentas, o la disipación del acervo común, podrá el otro solicitar se forme inventario de los bienes y se pongan a cargo de un administrador, siempre que el cónyuge no diere garantía suficiente por el valor de aquéllos.

Medidas precautorias.

381. La sentencia que declare el divorcio, deberá expresar la causal en que se funde y pronunciarse sobre la culpabilidad del cónyuge que hubiere incurrido en falta. Si mediare reconvencción, y el fallo hiciere lugar a ella, será permitido establecer la responsabilidad de ambos esposos. Aun sin contrademanda, el actor podrá ser reconocido culpable a instancia de parte, cuando se justificaren hechos suficientes y se hubiere oído sobre ellos al imputado. Igual regla se aplicará, si aquél no hubiere podido solicitar el divorcio por existir perdón.

Sentencia. Extremos que debe consignar.

“vida común. La conversión debe ser resuelta privativamente por el juez del domicilio del demandado, con tal que éste lo tuviere en la República, debiendo aplicarse las leyes de este Código.

387. “Cuando al casamiento civil hubiera seguido la consagración religiosa de cualquier comunión que establezca la indisolubilidad del vínculo, podrá el cónyuge demandado oponerse al divorcio absoluto, y la sentencia que se dictare, sólo implicará la separación de cuerpos.

Supuesto de matrimonio religioso indisoluble.

“El mismo derecho le asistirá para oponerse a la conversión, a que se refiere el artículo anterior.

Efectos de la sentencia.

382. La sentencia tendrá los efectos siguientes:

- 1º La mujer mayor de edad podrá ejercer por sí todos los actos de la vida civil. Los esposos menores seguirán sometidos al régimen de los emancipados.
- 2º Las partes podrán ausentarse y fijar libremente su domicilio, pero si tuvieran hijos a su cargo, no les será permitido trasladarlos sin licencia del juez que conoció en la causa.
- 3º El cónyuge culpable deberá contribuir a la subsistencia del otro, cuando éste no tuviere medios propios suficientes. Aun el inocente deberá pasarlos al que hubiere dado motivo al divorcio, siempre que le fueren de absoluta necesidad.
- 4º La sociedad conyugal quedará disuelta de pleno derecho y separados los bienes de los esposos.
- 5º El padre y la madre permanecerán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de los hijos, sea quien fuere el causante del divorcio.
- 6º Cuando la esposa hubiere sido declarada culpable, podrá el marido revocar las donaciones que le hubiere otorgado. Este derecho compete igualmente a los herederos.

Tenencia de los hijos.

383. Pronunciada la sentencia de divorcio, los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre, y los mayores de esa edad, a falta de acuerdo, en poder del cónyuge más idóneo para educarlos.

Arbitrio del juez.

El juez podrá modificar el régimen de este artículo, en vista de las circunstancias, la salud moral y material de los incapaces y la buena administración de sus bienes. Sin embargo, no se concederá la guarda al cónyuge que hubiere sido condenado a reclusión, prisión o deportación.

Derecho del cónyuge inocente.

384. La sentencia que decreta el divorcio no afectará el derecho hereditario del cónyuge inocente. Si lo fuere la mujer, podrá conservar el apellido del marido.

Los efectos de la sentencia cesarán con el restablecimiento de la vida común.

CAPITULO VIII (1)

De la disolución del matrimonio

385. El matrimonio se disuelve por muerte natural de uno de los esposos.

Muerte de uno de los cónyuges.

386. La disolución en el extranjero, de un matrimonio celebrado en el territorio de la República, aunque esté de acuerdo con las leyes del lugar, si no lo fuere con las de este Código, no habilitará a ninguno de los cónyuges para casarse en el país.

Disolución en país extranjero.

CAPITULO IX

De los matrimonios nulos y anulables

387. Es nulo el matrimonio contraído, mediando alguno de los impedimentos enumerados en los incs. 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 7º del art. 339.

Matrimonios nulos.

388. Se aplicará al matrimonio nulo, lo dispuesto en la primera parte de los arts. 205 y 206. Sin embargo, una vez disuelto, no podrá declararse de oficio la nulidad, ni tampoco a requerimiento del Ministerio Público, pero sí a instancia de cualquier interesado.

Nulidad de un matrimonio disuelto.

(1) En el caso de admitirse el divorcio absoluto, habría que reemplazar las disposiciones de este capítulo por las siguientes:

385. "El matrimonio se disuelve por muerte natural de uno de los esposos, por la declaración del fallecimiento de un cónyuge ausente o por sentencia firme que decreta el divorcio absoluto".

Causales admitidas.

386. "Si disuelto el matrimonio por la declaración de fallecimiento de un cónyuge ausente, el otro hubiera contraído nuevas nupcias, la reaparición de aquél no las invalidará, a no ser que su existencia efectiva hubiere sido conocida por ambas partes en el acto de celebrarlas".

Caso de fallecimiento presunto.

Es también nulo el que no se hubiere celebrado ante el oficial público en presencia de los testigos que exige la ley.

Matrimonios anulables.

389. Será anulable el matrimonio:

- 1º Cuando lo pidiere el cónyuge que lo celebró en estado de perturbación mental, excluyente del discernimiento.
- 2º A instancia de la parte que hubiere ignorado que el otro esposo se encontraba en el caso del inciso precedente, o la existencia de las circunstancias previstas en el inc. 9º del art. 339.
- 3º A solicitud del esposo que no tuviere la edad exigida por el art. 339, inc. 4º, o del padre de éste, o de la madre en su defecto. Cesará tal derecho en los padres, cuando se hubiere cumplido la edad legal, y en cuanto a los cónyuges, si la mujer hubiere quedado en cinta.
- 4º Siempre que el acto hubiere sido celebrado con violencia, error o dolo.
- 5º Por causa de impotencia del marido o esterilidad de la mujer, absolutas y manifiestas, anteriores a la celebración.

También será anulable el matrimonio celebrado sin la publicidad necesaria, siempre que ello hubiere respondido al propósito doloso de substraerse a una oposición.

La misma regla se aplicará en caso de incompetencia del oficial público autorizante, salvo lo dispuesto en el art. 240, inc. 2º y 3º.

Regirá para los matrimonios anulables lo establecido en la segunda parte de los arts. 205 y 206.

Error o ignorancia.

390. El error o la ignorancia sólo podrán referirse:

- 1º A la identidad del otro cónyuge, a su honra y buena fama, cuando fuere de tal naturaleza, que el conocimiento ulterior impidiera continuar la vida en común.
- 2º Al hecho de haber cometido el consorte un delito anterior al matrimonio, juzgado por sentencia firme y condenatoria; cuando el conocimiento de ello colocare al otro en el supuesto previsto en la parte final del inciso anterior.

- 3º A la existencia de un defecto físico irremediable, o enfermedad grave, contagiosa o hereditaria, susceptible de poner en riesgo la salud del otro esposo o de los hijos.

391. La acción de nulidad sólo podrá ser ejercida dentro de los ciento ochenta días, contados desde que se conoció la causa o cesó la violencia, y, en el supuesto de rapto, desde que la víctima fué restituida a su plena libertad.

Plazo para promover la acción.

En el caso del inc. 3º del art. 389, el término será computado a partir del día en que se cumplió la edad legal.

392. La demanda a que se refiere el artículo anterior podrá promoverse por mandatario con poder especial que designe la causal a invocarse. No compete a los acreedores del cónyuge, ni tampoco a los herederos, pero estos últimos estarán facultados para proseguir la iniciada por el causante, si fuere previa a una demanda de carácter patrimonial. En el mismo supuesto, tendrán derecho a continuarla los sucesores del demandado, aunque mediare desistimiento del actor.

Quiénes pueden entablarla.

Será también permitido a los representantes de incapaces invocar la nulidad en el caso del art. 387, previa autorización del juez.

El contrayente incapaz podrá actuar sin venia especial.

393. La sentencia firme dictada en juicio sobre nulidad o anulación de un matrimonio, producirá efecto a favor y en contra de todos.

Efecto de la sentencia.

Si la demanda se fundó en la bigamia, el fallo que la hubiere desestimado no podrá oponerse al tercero con quien se contrajo la primera unión, salvo que hubiere sido parte en el juicio.

Estas reglas se aplicarán también a las resoluciones que declaren la existencia o invalidez de un matrimonio.

394. La nulidad o anulación del matrimonio, no producirán efecto en cuanto a los actos jurídicos celebrados entre uno de los cónyuges y terceros, ni sobre las sentencias que recayeren entre un extraño y cualquiera de los esposos. Quedan exceptuados los siguientes casos:

Limitaciones.

- 1º Si el matrimonio hubiera sido ya declarado nulo al realizarse el acto jurídico o al promoverse la acción.

- 2° Cuando la invalidez fuere conocida por el tercero al otorgar el acto o al iniciar la instancia.

La nulidad podrá ser invocada sin estas restricciones, siempre que se fundare en vicio de forma y no estuviere inscripto el matrimonio en el Registro.

Efectos referentes a la persona y bienes de las partes.

395. Los efectos de la declaración de nulidad de un matrimonio, con referencia a las personas y bienes de los esposos y de los hijos, se ajustarán a las reglas que siguen:

Buena fe de ambas.

- 1° Contraído de buena fe por ambos cónyuges, producirá hasta esa fecha los de un matrimonio válido. A partir de ella, los efectos de la nulidad serán los siguientes:

- a) En cuanto a los cónyuges, cesarán todos los derechos y obligaciones que produce el matrimonio, con la sola excepción del deber recíproco de prestarse alimentos en caso necesario.
- b) En lo que concierne a los bienes, cesará la sociedad conyugal, como en el caso de fallecimiento.
- c) Los hijos concebidos en el matrimonio serán legítimos; los que lo hubieran sido antes de él, quedarán legitimados.

Buena fe sólo de uno.

- 2° Cuando sólo hubo buena fe de parte de uno de los esposos, el matrimonio, hasta el día de la sentencia, producirá sólo respecto de ese contrayente y de los hijos, los efectos de la unión válida. El otro cónyuge no tendrá derecho a alimentos, ni a ventaja alguna de las que se le hubieren acordado por el contrato prenupcial; ni las facultades de la patria potestad sobre los hijos, aunque sí las obligaciones.

Mala fe de las dos.

- 3° Si el matrimonio nulo fué contraído de mala fe por ambas partes, no producirá efecto civil alguno. La unión será reputada concubinato. Los bienes se regirán por los principios de la sociedad de hecho y el contrato prenupcial quedará sin efecto. Los hijos serán ilegítimos y de la clase que les correspondiere, según el impedimento que causó la nulidad.

396. Consiste la mala fe de los contrayentes, en el conocimiento que tenían o debieron tener el día de la celebración del matrimonio, acerca de la causal que determinó la nulidad.

Mala fe.

El error o la ignorancia, sean de hecho o de derecho, no perjudican la buena fe.

El esposo que no tuviere la edad necesaria para contraer matrimonio y el que padeció violencia al manifestar su voluntad, serán siempre considerados de buena fe.

397. Cuando se tratare de una mujer, el resarcimiento debido por el contrayente de mala fe, comprenderá también el menoscabo que le resultare para el porvenir, como consecuencia de la nulidad.

Indemnización a la mujer de buena fe.

398. La mujer no podrá contraer nuevo matrimonio, hasta pasados trescientos días de disuelto o anulado el anterior. Si contraviniere esta disposición, perderá cualquier liberalidad o beneficio que se le hubiere concedido por el contrato prenupcial o por testamento.

Nuevas nupcias de la mujer.

TITULO II

Régimen de los bienes en el matrimonio

CAPITULO I

De las capitulaciones y donaciones prenupciales

399. Unicamente serán válidas las convenciones prenupciales que tengan los fines siguientes:

Convenciones permitidas.

- 1º Determinar los bienes que aporte cada uno de los futuros esposos y establecer una razón circunstanciada de sus deudas.
- 2º Consignar las donaciones del marido a la mujer.
- 3º La reserva a favor de la esposa, del derecho de administrar alguno o todos los bienes comprendidos en su dote.

El menor autorizado para casarse podrá también celebrar estas convenciones, si concurriere a su otorgamiento la persona, cuya venia era requerida para contraer el matrimonio.

400. Serán especialmente nulos los convenios siguientes:

Convenios nulos
anulables.

- 1º Toda renuncia que cualquiera de los contrayentes hiciere de sus derechos, a favor del otro, o de los gananciales de la sociedad conyugal.
- 2º Los que ajustaren los esposos una vez contraído el matrimonio, aunque fuere para modificar o revocar lo establecido con anterioridad a él.
- 3º Toda capitulación prenupcial de quienes tuvieran alguno de los impedimentos previstos en el art. 339, aunque el obstáculo cesare después.

Serán anulables cuando hubiere vicio en la voluntad, salvo lo dispuesto sobre los matrimonios putativos.

Formalidades.

401. Las convenciones matrimoniales, para ser válidas, deberán otorgarse por escritura pública, si el valor de los bienes pasare de dos mil pesos, o si en ellas se constituyeren derechos reales sobre inmuebles.

El instrumento expresará el nombre de las partes y de los padres, nacionalidad, edad, domicilio y actual residencia, grado de parentesco, si lo hubiere, y en el caso de menores, la firma del padre, de la madre, o de quienes acuerden la autorización en subsidio.

No habiendo notarios, se harán ante el juez local y dos testigos.

Cuando el valor de los bienes no alcanzare a dos mil pesos, podrán extenderse válidamente en instrumento privado.

Promesa de dote.

402. La promesa de donación a cualquiera de los futuros esposos, emanada de los padres o de terceros, sólo podrá probarse por escritura pública, sin requerirse aceptación expresa.

Quien la hubiere otorgado quedará constituido en mora desde el día de la celebración del matrimonio, cuando no se fijó plazo para la entrega.

403. Las donaciones prenupciales y las promesas de dote, se regirán por las reglas del Libro Tercero, Sección Séptima, Título III, quedando igualmente sujetas en su caso a las imputaciones y reducciones previstas en el Libro Quinto.

Régimen de las donaciones prenupciales y de las promesas de dote.

Ninguno de estos actos valdrá si el matrimonio no fuere celebrado, ni podrá revocarse, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la condición. Para el caso de nulidad o de separación judicial, se aplicará lo prescripto en el título anterior.

CAPITULO II

De la sociedad conyugal

§ 1. — Principio de la sociedad, aportes y haber social

404. La sociedad conyugal comienza con la celebración del matrimonio, sin que sea permitido pacto en contrario. Serán aplicables, en subsidio, las reglas del contrato de sociedad.

Comienzo. Reglas aplicables.

405. El aporte de los cónyuges consiste en el uso y goce de los bienes propios.

Aporte. Bienes propios.

Revisten el carácter de tales:

- 1º Los que cada uno de ellos tuviere al casarse.
- 2º Aquellos que en adelante llegaren a adquirir por causa de muerte, o por donación.
- 3º Los que se obtengan por permuta de bienes propios de uno de los cónyuges, o que se compren con dinero de alguno de ellos.
- 4º Los aumentos materiales que acrezcan a un bien propio, cuando formaren un solo cuerpo por aluvión, edificación o plantación, o por cualquier otra causa.
- 5º Las indemnizaciones por daños sufridos en un bien particular.
- 6º Las pensiones alimenticias y las de retiro a favor de una de las partes.
- 7º El resarcimiento por accidente de trabajo, o el obtenido de un seguro contra daños personales o enfermedades.

- 8º Las rentas vitalicias a favor de uno de los cónyuges, o el capital proveniente de seguros de vida.
- 9º Los recuerdos personales o de familia, los vestidos, adornos, instrumentos de trabajo y los libros necesarios para el ejercicio de una profesión.
- 10º Las cartas recibidas por uno de los esposos y los manuscritos del mismo.

Bienes donados o dejados conjuntamente a los esposos.

406. En el caso del inc. 2º del artículo anterior, los bienes donados o dejados por testamento conjuntamente a los esposos, acrecerán por mitad al aporte de cada uno de ellos, siempre que el título constitutivo no estableciere algo distinto. Si las donaciones fueren onerosas, se deducirá de la parte de cada cónyuge el importe de las cargas que deben ser abonadas por la sociedad.

Bienes que no corresponden a la sociedad conyugal.

407. No corresponden a la sociedad conyugal los siguientes bienes, que entrarán en la calidad de propios:

- 1º Los adquiridos durante su vigencia, aunque fuere a título oneroso, cuando la causa por la cual se hubieren obtenido fuere anterior al matrimonio.
- 2º Los que antes de ella pertenecía a cualquiera de las partes, por un título cuyo vicio se purgó durante la sociedad, sea cual fuere el remedio.
- 3º Aquellos, cuyo dominio exclusivo hubiere obtenido por cualquier causa el esposo condómino, como también la nueva participación que a éste le fuere asignada durante el matrimonio.
- 4º Los que volvieren a uno de los consortes, por nulidad o resolución del acto traslativo, o en virtud de revocarse una donación o legado.
- 5º Las donaciones remuneratorias de servicios prestados por uno de los esposos antes del matrimonio, aunque las recibiere después.

408. El marido podrá disponer libremente de sus bienes propios. La mujer tendrá sobre los suyos los derechos conferidos dentro del presente título.

Derechos de los esposos sobre los bienes propios.

Bienes gananciales.

409. Son gananciales:

- 1º Los inmuebles adquiridos por cualquiera de los esposos durante el matrimonio, cuando no se probare

que son propios, conforme a las disposiciones precedentes. Tratándose de muebles, se aplicarán las reglas del usufructo.

- 2º El tesoro encontrado por el marido o la mujer en el predio de uno u otro, como también la parte que a cualquiera de ellos le correspondiere como propietario en el hallado por un tercero.
- 3º Los frutos naturales o civiles de los bienes comunes o de los propios, percibidos durante el matrimonio, o pendientes al terminar la sociedad conyugal. Los productos de otra clase se regirán por las disposiciones sobre el usufructo.
- 4º Los frutos civiles de la profesión, trabajo o industria de uno de los esposos.
- 5º Los que recibiere alguno de los cónyuges, por el usufructo de los bienes de los hijos de otro matrimonio.
- 6º El valor, que en el momento de su enajenación o al disolverse la sociedad conyugal, según el caso, tuvieran las mejoras realizadas en bienes propios, cuando hubiesen aumentado su precio. El importe no podrá exceder de lo que realmente se gastó.
- 7º Lo invertido en redimir cargas de los bienes propios, o en cualquier otro concepto, siempre que uno sólo de los esposos hubiere obtenido provecho.
- 8º Lo adquirido por hechos fortuitos, como loterías, juegos, apuestas. No regirá este inciso para los provenientes de sorteo o redención, con primas o sin ellas, de valores que pertenecieren a uno de los esposos.

410. Se juzgarán adquiridos durante el matrimonio. los bienes que debieron serlo por la sociedad conyugal, y que de hecho, lo fueron después de disuelta.

Bienes que se presumen gananciales.

Se presumen gananciales todos los existentes al terminar la comunidad. La prueba contraria será apreciada según las disposiciones de este párrafo. No valdrá, sin embargo, contra los acreedores sociales o del marido la sola confesión de éste, cuando no fuere confirmada por otros medios, excepto el juramento.

411. La sociedad deberá explotar los establecimientos rurales, de industria o de comercio, propios de los esposos.

Bienes propios explotados por la sociedad.

y también restituirlos, todo con arreglo a lo prevenido acerca del usufructo. Estas normas se aplicarán asimismo, a los ganados y mercancías existentes.

§ 2. — Cargas de la sociedad

412. Se consideran cargas de la sociedad conyugal:

- 1º La manutención de los esposos y de sus hijos, así como la de los habidos en matrimonio anterior por uno de los cónyuges, y los alimentos que cualquiera de ellos deba suministrar a sus ascendientes.
- 2º La reparación y conservación de los bienes propios.
- 3º Las deudas del marido durante el matrimonio, y también las que contrajere la mujer cuando pueda legalmente obligar a la sociedad.
- 4º Lo que se diere o gastare en la colocación de los hijos del matrimonio.
- 5º Lo que se adeudare a uno de los esposos por el valor de un bien propio enajenado, cuyo importe no se empleare en la adquisición de otro de la misma calidad.
- 6º Lo pagado por uno de los esposos para cubrir obligaciones sociales, o lo que éste hubiere invertido en provecho de la comunidad. Tratándose de mejoras, se aplicará el art. 409, inc. 6º.
- 7º Lo perdido por hechos fortuitos, como lotería, juego, apuestas.
- 8º Las cargas que pesan sobre el usufructuario, salvo las modificaciones del presente título.
- 9º Los intereses de las obligaciones de cualquiera de los cónyuges, cuyo pago pudiere hacer efectivo el acreedor sobre los bienes propios.
- 10º Los gastos devengados en el ejercicio de derechos que corresponden a los aportes sociales, como también los que origine la defensa de la esposa demandada, si fueren necesarios, y sin perjuicio de que ella los reembolse en caso de ser condenada.

Lo prescripto en los dos últimos incisos, se entenderá con la reserva de lo dispuesto sobre la administración de la mujer en el § 2 del capítulo siguiente.

§ 3. — De los bienes de la mujer

413. Toda persona que por cualquier causa tuviere dineros de una mujer casada menor de edad, deberá depositarlos a nombre de ella, en el Banco de la Nación Argentina o en el que la ley designe. De igual modo se consignarán a la orden del juez, las sumas que a ella pudieren corresponder en caso de herencia, donación o legado.

Depósito de los dineros de la mujer menor.

414. La esposa menor necesitará venia judicial para retirar los fondos depositados a su nombre, debiendo serle acordada siempre que hubiere necesidad o ventaja manifiesta, previa anuencia del marido, quien podrá disponer de los intereses.

Retiro de los dineros de la menor.

415. Si durante el matrimonio fuere enajenado algún bien de la mujer, la responsabilidad del marido o de la sociedad será por el valor de la transferencia, aunque existiera estimación previa.

Enajenación de bienes propios.

La misma regla se aplicará en cuanto a los bienes del esposo, cuyo valor ingresare en la masa.

416. La sociedad, y personalmente el marido que administre, responderán a la mujer por el valor de todos los bienes de ésta, que a la fecha de la disolución no se hallaren invertidos en muebles o inmuebles propios de la esposa, en rentas nacionales o provinciales a su nombre, o en depósitos públicos efectuados de la misma manera.

Responsabilidad de la sociedad y del marido respecto de la mujer.

417. Disuelta la sociedad o concursada ésta o el marido, corresponde a la mujer el dominio de los bienes que hubiere aportado y el de los adquiridos ulteriormente por título propio, permuta o compra realizadas con dinero suyo. Le pertenecen también como propietaria, los títulos, dineros y valores existentes en los depósitos públicos a su nombre.

Derechos de la mujer respecto de sus bienes.

CAPÍTULO III

Administración de la sociedad conyugal

§ 1. — De la administración del marido

418. El marido es el administrador legítimo de todos los bienes de la sociedad, sean propios o gananciales, salvo

Derechos y deberes del marido como administrador.

los casos en que este derecho se acuerda a la esposa. Deberá proceder dentro de los límites de una gestión regular, según la naturaleza de los bienes y las reglas contenidas en este título.

Actos que puede realizar.

419. Podrá el marido en ejercicio de la administración:

- 1º Enajenar y obligar a título oneroso los bienes adquiridos durante el matrimonio, salvo los derechos de la mujer cuando estos actos hubieren sido realizados en fraude de ella.
- 2º Hacer donaciones de sus bienes propios, con arreglo a lo dispuesto en el título respectivo. En cuanto a los gananciales, será menester la conformidad de la esposa.
- 3º Tomar posesión de los bienes propios de la mujer; pero esta facultad no se extiende a los títulos de renta, ni a los dineros depositados a favor de aquélla.
- 4º Demandar en nombre propio, los derechos de la sociedad conyugal o los comprendidos en el aporte de cualquiera de los cónyuges. La sentencia que reayere producirá efecto con relación al otro.

Actos que obligan a la esposa.

420. Los actos regulares de administración realizados por el marido obligan a la mujer, pero ésta no responderá por las extralimitaciones de aquél, salvo el caso de enriquecimiento.

Responsabilidad del marido.

El marido será responsable por las obligaciones que hubiere contraído antes o después del matrimonio, sin perjuicio de los reembolsos que deba efectuar a la sociedad, y recíprocamente.

Actos contraídos por la esposa después del matrimonio.

421. Los bienes de los cónyuges y los comunes, sólo responderán por las obligaciones que contrajere la mujer después del matrimonio cuando mediare asentimiento del marido, salvo lo dispuesto en el artículo precedente y en el 364.

Obligaciones anteriores.

Los acreedores de la mujer por obligaciones anteriores al matrimonio, pueden exigir el pago con los bienes adquiridos durante éste, si ella no tuviere patrimonio propio.

Responsabilidad del marido por las obligaciones de la esposa autorizada.

422. El marido responderá por las obligaciones que a cargo de la sociedad contrajere la esposa, sea con poder que le hubiere otorgado, o con su autorización expresa o

tácita. Los acreedores podrán exigir el pago con los bienes comunes y con los propios del primero.

Cuando la esposa ejecutare actos urgentes de administración en los bienes de la sociedad o del marido, o si por impedimento accidental de éste lo hiciere con la venia del juez, ellos le obligarán como si fueren realizados por él.

Actos urgentes.

Quedan excluidas de esta regla, las cargas de los bienes a que se refiere el art. 425 y las responsabilidades relativas a ellos, emergentes de la administración de la esposa.

423. La administración de la sociedad conyugal pasará a la mujer, cuando fuere nombrada curadora del marido o a éste se le declarase ausente. Tendrá en tal caso, los mismos derechos y responsabilidades que el esposo.

Administración que pasa a la mujer.

424. Si por incapacidad o excusa de la mujer, se encargare a otra persona la curatela del marido o la de los bienes, el curador procederá de acuerdo con las reglas establecidas para la administración de aquél.

Facultades de curador extraño.

La esposa que no se adviniere a esa gestión, podrá pedir que la sociedad sea disuelta.

§ 2. — De los bienes administrados por la mujer

425. Corresponde a la mujer la administración de los siguientes bienes:

Bienes comprendidos en esta administración.

- 1º Los reservados de acuerdo con el art. 399, inc. 3º.
- 2º Los adquiridos durante el matrimonio cuando ejerciere una profesión lucrativa, comercio o industria, de acuerdo con lo dispuesto en este Código, lo mismo que las inversiones realizadas con esas ganancias o las procedentes de cualquier otra actividad ajena a las domésticas.
- 3º Los recibidos por herencia, legado o donación, siempre que así lo hubiere dispuesto el testador o el donante.
- 4º Los obtenidos en virtud de un derecho que fuere parte de los bienes que ella administre, o por un acto jurídico que les concierna, o como indemnización de los daños experimentados en ellos.
- 5º Los derivados del usufructo legal sobre los bienes de sus hijos, habidos en un matrimonio anterior.

6º Los vestidos, alhajas, instrumentos de trabajo y demás objetos exclusivamente destinados a su empleo personal.

Esta administración se regirá por lo dispuesto en el párrafo precedente.

Los bienes enumerados se tendrán, a la época de la disolución de la sociedad, como propios o gananciales, según las reglas establecidas en el Capítulo II del presente título.

Actos que otorga la mujer en ejercicio de esta administración.

426. Cuando se otorgare un acto que exija determinada forma instrumental, y la mujer interviniera en él como administradora, se hará constar esta circunstancia, las causas legales en que se funde y la prueba que la acredite.

El ejercicio de una actividad o trabajo independiente, se justificará de acuerdo con las reglas generales. Si fuere comerciante o la profesión estuviere reglamentada, bastará con la matrícula en el respectivo registro, o con la inscripción que prescriben los reglamentos. No será necesario demostrar el acuerdo marital.

Respecto de los inmuebles, ganados y de las máquinas cuyo registro fuere necesario, sólo podrá oponerse a terceros su carácter de bienes comprendidos en este párrafo, si constare su inscripción.

Prueba del carácter atribuido a un bien.

427. Cuando se negare el carácter de algunos de los bienes comprendidos en el art. 425, el cónyuge o los terceros que lo afirmaren, deberán acreditar el origen del mismo o la procedencia de los dineros invertidos en él; pero no será admitida la confesión ni el juramento de los cónyuges, si el litigio fuere con extraños.

Responsabilidad de un cónyuge por las obligaciones del otro.

428. La mujer responderá con los bienes mencionados en el art. 425, por las obligaciones que hubiere contraído antes o después del matrimonio, pero no por las de su esposo o de la sociedad conyugal que él administra.

A su vez, el marido no será responsable con sus bienes, ni la sociedad conyugal con los que él manejare, por las deudas que contrajere la mujer en la gestión de los reservados; ni el asentimiento que prestare a los actos cumplidos por ella, le obligará por las consecuencias de los mismos.

Ambos consortes deberán contribuir, sin embargo, a los gastos del hogar y responderán solidariamente por ellos, cuando el otro los hubiere realizado.

429. Uno de los cónyuges podrá solicitar el embargo de los bienes administrados por el otro, con el fin de que contribuya a los gastos domésticos. El juez, en este caso, podrá facultarlo para el cobro directo sobre las sumas provenientes de sueldos, salarios o ganancias, que correspondan al deudor.

Medidas para asegurar la contribución a los gastos del hogar.

Los acreedores por suministros a la familia u otras expensas del hogar, tendrán derecho justificando el origen e importe del crédito, para embargar los bienes comprendidos en el art. 425 dentro de los límites fijados en el art. 580.

430. En todo momento, el marido tendrá derecho a enterarse de la gestión realizada por la mujer y de requerirle los informes pertinentes.

Fiscalización del marido. Facultades de éste.

Podrá también solicitar del juez, en juicio sumario, que ella sea removida de la administración en todo o en parte, cuando ésta fuere imprudente o dañosa, o disipare los bienes comprendidos en la misma.

En caso de urgencia podrá suspenderse la ejecución de los actos pendientes, aun antes de pronunciarse el fallo judicial.

431. Removida la mujer de la administración, ésta pasará al marido en la medida que determine la sentencia, a no ser que se tratare de bienes comprendidos en el inc. 2º del art. 425, debiendo entonces ajustarse al título constitutivo. En caso de silencio se nombrará un curador, pudiendo serlo el esposo, cuando las circunstancias no aconsejaren la designación de un tercero.

Efectos de la remoción de la mujer.

432. No obstante lo dispuesto en el art. 418, la mujer podrá asumir en todo tiempo la administración de sus bienes propios, consignando su voluntad en el Registro, fecha desde la cual quedarán sujetos a las disposiciones de este párrafo. Le será permitido al esposo oponerse al cambio, cuando lo estimare intempestivo o perjudicial para los negocios pendientes de la sociedad, o para los intereses de cualquiera de los cónyuges, y en todo caso, podrá pedir la separación de bienes.

Administración reassumidos por la esposa.

El retiro de la administración no impedirá que los titulares de créditos anteriores al registro, hagan efectivo su derecho sobre los frutos o rentas de los bienes de la esposa.

Derechos del marido.

433. Podrá la mujer reintegrar al marido en la administración de sus bienes propios y confiarle la correspondiente

Reintegro al marido en la administración.

a los enumerados en el art. 425, salvo los incluidos en el inc. 2º. Esta reposición sólo producirá efecto desde que fuere inscrita en el Registro.

CAPITULO IV

Disolución de la sociedad conyugal

Causales.

434. La sociedad conyugal termina:

- 1º Por disolución del matrimonio.
- 2º Por declaración de su nulidad.
- 3º Por separación judicial de bienes, la que procederá sólo en los casos siguientes:
 - a) Cuando por sentencia se declare la separación personal de los esposos.
 - b) Cuando la pidiere la mujer, fundada en la mala administración del marido, o en el supuesto del art. 424.
 - c) Si el esposo la solicitare en el caso del art. 432.
 - d) A requerimiento de cualquiera de los cónyuges en el supuesto de concurso del otro.
 - e) Si declarado el fallecimiento presuntivo de un cónyuge ausente, el otro la pidiere. Se procederá entonces, a separar los bienes propios y dividir los comunes, conforme a los arts. 69 y 1945.

Siempre que la separación fuere solicitada por una mujer menor, será necesario que la asista un tutor especial.

Opción en caso de
ausencia.

435. Si en el caso del apartado e), inc. 3º del artículo anterior, el cónyuge del ausente hubiera pedido la separación, podrá desistir, siempre que las otras partes interesadas no se hubieren aún manifestado conformes. Si optare por proseguir la sociedad, deberá administrar todos los bienes del matrimonio, sin perjuicio de su derecho para provocar la disolución en cualquier momento.

Medidas precautorias
durante el juicio.

436. Entablada la demanda —y aun antes de ella si hubiera peligro en la demora— uno de los cónyuges podrá pedir embargo de sus bienes muebles que se hallaren en

poder del otro, y que se prohíba a éste disponer de los suyos propios o de los sociales. Le será permitido solicitar las expensas para la liquidación.

Durante el juicio, no podrá innovarse el estado de las cosas que estuvieren en litigio, y se reputarán simulados y fraudulentos, tanto los contratos de locación que celebre uno de los cónyuges sin la conformidad del otro o la judicial, como los recibos anticipados de rentas o alquileres no admitidos por el uso.

Prohibición de innovar.

Serán también aplicables las reglas de la acción revocatoria.

437. Dictada la sentencia de separación, ninguno de los esposos tendrá parte sobre los bienes que el otro pudiere adquirir en lo sucesivo.

Efecto de la sentencia de separación.

La mujer recobrará el pleno ejercicio de sus derechos civiles, sin depender de autorización. Los acreedores personales de ella, solo podrán ejecutar los bienes que le pertenezcan.

Los cónyuges deberán contribuir a su mantenimiento y a la educación de sus hijos, en la medida de sus respectivos recursos.

Estos efectos se producirán entre las partes desde el día de la sentencia, y en cuanto a terceros, desde la fecha en que ella fuere inscripta o prenotada.

438. La separación de bienes podrá cesar si lo acordaren ambos cónyuges por escritura pública, o cuando el juez así lo decretare a pedimento de ellos. Sólo será oponible a terceros, una vez inscripta.

Cesación de la separación.

Los bienes se restituirán al estado anterior, como si la sociedad no hubiere sido disuelta, y quedarán válidos los actos legales de la mujer o del marido. A uno y otro les será permitido exigir el inventario judicial de los bienes que retornaren a su administración, o bien individualizarlos por escritura pública.

439. Disuelta la sociedad, se procederá a liquidarla, recibiendo los cónyuges sus bienes propios y los gananciales que les correspondan. Estos se dividirán por mitad entre marido y mujer o sus herederos, con prescindencia de los aportes respectivos.

Liquidación.

Si los bienes continuaren sin partir, no por ello se entenderá que la sociedad prosigue. Se aplicarán entonces, las reglas relativas a la indivisión.

La partición de los bienes, se hará conforme a lo prescripto en los arts. 1936 y siguientes.

Separación de bienes.

Cuando los esposos hubieren vivido separados de hecho, el que fuere culpable del abandono, carecerá de participación en los gananciales, después de producido aquél. Ellos acrecerán la parte del otro cónyuge.

Liquidación simultánea de dos o más sociedades.

440. Siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de los bienes comunes de dos o más matrimonios de la misma persona, para determinar el capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas, en defecto de inventarios; y en caso de duda, se dividirán los gananciales entre las diferentes sociedades, proporcionalmente a su duración y a los bienes de propiedad de los respectivos cónyuges.

Caso de bigamia.

441. Si hubiere bigamia, ignorada por el otro cónyuge, el verdadero cónyuge tendrá derecho a la mitad de los gananciales, como si la segunda unión no hubiere sido celebrada. El que sufrió engaño con el matrimonio aparente, podrá repetir contra la parte del bigamo y contra los bienes propios introducidos por éste en la sociedad legítima, el importe que le hubiere correspondido durante la comunidad.

El beneficio del presente artículo no tendrá aplicación cuando quedaren descendientes de cualquiera de estas uniones.

Restitución de bienes dotales.

442. Disuelta la sociedad conyugal, el esposo o sus herederos restituirán a la mujer los bienes de ella en el estado en que se encuentren, dentro de los treinta días, si fueran inmuebles o muebles no fungibles que tuvieran en su poder; y de los ciento ochenta, cuando se tratase de dinero, de cosas fungibles, o del valor de los bienes propios de la mujer que no se hallaren en poder del marido, o de la sucesión de éste.

Vencidos dichos plazos, los obligados quedarán constituidos en mora. Si en los aportes de la esposa se hubieren comprendido créditos o derechos, que luego se perdieron sin culpa del marido, sólo deberán entregarse los títulos o documentos respectivos.

SECCION SEGUNDA

DE LA FILIACION

TITULO I

De la filiación legítima

CAPITULO I

De los hijos legítimos

443. Son hijos legítimos los concebidos durante el matrimonio válido o putativo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 15. Quienes lo son.

444. La ley presume: Presunciones legales.

- 1º Que los hijos concebidos por la mujer durante el matrimonio tienen por padre al marido, sin que pueda valer en contrario cualquier declaración o confesión de aquélla o de terceros, que afirme o niegue la paternidad.
- 2º Que, si disuelto o anulado un matrimonio, la madre contrajere uno nuevo sin observar el plazo del art. 398, el hijo que naciere antes de cumplirse el término mínimo de la gestación con respecto al segundo, fué concebido en el primero, siempre que el parto se produjere dentro del máximo que corresponde a este último.
- 3º Que en el supuesto del inciso anterior, fué concebido en el segundo matrimonio, el que la madre diere a luz, expirado el plazo mínimo con respecto a esta unión, aunque se esté dentro del máximo que corresponde a partir de la disolución del primero.

Las presunciones de estos dos últimos incisos no admiten prueba en contra.

Desconocimiento de la paternidad.

445. El padre podrá desconocer su paternidad:

- 1º Si demostrase que según las circunstancias, le fué imposible tener acceso a la madre durante el término de la concepción. No bastará la simple prueba del adulterio.
- 2º Con respecto al hijo concebido antes del matrimonio, que naciere después de su celebración, sin necesidad de prueba alguna; pero no podrá impugnarlo si antes de casarse conoció el embarazo, o consintió que se le atribuyera el hijo en el acta de nacimiento, o de otra manera le reconoció como propio.
- 3º Si hubiere mediado nulidad de matrimonio, separación personal decretada por el juez o en virtud de sentencia, separación de hecho, abandono del hogar o ausencia del esposo o de la mujer, cuando el período de la concepción coincidiera con el de la separación efectiva. No será necesaria otra prueba. Acreditado que durante ese tiempo los cónyuges reanudaron privadamente las relaciones matrimoniales, se estará a la regla general establecida en el inc. 1º (1).

No regirá el inc. 2º, cuando en la época de la concepción las relaciones hubieren sido incestuosas, o una de las partes fuere casada, salvo lo dispuesto sobre el matrimonio putativo.

-
- (1) En el caso de admitirse el divorcio absoluto, habrá que reemplazar este inciso por el siguiente:

“Si hubiere mediado nulidad de matrimonio, divorcio, separación personal decretada por el juez o en virtud de sentencia, separación de hecho, abandono del hogar o ausencia del esposo o de la mujer, cuando el período de la concepción coincidiera con el de la separación efectiva. No será necesaria otra prueba. Acreditado que durante ese tiempo los cónyuges reanudaron privadamente las relaciones matrimoniales, se estará a la regla general establecida en el inc. 1º”.

446. El ejercicio de la acción de desconocimiento de paternidad, se ajustará a las siguientes reglas:

Reglas para el ejercicio de la acción.

- 1º En vida del marido, sólo a él compete la acción de desconocimiento del hijo nacido o concebido durante el matrimonio. Si aquél fuere insano, podrá deducirla el curador autorizado por el juez: pero si no la intentare el representante, o el incapaz no lo tuviere, podrá deducirla éste, recuperada la razón, dentro del término fijado en el inciso siguiente.
- 2º Deberá deducirse dentro de noventa días contados desde que tuvo conocimiento del parto, e intentarse a la vez contra la madre y el hijo. Si éste falleciere, el desconocimiento tramitará ante el juez de la sucesión, notificándose a los que serían sus herederos en caso de legitimidad o ilegitimidad, y también a cualquiera que justificase un interés jurídico en ambos supuestos.
- 3º Fallecido el marido, sus herederos presuntos que debieren concurrir con el hijo o ser excluidos por él, así como los ascendientes del primero, aunque no le sucedan, podrán continuar la acción de desconocimiento iniciada.
- 4º Si el marido reconoció su paternidad expresa o tácitamente, o dejó transcurrir el término sin haberla impugnado, la acción no podrá ser deducida, a menos de haber procedido por error o fraude. En este último caso, la acción por desconocimiento deberá entablarse, tanto por el marido, como por sus ascendientes o herederos, dentro de los noventa días desde que el error o el fraude fueron conocidos.

447. Tendrán asimismo, el derecho de entablar la acción a que se refiere el inc. 3º del art. 446, las personas allí enumeradas:

Ejercicio por otras personas.

- 1º Cuando fuere desconocido el lugar en que reside el esposo o incierta su existencia.
- 2º Si el marido estuvo privado de discernimiento, durante el término en que habría podido desconocer la paternidad, o hubiera muerto antes de vencer el plazo.

En el caso del primer inciso, el término deberá computarse después de transcurrido un año de la ausencia, si los actores fuesen los ascendientes, y si fueran los herederos, después de la declaración presuntiva del fallecimiento.

En el supuesto del segundo inciso, la demanda deberá intentarse dentro de los noventa días por los ascendientes, y de los ciento ochenta por los sucesores, calculándose estos plazos desde la muerte o interdicción.

Denuncia de embarazo.

448. Disuelto el matrimonio o separados los cónyuges, sea de hecho o judicialmente, la mujer que se creyere encinta debe denunciarlo al marido, al juez de la causa o de la sucesión, o a quienes en defecto del hijo, serían llamados a recibir la herencia.

En dichos supuestos, podrá reclamar del cónyuge o de la masa lo necesario para atender los gastos del parto, sin estar obligada a restituir, aunque el hijo no naciere o resultare que no hubo gravidez, salvo que hubiera procedido de mala fe.

Impugnación de la legitimidad.

449. Todo interesado podrá impugnar la legitimidad del hijo:

- 1º Por no haber existido matrimonio entre los padres.
- 2º Por ser nulo o haberse anulado, salvo si fuere putativo.
- 3º Por haber nacido el hijo después de los trescientos días subsiguientes al de la disolución del matrimonio; pero si al esposo no le hubiere sido posible tener acceso a su mujer antes de ese hecho, el plazo se contará desde la fecha de la imposibilidad. El mismo principio regirá en los demás supuestos del art. 445 inc. 3º, cuando no mediare reconciliación.

La acción deberá intentarse, en todos los casos, ante el juez del último domicilio del marido.

Impugnación de la filiación.

450. La filiación de que goce el hijo, aunque sea conforme a los asientos del Registro Civil, o a los parroquiales, o a los de la respectiva comunión religiosa en su caso, podrá ser impugnada por el padre o la madre y por todo aquel que tuviere interés en hacerlo, siempre que se alegare parto supuesto, o substitución de hijo, o no ser la mujer, madre del hijo que pasa por suyo.

451. La facultad de impugnar la legitimidad o la filiación en los casos de los arts. 449 y 450, no prescribe, ni se extingue por renuncia, aunque sí, los derechos pecuniarios ya adquiridos.

Acciones imprescriptibles e irrenunciables.

452. Los hijos legítimos desconocidos por sus padres pueden reclamar su reconocimiento. Este derecho se ejercerá de acuerdo con las normas siguientes:

Acción por reconocimiento de legitimidad.

- 1º Sólo podrá intentarse contra el padre y la madre conjuntamente. Por la muerte de éstos, el hijo deberá demandar a todos los ascendientes legítimos de aquéllos, y cuando se tratare de petición de herencia, a todos los herederos de los padres.
- 2º Cuando el padre, la madre o los ascendientes legítimos de ellos sobrevivieren al hijo, únicamente los descendientes legítimos de éste podrán continuar la acción por él iniciada, o deducirla siempre que aquél hubiera fallecido sin ejercerla antes de cumplirse dos años contados desde la mayor edad del mismo.
- 3º Todos los herederos del hijo podrán proseguir el juicio o iniciar la petición de herencia, cuando sobreviviendo aquél a sus padres, no hubieren transcurrido los dos años señalados para deducir la acción. Ella se extinguirá si no fuere intentada dentro del año desde la muerte del hijo.

453. La filiación legítima se prueba por la inscripción del matrimonio de los padres y del nacimiento, en el Registro correspondiente. Si el hijo no estuviere inscripto, o cuando los libros hubieren sido destruidos, o se perdieren en todo o en parte, o si no hubo asientos, el nacimiento podrá demostrarse por la posesión constante del estado de hijo legítimo.

Prueba de la filiación legítima.

454. La posesión del estado de hijo legítimo se acreditará por un conjunto de hechos suficientes para indicar la filiación o el parentesco en su caso. Tendrán ese valor:

Prueba de la posesión de estado.

- 1º El uso continuo por parte del recurrente, del nombre patronímico de la persona de quien alega ser hijo.

- 2º El trato que los indicados como padre y madre le hubieren dado en calidad de hijo, proveyendo en tal carácter a su educación, sostén y establecimiento.
- 3º La fama que le hubiere reconocido en sociedad como hijo legítimo.
- 4º La aceptación de esa calidad en la familia de los padres.

Prueba supletoria.

455. A falta de las inscripciones requeridas en el art. 453 y de la posesión de estado, o si aquéllas aparecieren bajo falso nombre o como de padres desconocidos, o cuando se tratase de suposición o de substitución de parto, el nacimiento podrá probarse por testigos.

Sin embargo, este medio sólo será admisible en caso de existir principio de prueba por escrito, o siempre que las presunciones resultantes de los hechos demostrados por otros elementos, sean suficientemente graves para determinar su aceptación.

Principio de prueba por escrito.

456. El principio de prueba por escrito podrá resultar de los títulos de familia, de los registros o papeles domésticos del padre o de la madre, de los instrumentos o escrituras públicos o privados que emanaren de una parte comprometida en el litigio, o que tendría interés en él si viviera.

Prueba contraria.

La prueba contraria se producirá por todos los medios adecuados para justificar que el pretendiente no es hijo de la madre que dice tener, o establecida la maternidad de ésta que no es hijo del esposo.

Citación a los parientes.

457. En los casos de los arts. 446, incs. 3º y 4º, 447, 449, 450 y 452, el juez deberá citar personalmente a todos los herederos y a los ascendientes y descendientes más próximos de los padrés en cada línea, a fin de que puedan intervenir en tales juicios si les convinieren.

Efecto de la sentencia.

La sentencia firme que recayere podrá oponerse contra todos.

La misma regla se aplicará cuando se resuelva la existencia o inexistencia entre las partes, de relaciones jurídicas resultantes de la filiación legítima.

CAPITULO II

De la legitimación

458. Los hijos naturales quedan legitimados por el subsiguiente matrimonio de los padres. Los adulterinos o incestuosos, por un matrimonio putativo.

Legitimación por el subsiguiente matrimonio de los padres.

Los adulterinos podrán serlo por uno válido, si a la época de la concepción, uno de los padres ignoraba la existencia de unión legítima respecto del otro.

No habrá otro modo de legitimación para los hijos que tuvieren su domicilio de origen en el país.

Quienes lo tuvieren fuera de él, quedarán sujetos a las leyes del respectivo lugar.

459. La legitimación se regirá por las normas siguientes:

1º Se aplicará únicamente a los hijos cuyos padres tengan su domicilio matrimonial en el país, o lo hubieren tenido al tiempo de contraer la unión.

Normas aplicables.

2º Exigirá el reconocimiento del hijo, efectuado por los padres, sea en la partida de nacimiento o en la de matrimonio, por escritura pública, ante el oficial encargado del Registro Civil o por disposición de última voluntad.

3º Dicho reconocimiento deberá verificarse:

- a) Antes o en el momento de celebrarse el matrimonio.
- b) Dentro de los noventa días subsiguientes a él.
- c) Posteriormente a esa fecha, pero sólo en el caso en que una sentencia fundada en la posesión de estado lo declare eficaz. Tendrá igual valor el fallo que con anterioridad al matrimonio hubiere establecido la filiación.

460. Cuando los padres no hubieren tenido al tiempo de contraer nupcias, su domicilio matrimonial en el país, la

Matrimonio de personas no domiciliadas en el país al contraerlo.

unión, aunque celebrada en la República, no legitimará a los hijos, a menos que esa forma fuere admitida por las leyes del domicilio de los cónyuges.

Anotación marginal.

461. El juez ordenará de oficio que la legitimación por sentencia, en el caso del inc 3º del art. 459, y el matrimonio respectivo, se anoten al margen de la partida de nacimiento. El encargado del Registro dejará la misma constancia cuando el reconocimiento se hubiere efectuado ante él, o a petición de parte en los demás supuestos.

Equiparación de los hijos legitimados a los legítimos.

462. Los hijos legitimados son iguales a los concebidos en el matrimonio para todos los efectos de la ley, y este beneficio se extiende a su posteridad legítima. La designación de "hijos legítimos" comprende también a los legitimados.

La legitimación puede extenderse a los hijos fallecidos al tiempo de celebrarse el matrimonio, cuando dejaren descendientes legítimos, y entonces beneficiará a éstos.

Irretroactividad.

463. Los efectos de la legitimación principian desde que se contrajo el matrimonio. No se retrotraen a la época en que fué concebido el hijo, ni a la de su nacimiento, sea para influir en los derechos sucesorios adquiridos, sea para que los padres puedan aprovechar del usufructo.

TÍTULO II

De la filiación ilegítima

CAPÍTULO I

De los hijos naturales

Concepto.

464. Son hijos naturales los nacidos fuera del matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción pudieron casarse.

La filiación natural resultará del reconocimiento del padre o de la madre, voluntario o en virtud de sentencia. La maternidad se probará por el solo hecho del parto.

Reconocimiento voluntario.

465. El reconocimiento voluntario se ajustará a los siguientes principios:

- 1º Los padres podrán efectuarlo individual o conjuntamente. Si lo hicieren por separado, será prohibido a quien lo prestare declarar el nombre del otro progenitor, y el oficial público no lo hará constar en el acta. Cuando el padre, temiendo fallecer, antes de que nazca el hijo concebido, quisiere reconocerlo, le será permitido consignar el nombre de la madre.
- 2º Podrá prestarse por medio de mandatario, instituido mediante poder especial en escritura pública, donde conste el nombre del hijo.
- 3º Sólo podrá hacerse:
 - a) En el acto de inscribirse el nacimiento ante el Registro Civil.
 - b) Por declaración ulterior ante el oficial encargado del mismo.
 - c) Por escritura pública, instrumento o escrito privado, con la firma del padre o de la madre.
 - d) Por disposición de última voluntad. En este caso valdrán como reconocimiento los términos enunciativos o las frases incidentales en que se manifestare aquel propósito.

4º Salvo el caso del apartado d) del inciso anterior, el reconocimiento es irrevocable. En ningún supuesto admite condiciones, plazos o cláusulas de cualquier naturaleza, que modifiquen sus efectos legales. Tampoco requiere la conformidad del hijo, ni notificación alguna al mismo.

La mujer casada y los menores en edad de contraer matrimonio, pueden reconocer a sus hijos.

466. El reconocimiento del padre o de la madre, podrá también acreditarse mediante la posesión de estado. Esta resultará de un conjunto suficiente de hechos que, según las circunstancias, sean demostrativos de un vínculo cierto de filiación entre el hijo y la persona de quien pretende descender.

Posesión de estado.

467. La filiación establecida por el reconocimiento o por la posesión de estado, puede, dentro del término de un año, ser impugnada por los padres, por el hijo o por los que tuvieren interés en hacerlo.

Impugnación de la filiación.

Si la identidad del hijo o la del autor del reconocimiento fuere objetada, podrá probarse conforme a las reglas generales.

Acción de reconocimiento intentada por los hijos.

468. Los hijos naturales podrán exigir el reconocimiento del padre o de la madre, o que el juez los declare tales. En la investigación de la paternidad o de la maternidad, serán admisibles todos los medios de prueba.

No habiendo posesión de estado, ese derecho sólo podrá ser ejercido por los hijos, durante la vida del padre o madre a quien demanden.

Límite a la indagación de la maternidad.

469. La indagación de la maternidad no será permitida, cuando tenga por fin atribuir el hijo a una mujer casada.

Efecto de la sentencia.

470. Los fallos definitivos que declaren la existencia o inexistencia de la filiación natural, en litigios seguidos con parte legítima, reconocen un estado y producirán efecto contra todos.

CAPÍTULO II

De los hijos adulterinos e incestuosos

Quiénes lo son.

471. Los hijos nacidos de padres que al tiempo de la concepción no habrían podido casarse, serán incestuosos si el impedimento fuere de parentesco; adulterinos, si el obstáculo consistiere en un matrimonio subsistente.

Prohibición de indagar la paternidad o maternidad.

Queda prohibida toda investigación de paternidad o maternidad adulterina o incestuosa. No se admitirá acción del hijo que tuviere por fin declararla judicialmente.

Reconocimiento voluntario de los padres.

472. Los padres pueden reconocer voluntariamente a sus hijos adulterinos o incestuosos, con tal que lo efectúen de una manera expresa. Se aplicarán en este caso las disposiciones del capítulo anterior.

Efecto.

El reconocimiento de los hijos adulterinos o incestuosos los equipara a los naturales.

La inscripción que hicieren el padre o la madre de los hijos nacidos en uniones celebradas fuera del país contrariando las normas en vigor dentro del territorio de la Repú-

blica sobre indisolubilidad del matrimonio, produce el efecto del reconocimiento voluntario. (1)

473. Si alguna persona cuya filiación fuere adulterina, tuviere a su favor reconocimiento o posesión de estado de hijo legítimo, su verdadera filiación sólo podrá serle opuesta en los casos que este Código autoriza, por el cónyuge, los descendientes y ascendientes legítimos del progenitor. No tendrá este derecho el Ministerio Público.

Quienes pueden oponer la filiación adulterina.

474. Es aplicable a los hijos adulterinos e incestuosos lo dispuesto en el art. 470.

Aplicación del art. 470.

TÍTULO III

De la adopción

475. Sólo podrá adoptar, quien hubiere cumplido cincuenta años de edad y carezca de descendencia legítima. El adoptante deberá ser, por lo menos, diez y ocho años mayor que el adoptado.

Quienes pueden adoptar.

La adopción se hará por escritura pública o ante el encargado del Registro Civil, y no podrá sujetarse a condición o término.

Forma.

476. Nadie podrá ser adoptado por dos personas, salvo si fueren marido y mujer.

Adoptantes conjuntos.

No se permitirá a un esposo adoptar ni ser adoptado, sin el consentimiento del otro.

La edad fijada en el art. 475 no será necesaria cuando la adopción se verifique por ambos cónyuges, siempre que la mujer fuere mayor de cuarenta años y hubieren transcurrido más de diez desde la celebración del matrimonio.

Excepción al límite del art. 475.

(1) En el caso de admitirse el divorcio absoluto, deberá reemplazarse este apartado por el siguiente: "La inscripción que hicieren el padre o la madre de los hijos nacidos en uniones celebradas fuera del país contrariando las normas antes en vigor dentro del territorio de la República sobre indisolubilidad del matrimonio, produce el efecto del reconocimiento voluntario".

Adopción de incapaz.

477. Cuando se intentare adotar un incapaz, será necesario el consentimiento de los padres. Cuando se hallare bajo tutela, deberá prestarlo el juez, oído el tutor.

El tutor o el curador no podrán adoptar al pupilo o a quien estuviere bajo su curatela, hasta rendir cuentas y pagar el saldo.

Efecto de la adopción.

478. El parentesco resultante de la adopción se limitará al adoptante y al adoptado, quien será considerado como hijo legítimo.

La adopción producirá su efecto, aunque sobrevinieren hijos al adoptante, salvo cuando ellos hubieren estado concebidos en el día de efectuarse aquélla.

Subsistencia de los efectos del parentesco de sangre.

479. Los derechos y deberes que resulten del parentesco de sangre no quedan extinguidos por la adopción, excepto la patria potestad, que será transferida del padre verdadero al adoptivo.

Disolución del vínculo.

480. El vínculo de la adopción quedará disuelto:

- 1º Por conformidad de partes, con la formalidad establecida en el art. 475.
- 2º Si el adoptado durante su minoridad o bajo interdicción, lo solicitare dentro de un año de haber adquirido o recobrado la capacidad.
- 3º Siempre que el adoptado incurriese en ingratitud respecto del adoptante.
- 4º Cuando las personas unidas por él, contrajeran matrimonio.

TÍTULO IV

Del parentesco y de la prestación de alimentos

481. Son parientes legítimos:

Parientes legítimos.
Clase.

- 1º Por consanguinidad en línea recta, los ascendientes y descendientes entre ellos, y en línea colateral, los que sin hallarse en el caso anterior, proceden de un autor común.
- 2º Por afinidad, los consanguíneos de uno de los esposos, respecto del otro.

En el supuesto del primer inciso, los grados de parentesco se determinan por el número de generaciones que lo causen, y en el del segundo, las líneas y grados por los que respectivamente correspondan en virtud de la consanguinidad, al cónyuge que produce la afinidad.

482. El vínculo de la afinidad no se extiende a los parientes del otro esposo. Subsistirá después de la disolución del matrimonio. (1)

Efecto de la afinidad.

483. Son parientes ilegítimos, las personas que proceden de un autor común, por una o más generaciones fuera del matrimonio. No harán parte de la familia legítima.

Parentesco ilegítimo

484. La prestación de alimentos que el parentesco impone, se ajustará a las reglas que siguen:

Prestación de alimentos. Reglas.

- 1º Comprenderá, en la medida adecuada de quien la reciba, lo necesario para la subsistencia, habitación y vestido, como también lo indispensable para asistirle en sus enfermedades.

Quando se tratare de persona que esté en el caso de ser educada, comprenderá los gastos que ello demande, así como los de prepararla para una profesión.

- 2º Quien la solicitare deberá probar que le faltan los medios para alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuere la causa que le hubiere reducido a tal estado.
- 3º Estarán obligados recíprocamente y en el orden que sigue:

- a) Los padres y los hijos legítimos.
- b) Los abuelos, y en su defecto, los ascendientes más próximos, respecto de sus descendientes.
- c) Los hermanos legítimos.

(1) En el caso de admitirse el divorcio absoluto, habrá que reemplazar este artículo por el siguiente: "El vínculo de la afinidad no se extiende a los parientes del otro esposo. Subsistirá después de la disolución del matrimonio, salvo que ella se debiera a divorcio absoluto".

Quando existieren cónyuges, ellos estarán obligados en primer término.

- 4º Los descendientes la deberán antes que los ascendientes. La obligación de aquéllos se determinará según el orden de las sucesiones, y proporcionalmente a sus cuotas hereditarias.

Entre ascendientes, los más próximos estarán obligados antes que los más lejanos, y los del mismo grado, por partes iguales.

- 5º Los hijos ilegítimos la deben al padre y a la madre, y éstos a los primeros, así como a los descendientes legítimos de los mismos. Los hijos ilegítimos, cuando existen hijos legítimos de sus padres, concurren con ellos proporcionalmente a sus cuotas hereditarias respectivas.

- 6º Entre los parientes por afinidad, únicamente se deben alimentos el suegro y la suegra, y el yerno y la nuera.

- 7º Cuando existieren varios alimentistas y el obligado no se hallare en situación de atenderlos, pasará en todo o en parte a los otros parientes, según lo dispuesto en el inc. 3º. No deberá alimentos el que, tenidas en cuenta sus otras cargas, no podría suministrarlos sin poner en peligro su propio sostenimiento, según su condición.

- 8º Deberá cumplirse con el pago de una renta en dinero. El obligado podrá proponer otra manera de prestarlos, cuando motivos particulares así lo justifiquen.

Alteración del orden en que deben prestarse.

485. Podrá alterarse el orden establecido en el artículo anterior, inc. 3º, si alguno de los enumerados careciera de medios suficiente para prestar los alimentos, o cuando existiere grave dificultad para demandar a cualquiera de ellos.

Prohibición de repetir alimentos.

486. Quien prestare o hubiere prestado alimentos, voluntariamente o por decisión judicial, no podrá repetirlos en todo o en parte de los otros parientes, aunque éstos se encontraren en el mismo grado y condición que él.

Otras prohibiciones.

487. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni objeto de transacción. El derecho a reclamar

los no será susceptible de renuncia ni de cesión, ni materia de gravamen o embargo alguno.

488. El trámite para solicitar alimentos será sumario y no se acumulará a ningún otro juicio. Desde el principio de la causa o en el curso de ella, podrá el juez decretar su prestación provisional y el pago de las litis expensas, una vez justificada la falta absoluta de medios para seguirlo.

Trámite del juicio.
Alimentos provisionales y expensas.

El mismo procedimiento se aplicará para los casos de cesación, pudiendo el juez suspender en forma transitoria el pago de las cuotas.

En igual forma podrá ser alterada la pensión, cuando los medios del deudor o las necesidades del alimentista hubieren variado.

489. No se admitirá recurso alguno con efecto suspensivo, contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos, ni podrá el alimentista ser obligado a dar garantía de restituir lo recibido, en caso de ser aquélla revocada o modificada.

Efecto devolutivo.

490. Cesará la obligación:

Cesación.

- 1º Si fuere a favor de hijos menores legítimos o naturales, cuando éstos se casaren sin la venia correspondiente, o cuando dejaren la casa de los padres sin autorización de éstos.
- 2º Si quien recibe los alimentos cometiera algún acto que le tornase indigno de heredar al que los presta.
- 3º Por la muerte del obligado o del alimentista. La obligación subsistirá para las prestaciones no cumplidas, y en caso de muerte del que las recibe, se extenderá al pago de los gastos de su inhumación, si éstos no pudieren obtenerse de los herederos.
- 4º Cuando hubieren desaparecido las causas que la determinaron.

SECCION TERCERA

DE LA PROTECCION DE LOS INCAPACES

TITULO I

De la patria potestad

Concepto.

491. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a los padres sobre la persona y bienes de los hijos menores no emancipados.

Facultades del padre y de la madre.

492. El ejercicio de la patria potestad sobre los hijos legítimos pertenece al padre. En caso de fallecer éste, o de haber incurrido en la pérdida de aquel derecho o de su ejercicio, pasará a la madre, aunque ella hubiere contraído ulteriores nupcias.

Si mediare separación judicial o nulidad de matrimonio, el cuidado de los hijos se regirá por el art. 383. El derecho de educarlos, la representación y el manejo de los bienes quedarán a cargo del padre. El esposo que no tuviere el hijo bajo su guarda, conservará la facultad de mantener relaciones personales con él, en la medida que fijará el juez, si hubiere controversia.

Hijos ilegítimos.

493. La patria potestad sobre los hijos ilegítimos corresponde a quien los hubiere reconocido espontáneamente. Cuando ambos padres lo hubieren efectuado, se procederá como lo determina el artículo anterior.

Si el reconocimiento fuere judicial, el padre o madre tendrán tan sólo los deberes que establece este título para los padres ilegítimos.

Contenido de la patria potestad.

494. La patria potestad comprende:

- 1º El cuidado de la persona, o sea la crianza, educación y vigilancia del hijo, con la facultad de fijar el lugar de su residencia.

2° La representación legal de aquél.

3° La administración de los bienes.

Tanto el padre como la madre, tienen durante la unión matrimonial el derecho y deber de cuidar de sus hijos legítimos. En caso de disenso, prevalecerá la opinión del primero.

Les corresponde asimismo, la facultad de corregir o hacer corregir moderadamente a sus hijos, y con intervención del juez, la de internarlos en un establecimiento correccional.

Podrán también exigir de sus hijos les presten los servicios propios de su edad, sin que tengan éstos derecho a pago o recompensa.

Los padres no están obligados a dar a sus hijos los medios de formar un establecimiento, ni a constituir la dote de las hijas.

495. Cuando los padres faltaran a la obligación de cuidar y sostener a sus hijos, éstos podrán demandarlos por alimentos, si fueren adultos, asistidos por un tutor especial. También podrá deducir esta acción cualquiera de los parientes o el Ministerio Público.

Deber alimentario

Si el menor ausente de la casa paterna, se hallare en caso de urgencia, que no pudiera ser atendida por los padres, los suministros que se efectúen se juzgarán realizados con autorización de aquéllos.

Los menores ausentes del hogar con licencia de los padres, o en país extranjero, o en lugar remoto dentro del territorio de la Nación, que tuvieren necesidad de recursos para sus alimentos u otras exigencias urgentes, podrán ser autorizados por el juez local o por el cónsul argentino, para contraer las deudas indispensables.

496. Los hijos no podrán dejar la casa paterna, o aquella en que sus padres les hubieren colocado, ni enrolarse voluntariamente en servicio militar, ni entrar en comunidades religiosas, ni obligar su persona de otra manera, ni ejercer oficio, profesión o industria independiente, sin licencia de aquéllos.

Casos de venia.

Los actos ejecutados contra lo dispuesto serán nulos. Los padres podrán, además, exigir que las autoridades públicas les presten la asistencia necesaria para reintegrar los

Intervención en juicio.	menores a su poder, y acusar criminalmente a los seductores de sus hijos, así como a las personas que los retuvieren. 497. El hijo sólo puede comparecer en juicio con la autorización del padre, salvo los casos previstos en este título. Si el padre negare su consentimiento, el juez podrá suplirlo en vista de las razones aducidas por el interesado. No será menester la venia cuando el menor fuere demandado criminalmente.
Autorización presunta.	498. Se presume que los hijos, cuando ejerzan cualquier empleo público, profesión o industria, se hallan autorizados por los padres para todos los actos y contratos concernientes a esa actividad, así como para estar en juicio. Las obligaciones que surgieren, recaerán exclusivamente sobre los bienes, cuya administración y usufructo, o sólo el usufructo, no tuviere el padre. 499. Los mayores de dieciocho años podrán hacer testamento y reconocer hijos, sin necesidad de venia.
Casos que no exigen venia.	500. Los padres tendrán la administración de los bienes de sus hijos menores. Esta no les corresponderá, sin embargo:
Administración de los padres. Excepciones.	

- 1º Si fueren privados de ella, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 508.
- 2º Cuando así lo hubieren ordenado los testadores o donantes, en las liberalidades acordadas a los hijos. Aquéllos podrán designar un curador o fijar límites y condiciones a la administración paterna, cuando la hubieren aceptado.

Autorización judicial.

501. Los padres necesitan autorización judicial:

- 1º Para disponer de los inmuebles y gravarlos con derechos reales, a no ser el caso de enajenación forzosa.
- 2º Para constituir prenda sobre los muebles, salvo los consumibles comprendidos en el usufructo.
- 3º Para enajenar los ganados de cualquier clase, que formen los establecimientos rurales, excepto aquellos de que pudieren disponer los usufructuarios de rebaños.
- 4º Para transferir títulos de renta.

- 5º Para provocar la división de condominio o herencias, aunque en ellos tuviere parte el padre. El juez no la concederá si hubiere perjuicio para el incapaz, o si el donante o testador la hubiere prohibido dentro del límite fijado por la ley.] *de*

Los actos de enajenación, a que se refieren los incisos precedentes, deberán realizarse en remate público, sin que sea menester el previo avalúo.

Cuando estos actos fueren realizados sin la venia del juez, serán nulos.

502. No podrán los padres, aunque los autorizare el juez: *Actos prohibidos.*

- 1º Celebrar contrato con los hijos que se hallaren bajo su potestad.
- 2º Comprar por sí o persona interpuesta, muebles o inmuebles de aquéllos, aunque sea en remate público; ni tampoco venderles sus bienes propios. La prohibición no rige cuando mediare copropiedad entre ellos.] *de*
- 3º Constituirse en cesionarios de sus créditos, derechos o acciones.
- 4º Hacer remisión voluntaria de los derechos de aquéllos.
- 5º Transferir derechos reales pertenecientes a los menores sobre bienes ajenos.]
- 6º Obligarles como fiadores.

503. Los padres necesitarán la conformidad del hijo mayor de catorce años para dar en locación los servicios de éste, o colocarle en aprendizaje. *Actos que requieren la conformidad de los hijos.*

504. Dentro de los noventa días subsiguientes al deceso de uno de los padres, el supérstite deberá levantar inventario judicial de los bienes del matrimonio, con determinación de los que correspondan a los hijos. Se procederá de igual manera, cuando el padre entrare en posesión de los bienes donados o dejados por testamento al menor. *Inventario de los bienes.*

Los padres ilegítimos llenarán esta formalidad, al recibir los bienes cuyo usufructo les corresponda.

La inobservancia de lo dispuesto en el presente artículo, permitirá al Ministerio Público exigir su cumplimiento, y causará la pérdida de la mitad del usufructo.

Usufructo de los padres.

505. Los padres tienen el usufructo de los bienes, cuya administración les corresponde, derecho que se rige por las disposiciones del título VII, Libro IV, en cuanto no se modificaren por el presente. Será implícita la cláusula de no tener los padres el usufructo, cuando el testador o donante hubiere dispuesto el empleo de los respectivos frutos o rentas. Tampoco lo tendrá respecto de los bienes que los hijos recibieren por indignidad del padre.

El padre podrá enajenar las cosas consumibles que formen parte del usufructo, o disponer de ellas, pero deberá al finalizar aquél restituir su valor, sin perjuicio de efectuar el reembolso cuando la administración regular así lo exija.

Todo dinero del menor deberá ser depositado en la cuenta del mismo hasta su inversión, la que se efectuará con la venia del juez.

Cargas del usufructo.

506. Son cargas del usufructo legal de los padres:

- 1º Las que pesan sobre todo usufructuario, excepto la obligación de afianzar.
- 2º Los gastos de subsistencia y educación del hijo, que correspondan al tiempo del usufructo.
- 3º Los derivados de las enfermedades y entierro del hijo, así como el sepelio de quien lo hubiere instituido heredero.
- 4º El pago de los intereses por los capitales durante el tiempo del usufructo.

Estas cargas son reales. Sólo podrá embargarse el usufructo por obligaciones de los padres, con tal de reservar lo necesario para el cumplimiento del presente artículo.

El juez no podrá intervenir en la ejecución de lo prescripto en el inc. 2º, menos que se alegare la insuficiencia de la renta para llenar tales obligaciones.

Fin del usufructo.

507. El usufructo termina por el matrimonio del hijo menor de edad. Cuando lo celebrare sin la autorización necesaria, el poder paterno continuará respecto de los bienes con el carácter y efectos de una tutela.

Mala administración.

508. Si el patrimonio del hijo peligrare por la administración del padre, o por no cumplir éste con sus obligaciones como usufructuario, o por su estado de insolvencia, el juez podrá ordenar las medidas conservatorias tendientes a

evitarlo. No ejecutadas éstas, o en caso de ineptitud o abuso notorio del padre, podrá el juez privarle definitivamente de la administración, que deberá encomendar a la madre, a menos que se opusiere a ello el interés del menor. Se entregará al padre el sobrante de las rentas, después de satisfechos las cargas del usufructo y los gastos para administrar los bienes, salvo que se le hubiere removido por ex-tralimitación dolosa o culpable.

509. Cuando el padre hubiere sido privado de la administración de los bienes heredados por su hijo o donados a éste, tendrá derecho a los frutos, si otra cosa no dispusiere el título. Le será permitido en tal caso, exigir la entrega de los productos útiles, en cuanto su empleo no fuere necesario para una administración regular y para satisfacer las cargas del usufructo.

Suspendido el poder del padre, o retirada al mismo la guarda de la persona y bienes del hijo, los gastos para el sostenimiento de éste tendrán prioridad sobre los productos útiles del usufructo, en la medida que estuvieren a cargo del padre.

510. Corresponderá a los hijos mayores de dieciocho años la administración y el usufructo de los bienes siguientes:

Derecho del padre removido de la administración.

Peculio de los hijos

- 1º De aquellos que hubieren adquirido por sus servicios civiles, militares o eclesiásticos.
- 2º De los que ganaren con su trabajo o industria independientes de las actividades de sus padres, aunque vivan en casa de éstos.
- 3º De los obtenidos por casos fortuitos.
- 4º De los que heredaren, por haber sido excluidos el padre o la madre en una sucesión.

En los dos últimos supuestos procederá el nombramiento de un curador especial, según la cuantía de esos bienes, cargo que podrá confiarse al padre.

Los menores podrán estar en juicio con la autorización paterna, en cuanto se tratare de los bienes comprendidos en este artículo.

511. El ejercicio de la patria potestad quedará suspendido por ausencia de los padres, cuando se ignore su para-

Suspensión de la patria potestad.

dero, y por incapacidad mental de los mismos, mientras no recuperen la razón.

Los jueces podrán suspender el ejercicio de la patria potestad, cuando el padre o la madre tratasen a los hijos con innecesario rigor, o si por efecto de su ebriedad consuetudinaria, manifiesta inconducta o negligencia grave, comprometieren la salud, seguridad o moralidad de los hijos.

La suspensión judicial puede durar desde un mes hasta que el hijo llegue a la mayor edad.

Fin de la patria potestad.

512. La patria potestad termina:

- 1º Por la muerte de los padres o de los hijos.
- 2º Por la profesión de los padres en institutos monásticos, o por la de los hijos con autorización de aquéllos.
- 3º A consecuencia de la adopción del hijo por un tercero.
- 4º Por la mayor edad del hijo.
- 5º Por el matrimonio del mismo.
- 6º Por incurrir el titular en la pérdida de su ejercicio:
 - a) Si hubiere cometido delito contra el hijo o hijos menores.
 - b) Si los expusiere o abandonare. Se entenderá por abandono, tanto el material como el descuido de los deberes relativos a los alimentos, vigilancia y educación.
 - c) En caso de conducta deshonrosa, de malos ejemplos o consejos a los menores, o de colocarlos intencionalmente en peligro material o moral. El juez podrá, antes de resolver la pérdida de la patria potestad, ordenar que el hijo sea colocado para su educación en una familia honorable, o en un establecimiento de enseñanza o correccional.
 - d) Si mediare condenación por delito grave, o se tratase de un delincuente profesional o peligroso.

Patronato del Estado.

513. Declarada la suspensión, o la pérdida de la patria potestad, o de su ejercicio, los menores quedarán bajo el patronato del Estado nacional o provincial.

514. Terminada la patria potestad, los que hubieren estado sometidos a ella podrán exigir la entrega inmediata de los bienes.

Entrega de los bienes al término de la patria potestad.

TITULO II

De la tutela

CAPITULO I

Disposiciones generales

515. Se dará tutela a los menores que no se hallaren bajo patria potestad. Concepto de la tutela.

La tutela es una carga personal, que no pasa a los herederos, y de que nadie puede excusarse sin motivo suficiente.

516. Será juez competente el del lugar en que estuviere domiciliados o residieren los padres el día de su fallecimiento, o en la fecha de la sentencia que les hubiere privado de su derecho sobre los hijos. Cuando éstos fueren ilegítimos, el de la residencia de quien primero los hubiere reconocido, o fuere condenado en juicio de filiación. Respecto de los expósitos o abandonados, el del punto en que éstos se hallaren. Competencia.

El juez conocerá hasta el término legal de la tutela, en todo cuanto a ella pertenezca, aunque los bienes del incapaz estuvieren fuera del lugar de su jurisdicción y aquél cambiara de domicilio o residencia.

517. El padre o la madre sobreviviente, sean mayores o no, legítimos o ilegítimos, podrán designar por testamento o por escritura pública, tutor a sus hijos, inclusive al póstumo, siempre que no hubieren sido privados de la patria potestad, o suspendidos en ella por causa que les fuere imputable. Tutela designada por los padres.

Será lícito usar de esta facultad a cualquiera de los padres, cuando el otro se hallare insano, se le hubiere declarado ausente, o perdiere su derecho sobre los menores.

Curatela para la administración de ciertos bienes.

518. El padre o madre ilegítimos, aunque no fuere el supérstite, podrán designar curadores para la administración de los bienes que hubieren donado o que dejen a los hijos, con cláusula excluyente del que tuviere la patria potestad, o de los tutores indicados por éste.

Son aplicables al caso las mismas disposiciones de la tutela relativa a los hijos legítimos.

Cláusulas permitidas y prohibidas.

519. Los padres podrán designar tutor bajo cualquier cláusula o condición no prohibida. Tendrán este último carácter, y se juzgarán no escritas, las que eximan al propuesto de levantar inventario, de recibir los bienes sin llenar dicho requisito, o de rendir cuenta de la administración, todas las veces que lo ordena este Código.

Tampoco será permitido que dos o más tutores ejerzan simultáneamente la guarda del menor. No obstante, cuando así resultare del título constitutivo, se entenderá que desempeñarán el cargo en el orden en que aparezcan mencionados.

La designación hecha por los padres deberá ser confirmada por el juez, quien nombrará al propuesto, a no mediar motivos suficientes, que se opongan a ello.

Tutela legítima. Orden.

520. A falta de tutor designado por los padres, corresponde la tutela a los parientes consanguíneos del menor, en éste orden:

- 1º Al abuelo paterno, al materno, y a falta de éste, a la abuela paterna; en su defecto, a la materna.
- 2º A los hermanos, debiendo preferirse los bilaterales a los de un solo lado, los de sexo masculino a los del femenino, los de más edad a los más jóvenes.
- 3º A los tíos, siguiendo las mismas preferencias que en el inciso anterior.

Facultad del juez.

La prelación establecida no limitará el arbitrio del juez, quien debe elegir a la persona más capacitada por sus aptitudes, responsabilidad o buen concepto. Cesando el tutor legítimo, será reemplazado en lo posible por otro de la misma calidad.

Tutela dativa.

El presente artículo no regirá para los hijos ilegítimos. **521.** El juez dará tutor al menor que no lo tuviere designado por los padres y que carezca de parientes idóneos para ejercer la tutela legítima, o siempre que el cargo se hallare vacante.

El tutor dativo permanecerá en funciones mientras dure la incapacidad, y su nombramiento no podrá hacerse en forma condicional.

522. Los jueces no podrán conferir la tutela dativa:

Quienes no pueden ser tutores dativos.

- 1º A sus consanguíneos o afines dentro del cuarto grado.
- 2º A sus amigos íntimos, o a los de sus parientes dentro del mencionado límite.
- 3º A sus socios, deudores o acreedores.
- 4º A los miembros de los tribunales nacionales o provinciales que ejercieran sus funciones en el lugar del nombramiento; como a sus socios, deudores o acreedores, amigos o parientes dentro del mismo grado.
- 5º A una misma persona, respecto de tutelas para menores pertenecientes a familias diversas, a menos de tratarse de filántropos públicamente reconocidos como tales.

Estas prohibiciones no regirán en cuanto a los parientes de los incapaces, ni para los pupilos sin recursos.

523. La tutela de los niños abandonados en hospicios o casas de expósitos, por cualquier título o denominación que sea, será desempeñada por las comisiones administrativas de aquéllos.

Tutela de niños abandonados.

524. Procederá el nombramiento de tutores especiales:

Tutelas especiales.

- 1º Cuando hubiere oposición de intereses entre los menores y sus padres o tutores generales o especiales.
- 2º En caso de que los padres perdieren la administración de los bienes de aquéllos.
- 3º Si los hijos recibieren bienes, cuyo manejo no corresponda a los padres o al tutor, por haberlo así dispuesto quien los transfirió a título gratuito, o en virtud de ser designada la persona que haya de administrarlos.
- 4º Si hubiere intereses encontrados entre el pupilo y otro incapaz bajo la tutela o curatela del padre o tutor.
- 5º Cuando tuvieran bienes fuera del lugar de la jurisdicción del juez, que no pudiesen ser convenientemente administrados por el padre o tutor.

- 6º En caso de negocios o de bienes que exijan conocimientos especiales, o una administración distinta.

Se observará para estos nombramientos lo dispuesto sobre la tutela testamentaria y la legítima.

Quienes no pueden ser tutores.

525. No pueden ser tutores:

- 1º Los menores.
- 2º Los privados de razón.
- 3º Los ciegos y los mudos.
- 4º Los que no tengan domicilio en el territorio de la Nación.
- 5º Los concursados, mientras no hayan satisfecho a sus acreedores.
- 6º La persona que hubiere perdido la patria potestad, o fuere removida de la tutela o curatela de otro incapaz.
- 7º Los que deban ejercer por largo plazo o por tiempo indefinido, un cargo o comisión fuera del país.
- 8º Quien no tenga oficio, profesión o modo de vivir conocido, u observe notoria mala conducta.
- 9º El condenado a reclusión o a prisión por más de tres años.
- 10º El que haya malversado fondos ajenos.
- 11º Los deudores o acreedores del pupilo por prestaciones considerables.
- 12º Quienes tengan, ellos, sus padres, hijos o cónyuges, pleito con el incapaz sobre su estado o bienes.
- 13º Los parientes que no pidieron tutor para el menor que no lo tenía.
- 14º Los miembros del ejército o de la marina en servicio activo, incluso comisarios, médicos y cirujanos.
- 15º Los religiosos profesos.

CAPÍTULO II

Del comienzo de la tutela

Discernimiento de la tutela.

526. No se ejercerá el cargo de tutor, sin que sea discernido por el juez competente, ante quien el nombrado o

confirmado deberá prometer bajo juramento el buen desempeño de su cargo.

Los actos del tutor anteriores al discernimiento no producirán efecto, pero cumplido ese extremo, quedarán ratificados si de ellos no resultare daño para el menor.

Actos anteriores.

527. Discernida la tutela, se entregarán los bienes del pupilo al tutor, previo inventario de ellos y avalúo de los muebles con intervención judicial, a menos que esas operaciones se hubieren ya efectuado.

Inventario y avalúo de los bienes.

Para realizar el inventario, el juez podrá disponer que acompañen al tutor, uno o más parientes del pupilo, u otras personas al tanto de los intereses del mismo.

Si el tutor tuviere crédito contra el incapaz, deberá figurar en el inventario. Si no lo hiciere, no podrá reclamar luego, salvo que al omitirlo hubiese ignorado su existencia.

528. Serán inventariados en la misma forma, los bienes que en adelante obtuviere el menor por sucesión u otro título.

Nuevos bienes.

Si el tutor sucede al padre o a uno anterior, deberá inmediatamente pedir al substituto o a sus herederos, rendición judicial de cuentas y entrega de los bienes del pupilo.

Rendición de cuentas.

CAPITULO III

Administración de la tutela

529. El tutor es el representante legítimo del pupilo, en todos los actos jurídicos relativos a la administración y gobierno de los bienes que no estuvieren exceptuados. Actúa y gestiona solo, en nombre del menor, sin el concurso de éste y prescindiendo de su voluntad.

Representación del pupilo por el tutor.

530. En lo pertinente, se aplican a la tutela las disposiciones de la patria potestad.

Aplicación de las reglas de la patria potestad.

531. El juez fijará la suma anual para la educación y alimentos del menor, teniendo en cuenta la edad, los bienes y la renta que ellos produzcan, sin perjuicio de adecuarla a las ulteriores necesidades de aquél. Se atenderá también a lo determinado en el testamento del padre, o de quienes dejaron bienes al pupilo.

Suma anual para alimentos y educación.

Quando se tratare de indigentes, o no alcanzaren los medios para los gastos de educación y alimentos, podrá el tutor, con autorización del juez, exigirlos a los parientes a quienes corresponda. Quien de éstos los diere, estará facultado con la misma venia, para la guarda del incapaz y proveer a la enseñanza del mismo.

Régimen de los bienes.

532. Los bienes del pupilo sitos en el territorio de la Nación, serán administrados de acuerdo con las leyes de este Código.

Los muebles o inmuebles ubicados en el extranjero, se regirán en cuanto a su administración y enajenación, por las leyes del país en que se hallaren.

Sobrantes. Inversión.

533. Si, cubierto el usufructo paterno o el del pupilo, hubiere sobrante en la renta de éste, el tutor deberá colocarlo en los bancos a nombre del incapaz y a la orden judicial. Se depositarán asimismo inmediatamente, los capitales o valores que pertenezcan al menor o se hubieran obtenido por venta de sus bienes.

Actos que exigen venia judicial.

534. Será necesaria al tutor la autorización del juez:

- 1º Para realizar todos los actos que exijan poderes especiales en el mandatario. Respecto de los arrendamientos concedidos exclusivamente por el tutor, el plazo máximo será de cuatro años, salvo el caso del art. 1065. Los de mayor plazo exigirán venia judicial.

Las locaciones autorizadas valdrán hasta el final, aunque el término se cumpliera después de la mayor edad o de la emancipación del menor.

- 2º Para enajenar los bienes raíces del pupilo, y también los muebles, salvo respecto de éstos, cuando los actos correspondan al desempeño de una administración regular.

Si existiere usufructo paterno, regirá lo dispuesto en el título VII, Libro IV.

- 3º Para provocar la división del condominio o de la herencia en que tuviere parte el menor. Se aplicará la regla del art. 501, inc. 5º.
- 4º Para retirar los depósitos en efectivo y los títulos de renta, así como para invertirlos.

535. El juez podrá autorizar la venta de los inmuebles pertenecientes al pupilo:

Ventas que puede autorizar el juez.

- 1º Cuando las rentas fueren insuficientes para los gastos de educación y alimentos.
- 2º Si fuere necesario satisfacer deudas que no admitieren demora, no habiendo otros bienes ni recursos para ello.
- 3º Siempre que la conservación del inmueble reclamare crecidos gastos, o que estando deteriorado, no pudieran efectuarse las reparaciones sin enajenar otro bien raíz o contraer una deuda considerable.
- 4º Si existiendo comunidad con tercero la continuación de aquélla perjudicare los intereses del menor.
- 5º Cuando fuere para cumplir un contrato celebrado con el anterior propietario, o si hubiese hecho tradición del bien, o recibido total o parcialmente su precio.
- 6º Cuando estuviere comprendido en algún establecimiento de comercio o industria, heredado por el menor, y que deba enajenarse con aquél.

La autorización no será requerida en los supuestos del art. 904, incs. 1º y 2º.

536. Los bienes muebles serán prontamente vendidos, excepto los necesarios para el uso del pupilo, según su condición y fortuna, los que formaren parte integrante de establecimientos heredados que no se enajenasen, los retratos u otros recuerdos de familia o con un valor afectivo, así como los libros, objetos artísticos, colecciones cuya conservación no fuere perjudicial para los intereses del incapaz.

Bienes muebles.

Las joyas o los objetos de oro y plata serán depositados a la orden del juez, pudiendo quedar bajo la guarda del representante legal.

537. Los bienes muebles o inmuebles sólo podrán ser vendidos en remate público, salvo cuando los primeros fueren de poca importancia, o alguien ofreciere un precio razonable a juicio del tutor y del juez.

Forma de las ventas.

538. Si correspondiese al menor algún comercio o industria o una participación en establecimiento social, se aplicarán las normas siguientes:

Industria o comercio correspondiente al pupilo.

- 1º En el primer supuesto, el juez, con pleno conocimiento del negocio, autorizará al tutor para que por sí, o por agentes de su confianza, dirija las operaciones y trabajos, efectúe los pagos y ejecute todos los actos de un mandatario con libre administración, sin necesidad de venia especial, salvo el caso de una medida extraordinaria.
- 2º Si el juez no concediera la autorización mencionada en el inciso anterior, o juzgase luego que sería perjudicial al pupilo continuar el giro del negocio, facultará al tutor para enajenarlo en venta pública o privada, después de tasado o estimada la importancia del establecimiento.

La venta será sometida a la aprobación del juez. Mientras no fuere posible realizarla, el tutor quedará autorizado para proceder como más convenga a los intereses del menor.

- 3º En el caso de que el pupilo tuviera una participación en establecimiento social, el tutor, teniendo en cuenta las disposiciones del causante, el contrato, la naturaleza y estado del negocio, deberá informar al juez si conviene continuar o disolver la sociedad. Resuelto lo primero, el juez autorizará al tutor para que haga las veces del socio, a quien el pupilo hubiese heredado.
- 4º Cuando se determinara que la sociedad se disuelva luego, o después de vencido el contrato, el juez autorizará al tutor para que de acuerdo con los demás socios, ajuste la venta o la cesión de la cuota del pupilo a los otros, o a un tercero con asentimiento de ellos, y si no fuere posible la venta, para inspeccionar y promover la liquidación final y percibir el saldo.
- 5º Lo dispuesto en los dos incisos anteriores, no rige cuando la participación del menor fuere en sociedad anónima o en comandita por acciones.

Remuneración del tutor.

539. El tutor percibirá por sus cuidados y trabajos, sea cual fuere la naturaleza de ellos, la décima parte de los frutos líquidos de los bienes de su pupilo. Para el cómputo, se tomarán en cuenta los gastos de la producción y to-

das las pensiones, contribuciones públicas y cargas usufructuarias sobre el patrimonio del menor. En cuanto a los frutos pendientes al tiempo de principiarse la tutela, la décima quedará sujeta a las reglas del usufructo.

540. El tutor no tendrá derecho a remuneración alguna, y restituirá lo que por ese título hubiese percibido:

Remuneración impropia.

- 1º Si el o sus ascendientes legítimos hubieren contraído matrimonio con el pupilo o la pupila antes de estar aprobadas las cuentas de su gestión.
- 2º Si fuere removido por culpa o dolo.
- 3º Si, nombrado por los padres, recibiere algún legado de ellos, que pueda estimarse remuneratorio de su trabajo. Podrá optar, sin embargo, entre no aceptar la manda, o restituirla y recibir la décima.
- 4º Cuando los menores sólo tuvieren rentas suficientes para sus alimentos y educación, la décima podrá no ser abonada, o disminuirse dentro del sobrante.

CAPITULO IV

Cuentas de la tutela

541. El tutor deberá llevar cuenta fiel y documentada de las entradas y gastos autorizados de su administración, aunque el testador le hubiere eximido de rendirla.

Obligación de llevar cuentas.

En cualquier tiempo podrán exigirla el Ministerio Público, o el mismo menor, si hubiere cumplido dieciocho años, por motivos que el juez estime suficientes.

542. Terminada la tutela, el tutor o sus herederos entregarán de inmediato los bienes, y darán cuenta dentro del plazo que el juez señale, aunque el pupilo en su testamento les hubiera exonerado de ese deber. La rendición se hará al ex-pupilo, si fuere mayor, o a quien le represente.

Rendición de cuentas.

543. Se abonarán al tutor los gastos debidamente efectuados aunque no hubieren producido utilidad al pupilo.

Gastos del tutor.

Los saldos de las cuentas devengarán, desde su clausura, intereses legales a favor y en contra de las partes.

Apreciación del perjuicio.

544. Contra el tutor que no dé cuenta justificada de su administración, o que fuere convicto de dolo o culpa, el menor o su representante tendrán derecho de apreciar bajo juramento el perjuicio sufrido. Dentro de esa estimación, el juez podrá condenar a la suma que considere arreglada.

Convenios nulos.

545. Es nulo todo convenio celebrado antes o dentro de los treinta días de la rendición de cuentas, entre el tutor y el pupilo mayor o emancipado, sobre la administración de la tutela o el ajuste de aquéllas.

CAPITULO V

Terminación de la tutela

Casos.

546. La tutela termina:

- 1° Por muerte o incapacidad del tutor.
- 2° Por su excusación o remoción, admitida o decretada por el juez.
- 3° Por fallecimiento del menor, por su mayoría de edad, o en virtud de su emancipación con la venia necesaria. Si ella faltare, continuará la tutela en cuanto a la administración de los bienes, pero cesará respecto de la persona del pupilo.
- 4° En caso de declaración del presunto fallecimiento del menor, desde el día de la entrada de los herederos en posesión de los bienes.
- 5° Desde que cesare la incapacidad del padre, o se le hubiere reintegrado en la plenitud de la patria potestad.
- 6° Cuando se tratare de tutela especial, con la causa que la hubiere producido o con la extinción de los bienes a que ella estuviere limitada.

Separación del tutor.

547. Serán separados de la tutela:

- 1° Los inhábiles para ejercer el cargo, desde que sobrevenga la inhabilidad.
- 2° Aquellos que no levanten inventario en los términos y formas dispuestos por este título, o no lo hubieran hecho fielmente.

- 3º Quienes no cuidaren de una manera satisfactoria de la salud, seguridad y moralidad del menor que tuvieren a su cargo, o de su educación e intereses.

548. En caso de muerte natural o presunta del tutor, sus albaceas y sus herederos mayores, deberán hacerlo saber al juez y proveer entre tanto, a lo que exijan las circunstancias respecto de los bienes y persona del pupilo.

Muerte del tutor.

TITULO III

De la curatela

CAPITULO I

De la curatela de los incapaces

549. Los sujetos a interdicción por insania o sordomudez, serán considerados como menores en cuanto a su persona y bienes. Se les proveerá de un curador, a quien se aplicarán las disposiciones relativas a la tutela.

Incapaces sujetos a curatela. Régimen de ésta.

550. Los incapaces comprendidos en el artículo anterior conservarán la libertad, y sólo podrán ser reclusos o asilados en virtud de resolución judicial, cuando fuere de temer algún daño para ellos o para terceros o lo exigiere su tratamiento.

Medidas respecto de los incapaces.

Tampoco podrán ser trasladados fuera de la República, sin expresa autorización judicial, fundada en dictamen médico que declare conveniente el cambio para la salud del enfermo.

551. El padre o la madre podrán designar curador a sus hijos dementes o sordomudos, en los mismos supuestos y bajo idénticas formas que las fijadas para la tutela.

Curadores designados por los padres.

552. Serán curadores legítimos:

Curadores legítimos.

1º El marido de la mujer, y recíprocamente.

2º Los hijos legítimos varones mayores de edad, en cuanto al padre o madre viudos. Cuando hubiere

más de uno, el juez elegirá al más idóneo. Las hijas legítimas podrán serlo en iguales casos que para la tutela.

3º El padre, o por su falta o incapacidad la madre, respecto de sus hijos legítimos solteros, o de los viudos que no los tuvieren en condiciones de ejercer la curatela.

4º Los hermanos y los tíos, y a falta de ellos las hermanas y las tías, que podrían ser tutoras.

Tutela a cargo del curador.

553. Siempre que el incapaz tuviere hijos menores, el curador de aquél será también tutor de éstos. Si la curatela fuere de una mujer encinta, se extenderá al hijo concebido.

Obligación principal del curador.

554. La obligación principal del curador, será la de cuidar de que el incapaz recupere la salud, y a tal fin se aplicará de preferencia la renta de los bienes.

Fin de esta curatela.

555. Cesará la curatela por la providencia judicial que levante la interdicción, y en los demás casos del art. 546.

CAPÍTULO II

De la curatela de bienes

Concepto. Preferencia.

556. Se dará curador a los bienes en los casos autorizados por este Código. Si hubiere designación en el testamento, o parientes idóneos del principal interesado, dentro de los límites que señala el art. 520, ellos serán preferidos, pudiendo ser varios, cuando lo exigiere la naturaleza de la administración.

Herederos no domiciliados en el país.

557. Cuando el difunto dejare herederos no domiciliados en la República, el curador será nombrado con arreglo a los tratados existentes con los países a que pertenezcan aquéllos.

Facultades del curador.

558. Los curadores de bienes, sin perjuicio de las limitaciones fijadas a los tutores, sólo podrán ejercer actos de mera custodia y conservación y los necesarios para el cobro de los créditos y pago de las deudas.

Les corresponde asimismo, entablar las acciones y hacer valer las defensas judiciales de su representado. Los acreedores con referencia a los bienes sometidos a la curatela, podrán dirigir sus demandas contra dichos representantes.

559. La curatela de bienes termina por la extinción de los mismos, por haber cesado la causa que la motivó, o por la entrega de aquéllos a su verdadero dueño.

Término de esta curatela.

TITULO IV

De los menores emancipados

560. Los menores emancipados no podrán hacer donaciones por actos entre vivos, sea cual fuere su especie o valor, ni aprobar extrajudicialmente las cuentas de sus padres o tutores, ni darles finiquito de ellas.

Actos prohibidos.

561. Será necesaria la autorización del juez, para que estos menores puedan realizar los actos siguientes:

Actos que requieren autorización judicial.

- 1º Vender inmuebles o constituir derechos reales sobre ellos.
- 2º Enajenar los fondos o rentas públicas que tuvieren, las acciones de compañías de comercio o industria, o sus cuotas sociales en ellas.
- 3º Contraer deudas superiores a mil pesos.
- 4º Celebrar arrendamientos como locadores o locatarios, por plazo mayor de cuatro años, salvo el caso del art. 1065.
- 5º Hacer transacciones, o someter un negocio a juicio de árbitros.

La venia se otorgará con audiencia del Ministerio Público, y en los casos de absoluta necesidad o beneficio evidente. Las ventas se realizarán en pública subasta.

TÍTULO V

De la autoridad y vigilancia en lo concerniente a los incapaces

Patronato del Estado.

562. El patronato del Estado, nacional o provincial, se ejercerá por medio de los jueces, a quienes incumben con intervención del Ministerio Público, la superior vigilancia sobre los padres, tutores y curadores, con el fin de atender a la salud, seguridad y educación moral e intelectual de los incapaces.

Estas facultades corresponderán privativamente al juez del domicilio de los padres, o al mencionado en el art. 516, o al competente respecto de la persona de quien provinieron los bienes, aunque se hallaren en otro lugar. Cuando se tratare de donaciones, lo será el del domicilio del padre o de la madre en la fecha de su otorgamiento, a menos que otro hubiere prevenido en el supuesto anterior.

Representación promiscua del Ministerio Público.

563. Los incapaces, a más de sus padres, tutores o curadores, tendrán la representación promiscua del Ministerio Público en toda causa voluntaria o contenciosa, en que se trate de su persona o bienes, ya como actores o demandados.

Será nulo todo juicio, o acto que exija venia judicial, cuando no se hubiere oído al Ministerio Público antes de dictar sentencia o de conceder la autorización.

Deberes del Ministerio Público.

564. El Ministerio Público velará por el fiel desempeño de las funciones que correspondan a los representantes, en lo que haga al gobierno de la persona y bienes de los incapaces. Podrá deducir las acciones que éstos hubieren dejado de promover, si ellas fueren de su competencia, y solicitar lo pertinente cuando dependieren de otra jurisdicción.

Deberá también recabar el nombramiento de tutores o curadores para quienes no los tuvieren, y aún antes de ser aquéllos designados, asegurar los bienes cuando fuere ne-

cesario, u obtener que los incapaces sean colocados en casa honorable.

Podrán también pedir sean removidos los padres, tutores o curadores, cuando así proceda conforme a lo dispuesto en los títulos precedentes.

565. En ejercicio de sus funciones de vigilancia, el Ministerio Público podrá solicitar directamente de los representantes de los incapaces, de los parientes de éstos o de cualquier tercero, los informes que estimare necesarios sobre la persona y bienes de los menores o interdictos, datos que los requeridos estarán obligados a suministrar con detalle.

Facultades del Ministerio Público.

566. Podrá instituirse un consejo de familia en los siguientes casos: Consejo de familia.

- 1º Cuando el padre o la madre legítimos lo hubieren dispuesto.
- 2º Cuando el juez lo ordenare respecto de administraciones complicadas o que exijan conocimientos especiales.

Los miembros del consejo de familia sólo tendrán voto consultivo.

LIBRO TERCERO

DERECHO DE LAS OBLIGACIONES

SECCION PRIMERA

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

TITULO I

Del efecto de las obligaciones

CAPITULO I

Disposiciones generales

Fuentes de obligaciones.

567. Las personas sólo podrán asumir la calidad de deudores, en virtud de alguna de las fuentes de obligaciones que autoriza este Código. Las deudas no se presumen, pero demostrada la existencia de una obligación, se juzgará que ella emana de fuente legítima.

Presunción

Derechos del acreedor.

568. Como consecuencia de la obligación, queda facultado el acreedor:

- 1º Para emplear los medios legales, a fin de que el deudor cumpla la prestación.
- 2º Para procurarla por otro, a costa del obligado.
- 3º Para obtener las indemnizaciones pertinentes.

Responsabilidad por dolo o culpa.

569. El deudor responderá por los daños y perjuicios que su dolo o su culpa irrogaren al acreedor en el cumplimiento de la obligación.

Habrà culpa cuando se omitiere aquella diligencia exigida por la naturaleza de la obligación y que corresponda

a las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar. La responsabilidad por dolo, no podrá ser dispensada de antemano.

570. El deudor responderá por el dolo o la culpa de sus representantes legales, o de las personas que hubiera utilizado en el cumplimiento de la obligación. Podrá convenirse la dispensa de esta responsabilidad.

Dolo o culpa del representante.

571. El deudor será responsable por los daños y perjuicios que su morosidad ocasionare al acreedor en el cumplimiento de la obligación.

Mora.

572. Para que el deudor incurra en mora debe mediar requerimiento judicial o extrajudicial del acreedor, excepto en los siguientes casos:

Necesidad del requerimiento.

1º Cuando se hubiere estipulado expresamente que el mero vencimiento del plazo la produzca.

Excepciones.

2º Siempre que por la naturaleza y circunstancias de la obligación, el tiempo pactado fuere un motivo determinante para el acreedor.

3º Si la obligación procediere de un acto ilícito.

573. El requerimiento mediante la declaratoria a que se refiere el art. 139, producirá el mismo efecto que la intimación, cuando ésta no pudiera realizarse por estar ausente u oculto el deudor.

Requerimiento por declaratoria.

574. El deudor no será responsable de los daños y perjuicios que se originaren al acreedor por la falta de cumplimiento de la obligación, cuando ellos resultaren de caso fortuito o de fuerza mayor.

Caso fortuito o fuerza mayor.

Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que, previsto, no ha podido evitarse.

575. No se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior:

Excepciones al artículo anterior.

1º Cuando el deudor hubiere tomado a su cargo una o ambas eventualidades.

2º Si el daño se produjere por culpa del obligado.

3º Siempre que este último hubiere incurrido en mora, no motivada por caso fortuito ni por fuerza mayor. La obligación quedará, sin embargo, extinguida, cuando la cosa, que es imposible entregar, hubiere igualmente perecido en poder del acreedor.

Derechos y obligaciones accesorios.

576. Los derechos y obligaciones accesorios quedan subordinados a la existencia de los principales. La nulidad o la extinción de los primeros no tendrá eficacia respecto de los segundos.

CAPITULO II

De la garantía común para los acreedores

Bienes que la constituyen.

577. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. Pueden éstos perseguir indistintamente sobre tales bienes el cumplimiento de las prestaciones, con la reserva de las causas legales de preferencia.

Derechos del deudor.

578. La existencia de una obligación no priva al deudor de la facultad de disponer y administrar sus bienes. Sin embargo, los acreedores, aun condicionales o a término, podrán solicitar judicialmente que se limite ese derecho o se traben un embargo, cuando los actos del obligado pusieren en peligro el cumplimiento de la prestación.

Cosas debidas en poder del obligado. Derechos del acreedor.

579. Siempre que la obligación tuviere por objeto cosas que se hallaren en poder del deudor, el titular podrá requerir su entrega y el desapoderamiento ejecutarse por la fuerza. Esta regla se aplicará para la transmisión de un crédito, cuando exista el instrumento del mismo, debiendo notificarse al deudor cedido. En los demás casos de inexecución, el acreedor podrá optar entre los derechos contenidos dentro de los inc. 1º y 2º del art. 568 por una parte, y los del 3º por la otra, sin perjuicio de la indemnización derivada de la mora.

Venta judicial de bienes del deudor.

580. El acreedor podrá exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Quedan exceptuados:

Excepciones.

- 1º Los derechos patrimoniales derivados de las relaciones de familia.
- 2º Los de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, separadas de los bienes a que corresponden.
- 3º La porción hereditaria, la de un socio, la del copartícipe en una comunidad de bienes, o el derecho del

condómino, antes de haberse efectuado la partición definitiva.

- 4° Los derechos litigiosos, o que no pudieren ser ejercidos sin pleito, antes de la sentencia que lo termine.
- 5° Los créditos contra terceros, aunque fueren líquidos, salvo los pignorados y los títulos al portador.
- 6° El bien de familia, los libros, instrumentos y útiles necesarios para el trabajo personal del deudor o el desempeño de sus actividades; los muebles o enseres indispensables para su vestido y habitación, y además, en la industria rural, los animales de labor.
- 7° Los inmovilizados por accesión, independientemente de la cosa principal.
- 8° Los sembrados, pero sí los frutos de la cosecha.

Cuando se tratare de rentas o frutos, el juez, a falta de reglas especiales, podrá excluir lo indispensable para atender las necesidades del deudor y su familia.

581. Siempre que el orden de los juicios lo permitiere, los acreedores, aun condicionales, podrán intervenir dentro de las normas de procedimiento, en los pleitos en que el deudor fuere parte y que se relacionen con el patrimonio de éste, para coadyuvar a su defensa. También podrán deducir oposición, con tal que ella sea conexa con el litigio.

Intervención de los acreedores como parte coadyudante u opositora.

CAPITULO III

Del ejercicio de las acciones del deudor

582. Los acreedores, aun eventuales, pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor, relativos a los bienes de éste: pero sólo cuando el obligado dejare de hacerlo y con citación del mismo, para que tome parte en el juicio.

Principio.

583. Quedan excluidos de lo prescripto en el artículo anterior:

Excepciones.

- 1° El derecho de administración y disposición de los bienes.

- 2º Las facultades inherentes a la capacidad jurídica, y también al estado en las relaciones de familia, aunque tuvieren efectos patrimoniales.
- 3º Los derechos a que se refieren los incs. 6º y 7º del art. 580, en cuanto no pueda ser privado de ellos el titular.
- 4º El derecho alimentario, sea en el caso del art. 487 o cuando procediere de donación, legado, uso o usufructo.
- 5º Los sueldos, salarios y pensiones, en la parte excluida por leyes especiales, salvo para los créditos comprendidos en la prestación de alimentos. El juez determinará, en este último caso, la medida en que podrán hacerse efectivos.
- 6º Los derechos que, según las disposiciones de este Código, sólo pueden ser ejercidos en vida por la persona a quien competen.

Los acreedores podrán usar de los derechos comprendidos en los incs. 4º y 5º, con cargo de entregar la porción reservada para el deudor.

Ejercicio de los derechos previstos en el art. 583 inc. 6º.

584. Le será permitido a los acreedores ejercer los derechos que menciona el inc. 6º del artículo anterior, cuando el deudor hubiere usado de ellos, o mediaré transmisión a los herederos de éste, siempre que concurran los extremos del art. 582, salvo las reglas especiales de este Código.

Excepciones y causas extintivas oponibles.

585. Son oponibles al acreedor las excepciones y causas extintivas referentes al derecho ejercido, aun en el caso de fundarse en hechos del deudor, ulteriores a la demanda.

Carencia de privilegio.

586. El ejercicio de las acciones del deudor no confiere por sí mismo ninguna preferencia al acreedor.

CAPÍTULO IV

De la revocación de los actos del deudor

Acción revocatoria.

587. Todo acreedor quirografario o privilegiado, aunque fuere condicional o a término, podrá exigir la revocación de los actos celebrados por su deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos.

588. Para promover esta acción es preciso:

Requisitos.

- 1º Que el deudor se encuentre en estado de insolvencia, la que se presume respecto del concursado.
- 2º Que el perjuicio para los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya fuera insolvente.
- 3º Que el crédito base de la acción tenga fecha anterior al acto del deudor. Cuando éste hubiere tenido el propósito de perjudicar a los acreedores futuros, no regirá tal extremo.

589. Si el deudor renunciare derechos, aunque no fueren irrevocablemente adquiridos, con los que pudo mejorar el estado de su fortuna o impedir la disminución de ella, será permitido a los acreedores obtener la revocación de dichos actos y ejercer los derechos o acciones renunciados.

Renuncia de derechos

590. La revocación no procederá respecto de los actos del deudor referentes a derechos y acciones que no podrían ejercer sus acreedores.

Casos en que no procede.

591. En los actos a título oneroso la revocación no será declarada, a menos que el deudor hubiera querido por ese medio defraudar a sus acreedores y que el tercero contrante fuese cómplice en el fraude.

Actos a título oneroso.

La intención de perjudicar a los acreedores se presume en el deudor por su estado de insolvencia, y la complicidad del tercero, por el conocimiento de aquélla. Serán aplicables las reglas relativas al poseedor de mala fe.

592. En los actos a título gratuito procederá la revocación, aun cuando faltaren los extremos exigidos en el artículo anterior.

Actos a título gratuito.

593. Si el tercero hubiere enajenado los derechos adquiridos, la acción de los acreedores sólo procederá respecto de las transferencias a título gratuito, y en las verificadas a título oneroso, cuando el adquirente fuere cómplice en el fraude.

Enajenaciones del tercer adquirente.

594. La revocación será pronunciada exclusivamente en interés de los acreedores que la hubieren pedido, y hasta el importe de los respectivos créditos.

Efecto de la revocación.

Cesará la acción de los acreedores, si el tercero adquirente efectuare el pago o constituyere garantía para el caso de no alcanzar el activo del deudor.

TÍTULO II

De los daños y perjuicios

CAPÍTULO I

De la indemnización legal

Concepto.

595. Los daños y perjuicios comprenden el valor de la pérdida sufrida y el de la utilidad dejada de percibir por el acreedor, como consecuencia de la mora o del incumplimiento de la obligación. Su monto será fijado en dinero, a menos que la ley dispusiere otra forma.

Fijación judicial según las circunstancias.

596. Cuando la obligación no cumplida proviniera de actos a título oneroso, y en todos los demás casos que la ley autorice, habrá lugar a resarcimiento, aunque el perjuicio no fuera patrimonial, debiendo el juez estimar su importe con arreglo a las circunstancias.

Monto no justificado.

597. Cuando se hubiere justificado la existencia del perjuicio, pero no fuese posible determinar el monto, la indemnización será fijada por el juez.

Obligaciones de dar sumas de dinero.

598. En las obligaciones de dar sumas de dinero el deudor moroso debe desde el vencimiento, los intereses convenidos. Si no fueron previstos abonará los compensatorios del contrato, y, en su defecto, los corrientes en el lugar del cumplimiento, según la tasa de los bancos oficiales para sus préstamos ordinarios.

Los intereses correrán, aunque no se justificare el perjuicio. El acreedor no podrá exigir otra indemnización por haber sufrido un daño más considerable.

CAPITULO II

De la cláusula penal

599. En el acto constitutivo de la obligación o en otro Concepto.
 ulterior, las partes podrán convenir con carácter accesorio,
 una pena para el caso de retardo o de incumplimiento. Será
 lícito establecerla en beneficio del acreedor o de un tercero.
 y consistirá en cualquier prestación admitida por la ley.

600. La pena substituye a la indemnización. No es nece- Carácter.
 sario demostrar la existencia del perjuicio, ni el deudor po-
 drá eximirse alegando la falta de daño. El acreedor no ten-
 drá derecho a un resarcimiento más elevado, aunque pruebe
 que el convenido es insuficiente.

La cláusula penal queda sometida a la disposición de
 los incs. 1º, 2º y 3º del art. 155.

601. La nulidad del acto jurídico deja sin efecto la Nulidad del acto prin-
 cláusula penal, salvo cuando la obligación de indemnizar cipal.
 naciere de la declaración de aquélla.

602. Sólo incurre en la pena el deudor constituido en Necesidad de la mora.
 mora. En las obligaciones a término, será exigible desde el
 vencimiento.

603. La pena estipulada para el caso de mora no se Carácter restrictivo.
 extiende a la inejecución, y recíprocamente. En caso de duda,
 se resolverá según las circunstancias, y principalmente, con
 arreglo al valor de la prestación accesorio.

604. El deudor no podrá exonerarse de cumplir la obli- Carácter subsidiario.
 gación, mediante el pago de la pena, excepto cuando se hu-
 biera reservado expresamente esa facultad.

El acreedor no podrá exigir la prestación principal y
 la accesorio, pero sí, una de las dos a su arbitrio; a menos
 que la pena se hubiere estipulado para el simple retardo, o
 que con el pago de ella no se dé por extinguida la obligación.

605. En caso de cumplimiento irregular o parcial, acep- Cumplimiento irregu-
 tado por el acreedor, la pena debe ser disminuida proporcio- lar o parcial.

nalmente. Si no hubiere acuerdo sobre la cuantía, la fijará el juez.

Garantía de un tercero.

606. Un tercero puede obligarse a pagar la pena para el caso de incumplimiento por parte del deudor. Se aplicarán entonces, subsidiariamente, las reglas de la fianza.

También podrá responsabilizarse para el caso de que el deudor invocare la nulidad del crédito, siempre que el tercero conociere la causa de la misma y que ella no derivase de una contravención al art. 155.

Estipulaciones a cargo o a favor de tercero.

607. Será válida la pena establecida en las estipulaciones a cargo o a favor de tercero, para el caso de que éste rehusare su consentimiento.

Cláusula penal condicional.

608. La cláusula en cuya virtud una persona, sin obligarse a una prestación, estipulara una pena para el caso de que no la efectuare, estará sometida a las reglas de los actos condicionales.

Cláusula penal indivisible o solidaria.

609. Si la prestación de la cláusula penal fuese indivisible o solidaria, regirán las disposiciones de los arts. 650 y 658. Salvo este supuesto, sólo responderá por ella el que hubiere contravenido a la obligación. Sea ésta divisible o no, deberá solamente su parte en la accesoria cuando ella pudiere cumplirse parcialmente.

SECCION SEGUNDA

DE LAS DIVERSAS CLASES DE OBLIGACIONES

TÍTULO I

De las obligaciones con relación a su objeto

CAPÍTULO I

De las obligaciones de dar cosas ciertas

Accesorios de cosas individualmente determinadas.

610. Si la prestación tiene por objeto cosas individualmente determinadas, comprende todos los accesorios de ellas que fueren tales en el momento de constituirse la deuda, aunque no hubieren sido mencionados.

Los frutos percibidos antes de la entrega pertenecen al deudor, y los pendientes al acreedor. **Frutos.**

611. Cuando la prestación consista en la entrega de un inmueble, solo será válida cuando él estuviere individualmente determinado. **Entrega de inmueble.**

612. El deudor debe realizar a su costa las diligencias necesarias para conservar la cosa y efectuar su entrega. **Conservación y entrega de la cosa.**

613. Cuando la prestación tuviere por objeto constituir, transferir, modificar o extinguir derechos reales, estos efectos sólo se obtendrán, aunque la cosa fuere entregada al acreedor, una vez cumplidos los requisitos impuestos por este Código. Si la inscripción en el Registro fuere necesaria, el deudor no quedará liberado hasta subsanar a su costa las dificultades opuestas a la misma. **Prestación relativa a derechos reales. Inscripción.**

Igual regla se aplicará cuando la prestación consistiere en derechos personales que deban ser inscriptos.

614. El obligado a la entrega de una cosa cierta quedará libre cuando ella se tornare imposible, por causa ulterior al nacimiento de la obligación, y que no le fuera imputable. **Imposibilidad no imputable.**

Para todos los casos de pérdida total o parcial, y con respecto al deterioro, se aplicarán las disposiciones del Título I, Sección Primera de este libro, y las relativas a los efectos de los contratos en general. **Pérdida total o parcial.**

615. Si la cosa que deba ser transferida a título oneroso para constituir dominio, usufructo o derecho de uso o de habitación, hubiera mejorado o aumentado por hecho ajeno al deudor, aunque fuere sin desembolso alguno, podrá éste exigir un suplemento de la contraprestación. En caso de disconformidad del acreedor, la obligación quedará disuelta. **Mejoras o aumentos en la cosa.**

Los aumentos o mejoras por hecho del deudor no dan lugar a indemnización.

616. Cuando varios acreedores tuvieran derecho a la entrega de un mismo inmueble, será preferido aquel que primero inscribió su título en el Registro. **Acreedores con derecho a entrega de un inmueble.**

En ningún caso podrá invocarse el conocimiento del acreedor sobre la existencia de otros créditos, aunque fueren anteriores en fechas.

A falta de inscripción, la preferencia corresponde al acreedor de título más antiguo.

Idem respecto de un mueble.

617. Entre varios acreedores con derecho a la entrega de una misma cosa mueble, será preferido, a falta de tradición, el dueño de aquélla, siempre que se le debiera restituir. En su defecto, lo será el acreedor de título más antiguo.

Efecto de la tradición.

Efectuada la tradición a un acreedor para constituir un derecho real, no tendrán acción alguna contra él los demás acreedores, aun cuando el primero tuviere noticia de sus créditos y éstos fueren de fecha más antigua. Exceptúanse los casos en que procediere la reivindicación, según las reglas de este Código.

Entrega para transferir uso o tenencia.

618. Si la obligación fuere de dar cosas ciertas para transferir solamente el uso o la tenencia de ellas, los derechos se regirán por las normas contenidas en los títulos especiales.

CAPÍTULO II

De las obligaciones de dar cosas inciertas

Reglas.

619. El obligado a dar cosas inciertas debe entregarlas de la especie y calidad determinadas en el título constitutivo.

Quando sólo estuviere fijada la especie, el deudor deberá cosas de calidad media. Siempre que la elección correspondiera al acreedor, éste habrá de efectuarla dentro de la mencionada clase.

Pérdida o deterioro o mora antes de la individualización.

620. Antes de individualizada la cosa, el deudor, no podrá eximirse de cumplir la obligación, fundado en la pérdida o deterioro de aquélla, provenientes de fuerza mayor o de caso fortuito, mientras fuere posible la prestación de la especie. Si sobreviniere mora, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega dentro de la especie determinada, o pedir se resuelva la obligación, con resarcimiento, en ambos casos, por los daños y perjuicios.

Individualización.

621. Después de individualizadas las cosas, serán aplicables las reglas del capítulo precedente.

La individualización podrá resultar de todos los hechos u omisiones que importen determinar el objeto, siempre que emanaren del deudor, o bien del acreedor en el caso de corresponder a éste la elección.

622. Cuando la prestación consistiere en la entrega de una cosa cierta, determinada entre un número de cosas ciertas de la misma especie, quedará extinguida si se perdieren todas las cosas comprendidas en ella, por un caso fortuito o de fuerza mayor.

Obligación de género limitado.

CAPITULO III

De las obligaciones de dar sumas de dinero

623. El obligado a dar una cantidad de moneda que no tuviere curso legal en el territorio de la Nación, deberá entregarla en la especie pactada.

Moneda sin curso legal.

624. Cuando la prestación fuera una suma de especie o cantidad determinada en moneda nacional, el deudor puede entregarla de esa especie o de cualquier otra con curso legal en el territorio de la Nación, al cambio que corresponda según las leyes monetarias vigentes.

Moneda nacional.

Si por modificación de éstas, el cambio hubiere variado durante la mora del deudor, en perjuicio del acreedor, éste será indemnizado por la diferencia.

625. El recibo del capital por el acreedor, sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos.

Recibo de capital sin reserva.

626. Sólo se deberán intereses de intereses, cuando por convención ulterior a su vencimiento se permitiera acumularlos al capital, o si liquidado éste judicialmente con sus réditos, fuere moroso el deudor.

Anatocismo.

Es nulo todo pacto en contrario.

CAPITULO IV

De las obligaciones de hacer y de no hacer

627. El obligado a hacer deberá ejecutar el hecho en tiempo propio y del modo que tuvieron en mira las partes. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no cumplida, o

Cumplimiento.

será lícito destruir lo que fuere mal ejecutado, salvo que la prestación pudiera completarse a costa del deudor.

Ejecución por otro.

628. El hecho podrá ser ejecutado por otro que el deudor, a menos que éste hubiere sido elegido por su arte, industria o cualidades personales.

Ejecución forzada.

629. Si el deudor no quisiere o no pudiere efectuar el hecho, el acreedor podrá exigirle la ejecución forzada, a no ser que fuere necesaria la violencia contra la persona del obligado. En este último caso, la prestación quedará convertida en el pago de daños y perjuicios.

Si el hecho pudiere ser ejecutado por otro, se observará lo dispuesto por el art. 579.

Imposibilidad sin culpa del deudor.

630. Cuando el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación se extinguirá para ambas partes, debiendo aquél restituir al acreedor lo que por razón de ella hubiere recibido.

Incumplimiento de obligación de no hacer.

631. La obligación de no hacer se tendrá por no cumplida, cuando la ejecución del hecho fuere imputable al deudor. El acreedor podrá exigir, en tal caso, se destruya lo efectuado o se le autorice para destruirlo a costa del deudor. Cuando ésto no fuere posible, el acreedor tendrá derecho a los daños y perjuicios irrogados por el incumplimiento.

Ejecución forzada en obligaciones de no hacer.

632. Si la obligación consistiere en tolerar actos determinados del acreedor o el uso de cosas del deudor, podrá exigirse la ejecución forzada, aun cuando fuere necesaria la violencia contra la persona obligada.

Se procederá de igual manera cuando la prestación tiene por objeto no comerciar en cierta zona o durante cierto tiempo en cuanto a determinadas cosas, u otras abstenciones análogas.

Extinción de obligaciones de no hacer.

633. Cuando la prestación fuere de no hacer y la omisión del hecho resultare imposible sin culpa del deudor, o bien cuando éste hubiere sido compelido a ejecutarlos, la obligación se extingue como en el caso del art. 630.

CAPÍTULO V

De las obligaciones alternativas

Concepto. Elección.

634. Siempre que se adeudaren varias prestaciones, de modo que una sola o más de entre ellas deba ser ejecutada, la

elección, salvo pacto contrario, corresponderá al deudor. Este deberá cumplir íntegramente la elegida, sin que pueda optar sobre parte de una y parte de otra.

En las prestaciones periódicas, se presume la facultad de repetir cada vez la opción.

635. La elección se tendrá por hecha, una vez notificada a la otra parte. Realizada ella se juzgará irrevocable, y la prestación escogida, como única desde su origen.

Modo de elección.
Efectos.

El cumplimiento, aunque sea parcial, equivale a una elección.

636. Si el deudor, a quien corresponde elegir, no lo hiciere antes del comienzo de la ejecución forzosa, el acreedor estará facultado para perseguir cualquiera de las prestaciones. Podrá sin embargo, el primero, si aquél no hubiere recibido en todo o en parte la elegida, liberarse con una de las restantes.

Deudor remiso en elegir.

Cuando la elección pertenezca al acreedor, el obligado puede intimarle judicialmente para que la efectúe dentro de un término razonable, transcurrido el cual, ese derecho pasará al deudor.

Opción del acreedor.

637. Siempre que el derecho de elegir corresponda a varios acreedores o a varios deudores, la opción deberá efectuarse por unanimidad, y también ser comunicada a todos los interesados de la otra parte. Si aquélla no fuere obtenida, regirá lo dispuesto en el artículo anterior.

Elección a favor de varios deudores o acreedores.

638. Cuando una de las prestaciones no pudo ser objeto de la obligación, o se tornare inexigible, la otra será debida al acreedor.

Inexigibilidad de una prestación.

Si ninguna de ellas fuere posible, y una dejó de serlo por culpa del deudor, este deberá entregar la última susceptible de cumplimiento.

639. Cuando la elección fuere acordada al acreedor y una de las prestaciones se tornare imposible por culpa del deudor, el primero podrá elegir entre la subsistente y el valor de la otra, con daños y perjuicios.

Si ambas se hicieron inexigibles por culpa del obligado, el acreedor tendrá derecho a reclamar el valor de la una o de la otra.

Inexigibilidad de ambas prestaciones.

640. Si todas las prestaciones se hicieron imposibles sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación.

Prestaciones imposibles.

Extensión de estas reglas.

641. Cuando en cualquier clase de obligaciones, el lugar, el tiempo, las cantidades, las medidas u otras circunstancias, hubieren sido establecidas alternativamente o dependieren de opción, se aplicarán las reglas anteriores sobre el derecho de realizarla y sus efectos legales.

CAPITULO VI

De las obligaciones de pago facultativo

Derecho del acreedor.

642. El acreedor de una obligación facultativa, al exigir su cumplimiento, sólo podrá reclamar la prestación principal.

Imposibilidad de la principal.

643. La obligación facultativa se extingue cuando la principal se hiciere imposible sin culpa del deudor, aunque pudiera realizarse la accesoria.

Si la imposibilidad fuere imputable al obligado, el acreedor podrá pedir su equivalente o la prestación accesoria.

Duda.

644. En caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por alternativa.

TITULO II

De la pluralidad de acreedores o deudores

CAPITULO I

De las obligaciones divisibles

Concepto.

645. Las obligaciones son divisibles cuando su objeto consiste en prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Si no lo fueren, son indivisibles.

La solidaridad estipulada no hace indivisible la obligación, ni la indivisibilidad de ella la convierte en solidaria.

Enumeración.

646. Son divisibles:

1º Las obligaciones de dar sumas de dinero u otras cantidades, y de las de cosas inciertas no fungibles.

que comprendan un número de ellas de la misma especie, igual que el de los acreedores o deudores, o equivalente a un múltiplo de éste.

- 2º Las obligaciones de hacer, determinadas solamente por un cierto número de días de trabajo, o bien por medidas expresadas en el título constitutivo.
- 3º Las obligaciones de no hacer, cuando así resultare de la naturaleza de cada prestación.

647. Si la obligación divisible tuviere más de un acreedor o más de un deudor, se fraccionará en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores hubiere, siempre que el título constitutivo no determinare porciones distintas.

Pluralidad de acreedores o deudores.

Cada una de las partes equivaldrá a una prestación diversa e independiente. Los acreedores solo tendrán derecho a su cuota y los deudores no responderán por la insolvencia de los demás.

648. Cuando en virtud del acto constitutivo, o del testamento, o de la partición, alguno de los deudores o de sus herederos tuviere a su cargo el pago de toda la prestación divisible, no se entenderá que existe una obligación solidaria. El acreedor podrá en tal caso, exigir el cumplimiento íntegro al encargado del pago, sin perjuicio de los derechos que uno y otro tuvieren sobre los codeudores o coherederos.

Deudor o heredero a cargo de una obligación divisible.

De igual modo, puede atribuirse a uno o más de los acreedores, o a sus herederos el derecho de exigir la prestación total.

Caso inverso respecto de un acreedor.

CAPITULO II

De las obligaciones indivisibles

649. Toda prestación de dar un cuerpo cierto es indivisible.

Casos.

Lo son igualmente las obligaciones de hacer, excepto las comprendidas en el art. 646.

También lo es la prestación que tenga por objeto constituir una servidumbre predial.

650. Cualquiera de los acreedores originarios, o quienes lo sean por sucesión o por contrato, podrá exigir de cada

Derecho de los acreedores.

uno de los deudores o de sus herederos, el cumplimiento íntegro de la obligación indivisible.

Todo acreedor podrá recabar por cuenta común, la consignación de la cosa debida.

Mora o incumplimiento de un deudor.

651. La mora de uno de los deudores no perjudica a los restantes. Cuando la prestación se hiciere imposible por culpa de uno de ellos o durante su retardo, quedarán liberados los demás. Sólo serán imputables los deterioros a quien los hubiere causado.

En caso de abstención indivisible, responderá únicamente el autor del incumplimiento.

Transformación en divisible.

652. La obligación indivisible dejará de ser tal cuando se resuelva en daños y perjuicios, o se convierta en una prestación que pueda cumplirse por partes.

Extinción por consentimiento unánime.

653. Sólo por consentimiento de todos los acreedores podrá ser dada en pago, novada, transferida o remitida una obligación indivisible. Los disconformes conservarán su crédito, y podrán hacerlo efectivo, abonando al deudor la parte que corresponda al acreedor que convino en aquellos actos.

Normas subsidiarias.

654. Las normas relativas a las obligaciones solidarias se aplican subsidiariamente a las indivisibles.

CAPÍTULO III

De las obligaciones solidarias

Concepto. Fuentes.

655. Es solidaria la obligación cuando en virtud del título constitutivo o de la ley, pueda exigirse su total cumplimiento a cualquiera de los deudores, o por cualquiera de los acreedores.

La incapacidad de alguno de ellos no impide que la obligación sea solidaria respecto de los otros.

Tampoco la solidaridad queda afectada cuando la prestación fuere para uno o varios de los interesados, condicional, a término o pagadera en otro lugar.

Debe ser expresa.

656. La solidaridad no se presume. Debe ser expresa en la ley, y para los actos jurídicos, resultar de términos inequívocos.

657. La obligación solidaria perderá su calidad de tal, en el único caso de renunciar expresamente el acreedor a la solidaridad y consentir la división de la deuda entre los obligados. Si lo hiciere sólo en provecho de uno o alguno de aquéllos, la prestación conservará su carácter para los otros, deducida la cuota correspondiente al deudor dispensado.

Pérdida de su carácter.

658. El acreedor, o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los obligados solidariamente o contra cualquiera de ellos, o bien reclamar sólo la parte que a un deudor corresponde. Si demandaren el todo contra uno de ellos, podrán luego hacerlo respecto de los demás. Si le hubieren exigido sólo la parte, o de otro modo consentido la división, podrán dirigirse contra los otros, deducida la cuota del deudor liberado.

Derechos del acreedor.

659. El deudor podrá pagar a cualquiera de los acreedores, y la obligación quedará extinguida respecto de todos. Si hubiere sido demandado por alguno de ellos, deberá hacer el pago al demandante.

Obligación del deudor.

660. La dación en pago, la novación, la compensación, la confusión o la remisión de la deuda, hecha por cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores, extingue la obligación.

Extinción por un acreedor.

661. Si la prestación se hiciere imposible por culpa o durante la mora de uno de los deudores solidarios, los otros deberán el equivalente; pero sólo el culpable o el moroso responderá por los daños y perjuicios. El retardo de uno de los obligados no producirá efecto en cuanto a los demás.

Imposibilidad.

662. Si falleciere alguno de los acreedores o alguno de los deudores, dejando más de un heredero, cada uno de estos coherederos no tendrá derecho a exigir o recibir, ni estará obligado a pagar sino la cuota que le corresponde en el crédito o en la deuda, según su haber hereditario.

Herederos del acreedor o deudor.

663. Cada uno de los deudores podrá oponer a la acción del acreedor, tanto las excepciones comunes a los obligados, como aquéllas que le fueren personales.

Defensas oponibles por los deudores.

664. La mora de uno de los acreedores solidarios produce también sus efectos en cuanto a los otros, y a favor de todos los deudores.

Mora de un acreedor.

Obligaciones del acreedor que cobró.

665. El acreedor solidario deberá satisfacer a cada uno de los coacreedores las cuotas que les correspondan según el título constitutivo, cuando hubiere cobrado todo o parte de la deuda, o tomádola a su cargo, y en los casos de novación, remisión, compensación o confusión de aquélla.

Recibo de cuerpo cierto.

666. Cuando uno de los acreedores solidarios hubiere recibido la prestación de un cuerpo cierto, lo poseerá por cuenta común de los coacreedores, según la naturaleza del derecho adquirido.

Efectos de la sentencia.

667. La sentencia dictada en el juicio que siguiera el acreedor contra uno de los deudores solidarios, no producirá efecto en cuanto a los demás; pero éstos podrán invocarla, a menos que se fundare en una causa personal para el deudor litigante.

Se observará la misma regla cuando el juicio hubiere sido promovido por uno de los acreedores contra el único obligado.

Reglas para los deudores solidarios entre sí.

668. Los deudores solidarios en sus relaciones recíprocas, están obligados por partes iguales, salvo cláusula distinta del título constitutivo. El que desinteresó al acreedor, o aquél en quien se hubiere producido la confusión, podrá exigir de los restantes que contribuyan cada cual en su medida. La cuota de los insolventes será dividida entre los deudores originarios, incluyendo a los exonerados por el acreedor, ya de la solidaridad, ya de la obligación, o de su parte en la deuda.

La acción de regreso no procederá en caso de haberse remitido gratuitamente el crédito.

SECCION TERCERA

DE LA TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I

De la cesión de créditos

Contenido

669. La cesión de un crédito comprende sus accesorios y privilegios, como también la fuerza ejecutiva del título, en su caso.

670. Respecto de terceros que tuvieren interés legítimo en objetar la cesión para conservar derechos adquiridos después de ella, el crédito sólo se transmite al cesionario por la notificación del traspaso al deudor cedido o mediante la aceptación por parte de éste. La diferencia de horas en el cumplimiento de dichas formalidades no causa prelación, siempre que se llevaren a cabo en el mismo día.

Transmisión respecto de terceros.

671. La notificación para ser válida, deberá efectuarse por mandato judicial, o por medio de escribano. En ambos casos se transcribirá íntegramente el contrato de cesión, o la parte substancial del mismo.

Formas de la notificación.

672. Si los hechos y circunstancias demostraren una colusión entre el deudor y el cedente, o bien la culpa de uno u otro, el traspaso del crédito, aunque no estuviere notificado ni aceptado, surtirá todos sus efectos en cuanto al cedido.

Colusión entre deudor y cedente. Caso de culpa.

Esta disposición se aplica al segundo cesionario doloso o culpable, y la transferencia podrá serle opuesta por el simple conocimiento que de ella hubiese adquirido.

673. Producido el concurso del cedente, la notificación del traspaso o la aceptación del deudor no surtirá efecto para los acreedores, si tuviere lugar después del auto declarativo.

Concurso del cedente.

674. Si el crédito cedido estuviere embargado, la notificación o la aceptación ulteriores importarán oposición a esa medida. Ambas producirán pleno efecto para los acreedores y cesionarios que no hubieren solicitado la traba.

Cesión del crédito embargado. Efecto.

La notificación o la aceptación causan el embargo del crédito a favor del cesionario. Será preferido aquel que primero hubiese notificado al deudor u obtenido su conformidad.

675. El deudor cedido quedará liberado si pagare al cedente antes de la notificación o aceptación. También podrá oponer al cesionario cualquier otra causa extintiva que tuviera contra el primer acreedor, así como las mismas defensas y excepciones que pudo invocar respecto de éste.

Pago antes de la notificación. Defensas oponibles.

676. Aun antes de la notificación o aceptación, el cesionario podrá realizar todos los actos conservatorios relativos al crédito cedido. Ese mismo derecho corresponderá al cedente, mientras aquellas formalidades no se hubieren realizado.

Medidas conservatorias.

TÍTULO II

De la transmisión de deudas

Noción.

677. Podrá un tercero, mediante contrato con el acreedor, tomar a su cargo el cumplimiento de una obligación, y substituir al precedente deudor, así liberado. Se presumirá, en la duda, que este convenio no determina el cambio del deudor.

Aprobación requerida.

678. Cuando el traspaso de la deuda resultare de una convención entre el deudor y un tercero, la eficacia del acto quedará subordinada a la aprobación del acreedor, y hasta ese momento las partes podrán revocar o modificar el contrato. Si hubiere plazo para prestarla, se juzgará rehusada, cuando aquél transecurriese sin manifestación del acreedor.

Presunciones respecto del tercero.

679. Pendiente la conformidad del acreedor, o negada ésta, se entenderá en la duda, que el contrato obliga al tercero respecto del deudor para el cumplimiento de lo prometido.

Convenio de liberación entre el deudor y un tercero.

680. El que conviniere con un deudor en liberarlo de su prestación, quedará obligado a ello, sin que ese acuerdo con fiera acción directa al acreedor.

Las relaciones entre el deudor y el tercero serán regidas por los principios de los contratos bilaterales, sin perjuicio de las garantías que podrán exigirse para el cumplimiento de lo prometido.

Adquirente de inmueble hipotecado que se responsabiliza por el gravamen.

681. Cuando se enajenare un inmueble hipotecado y el adquirente se hiciere responsable por el gravamen, se juzgará que se hace cargo de la obligación, substituyendo al deudor. En este caso el enajenante deberá comunicarlo por escrito al acreedor, después de anotada la transferencia en el

Registro. Transcurridos seis meses desde la notificación, la falta de respuesta negativa se tendrá como asentimiento del acreedor.

El enajenante debe practicar dicha notificación si el adquirente lo pidiere, y hacerle saber la respuesta.

682. El que tomare a su cargo la deuda ajena, asumirá todas las obligaciones del precedente deudor. Podrá oponer las defensas derivadas de la relación jurídica entre el acreedor y el obligado; pero no las resultantes de su convenio con el antiguo deudor.

Responsabilidad y derechos de quien asume deuda ajena.

Subsistirán los derechos accesorios y las garantías del crédito. No así, la responsabilidad de los codeudores solidarios y las seguridades reales constituídas originariamente por terceros; excepto cuando mediare conformidad por escrito prestada por dichos obligados.

683. Cuando el que asumió la deuda ajena, tuviere una acción de reembolso, sea a consecuencia del pago efectuado, del que se obligó a realizar, o de sus relaciones jurídicas con el deudor, se aplicarán en lo pertinente, las reglas del pago con subrogación.

Preceptos aplicables.

684. Quien adquirió por contrato un patrimonio o una empresa, queda obligado desde la transferencia por todas las deudas de uno u otra, sin perjuicio de la responsabilidad del antiguo deudor, que se mantiene, no obstante el traspaso.

Adquisición de un patrimonio o empresa.

Cuando el importe de lo pagado por el adquirente en concepto de deudas alcanzare al valor del patrimonio o de la empresa, podrá reclamar la exoneración de su responsabilidad, y en tal supuesto, sus actos se juzgarán desde un principio como los de un administrador por cuenta de acreedores. Regirán en su caso, los arts. 1883 y 1886.

No podrá pactarse entre enajenante y adquirente la rescisión o la exclusión de la responsabilidad impuesta en este artículo.

SECCION CUARTA

DE LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I

Del pago

CAPITULO I

Disposiciones generales

Efecto del cumplimiento.

685. La obligación se extingue por el cumplimiento de la prestación.

Quiénes pueden pagar.

686. Pueden hacer el pago:

- 1º El deudor capaz de administrar sus bienes.
- 2º Toda persona interesada en el cumplimiento de la obligación.
- 3º El tercero no interesado, con asentimiento del deudor, o sin él.

Pago por tercero. Obligaciones y derechos del acreedor.

687. El acreedor está obligado a recibir el pago de un tercero, si no tuviere interés en que lo efectúe personalmente el deudor; pero podrá negarse a otorgar la subrogación. En el caso del art. 686, inc. 3º, le será permitido sin embargo, rehusar el pago, cuando mediare oposición del obligado.

Derechos del tercero pagador.

688. Los derechos del tercero, interesado o no, que pague en su nombre o en el del deudor, se reglarán conforme a las relaciones jurídicas existentes entre ellos. Si no las hubiere, el pagador podrá reclamar lo realmente desembolsado para cumplir la prestación.

El tercero no interesado que pagó contra la voluntad del deudor, sólo tendrá derecho en la medida del beneficio recibido por éste.

689. El pago debe hacerse:**A quién debe hacerse.**

- 1º Al acreedor que tuviere la libre administración de sus bienes, o a su representante constituido al efecto.
- 2º Al que exhibiere el título del crédito, si fuere al portador o tuviere recibo del acreedor, salvo fundada sospecha de no pertenecerle el documento, o de no estar autorizado para el cobro.
- 3º Al extraño indicado para recibir el pago, aunque lo resistiere el acreedor, y aunque a éste se le hubiere satisfecho una parte de la deuda.
- 4º Al que estuviere en posesión del crédito. El pago será válido, aunque después fuere vencido en juicio sobre el derecho que invoca.

690. El pago a un tercero sin autorización para recibirlo, será válido en cuanto se convirtiese en utilidad para el acreedor, y por el todo, si éste lo ratificare.

Pago a tercero no autorizado.

En igual medida producirá efecto el pago a un incapaz para administrar sus bienes.

691. El deudor, que informado de la incapacidad sobreviniente del acreedor, le hiciere el pago, no extinguirá la obligación.

Pago al acreedor incapaz.

692. Si el crédito estuviere pignorado o embargado judicialmente, el pago hecho al acreedor no será válido. La nulidad sólo aprovechará a los embargantes o prendarios, a quienes deberá pagar el deudor, salvo su derecho de repetición contra el acreedor.

Créditos pignorados o embargados.

693. Cuando en virtud del pago deba transferirse el dominio, es menester que el pagador sea propietario de la cosa entregada, y que tenga capacidad para enajenarla. Si fuere de una suma de dinero o de bienes consumibles, no puede ser repetido contra el acreedor que los hubiere consumido de buena fe.

Pagos que transmiten al dominio.**CAPITULO II****Del objeto del pago**

694. El deudor debe entregar la cosa o cumplir exactamente el hecho a que estuviere obligado. No puede substituir-

Modo de cumplimiento.

los con los daños y perjuicios de la inexecución, o mediante otra cosa u otro hecho, aunque fueren de igual o mayor valor.

Pagos parciales no autorizados. **695.** Cuando los pagos parciales no estuvieren autorizados, no podrá el deudor exigir del acreedor que acepte en parte el cumplimiento de la prestación.

Deuda en parte líquida. **696.** Si la deuda fuere en parte líquida y en parte ilíquida, el acreedor podrá reclamar el cumplimiento de la líquida, aun antes de que corresponda el pago de la otra.

Deuda de dinero y sus intereses. **697.** Si la obligación fuere de dar una suma de dinero con intereses, el pago sólo se estimará completo, después de satisfecho el capital y todos los réditos.

Presunción respecto de las cuotas anteriores. **698.** Cuando el pago deba realizarse en prestaciones parciales y en periodos determinados, el referente a la última cuota hace presumir el cumplimiento de los anteriores.

CAPITULO III

Del lugar y tiempo del pago

Lugar. **699.** El pago debe hacerse en el lugar designado. Si no se hubiere establecido y se tratare de una cosa cierta, donde ella existía al constituirse la obligación; en cualquier otro caso, en el domicilio del deudor.

Cambio de domicilio del deudor. **700.** Si el deudor mudare de domicilio y éste fuere designado a los efectos del pago, el acreedor tendrá opción para exigirlo, sea en el actual o en el primero. Análogo derecho corresponde al deudor, cuando el acreedor hubiere cambiado de domicilio y éste fuese el lugar indicado.

Pago en el lugar de la tradición. **701.** Cuando el pago consistiere en una suma de dinero como precio de una cosa enajenada, y no se hubiera fijado el lugar, se efectuará donde haya de cumplirse la tradición, siempre que dicho pago no fuere a término.

Tiempo en que debe hacerse. **702.** El pago debe hacerse en el día del vencimiento. Si no hubiere tiempo designado, ni resultare de las circunstancias, podrá el acreedor exigirlo inmediatamente.

Pago para cuando el deudor pudiere. **703.** Si el título constitutivo facultara al deudor para pagar cuando pudiera o tuviera medios suficientes, el juez, a instancia de parte, fijará el día en que deba cumplirse la prestación.

704. El acreedor podrá exigir el pago antes del vencimiento cuando el deudor cayera en insolvencia, o si por hecho de éste, hubieren disminuído las garantías estipuladas, o no se dieran las prometidas.

Exigibilidad anticipada.

Siempre que la obligación fuere solidaria no será exigible en tales casos para los demás codeudores. Tampoco lo será para los fiadores, que gozarán del término prefijado.

705. Podrá también el acreedor hipotecario o prendario reclamar el pago antes del plazo, cuando los bienes afectados fueren vendidos en remate judicial, y a requerimiento de otros acreedores.

706. Si el deudor quisiere realizar pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá éste ser obligado a efectuar descuentos.

Imprudencia de descuentos.

707. El acreedor debe otorgar documento de recibo por el pago realizado. Los gastos del primero serán a cargo del deudor, quien anticipará la suma necesaria.

Obligación de dar recibos.

708. Cuando existiere un instrumento de la obligación, el deudor podrá exigir su entrega al mismo tiempo que el recibo, excepto si el acreedor probare su interés razonable en conservarlo. En este último caso, el obligado tendrá derecho a un descargo por instrumento público y el escribano pondrá nota en el título del crédito para hacer constar que ha sido pagado. Si el acreedor se rehusare a presentarlo o alegare no tener el documento en su poder, procederá el pago por consignación.

Devolución del instrumento.

709. El acreedor quedará constituído en mora si rehusare la prestación ofrecida, a pesar de reunir ésta los requisitos del pago; o cuando, intimado al efecto, no realizare los hechos que le incumben para verificarlo; o siempre que, no estuviere en condiciones de cumplir su contraprestación.

Mora del acreedor.

No incurrirá en mora el acreedor si el deudor que hiere el requerimiento no pudiese ejecutar el pago en esa oportunidad.

710. La mora del acreedor producirá los efectos que siguen:

- 1º El deudor sólo responderá por su propio dolo y por su culpa, que el juez apreciará con arreglo al art. 569,
- 2º Cuando se tratase de cosas inciertas, los riesgos no pasarán al acreedor, mientras no se cumpla la obligación para recibir la cosa elegida.

Consecuencias.

- 3º La obligación del deudor de restituir los productos de una cosa, o abonar el importe de los mismos, queda limitada a los que hubiere percibido efectivamente.
- 4º El deudor tendrá derecho a que se le indemnicen los gastos de conservación, o guarda, así como los motivados por el requerimiento infructuoso.

CAPITULO IV

Del pago por consignación

Casos en que procede. **711.** Procede la consignación en los casos siguientes:

- 1º Si el acreedor se negare a recibir el pago ofrecido.
- 2º Cuando fuera incapaz para aceptarlo.
- 3º Si el acreedor se encontrare ausente.
- 4º Cuando éste fuera desconocido, o dudoso su derecho para recibir el pago, o concurrieren otras personas a exigirlo del deudor.
- 5º Siempre que mediare embargo o retención de la deuda en poder del obligado, y éste quisiera exonerarse del depósito.
- 6º Si el título de la obligación se hubiere perdido.
- 7º Si el que adeudare el precio de un inmueble quisiera redimir la hipoteca que lo grava.
- 8º En el caso previsto al final del art. 708.

Requisitos.

712. La consignación sólo tendrá fuerza de pago cuando llenare con respecto a personas, objeto, modo y tiempo, todos los requisitos para cumplir la prestación. La falta de cualquiera de ellos, autoriza al acreedor para rehusar la oferta.

Deuda de cuerpo cierto.

713. Si la deuda fuere de un cuerpo cierto, que deba ser entregado en el lugar donde se hallare, el deudor deberá intimar al acreedor para que lo reciba, y desde entonces, dicha diligencia surtirá todos los efectos de la consignación. Si el acreedor no lo recibiere, puede ser depositado en otra parte con autorización judicial.

Cuando el objeto se encontrare en lugar distinto de aquel en que deba ser entregado, será a cargo del deudor el transporte hasta el punto de su recibo. Procederá entonces, el requerimiento al acreedor.

714. Si la deuda consistiere en cosas inciertas que debe escoger el acreedor, el obligado le intimará que verifique la elección. Cuando no lo hiciere, el juez podrá autorizar al deudor para que la efectúe, y luego se intimará al acreedor el recibo de las cosas elegidas, como si se tratara de cuerpos ciertos.

Cosas inciertas que debe escoger el acreedor.

715. Si la deuda fuere en dinero, deberá hacerse el depósito a la orden del juez, notificándose al acreedor. Si éste no concurriese a retirarlo simplemente, dentro del plazo que se le acuerde, seguirá su trámite la consignación en juicio sumario.

Deuda de dinero.

El depósito suspenderá el curso de los intereses.

Efecto del depósito.

716. Desde el día del depósito, surtirá efecto de pago, tanto la consignación no impugnada como la que por sentencia se declarase válida. En ambos casos, los gastos de ella serán a cargo del acreedor. Corresponderán al deudor cuando hubiere desistido, o si la consignación fuere juzgada ilegal.

717. Mientras el acreedor no aceptare la consignación, o no recayere sentencia, podrá el deudor retirar el depósito, y la obligación renacerá con todos sus accesorios. Sin embargo, le está prohibido al obligado, aun con asentimiento del acreedor, percibir dicho importe en perjuicio de los codeudores o fiadores.

Retiro de la consignación.

718. Si declarada válida la consignación, consintiere el acreedor en su retiro por el obligado, no podrá para el pago del crédito prevalerse de las garantías o seguridades existentes, y los codeudores y fiadores quedarán libres.

Consentimiento del acreedor para el retiro.

CAPITULO V

De la imputación del pago

719. Cuando se tratare de varias prestaciones de igual naturaleza, debidas a un solo acreedor, el obligado podrá

Declaración del deudor.

declarar antes o al tiempo del pago, por cual de ellas se entenderá que lo realiza.

La elección recaerá siempre sobre deuda líquida y de plazo vencido.

Falta de imputación.
Recibo con referencia a una deuda.

720. Cuando el deudor no hubiere efectuado la imputación y aceptare recibo del acreedor con referencia a una de las obligaciones, no podrá pretender que su entrega se acredite a cuenta de otra, salvo dolo, violencia o sorpresa.

Deuda de capital e intereses.

721. Cuando se adeudare respecto de una misma obligación el capital, sea con interés o con gastos, el deudor no podrá imputar el pago al primero, sin el consentimiento del acreedor.

El pago por cuenta de capital e intereses y gastos, se imputará en primer término a los gastos, luego a los intereses, y por último al capital, excepto cuando el acreedor diere recibo en distinta forma.

Recibo sin imputación.

722. Si el recibo del acreedor no contuviere imputación del pago, deberá éste acreditarse, entre las obligaciones de plazo vencido, a la más onerosa para el deudor. Cuando las deudas fueren de igual naturaleza, se acreditará el importe a prorrata.

CAPITULO VI

Del pago con subrogación

Casos de subrogación legal.

723. Quedará subrogado, sin dependencia de cesión expresa:

- 1º Quien, siendo acreedor pagare a otro preferente.
- 2º El que satisfizo la deuda, a que estaba obligado con otros o por otros;
- 3º El tercero no interesado, que hiciere el pago, consintiendo el acreedor o ignorándolo éste.
- 4º El adquirente de un inmueble hipotecado, que pagare al acreedor.
- 5º El heredero bajo beneficio de inventario, que hubiere satisfecho con sus propios fondos la deuda de la sucesión.

724. La subrogación convencional tendrá lugar cuando el acreedor al recibir el pago de un tercero, le transmitiere expresamente todos sus derechos respecto del crédito.

Subrogación convencional.

725. Habrá también subrogación cuando el deudor de la hipoteca, o el poseedor de un inmueble gravado tomen dinero para pagar la obligación, y subrogasen al prestamista en los derechos del acreedor. Será menester que el acto constitutivo del mutuo y el recibo de pago al acreedor tengan fecha cierta; que en el primero conste el destino de la suma, y que en el descargo se declare que se hizo con tales fondos. No será necesaria cláusula expresa de subrogación, ni conformidad del acreedor. Cuando éste se rehusare a firmar la escritura de recibo con la mención indicada, podrá consignarse el importe y el pagador quedará subrogado.

Prestamista subrogado.

726. La subrogación legal o convencional transmite al nuevo titular, todos los derechos, acciones y garantías del antiguo, tanto contra el deudor principal y coobligados, como respecto de los garantes y terceros poseedores de los bienes afectados al crédito, con las restricciones siguientes:

Restricciones.
Efectos de la subrogación.

- 1º El subrogado solo podrá ejercer los derechos y acciones del acreedor, hasta la concurrencia de la suma realmente desembolsada para liberar al deudor.
- 2º El efecto de la subrogación convencional podrá limitarse a determinados derechos y acciones, por el acreedor, o por el deudor que la consintiere, y el de la subrogación legal, por acuerdo del acreedor o del deudor con el tercero.
- 3º La subrogación legal en provecho de quien hubiere satisfecho la deuda, a que estaba obligado con otros, sólo le autoriza a ejercer los derechos y acciones del acreedor contra sus codeudores, hasta la concurrencia de la parte por la cual cada uno de estos últimos debía contribuir al pago de la deuda.
- 4º La subrogación a favor del tercer poseedor de bienes hipotecados, no le facultará para perseguir al fiador, aunque la hipoteca hubiere sido constituida después de la fianza. El tercer poseedor de uno entre varios inmuebles hipotecados en garantía del crédito por él satisfecho, sólo podrá reclamar de los

otros poseedores la parte proporcional del beneficio que hubiere producido el pago a cada uno de ellos.

5º La subrogación a favor del tercer poseedor de un bien hipotecado por uno de los codeudores solidarios, sólo autorizará para ejercer las acciones del acreedor, hasta la medida en que el deudor, constituyente del gravamen, podría reclamar contra sus coobligados.

6º Cuando uno de los coherederos, a quien se adjudicare un bien gravado con hipoteca, subrogase al acreedor, únicamente podrá exigir de los demás la cuota que les corresponda en la sucesión.

Derecho del subrogado, respecto del acreedor.

727. Los derechos transmitidos por subrogación no pueden ejercerse en perjuicio del acreedor en cuanto se refiere al crédito pagado. Si el pago fuere parcial, el acreedor será preferido al subrogado para el cobro del saldo.

Pago del deudor con ignorancia del efectuado por un tercero.

728. El deudor que realizare el pago al acreedor, con ignorancia del que efectuó el tercero subrogado, extinguirá la obligación; pero este último podrá repetir en la medida de su entrega.

CAPÍTULO VII

De la dación en pago

Efecto extintivo.

729. La obligación quedará extinguida cuando el acreedor aceptare en pago una prestación diversa.

Si lo entregado fuere un crédito contra tercero, se aplicarán las reglas de la cesión.

Evicción y vicios redhibitorios.

730. Si el acreedor fuere vencido en juicio sobre el derecho a lo que recibió en pago, serán aplicables los preceptos sobre la evicción. Regirán igualmente en su caso, los relativos a los vicios redhibitorios.

Acuerdo sobre dación.

731. El mero acuerdo para realizar una dación en pago no extingue la obligación de pleno derecho; pero autoriza al deudor para oponerlo como defensa.

TITULO II

De la novación

732. Habrá novación cuando deudor y acreedor contrajeren una nueva obligación para extinguir y reemplazar la precedente. Noción.

La novación no se presume.

733. Los privilegios y garantías reales de la obligación primitiva podrán extenderse a la nueva, mediante reserva expresa, aunque los bienes hubieran sido transferidos a tercero. La responsabilidad de este último no excederá de la suma originaria. Privilegios y garantías de la obligación primitiva.

Los fiadores, o quienes hubieran constituido gravámenes quedan liberados, salvo que convinieren expresamente mantener su obligación.

TITULO III

De la compensación

734. Tendrá lugar la compensación cuando dos personas por derecho propio, reunieren recíprocamente la calidad de acreedor y deudor. Para que ella se opere, ambas deudas habrán de ser exigibles, líquidas y las respectivas prestaciones, de la misma especie y calidad. Requisitos.

Opuesta la compensación, extingue con fuerza de pago las dos obligaciones hasta donde alcance la menor. Efectos.

Este efecto regirá desde que comenzaron a coexistir, y no obstará a ello la impugnación del acreedor, cuando concurran las circunstancias requeridas por la ley.

Es ineficaz la compensación condicional o a término.

735. Cuando existan varias deudas compensables, a cargo de una misma persona, se aplicarán las disposiciones sobre imputación del pago. Preceptos aplicables.

Circunstancias que no impiden la compensación.

736. Reunidos los requisitos del art. 734, no obstarán la prescripción o el embargo ulteriores, la transferencia antes de ser notificada, ni la delegación que no hubiere aceptado el acreedor.

Deudas a que se aplica.

737. Será admitida la compensación, respecto de las deudas siguientes:

- 1º De las que fueren pagaderas en distintos sitios, con tal que se abonen los gastos de transporte o la diferencia de cambio al lugar de pago.
- 2º En caso de concurso del deudor, de las que tuvieran sus acreedores con los créditos de aquél, aunque ni unas ni otras fueren exigibles al dictarse el auto declarativo.
- 3º Aunque se trate de deudas o créditos ulteriores a la declaración del concurso, cuando el deudor obtuvo el crédito después del auto, por subrogación legal como coobligado, garante o tercer poseedor de bienes hipotecados, o en virtud de actos anteriores cumplidos de buena fe.
- 4º La obligación derivada de la fianza, con aquello que el acreedor adeude al fiador, o con el crédito que contra el mismo acreedor corresponda al deudor principal.

Deudas que no pueden compensarse.

738. No podrán compensarse:

- 1º Los créditos inembargables y las deudas nacidas de los delitos, salvo que lo consintiere el acreedor de ellas.
- 2º En las obligaciones afianzadas, la del deudor principal, con la deuda que tuviere el acreedor respecto del garante.
- 3º La deuda del obligado solidariamente, con el crédito de otro codeudor, ni con la de uno de los acreedores, excepto si mediare en ambos casos conformidad de ellos dada por escrito.
- 4º Por el deudor de títulos a la orden, aquello que adeudaren al tenedor los endosantes precedentes.
- 5º Los créditos y deudas ulteriores a la fecha del concurso, ni los que resulten de títulos al portador.

6º Las deudas y créditos entre particulares y la Nación, las provincias o los municipios, en los casos siguientes:

- a) Si las deudas de los particulares provinieren, sea del remate de bienes pertenecientes a la Nación, provincias o municipalidades, sea de rentas fiscales, contribuciones directas o indirectas, o de alcance de otros pagos que deban efectuarse en las aduanas, como derechos de almacenaje y de depósito.
- b) Cuando las deudas y los créditos no fuesen del mismo departamento o ministerio.
- c) Si los créditos de los particulares estuvieren comprendidos en la consolidación ordenada por la ley.

739. En el caso previsto en el art. 737, inc. 2º, si la deuda del concursado estuviere pendiente de término, se contarán los intereses por el tiempo no transcurrido.

Compensación en caso de concurso.

Cuando uno de los créditos fuere bajo condición suspensiva, el acreedor podrá exigir las garantías necesarias para reintegrarse de lo que debiere abonar por su parte.

Garantía en las condicionales.

TITULO IV

De la remisión de la deuda

740. La obligación se extingue, cuando el acreedor conviene en remitir gratuitamente la deuda. La remisión puede ser expresa o tácita, total o parcial.

Noción. Efecto.

741. La remisión no está sujeta a forma alguna. Cuando el crédito o sus derechos accesorios constaren en escritura pública, se hará de igual modo bajo pena de nulidad. Si aquéllos estuvieren inscriptos en el Registro de Inmuebles, sólo producirá efecto frente terceros, a partir de su inscripción.

Formas.

742. La entrega del instrumento original que justifica el crédito, realizada voluntariamente por el acreedor al deudor, constituye prueba de liberación.

Entrega del instrumento original.

Devolución de la cosa pignorada.

Siempre que dicho título se hallare en poder del obligado, se presume que el acreedor lo entregó voluntariamente.

743. La devolución de la cosa pignorada, ya la efectúe el acreedor, ya se realice con su anuencia, extingue la garantía, pero no la deuda. La existencia de la prenda en poder del obligado, hace presumir que la devolución fué voluntaria.

Es nula toda cláusula que deje subsistir el derecho real, no obstante la restitución del objeto.

SECCION QUINTA

DEL CONCURSO Y DE LOS PRIVILEGIOS

TITULO I

Del concurso de acreedores

Casos en que procede.

744. Corresponde la declaración del concurso, cuando el deudor la solicitare, o cedere judicialmente sus bienes a los acreedores.

Procederá igualmente a pedido de un acreedor, que lo sea por suma líquida y pagadera de inmediato o a plazo, con título ejecutivo, o susceptible de serlo al vencimiento del término. Los acreedores hipotecarios, pignoratícios o con privilegio especial no podrán pedirlo, salvo si renunciaren a la preferencia.

Solicitud de convocatoria.

745. Cuando un deudor se hallare en la imposibilidad de cumplir puntualmente sus obligaciones civiles, deberá antes de suspender sus pagos, o dentro de los tres días subsiguientes, solicitar del juez la reunión de sus acreedores.

Esta convocatoria sólo producirá efecto jurídico, en los casos y en la forma previstos por la ley.

Concurso forzado.

746. Procederá el concurso a instancia de acreedor siempre que el obligado se hallare en alguna de las circunstancias siguientes:

- 1º Si hubiere solicitado reunión judicial de acreedores, y en ella se desestimaren sus propuestas.

- 2° Cuando manifestare por escrito a cualquiera de sus acreedores la suspensión de sus pagos, o la proximidad de ella.
- 3° En el caso de haber reunido privadamente sus acreedores para examinar el estado de sus negocios, o de celebrar arreglos extrajudiciales de quita, espera o cesión de bienes, no aceptados por el solicitante.
- 4° Si realizó en fraude de sus acreedores, alguno de los actos anulables por dicha causa.
- 5° Cuando vendió a vil precio, trasladó o ocultó bienes, con el objeto de defraudar a sus acreedores o de entorpecer la acción de los mismos.
- 6° En el supuesto de haberse ocultado o de ausentarse, con el mismo fin que el señalado en el inciso anterior.

747. También procederá el concurso a instancia del acreedor: Otros supuestos.

- 1° Cuando por vía de apremio se ejecutare o hubiere ejecutado una sentencia dictada contra el deudor.
- 2° Cuando el solicitante hubiere obtenido fallo inapellable que condene al deudor en juicio ordinario al pago de una suma, y ésta no fuere cubierta en el término legal, o si las defensas opuestas a su cumplimiento, quedaren desestimadas. La misma regla se aplicará en los casos de juicio ejecutivo, cuando no hubiere lugar al de repetición.

El presente artículo no se aplicará si el deudor diese bienes suficientes a embargo. El juez podrá también no hacer lugar al concurso, si el obligado estableciere de una manera verosímil la existencia de un crédito reconventional contra el solicitante, por un importe equivalente o superior al de la sentencia, que no pueda hacer efectivo en virtud de la naturaleza del juicio, o de no concurrir los requisitos para la compensación.

748. Cuando los acreedores hipotecarios, pignoraticos o con privilegio especial presentaren una estimación de los bienes afectados y de los créditos a pagarse con anterioridad al propio, el juez podrá considerarlos como quirografarios por el excedente no garantizado.

Estimación por los acreedores con privilegio especial.

Efecto del concurso.

749. La declaración de concurso produce los efectos siguientes:

1º El deudor pierde la facultad de administrar y disponer de sus bienes.

La masa comprende todos los bienes del deudor, excepto aquellos que no pueden ser ejecutados, según las reglas de este Código. Abarca además, los adquiridos después de la declaración, que no provienen del trabajo o de la industria personal del obligado.

2º Los créditos pendientes de plazo se tornan exigibles. En los sujetos a condición suspensiva podrá el acreedor obtener el depósito del dividendo eventual, y cuando lo fueren bajo condición resolutoria, percibir la cuota, previa fianza de restituir.

3º Queda paralizado el derecho individual de los acreedores para ejercer sus acciones. Sin embargo, los que tuvieren garantía real o privilegio sobre cosas determinadas, podrán entablar o proseguir dichas acciones en concurso especial.

4º Todas las demandas contra el deudor o contra la masa, aun las iniciadas y las pendientes de fallo judicial o en vía de ejecución, serán de la exclusiva competencia del juez del concurso.

5º Los intereses serán exigibles contra la masa hasta el día en que fué declarado el concurso; la cláusula penal, cuando hubiera incurrido en ella el deudor, antes del auto declarativo.

Los acreedores con privilegio especial o garantía real podrán reclamar los réditos o la pena hasta concurrencia de los bienes afectados.

6º Cuando sin esperar al término prefijado, se verificare el pago de un crédito que no devengaba interés, se hará el descuento por el tiempo del adelanto, con arreglo a la tasa legal.

Representación del
concurrido y de la
masa.

750. El síndico ejerce la representación del concursado y de la masa en todas las gestiones y litigios. El deudor podrá sin embargo, adoptar las medidas conservatorias de sus derechos y promover las acciones extrañas al concurso.

751. Son nulos con relación a los acreedores, los actos jurídicos realizados por el deudor en cuanto a los bienes de la masa, después de la declaración del concurso. A este efecto se computará el día en que esta última fué dictada.

Actos nulos con relación a los acreedores.

752. El que pagare al deudor con posterioridad a la declaración, sólo se libera frente a los acreedores, en cuanto se beneficiare la masa; pero si hubiere satisfecho su deuda antes de publicada la declaración, quedará libre, a no ser que hubiere conocido la existencia del concurso.

Pagos al deudor.

753. Son nulos respecto de la masa, los actos que luego se enumeran, cuando ellos se realicen después de solicitado el concurso, pero antes de su declaración. También lo serán los que verifique el deudor después de cesar en sus pagos, o en las circunstancias previstas por el art. 746:

Actos nulos respecto de la masa.

1° Toda disposición a título gratuito. Tendrán especialmente este carácter:

- a) Los actos que importaren para el deudor aceptar una prestación notablemente inferior al valor de la suya.
- b) La constitución de una renta vitalicia, temporaria o de usufructo para el deudor o terceros.

2° El cumplimiento de obligaciones no vencidas, aunque mediare buena fe de las partes.

3° El pago de las deudas exigibles cuando se verificare de otro modo que por la prestación convenida, o si en las deudas por dinero se hiciere con papeles de comercio.

4° Los derechos reales constituidos sobre bienes del deudor en garantía de obligaciones anteriores, contraídas sin aquella seguridad.

754. Son anulables, con relación a la masa, los actos siguientes realizados en las circunstancias previstas por el artículo anterior:

Actos anulables.

1° Cuando fueren extintivos de obligaciones, y no estuvieren comprendidos en la regla precedente.

- 2° Los realizados con persona que tuviere conocimiento de hallarse el deudor en los casos de los arts. 745 y 746.

Plazo en que debe declararse la nulidad.

755. La nulidad no podrá ser declarada en ninguna de las situaciones previstas dentro de los dos artículos anteriores, cuando hubiere transcurrido más de un año entre la realización de los hechos y el auto declarativo del concurso.

Efectos de la nulidad.

756. Como consecuencia de la nulidad, el concurso deberá restituir a los terceros, lo entregado por ellos, cuando se hallare en especie, o el valor del enriquecimiento. El excedente, si lo hubiere, formará un crédito contra la masa.

El derecho del tercero contra el concurso renacerá una vez devuelto lo que hubiere recibido en virtud del acto impugnado.

El donatario de buena fe sólo responderá hasta la concurrencia del valor en que se hubiere beneficiado.

757. Si el adquirente hubiere transmitido los bienes, la declaración de nulidad no producirá efecto contra los sucesores a título singular, salvo cuando la enajenación fuese gratuita, o éstos hubieren tenido conocimiento de las causas que la invalidaban.

Acción revocatoria a favor del concurso.

758. El concurso podrá ejercer en su beneficio la acción revocatoria, cuando este Código la concediere a los acreedores individualmente.

Herencias o legados deferidos al deudor.

759. El síndico podrá aceptar o repudiar, con la venia del juez, las herencias o legados a favor del deudor, deferidos después del auto declarativo. La manifestación del deudor sólo valdrá cuando, intimado el concurso para aceptar o rechazar, se omitiere hacerlo dentro del plazo fijado. La aceptación del síndico se entenderá bajo beneficio de inventario, y tanto ella' como la renuncia, sólo producirán consecuencias con relación a la masa.

Deudor condómino, socio o comunero.

760. Cuando el deudor fuese condómino, socio o comunero, la liquidación y división serán independientes del procedimiento de concurso.

Los créditos surgidos de dichas relaciones, tendrán preferencia sobre el saldo, que en definitiva, correspondiere al deudor.

761. En un contrato bilateral, si ambos obligados hubieren dejado de cumplirlo, en todo o en parte, antes de la declaración, podrá el representante del concurso ejecutarlo por cuenta de la masa y exigir el cumplimiento.

Contratos bilaterales no cumplidos.

Aun antes de llegar la oportunidad del pago, el otro contratante podrá recabar que el síndico manifieste dentro del término que se le fije, si opta por la ejecución. En caso de silencio no podrá reclamarla después.

Se aplicará en tales supuestos, lo prescripto por el art. 828.

762. Si procediere la resolución del contrato y la parte no concursada dejare de exigirla, deberá cumplir su prestación, y sólo podrá entrar en la masa por el importe de su crédito.

Caso de resolución del contrato.

763. Cuando el concursado fuere locador, el contrato subsistirá. Los arrendamientos anticipados sólo valdrán por el año siguiente al auto declarativo.

Concurso del locador o locatario.

Si fuere locatario y la otra parte optare por la resolución, la masa dispondrá del plazo legal para el desalojo. Serán a cargo del concurso los alquileres devengados después de la apertura del mismo.

764. Si la obligación del deudor no fuere ejecutada y el contrato bilateral quedare rescindido, la otra parte no podrá exigir que la masa restituya lo que obtuvo en propiedad antes de la apertura del concurso, o de la presentación del deudor.

Contrato bilateral rescindido.

El acreedor, si no tuviere privilegio, sólo podrá exigir como quirografario, el importe del resarcimiento por inejecución o resolución.

765. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, deberán restituirse las cosas muebles entregadas al concursado, siempre que éste no hubiere obtenido la posesión efectiva antes de presentarse judicialmente o del auto que declaró el concurso.

Excepción.

766. No podrán hacerse valer en el concurso los créditos provenientes de una liberalidad, ni los legados testamentarios.

Créditos excluidos.

767. Las acciones para separar de la masa los bienes no pertenecientes al deudor serán regidas por las reglas de este Código, así como los privilegios de los acreedores.

Régimen de las acciones de restitución.

Aplicación de la ley de quiebras y de las procesales.

768. Se aplicarán subsidiariamente a los concursos civiles, las normas de la ley de quiebras para verificar los créditos, administrar y liquidar los bienes, las del concordato, terminación del concurso y la rehabilitación del deudor, en cuanto fueren compatibles con las del presente Código.

Se aplicarán asimismo, las que gobiernan los procedimientos para el juicio respectivo.

TÍTULO II

Del derecho de retención

Cuándo procede.

769. El obligado a restituir una cosa podrá retenerla cuando le correspondiere un crédito exigible, en virtud de gastos efectuados en ella, o con motivo de daños causados por dicho objeto.

No tendrá esta facultad quien detentare la cosa por razón de un acto ilícito. Este derecho podrá invocarse respecto de muebles no robados o perdidos, cuando mediere buena fe.

Cuándo debe entregarse la cosa retenida.

770. Aquel que retenga con derecho una cosa, y fuere demandado por la devolución de ella, sólo deberá restituirla cuando el demandante efectúe la contraprestación a que estuviere obligado.

Recaída sentencia, podrá procederse a la ejecución forzada si el detentador estuviere en mora para recibir el pago.

Indivisibilidad.

771. El derecho de retención es indivisible. Podrá ser ejercido por la totalidad del crédito sobre cada parte de la cosa que forma el objeto, pero se ajustará a las reglas sobre división de la hipoteca.

Embargo y venta de la cosa retenida.

772. El derecho de retención no impedirá que otro acreedor embargue la cosa y obtenga la venta judicial de ella; pero el adjudicatario, no podrá retirarla sin antes desinteresarse con su precio al detentador hasta la concurrencia del crédito de éste.

La retención no podrá invocarse contra los adquirentes de derechos reales sobre inmuebles inscriptos antes de nacer el crédito del opositor. Cuando se registraren después, sólo valdrá en el caso de que se hubiere anotado preventivamente dicho crédito, con expresión de su monto.

773. El derecho de retención se extingue por la entrega o abandono voluntario del objeto sobre que recae, y no renace, aunque éste vuelva por otro título a poder de la misma persona.

Extinción.

Cesa también la retención con el pago del crédito en que se funde, o con una garantía real suficiente.

Cuando el que retenga la cosa fuere desposeído contra su voluntad por el propietario o por un tercero, podrá reclamar la restitución, mediante las acciones que corresponden al poseedor despojado.

774. Cuando la cosa mueble afectada al derecho de retención hubiere pasado a un tercero de buena fe, la restitución no procederá, excepto en el caso de haber sido robada o perdida.

Cosa mueble que pasa a tercero de buena fe.

775. Los privilegios no podrán hacerse efectivos sobre las cosas muebles, en perjuicio del derecho de retención.

Preeminencia sobre privilegios.

TITULO III

De las causas de preferencia en el pago de los créditos

776. Fuera de los casos expresamente determinados por la ley, ningún crédito tendrá preferencia en el pago.

Fuente legal.

777. Los créditos hipotecarios y los reconocidos con privilegio especial, serán satisfechos con prelación sobre el valor de los inmuebles.

Hipotecas y privilegios especiales sobre inmuebles.

778. Son privilegiados sobre ciertos muebles:

Créditos privilegiados sobre ciertos muebles.

- 1º Los gastos de justicia para realizar la cosa y distribuir su precio.
- 2º Los impuestos y contribuciones nacionales, provinciales o municipales, sobre los objetos existentes, retenidos o secuestrados en las aduanas, o establecimientos fiscales. El privilegio no subsistirá cuando las cosas hubieren salido de poder del acreedor. Si éste fuere privado de ellas contra su voluntad, se procederá como en el caso de prenda.
- 3º El crédito con garantía pignoraticia será preferido a todos los demás sobre las cosas afectadas, pero sólo mientras se encuentren realmente en poder del acreedor.

Enumeración.

dor. El desposeído contra su voluntad podrá reivindicar durante tres años, en las condiciones prescriptas para el poseedor. Cuando hubiere diversos acreedores con una misma prenda, tendrán prioridad los más antiguos según el orden de su constitución, y los de igual fecha se dividirán el precio a prorrata. Si la prenda se hubiere establecido, mediante la entrega de los documentos que confieran el dominio o un derecho de garantía sobre las cosas en poder de terceros con privilegios especiales, el acreedor prendario deberá soportar tales preferencias.

- 4° Los gastos de conservación, fabricación o mejora de las cosas muebles, siempre que éstas se hallaren en poder del acreedor.
- 5° El crédito por hospedaje, sobre los muebles del viajero introducidos en la hostería, mientras permanezcan en ella. Concurrirán con los gastos de asistencia médica y de sepultura, cuando la enfermedad o el fallecimiento del huésped hubieren ocurrido en la posada.
- 6° Los créditos por transporte, sobre los efectos conducidos, por el precio de aquél, gastos y derechos de acarreo, así como los de conservación hasta la entrega. Deberán hacerse valer dentro de los tres días después de realizada ésta.
- 7° El precio de las semillas, los gastos de cultivo y recolección y la prima del seguro, sobre los frutos de la cosecha, mientras éstos se hallaren en poder del deudor. Si vendidos los frutos, se adeudare su importe, el privilegio se ejercerá sobre éste.
- 8° Los créditos por un año de arrendamiento vencidos si fueran de casas o locales, por dos si de heredades en explotación agrícola o ganadera, y en ambos casos por el año corriente, mientras no se efectúe el desalojo. Este privilegio comprende todos los frutos del año y los muebles que se hallaren dentro de la finca o que sirvieran para el trabajo de la misma, aunque no pertenecieren al locatario, introducidos por éste de una manera permanente o para ser vendidos o consumidos. Exceptúanse el dinero, los créditos y títulos, como también las cosas muebles que sólo se encuentren accidentalmente y deban ser reti-

radas, cuando el locador hubiere sido instruido de su destino, o lo conociere por la profesión del locatario, la naturaleza de las cosas o cualquier otra circunstancia. No se extiende a las robadas o perdidas, ni a las que el locador sabía que no eran del arrendatario.

La preferencia incluye las otras obligaciones del inquilino derivadas de su contrato, pero no los alquileres de las propiedades urbanas, una vez producido el desalojo, ni el resarcimiento por rescisión anticipada.

Cuando las cosas afectadas hubieren salido del inmueble, el locador podrá dentro del término de treinta días, embargarlas sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

Estas reglas se aplicarán al contrato de aparecería respecto de las prestaciones a cargo del colono.

- 9º El crédito del dueño de la cosa depositada, sobre el precio que adeudare el comprador, cuando la hubiere vendido el depositario o su heredero, aunque procedieren de buena fe.
10. El monto de la indemnización correspondiente a los terceros damnificados, sobre el valor del seguro contra las consecuencias de la responsabilidad civil. El asegurador podrá abonarles directamente esa cantidad.

779. Los créditos privilegiados sobre muebles se ejercerán por el orden de su enumeración en el caso de entrar en concurrencia. Los de igual categoría se liquidarán a prorrata.

Orden de estos privilegios.

780. Cubiertos los privilegios especiales, ingresará a la masa el excedente del producido de los muebles e inmuebles.

Excedente.

Cuando no fuere posible abonar el importe íntegro de los créditos preferidos, quedarán convertidos en quirografarios por el saldo.

781. En caso de seguro sobre cosas muebles, el importe de la indemnización, substituirá a los objetos, para que los acreedores con privilegio especial ejerzan su derecho, sin delegación expresa. Esta regla se aplicará a cualquier otra

Muebles asegurados.
Reglas.

indemnización para resarcir el daño causado en las cosas mencionadas.

Los pagos de buena fe antes de una oposición, serán sin embargo, válidos, siempre que se efectuaren dentro de los quince días del siniestro. Se considera oposición, todo aviso, sea cual fuere la forma, emanado del acreedor sobre la existencia de su crédito privilegiado.

En todos los casos, la indemnización puede ser empleada por el dueño en reconstituir o reparar la cosa.

Preferencia de las deudas y gastos de la masa.

782. Las deudas y los gastos de la masa deberán ser pagados con preferencia sobre los bienes que la integran.

Las deudas tendrán prelación respecto de los gastos.

Deudas de la masa.

783. Son deudas de la masa:

- 1º Las obligaciones legalmente contraídas por el síndico, y las derivadas de sus actos autorizados.
- 2º Aquellas que resultaren de los contratos, cuyo cumplimiento corresponda al concurso.
- 3º Las emergentes del enriquecimiento indebido de la masa.

Gastos de la masa.

784. Son gastos de la masa:

- 1º Los de justicia, originados por el procedimiento común.
- 2º Los de administración, realización y distribución de los bienes.

Créditos no comprendidos en los artículos anteriores.

785. Los créditos contra el concursado, que con arreglo a los artículos anteriores no tuvieron prelación serán satisfechos en el orden siguiente:

Primera categoría: ,

- 1º Los gastos de sepultura del deudor, realizada con toda modestia, así como las de su cónyuge e hijos que vivieren con él.
- 2º Los de salarios o sueldos por servicios domésticos durante un año; los de factores o dependientes por seis meses y los de trabajadores a jornal, semana o quincena, por tres meses, contándose estos plazos in-

mediatamente antes de la presentación del deudor o del auto declarativo.

Segunda categoría:

- 1º Los gastos por la última enfermedad del deudor, durante un término de seis meses. Esta disposición es aplicable al cónyuge y a los hijos que vivieren en compañía del concursado.
- 2º Los derivados de alimentos para el deudor y su familia, conforme al inciso precedente.

Tercera categoría:

Los de la Nación, las provincias y los municipios, por impuestos y contribuciones correspondientes al año en curso y al inmediato anterior.

Cuarta categoría:

Todos los demás créditos.

Los de igual clase serán abonados a prorrata.

786. El que tuviere un privilegio especial sobre diversos muebles, podrá ejercerlo por la totalidad de su crédito sobre todos o algunos de ellos.

Privilegio especial sobre distintos muebles.

En este último caso, los privilegiados en grado inferior respecto de las cosas realizadas, tendrán derecho para exigir que el crédito se distribuya proporcionalmente, sobre todos los bienes afectados, y les será reconocida la parte que así les hubiera correspondido sobre los demás bienes, aunque con relación a ellos no tuvieren preferencia.

787. Quedan subsistentes los privilegios marítimos y los demás reconocidos por el Código de Comercio o las leyes especiales, en cuanto no se opusieren a las reglas del presente Código.

Privilegios del Código de Comercio y leyes especiales.

SECCION SEXTA

DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I

De los contratos en general

CAPITULO I

Disposiciones comunes

Regla general.

788. Salvo precepto expreso de la ley, la constitución o modificación de obligaciones por actos jurídicos entre vivos, sólo puede tener lugar mediante contrato.

Contratos consensuales y reales.

789. Los contratos consensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo IV del presente título, quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde que las partes hubieren recíprocamente manifestado su consentimiento. Los reales, desde que una de ellas hiciere a la otra, la tradición de la cosa sobre que versare el contrato.

Aplicación de las reglas de este título.

790. Las reglas del presente título serán aplicables a todos los contratos. Los innominados se regirán por las disposiciones relativas a los nominados con los que tuvieren más analogía.

CAPITULO II

Del consentimiento

Cómo se manifiesta.
Presunción.

791. El consentimiento se manifiesta por oferta y aceptación. Se presume cuando una de las partes entregue y la otra reciba la cosa ofrecida o pedida; o haga lo que no hubiere hecho, o dejare de hacer lo que habría hecho si su intención fuere no aceptar la propuesta.

792. Entre ausentes, el consentimiento podrá manifestarse por medio de agentes o por correspondencia epistolar o telegráfica.

Consentimiento entre ausentes.

793. Cuando la oferta emane de distintas personas, o fuere dirigida a varios interesados, no habrá contrato sin el consentimiento de todos los que sean partes principales o subsidiarias, a menos que lo contrario resultare de las circunstancias.

Quedan exceptuados los casos en que la ley autorice a la mayoría para concertar el acuerdo.

794. La propuesta de contrato obliga a quien la formula, a no ser que lo contrario surja de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las modalidades de éste.

Oferta de distintas personas o dirigida a varios.

Cuando se hiciere a un ausente y no llevase plazo, el que la propuso quedará obligado hasta el momento en que pueda esperarse el recibo de la contestación expedida a tiempo y regularmente.

795. No constituye oferta el envío de tarifas, listas de precios y otros prospectos o avisos análogos.

Cuándo obliga la propuesta.

796. La oferta quedará sin efecto:

Caducidad de la oferta.

- 1° Si antes de la aceptación, alguna de las partes falleciere o perdiere su capacidad para contratar.
- 2° Cuando previamente, o al mismo tiempo que ella, fuere notificado su retiro.
- 3° Siempre que no fuere aceptada, o no lo fuere en tiempo útil, o dentro del plazo fijado.
- 4° Cuando, formulada verbalmente en presencia de la persona a quien se dirige, no se la aceptare de inmediato.
- 5° Si realizada por intermediario en las condiciones del inciso anterior, éste no obtuviera una conformidad expresa.

El mismo principio de los incs. 4° y 5° regirá cuando en iguales supuestos se empleare comunicación telefónica.

797. La aceptación de una oferta dirigida a un ausente deberá prestarse dentro del plazo en que, según las condiciones ordinarias, el proponente debió esperar la respuesta.

Oferta dirigida a un ausente.

El autor de la oferta puede calcular ese término en el supuesto de haber llegado aquélla sin retardo a la otra parte.

Caducidad por no
aceptación.

798. La oferta caduca cuando no es aceptada, o no lo es en tiempo útil o dentro del plazo fijado.

Modificación de la
oferta.

799. Cualquier modificación introducida en la oferta al aceptarla, importará la propuesta de un nuevo contrato.

Oferta alternativa o
de partes separables.

800. Cuando la oferta fuere alternativa o comprendiere partes separables, la aceptación de cualquiera de ellas dará lugar a un contrato válido. Si aquéllas no pudieren dividirse, la conformidad respecto de una sola será considerada como la propuesta de un nuevo contrato.

Perfección del contra-
to.

801. La aceptación hace perfecto el contrato desde que ella hubiere sido enviada al proponente.

Cuando el autor de la oferta no deba por la naturaleza especial del asunto, o por otra circunstancia, esperar una aceptación expresa, el contrato se juzgará concluido desde que fué recibida la propuesta, siempre que el rechazo de ella no se produjere dentro de un término prudencial.

Resarcimiento al acep-
tante.

802. El que hubiere aceptado la oferta por ignorar la retractación del proponente, su muerte o incapacidad ulterior, tendrá derecho a una indemnización cuando a consecuencia de ello hubiere realizado gastos o sufrido pérdidas, como cualquier otro perjuicio que no habría padecido a falta de promesa. El resarcimiento no podrá exceder del interés que habría tenido el aceptante en caso de perfeccionarse el contrato.

Retractación del acep-
tante.

803. El aceptante de la oferta puede retractar su conformidad, con tal que su aviso llegue a poder del proponente, antes o junto con el de la aceptación.

Subastas.

804. En las subastas, el contrato queda concluido por la adjudicación. Si ésta no se realiza, la oferta caduca, lo mismo que cuando se formula una propuesta mayor.

Ofertas al público.

805. En las ofertas al público, cuando ellas contuvieren todas las cláusulas del contrato, podrá establecerse que no se dará curso a ninguna aceptación que modificare la propuesta. Esta cláusula será nula cuando la oferta no hubiere sido totalmente formulada por escrito.

La estipulación contenida en el presente artículo se juzgará implícita cuando se tratare de servicios públicos.

Cláusulas ocultas.

806. Para los casos del artículo precedente son de ningún valor las cláusulas ocultas, o que se hicieren saber después de la aceptación.

CAPITULO III

Del objeto de los contratos

807. Las cosas, para ser objeto de los contratos, deben ser determinadas en cuanto a su especie. Determinación necesaria.

La indeterminación de su cantidad no será obstáculo, siempre que ella pudiera ser fijada sin nuevo acuerdo entre las partes.

808. La cantidad se reputa determinable cuando su fijación se deja al arbitrio de un tercero. Si éste no quisiere o no pudiere hacerlo dentro de un plazo prudencial, el contrato quedará sin efecto, a menos que contuviere bases para dicha determinación. En este caso la hará el juez, como también cuando una de las partes hubiere ejecutado lo convenido sin acordar la cantidad de la contraprestación. Arbitrio de tercero.

809. La determinación de la cantidad, realizada por el tercero, no puede ser impugnada, excepto cuando se demostrare que procedió por dolo, violencia o error esencial. Determinación impugnable.

810. Si al contratarse una prestación imposible, sólo una de las partes conoció o debió conocer esa circunstancia, estará obligada a reparar el daño que hubiere sufrido la otra, por haber confiado en la validez del acto. Tal responsabilidad no podrá exceder del interés que tenía esa parte en el cumplimiento de la convención. Prestación imposible.

Estas disposiciones son aplicables al caso de imposibilidad parcial, o cuando el contrato fuere válido en parte.

811. La imposibilidad no afecta la eficacia del contrato ajustado para el caso de que la prestación llegara a ser posible. Pero si hubiera sido prometida bajo otra condición suspensiva, o sujeta a plazo, también suspensivo, el contrato será válido, siempre que la imposibilidad desapareciera antes de cumplida la condición o de vencer el término. Caso de que la prestación llegare a ser posible.

812. La prestación de cosas futuras puede ser objeto de contrato. Si la existencia de ellas dependiere de la industria del que se comprometió a suministrarlas, la obliga- Cosas futuras.

ción será considerada pura y simple. Cuando estuviere sujeta en todo o en parte a fuerzas naturales, el contrato se reputará subordinado al hecho de que llegaren a existir, excepto si la convención fuere aleatoria.

Anulabilidad por causa del objeto.

813. Serán anulables los contratos que tuvieren por objeto la entrega de cosas litigiosas, dadas en prenda o en anticresis, hipotecadas o embargadas, cuando se hubiere ocultado su condición al adquirente. Se aplicará en tal caso lo dispuesto por los arts. 810 y 811, si la convención no llegare a cumplirse, salvo reglas especiales de este Código.

Siempre que se hubiere pactado la entrega de tales cosas sin mediar dicha ocultación, el contrato será válido, pero ellas pasarán al acreedor, tal como se hallaban al efectuarse el convenio.

Herencia futura.

814. La herencia futura no puede ser objeto de un contrato, aunque la persona de cuya sucesión se trate prestara su consentimiento. Esta regla se extiende a los derechos hereditarios eventuales sobre bienes particulares.

Es nulo el contrato por el cual una persona se obligue a transmitir o afectar en todo o en parte, los bienes que llegare a obtener en el futuro.

Contrato conjunto sobre bienes presentes y futuros.

815. Los contratos que versaren a la vez sobre bienes presentes y sobre los comprendidos en el artículo anterior, serán nulos en el todo, cuando hubieren sido concluidos a cambio de una sola prestación, salvo que el deudor de esta última aceptare que ella se aplique íntegramente al pago de los bienes presentes.

CAPÍTULO IV

De la forma de los contratos

Leyes aplicables.

816. La forma de los contratos será juzgada:

- 1º Entre presentes por las leyes y usos del lugar en que hubieran sido concluidos.
- 2º Entre ausentes, cuando fueren otorgados en instrumento privado, suscripto por alguna de las partes, por las leyes del lugar que indicare su fecha.
- 3º Si el acuerdo resultó de correspondencia, de la intervención de agentes o de instrumentos firmados

en distintos lugares, se aplicarán las leyes más favorables a la validez del acto.

817. Deben constar en escritura pública, bajo pena de nulidad:

Contratos que exigen escritura pública.

- 1º Los contratos que tengan por objeto la constitución, modificación, transmisión, renuncia o extinción de derechos reales sobre inmuebles.
- 2º Las particiones extrajudiciales de bienes, cuyo importe conjunto exceda de dos mil pesos, o si comprendieren inmuebles, aunque su valor no llegue a esa cantidad.
- 3º Los contratos de sociedad, cuando el capital de cada socio pase de dos mil pesos, o cuando alguno de los bienes aportados fuere inmueble.
- 4º Las convenciones matrimoniales y la constitución de dote, en los mismos casos que en los dos incisos anteriores.
- 5º La cesión o renuncia de derechos hereditarios en iguales condiciones.
- 6º Todo acto constitutivo de renta vitalicia.
- 7º Los poderes generales o especiales para representar en juicio, los conferidos para administrar bienes, contraer matrimonio, reconocer hijos, y cualquier otro que tenga por objeto un acto otorgado, o que deba otorgarse por escritura pública.
- 8º Las transacciones respecto de inmuebles, y los compromisos arbitrales relativos a ellos.
- 9º Todos los contratos para modificar, transmitir o extinguir los actos celebrados mediante escritura pública, o los derechos procedentes de ellos.
- 10º Los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública, con excepción de los parciales y de los relativos a intereses, canon o alquileres.

818. Los contratos, que debiendo llenar el requisito de la escritura pública, fueren otorgados por instrumento privado o verbalmente, no quedarán concluidos como tales, mientras no estuviere firmada aquella escritura. Valdrán sin embargo, como contratos en que las partes se hubieren obligado a cumplir esa formalidad.

Omisión de la escritura pública: efecto.

Estos actos, como aquellos en que los interesados se comprometieren a escriturar, quedan sometidos a las reglas sobre obligaciones de hacer.

El presente artículo no tendrá efecto cuando las partes hubieren convenido que el acto no valdría sin la escritura pública.

Demandas de escritura.

819. En el caso del artículo anterior, la parte que rehusare cumplir la obligación podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública.

Si el comprador pidiere el embargo del inmueble, materia del contrato, el juez lo decretará, previo depósito del precio que corresponda pagar en el acto de la escrituración.

Facultad del juez.

Cuando la sentencia condenare a escriturar, y alguna de las partes no hubiere concurrido al otorgamiento, el juez, llenadas las condiciones del contrato, podrá firmar el instrumento por el litigante remiso.

CAPITULO V

Del efecto de los contratos

§ 1. — Disposiciones generales

Convenciones comprendidas en los contratos.

820. Las convenciones incluidas en los contratos son obligatorias para las partes, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas, teniendo en cuenta los usos del lugar.

Efectos en cuanto a sucesores universales.

821. Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones derivadas de ellos sean inherentes a la persona, o que lo contrario resulte de una disposición legal expresa de una cláusula del contrato, o de la naturaleza de éste.

Terceros.

Los contratos no pueden oponerse a terceros, ni ser invocados por ellos.

Acuerdo para extinguir las consecuencias de los contratos.

822. Las partes pueden por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones creadas por los contratos, así como

los derechos reales que hubieren transmitido, y también revocar los primeros por las causas que la ley autoriza.

➤ 823. El lugar para el cumplimiento de los contratos, cuando en ellos no estuviere designado, o no lo indicare la naturaleza del acto, será el de su celebración, si en él tuviere su domicilio el deudor, aunque después lo mudare o falleciere. Lugar de cumplimiento. Reglas. S.C.

Si el contrato se hubiere celebrado fuera del domicilio del deudor, en un lugar que por las circunstancias no debía ser el de su ejecución, habrá de cumplirse en el domicilio actual del obligado, aunque no fuere el mismo que tuviere en la época del contrato.

824. Los efectos del contrato entre ausentes, serán juzgados por la ley del lugar donde quedó perfeccionado el acto.

Ley que rige los efectos del contrato entre ausentes.

➤ 825. Cuando un contrato deba ejecutarse en el territorio de la Nación, su cumplimiento podrá ser demandado ante los jueces del país, aunque el deudor no tuviere en él su domicilio o residencia. Si lo tuviere dentro del territorio de la Nación, y el contrato deba cumplirse fuera de él, el acreedor podrá acudir a los tribunales argentinos, o ante los del lugar de la ejecución, aunque allí no se encontrare el obligado. Jurisdicción de los tribunales argentinos. S.C.

826. Los contratos celebrados en el territorio de la Nación para violar los derechos y las leyes de un estado extranjero no tendrán efecto alguno.

Contratos para violar leyes extranjeras.

➤ § 2. — Del efecto de los contratos bilaterales

827. En los contratos bilaterales, ninguno de los otorgantes podrá exigir su cumplimiento, si no probare haber realizado la prestación propia, u ofreciere realizarla, a menos que el otro debiera llenar antes la suya.

Actio non adimpleti contractus.

Cuando el pago deba efectuarse a varias personas, el deudor puede rehusar la entrega de la cuota que a ellas corresponda, hasta haber recibido íntegramente la contraprestación.

Si un contratante hiciere pagos parciales, puede negarse la contraprestación, a menos que las circunstancias permitan juzgar que la resistencia a la entrega es contraria a

Peligro de incumplimiento.

la buena fe, por la modicidad relativa de la parte adeudada.

828. Si los derechos de quien primero deba cumplir el contrato, corrieran peligro por la insolvencia, el concurso o la apreciable disminución del patrimonio de la otra parte, será lícito rehusarse a ejecutarlo hasta recibir la contraprestación, o mientras ésta no le fuera afianzada.

Causas de resolución.

829. Habrá lugar a la resolución del contrato:

1º Siempre que por pacto comisorio cada contratante se hubiere reservado la facultad de no cumplir el convenio cuando el otro no lo hiciere. En este caso, la rescisión procederá sólo a instancia de la parte no culpable.

La facultad que acuerda este inciso se entiende implícita en todos los contratos bilaterales.

2º Si hubiere imposibilidad de cumplir la prestación de uno de los contratantes, y así resultare de un hecho posterior al contrato no imputable a ninguno de ellos.

3º Cuando quien hubiere dado arras para asegurar el contrato o su cumplimiento, se arrepintiere y dejare de ejecutar su prestación con pérdida de ellas.

4º Si quien recibió dichas arras desistiere, volviéndolas con otro tanto de su valor.

5º Cuando no formalizándose la garantía a que se refiere el art. 828, dentro de un término razonable, la otra parte demandare la resolución.

* La resolución se formalizará al ser notificada a la otra parte.

Arras.

830. Cuando se hubieren dado las arras de que trata el inc. 3º del artículo anterior y el contrato se cumpliera, la señal será restituída en el estado en que se encuentre; pero si fuera de la misma especie de lo que debiera darse en virtud de lo convenido, se tendrá como parte de la prestación.

Imposibilidad posterior al contrato.

831. Siempre que la imposibilidad de cumplir la prestación resultante de un hecho posterior al convenio, se debiera a uno de los contratantes, podrá el otro optar entre

cumplir el contrato o resolverlo, con derecho en los dos casos, a los daños y perjuicios emergentes de la inexecución.

832. Si la prestación a cargo de una parte en un contrato bilateral no pudiera cumplirse por circunstancias imputables a la otra, subsistirá el derecho a la contraprestación respectiva. En este caso deberá deducirse del valor de la última, lo economizado por el contratante que se desligó de su obligación, o lo que hubiere obtenido con otro empleo o actividad, o lo que por su mala fe dejare de adquirir.

Lo mismo se resolverá cuando la prestación de una parte se hiciere imposible por motivos que no le fueren imputables, si el otro contratante estuviere en mora para recibir el pago.

833. El contratante no tendrá derecho a pedir la resolución:

Pérdida del derecho de resolución.

- 1° Siempre que fuere responsable por hecho propio o ajeno, de la pérdida o deterioro esencial del objeto recibido, o de la imposibilidad para restituirlo.
- 2° Si hubiere transformado la cosa en otra especie.
- 3° Cuando enajenó la cosa o parte principal de ella, o la hubiere gravado con un derecho a favor de tercero, y no le fuere posible restituirla por esa causa o porque en poder del adquirente se cumplieren las condiciones del inc. 1°.

834. Si uno de los contratantes se hallare en retardo, el otro podrá fijarle un término razonable para el cumplimiento, con prevención de que una vez transcurrido, usará su derecho de optar.

Intimación previa.

No ejecutada la prestación, el acreedor podrá exigir se cumpla el contrato si fuere posible, y los daños y perjuicios; o bien darlo por resuelto con derecho al resarcimiento por la inexecución, si hubiere lugar, haciéndolo saber al otro interesado.

Si al vencer el plazo, la prestación hubiere quedado sin ejecutar en parte, serán aplicables, los arts. 827 y 829.

Cuando el contratante manifestare que no cumplirá la prestación o estuviere en mora, no será necesario establecer el plazo.

Efecto de la resolución.

835. La resolución sólo producirá efecto entre las partes, y no para los terceros adquirentes de los bienes transmitidos por el contrato o que hubieren constituido derechos reales sobre ellos, aunque conocieran los antecedentes que hacían posible la resolución.

Si hubiera cláusula expresa sobre la eficacia de la condición resolutoria respecto de extraños, sólo tendrá valor contra quienes hubieren adquirido sus derechos después de inscripta preventivamente en el Registro.

Retardo en la restitución.

836. Producida la resolución se aplicarán las reglas siguientes:

- 1º La parte que hubiere ejercido el derecho de pedir, la deberá restituir lo entregado, conforme a las normas establecidas para los actos jurídicos bajo condición.
- 2º Quien resultare beneficiado con servicios, uso o goce de una cosa prestados en virtud del contrato, abonará el respectivo valor. Si debiere una suma de dinero, pagará proporcionalmente su importe.

Pluralidad de contratantes.

837. Cuando la parte facultada para resolver el contrato retardare la restitución prevista en el art. 836, inc. 1º, en todo o en medida apreciable, quedará autorizada la otra para fijarle un plazo prudencial con la advertencia de que, una vez transcurrido, optará por anular la resolución, o por exigir la entrega pendiente. Si venciera el término, podrá ejercer cualquiera de los derechos enunciados.

Plazo para exigir la resolución.

838. Si los contratantes fueren varios por cada parte, la resolución sólo podrá ser exigida por todos, o respecto de todos. Extinguido el derecho de efectuarla para uno de los titulares, caducará para los demás.

839. Cuando el titular no tuviere plazo para exigir la resolución, la otra parte podrá fijarle uno conveniente. El derecho para resolver quedará extinguido cuando no se ejerciere dentro de este término.

Dudas sobre el cumplimiento.

840. Cuando existiere duda acerca del cumplimiento, y de este hecho dependiere resolver el contrato, corresponderá la prueba a quien pretenda la afirmativa, a menos que se tratare de una abstención.

Prestaciones previas a la rescisión.

841. Si fuere necesaria la entrega de cierta suma u otra prestación para que una parte pueda rescindir, y este

extremo no fuere cumplido antes o al tiempo de intimar al otro contratante, caducará el derecho, siempre que el requerido exigiere el cumplimiento para aceptar la resolución.

No se aplicará esta regla cuando la prestación omitida se efectuare inmediatamente después del rechazo.

842. La cesión realizada por una parte, de las obligaciones a su cargo, no la libera respecto de su acreedor. Podrá éste exigir que el cedente ejecute sus prestaciones, recabar la resolución y oponer al cesionario las defensas derivadas del incumplimiento, aun después de producida la notificación o la aceptación.

Cesión de obligaciones.

Este principio no rige para los títulos al portador.

CAPITULO VI

De los contratos a cargo o a favor de terceros

843. El contrato celebrado a nombre propio, prometiendo la prestación de un tercero, será obligatorio cuando el autor de la oferta hubiere garantizado la ratificación o el cumplimiento por parte de aquél. En la duda, se entenderá que sólo fué asegurada la ratificación. Prestada ésta, las relaciones entre el estipulante y el tercero, serán juzgadas como en el caso de un contrato directo.

Promesas de prestación de tercero.

844. Puede estipularse por contrato a favor de tercero. Este obtendrá directamente los derechos derivados de la convención, en los términos que ella establezca.

Estipulación a favor de tercero.

845. A falta de cláusulas especiales, se atenderá a las circunstancias y al objeto del contrato, para determinar si el tercero adquiere derechos, y bajo qué condiciones, y si queda o no reservada a las partes la facultad de modificarlos o de suprimirlos sin asentimiento del beneficiario.

Derechos del tercero.

846. Cuando en un contrato de seguro sobre la vida o en la constitución de una renta vitalicia se hubiere estipulado el pago a favor de tercero, se presume que éste adquiere directamente la prestación. Lo mismo regirá para el beneficiario de un cargo, impuesto en actos a título gratuito u oneroso.

Seguro de vida o renta vitalicia a favor de tercero.

847. Si la prestación debiera efectuarse después de fallecido el estipulante, el tercero beneficiario obtendrá el de-

Prestaciones a realizarse después de la muerte del estipulante.

recho, a partir del deceso de aquél. Hasta entonces será lícito al que contrató revocar o modificar la disposición. Tal facultad no compete a los acreedores; ni a los herederos, excepto cláusula expresa.

Cuando el beneficiario falleciere con anterioridad, su derecho no se transmite por sucesión.

Facultades que pueden reservarse los contratantes.

848. Los contratantes pueden reservarse las facultades de revocar el beneficio o de substituir al tercero y también concederlas sólo al estipulante. En este último caso, lo mismo que para los previstos en el artículo anterior, esos derechos se ejercerán por declaración notificada a la parte que prometió, o bien por cláusula testamentaria.

Pueden asimismo, convenir que el beneficiario sea ulteriormente designado por el estipulante.

Renuncia del beneficiario.

849. El tercero podrá repudiar lo estipulado a su favor. Esta facultad se extingue por aceptación expresa o tácita. La renuncia será irrevocable y suprimirá el derecho del beneficiario, como si nunca hubiere existido.

Defensas del autor de la promesa.

850. El autor de la promesa podrá oponer al tercero todos los medios de defensa y las excepciones derivadas del contrato.

Incumplimiento del contrato. Resolución del mismo.

851. El estipulante podrá hacer uso de las facultades emergentes del incumplimiento, como también resolver el contrato cuando el autor de la promesa no realizara la prestación a favor del tercero. Le asistirá igualmente el derecho de exigir esta última, sin perjuicio de que pueda también hacerlo el beneficiario.

TÍTULO II

Del enriquecimiento sin causa

Noción.

852. Cuando alguien, sin causa jurídica, se enriqueciere con detrimento de otro, deberá en la medida de su beneficio, restituirle el valor en que le hubiere empobrecido.

Todo reconocimiento convencional sobre la existencia o inexistencia de una obligación queda comprendido en el presente artículo.

Pago sin causa o por causa ilícita.

853. El pago sin causa, o por una causa contraria a la ley o a las buenas costumbres, podrá repetirse, haya sido o no efectuado por error.

Se considera especialmente sin causa, el efectuado en mira de un hecho futuro que no se realizó, o de una causa que dejó de existir, o cuando se opusiere a su cumplimiento un obstáculo legal. Siempre que al dictar sentencia en cualquier pleito, el juez estimare que hubo causa torpe por ambas partes, deberá ordenar que los beneficios así obtenidos, se transfieran al tesoro de las escuelas primarias de la Nación o de las provincias, según correspondiere.

854. Aunque el obligado lo sea efectivamente, podrá repetir el pago:

Pagos que pueden repetirse.

- 1° Cuando lo hizo pendiente la condición suspensiva.
- 2° Si la prestación fuere de dar cosa cierta, y entrego un objeto por otro.
- 3° Cuando fuere de dar cosas inciertas y sólo determinadas por su especie, o bien una obligación alternativa, y hubiese cumplido todas las prestaciones comprendidas en ésta, o efectuado el pago bajo el supuesto de hallarse sujeto a la entrega de una cosa cierta.
- 4° Siempre que en la obligación alternativa y si le correspondiere optar, hubiere pagado en la creencia de que esta facultad pertenecía al acreedor.
- 5° Cuando en la obligación de hacer o de no hacer, pagare o se abstuviere de un hecho por otro.
- 6° Si cumplió como solidaria una divisible o simplemente mancomunada.

855. Podrá ser repetido el pago sin causa efectuado bajo la inminencia de un apremio judicial o administrativo.

Apremio judicial o administrativo.

856. El pago en virtud de una obligación a la orden o al portador, que no lleve causa, podrá repetirse contra el otorgante originario.

Título al portador.

857. No darán lugar a repetición, los pagos voluntarios efectuados para cumplir las obligaciones siguientes:

Pagos voluntarios sin acción para repetir.

- 1° Las contraídas por personas con discernimiento, pero incapaces para ejercer por ellas mismas los derechos.
- 2° Aquellas, cuya acción estuviere prescripta.
- 3° Las procedentes de actos jurídicos desprovistos de las solemnidades impuestas por la ley.

4° Las desestimadas por sentencia firme.

5° Las disminuídas por quita concedida al deudor, o ineficaces por mediar sentencia que lo rehabilite.

El mismo principio se aplicará respecto de aquellos pagos realizados para satisfacer deberes morales o de conciencia.

858. No procede repetir lo pagado:

Repetición improcedente.

1° Cuando a sabiendas se cumplió una obligación inexistente.

2° Si, como consecuencia del pago el acreedor hubiere destruído el documento que le servía de título. En este caso podrá quien pagó recurrir contra el verdadero obligado.

3° Siempre que lo efectuare en virtud de una obligación nula, si ella fuere confirmable.

4° Si en una obligación a plazo, se pagó antes de su vencimiento.

5° Cuando la prestación se efectuó en vista de un propósito no realizado, que desde el comienzo, el deudor sabía imposible. La misma regla se aplicará, cuando de mala fe, éste impidiere su cumplimiento.

Actos de disposición ejecutados sin derecho.

859. Quien hubiere ejecutado sin derecho, cualquier acto de disposición sobre un bien, susceptible de producir efecto contra el verdadero titular, deberá restituir a éste cuanto hubiere obtenido a consecuencia del acto. El tercero quedará igualmente obligado en caso de adquisición a título gratuito.

Asimilación a poseedores de buena o mala fe.

860. El que hubiere recibido el pago de buena o de mala fe, será considerado como el poseedor en igual circunstancia.

Consiste la mala fe en el conocimiento de la falta de causa, desde el instante en que se tuviere.

Adquirentes de buena fe.

861. Si los bienes se transmitieron a título oneroso, la repetición no podrá ser demandada, ni producirá efecto contra los adquirentes de buena fe. Para las enajenaciones a título gratuito se aplicará lo dispuesto en el art. 859, y será exigible la restitución.

Constitución o liberación de deuda obtenidas sin causa.

862. Quien obtuvo sin causa la constitución o el reconocimiento de una deuda, deberá restituir el título respectivo.

tivo y otorgar recibo al deudor, por instrumento de la misma naturaleza.

El deudor liberado sin causa, deberá reconocer de nuevo al acreedor por la misma deuda, con iguales garantías y documentación. Si el crédito originario no estuviere vencido, podrá reclamarse dicho reconocimiento, y la sentencia dictada servirá de título. Cuando la deuda fuere exigible, será permitido reclamar directamente el pago.

863. El que hubiere contraído sin causa una obligación, podrá negarse a cumplirla, aún cuando estuviere prescrita la acción para liberarse de esa deuda.

Derecho del obligado
sin causa.

TITULO III

De los actos ilícitos

CAPITULO I

Disposiciones generales

864. Los actos voluntarios sólo tendrán el carácter de Concepto. ilícitos:

1º Cuando fueren prohibidos por las leyes, los reglamentos municipales, u otros dictados por la autoridad competente.

Quedan comprendidas en este inciso las omisiones que causaren perjuicio a terceros, cuando una ley o reglamento obligare a cumplir el hecho omitido.

2º Si hubieren causado un daño o produjeren un hecho exterior, susceptible de ocasionarlo.

3º Siempre que a sus agentes les sea imputable culpa o dolo, aun cuando se tratase de una simple contravención.

865. Habrá culpa en los casos previstos por el art. 569 Dolo o culpa. de este Código.

Habrá dolo cuando el acto ilícito fuere ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro.

Daño.

866. Existirá daño, siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en las cosas de su dominio o posesión, o en sus derechos o facultades.

El deber de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por el acto ilícito.

Solidaridad.

867. Si varias personas se hubieren concertado para ejecutar un acto ilícito, quedarán solidariamente obligadas a la reparación del perjuicio producido por aquél, sean ellas autores, instigadores o cómplices.

Quien hubiere pagado la totalidad del daño, podrá repetir la parte que fije para cada uno el juez, según la gravedad de la falta. Si ello no fuere posible, la división se hará por cuotas iguales.

Irresponsabilidad.

868. No responden por sus actos ilícitos:

1º Quienes procedan en un estado de perturbación mental permanente o transitorio, que les prive de discernimiento; a menos de haberse realizado el acto en un intervalo lúcido. La embriaguez y la intoxicación no eximirán, si no se demostrare por quien las opusiere, que no le son imputables.

2º Quienes no hayan cumplido diez años. Los menores de dieciocho y mayores de diez, así como los sordomudos, cuando en el momento de cometer el acto ilícito carecieran del discernimiento necesario para conocer su responsabilidad.

Culpa exclusiva del damnificado.

869. El acto que hubiere perjudicado a una persona por la exclusiva culpa de ésta, no determina responsabilidad alguna.

Culpa concurrente.

Si la culpa del damnificado contribuyó a causar el daño, la cuantía del resarcimiento se disminuirá en esa proporción.

Reparación.

870. La reparación se cumplirá por los medios adecuados al resarcimiento concedido, y en subsidio, por el pago de una suma de dinero.

CAPÍTULO II

De los casos de indemnización

Homicidio.

871. Si el delito fuere de homicidio, el delincuente deberá pagar los gastos de asistencia y sepelio; además, lo ne-

cesario para alimentos de la viuda e hijos menores del muerto, y el agravio moral, quedando al criterio de los jueces determinar la indemnización y el modo de satisfacerla.

Cuando la muerte no se hubiere producido de inmediato, se incluirá en el resarcimiento el perjuicio derivado de la incapacidad para el trabajo.

El derecho a cobrar los gastos incumbe a quien los hubiere efectuado, aunque fuere en virtud de obligación legal.

872. En caso de lesiones corporales, o de perjuicio a la salud, el resarcimiento comprenderá especialmente el pago de todos los gastos de curación y convalecencia del damnificado, así como el de las ganancias que éste dejó de realizar hasta que se restableciere por completo.

Lesiones.

Cuando la capacidad de trabajo quedare abolida o menoscabada, o sobreviniere un aumento en las necesidades de la víctima, o un debilitamiento físico o mental, la indemnización incluirá también ese daño.

Si a consecuencia del hecho, se hubiere producido desfiguración, se abonará el perjuicio que de tal circunstancia pudiere derivarse para el porvenir de la persona, teniendo en cuenta su sexo.

Desfiguración.

873. Cuando no fuere posible establecer en el momento de la sentencia, con precisión suficiente, las ulterioridades del daño, el juez determinará en forma provisional los perjuicios, con cargo de hacerlo con carácter definitivo, dentro del plazo improrrogable de dos años, contados desde aquella fecha.

Apreciación provisional.

874. En los casos de muerte o de lesiones, quienes tuvieron derecho a exigir alimentos al damnificado, podrán reclamar directamente la indemnización del perjuicio sufrido por tal causa. Esta regla comprende a la persona concebida antes de la fecha en que fué perpetrado el acto ilícito.

Acción directa de resarcimiento.

De tal facultad no gozarán quienes participaron en el hecho, o no lo impidieron, pudiendo hacerlo.

875. Si el acto fuere contra la libertad individual, el resarcimiento comprenderá todas las ganancias, que por tal causa hubiere dejado de percibir la víctima, hasta que fué plenamente restituida a la situación anterior.

Actos contra la libertad individual.

876. Cuando hubiere violación, estupro o rapto, el resarcimiento comprenderá el pago de una suma de dinero a la ofendida, si ella no hubiere contraído matrimonio con el

Delitos contra la hon-
nestidad.

autor. La misma regla se aplicará a la cópula carnal por medio de engaño, amenaza o abuso de relaciones de dependencia con mujer honesta, y a la seducción de la misma, si fuere menor de dieciocho años.

Nulidad de matrimonio.

877. En los casos de nulidad de matrimonio, el resarcimiento comprenderá también el menoscabo que ella ocasionare a la mujer para el porvenir.

Delitos contra el honor.

878. Si hubiere calumnia, injuria o difamación, el ofendido tendrá derecho a ser indemnizado por el perjuicio material y moral en su honor, crédito, industria o prosperidad; a menos que se demostrare la verdad del cargo.

Esta regla es aplicable a la acusación calumniosa y al uso ilícito del nombre.

No deberá el resarcimiento, quien no hubiere conocido, ni debido conocer la inexactitud del hecho imputado, siempre que él o la persona a quien fué transmitido el informe, justificaren su interés en el mismo.

Apoderamiento ilícito.

879. El que se hubiere apoderado de alguna cosa en virtud de un acto ilícito, deberá devolverla con todos sus frutos y responder por su valor, si fuere imposible cumplir dicha obligación; así como por los deterioros que ella hubiere sufrido. Dicha responsabilidad no cesa por caso fortuito, a menos que el detrimento se hubiere también producido con prescindencia del acto ilícito. El monto del deterioro consistirá en la diferencia entre el valor actual y el anterior al hecho. En ambos casos se abonará además, el interés legal sobre la suma adeudada desde el momento en que se produjo el perjuicio.

Si la retención fuere de dinero, regirá el mismo principio, aparte del resarcimiento por el mayor daño experimentado.

Titulares de la indemnización.

880. La indemnización por el daño causado a los bienes, corresponderá según los casos al propietario, al poseedor, a los titulares de derechos reales o personales, y en ausencia del dueño, a quienes tuvieran los bienes bajo su responsabilidad.

El resarcimiento procederá, aunque el acto ilícito emanare del propietario.

Funcionarios o empleados públicos.

881. Todo funcionario o empleado público que deliberadamente o por su culpa, faltare a los deberes de su cargo, deberá indemnizar el daño irrogado a tercero por esa cau-

sa. Si mediare tan sólo culpa, el autor responderá cuando el damnificado no pudiese obtener reparación por otro medio.

El resarcimiento no será exigible cuando el perjudicado hubiere omitido intencionalmente o por negligencia, emplear los medios legales susceptibles de impedir el perjuicio.

Tampoco podrá demandarse a las personas, respecto de las cuales proceda el juicio político; a menos de recaer sentencia para separarlas de sus funciones.

CAPITULO III

Del ejercicio de la acción civil

882. La acción civil para el resarcimiento del daño causado por un acto ilícito podrá entablarse independientemente de la criminal. Si ésta la hubiere precedido o fuera intentada pendiente aquélla, se paralizará el trámite hasta el fallo de la criminal, salvo que hubiere fallecido el acusado. En este caso podrá perseguirse la indemnización contra los herederos. Puede también promoverse o continuarse la acción civil contra los sucesores universales de los autores o cómplices, observándose lo dispuesto sobre la aceptación de las herencias bajo beneficio de inventario. La acción no pasará a los herederos si el acto ilícito fué contra el honor o la honestidad, a menos que la hubiere interpuesto el damnificado.

Acciones civiles y criminales.

883. Podrá ser objeto de renuncia cualquier acción civil derivada de un acto ilícito. No se entenderá que la constituye, el mero hecho de no haberla intentado el ofendido, o haber desistido de la criminal.

Renuncia a la acción civil.

Si los perjudicados fueren varios, la renuncia de alguno no afectará al derecho de los demás.

884. Pronunciada la condena en juicio criminal, no se podrá impugnar en el civil la existencia del hecho principal que constituye el delito, ni la culpa del procesado. Absuelto éste, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal, materia del fallo, si éste se hubiere pronunciado sobre dicho punto.

Influencia del fallo criminal sobre el civil.

La presente disposición no regirá en caso de sobreseimiento, ni cuando la sentencia decidiera que el hecho no

constituye delito del derecho criminal, o que falta la responsabilidad exigida para imponer la pena.

A alcance de las disposiciones anteriores.

885. Los artículos precedentes son aplicables a todas las acciones civiles fundadas en la existencia de un hecho que haya dado lugar a un procedimiento criminal.

Si la sentencia criminal hubiere también resuelto la indemnización, hará cosa juzgada en los mismos supuestos que el fallo civil.

Revisión del fallo criminal.

886. Siempre que un fallo civil se fundare en uno criminal, la sentencia sobre revisión de éste, dejará sin efecto lo resuelto en ambos, y procederá repetir lo entregado sin causa. En ningún caso podrá oponerse la prescripción.

Cuestiones prejudiciales.

887. Cuando la acción criminal dependiere de cuestiones prejudiciales expresamente determinadas en la ley, y cuya decisión corresponda tan sólo al juicio civil, no procederá el criminal antes de que la sentencia respectiva quedare firme.

Sentencia civil. Efectos en lo criminal.

888. Con la reserva del caso anterior y de los que fueren exceptuados especialmente, la sentencia del juicio civil sobre el hecho, no influirá en el criminal, ni impedirá ninguna acción intentada sobre el mismo acto ilícito, o respecto de otro con él relacionado.

Pero si el fallo civil hubiere quedado firme, conservará toda su eficacia, sea cual fuere la suerte de la recaída en el criminal.

CAPÍTULO IV

De la responsabilidad por hechos ajenos

Culpa indirecta por actos ilícitos de los dependientes.

889. Quien tuviere a otro bajo su dependencia como empleado, operario o doméstico, responderá civilmente por el acto ilícito que éste hubiere cometido contra tercero, al realizar un hecho de sus funciones o tareas, dentro del límite y objeto aparentes de las mismas.

El patrón responderá aún cuando no pueda determinarse si el acto perjudicial se debió a culpa o dolo de sus agentes o a caso fortuito, salvo si justificare haber procedido con el cuidado impuesto por el uso y las circunstancias en la elección del servidor, como en las máquinas y utensilios de su trabajo, o en la dirección de la tarea encomendada.

890. Responderán por los daños que causaren los incapaces:

Actos realizados por incapaces.

- 1º El padre, y por su muerte o incapacidad la madre; cuando los menores habitaren con ellos.
- 2º Los tutores y curadores, o la persona que los tuviera bajo su guarda, en el caso del inciso anterior.
- 3º Los directores de colegios y los artesanos, con respecto a los que originaren sus alumnos o aprendices, mientras permanecieren bajo su custodia.

La obligación impuesta por este artículo, cesará cuando la personas en él mencionadas demostraren que no pudieron prevenir el daño con los medios que su calidad les confería y la diligencia que era de su deber prestar.

Cesará también cuando los incapaces hubieren sido puestos bajo la vigilancia y autoridad de otra persona, a quien incumbirá entonces, responder por el perjuicio.

891. El jefe de familia, que habitare una casa en todo o en parte, será responsable de los daños causados a tercero por la caída de las cosas suspendidas de ella, o arrojadas, tanto a la calle como a terreno ajeno, o a inmueble del propietario de la casa, sujeto a servidumbre de tránsito.

Daños causados por cosas suspendidas o arrojadas.

Si dos o más personas habitaren la finca como principales, y no pudiere establecerse de quien provino el daño, responderán solamente en proporción a su parte.

La prueba sobre la imposibilidad de evitar el daño no será suficiente para exonerar en estos casos, salvo cuando se fundare en la fuerza mayor.

892. Las personas damnificadas en los casos de los artículos anteriores, podrán perseguir directamente ante los tribunales, a quienes respondan civilmente del daño, sin estar obligados a citar en juicio a los autores del hecho.

Acciones contra el responsable indirecto.

Quien indemnizare el perjuicio, podrá repetir del que lo hubiere irrogado por dolo o culpa propia.

Repetición contra los autores.

CAPITULO V

De los daños causados por animales

893. El poseedor de un animal, o quien se sirviere de él, responderá por los daños que causare estando en su po-

Quiénes responden de ellos.

der, aunque se hubiere escapado o extraviado. Pero si al animal lo excitó un tercero, será exclusivamente a cargo de éste dicha responsabilidad.

No cesará la obligación cuando el perjuicio producido por el animal no estuviere en los hábitos de su especie, o si en el momento de ocasionarlo se hallare bajo la guarda de los empleados del poseedor o tenedor.

Excepciones.

894. No habrá responsabilidad cuando el animal causante del daño, se hubiere soltado o extraviado sin negligencia del guardador, o cuando el perjuicio proviniera de caso fortuito, o de culpa imputable al damnificado.

Recurso del guardador contra el dueño.

895. Si el responsable fuere el guardador, podrá recurrir contra el dueño del animal, cuando este hubiere silenciado las calidades o vicios de los que provino el daño, siempre que con mediana prudencia hubiera debido conocerlos o preverlos.

Animal feroz.

896. Cuando se tratare de un animal feroz, que no reporte utilidad para la guarda o servicio de un predio, el que lo tenga responderá del daño, aunque no haya sido posible evitar el perjuicio, y aunque el animal se hubiere soltado sin culpa de quienes lo guardaban.

Daños de un animal a otro.

897. Sólo corresponderá indemnizar el daño causado por un animal a otro, cuando el ofensor provocare a la víctima.

CAPÍTULO VI

De los daños causados por cosas inanimadas

Edificio que amenaza ruina.

898. Los vecinos de un edificio que amenazare ruina, no podrán exigir al dueño de éste garantía alguna por el perjuicio eventual, salvo las medidas autorizadas por el art. 1561.

Responsabilidad del propietario. Casos.

899. Cuando de cualquier cosa inanimada resultare daño a terceros, responderá por la indemnización el propietario o quien se sirviera de ella, o el que la tuviere a su cuidado.

Quedan comprendidos en este artículo los casos siguientes:

1° Explosión, sea de máquinas o de substancias.

- 2º Caída de edificios o de otras obras, aunque fueren causadas por defecto de construcción.
- 3º Humareda excesiva de horno, fragua, etcétera, sobre las casas vecinas.
- 4º Exhalaciones de cloacas o depósitos infestantes, por haber sido construídos sin las precauciones necesarias.
- 5º Humedad en las paredes contiguas por causas evitables.
- 6º Atajos de los ríos para servicio de las heredades propias.
- 7º Obras nuevas de cualquier especie, aunque fuere en lugar público y debidamente autorizadas.

900. Si el edificio causante del daño estuviere en arrendamiento o en usufructo, el perjudicado sólo tendrá derecho contra el propietario de aquél. Si perteneciere a varios condóminos, deberá el resarcimiento cada uno de ellos, en proporción a su parte.

901. La indemnización del daño podrá ser exigida como accesorio en las denuncias de obra nueva, terminadas o no.

SECCION SEPTIMA

DE CIERTAS RELACIONES OBLIGATORIAS EN PARTICULAR

TITULO I

De la compraventa y de la permuta

CAPITULO I

Disposiciones generales

902. Habrá compraventa cuando se convenga la enajenación definitiva de un derecho patrimonial, por un precio cierto en dinero. Concepto.

Si el objeto del contrato fuere una cosa, la obligación del vendedor será de transmitir el dominio; si un derecho.

la de conferirlo al comprador, junto con la posesión siempre que ésta se hallare comprendida en aquél.

Obligación de comprar o vender cuando la otra parte lo exige.

903. Será válida la convención por la que una parte se obligare a comprar o vender, cuando la otra lo exigiere, bienes determinados por un precio cierto. Deberá ser otorgada por escrito y se permitirá su anotación preventiva en el Registro.

Cuando la oferta tuviere por objeto cosas inmuebles, se procederá para su cumplimiento, con arreglo a los arts 818 y 813.

El contrato se juzgará concluído desde la intimación, y en cuanto a los bienes raíces, a partir de la escritura pública; pero quedará sin efecto cuando no mediare requerimiento, transcurridos tres años o el plazo estipulado.

Aplicación extensiva.

904. Las reglas de la compraventa se aplicarán subsidiariamente:

- 1º A la expropiación por utilidad pública.
- 2º A la realización de bienes por efecto de sentencia o de concurso.
- 3º A la dación en pago. Quien la efectuare quedará obligado como vendedor. En cuanto a la deuda, regirán las disposiciones del título del pago. Se aplicarán asimismo, en su caso, los normas del enriquecimiento sin causa.

Compra en comisión.

905. Cuando hubiere declarado el comprador que procede por comisión, y el vendedor lo aceptare, el contrato quedará concluído con el primero en caso de no presentar dentro de los ocho días, a falta de término fijado, la confirmación del comitente.

§ 1. — De la capacidad para comprar y vender

Quiénes no pueden comprar.

906. Es prohibida la compra, aunque sea en remate judicial, por sí o por interpuesta persona:

- 1º A los esposos entre ellos, aún separados de bienes.
- 2º A los representantes legales o convencionales, de los bienes comprendidos en su representación.
- 3º A los albaceas, de los correspondientes a las testamentos en que desempeñaren su cargo.

- 4º A los empleados públicos, en cuanto a los bienes nacionales, provinciales o municipales, de cuya administración o venta estuvieren encargados.
- 5º A los jueces, abogados, fiscales, asesores y defensores de menores, procuradores, escribanos y peritos de toda clase, respecto de los bienes antes o actualmente sometidos a la autoridad del tribunal, dentro de los asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que hubieren intervenido por razón de sus respectivos cargos.
- 6º Al Presidente de la Nación y a sus ministros, de los bienes nacionales o de cualquier establecimiento público o corporación civil o religiosa.
- 7º A los gobernadores de provincia y territorios nacionales y a sus ministros o secretarios, de los bienes designados en el inciso anterior, existentes en su respectiva jurisdicción.

907. Los padres, tutores y curadores podrán adquirir los bienes de sus hijos y pupilos y de los incapaces, cuando en ellos tuvieren derechos, sea como partícipes en el dominio o usufructo, sea en calidad de acreedores hipotecarios, si la venta hubiera sido dispuesta por el juez competente, con la intervención de un tutor especial designado antes de ordenarla.

Caso en que pueden comprar los padres, tutores o curadores.

§ 2. -- Del objeto de la compraventa

908. No habrá venta si las partes no hubieren individualizado el bien o establecido los datos para determinarlo.

Determinación.

Se entenderá que son determinadas las cosas ciertas, y también las inciertas cuando constare su especie y cantidad.

909. Se juzgará que hay indeterminación, cuando se vendieren todos los bienes presentes o todos los futuros o una parte alícuota de ellos.

Caso de indeterminación.

Será, sin embargo, válida, la venta de una especie de bienes designados, aunque llegare a comprender todos los que el vendedor posea.

910. Pueden venderse los bienes presentes, y también los futuros que estén en el comercio.

Bienes presentes y futuros.

Venta de bien ajeno como propio.

911. Será anulable la venta de un bien ajeno que se hiciera como propio. El comprador o el vendedor podrá pedir la anulación antes de la entrega, y aun después de ella, siempre que fueren de buena fe.

Cuando el enajenante hubiere procedido por error, se aplicará lo dispuesto en el art. 145, si no mediare tradición. Verificada ésta, deberá indemnizarse con arreglo a lo dispuesto en el título XVII, capítulo II, del presente libro y sección.

Ratificación.

912. La nulidad de la venta de un bien ajeno, quedará cubierta con la ratificación del propietario, lo mismo que cuando el vendedor sucediere al primero, por título universal o singular.

Venta hecha por el comunero.

913. Si uno de los comuneros hubiera vendido la totalidad del bien, y el acto quedare ulteriormente sin efecto por aplicación de las reglas del condominio, deberá satisfacer los daños y perjuicios al comprador de buena fe.

Venta sujeta a ensayo o prueba o a satisfacción.

914. La venta sujeta a ensayo o prueba, o a satisfacción del comprador, se presume bajo condición suspensiva de que lo vendido fuere del agrado personal de aquél.

El plazo para aceptar no excederá de noventa días. El contrato se juzgará concluido, cuando el adquirente pagare el precio sin reserva, o dejare transcurrir el término sin comunicar su respuesta.

Las reglas que anteceden son aplicables a la venta de las cosas, que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas.

Calidad determinada.

915. Siempre que la venta se hiciera como de cierta calidad, y no al gusto personal del comprador, no dependerá del arbitrio de éste rehusarse a recibir lo vendido. Si el vendedor acreditare que es de la calidad estipulada, podrá exigir el pago del precio.

Ventas de inmuebles.

916. La venta de inmuebles, puede hacerse:

- 1° Sin designar la extensión, y por un solo precio.
- 2° No indicando superficie, pero a tanto la unidad.
- 3° Con expresión del área, bajo cierto número de medidas a tomarse dentro de un terreno mayor.
- 4° Con mención de la superficie, y por un precio cada unidad, fijado o no el total.
- 5° Con designación del área, por un precio único, y no a tanto la medida.

6º O de uno o varios inmuebles, con indicación de la superficie, pero bajo la cláusula de no garantizar el contenido, y de que la diferencia, en más o en menos, no producirá efecto alguno.

917. Si la venta del inmueble fuere con designación del área, y el precio a tanto la medida, el vendedor deberá entregar dicha superficie. Cuando resultare una mayor, el adquirente tomará el exceso pagándolo al tipo fijado. Si fuere menor, tendrá derecho a la restitución proporcional del precio; pero en ambos casos, si la diferencia alcanzare al vigésimo, podrá dejar sin efecto el contrato. Le asistirá igual facultad, aunque el déficit fuere menor, siempre que acreditare la insuficiencia del área existente para llenar el fin a que destinaba el inmueble.

Diferencia de superficie. Con precio a tanto la medida.

918. Cuando la venta de un inmueble se hiciere sin determinar el precio, a tanto la medida, la expresión de la superficie total sólo dará lugar a suplemento o a rebaja por exceso o por defecto, si la diferencia entre la verdadera y la fijada en el contrato fuere de un vigésimo con relación al área del terreno vendido.

Sin precio a tanto la medida.

919. No se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se hubiere efectuado la venta con arreglo al inc. 6º del art. 916.

Sin garantía del contenido.

Establecido el precio a tanto la medida, se pagará el correspondiente a la superficie real, pero no procederá la resolución del contrato.

920. Cuando la venta fuera de varios inmuebles, con indicación del área de cada uno y por un solo precio, se computarán las diferencias de superficies según los valores respectivos, y se compensarán en su caso, hasta la cantidad concurrente. Las acciones que puedan corresponder a las partes estarán sujetas a las reglas anteriores, y el vigésimo será calculado sobre el valor excedente de las diferencias, respecto del precio total.

Venta de varios inmuebles. Área de cada uno.

Si en el mismo caso hubiere indicación del área conjunta, sin constar las parciales de cada inmueble, el vigésimo se establecerá sobre la primera.

Área conjunta.

Este artículo es aplicable a la venta de una sola cosa, cuando se designaren las medidas de sus fracciones componentes.

Venta de una sola cosa indicando sus fracciones.

Indemnizaciones.

921. Siempre que el comprador optare por rescindir el contrato, los gastos producidos por éste y por la medición serán a cargo del vendedor, así como los intereses del precio pagado, si el adquiriente no hubiere percibido los frutos de la cosa.

Cuando se decidiere por el cobro o abono de las diferencias, recibirá o entregará respectivamente, los intereses legales sobre aquéllas, a partir del pago o de la mora.

§ 3. — Del precio

Precio cierto.

922. El precio será cierto, cuando las partes lo establecieren en una suma que el comprador debiere pagar, o fuere fijado con referencia a una cosa determinada, o su designación quedare al arbitrio de un tercero.

Estimación del tercero.

923. La estimación del tercero será irrevocable, excepto si fuere notoriamente desproporcionada. En este último caso, las partes podrán recurrir al juez dentro de los ocho días, quien fallará en una sola audiencia, sin recurso alguno.

Fijado el precio, se tendrá por establecido desde la fecha del contrato.

Si la persona o personas indicadas para determinarlo no quisieren, o no pudieren hacerlo, la venta quedará sin efecto.

Precio corriente.

924. Cuando lo vendido no fuere inmueble, los contratantes podrán referirse a su valor al tipo de plaza en el día, o a un tanto más o menos que éste. El precio será entonces, el que certificaren corredores, o testigos, donde no hubiere aquéllos.

Verificada la entrega al comprador, sin determinar el precio, o en la duda respecto del convenido, se presume que los interesados entendieron sujetarse al corriente del día en el lugar de la tradición.

Nulidad por indeterminación.

925. Es nulo el contrato si el precio fuere indeterminado, o el bien se vendiere por lo que se estimare su justo precio, o por el que otro ofreciere, o siempre que se dejare este punto al arbitrio de cualquiera de las partes.

Precio mixto. Permuta.

926. Cuando el precio consistiere, parte en dinero y parte en otro bien, el contrato será de permuta, si es igual o mayor el valor en especie.

CAPITULO II

De las cláusulas especiales en la compraventa

927. Las partes podrán por cláusulas especiales, subordinar a condiciones, o modificar los efectos del contrato.

Modificación de los efectos del contrato.

La compraventa de inmuebles bajo condición suspensiva o resolutoria, no afecta al dominio, y sólo produce obligaciones que pueden ser anotadas preventivamente en el Registro. Este asiento será cancelado cuando la venta quedare sin efecto.

928. Cuando la condición fuere suspensiva, la compraventa producirá las consecuencias siguientes:

Efecto de la condición suspensiva.

- 1º Pendiente la condición, el vendedor no estará obligado a entregar el objeto, ni el comprador a pagar el precio sin perjuicio de las medidas conservatorias que pudieren exigir.
- 2º Si el vendedor realizare la entrega antes de cumplida la condición, el comprador será considerado como el que administra la cosa ajena.
- 3º No cumplida la condición, el objeto y el precio serán restituidos recíprocamente, compensándose los intereses con los frutos, si el comprador los hubiere percibido.

929. Si la condición fuere resolutoria, la compraventa tendrá los efectos siguientes:

Idem de la condición resolutoria.

- 1º Las partes quedarán obligadas personalmente como si no hubiere condición. No habrá sin embargo, transferencia de dominio, aunque mediere la entrega del objeto. En el intervalo, el vendedor podrá solicitar medidas conservatorias.
- 2º Realizada la condición, se observará lo dispuesto sobre las obligaciones de restituir las cosas a su dueño. Los intereses quedarán compensados con los frutos, como está dispuesto en el artículo anterior.

Presunciones.

930. Cuando el objeto hubiere sido entregado al comprador, la venta condicional se presumirá con efecto resolutorio. Producirá las mismas consecuencias la venta con cláusula de poderse arrepentir las partes, aunque no se haya realizado la tradición. Si ésta se hubiere cumplido, o si mediare pago del precio, regirán las normas de la retroventa o de la reventa, según que se estipulare en interés del vendedor o del comprador.

Pactos especialmente admitidos.**No enajenar.**

931. Son pactos especialmente admitidos:

1º El de no enajenar el bien a persona determinada. No lo será cuando la prohibición tenga un alcance general.

Retroventa.

2º El de retroventa, que autoriza al vendedor para recuperar el bien vendido y entregado, siempre que restituya el precio con aumento o disminución. Sólo será lícito tratándose de inmuebles, y por un plazo que no exceda de cinco años.

Reventa.

3º El de reventa, que permite al comprador devolver el bien a cambio del precio, en las mismas condiciones del inciso precedente.

Preferencia.

4º El de preferencia, que faculta al vendedor para recuperar el bien con prelación a cualquier otro adquirente, cuando el comprador quisiera venderlo, y dentro de los plazos fijados en el art. 937 inc. 1º.

Mejor comprador.

5º El de mejor comprador, que autoriza la resolución del contrato si otro que el adquirente ofreciere un precio más ventajoso. Sólo podrá convenirse tratándose de inmuebles, y por un término que no exceda de tres meses.

Comisorio.

6º El pacto comisorio, siempre que se trate de inmuebles, y con la reserva prevista en el art. 943 inc. 4º, cuando fuere establecida a favor del vendedor.

Efectos de la retroventa.

932. En virtud de la retroventa, el vendedor debe reembolsar el precio, los gastos de la entrega y restitución, los del contrato, como también las mejoras que no sean voluptuarias, y no entrará en posesión de la cosa, mientras no hubiere cumplido estas prestaciones.

Coherederos y comuneros.

933. Cuando el derecho a la retroventa hubiere pasado a dos o más herederos del vendedor, sólo podrá ser ejercido de conformidad entre ellos.

Lo mismo se resolverá si la venta hubiere sido efectuada por varios comuneros.

934. Cuando uno de los condóminos hubiera vendido separadamente su derecho sobre el inmueble bajo pacto de retroventa, podrá ejercer su acción en la misma medida, sin estar obligado a tomar la totalidad de la finca.

b) Condómino. Venta de su parte.

Pero si por efecto de una licitación o división provocada contra el adquirente, éste obtuviere el dominio sobre la cosa íntegra, podrá exigir que el vendedor la reciba y que le restituya la contraprestación entregada. En caso de que el bien hubiere sido adjudicado a otro condómino o a un tercero, el vendedor al ejercer la retroventa deberá limitarse a repetir lo recibido por efecto de la división.

935. La retroventa anotada preventivamente en el Registro podrá oponerse a los terceros, aunque en el acto de adquisición no se hiciere constar que el inmueble estaba sujeto a la mencionada cláusula.

c) Prenotación.

936. Las disposiciones relativas al vendedor en el pacto de retroventa, se aplicarán al comprador en el de reventa.

Reventa.

937. El derecho de preferencia es personal y no podrá cederse ni pasar a los herederos.

Derecho de preferencia.

Se regirá por los siguientes principios:

- 1º El vendedor sólo podrá ejercerlo dentro de tercero día para las cosas muebles o los bienes incorporales, y en el plazo de diez respecto de los inmuebles.
- 2º El vendedor perderá la preferencia en caso de no pagar el precio y si no satisficiera las otras ventajas que el comprador hubiere obtenido.
- 3º Corresponde al comprador hacer saber al vendedor el precio y las ventajas ofrecidas, así como el lugar y momento en que habrá de verificarse el remate si lo hubiere, pudiendo al efecto hacer intimación judicial. En caso contrario, responderá por los daños y perjuicios que la nueva venta originare al primitivo comprador.
- 4º La enajenación del objeto no dará lugar a la preferencia, salvo si hubiere venta o dación en pago. Tampoco podrá ser invocada en los casos de simple gravamen.

Pacto de mejor comprador.

938. El pacto de mejor comprador se presume bajo condición resolutoria.

El mayor precio o la ventaja ofrecida, deben referirse al objeto, tal como se encontraba cuando fué vendido, sin los aumentos o mejoras ulteriores.

Cuando en el contrato hubieren intervenido conjuntamente dos o más vendedores, ninguno de ellos podrá por sí solo usar ese pacto.

Son aplicables al caso, los inc. 3º y 4º del artículo anterior.

Pacto comisorio.

939. La venta bajo pacto comisorio producirá los siguientes efectos:

1º Convenido un plazo para el pago del precio, si éste no fuere pagado, el vendedor podrá exigir la resolución desde el día del vencimiento.

A falta de término fijado, se aplicará lo dispuesto en el art. 572.

2º El vendedor podrá demandar la resolución de la venta o el pago del precio. Si prefiriese lo último, no podrá luego pretender lo primero.

Se juzgará renunciado el derecho a rescindir, siempre que el vendedor recibiere parte del precio sin reserva, después de vencido el plazo para el pago.

Ventas aleatorias.

Bienes futuros.

940. Cuando se hubieren vendido bienes futuros, tomando el comprador el riesgo de que no llegaren a existir, deberá el precio total, aunque nada pudiere entregársele, a menos que mediare culpa del vendedor.

Si el riesgo a cargo del comprador fuere de que los bienes vendidos no llegaren a existir en cualquier cantidad, el vendedor podrá reclamar el precio íntegro, aunque la existencia resultare inferior a la esperada. En caso de que nada hubiere, la venta no valdrá.

Bienes sometidos a riesgos.

941. En la venta de bienes sometidos a riesgos, que el comprador tomare a su cargo, podrá exigirse el precio, aunque la cosa no existiere en todo o en parte en la fecha del contrato.

Sin embargo, el acto será anulable como doloso, siempre que el vendedor hubiere conocido el resultado de la contingencia, a que los bienes estaban sujetos.

942. En todos los casos de restitución, previstos dentro de este capítulo, serán aplicables los arts. 927, 932 y 1840 inc. 6° del presente Código.

Restituciones. Normas aplicables.

943. La venta de inmuebles fraccionados en lotes, cuyo precio deba ser satisfecho por cuotas periódicas, será regida por las disposiciones siguientes:

Ventas por lotes y a plazos. Reglas.

- 1° Para que el contrato sea válido, el título de propiedad del inmueble deberá estar inscripto en el Registro, libre de todo gravamen y el dueño en condiciones para disponer. Si el bien estuviere hipotecado, podrá inscribirse, siempre que el acreedor o acreedores acepten la división de la deuda en los diferentes lotes, o cuando fueren compelidos judicialmente a ella.
- 2° Será también indispensable la anotación preventiva del instrumento que entregue el vendedor al comprador, dentro de los seis días de su fecha, plazo que podrá ser extendido por los reglamentos en razón de la distancia, no pudiendo exceder de un mes.
- 3° El tenedor de un instrumento prenotado podrá reclamar la escrituración, después de haber satisfecho el veinticinco por ciento del precio. Será nula toda cláusula en contrario.
- 4° El pacto comisorio por falta de pago, no podrá hacerse valer después que el adquirente se encontrare en el caso del inciso anterior.

944. Suscitado un conflicto entre adquirentes de lotes y terceros acreedores del enajenante, se observarán estos principios:

Conflicto entre adquirentes de lotes y acreedores del enajenante.

- 1° El comprador con instrumento inscripto, será preferido a cualquier acreedor para la escrituración.
- 2° Los embargos e inhibiciones contra el vendedor, ulteriores a la fecha de otorgamiento del boleto prenotado, sólo podrán hacerse efectivos sobre las cuotas impagas.
- 3° Los acreedores del vendedor conservarán todos sus derechos respecto de la parte no enajenada, apesar de la prenotación establecida en el artículo precedente.

CAPITULO III

Del efecto de la compraventa

Obligaciones del vendedor.

945. El vendedor está obligado con respecto al bien vendido:

- 1º A conservarlo, tal como se hallaba en el momento del contrato, hasta realizar su entrega.
- 2º A entregarlo a su costa con los accesorios, libre de toda otra posesión el día convenido, o en su defecto, cuando el comprador lo exigiere.
- 3º A cancelar por su cuenta, todas sus inscripciones o prenotaciones.
- 4º A recibir su precio en el lugar estipulado, y si no lo hubiere, en el lugar y tiempo de la entrega, cuando la venta no fuere a crédito.

Obligaciones del comprador.

946. Son obligaciones del comprador:

- 1º Pagar el precio, los gastos del instrumento contractual y los de recibo del bien comprado. El precio será satisfecho con arreglo al artículo precedente, inc. 4º, y si hubiere plazo o lo concediere el uso del lugar, se abonará en el domicilio del comprador.
- 2º Recibir la cosa vendida conforme al inc. 2º del art. 945, inmediatamente después del contrato, cuando no hubiere término.

CAPITULO IV

De la permuta

Normas aplicables.

947. Las disposiciones del presente título se aplicarán por analogía al cambio o trueque de bienes.

TITULO II

De la cesión de derechos

CAPITULO I

Disposiciones generales

948. Cuando se transmita por contrato a otra persona, Concepto. bienes incorpóreos que pertenezcan al cedente, quien los adquiera podrá ejercer en su propio nombre los derechos correlativos.

Si el bien fuere cedido por un precio en dinero, o rematado, o dado en pago, o adjudicado en virtud de sentencia, el acto será compraventa; donación cuando se efectuare gratuitamente, y permuta si el traspaso tuviere lugar a cambio de otro bien.

949. Pueden cederse toda clase de derechos, y en particular: Derechos cesibles.

- 1º Los derechos condicionales, eventuales, aleatorios, a plazo o litigiosos.
- 2º Los que versaren sobre cosas futuras.
- 3º Los emergentes de convenciones aun no concluidas.

950. No pueden ser objeto de cesión: Derechos no cesibles.

- 1º Las acciones fundadas en derechos inherentes a la persona, o que comprendan hechos de igual naturaleza.
- 2º Los derechos, que en caso de ser ejercidos por otro, alterarían su contenido en daño del deudor.
- 3º Los inembargables, en su totalidad, o por la parte sujeta a esa prohibición.
- 4º Las cuotas alimenticias, devengadas o no.
- 5º Los montepíos, pensiones o reformas militares o ci-

viles, salarios o sueldos, salvo en la parte embargable.

- 6º El usufructo, aunque sí el ejercicio del mismo.
- 7º Los derechos de uso y de habitación.
- 8º Aquellos derechos, cuya transferencia esté prohibida por la ley, por el título constitutivo, o por un acto posterior.

Forma

951. Requieren escritura pública para su validez, las cesiones siguientes:

- 1º Las relativas a derechos y acciones reales sobre inmuebles, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1451.
- 2º Las que tuvieren por objeto derechos litigiosos. La transferencia será oponible a las demás partes, previa notificación, y luego de agregarse el testimonio en autos.
- 3º Las cesiones de patentes de invención, marcas de fábrica o de comercio o de algunas facultades conferidas por ellas, debiendo además, inscribirse en los registros especiales.

En los demás casos, bastará la forma escrita, la que será necesario sea cual fuere el valor de lo cedido, y aunque el derecho no constare en instrumento público o privado. (Cuando alguno de éstos existiere será entregado al cesionario.

952. Cuando la cesión se efectuare por documento privado, podrá revestir la forma de endoso; pero sólo tendrá los efectos especiales designados en el Código de Comercio, si los títulos constitutivos contuvieran la cláusula a la orden.

Los papeles al portador podrán cederse mediante tradición.

Cesiones excluidas.

953. Las reglas de este título no se aplicarán a las letras de cambio, pagarés a la orden, documentos al portador, ni a las acciones y derechos, que en su constitución tuvieron designado un modo especial de transferencia.

Cesión en garantía.

954. La cesión podrá ser realizada en todo o en parte para garantizar un derecho, y regirá entonces lo dispuesto sobre la prenda.

CAPITULO II

Del efecto de la cesión

§ 1. — De la cesión de créditos

955. Transferido un crédito, el cedente de buena fe será responsable: Responsabilidad del cedente.

a) De buena fe.

1º De su existencia y legitimidad al tiempo de la cesión. Si el crédito no hubiere existido, deberá satisfacer los daños y perjuicios, a no ser que lo hubiere cedido como dudoso.

2º De la solvencia del deudor y de sus fiadores, pero sólo en el caso en que la mala situación de ellos fuere pública y anterior al traspaso.

3º Cuando la deuda no hubiere sido pagada, por el precio recibido con sus intereses y por los gastos del contrato y notificación. Estará obligado aun en los casos de los incs. 1º y 2º.

956. Si hubiere mala fe en el cedente, éste deberá en el supuesto del inc. 1º del artículo anterior, satisfacer la diferencia entre el valor nominal y el precio pagado. b) De mala fe.

957. Salvo estipulación expresa, la garantía acerca de la solvencia del deudor se entenderá respecto de la actual, y no de la futura; pero si el cedente hubiere sido de mala fe, por constarle que la deuda era incobrable, responderá de todo perjuicio. Garantía de solvencia.

958. El cesionario perderá todo derecho a la garantía sobre la solvencia actual y futura del deudor, cuando por falta de las medidas conservatorias, u otra culpa suya, hubiere perecido el crédito o las seguridades del mismo. La simple prórroga del término acordado por el cesionario no lo hará incurrir en aquella pérdida, excepto cuando el deudor hubiere sido solvente al tiempo de la exigibilidad. Pérdida de la misma.

Exención.

959. El cesionario, para recurrir contra el cedente en los casos expresados en este párrafo, deberá antes ejecutar los bienes del deudor, lo mismo que las fianzas y garantías reales. No le será permitido hacerlo en el caso del art. 1361.

§ 2. — De la cesión de derechos y acciones reales

Necesidad de registro.

960. La cesión de derechos reales sobre inmuebles ajenos o de créditos garantizados con hipoteca, anticresis o censos, sólo valdrá cuando se inscribiere en el Registro. La transferencia de acciones reales no será oponible a terceros sin su anotación preventiva en el mismo.

Cesión de acciones.

961. La cesión de acciones reales importa la del derecho mismo a que corresponden. Reconocido éste por sentencia firme, podrá ser inscripto, debiendo cancelarse los asientos referentes al que se hubiere desestimado.

La sentencia favorable convertirá las prenotaciones en asientos definitivos, que serán inscriptos como tales.

§ 3. — De la cesión de herencia

Inscripción.

962. Cuando la cesión tuviere por objeto el todo o parte de una herencia, exigirá para ser válida con respecto a los contratantes, que ella sea inscripta en el Registro. En cuanto a los coherederos, legatarios y acreedores de la masa, será menester que se tome nota del respectivo testimonio en los autos sucesorios a instancia del cedente, o del cesionario en su defecto.

Anotación en autos.

Contenido y límites.

963. No se comprenden en la transferencia, y se entenderán a favor del cedente:

- 1° La parte hereditaria, adquirida después del traspaso.
- 2° Lo que obtuviere por una cláusula de mejora o de dispensa de la colación, a no ser que se hubiere convenido lo contrario.
- 3° Los papeles, retratos y recuerdos de familia, así como las distinciones honoríficas del causante o antepasados, aunque representaren algún valor.

En cambio, beneficiarán al cesionario, la caducidad de los legados o de las cargas, así como la colación.

964. Verificada la cesión, el cedente estará obligado: Obligaciones del cedente.

- 1º A entregar los bienes de la herencia que existan en el momento de formalizarse aquélla, incluso lo recibido con anterioridad, sea por la venta de valores pertenecientes a la masa, por un acto jurídico relativo a ésta, o por resarcimiento en virtud de la pérdida, deterioro o substracción de cualquier objeto hereditario.
- 2º A reintegrar al cesionario el valor de lo que hubiere consumido o dispuesto a título gratuito, o en caso de haber gravado algún bien, el importe de su disminución, a no ser que el adquirente hubiere conocido la existencia de esos actos.

No corresponderá resarcimiento, si el deterioro, pérdida o imposibilidad de reintegro, respondieran a otra causa.

- 3º A garantizar que el derecho cedido no está menoscabado, ya por la existencia de otro heredero, ya por legados o cargas desconocidas, o por deber de colacionar, o resultante de la partición. No alcanza esta responsabilidad a lo dispuesto en los arts. 1353 y 1384.

965. No obstante la cesión, corresponderán al cedente Frutos y cargas. los frutos y productos útiles relativos al tiempo que precedió a la transferencia; pero soportará en la medida de su parte hereditaria, las cargas que durante ese período afectaren la explotación y, entre ellas, los intereses por las deudas de la masa.

966. A partir de la fecha del traspaso, el cesionario Obligaciones del cesionario. cargará con los riesgos y tendrá las siguientes obligaciones:

- 1º Satisfacer las deudas de la sucesión, a menos que la herencia hubiere sido aceptada con beneficio de inventario. Esta responsabilidad es sin perjuicio de la que corresponde al cedente, y no podrá ser excluida o limitada por convenio, debiendo aplicarse los principios relativos a las obligaciones del heredero.

- 2° Pagar al cedente las impensas necesarias, anteriores a la cesión, así como los demás gastos, en cuanto hubieren aumentado el valor de la masa a la fecha de la transferencia.
- 3° Abonar los impuestos hereditarios, como también aquellas cargas que no deban considerarse como aplicadas al capital de los bienes sucesorios.

Herencia incierta. Normas aplicables.

967. Cuando la cesión comprenda tan sólo las pretensiones más o menos inciertas, a una herencia, regirán los preceptos sobre ventas aleatorias. El cedente no responderá por la evicción, salvo en caso de dolo.

Aplicación extensiva.

968. Las reglas del presente título serán aplicables a la compra de una herencia que el vendedor hubiere obtenido por contrato, así como a los actos que tuvieren por objeto enajenar una sucesión adquirida por el cedente de cualquier manera.

TÍTULO III

De las donaciones

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Concepto.

969. Habrá donación cuando una persona por acto entre vivos, se obligue a transferir gratuitamente una cosa o un derecho patrimonial, a favor de otra, que lo aceptare.

Se estimará donación la renuncia desinteresada, con ánimo de beneficiar.

Aceptación.

970. Importará aceptación el recibo de lo donado y, en general, el aprovechamiento del beneficio que el contrato representa.

Cuando se tratare de renuncia, será suficiente que el donatario no rehuse la liberalidad. Si lo hiciere, quedará ésta sin efecto, y deberá restituirse lo recibido, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa.

Pluralidad de beneficiarios.

971. Si la donación se hiciere a varias personas por separado, cada una deberá aceptar, y el contrato sólo tendrá

efecto para quienes hubieren llenado este requisito. Si el beneficio fuere conjunto, no habrá derecho a acrecer, a menos que el donante lo consignare expresamente. Mediando solidaridad, la aceptación de cualquiera de los favorecidos, se aplicará a todo el objeto, y de igual modo, cuando ella se tornare imposible por fallecimiento o revocación.

972. El deceso del donante no impedirá al donatario prestar su aceptación y los herederos de aquél estarán obligados a cumplir la promesa. Pero si acaeciere la muerte del beneficiario antes de manifestar su asentimiento, nada podrán exigir los sucesores del mismo. Esta última regla no es aplicable al supuesto del art. 969, 2ª parte.

Muerte del donante o del donatario.

973. Si alguien prometiére bienes gratuitamente para después de su muerte, el acto sólo valdrá cuando llenare las formalidades del testamento.

Donación mortis causa.

CAPITULO II

De la capacidad para hacer donaciones y recibirlas

974. El padre y la madre, o ambos conjuntamente, podrán hacer donaciones a sus hijos, de cualquier edad que éstos fueren. Cuando no se imputare de un modo expreso a la cuota disponible, se entenderá como un adelanto a la legítima.

Donaciones de los padres.

975. No puede hacerse donación a persona natural que no exista, ni a las entidades que no sean personas jurídicas; más podrá realizarse a favor de estas últimas, con el fin de constituir las. Si fuere negada la autorización necesaria, el acto quedará sin efecto.

Necesidad de la existencia del beneficiario.

976. No pueden hacer donaciones:

Incapacidad para donar.

- 1º Los esposos entre ellos durante el matrimonio: ni uno u otro, a los hijos que tuviere el consorte, o a las personas de quien éste fuere presunto heredero al tiempo de la donación.
- 2º El marido o la mujer a favor de terceros, salvo en los límites autorizados dentro del título II, Sección I, Libro II.

- 3º Los representantes legales, excepto en los casos expresamente fijados.
- 4º Los mandatarios, salvo poder especial que designe aquello que se les permita donar.
- 5º Los menores adultos, sin licencia de los padres, a menos de haber adquirido los bienes en el ejercicio de alguna profesión o industria.

Idem para aceptar donaciones.

977. No pueden aceptar donaciones:

- 1º La mujer casada, sin conformidad del marido o la venia del juez en su defecto.
- 2º Los padres, tutores y curadores, a nombre de sus representantes, sin autorización judicial.
- 3º Los tutores y curadores, en cuanto a los bienes de las personas que hubieren tenido a su cargo, antes de rendir cuentas y de pagar el saldo que contra ellos resultare.
- 4º Los mandatarios, sin poder especial para el caso, o general para aceptar donaciones.

Momento en que debe existir la capacidad.

978. La capacidad del donante y del donatario será juzgada respectivamente, con referencia a la fecha en que la donación fuere prometida o aceptada, o al día del cumplimiento, cuando el acto estuviere sujeto a condición suspensiva.

CAPITULO III

Del objeto y condiciones de la donación

Principio.

979. Pueden ser donados, los bienes que pueden ser vendidos.

Nullidad.

980. La donación será nula:

- 1º Cuando incluya todos los bienes, sin reservar parte o renta suficiente para la subsistencia del donante.
- 2º Si estuviere sujeta a condición suspensiva o resolutoria, que dejare al donante el poder directo o indirecto de modificarla o revocarla.
- 3º Cuando versare sobre bienes futuros.

981. Las donaciones condicionales, sea cual fuere su naturaleza, quedan sujetas a las reglas de los arts. 1458, inc. 2º, 1481, inc. 1º y 1532. Donación condicional.

Podrá convenirse:

- 1º Que el beneficiario devolverá lo donado, si el donante no falleciere en un lance previsto.
- 2º Que lo donado será restituído cuando el donante sobreviviere al donatario.

CAPITULO IV

De la forma de las donaciones

982. Deben ser otorgadas por escritura pública bajo pena de nulidad: Escritura pública.

- 1º Las donaciones de inmuebles.
- 2º Las remuneratorias, salvo las manuales.
- 3º Las donaciones con cargo.
- 4º Las que tuvieren por objeto prestaciones periódicas o vitalicias.

Estas donaciones, para ser válidas, deberán aceptarse en la misma escritura, o bien por otra especial, notificando al donante; pero el acto quedará concluído desde el momento de la aceptación.

983. En los demás casos, si en juicio se demandare la entrega de los bienes, sea cual fuere su valor, el contrato sólo se probará por instrumento público o privado, o por confesión judicial del donante. Otros casos.

984. Lo dispuesto en los artículos precedentes, no se aplicará a la renuncia de derechos, a menos de haberse ella ajustado por convención. Renuncia de derechos.

La simple entrega será suficiente en cuanto a las cosas muebles y títulos al portador. Donación manual.

CAPITULO V

Del efecto de las donaciones

- Cumplimiento del contrato.** 985. El donatario tendrá derecho para exigir el cumplimiento del contrato. El donante y sus herederos podrán rehusarlo, si en vista de sus demás obligaciones, se comprometiere la propia subsistencia, o la de personas con derecho a reclamarles alimentos.
- En caso de concurrir diversos donatarios, será preferido el más antiguo.
- Responsabilidad del donante.** 986. El donante sólo responde por el dolo o la culpa. Producida la mora, no deberá restituir los frutos ni los intereses.
- Obligaciones del donatario.** 987. Siempre que la donación fuere sin cargo, el donatario deberá prestar alimentos al donante que no tuviere medios de subsistencia; más podrá liberarse de ello, restituyendo los bienes o el valor de los mismos cuando los hubiere enajenado.
- Deudas del donante.** 988. Aunque la donación consistiere en una parte determinada de los bienes del donante, el donatario no estará obligado a pagar las deudas de aquél, si a ello no se hubiere comprometido. El donante podrá, sin embargo, antes de entregar la cuota estipulada, retener en la misma medida valores suficientes para responder a las obligaciones que tuviere en el momento del contrato.
- Extinción por muerte.** 989. En las prestaciones periódicas, la obligación se extinguirá por muerte de cualquiera de las partes, salvo cláusula contraria.

CAPITULO VI

De ciertas donaciones en particular

- Donaciones mutuas.** 990. Se juzgarán donaciones mutuas, aquellas que varias personas se hicieren recíprocamente en virtud de un mismo acto; pero no serán tales, las prestaciones prometidas o efectuadas con carácter retributivo.

991. Para el caso del artículo anterior, la nulidad por vicio de forma o de fondo en la donación realizada a una de las partes, anulará o revocará la otra; pero la ingratitud o el incumplimiento de los cargos, sólo perjudicarán al donatario culpable.

Nulidad.

992. Serán donaciones remuneratorias, aquellas que se realizaren en recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, apreciables en dinero y por los cuales hubiere podido exigir el pago.

Donaciones remuneratorias.

Si en el instrumento de la donación no constare con claridad lo que se tiene en mira remunerar, aquélla se tendrá como gratuita.

993. Las donaciones remuneratorias deben considerarse como actos a título oneroso, mientras se limiten a una equitativa retribución de los servicios recibidos. Por el excedente, habrá simple donación.

Carácter oneroso o gratuito.

994. La donación podrá imponer cargos a favor del donante o de un tercero, sean relativos al empleo o al destino de lo donado, sean consistentes en una prestación.

Donación con cargo.

995. Cuando los cargos consistieren en prestaciones apreciables en dinero, regirán las reglas de los actos a título oneroso, en cuanto a la parte de los bienes, cuyo valor sea representado o absorbido por aquéllos, y con respecto a lo demás, las que gobiernan las disposiciones gratuitas.

Reglas aplicables.

996. Se reputará donación inoficiosa, aquella cuyo valor excediere de la parte disponible del donante en la fecha de su liberalidad. A este respecto se aplicarán los preceptos sobre la legítima.

Donación inoficiosa.

997. Si por el avalúo de los bienes del causante aparecieren inoficiosas las donaciones realizadas, los herederos necesarios existentes a la fecha de ellas, podrán exigir la reducción hasta quedar cubiertas sus legítimas.

Reducción.

CAPITULO VII

De la reversión de las donaciones

998. El donante podrá convenir la reversión de los bienes donados, ya para el caso de fallecimiento previo del do-

Casos en que se permite.

natario, ya para el supuesto de acaecer la muerte de éste, de su cónyuge y sus descendientes.

Esta cláusula deberá ser expresa y tan sólo en provecho del donante. Cuando se hubiere pactado conjuntamente en interés de él y de sus herederos, o del mismo y de un extraño, se tendrá por no escrita respecto de los demás.

Alcance del artículo anterior.

999. En el primer caso del artículo anterior, para la reversión no obstará la supervivencia del cónyuge o de los descendientes del beneficiario. En el segundo, el donante sólo tendrá derecho cuando fallecieren todos ellos. Pero si la cláusula se hubiere establecido para el supuesto de la muerte del donatario sin hijos, la existencia de éstos en ese momento, extinguirá el derecho, que no podrá renacer, aunque sobreviviere a ellos el autor de la liberalidad.

Renuncia tácita.

1000. El consentimiento del donante para la venta de los bienes donados, importa la renuncia al derecho de reversión en cuanto al comprador y al donatario; pero su conformidad para constituir una hipoteca, sólo exonera al acreedor garantizado por ella.

Restitución.

1001. Cumplida la condición estipulada, el donante podrá exigir que se le restituyan los bienes, según las reglas del enriquecimiento sin causa.

CAPÍTULO VIII

De la revocación de las donaciones

Causas.

1002. La donación aceptada sólo podrá revocarse en los casos previstos en el presente capítulo.

a) Mora en el cumplimiento de los cargos o condiciones.

1003. Cuando el donatario fuere constituido en mora para ejecutar los cargos o condiciones impuestas, el donante o sus herederos podrán exigir la revocación.

Los terceros beneficiarios de dichos cargos, sólo podrán reclamar su cumplimiento. Siempre que ellos fueren de interés público, la autoridad competente tendrá el mismo derecho después de fallecido el donante.

Límites de las obligaciones del donatario.

1004. El donatario sólo responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada, y no está obligado personalmente. Podrá substraerse a dicha ejecución restituyendo lo recibido; o también su valor si hubiere imposibilidad, no motivada por caso fortuito.

1005. La revocación afectará únicamente al donatario, y no a los terceros, en cuyo beneficio las condiciones o los cargos hubieren sido estipulados por el donante.

Efecto de la revocación

1006. Las disposiciones sobre resolución de los contratos sinalagmáticos son aplicables a la revocación de las donaciones con cargo. Los bienes serán restituidos con arreglo a los principios del enriquecimiento sin causa.

Normas aplicables.

Cuando un tercero hubiere adquirido gratuitamente alguno de esos bienes, o si de cualquier modo le afectasen las acciones de enriquecimiento, podrá liberarse de las consecuencias, ofreciendo cumplir los cargos impuestos al donatario, siempre que no debiesen ejecutarse precisa y personalmente por éste.

1007. Las donaciones podrán ser revocadas por causa de ingratitud:

b) Ingratitud.

- 1º Si el donatario atentare contra la vida o la persona del donante, su cónyuge, o sus descendientes y ascendientes.
- 2º Cuando injuriare gravemente a las mismas personas, o las afectare en su honor, o las hiciere víctima de sevicias.
- 3º Siempre que rehusare alimentos al donante, o a quienes tuvieren derecho para exigirlos a éste.
- 4º En el caso de haber cometido delitos graves contra los bienes del autor de la donación.

Para todos los incisos precedentes bastará la prueba de la voluntad manifestada, sin necesidad de la condena criminal.

1008. La prestación de alimentos sólo será exigible al donatario, cuando el donante no pudiese obtenerlos, de sus parientes obligados, o no se encontraren éstos en condiciones de dárselos. En todos los casos podrá fijarse judicialmente, con arreglo a las circunstancias, la contribución del donatario, o la suma total a cargo de éste. Incurrirá, no obstante, en ingratitud, cuando se negare a prestar alimentos de urgencia, so pretexto de existir otros responsables.

Alimentos.

1009. No procederá la revocación por causa de ingratitud cuando el donatario no se hallare en condiciones de

Supuestos en que no proceden.

restituir los bienes sin comprometer su propia subsistencia y la de aquellas personas a quienes debiere alimentos; ni en el caso del inc. 3° del artículo 1007, si el donante hubiere causado su indigencia intencionalmente o por su culpa.

Quiénes pueden pedir la revocación.

1010. La revocación fundada en ingratitud, sólo podrá ser exigida por el donante personalmente. La acción se extinguirá cuando mediare renuncia o perdón de éste con conocimiento de causa, o después de transcurrido un año desde que tuvo noticia de los hechos que la autorizaban.

Los herederos del donante podrán también pedir la resolución, cuando éste hubiere fallecido sin perdonar, o sin promover la demanda dentro del término expresado. Les será permitido continuar la que hubiere iniciado el causante, o en caso de muerte intencional e ilegítima del mismo por el donatario, o siempre que éste imposibilitare la revocación.

Contra quién procede.

1011. La demanda, a que se refiere el artículo precedente, sólo podrá intentarse contra el donatario, y no con respecto a sus herederos o sucesores; pero proseguirá con éstos cuando hubiere sido iniciada contra el primero.

Donaciones onerosas y remuneratorias.

1012. Las donaciones onerosas y las remuneratorias serán revocables por las mismas causas que las gratuitas, sin perjuicio de reembolsar el valor de los cargos satisfechos, o el de los servicios prestados.

Restitución.

1013. Es aplicable a la revocación por causa de ingratitud, lo dispuesto en el art. 1006 para recuperar los bienes donados.

Convencional. Supernacencia.

1014. No se admitirá la revocación por el ulterior nacimiento de hijos al donante, si expresamente no estuviere estipulado.

TÍTULO IV

De la locación

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Concepto.

1015. Habrá locación de cosas, cuando una parte se obligue a ceder el uso y goce de un objeto, por tiempo limitado, y la otra a pagar por ello, un precio cierto en dinero.

Serán asimismo, susceptibles de locación los bienes que no sean cosas, cuando pueda cederse el uso de ellos.

Se aplicará subsidiariamente a este contrato, lo dispuesto sobre los requisitos esenciales de la compraventa.

1016. Pueden darse en locación todos los bienes que estén en el comercio, aunque sean indeterminados. Los que estuvieren fuera de él, o los que no deban ser enajenados por prohibición legal o judicial, podrán ser objeto del contrato, si no fueren nocivos al bien público, o contrarios a la moral y buenas costumbres. Objeto.

1017. Los que tuvieren la administración de bienes propios o ajenos, podrán darlos en arrendamiento y tomar los de terceros, dentro de los límites señalados por la ley a sus respectivos derechos. Capacidad.

1018. El contrato de locación no podrá celebrarse por más de diez años. El que llevare un plazo mayor, quedará concluido al expirar dicho término, a no ser que el inmueble urbano objeto del contrato se hubiere alquilado para levantar construcciones en él, o se tratase de fundos locados a fin de realizar plantaciones que requieran largo tiempo para alcanzar resultado productivo. En ambos supuestos, el arrendamiento podrá extenderse hasta veinte años. Duración.

1019. A falta de término en el contrato, éste se fijará con arreglo a las siguientes normas: Plazo presunto.

- 1º Cuando fuera de una heredad, cuyos frutos deban cosecharse cada año, se entenderá por este plazo.
- 2º Si los frutos se recogieren solamente después de algunos años, se juzgará por todo el período necesario para percibirlos.
- 3º Cuando se tratase de casas, o de piezas amuebladas, cuyo precio se hubiere convenido por años, meses, semanas o días, se reputará por el tiempo señalado a dicho precio.
- 4º En caso de tener la locación un objeto determinado, se juzgará por el tiempo necesario para llenar el fin del contrato.

1020. Es nula toda cláusula en la que se pretenda excluir de la casa, pieza o departamento arrendado o subarrendado, a los menores que se hallaren bajo la patria potestad o guarda del locatario o sublocatario. Exclusión de menores.
Nulidad.

Subsistencia del contrato inscripto.

1021. En caso de enajenarse el bien, la locación subsistirá por el tiempo convenido, siempre que el contrato estuviere inscripto en el Registro.

Bienes de personas de derecho público.

1022. La locación de bienes nacionales, provinciales o municipales, o de los pertenecientes a entidades de derecho público, será juzgada por las respectivas leyes, y se aplicarán subsidiariamente las de este Código.

Aplicación extensiva.

1023. Las reglas del presente título regirán, en lo pertinente, para los contratos en que la retribución del uso y goce se hiciere mediante cosas que no sean dinero, o prestaciones de hacer o de no hacer.

CAPITULO II

Del efecto de la locación

Entrega de la cosa.

1024. Celebrado el contrato, el locador deberá entregar el bien al locatario con todos los accesorios que en ese momento dependieren de él, en el estado propio para el uso convenido, salvo acuerdo de hacerlo tal como se hallare. Ello se presumirá cuando se arrienden edificios arruinados, o se reciba el objeto sin exigir reparaciones.

Extensión del uso y goce.

1025. El uso y goce propio del contrato, comprende la percepción de los frutos y los productos ordinarios de las explotaciones existentes, cuando correspondan al locador.

Si el fundo arrendado se extendiere por aluvión, el locatario tendrá también el uso del terreno acrecido, con cargo de pagar mayor precio, siempre que el aumento fuere de importancia.

Obligaciones del locador.

1026. Durante el contrato, serán obligaciones del locador respecto de la cosa:

- 1º Conservarla en buen estado, y efectuar las reparaciones necesarias para ello.
- 2º Mantener al locatario en el goce pacífico de la misma, realizando los actos conducentes a ese fin, y absteniéndose de cuanto pueda crear embarazos al derecho de aquél.
- 3º Conservarla tal como la arrendó, aunque los cambios que hiciere no causaren perjuicio alguno al locatario.

4º Reembolsar las impensas necesarias.

5º Responder de los vicios o defectos graves que impidieran el uso de ella.

1027. La obligación a que se refiere el inc. 1º del artículo precedente, comprende las reparaciones que exigiere el deterioro motivado, tanto por caso fortuito o fuerza mayor, como por la calidad propia de la cosa, vicio o defecto de ella, cualquiera que fuere, o el derivado del uso o goce natural, o el que sucediere por culpa del locador, sus agentes o dependientes.

Conservación de la cosa en buen estado.

Se considera como fortuito a los efectos de este artículo, el deterioro de la cosa, originado por hecho de tercero, aun que sea por motivos de enemistad o de odio al locatario.

1028. Cuando el locador, no obstante el aviso que el locatario le hubiere dado acerca de los vicios o deterioros que debe reparar, no lo hiciere, o se retardare en hacerlo, podrá el segundo retener la parte del precio correspondiente al costo de las reparaciones o trabajos, y si éstos fueren urgentes, efectuarlos por cuenta del primero.

Incumplimiento de esta obligación.

1029. Si el locador, al realizar las reparaciones a su cargo, interrumpiera el uso o goce convenido, en todo o en parte, o fueren ellas muy incómodas al locatario, podrá éste exigir, según las circunstancias, o la cesación del arrendamiento, o una rebaja proporcional al tiempo que duren aquellas. Si el locador no conviniere en ello, podrá el locatario devolver la cosa, quedando disuelto el contrato.

Reparaciones molestas.

Igual facultad le asistirá siempre que el locador fuese obligado a tolerar o efectuar trabajos en las paredes divisorias, inutilizando por algún tiempo parte de la cosa arrendada.

Cuando el impedimento sólo fuere parcial, podrá exigir reducción del precio.

1030. Si el locatario fuese turbado en el uso y goce de la cosa se observarán, según los casos, las reglas siguientes:

Turbación del goce pacífico.

1º Cuando la turbación procediere de vicios o defectos graves de ella, que impidieren el uso y goce, el locador responderá aunque los hubiere ignorado, o sobrevinieren durante el arrendamiento. En ambos supuestos, el locatario podrá pedir se disminuya el precio, o se rescinda el contrato, a no ser que hubiera conocido tales vicios o defectos.

- 2° Si el menoscabo resultare de una acción, o de las vías de hecho de terceros, que pretendan la propiedad, usufructo o servidumbre, le será lícito pedir al locatario una disminución proporcional del precio, siempre que hubiere notificado tales circunstancias al locador. Lo mismo se observará cuando la turbación o impedimento, derivase de actos realizados en ejercicio de los poderes regulares de la autoridad pública.
- 3° En el caso del inciso anterior, o si el locatario hubiese sido demandado para desalojar el bien, en todo o en parte, o para sufrir el ejercicio de una servidumbre u otro derecho real, deberá citar de evicción al locador, y si lo exigiere, ser excluido del pleito, siempre que designare al poseedor de quien deriva su derecho, el cual estará obligado a tomar la defensa.
- 4° No podrá obligarse al locador que garantice al locatario contra las vías de hecho de terceros, que no pretendan derechos reales sobre la cosa. En tales supuestos, el arrendatario sólo tendrá acción contra los autores, pero aunque éstos fueren insolventes, no le será permitido dirigirse contra el locador. Cuando las turbaciones revistieren el carácter de fuerza mayor, regirá lo dispuesto en el inc. 7°.
- 5° El locatario deberá comunicar al locador, lo más pronto posible, toda usurpación o novedad perjudicial a su derecho, como cualquier demanda entablada sobre la propiedad, uso o goce de la cosa. Si no lo hiciere, responderá por los daños y perjuicios, y no podrá exigir ninguna garantía del locador.
- 6° Si el locador fuere vencido en juicio sobre una parte de la cosa, podrá el locatario reclamar una rebaja del precio, o que se rescinda el contrato, siempre que se tratare de una porción principal del bien arrendado, así como los daños y perjuicios.
- Cuando el locatario hubiere conocido al contratar, el peligro de evicción, no podrá pretender aquel rescimiento.
- 7° Si fuere por caso fortuito o de fuerza mayor, podrá solicitar que el contrato se rescinda, o que cese el pago del precio durante la interrupción. Pero si el

caso fortuito no afectare a la cosa misma, no se modificarán las obligaciones del locatario.

1031. Siempre que el locador, violando lo dispuesto en el inc. 3º del art. 1026 modificare la forma de la cosa, o quisiere hacer mudanzas u obras que no impliquen reparaciones, o las hubiere ya hecho contra la voluntad del locatario, podrá éste oponerse a que las haga, o pedir la demolición de ellas, o devolver la cosa, solicitando el pago de los daños y perjuicios. El locador podrá, sin embargo, modificar los accesorios de la cosa, con tal que no la perjudique.

Cambios en el objeto.

1032. A los efectos de lo dispuesto en el inc. 4º del art. 1026, se consideran impensas necesarias, las reparaciones y gastos realizados por el locatario, cuando sin daño de la cosa no pudieran ser demorados, y no fuere posible dar aviso al locador para que los hiciera o autorizare. Entran en esta clase el pago de impuestos sobre cosa, pero no los que gravaren las actividades del locatario, o fueren determinados por la calidad de la explotación.

Impensas reembolsables.

Las impensas de otro género solo serán a cargo del locador, cuando así lo dispongan las reglas de la gestión de negocios ajenos. El locatario podrá levantar las mejoras, a menos que el locador quisiera conservarlas. Se aplicará en este caso lo dispuesto por el art. 1498.

1033. Son obligaciones del locatario:

Obligaciones del locatario.

- 1º Limitarse al uso y goce convenido o presunto, según la naturaleza de la cosa y las circunstancias, aunque el diverso empleo no causare perjuicio al locador.
- 2º Pagar el precio en los plazos convenidos, y a falta de ajuste, según la costumbre del lugar.
- 3º Conservar la cosa en buen estado y responder de todo daño o deterioro que se causare por su culpa, o por el hecho de las personas de su familia que habitaren con él, de sus huéspedes, subordinados o subarrendatarios. En este último caso, puede el locador exigir que se hagan los trabajos necesarios, o disolver el contrato.
- 4º Reparar aquellos deterioros menores, causados regularmente por las personas que habitan el edificio.
- 5º Informar al locador, lo más pronto posible, si durante el contrato se manifestara un vicio de la cosa, que

hiciera necesario adoptar medidas para protegerla contra un peligro antes imprevisto, como también cuando un tercero se arrogare un derecho sobre ella.

La omisión del aviso le obligará por el daño producido, y si por dicha causa el locador no tomó las medidas necesarias, el locatario no podrá pedir rebaja o suspensión del alquiler, ni tampoco rescimiento alguno, ni que se rescinda el contrato.

- 6º Pagar los impuestos establecidos por razón del uso o explotación del bien, aunque las autoridades los cobren al propietario.
- 7º Satisfacer los gastos del contrato y, en su caso, los del Registro.
- 8º Restituir la cosa, una vez terminada la locación.

Cambios o deterioros por desgaste normal.

1034. Los cambios o deterioros causados en la cosa por el uso convenido o regular de ella, no harán responsable al locatario, como tampoco si por la extracción de sus productos, el bien estuviera destinado a extinguirse.

Idem por caso fortuito.

1035. Si la cosa se destruyera totalmente por caso fortuito, la locación quedará rescindida. Si lo fuere sólo en parte, podrá el locatario pedir rebaja del precio, o la rescisión del contrato, según fuere la importancia del daño. Si hubiere simple deterioro, el arrendamiento subsistirá, pero el locador estará obligado a las reparaciones necesarias.

Incendio.

1036. El locatario responderá por el incendio de la cosa, si no probare caso fortuito o fuerza mayor, vicio de construcción, o que el fuego se propagó desde un inmueble vecino, u otras causas análogas.

Mejoras y otras obras.

1037. Las mejoras y demás obras efectuadas en la cosa durante el contrato, se regirán por los principios siguientes:

- 1º El permiso para llevarlas a cabo, sólo podrá probarse por escrito.
- 2º Si el locatario fuere autorizado para efectuarlas, deberán designarse expresamente. Cuando se conviniere que las abonará el locador, habrá de consignarse el máximo que el locatario podrá gastar y los alquileres o rentas con que se verificará el pago. No observándose estas disposiciones, la autorización será nula.

- 3º Si el locatario no realizara las mejoras prometidas, el locador podrá optar entre exigirle el cumplimiento de ellas dentro de un plazo determinado, o conminarle con la resolución del contrato, si no las efectuar. Cuando se hubiera entregado por el locador alguna suma, o disminuido el precio en vista de las mejoras, podrá exigir, además, el reintegro de aquella con los intereses, o el total del alquiler reducido, sin perjuicio del resarcimiento a que hubiere lugar.
- 4º No prohibiéndolas el contrato, el locatario, sin necesidad de autorización especial, estará facultado para realizar las que estimare útiles o cómodas, con tal que no altere la forma del objeto, o que no hubiere sido citado para restituirlo. Después de celebrarse el contrato, el locador no podrá impedir al locatario que haga mejoras.
- 5º En las casas y predios urbanos y en los edificios de las heredades rústicas, no podrá el inquilino hacer obras que perjudiquen la solidez de las construcciones o causen algún perjuicio. Le será permitido, sin embargo, quitar o mudar divisiones internas, abrir en ellas puertas o ventanas, o introducir cambios análogos, con tal que restituya la cosa en el estado en que se obligó o en que la recibiera, siempre que así lo exigiere el locador.
- 6º El locatario no podrá, sin autorización expresa, efectuar las que alteren la forma de la cosa.

Respecto de terrenos incultos, se presume autorizado el locatario para cualquier cultivo o mejoras rústicas.

- 7º Si el locatario, con conocimiento y sin oposición del locador, realizó mejoras que valorizaron el inmueble, podrá el último, al fin del contrato elegir entre abonarle el monto de lo invertido en ellas o el aumento experimentado por la cosa. A falta de los requisitos indicados, el locador tendrá derecho para exigir, probando que ellas no ofrecen para él ninguna utilidad, el retiro de las mismas, y se le indemnice si hubiere lugar, por el daño que la separación irrogare al fundo. Pero si prefiriese conservar las mejoras, abonándolas en cualquiera de las formas previstas en el

primer párrafo de este artículo, podrá el juez acordar plazo razonable para el pago.

- 8º Si el locatario hiciera sin autorización del locador, mejoras prohibidas por el contrato, o que alteren la forma de la cosa, podrá aquél impedir las, y si ya estuvieren terminadas, demandar su demolición, o exigir antes de la entrega del objeto, que el locatario la restituya al estado en que la recibió.

Si ellas fueren nocivas, o mudaren el destino de la cosa, podrá el locador ejercer los mismos derechos, o exigir la resolución.

- 9º El locatario tendrá derecho de retención por las mejoras o los gastos que corresponde abonar al locador.

Acción ejecutiva.

1038. Si la cosa arrendada fuere inmueble, compete al locador acción ejecutiva para el cobro del precio.

El inquilino no será condenado al pago si tuviere que compensar mejoras o gastos, necesarios, o autorizados según lo prescripto en el art. 1037, inc. 7º, aunque el valor cierto de ellos dependiere de liquidación.

Extensión de las fianzas o garantías.

1039. Las fianzas o garantías de la locación o sublocación, obligan a quienes las otorgaron, tanto al pago del precio, como a todas las demás prestaciones, si no existiera reserva expresa.

Pagos anticipados.

1040. Los terceros podrán impugnar los pagos anticipados de arrendamientos, conforme a los principios generales. Sin embargo, y a pesar de convención en contrario, se tendrán como válidos los efectuados hasta el término de seis meses para los predios urbanos y de un año para los rústicos, en los casos siguientes:

- 1º Respecto de los acreedores hipotecarios, sea cual fuere la fecha en que se inscribiere el gravamen. El término se contará desde la notificación del embargo. Los abonos ulteriores no podrán ser opuestos al acreedor, pero sí los hechos por mayor plazo y anotados en el Registro, antes de la constitución de la hipoteca.

- 2º En lo que concierne a los adquirentes de la cosa, los verificados antes de tener conocimiento de la enajenación. El plazo se contará desde que el título se inscribió y el acto fué notificado al locatario. La limitación no podrá invocarse, por quien supiere o de-

biere saber el pago anterior adelantado, en virtud de su inscripción.

- 3º Respecto de la mujer casada, los verificados al marido, a menos de hallarse éste autorizado.
- 4º En cuanto a los mandantes, los hechos a los mandatarios no facultados para requerir adelantos por mayor plazo.
- 5º Con referencia a los incapaces, en cuanto a los anticipos por término más amplio, si no mediare venia judicial.

1041. Las cosas introducidas en la casa o predio arrendado, quedarán afectadas a las obligaciones del locatario, con arreglo al art. 778, inc. 8º.

Privilegio del locador.

1042. El incumplimiento del contrato por parte del locatario, permitirá al locador:

Facultades del locatario, en caso de incumplimiento.

- 1º Impedir el empleo de la cosa en contra de lo dispuesto por los arts. 1025 y 1033, o el goce abusivo de ella que le causare perjuicio, como también exigir el resarcimiento y, según las circunstancias, reclamar la rescisión del contrato.
- 2º Tomar judicialmente cuenta del estado de la cosa, cuando el locatario la abandonare sin dejar persona que lo substituya, quedando desde entonces disuelto el contrato.
- 3º Demandar la resolución del contrato y el resarcimiento de daños y perjuicios, cuando no se pagaren dos períodos consecutivos del alquiler.

Goce abusivo.

Abandono.

Falta de pago.

CAPITULO III

De la sublocación

1043. El locatario, si no le fuere prohibido por el contrato, podrá subarrendar en todo o en parte la cosa, como también darla en comodato o ceder la locación. En este último caso se producirá la transferencia de los derechos y obligaciones del locatario, aplicándose los principios sobre la cesión de derechos.

Facultades del locatario.

El subarriendo constituye una nueva locación, regida por las normas del presente título.

Prohibiciones implícitas.

1044. La prohibición de subarrendar importa la de celebrar el arrendamiento, y viceversa.

Relaciones del locador con el locatario y sublocatario.

1045. La sublocación no modificará las relaciones entre locador y locatario. Las de aquél con el subarrendatario, serán regidas por las normas siguientes:

- 1º El locador podrá exigir del subarrendatario el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la sublocación, y el segundo reclamar del primero el de las que éste hubiere contraído con el locatario.
- 2º El subarrendatario estará directamente obligado a satisfacer los alquileres o rentas que el locatario dejare de abonar, y cuyo pago fuere demandado; pero sólo hasta la cantidad que estuviere adeudándole.
- 3º El sublocatario deberá indemnizar el daño que causare al locador en el uso y goce de la cosa.

Destino y entrega del bien.

1046. El subarriendo se juzgará siempre bajo la cláusula implícita de que el subarrendatario usará y gozará de la cosa, conforme a su destino según el contrato primitivo, y tendrá derecho para demandar que el sublocador la entregue en buen estado.

Pago de alquileres vencidos y adelantados.

1047. El locador deberá admitir los pagos de cuotas vencidas, hechos al locatario por el subarrendatario. Este último no podrá oponer al locador los anticipos efectuados, salvo que los autorizare el contrato o el uso del lugar.

Regirá respecto del subarrendatario lo dispuesto por el art. 1040.

Privilegios del locador y sublocador.

1048. Los derechos y privilegios del locador sobre las cosas introducidas en el predio, se extienden a las que lo fueren por el subarrendatario; pero sólo hasta donde alcancen las obligaciones que incumben a éste.

Por su parte, el sublocador gozará por el precio del subarriendo, de los derechos y privilegios del arrendador sobre las mismas cosas.

Efectos de la sublocación prohibida.

1049. Si no obstante la prohibición del contrato, el locatario subarrendare la cosa o lo hiciere sin la venia del locador, cuando ésta fuere necesaria, el subarrendatario no podrá negarse a recibirla alegando esas circunstancias, si

contrató en conocimiento de ellas. En tal caso, la sublocación producirá sus efectos, si el locador la tolerase o hasta que se opusiere.

Por su parte, el locador podrá exigir el desalojo del subarrendatario y que el locatario vuelva a la posesión de la cosa total o parcialmente subarrendada. También le asistirá derecho para demandar los daños y perjuicios, limitándose a ellos, o bien que se rescinda la locación con el resarcimiento que proceda.

CAPITULO IV

Del término de la locación

1050. La locación concluye:

Causas.

- 1º Al vencimiento del término por el que fué contratada.
- 2º Convenida sin plazo, cuando cualquiera de las partes lo quisiere.
- 3º Por pérdida de la cosa o por la imposibilidad de obtener de ella, el destino para el cual fué arrendada.
- 4º Por los vicios redhibitorios de la cosa, ya existieren al tiempo del contrato o sobrevinieren luego, salvo si en el primer caso los hubiere conocido o debido conocer el locatario. Se juzgará dentro de este inciso, los supuestos de la finca urbana que amenazare ruina, o que con motivo de construcciones en inmuebles vecinos, se tornare obscura.
- 5º Por caso fortuito, que impida iniciar o continuar las obligaciones del contrato.
- 6º Por todos los casos de culpa de cualquiera de las partes que autoricen a rescindirla.

1051. En el caso del inc. 1º del precedente artículo, si el locatario no devuelve la cosa, podrá el locador demandar su restitución de inmediato, con más los daños y perjuicios. El desahucio se cumplirá dentro de diez días, a partir de la notificación de la sentencia que lo decretare.

Restitución del bien
Plazo vencido.

Plazos legales.

1052. Si en el supuesto del inc. 3º del art. 1050, el locador reclamare la cosa, el locatario, no adeudando dos períodos de alquileres, gozará de los plazos siguientes, contados desde la intimación:

- 1º De tres días si la cosa fuere mueble.
- 2º De cuarenta días, cuando se tratase de casa o predio, plazo que se ampliará hasta noventa, si el locatario acreditare haber satisfecho el alquiler correspondiente al mes anterior. Cuando el precio se hubiere fijado por días, el término se limitará a siete, en todos los casos.
- 3º Tratándose de un predio rústico, o del local donde funcione un establecimiento de industria o comercio, después de tres meses.
- 4º Cuando fuere una heredad destinada a explotación agrícola, después de un año.
- 5º Si fuere terreno no comprendido en los supuestos de los dos incisos anteriores, después de seis meses.

Muerte de las partes.

1053. La locación a término no concluye por la muerte de las partes. Sin embargo, en caso de fallecimiento del locatario de un inmueble, cuando el subarriendo estuviere prohibido, los herederos podrán obtener que se rescinda sin pagar indemnización, si probaren que por consecuencia del deceso, no pueden soportar las cargas del arrendamiento, o que la finca no responde a sus necesidades actuales. Esa petición deberá formularse dentro del término de seis meses a partir de la muerte del locatario.

Estado de la cosa.

1054. Si al convenirse el contrato el locatario hubiere recibido la cosa con descripción de su estado, deberá devolverla de acuerdo con la misma, salvo el deterioro o pérdida en razón del tiempo u otras causas; pero si la entrega se verificó sin ese recaudo, se presumirá recibida en buenas condiciones.

Mejoras.

1055. Cuando la cosa arrendada tuviere mejoras que no deba satisfacer el locador, se reputarán siempre como accesorios de aquélla.

El locatario podrá retirarlas en las condiciones del inc. 7º del art. 1037.

1056. Cuando el locatario pudiere o debiere restituir la cosa, si el locador se rehusare a recibirla, podrá consignarla judicialmente y, desde esa fecha, cesará su obligación en cuanto el precio, sin que ello obste al derecho del locador para impugnar el depósito.

Consignación.

1057. Si vencido el contrato, el locatario permaneciere en el uso y goce, no se juzgará que hay tácita reconducción en cuanto al plazo. La locación continuará bajo sus mismas cláusulas, hasta que el locador pida se le restituya la cosa, pudiendo reclamarla en cualquier tiempo, sea cual fuere el que el locatario hubiere continuado en ella.

Tácita reconducción: límite.

1058. Cesado el contrato por causa que no fuere la confusión, se resolverán o podrán ser resueltos los subarrendamientos, pero el sublocatario podrá solicitar las indemnizaciones correspondientes.

Terminación del subarrendo.

1059. En todos los casos de intimación o desalojo prevenidos en este título, el procedimiento será sumario.

Procedimiento sumario.

CAPITULO V

Arrendamientos de predios rústicos

1060. El arrendatario no podrá, sin autorización del locador, alterar el destino económico del fundo, ni introducir mejoras susceptibles de modificar la explotación después de terminado el contrato.

Destino del fundo.

1061. Se juzgará goce abusivo arrancar árboles o hacer cortes de montes, salvo para extraer la madera exigida por el cultivo o mejora del predio o proveer de leña y carbón a la casa. Si existiere monte talar, se aplicará lo dispuesto en el art. 1636.

Goce abusivo.

1062. El locatario no podrá exigir remisión total o parcial del precio, fundado en casos fortuitos que hubieren destruido o menoscabado las cosechas.

Pérdida fortuita de las cosechas.

1063. El arrendatario deberá realizar a su costa las reparaciones de práctica, especialmente en los edificios, caminos, cercos y fosos.

Reparaciones.

1064. Si mediare inventario de utensilios, animales, máquinas o enseres recibidos por el ocupante, éste deberá restituirlos en buen estado de conservación.

Restitución de útiles, animales, etc.

Cuando existieren animales de trabajo o de cría sin haberse convenido cómo habrán de ser devueltos, el arrendatario sólo deberá entregar igual número de cabezas de la misma edad y calidades que las recibidas.

Duración.

1065. El arrendamiento de fundos con superficie no mayor de trescientas hectáreas, que se destinen a explotación agrícola-ganadera, se entenderá convenido por el término de cinco años, igualmente obligatorio para ambas partes, salvo que correspondiere un plazo mayor.

Mejoras permitidas.
Indemnizaciones.

1066. En el caso del artículo anterior, el locatario podrá edificar una habitación de material hasta de dos piezas y cocina, un galpón, tinglado, silo económico para cereales o forrajes, instalar una aguada, plantar árboles frutales o forestales a razón de cinco por hectárea y hasta un máximo de quinientos en todo el fundo, siempre que estas mejoras no existieren dentro del campo.

Cuando la explotación fuere de ganadería, le será permitido construir viviendas baratas para peones o puesteros.

Terminado el contrato, el propietario deberá indemnizar el valor de todas estas impensas, según determinen árbitros, con tal que no exceda del diez por ciento del atribuido al área arrendada para el pago de la contribución territorial vigente.

Restitución del bien.
Vencimiento del plazo.

1067. Vencido el plazo del art. 1019, o el de cinco años cuando no rigiere uno mayor, el arrendatario deberá restituir el fundo, sin gozar de otro término para el desahucio.

Normas aplicables.

1068. Las reglas contenidas en los capítulos anteriores, se aplicarán subsidiariamente a la locación de predios rústicos.

TÍTULO V

De la aparcería

Concepto.

1069. Habrá contrato de aparcería cuando alguien entregare a otro, un predio rústico para la explotación agrícola o ganadera y dividir con él los frutos.

Reglas supletorias.

1070. A falta de convenio expreso o de costumbre local, regirán las disposiciones que siguen:

1º El propietario estará obligado a suministrar al colono habitación adecuada dentro del fundo, y éste de-

berá atender personalmente la explotación, no pudiendo traspasar sus derechos, ni constituir a su vez, otra aparcería.

- 2º Los gastos ordinarios del trabajo y la recolección estarán a cargo del colono, quien deberá suministrar también los instrumentos y animales de labor.
- 3º Se cargarán por igual los gastos de semilla, fertilizantes, materias antiparasitarias y lo que demande la destrucción de otras plagas.
- 4º Se dividirán por mitad los gastos exigidos en la cosecha y por el empleo de elementos que no se hallaren dentro del fundo, a la disposición regular y ordinaria del colono.
- 5º Las expensas comunes se partirán en la misma proporción que los productos.

1071. La liquidación de cuentas se hará al final de cada año agrícola o ganadero, previo aviso al propietario antes de comenzar la recolección de los frutos. Estos se dividirán de acuerdo con lo estipulado o con los usos del lugar, y a falta de ellos por mitad.

Liquidación de cuentas.

1072. El contrato de aparcería termina:

Extinción.

- 1º Por el vencimiento del plazo.
- 2º Por muerte o incapacidad del colono, a menos que en este último caso, pudiere ser reemplazado por otro miembro de su familia que habitare con él.
- 3º Por rescisión, que podrá pedir el propietario:
 - a) Cuando por enfermedad u otro motivo, el colono quedare incapacitado para la explotación, salvo lo dispuesto en el inc. 2º.
 - b) Cuando la composición de la familia experimentar cambios que la hicieren inapta para el cumplimiento del contrato.

TITULO VI

Del contrato de trabajo

1073. Las reglas del presente título, se aplicarán a las prestaciones de servicios de quienes prometan trabajar bajo

Casos comprendidos.

la dirección de otra persona, por tiempo determinado o no, mediante un salario que deberá pagarse en moneda nacional.

Igualmente regirán para el trabajo que se llevar a cabo en el domicilio del empleado, cuando la retribución consistiere en un precio por pieza concluida, siempre que los servicios continúen después de la entrega.

Duración.

1074. No podrá celebrarse este contrato por más de cinco años, pero será prorrogable. Los que se hicieren por término mayor, sólo valdrán por aquel plazo.

Forma y prueba.

1075. El contrato de trabajo no está sujeto a formas especiales y podrá probarse por todos los medios, aunque excediera a la tasa legal.

Precio.

1076. Quien realizare cualquier trabajo, o prestare algún servicio a otro, podrá exigir el precio, aunque no hubiere mediado ajuste, siempre que tales actividades fueren de su profesión o modo de vivir. Si hubiere tarifa o arancel se aplicarán éstos, y en defecto de ellos, la retribución habitual, que será fijada por el juez.

Prestación personal.

1077. Se presume que el obligado a prestar sus servicios debe hacerlo personalmente, y que no es cesible el derecho a esa prestación, salvo el caso de enajenarse el establecimiento donde el trabajo se efectuare.

Epocas de pago.

1078. La retribución debe ser satisfecha después de prestados los servicios. A falta de acuerdo, el salario fijado por día, deberá pagarse cada quincena; el convenido por mes, al vencimiento de cada plazo; si lo fuere por piezas, contra su entrega.

Obligaciones del patrón.

1079. El patrón está obligado:

- 1º A tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar todos los riesgos de la explotación, y vigilar que el trabajo se realice en locales convenientes y sanos.
- 2º A responder por todos los accidentes ocurridos a sus empleados y obreros, durante el tiempo de la prestación de los servicios, ya con motivo y en ejercicio de sus tareas, por caso fortuito o por fuerza mayor inherente a las mismas.

Cesará esta responsabilidad, cuando el hecho hubiere ocurrido exclusivamente por dolo o culpa de la víctima o de los llamados a recibir la indemnización, o si proviniere de fuerza mayor extraña al trabajo.

1080. Será permitido al patrón, compensar los salarios o sueldos con sus créditos contra los empleados, hasta la quinta parte de aquéllos. Podrá hacerlo por todo el resarcimiento, en los daños que el locador hubiere intencionalmente causado. La retribución sólo será embargable por los acreedores de éste, en la medida que determinan las leyes especiales.

Compensación. Embargo.

1081. El patrón, que por no proporcionar trabajo al empleado, fuere constituido en mora, deberá retribuirle los servicios no prestados; pero se deducirá del importe lo que economizó el locador al no efectuarlos, lo que éste hubiere adquirido por otra actividad y lo que dejó maliciosamente de obtener.

Mora del patrón.

Cuando el pago se hubiere convenido por piezas o por tarea, podrá el patrón ocupar al empleado en trabajo a jornal.

Obligaciones del empleado.

1082. Son obligaciones del empleado:

- 1º Efectuar el trabajo con el cuidado necesario.
- 2º Responder por su incompetencia.
- 3º Guardar secreto respecto de los negocios de su principal y también de los procedimientos industriales reservados que hubiere conocido en el ejercicio de su cargo.

1083. El empleado retribuido en todo o en parte, con una cuota sobre las utilidades netas de su principal, o de las operaciones en que interviniere, podrá examinar los libros y documentos de contabilidad, una vez efectuada la liquidación o cuando ella debiere practicarse.

Derechos del habilitado.

1084. El contrato de trabajo termina:

Extinción.

- 1º Sin necesidad de aviso previo, cuando se hubiere convenido un término fijo o resultare de su objeto.
- 2º A falta de plazo, siempre que cualquiera de las partes notificare a la otra con la anticipación siguiente:
 - a) Treinta días cuando se tratare de empleados o dependientes de escritorio.
 - b) Ocho días respecto de otros empleados y domésticos.
 - c) Siete días, si fueren obreros.

En los casos de los inc. b) y c) los locadores tendrán derecho al salario hasta el fin de la semana siguiente, y en el del inc. a) hasta la conclusión del mes. Será facultativo del patrón exigir la prestación de servicios durante esos plazos.

En los contratos con obreros o criados, se juzgará como de ensayo las dos primeras semanas y durante ellas cualquiera de las partes, podrá desligarse previo aviso de tres días.

3º Cuando existan justos motivos para la resolución.

Se consideran tales, entre otros:

- a) La incompetencia o la negligencia del empleado.
- b) La desobediencia del mismo en seguir las instrucciones impartidas para el trabajo.
- c) La imposibilidad permanente del locador para realizar sus tareas. No se juzgará de este carácter la enfermedad, cuya duración no exceda de un mes en los contratos con plazo mayor de un año.
- d) Las razones de moralidad que autoricen a una de las partes para no ejecutar el contrato.
- e) El incumplimiento por el patrón o el locador, de las cláusulas convenidas.

4º La muerte de cualquiera de los contratantes, salvo cuando la explotación en que se prestan los servicios continuara con los herederos del principal.

Leyes subsistentes.

1085. Quedan subsistentes las leyes sobre trabajo, forma de pago, accidentes y otras análogas, dictadas por el Congreso de la Nación.

Aplicación del derecho administrativo.

1086. Los contratos de trabajo celebrados con el Estado o entidades públicas subordinadas, serán regidos por el derecho administrativo, y subsidiariamente por el presente Código. Esta disposición comprende a los concesionarios de servicios públicos.

TÍTULO VII

Del contrato de obra

Concepto.

1087. Habrá contrato de obra, cuando una parte se comprometiére a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo

su dirección, mediante un precio que la otra se obligare a satisfacerle.

Podrá convenirse que el empresario ejecute solamente el trabajo, o que suministre también los materiales.

Se aplicarán a este contrato las reglas de los arts. 1076, 1086, 1114 y 1122, inc. 4º.

Normas aplicables.

1088. Son obligaciones del empresario de la obra:

Obligaciones del empresario.

- 1º Ejecutarla personalmente o por otros bajo su propia dirección, sin poder encomendarla a terceros cuando ella se hubiere contratado en vista de sus aptitudes.
- 2º Realizarla con arreglo a las condiciones y planos establecidos. En su defecto, se estará a las costumbres del lugar, teniendo en cuenta el precio para decidir sobre la clase de la obra.
- 3º Entregarla en el tiempo convenido, o en el razonablemente necesario, corriendo entre tanto por su cuenta los riesgos de la cosa.

Quando la destrucción se debiera a defectos de los materiales suministrados por el dueño, a inconvenientes del terreno, o si la manera de ejecutarla hubiera sido prescripta por aquél o su representante, podrá el empresario exigir el pago de sus trabajos, siempre que hubiere advertido a tiempo que existían tales defectos. A los fines de este inciso, el arquitecto director de la obra será considerado como representante del propietario, dentro de los límites del contrato.

- 4º Responder por la buena calidad del trabajo y de los materiales que provea, debiendo por este último concepto la misma garantía que el vendedor. Igual obligación le incumbirá cuando los hubiere suministrado el dueño de la obra o un tercero a pedido de éste, en los casos del inciso precedente.
- 5º Responder igualmente por la pérdida total o parcial, causada por vicio de ejecución o del suelo, o por mala calidad de los materiales, aunque éstos hubieren sido suministrados por el propietario o el terreno perteneciere a éste.

1089. El empresario no podrá variar el proyecto de la obra sin permiso del dueño dado por escrito, pero si el cum-

Reforma del proyecto

plimiento del contrato exigiera esas alteraciones y ellas no pudieron preverse al tiempo en que se concertó, deberá comunicarlo inmediatamente al propietario, expresando la modificación que importen sobre el precio fijado.

A falta de acuerdo, resolverá el juez sumariamente.

Recepción y pago de la obra.

1090. El precio de la obra deberá pagarse a la entrega de ella, si no hubiere plazo estipulado. Cuando fuere moroso el dueño, hecha la intimación se tendrá por recibida, a falta de motivo justo para rehusarla.

En los trabajos por piezas o medida, cualquiera de los contratantes podrá exigir la verificación, después de terminada cada parte o una apreciable con respecto al todo. El empresario entonces, tendrá derecho al pago proporcional a lo entregado. Satisfecho este importe, se presume el recibo de la porción correspondiente, pero no así cuando se abonare a cuenta.

Vicios de la obra.

1091. Recibida la obra, el empresario quedará libre por los vicios aparentes, y no podrá luego oponérsele la falta de conformidad del trabajo con lo estipulado.

Este principio no regirá cuando la diferencia no pudo ser advertida en el momento de la entrega, o los defectos eran ocultos. En este caso, tendrá el dueño sesenta días para denunciarlos a partir de su descubrimiento.

Obra a satisfacción.

1092. Convenida la obra a satisfacción del propietario o de otra persona, se entiende reservada la conformidad a juicio de peritos.

Ajuste alzado.

1093. En las obras a tanto la medida, o por suma determinada, no podrá el locador pretender aumento del precio, fundado en error de cálculo o encarecimiento de los materiales o de la mano de obra.

Extinción.

1094. Termina el contrato, una vez concluída la obra, y por rescisión en los casos siguientes:

- 1º Por fallecimiento del empresario, cuando la obra exija cualidades especiales. En este caso, quien la hubiere encomendado pagará a los herederos el precio en proporción al valor de lo que se ejecutó y de los materiales preparados, si éstos fueren útiles.
- 2º A pedido de cualquiera de las partes, cuando sobreviniere al locador imposibilidad para realizar o concluir la obra. Si aquélla proviniera de caso fortuito,

el pago se hará conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa.

- 3º Por voluntad del contratante no culpable, cuando el otro no suministró en tiempo los materiales, o dejó de cumplir las prestaciones a que se obligara.
- 4º Siempre que desapareciere el empresario o cayere en concurso, si el dueño de la obra así lo reclamare.

1095. Quienes hubieren trabajado o invertido materiales en obras ajustadas por precio determinado, sólo tendrán acción contra el dueño de ellas hasta el importe que éste adeudare al empresario.

Acción directa contra el dueño.

1096. Las reglas del presente título son aplicables a los arquitectos o ingenieros que proyecten o vigilen las obras, tanto en lo que concierne a su retribución, como a la responsabilidad por los defectos de ellas, su falta de competencia, o de cuidado en el desempeño de sus tareas.

Arquitectos e ingenieros.

TITULO VIII

Del corretaje

1097. El ofrecimiento de comisión a quien indique la oportunidad de celebrar un contrato, o sirva de intermediario para su trámite, será obligatorio:

Casos en que corresponde pagar comisión.

- 1º Desde que la convención se formalizare, ya por la noticia o la intervención del corredor.
- 2º Si las operaciones dependieren de condición suspensiva, a partir del cumplimiento de ésta.
- 3º En caso de convenios provisionales, luego que el acuerdo fuere celebrado.

Los gastos del corredor no serán reembolsables a falta de pacto expreso; pero si lo hubiere, se le pagarán aun cuando el contrato no llegare a celebrarse.

Gastos.

1098. Cuando se hubiere convenido una retribución excesiva para el corredor, podrá el juez reducirla equitativamente, a pedido del obligado.

Retribución excesiva.

Pérdida de la comisión
y gastos.

1099. El corredor perderá la comisión y los gastos, en su caso :

- 1º Si en violación de sus deberes o en contra de las reglas de la buena fe, procedió en interés del tercero contratante.
- 2º Siempre que en las condiciones del inciso anterior, aceptare del tercero una retribución o la promesa de ella.
- 3º Cuando se tratare del corretaje de un matrimonio.

Normas aplicables.

1100. Las reglas sobre el contrato de trabajo se aplicarán, en cuanto fueren pertinentes, a las relaciones previstas en este título.

TITULO IX

Del mandato

CAPITULO I

Disposiciones generales

Concepto.

1101. Habrá mandato cuando una persona aceptare de otra, poderes para representarla en el manejo de sus intereses o en la ejecución de ciertos actos.

Mandato tácito.

El mandato será tácito cuando resulte de hechos inequívocos del mandante, de su inacción o silencio, o cuando en conocimiento de que alguien gestiona sus negocios o invoca su representación, no lo impidiere pudiendo hacerlo.

Aceptación del mandato.

1102. La aceptación del mandato puede resultar del cumplimiento de los actos encomendados. Se la presumirá cuando aquél a quien se propone, reciba un poder para llenarlo, o los objetos o valores que se refieren a él, sin declinar el ofrecimiento.

Si el negocio encargado al mandatario fuere de los que por su oficio o su modo de vivir aceptare regularmente, deberá tomar aun cuando se excusare, las providencias conservatorias urgentes que exija el negocio.

1103. El mandante deberá tener capacidad para ejecutar por sí los actos que encomiende. Quien la tenga para disponer de sus bienes, podrá conferir poder con ese fin o para afectarlos con derechos reales. El que administre sus intereses podrá encargar a otro de ello y este mandato se ejercerá con las mismas limitaciones impuestas a la capacidad de aquél.

Capacidad del mandante.

1104. El mandato podrá ser válidamente conferido a un incapaz, pero el otorgante estará obligado por su ejecución, tanto respecto del mandatario, como de los terceros con los cuales éste hubiere contratado.

Idem del mandatario.

Al aceptante incapaz le será permitido oponer la nulidad del contrato cuando fuere demandado por su incumplimiento, o por rendición de cuentas, salvo las acciones del mandante por lo que el mandatario hubiere convertido en su provecho, o derivadas de actos ilícitos.

1105. Será nulo el mandato que tuviere por objeto uno o más negocios en interés exclusivo del mandatario, pero valdrá si éste fuere común a las dos partes, o respondiere al solo beneficio del mandante, o interesare a él y a terceros, o a éstos únicamente.

Necesidad de un interés ajeno.

1106. El mandato concebido en términos generales, sólo comprenderá los actos de administración, aunque el mandante declare no reservarse ningún poder, o que el mandatario pueda hacer cuanto juzgare conveniente, o existiere la cláusula de general y libre gestión.

Mandato general.

1107. Son necesarios poderes especiales, para los actos siguientes:

Casos de mandato especial.

- 1º Efectuar los pagos que no sean ordinarios de la administración.
- 2º Novar obligaciones existentes al tiempo del mandato.
- 3º Transigir, comprometer en árbitros, prorrogar jurisdicción, renunciar al derecho de apelar, o a prescripciones adquiridas.
- 4º Hacer renuncia gratuita, o remisión, o quita de deudas, a no ser en caso de concurso del deudor.
- 5º Efectuar cualquier acto a título oneroso o gratuito tendiente a constituir, transmitir, renunciar o extinguir derechos reales sobre inmuebles. El poder espe-

cial a que se refiere este inciso, no comprende la facultad de hipotecarlos o transferir derechos reales por deudas anteriores al mandato.

- 6º Hacer donaciones, excepto las recompensas de pequeñas sumas al personal de la administración. El poder expresará los bienes que se donaren y el nombre de los beneficiarios.
- 7º Revocar las donaciones ya hechas, debiendo designarse al donatario.
- 8º Dar o recibir dinero en préstamo, a no ser que la administración consista en realizar esos actos, o que ellos fueren consecuencia de la misma, o los exigiere la conservación de los bienes confiados al mandatario.
- 9º Dar en arrendamiento por más de seis años inmuebles que estuvieren a cargo del apoderado.
- 10º Constituir al mandante en depositario, a no ser que el poder consista en recibir depósitos o consignaciones; o que ellos fueren consecuencia de la administración.
- 11º Obligar al mandante a prestar cualquier servicio, como locador, o gratuitamente.
- 12º Formar sociedad.
- 13º Constituir al mandante en fiador.
- 14º Aceptar o repudiar herencias.
- 15º Reconocer o confesar obligaciones anteriores al mandato.
- 16º Ejecutar aquellos actos del derecho de familia, susceptibles de realizarse por terceros. La escritura pública necesaria en el caso de este inciso, deberá especificarlos y mencionar la persona respecto de la cual se confirió el mandato.

Alcance del mandato especial.

1108. El mandato especial para ciertos actos de una naturaleza determinada, debe limitarse a ellos, sin extenderse a otros análogos, aunque éstos pudieran considerarse consecuencia natural de los que el mandante hubiere encomendado.

Poder para contraer una obligación.

1109. El poder para contraer una obligación, comprende el de cumplirla, siempre que el mandante hubiere entregado al mandatario el dinero o la cosa que se debe dar en pago.

1110. Cuando en el mismo instrumento se hubieren nombrado dos o más mandatarios, se entenderá que la designación fué hecha para ser aceptada por uno sólo en el orden en que estén indicados, con las excepciones siguientes:

Pluralidad de mandatarios.

- 1º Cuando lo fueren para que intervengan todos o algunos de ellos conjuntamente.
- 2º Si lo hubieren sido para desempeñarlo todos o algunos de ellos separadamente, o el mandante dividiera la gestión entre los mismos o los facultare para dividirla entre sí.
- 3º Cuando han sido nombrados para actuar uno de ellos a falta del otro, u otros.

1111. Aceptado el mandato por uno de los nombrados, su renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, dará derecho a cada uno de los otros para aceptarlo según el orden de su designación.

1112. Quien diere a otro recomendación o consejo, no responderá por el daño resultante de haberlo seguido, salvo el caso de que la responsabilidad derivare de obligaciones contractuales, o de actos ilícitos.

Recomendación o consejo.

1113. Cuando el mandato tuviere por objeto realizar actos jurídicos, se aplicarán las disposiciones generales sobre la representación.

Reglas aplicables.

1114. Las disposiciones del presente título regirán para las procuraciones judiciales. Entre clientes y abogados o procuradores, se prohíbe convenir que la retribución por honorarios consista en una parte de los bienes que comprenda la gestión.

Procuradores y abogados. Pacto de cuota litis.

Los jueces fijarán el estipendio que corresponda al mandatario, si no hubiere convenio, y podrán moderar el acordado cuando fuere realmente excesivo.

CAPITULO II

Del efecto del mandato

1115. El mandatario deberá:

- 1º Ejecutar fielmente el contrato, de acuerdo con la naturaleza del negocio y dentro de los límites del poder.

Obligaciones del mandatario.

- ajustándose a las instrucciones recibidas. No se juzgará que se apartó de ellas, si lo hubiere cumplido en una forma más ventajosa que la indicada.
- 2º Abstenerse de ejecutar el mandato, cuando de ello resultare daño manifiesto para el poderdante.
 - 3º Tomar las medidas conservatorias exigidas por las circunstancias, cuando se hallare en imposibilidad de obrar con arreglo a las instrucciones, más no estará obligado a constituirse en agente oficioso.
 - 4º Responder por los daños y perjuicios derivados de la inexecución total o parcial, si le fuere imputable.
 - 5º Dar cuenta de sus operaciones, sin que la previa relevación de ello por el mandante le libere de los cargos que éste pueda justificar contra él.
 - 6º Restituir cuanto recibió del poderdante y no hubiere dispuesto por su orden, como también lo que obtuvo de tercero, aunque fuere sin derecho, las ganancias derivadas del negocio, los títulos, documentos y papeles que le hubieren sido confiados, salvo las cartas o instrucciones entregadas con motivo de la ejecución del contrato.
 - 7º A falta de autorización del mandante, abstenerse de otro beneficio o provecho en el desempeño del encargo, salvo el previsto al celebrarse el contrato.
 - 8º Posponer sus intereses en la ejecución del contrato, si mediare conflicto entre los suyos y los del mandante.

Responsabilidades.

a) Provecho indebido.

1116. Si el mandatario, violando lo dispuesto en el inc. 7º del art. anterior, hubiere recibido aun después de finalizar el encargo, un provecho secreto o ilícito del tercero con quien tratara por cuenta del principal, podrá ser compelido a entregarlo y perderá todo derecho a la retribución.

b) Aplicación a beneficio propio.

1117. El mandatario deberá intereses por las cantidades que aplicó a uso propio, desde el día en que lo hiciere, y por las que restare a deber, a partir de la fecha en que se hubiere constituido en mora de entregarlas. Será responsable asimismo, por los daños que el abuso de confianza causare al mandante.

c) Pérdida de valores en dinero.

1118. El dinero que el mandatario tuviere en su poder por cuenta del mandante, peca para aquél aunque se pier-

da por fuerza mayor o caso fortuito. Si estuviere contenido en cajas o sacos cerrados, no responderá por el accidente, a no ser que hubiere incurrido en negligencia al no depositarlo en los Bancos locales.

1119. Si hubiere solidaridad entre diversos mandatarios, ésta cesará cuando el daño naciere de actuar uno de ellos por separado, violando las reglas del contrato. Siempre que debieren intervenir conjuntamente, el que se negare a cooperar será único responsable de los daños y perjuicios derivados de la inejecución.

d) Caso de pluralidad de mandatarios.

1120. Cuando el mandatario, por convenio especial tomare a su cargo la solvencia de los deudores y los riesgos del cobro, se constituirá por ello en principal obligado, y serán de su cuenta el caso fortuito y la fuerza mayor.

e) Garantía de solvencia.

1121. Si el mandatario efectua los actos de su encargo en su propio nombre, no obligará al mandante respecto de terceros, aunque éstos tuvieran noticia del mandato. Podrá el mandante exigir una subrogación judicial en los derechos que nazcan de los actos ejecutados y ser obligado por los acreedores que ejercen los derechos del mandatario, según las reglas generales.

Gestión en nombre propio.

1122. Son deberes del mandante con respecto al mandatario:

Obligaciones del mandante.

- 1º Entregar las cantidades necesarias para la ejecución del mandato, si aquél las pidiera.
- 2º Reembolsar los anticipos, no obstante que el negocio no le hubiere resultado favorable. La restitución comprenderá los intereses desde que las sumas fueron adelantadas. Este deber subsistirá, aunque los gastos parecieren excesivos, con tal que no fueren desproporcionados, y siempre que el mandatario no hubiere incurrido en falta alguna.
- 3º Liberarle de las obligaciones que hubiere contraído con terceros en cumplimiento del mandato, y proveerle de las cosas o sumas necesarias para exonerarse de aquéllas.
- 4º Satisfacer la retribución correspondiente cuando el mandato fuere oneroso. Podrá convenirse que ella consista en una parte de los bienes que el mandatario administró u obtuvo mediante la gestión.

- 5º Indemnizarle, cuando sin falta imputable, hubiere sufrido pérdidas con motivo del mandato. Se considerarán tales, aquéllas que no hubiera experimentado el mandatario en caso de no aceptar el encargo.

Reintegro de adelantos o gastos.

1123. El mandatario no estará obligado a esperar la presentación de sus cuentas, o el total cumplimiento del mandato, para exigir los adelantos o gastos por él efectuados. Hasta el pago de éstos y de su retribución, podrá retener los bienes o valores del mandante que se hallaren en su poder.

Gastos que no se reintegran.

1124. No está obligado el mandante a pagar los gastos que realizó el mandatario.

- 1º Si los hizo contra su expresa prohibición, salvo si quisiera aprovechar las ventajas derivadas de ellos.
 2º Si fueron ocasionadas por culpa del propio mandatario.
 3º Cuando los efectuó conociendo su mal resultado, o en caso de ignorarlo el mandante que los ordenó.
 4º Si se convino que los gastos fueran de cuenta del mandatario, o que éste sólo pudiera exigir una cantidad determinada.

Efectos de la gestión en nombre ajeno.

1125. El mandatario no puede reclamar en nombre propio, la ejecución de los actos jurídicos realizados a nombre del mandante, ni ser personalmente demandado por el cumplimiento de ellos.

Terminación sin culpa del mandatario.

1126. Cuando concluyere o fuere revocado el mandato sin culpa del mandatario, deberá el mandante satisfacer la parte de la retribución proporcional al servicio cumplido, pero si el mandatario la tuviere recibida total o parcialmente, no estará obligado a restituir.

Pluralidad de mandantes.

1127. Cuando dos o más personas nombraron mandatario para un negocio común, quedarán obligados solidariamente por todos los efectos del contrato.

Substitución.

1128. El mandatario podrá substituir la ejecución del mandato. En este caso, sus relaciones con el substituto se regirán por las reglas que gobiernan el contrato principal. Responderá de la persona que hubiere elegido, cuando no se le acordó aquella facultad. Si la tuvo, pero sin designación de nombre, quedará obligado, siempre que hubiere escogido un sujeto de insolvencia o incapacidad notorias.

Substituído el poder en la persona que se le indicó, el mandatario estará exento de responsabilidad.

1129. Quien substituyó sus poderes, podrá revocar ese acto cuando lo juzgue conveniente, pero entre tanto, estará obligado a vigilar al substituto, a menos que el nombramiento proviniera del mandante.

1130. El mandante, en todos los casos, tendrá acción directa contra el substituto, pero sólo por las obligaciones que éste hubiere contraído por la substitución. Recíprocamente, el substituto la tendrá contra el mandante por el cumplimiento del contrato. El mandante conservará su acción directa contra el mandatario que substituyó contrariando sus órdenes, o que por su culpa fuere responsable de los daños e intereses.

1131. La substitución prohibida por el mandante, o en persona distinta de la designada por él, no le obligará respecto de terceros por los actos del substituto, cuando aquéllos debieron conocer las circunstancias expresadas.

1132. Satisfechos los gastos y la retribución del mandatario, el mandante no estará obligado a pagar remuneración o comisiones a los substitutos, a menos que la substitución hubiere sido indispensable.

1133. En el caso de ganancias provenientes de un mandato ilícito, se aplicará lo dispuesto en la última parte del art. 853.

Acciones del mandante y de substituto.

Substitución prohibida o en persona distinta.

Remuneración al substituto.

Ganancias procedentes de mandato ilícito.

CAPÍTULO III

De la cesación del mandato

1134. Cesa el mandato:

Causas.

- 1° Por cumplimiento del negocio para el que fuere constituido.
- 2° Por vencimiento del plazo determinado o indeterminado impuesto a su duración.
- 3° Por revocación del mandante.
- 4° Por renuncia del mandatario.
- 5° Por muerte de cualquiera de las partes.
- 6° Por incapacidad sobreviniente a uno de los contratantes. El poder otorgado por la mujer antes de su

matrimonio, subsistirá en cuanto a los actos que le es permitido realizar.

- 7º Cuando se tratare de un mandato substituído, por la cesación de los poderes del substituyente, aunque éste fuere un representante necesario.

Efecto de la cesación en cuanto al mandatario y terceros.

1135. Cesará el mandato respecto del mandatario y de los terceros con quienes éste hubiere contratado, cuando supieren o hubieren podido saber la cesación de aquél.

1136. Será facultativo para los terceros, obligar o no al mandante por los contratos que hubieren hecho con el apoderado, ignorando la cesación de éste; mas el primero no podrá prevalerse de tal circunstancia, para obligarles por lo realizado después de la extinción del mandato.

Deber de continuar la gestión.

1137. Cesado el mandato, el mandatario, sus herederos o representantes de los que fueren incapaces, deberán continuar por sí o por otros, los negocios comenzados que no admitan demora, hasta que el mandante disponga sobre ellos. Cuando así no lo hicieren, responderán por los perjuicios que de ello resultare.

Revocación.

1138. El mandante puede revocar a su arbitrio el mandato.

El nombramiento de un nuevo apoderado para el mismo negocio importará revocar el mandato anterior, a partir del día en que se notificare al primer representante. La revocación tendrá lugar, aunque el segundo poder no produzca efecto por la muerte o incapacidad del nuevo mandatario, o porque éste no lo acepte, o si el instrumento fuere nulo por falta o vicio de forma.

Revocado el mandato por cualquier causa, deberá devolverse el instrumento en que constare.

Intervención directa del mandante.

1139. Cuando el mandante interviniera directamente en el negocio encomendado, poniéndose en relación con los terceros, quedará revocado el mandato, si expresamente no manifestare su intención contraria.

Caso de nuevo mandatario.

1140. Si el mandato fuere general, el poder especial otorgado a otro deroga, en lo que atañe a esta particularidad, la procuración anterior; pero el especial no cesará por conferirse luego uno general a otra persona, salvo cuando comprendiere el negocio encargado en el precedente.

1141. Constituido el mandato por dos o más personas para un negocio común, cada una de ellas podrá revocarlo, sin dependencia de las otras.

Caso de pluralidad de mandantes.

1142. El mandato será irrevocable si resultare de un contrato bilateral, o fuere el medio para cumplir una obligación, o en el caso del socio administrador según el art. 1227. Podrá revocarse cuando el mandatario faltare a sus deberes, o diere causa a la resolución del contrato principal, según las reglas de este Código.

Irrevocabilidad.

1143. El mandatario podrá renunciar el mandato, dando aviso al mandante; pero si la renuncia fuere intempestiva y sin razón suficiente, responderá por los perjuicios que con ella le causare.

Renuncia intempestiva.

El mandatario, aunque renuncie con justa causa, deberá continuar las gestiones, si ello no le fuere imposible, hasta que el mandante pueda proveer a los negocios encomendados.

1144. La muerte del mandante no pondrá fin al mandato, cuando la gestión o encargo deba ser cumplido o continuado después de aquélla. El negocio deberá proseguirse cuando hubiese peligro en la demora.

Muerte del mandante.

1145. Aunque el negocio debiera continuar después del fallecimiento del mandante, y se hubiere convenido expresamente que el mandato no terminará por la muerte de ninguna de las partes, el contrato quedará resuelto si los herederos fueren menores o incapaces.

Incapacidad de los herederos.

1146. El mandato continuará, aun después de la muerte del mandante, cuando hubiere sido otorgado en el interés común de éste y del mandatario, o en el de un tercero.

Mandato en interés de ambas partes o de un tercero.

1147. Cualquier mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante, será nulo si no pudiere valer como disposición de última voluntad.

Mandato para después de la muerte.

TITULO X

De la gestión de los negocios ajenos

1148. Quien sin mandato ni deber alguno, intente gestionar asuntos ajenos que su dueño no esté en situación de dirigir, deberá, si fuere posible, darle aviso previo, abste-

Concepto.

niéndose de immiscuirse en ellos hasta que llegue la respuesta, a no ser que mediare urgencia. Si interviniere antes de esa contestación, o en contra de orden expresa o tácita, responderá de todo daño, aunque fuere causado por hecho fortuito, salvo si probare que se hubiera igualmente producido a falta de su ingerencia.

En todos los casos, la gestión habrá de realizarse de acuerdo con la voluntad conocida o presunta del dueño del negocio.

Casos de autorización
denegada.

1149. Aunque la respuesta del interesado fuere negativa, podrá emprenderse la gestión si un deber de aquél, vinculado al interés público, o uno de alimentos a su cargo, corrieran el riesgo de no poder ser ejecutados en tiempo útil. Se comprenden en esta disposición, los gastos de sepultura de las personas enumeradas en el art. 484 inc. 3º.

Requisitos.

1150. Para que haya gestión será necesario que el gestor se proponga realizar un negocio de otro, y obligarle eventualmente. El error sobre la persona no desnaturaliza el acto; pero no habrá gestión, si creyendo hacer negocios propios, efectuare los ajenos, ni cuando sólo hubiere tenido intención de practicar una liberalidad.

1151. Son obligaciones del gestor:

- 1º Continuar el negocio hasta su fin, atendiéndolo mientras el dueño no se hallare en situación de proveer por sí, o que puedan hacerlo sus herederos, si aquél falleciere durante la gestión.
- 2º Responder por el dolo o por la culpa, cuando el acto de gestión hubiera tenido en vista evitar un peligro inminente que afectase al interesado.
- 3º Indemnizar, aun por el caso fortuito, si efectuara operaciones arriesgadas, que el dueño no tenía costumbre de hacer; si hubiese obrado, más en su interés propio que en el de aquél; si no tenía las aptitudes necesarias para el negocio; o si por su intervención privó que se encargara de él, otra persona más idónea. Será admitida la prueba de descargo, a que se refiere el art. 1148, segunda parte, y la de que el dueño aprovechó de la gestión.
- 4º Responder personalmente a los terceros, por los contratos, que con motivo de la gestión hubiere realizado

con ellos, aunque los hiciera a nombre del interesado, si éste no los ratificase. Mientras tal requisito no se cumpla, aquéllos sólo podrán demandar al dueño por las acciones que corresponden al gestor.

1152. El gestor tendrá derecho:

- 1º A repetir del dueño todos los gastos que la gestión le hubiere ocasionado, con más los intereses desde el día en que los realizó. No lo tendrá si hubiere intervenido contra una prohibición expresa, o antes de recibir la respuesta a que se refiere el art. 1148, salvo que tuviere interés legítimo, o fuere uno de los casos previstos en el artículo citado y en el 1149.
- 2º A que el dueño le libere o le indemnice de las obligaciones personales contraídas; más no a que le abone estipendio, ni tampoco resarcimiento por los perjuicios que la gestión le hubiere ocasionado. Cuando el negocio fuere de dos o más dueños, la responsabilidad de éstos no será solidaria.

Derechos del gestor.

1153. Si el negocio no hubiere sido útilmente emprendido, o la utilidad fuere incierta al tiempo de iniciarse, el dueño, cuando no ratificó la gestión, sólo responderá por los gastos y deudas hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo, según las reglas sobre enriquecimiento sin causa.

Gestión anormal.

1154. Si el gestor no tuvo intención de cobrar los gastos, no estará obligado a su pago el beneficiado con ellos. Esa intención se presume en quienes por ley se deberían alimientos.

Gratuidad.

1155. El que creyó ocuparse de sus asuntos, o lo hizo en su propio interés, de los comunes a él y a otro, no tendrá acción contra el verdadero dueño, sin perjuicio de las reglas particulares de este Cóligo.

Interés propio del gestor.

El dueño podrá hacer valer contra quien trató como suyos los asuntos conociendo su falta de derecho, las acciones que por el presente título se acuerdan contra los gestores y las derivadas del enriquecimiento sin causa.

1156. La persona cuyos negocios hayan sido atendidos en los supuestos de los artículos anteriores, aunque fuere incapaz de contratar, queda sometida a las obligaciones que la ejecución del mandato impone al mandante, con tal que el negocio haya sido útilmente emprendido, aunque por cir-

Aplicación de las reglas del mandato.

circunstancias fortuitas no se obtenga la ventaja que debía resultar, o ésta cesare posteriormente.

Se aplica al gestor incapaz lo dispuesto respecto del mandatario en el mismo caso.

Ratificación.

1157. Cualesquiera sean las circunstancias en que una persona hubiere gestionado los negocios de otra, la ratificación de ésta equivaldrá a un mandato, quedando sometida para con el gestor, a todas las obligaciones del mandante.

La ratificación tendrá efecto retroactivo al día en que la gestión principió.

Gastos funerarios.

1158. Los gastos funerarios, efectuados con arreglo a la condición de la persona y usos del lugar, serán siempre satisfechos al que los pague sin ser gestor. Esta disposición sólo comprende los de sepultura y entierro, más no los hechos después en sufragio del alma, aunque el difunto los hubiera ordenado.

Si el causante no dejare bienes, serán cubiertos por el cónyuge supérstite, y no teniéndolos éste, por las personas que en vida hubieren estado legalmente obligadas a prestarle alimentos.

Alimentos.

1159. Los gastos realizados en favor de una persona, comprendidos en la obligación de alimentos, podrán reclamarse por quien los hizo en caso de urgencia, si no fuere posible dar aviso a quien los debía. Se podrán cobrar a éste o a los demás obligados legalmente a prestarlos.

Rendición de cuentas.

1160. La gestión no concluye hasta haberse rendido cuenta al dueño o a su representante. Toda clase de prueba será admitida respecto de su existencia, como también de los gastos causados en ella.

TÍTULO XI

Del depósito

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Concepto.

1161. Habrá depósito, cuando por contrato una persona se obligue a guardar y restituir la cosa mueble que hubiere recibido de otra con tal fin.

No valdrá como depósito la mera promesa de guardar la cosa, aunque hubiere sido aceptada; pero la negativa ulterior del prometiiente a recibirla, le hará responsable por los daños y perjuicios.

Valor de la promesa.

Las disposiciones de este título, sólo se refieren al depósito convencional.

1162. Quien se atribuya la tenencia de una cosa ajena, no se juzgará depositario de ella, y será considerado poseedor de mala fe, sin perjuicio de su responsabilidad por acto ilícito, cuando ésta procediere.

Tenedor de cosa ajena.

1163. La persona capaz que aceptare el depósito efectuado por quien no lo fuere, quedará sujeta a todas las obligaciones del depositario; más si el contrato fuere hecho por una persona capaz con otra que no lo sea, podrá ésta oponer la nulidad, y la primera demandar la restitución de la cosa, así como todo aquello con que se hubiere enriquecido el incapaz por dicho depósito.

Depósito realizado por un incapaz o a favor de él.

1164. El depósito realizado por el poseedor de la cosa, será válido entre las partes. Quien la hubiere recibido como propia del depositante, sabiendo que no le pertenecía, no podrá ejercer contra el propietario acción alguna por el contrato, ni retenerla hasta el pago de los desembolsos efectuados. Tendrá, sin embargo, la derivada de la gestión de negocios, si hubiere resultado utilidad.

Depósito efectuado por el poseedor.

1165. La validez del contrato no está sujeta a la observancia de formas particulares. Si no constare por escrito, y el valor de la cosa excediere del precio fijado en el art. 237, inc. 3°, el demandado como depositario será creído, tanto sobre el hecho del depósito, como sobre la identidad del objeto y la restitución del mismo.

Forma. Prueba.

1166. El error acerca de la identidad personal de las partes, de la substancia, calidad o cantidad de la cosa, no invalidará el contrato. Sin embargo, el depositario, si lo hubiere padecido respecto de la persona del depositante, o descubierto que la guarda le causa algún peligro, podrá restituir inmediatamente el depósito.

Errores que no invalidan el contrato.

1167. Las disposiciones de este título en cuanto conciernen a los efectos del contrato, se aplicarán en subsidio a los siguientes depósitos:

Aplicación extensiva.

- 1º Al constituido por disposiciones de última voluntad.
- 2º Al judicial o secuestro de bienes litigiosos, aunque se trate de inmuebles.
- 3º Al de las masas fallidas.
- 4º A los efectuados en cajas o Bancos públicos, sin perjuicio de las leyes especiales.
- 5º Al de las cosas inmuebles por su carácter representativo.

CAPITULO II

Del efecto del depósito

Obligaciones del depositario.

1168. Son obligaciones del depositario:

- 1º Guardar la cosa con igual diligencia que lo propio.
- 2º Responder por toda culpa cuando se ofreció para el cargo, o el depósito se hizo en su interés exclusivo, o fuere retribuido. Sólo se entenderá oneroso el contrato cuando se pactó retribución, o el depositario acostumbrarse a recibir depósitos.
- 3º Dar aviso al depositante de las medidas y gastos necesarios para la conservación de la cosa, y efectuar los urgentes por cuenta de aquél.
- 4º Restituir la misma cosa con sus accesorios y frutos, cuando le fuere pedida, al depositante, a sus causahabientes, o a quien se hubiera indicado en el contrato.
Fallecido quien debiera recibir el depósito, corresponderá restituirlo a los herederos, si todos estuvieren conformes en ello, y no estándolo, consignarlo a la orden de la sucesión.
- 5º Devolver la cosa en el lugar en que se hizo el depósito, o en el designado por el contrato. En este último caso serán por cuenta del depositante los gastos respectivos.
- 6º No servirse de la cosa sin el permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá por los daños y perjuicios.

Si el depósito fuere en caja o bulto cerrado, la obligación de guardar comprenderá la de no abrirlo; pero se presu-

mirá autorizado para ello cuando la llave se le hubiere confiado, o no fuere posible cumplir de otro modo las órdenes. Comprenderá asimismo, el deber de reservar el contenido del depósito, a menos que el secreto, por la naturaleza de la cosa depositada, lo expusiere a penas o multas.

1169. El depositario no podrá exigir que el depositante demuestre la propiedad de la cosa. Sin embargo, si llegare a descubrir que ella fué hurtada, y quien es su dueño, deberá notificar el depósito a éste, para que la reclame en un corto término. Si no lo hiciere, el depositario entregará el objeto al depositante.

Propiedad de la cosa.

1170. Aunque hubiere término señalado para la restitución, él será siempre a favor del depositante, y éste podrá exigir la cosa antes de su vencimiento.

Beneficiario del plazo.

1171. El depositario podrá retener la cosa hasta el pago de lo que se le deba en virtud del depósito. Este derecho no comprenderá la remuneración ofrecida, ni los perjuicios irrogados por el contrato, ni lo que se adeudare por causas ajenas al mismo.

Derecho de retención.

1172. El depositario no podrá compensar la obligación de restituir con ningún crédito, ni con otro depósito que él hubiese hecho al depositante, aunque fuere de mayor valor.

Prohibición de compensar.

1173. Los herederos del depositario, que hubieren vendido de buena fe la cosa mueble, cuyo depósito ignoraban, sólo están obligados a devolver el precio que hubieren recibido.

Venta de la cosa por los herederos.

1174. El depositante deberá reembolsar al depositario, todos los gastos de conservación del objeto, e indemnizarle de los perjuicios ocasionados por el depósito.

Reembolsos e indemnización.

1175. En caso de incendio, ruína, saqueo, naufragio, incursión de enemigos, u otros acontecimientos de fuerza mayor, el depósito podrá realizarse en personas adultas, aunque sean incapaces, y éstas responderán por él, sin que a ello obste la falta de autorización de sus representantes para recibirlo.

Depósito necesario.

1176. Los hoteleros responderán como depositarios por la guarda y conservación de los efectos que introdujeren los viajeros, aunque expresamente no se les hubieren entregado a ellos o a sus dependientes. Deberán indemnizar cualquier daño o pérdida que sufrieren aquéllos por culpa

Responsabilidad de los hoteleros.

de sus empleados, o de las personas que se alojan en la casa; pero no de los producidos por los deudos o visitantes de los viajeros. Esta responsabilidad se extiende a los vehículos y objetos de toda clase guardados con noticia del hotelero o de su personal, en las dependencias del establecimiento.

Excepciones.

1177. La responsabilidad del artículo anterior no se aplica a los dueños de restaurantes, cafés, casas de baños y otros establecimientos análogos, ni respecto de los transeúntes que entren en los hoteles o mesones sin alojarse en ellos. Tampoco regirá para los locatarios de piezas, que no fuesen viajeros, o que no estén como huéspedes; ni respecto de las personas, que viviendo o pudiendo vivir en los pueblos, tomen habitaciones en las posadas. En este último caso, el hotelero quedará sometido a las reglas del derecho común.

Cesación de la responsabilidad.

1178. El viajero que llevare consigo efectos de valor, o sumas importantes, si espontáneamente no las entregare al hotelero, deberá comunicarle su existencia, y aun mostrárselas, si éste o sus empleados lo exigieren. De no hacerlo, cesará la responsabilidad de aquél en caso de pérdida, como también, si requerida por el hotelero la entrega en custodia, el pasajero se negare a efectuarla.

Introducción de ladrones en las posadas.

1179. No se estimará fuerza mayor la introducción de ladrones en las posadas, si no lo hicieren con armas, o por escalamiento que no pudiese resistir el posadero.

Prueba.

1180. Para el depósito necesario, se admitirá toda clase de prueba. En lo demás, regirán las disposiciones del voluntario.

Recibo de cosas fungibles.

1181. El recibo de cosas fungibles con obligación de restituir objetos del mismo género, calidad o cantidad, será regido por las disposiciones relativas al contrato de mutuo.

Conclusión del depósito.

1182. Termina el depósito:

- 1º Al finalizar el plazo, cuando fué contratado por tiempo fijo. Si lo fué por tiempo indeterminado, siempre que cualquiera de las partes lo exigiere.
- 2º Por la pérdida de la cosa depositada.
- 3º Por la enajenación del objeto, realizada por el depositante.

El depósito voluntario no se resuelve, ni por la muerte del depositante, ni por el fallecimiento del depositario.

TITULO XII

Del préstamo

CAPITULO I

Del comodato

§ 1. — Disposiciones generales

1183. El contrato de préstamo será comodato, cuando una de las partes entregare a la otra gratuitamente, con facultad de usarla, alguna cosa no fungible, mueble o raíz. Podrá también entregarse una cosa fungible, siempre que fuere individualizada a los efectos de su restitución.

Concepto.

1184. La convención de prestar una cosa en uso, será obligatoria para el prometiente, y podrá exigirse la entrega efectiva; a menos que hubiera sobrevenido una modificación en la fortuna del comodatario, o que ocurriese el hecho previsto en el art. 1196, inc. 3º primera parte.

Convención de prestar una cosa en uso.

1185. La validez del comodato no está sujeta a forma alguna. Toda clase de prueba será admisible, aunque el valor de la cosa entregada excediere de la tasa legal.

Formas y pruebas.

1186. No podrán darse en comodato:

Capacidad para dar bienes en comodato.

- 1º Por los tutores y curadores, los bienes pertenecientes a los incapaces bajo su dependencia.
- 2º Por los administradores de bienes ajenos, públicos o particulares, los confiados a su gestión, salvo que mediaren poderes especiales.

1187. El comodante conserva la propiedad y posesión mediata de la cosa. El comodatario adquiere la posesión inmediata y el uso de ella; más no los frutos, ni los aumentos sobrevinientes al objeto prestado.

Derechos del comodante y comodatario.

§ 2. — Del efecto del comodato

Obligaciones del comodatario.

1188. Son obligaciones del comodatario:

- 1º Conservar la cosa prestada y responder de cualquier pérdida o deterioro que ella sufiere por su culpa.
- 2º Usarla con arreglo a lo convenido, y en su defecto, conforme al desitno de aquélla, según su naturaleza o las costumbres del país.
- 3º Restituirla, concluído el contrato o terminado el servicio para el cual la cosa fué prestada, tal como se hallare, con todos sus frutos y accesorios, aunque hubiere sido estimada en el contrato, presumiéndose que la recibió en buen estado.
- 4º Poner a disposición del juez toda especie de armas ofensivas y cualquier otra cosa, cuando tuviere conocimiento de que se trata de hacer con ellas un uso criminal.

Venta de la cosa por los herederos.

1189. Si los herederos del comodatario, ignorando el préstamo, enajenaron la cosa, tendrá derecho el comodante, si no pudiere o no quisiere reivindicar, o si el juicio petitorio fuere ineficaz, para exigirles el precio recibido, o que le cedan las acciones derivadas del traspaso.

Si tuvieron conocimiento de que la cosa era ajena, deberán su valor y el daño sufrido por el comodante.

Falta de restitución de la cosa.

1190. En caso de no restitución de la cosa por haber sido ella destruída o disipada, responderá el comodatario por los daños y perjuicios. Si la pérdida se debiere a su culpa o a la de sus agentes o dependientes, pagará al comodante el valor del objeto.

Cuando, satisfecho el precio de la cosa, ésta fuere recuperada por alguna de las partes, no podrá el comodatario repetirlo y obligar al comodante que la reciba; pero éste, en cambio, tendrá derecho para exigir la restitución del objeto, y obligar al comodatario a tomar lo abonado.

Devolución al incapaz.

1191. Será válida la restitución de la cosa efectuada al incapaz que la prestó, y usaba de ella con permiso de su representante.

1192. El comodatario no podrá negarse a restituir la cosa, so pretexto de que ella no pertenezca al comodante, a no ser que hubiere sido perdida o robada a su dueño.

Deber de restituir al comodante.

1193. El comodatario que a sabiendas, hubiere recibido una cosa robada o perdida y no lo denunció al dueño, dándole un plazo razonable para reclamarla, responderá a éste de los perjuicios irrogados por la restitución al comodante. El propietario, por su parte, tampoco podrá exigir que le sea devuelta sin el consentimiento del comodante, o sin decreto del juez.

Comodato de cosa robada o perdida.

1194. El comodatario no puede repetir los gastos realizados para servirse de la cosa, ni retenerla por lo que el comodante le deba, aunque sea por razón de expensas.

Gastos no reembolsables. Retención no permitida.

1195. Son obligaciones del comodante:

Obligaciones del comodante.

- 1º Permitir al comodatario el uso de la cosa durante el tiempo convenido, o hasta el cumplimiento del servicio que se tuvo en mira. Si el préstamo fué sólo en consideración del comodatario, cesará respecto de sus herederos.
- 2º Pagar las expensas extraordinarias para la conservación de la cosa, siempre que el comodatario le notifique previamente, salvo que hubiere peligro en la demora.
- 3º Responder por los daños que causare, si conociendo los vicios o defectos ocultos de la cosa prestada, no previno de ellos al comodatario.

1196. Son derechos del comodante:

Derechos del comodante.

- 1º Exigir el precio anterior de la cosa, abandonándola al comodatario, si por causa de deterioro no pudiese ser empleada para su destino.
- 2º Reclamar la restitución inmediata del objeto y los perjuicios, cuando no lo usare de acuerdo con el contrato, o en su defecto, conforme al uso ordinario.
- 3º Tendrá el mismo derecho si le sobreviniere una imprevista y urgente necesidad de la misma cosa, judicialmente declarada, antes del vencimiento del término; y también cuando el préstamo sea precario, incunbiendo la prueba de que no lo es, a quien recibió el objeto.

CAPITULO II

Del mutuo

Concepto.

1197. El contrato de préstamo será mutuo cuando una de las partes entregare en propiedad a la otra, dinero o cosas fungibles, con cargo para ésta, de restituir igual número de la misma naturaleza y calidad.

Promesa de mutuo.

1198. La mera promesa de mutuo será obligatoria para ambos contratantes, cuando fuere a título oneroso, y sólo para el prometiende en caso de serlo a título gratuito.

El autor de la oferta podrá revocarla y negarse a la entrega, si quien debiera recibir la cosa experimentare una disminución de responsabilidad que pusiere en riesgo su reintegro. Si tal situación ya existía al convenirse la promesa, tendrá el mismo derecho, siempre que entonces lo hubiere ignorado.

Forma. Presunción de gratuidad.

1199. El mutuo puede convenirse verbalmente. Se presume gratuito, pero las partes podrán estipular intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 155.

Si el mutuario los hubiere pagado sin estar convenidos, podrá abstenerse de satisfacerlos en adelante.

Se responderá en todo caso, por los intereses moratorios y los daños y perjuicios provenientes del retardo.

Normas que rigen la obligación de restitución.

1200. La obligación de restituir a cargo del mutante, se regirá por las siguientes normas:

1° Si fuere de sumas de dinero, por las disposiciones del capítulo III, título I del presente libro.

2° Si consistiere en cosas que no sean dinero, o no consumibles, prestadas como fungibles, por las disposiciones del Capítulo II del mismo título.

Cuando el mutuario no pudiere cumplir su obligación, deberá el precio de la cantidad o cosas recibidas, según regía en el lugar y tiempo en que debieron restituirse.

1201. En el préstamo gratuito, el mutuante será responsable de los daños causados al mutuario por los vicios ocultos de la cosa prestada, si conociéndolos, no se los previno; pero si fuere oneroso, responderá, aunque hubiere buena fe. Vicios ocultos.

TITULO XIII

De la sociedad

CAPITULO I

Disposiciones generales

1202. Habrá sociedad, cuando dos o más personas se obligaren, cada una con prestaciones de dar o de hacer, a dividir entre ellas cualquier utilidad, apreciable en dinero, derivada del empleo de aquéllas. Concepto.

Es lícita la sociedad de todos los bienes presentes y también de todas las ganancias, cuando éstas provinieran de negocios ciertos y determinados.

1203. La sociedad será nula:

- 1º Cuando comprenda la universalidad de los bienes presentes y futuros, o de las ganancias a obtenerse. Nulidad.
- 2º Cuando uno de los contratantes concurriera con su sólo crédito o influencia, aunque se comprometiere a participar en las pérdidas.
- 3º En el caso de atribuirse a uno de los socios la integridad de los beneficios, o de liberársele de toda contribución en las pérdidas, o en el aporte del capital.
- 4º Siempre que alguno de los socios no participare de los beneficios.
- 5º Cuando cualquiera de los socios no pudiese renunciar o ser excluido, existiendo justa causa para ello.

- 6º Si en cualquier momento, alguno de los socios pudiere retirar lo que tuviere en la sociedad.
- 7º Cuando al socio o socios capitalistas se les prometiera restituir su prestación con un premio designado, o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias.
- 8º En el caso de asegurar al socio capitalista su aporte o las utilidades a obtenerse; o de concederle un derecho alternativo a cierta cantidad anual, o a una cuota de las ganancias eventuales.
- 9º Si al socio industrial se le acordare una retribución determinada, haya o no utilidades; o el derecho alternativo a cierta suma anual, o a una cuota de las ganancias eventuales.
- 10º Cuando se convenga que todos los beneficios, y aun los aportes a la sociedad, pertenezcan al socio o socios sobrevivientes.

Efecto de ciertas sociedades nulas.

1204. La sociedad nula por algunas de las causales contenidas en los incs. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º del artículo anterior, producirá no obstante, los efectos de la donación, mutuo, locación de servicios, o de cualquier otro contrato, si como tal pudiera valer.

Estipulaciones válidas.

1205. Serán válidas las estipulaciones siguientes:

- 1º Que ninguno de los socios perciba menos que los otros, aunque su aporte hubiere sido igual o mayor.
- 2º Que, fallecido uno de los contratantes, sus herederos reciban como utilidad la fijada por el último balance, en proporción al tiempo transcurrido desde que se aprobó, hasta la fecha del deceso; o que los socios sobrevivientes puedan quedar con todo el activo social, con la base del mismo balance e inventario, siempre que pagaren la cantidad que por él corresponda al premuerto.
- 3º Que, consistiendo el aporte de algún socio en el uso o goce de una cosa, la pérdida del capital quede a cargo sólo de los otros, sin perjuicio de lo dispuesto por los arts. 1215 y 1251.
- 4º Que alguno o varios de los socios capitalistas, en caso de pérdida del patrimonio social, no participe de

las deudas más allá de su aporte. En tal supuesto, para que la sociedad sea válida, uno o más de los contratantes deberán ser responsables ilimitadamente.

- 5º Que cualquiera de los socios no participe de las pérdidas en igual medida que en los beneficios, salvo que mediare simulación para violar lo dispuesto por el art. 1203.

1206. La nulidad del contrato podrá ser alegada por los socios entre ellos para eximirse de las obligaciones que él les imponga; más no frente a terceros de buena fe, a quienes les será permitido invocarla respecto de la sociedad y los socios. En caso de mala fe, estos últimos podrán aducir contra ellos la nulidad.

Quienes pueden alegar la nulidad.

1207. Cuando se declare la disolución de una sociedad ilícita, de las previstas en el art. 155, los socios podrán retirar sus aportes; pero no las utilidades, respecto de las cuales se aplicará lo dispuesto en el art. 853, última parte.

Sociedades ilícitas.
Aportes y utilidades.

Los componentes responderán solidariamente por todo daño que resultare de los actos ilícitos practicados en común.

1208. Serán sociedades civiles las que tuvieren por objeto:

Sociedades civiles.

- 1º Constituir derechos reales sobre inmuebles, y darlos o tomarlos en locación.
- 2º La explotación agrícola, ganadera o forestal, ya en fundos propios o arrendados a ese efecto, aunque los animales hubieren sido adquiridos para ese fin.
- 3º El ejercicio de profesiones liberales, o el trabajo de artesanos.
- 4º Los institutos educativos.
- 5º La explotación minera, o de aguas comunes, minerales o termales.
- 6º Todo ramo no incluído entre los actos de comercio.

La transformación de los productos de una sociedad civil no desnaturaliza su carácter, aún cuando para ello utilice o adquiera elementos que obtenga directamente.

Sociedades comercia-
les.

1209. Las sociedades anónimas y las en comandita por acciones, serán siempre comerciales, aunque su objeto fuere civil.

CAPITULO II

De la forma y prueba de la existencia de la sociedad

Forma escrita.

1210. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 817, inc. 3°, el contrato de sociedad se hará por escrito. A los efectos del art. 237, inc. 3°, se tomará como base el capital social.

Derechos de los socios
en caso de nulidad.

1211. En todos los casos de nulidad, salvo el previsto por el art. 1207, los socios podrán alegar entre ellos la existencia del contrato para pedir se restituyan los aportes, liquiden las operaciones comunes, se dividan las ganancias y adquisiciones e indemnicen las pérdidas.

Derechos de la socie-
dad y de los terce-
ros.

1212. En el supuesto del artículo anterior, la sociedad tendrá derecho para demandar a terceros por las obligaciones contraídas a favor de ella, sin que a éstos les sea permitido alegar la inexistencia de la misma. Los terceros, a su vez, podrán invocarla contra los socios, sin que éstos puedan oponer su nulidad.

Prueba de la existen-
cia de la sociedad.

1213. A falta de contrato, la existencia de la sociedad podrá justificarse por los hechos de los cuales pueda inferirse, aunque se tratase de un valor excedente a la tasa de la ley. Tendrán ese alcance:

- 1º Las cartas firmadas por los socios, escritas en el interés común de ellos.
- 2º Las circulares publicadas en nombre de la sociedad.
- 3º Cualesquiera documentos, en que sus firmantes hubieren tomado calidad de socios.
- 4º La sentencia pronunciada entre los socios en carácter de tales.

El fallo que declare la existencia de la sociedad en favor de terceros, no facultará a los socios para demandarse entre ellos.

Inscripción del con-
trato.

1214. Deben inscribirse en el Registro las sociedades, a que se refiere el art. 817, incs. 3° y 9°, como también las en comandita simple, cuyo capital comanditario fuera mayor

de mil pesos e inferior a dos mil por cada aporte, siempre que constaren en instrumento privado.

La falta de esta inscripción no anulará el contrato, pero la sociedad no obtendrá el dominio, ni los derechos reales sobre los inmuebles aportados por los socios. No perjudicará a terceros cualquier estipulación que se aparte del régimen de este Código, o restrinja los derechos de aquéllos contra la sociedad o los socios, o los poderes conferidos al administrador.

CAPITULO III

De los socios

1215. No se tendrá como socio, a quien sólo hubiera prestado su nombre, aunque los verdaderos le acordaren algún interés; mas lo será con respecto a extraños, sin perjuicio de su derecho al resarcimiento por lo que hubiere pagado a los acreedores de la sociedad.

Socio ostensible.

El socio no ostensible revestirá ese carácter con relación a los consocios; pero no frente a terceros, aunque éstos hubieren conocido el contrato social.

Socio oculto.

1216. No serán socios los herederos o legatarios de derechos sociales, si los demás miembros no consintieren en la substitución; o si, convenida ésta con el socio que falleció, no hubiere sido aceptada por el heredero.

Personas que no son socios.

Tampoco tendrán calidad de socios los dependientes o empleados, a quienes se diere participación sobre las utilidades en pago de sus servicios.

1217. Las personas, a quienes los socios cedieran en parte o en todo sus derechos, a pesar de prohibirlo el contrato, no se reputarán tales, si los demás no consintieren en la substitución.

Situación del cesionario.

1218. Los socios no podrán transferir sus derechos, salvo autorización contenida en el acto constitutivo. En este caso, deberá el cedente comunicar a los demás socios el valor y todas las condiciones que se le hubieren ofrecido para que éstos ejerzan, si lo desearan, un derecho de preferencia.

Prohibición de ceder.

1219. Si alguno de los socios hubiere transferido sus derechos, a pesar de prohibirlo el contrato, conservará su ca-

Situación del cedente.

rácter; pero la cesión producirá sus efectos entre el cesionario y el cedente, considerándose a éste mandatario del primero.

Cesionario admitido como socio.

1220. El cesionario admitido como socio, quedará obligado respecto de la sociedad, de los miembros y de los acreedores sociales como lo estaba el cedente, cualesquiera que hayan sido las cláusulas de la transferencia.

CAPITULO IV

Administración de la sociedad

Facultad administrativa del socio.

1221. Cualquiera de los componentes de la sociedad, que no sea comanditario o puramente industrial, estará facultado para administrarla, salvo designación especial a ese efecto, que podrá también recaer en personas extrañas.

Si la forma y modo de administración no se hubiere establecido, lo que cualquiera de los socios hiciere obligará a la sociedad como si fuera realizado por mandatario suyo; pero cada cual tendrá derecho para oponerse a los actos de los restantes, mientras no hubieren producido efecto.

Contribución a los gastos necesarios.

Todo socio puede exigir que los demás contribuyan a los gastos necesarios para la conservación de las cosas comunes.

Poderes del administrador.

1222. A falta de cláusula expresa, la amplitud de los poderes del administrador se determina por el objeto y fin de la sociedad.

La administración de la sociedad se reputa un mandato general, que comprende los negocios ordinarios de ella, con todas sus consecuencias. Son negocios ordinarios, aquellos que no exigen poderes especiales; los demás serán considerados extraordinarios.

Restricciones al mandato general.

1223. El mandato general no autoriza para hacer innovaciones en los inmuebles sociales, ni para modificar el objeto de la sociedad, sea cual fuere el beneficio que pudiese resultar de esos cambios.

Administración ejercida por dos o más socios.

1224. Encargados dos o más socios de la administración, sin determinar facultades, o sin haberse expresado que sólo obrarán conjuntamente, cada uno podrá actuar por separado;

pero cualquiera de ellos tendrá el derecho de oponerse, con arreglo al segundo párrafo del art. 1221.

1225. Aun cuando se hubiere establecido que uno de los administradores no obrará sin el otro, el principio no regirá en caso de peligro inminente de un daño grave e irreparable.

Peligro inminente.

1226. Todo socio deberá representar a la compañía, cuando los intereses de ella se opusieren a los del administrador, o si éste descuidase la defensa de los negocios comunes en las demandas deducidas contra alguno de los componentes o terceros. En tal caso, podrá defender a la sociedad e interponer los recursos que correspondieran, como si se tratase de sus negocios propios.

Representación obligatoria.

1227. El poder para administrar puede ser otorgado en el contrato o posteriormente. En el primer supuesto, sólo será revocable por causa legítima, a solicitud de cualquier consocio. Se juzgará tal si el administrador, por motivo grave, dejare de merecer la confianza de los componentes, o si le sobreviniere algún impedimento para el desempeño de su cargo. La solicitud de separación no obstará a que el administrador continúe sus funciones durante el pleito, a no ser que el juez, habiendo peligro en la demora, la decretare, nombrándole un reemplazante provisional, socio o no.

Administrador contractual.

1228. Respecto de negocios extraordinarios, el administrador, o cualquiera de los socios, cuando la sociedad fuere dirigida por todos, deberá actuar con poderes especiales, acordados por simple mayoría. En el caso de negocios prohibidos en el contrato, será menester el voto unánime de los socios.

Negocios extraordinarios y prohibidos.

1229. Los administradores de la sociedad, y los socios que la representen en cualquier acto administrativo, tendrán las mismas obligaciones y derechos que el mandatario respecto del mandante, no habiendo en ese título disposición en contrario.

Obligaciones de los administradores.

1230. Respecto de terceros, la escritura pública y la inscripción en el Registro serán necesarias para todo ulterior nombramiento o cambio de administrador, cuando se tratare de sociedades sujetas a tales requisitos.

Necesidad de la escritura pública y de la inscripción.

1231. El poder para administrar será revocable, aun cuando resultare del contrato, cuando el nombrado no fuere so-

Revocabilidad del poder.

cio. En este caso, la revocación no da derecho para disolver la sociedad.

El administrador nombrado por acto posterior al contrato, podrá renunciar sin responsabilidad alguna, tenga o no justa causa para hacerlo.

Derecho de los socios
para examinar los ne-
gocios.

1232. La norma legal o convencional que prohíba a los socios inmiscuirse en la administración, no impedirá a cualquiera de ellos examinar los negocios, pudiendo a dicho fin exigir que se presenten los libros, documentos y papeles, y formular las reclamaciones que juzgare convenientes.

Giro de la sociedad.
Reglas.

1233. Los negocios de la sociedad podrán girar bajo el nombre de uno o más de los componentes, con o sin el aditamento "y compañía", de acuerdo con las reglas que siguen:

- 1º No podrá contener nombre de persona que no sea socio; pero a la sociedad establecida fuera del territorio de la Nación, le será permitido el empleo del usado en el extranjero, aunque no corresponda al de ninguno de los miembros.
- 2º No podrá figurar el nombre del socio puramente industrial o comanditario.
- 3º Los que hubieren sucedido en los negocios de una sociedad y los herederos de aquéllos, podrán continuar en el uso del nombre, con tal que mediare el consentimiento de las personas incluídas en él, si vivieren.

CAPITULO V

Del efecto de la sociedad

§ 1. — Obligaciones de los socios

Aporte.

1234. Cada socio debe a la sociedad lo que prometió aportar y será responsable por los vicios redhibitorios y por la evicción en su caso. Si debiere dinero, sin necesidad de requerimiento judicial, abonará los intereses desde el día en que debió entregarlo.

Derecho de la sociedad
sobre los aportes.

1235. Según la naturaleza de los aportes, los derechos de la sociedad se registrarán por las normas siguientes:

- 1º En cuanto a los bienes entregados en dominio, el socio los perderá, sin derecho a reclamarlos al producirse la disolución, aunque se encontraren en el mismo estado.
- 2º Respecto de las cosas fungibles, o que se deterioren por el uso, o que se destinen a ser vendidas por cuenta de la sociedad, o de las estimadas en el acto constitutivo o en documento pertinente, la sociedad obtendrá el dominio de ellas.
- 3º Si el aporte fuere sólo del uso o goce de los bienes, el socio titular de éstos conservará el dominio, siendo de su cuenta la pérdida total o parcial cuando no fuere imputable a la sociedad o a uno de los miembros. Disuelto el contrato, podrá exigir la restitución en el estado en que se hallaren.
Se entenderá, salvo estipulación contraria, que el uso o goce constituye un derecho personal, subsidiariamente regido por las reglas de la locación.
- 4º Con respecto a los créditos, la sociedad se juzgará cesionaria de ellos después de su entrega, siempre que la transferencia resulte del acto constitutivo. El valor del aporte será el nominal con los premios vencidos hasta el día del traspaso, cuando no se hubiere estipulado en forma expresa que la cobranza fuere por cuenta del cedente. En este supuesto sólo se computará lo percibido con más los premios.
- 5º Si la prestación consistiere en trabajo o industria, el derecho de la sociedad contra el socio que la prometió, se regirá por los principios sobre obligaciones de hacer.

La prestación de un capital se juzgará limitada al uso o goce del mismo, cuando la sociedad se compusiere de un socio capitalista y de otro meramente industrial.

1236. Ninguno de los miembros podrá ser obligado a nueva prestación, si no la hubiera prometido en el contrato, aunque la mayoría lo reclamare para dar más impulso a los negocios; pero si no pudiera lograrse el fin de la sociedad sin aquel aumento, el disidente podrá retirarse, y deberá hacerlo, cuando sus consocios lo exigieran.

Nuevas prestaciones.

Cobro a deudores comunes a la sociedad y al administrador.

1237. Cuando el socio que administre cobrare una cantidad exigible, que le fuere debida personalmente, de quien a su vez, era deudor de la sociedad por otra suma también exigible, deberá lo cobrado imputarse a las dos obligaciones, en proporción de su respectivo monto, aunque hubiere dado recibido por cuenta del crédito particular; pero si lo otorgó por el social, todo se imputará a éste.

Cobro a deudor social que se hiciere insolvente.

1238. El socio que hubiere cobrado a un deudor social, que luego cayere en insolvencia, deberá traer a la masa todo lo percibido, aunque se tratase de su cuota.

Incumplimiento del socio industrial.

1239. Cuando el socio industrial no prestara el servicio prometido, por causa no imputable, el contrato podrá disolverse. Interrumpido sin culpa suya, será lícito imponer una disminución proporcional en las ganancias; pero si fuere responsable del incumplimiento, los consocios tendrán derecho para excluirle de la sociedad, o para disolverla.

El socio industrial deberá a la compañía, cuanto ganare con la actividad que se obligó a introducir en ella.

Sumas extraídas de la caja.

1240. Todo socio abonará intereses a la sociedad, sin que sea necesaria interpelación judicial, por las sumas que hubiere extraído de la caja, desde el día en que las tomó, sin perjuicio de responder por los daños.

§ 2. — Derechos de los socios

Facultades de los socios.

1241. Podrán los socios:

1º Exigir de la sociedad el reembolso de lo anticipado con conocimiento de ella, para obligaciones sociales, así como el reintegro de las pérdidas por él sufridas.

Los socios responderán a prorrata de su interés social, y la parte de los insolventes se dividirá de igual manera.

2º Invocar el beneficio de competencia por sus deudas con la sociedad.

3º Exigir que los demás permanezcan en la sociedad, mientras no tengan justa causa de separación. Se entenderá que la hay cuando el administrador renunciare o fuere removido, o si existiendo derecho pa-

ra la exclusión de algún socio, no se acordare hacer uso del mismo.

- 4º Renunciar en cualquier tiempo cuando la sociedad fuere por plazo indeterminado, a no ser que la separación sea de mala fe o intempestiva.

1242. La renuncia será de mala fe, cuando se hiciere con la intención de obtener para sí algún provecho o ventaja que hubiere de pertenecer a la sociedad. Será intempestiva, la producida sin estar consumado el negocio objeto de aquélla.

Renuncia intempestiva y de mala fe: efecto.

1243. La renuncia de mala fe, es nula respecto de los socios. Lo ganado en la operación que se tuvo en mira al separarse, pertenece a la sociedad, pero el renunciante soportará las pérdidas. Cuando fuere intempestiva, deberá satisfacer los perjuicios causados a la compañía.

1244. Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sin justa causa. Se tendrá por tal:

Causas de exclusión.

- 1º La cesión de derechos a terceros, no obstante la prohibición del contrato.
- 2º El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones para con la sociedad, tenga o no culpa.
- 3º La incapacidad sobreviniente. La producida por falencia no causará exclusión, cuando se tratare del socio industrial.
- 4º Cuando perdiere la confianza de los demás, por insolvencia, fuga, perpetración de algún crimen, mala conducta, provocación de discordia entre los socios, u otros hechos análogos.

1245. La exclusión o la renuncia de cualquiera de los socios, tendrá los efectos siguientes:

Efecto de la exclusión o renuncia.

- 1º En cuanto a los negocios concluidos, el saliente sólo participará de las ganancias realizadas hasta el día de la separación.
- 2º La sociedad continuará con el excluido o renunciante, hasta que terminen las operaciones pendientes.
- 3º Respecto de las deudas sociales, los acreedores conservarán, hasta esa fecha, sus derechos contra el so-

cio, del mismo modo que contra los que continuaren en la sociedad, aunque éstos tomaran a su cargo el pago total; salvo si por escrito hubieren exonerado al saliente.

- 4° Las deudas sociales ulteriores sólo podrán exigirse contra los socios que continuaren, y no respecto del excluido o renunciante, a menos que hubieren sido contratadas ignorando dichas circunstancias.
- 5° La separación sólo perjudicará a los acreedores y a los terceros en general, cuando fuere publicada, o si de otro modo la conocieron.

§ 3. — Derechos y obligaciones de la sociedad respecto de terceros

Terceros respecto de la sociedad.

1246. Júzganse terceros en este Código, respecto de la sociedad, los extraños a la misma; como también los socios en sus relaciones entre ellos, y en todas las que no deriven del contrato, o de su carácter de administradores de la entidad.

Deudas sociales.

1247. Serán deudas sociales aquellas que los administradores hubieren contraído en esa calidad, indicando de cualquier modo dicho título, u obligándose por cuenta de la sociedad, o en representación de la misma.

En caso de duda, se presumirá que los administradores se obligaron en su nombre particular, y cuando la hubiere respecto de si lo hicieron o no dentro de los límites de su mandato, se entenderá lo primero.

Obligaciones contraídas con extralimitación del mandato.

1248. Si las deudas fueren contraídas en nombre de la sociedad, con extralimitación del mandato, y ella no las ratificare, la obligación será sólo en la medida del beneficio, incumbiendo a los acreedores la prueba de éste.

Acreedores de buena fe

1249. Lo dispuesto en el artículo precedente no perjudicará a los acreedores de buena fe; ni tampoco cuando hubiere cesado el mandato, o si alguno de los socios estuviere privado de ejercerlo, siempre que tales circunstancias resultaren de estipulaciones que no pudieron ser conocidas por aquéllos. Sólo en este caso se les presumirá de buena fe, a no ser que se probare que tuvieron noticia de ellas.

Situación de los deudores sociales respecto de los socios.

1250. Los deudores sociales no lo son respecto de los socios, y no podrán compensar lo que debieren a la sociedad

con sus créditos contra alguno de aquéllos, aunque se tratase del administrador.

1251. Los acreedores sociales lo son al mismo tiempo de los socios. Si intentaran cobrar sobre bienes comunes, la sociedad podrá compensar lo que debiere con lo que ellos adeudaren a los socios, administradores o no. Si persiguieran bienes particulares, el socio interesado tendrá derecho para compensar la deuda social con lo que ellos le debieren o con lo que adeudaren a la sociedad.

Idem de los acreedores sociales.

Esta disposición no rige para los comanditarios. La responsabilidad de los mismos, queda limitada al respectivo aporte, salvo el caso de que hubieren intervenido en la representación social, o aceptado que su nombre apareciera en la firma. La misma regla se aplica a los socios puramente industriales.

1252. Concursada la sociedad, sus acreedores serán pagados con preferencia a los particulares de los socios. En el concurso de éstos, no habrá privilegio alguno.

Concurso de la sociedad.

1253. Ninguno de los socios tendrá derecho para cobrar los créditos de la compañía, o demandar a los deudores de ella, salvo que fuere su administrador, la representare en los casos previstos por este título, o hubiere sido especialmente autorizado.

Cobro de créditos sociales.

1254. Los socios, en cuanto a sus obligaciones respecto de terceros, deberán considerarse como extraños. La calidad de socios no podrán invocarse por ellos, ni serles opuesta.

Cuando los socios se consideran terceros.

1255. Las obligaciones particulares de uno de los socios, no confieren a los terceros contratantes acción directa contra los demás, aunque éstos se hubieren beneficiado con ellas.

Acreedores particulares de los socios.

1256. Los socios no están obligados solidariamente por las deudas sociales, salvo convención expresa. Las contratadas por todos conjuntamente, les harán responsables por partes iguales, no obstante que sus cuotas fueren distintas, y aunque en el contrato social se hubiere convenido el pago en proporciones diferentes, sépalo o no el acreedor.

Responsabilidad de los socios por las deudas sociales.

1257. Cuando las deudas sociales fueren cobradas sobre bienes de los socios, su importe se dividirá entre ellos por cuotas iguales, sin que los acreedores tengan derecho a que se les pague de otra manera.

Deudas sociales cobradas a un socio.

Socio insolvente.

Si alguno dejare de satisfacer por insolvencia la parte que le correspondiere, se observará lo dispuesto en el art. 1241, inc. 1º.

Deudas sociales pagadas por los socios: división.

1258. Siempre que los socios hubieren satisfecho total o parcialmente, las deudas comunes, la división entre ellos se hará en proporción a la respectiva parte en la sociedad, o en su defecto, a su cuota en las ganancias y pérdidas. Lo que alguno hubiere pagado de más, será reembolsado por los otros.

Deudas de la sociedad para con sus miembros.

1259. Lo dispuesto en los artículos precedentes sobre el pago de las deudas comunes por los socios, sólo tendrá lugar respecto de los créditos a favor de terceros.

Las deudas de la sociedad para con sus miembros, no derivadas de la calidad de tales, serán satisfechas por todos en proporción a sus aportes, cargando también el acreedor con la cuota que le correspondiere.

Derechos de los acreedores de los socios.

1260. Los acreedores de los socios sólo tendrán derecho para cobrarse de los bienes aportados, cuando la sociedad no hubiere adquirido sobre ellos el dominio u otro derecho real. En este caso, podrán hacerlo con las ganancias que los balances demostraren en favor del deudor, siempre que él tuviese derecho para retirarlas.

Les será también permitido el cobro de la cuota eventual que corresponda al socio en la partición. El embargo preventivo de ella no le facultará para intervenir en los negocios.

Deudas de los socios entre ellos.

1261. La disposición del artículo precedente, se aplicará también a las deudas de los socios entre ellos, y respecto de los acreedores de otra compañía, de que formara parte alguno de esos miembros.

CAPÍTULO VI

De la disolución de la sociedad

Casos en que se extingue.

1262. La sociedad se extingue:

1º Por vencimiento del término, o por cumplirse la condición a que fué subordinada su existencia; en am-

bos casos, aunque no estén concluídos los negocios que tuvo por objeto.

- 2º Por la realización del fin social.
- 3º Por la imposibilidad física o jurídica de alcanzar dicho fin, sea por la completa pérdida del capital, o de una parte del mismo que impida lograrlo.
- 4º Por el acuerdo unánime de los socios.
- 5º Si fuere de dos personas, por la muerte de una de ellas.

1263. La sociedad podrá disolverse a instancia de cualquiera de los socios: Disolución a instancia de un socio.

- 1º Por muerte, renuncia o remoción del administrador nombrado en el contrato, o del socio que pusiere su industria, o de alguno de los componentes, cuya importancia personal creare la posibilidad de no continuar con éxito el giro.
- 2º Por la exclusión, renuncia, abandono de hecho o incapacidad sobreviniente de uno de los socios. En este último caso, el representante no tendrá derecho para exigir la disolución de la sociedad, ni para renunciarla, sin expresa autorización del juez.
- 3º Por el incumplimiento de la prestación de uno de los socios.
- 4º Cuando fuere de término ilimitado.

1264. Transcurrido el plazo por el cual la sociedad fué constituida, podrá proseguir sin necesidad de otorgar nuevo documento. En este caso su continuación se probará por los actos notorios que realizare. Vencimiento del plazo.

1265. En caso de disolución por fallecimiento de un socio, los herederos de éste darán aviso inmediato a los demás, y si hubiere peligro en la demora, continuarán los negocios confiados a su autor, hasta que con el acuerdo de los otros pueda proveerse de otra manera. De igual modo, los demás socios estarán obligados a continuar la gestión que les hubiere sido encomendada. Dentro de esos límites, se juzgará que la sociedad continúa. Disolución por fallecimiento.

1266. Los negocios pendientes de la sociedad proseguirán con los herederos del socio fallecido.

Si los administradores ignoraron el deceso de alguno de los socios, las operaciones realizadas serán obligatorias para los herederos de aquél.

Continuación después
de la muerte de un
socio.

1267. Cuando la sociedad continuare después de la muerte de alguno de los miembros, la partición con sus herederos se hará con referencia al día del fallecimiento, y los sucesores sólo intervendrán en los derechos y obligaciones ulteriores, en cuanto fueren una consecuencia necesaria de los negocios iniciados antes del deceso.

1268. Lo mismo se observará, aun cuando se hubiera convenido en el contrato que la sociedad continuara con los herederos, a no ser que éstos y los otros componentes acordasen proseguirla.

Sentencia que disuelve
la sociedad.

1269. La sociedad quedará disuelta por sentencia firme que así lo determine. Su efecto será retroactivo al día en que tuvo lugar la causa en que ella se fundare.

CAPITULO VII

De la liquidación y partición

Liquidación. Reglas.

1270 Disuelta una sociedad se procederá a liquidar su activo, observándose lo dispuesto en el Código de Comercio.

La sociedad subsistirá en la medida que lo requiera la liquidación, para concluir los asuntos pendientes, iniciar las operaciones nuevas que ella exija, y para administrar y conservar el patrimonio social.

División de pérdidas y
ganancias.

1271. Para proceder a la partición de los bienes, las pérdidas y las ganancias se dividirán conforme a lo convenido. Si sólo se hubiere pactado la cuota de cada socio en las ganancias, será igual la correspondiente en las pérdidas. A falta de toda convención, el respectivo aporte determinará la parte de cada cual.

Beneficios que pue-
den distribuirse.

1272. Solo podrán distribuirse beneficios irrevocablemente realizados y líquidos.

Socio industrial. Ca-
sos.

1273. Si el socio puramente industrial se obligó como los demás, a dividir las ganancias y pérdidas, se entenderá que esta última es sólo de la industria que aportó. Pero si también introdujo capital, regirá lo dispuesto en el art. 1271.

1274. Las ganancias del socio industrial, en defecto de convención, se fijarán del modo siguiente:

- 1º Cuando sólo hubiere socios de esa calidad, las partes de todos ellos serán las mismas, tanto en las utilidades como en las pérdidas.
- 2º Si la sociedad contó además, con uno o varios capitalistas con aportes iguales, el industrial tendrá en los beneficios una parte idéntica.
- 3º Siempre que las prestaciones fueren desiguales, tendrá la cuota correspondiente al término medio de los capitales aportados por los demás.
- 4º En caso de haber introducido también capital, la división se hará proporcionalmente a la totalidad del mismo, agregando una cifra equivalente al promedio de los aportes de todos los socios. Se aplicará esta regla para la distribución de las pérdidas.
- 5º Si todos los socios, además de su industria hubieren realizado aportes de dar, la división se hará en cuotas iguales.

1275. Cuando la prestación de los socios hubiere sido de cosas destinadas a ser vendidas por cuenta de la sociedad, se tendrá como capital aportado el precio de la venta. Si ésta no pudo realizarse, se estará a su valor en el momento de la entrega.

Aporte de cosas para ser vendidas.

Si el objeto fué estimado en el contrato social, se juzgará como aporte el valor establecido.

1276. Los socios comanditarios y los industriales simples no estarán obligados, para cubrir las pérdidas, a restituir las utilidades legítimamente distribuidas antes de la disolución.

Comanditarios e industriales simples.

1277. En la división de la sociedad se observará, en todo lo que fuere aplicable, lo dispuesto en el libro V del presente Código, sobre la división de las herencias, no habiendo en este título disposiciones en contrario.

Aplicación de las reglas sobre división de herencia.

TITULO XIV

De los contratos aleatorios

CAPITULO I

Del juego y apuesta

- Contratos aleatorios:** **concepto.** **1278.** Los contratos son aleatorios, cuando las ventajas o pérdidas que de ellos puedan derivar para las partes, dependan de un acontecimiento incierto.
- Deudas de juego o apuesta.** **1279.** No se acordará acción por deudas de juego o apuesta, aunque éstos se realizaren con permiso de la autoridad administrativa. Tales obligaciones no podrán novarse, compensarse, ni ser objeto de transacción. Cuando mediare reconocimiento escrito de ellas, será lícito probar por todos los medios su causa real, aunque se hubiere expresado otra civilmente eficaz.
- Enumeración.** **1280.** Son deudas de juego o apuesta:
- 1º Las que resulten directamente de los mismos.
 - 2º Las contraídas por intermedio de un mandatario, sabedor de que lo era en operaciones de esta índole.
 - 3º Las concertadas con uno de los jugadores por adeantos hechos en la partida.
 - 4º Las contraídas con un tercero que supiera que el destino de los fondos era para jugar o apostar.
- No lo serán los préstamos obtenidos por uno de los jugadores después de la partida para abonar las pérdidas, ni tampoco las sumas adeudadas a quien se encargó posteriormente del pago de aquéllas.
- Obligación de juego o apuestas bajo forma de título negociable.** **1281.** Si una obligación de juego o apuesta revistiere la forma de título negociable, el otorgante deberá pagarla al tenedor de buena fe; pero podrá repetir el importe contra

la persona, a cuya orden subscribió el título. La simple entrega de éste no equivaldrá al pago mencionado en el art. 1282. Será admitida la excepción del deudor contra el cesionario de otros documentos.

1282. Quien satisfaga voluntariamente deudas de juego o apuestas, no podrá repetir lo abonado, aunque de ellos no resultare acción, salvo dolo o fraude del ganador. Se entenderá que los hubo, cuando procediere con certeza del resultado, o empleare algún artificio para obtenerlo.

Pago voluntario.

No cabrá reclamo si el dolo o fraude fuere del que perdió.

1283. Cuando alguien, no teniendo capacidad para pagar válidamente, saldare una deuda de juego, sus representantes podrán repetir el importe contra quienes ganaron, y aun contra aquellos en cuya casa se efectuó la partida. Unos y otros responderán como deudores solidarios.

Pago por incapaces.

1284. El tercero, que sin mandato abonare una deuda de juego o apuesta, no tendrá acción contra aquél por quien verificó el pago.

Pago por tercero sin mandato.

1285. Será considerado como de juego el contrato, que versando sobre la entrega de mercaderías o valores mobiliarios, fuere celebrado con la intención de limitarlo al pago de la diferencia entre el precio convenido y el que obtengan aquéllos en la bolsa o mercado, al tiempo establecido para la entrega. La misma regla se aplicará cuando sólo una de las partes hubiere tenido ese propósito, siempre que fuere conocido por la otra o que ésta debiere conocerlo.

Contratos reputados de juego.

1286. Sólo podrán demandarse en juicio las deudas provenientes de juegos que impliquen ejercicios corporales, como la esgrima, la carrera u otros semejantes. Sin embargo, los jueces podrán moderar o desestimar esas demandas, siempre que las creyeran excesivas.

Juegos permitidos.

1287. Cuando se empleara la suerte para dividir cosas comunes o finiquitar cuestiones, y no como apuesta o juego, ella producirá en el primer caso los efectos de una partición legítima, y en el segundo, los de una transacción.

Poder moderador.

Suerte no empleada como juego o apuesta.

1288. Las loterías y rifas, siempre que fueren permitidas, se regirán por las respectivas ordenanzas municipales o reglamentos de Policía.

Régimen de loterías y rifas.

CAPITULO II

De la renta vitalicia

- Renta constituida a título gratuito.** **1289.** Podrá constituirse renta vitalicia a título gratuito, por donación entre vivos o por testamento. En estos casos regirán las disposiciones especiales, y subsidiariamente, las del presente título.
- Idem a título oneroso.** **1290.** Podrá también constituirse la renta a título oneroso, por contrato en virtud del cual una persona, contra entrega de una suma o de un bien, se obligue a pagar una renta periódica en dinero, a uno o más beneficiarios existentes o concebidos en el momento de celebrarlo, durante la vida de una o varias personas determinadas. La que se hubiere establecido en frutos naturales o en servicios, será pagadera por su equivalente en efectivo.
- Capacidad.** **1291.** La capacidad para dar y tomar el mutuo, será la requerida cuando el precio fuere en dinero, y la correspondiente a la de vender o comprar, cuando se constituya por la entrega de muebles o inmuebles.
- Caso que se considera donación.** **1292.** Si las prestaciones periódicas son inferiores o iguales al interés legal del dinero, o a la renta de los bienes entregados, se juzgará que existe donación.
- Cláusula nula. Pensión alimenticia.** **1293.** Es nula la cláusula que prohíba al beneficiario enajenar su derecho a percibir la renta.
Si una pensión alimenticia se hubiere constituido en forma de renta, no podrá ser embargada, cedida, ni pignorada.
- Término de la renta.** **1294.** El término de la renta vitalicia puede ser la vida de cualquiera de los contratantes, o la de uno o más terceros.
- Beneficiarios.** Podrá constituirse a favor de una determinada persona, o de varias conjunta o sucesivamente.
- Muerte de la persona elegida como base.** **1295.** Será nulo el contrato si la persona, cuya vida sirvió de base para constituirlo, falleciere dentro de los treinta días siguientes al de su celebración, a consecuencia de la enfermedad que la afectaba en aquel momento, aunque las partes la conocieran o hubiesen estipulado lo contrario.

1296. Si el beneficiario fuere un tercero, incapaz de recibir respecto del que entregó el precio de la renta, el deudor deberá pagarla al constituyente o a sus herederos, hasta el término del contrato.

Incapacidad de beneficiario.

1297. El deudor está obligado:

Obligaciones del deudor.

1° A servir la renta en la forma y plazos convenidos.

Si no mediare pacto comisorio, el acreedor no podrá solicitar que se resuelva el contrato por falta de pago, salvo que la renta se hubiere constituido como carga de una donación o legado.

2° A suministrar las seguridades que prometió. Si no lo hiciere, o disminuidas por hecho suyo las ya dadas, el beneficiario podrá demandar la resolución del contrato. Esta regla no se aplicará para las rentas a título gratuito, a menos que constituyeran cargas impuestas a la liberalidad.

1298. La renta corresponde al beneficiario, en proporción al número de días que viviera la persona, cuya existencia sirvió para establecerla; pero cuando se convino el pago por anticipado, cada cuota quedará firme, aunque aquélla muriese antes del vencimiento.

Proporción en que se debe la renta.

El deudor podrá oponerse al pago de la renta vencida, probando por todos los medios, la muerte de la persona, cuya vida constituye su término.

1299. Cuando los beneficiarios fueren dos o más y hubieren de percibir simultáneamente la renta, el instrumento de constitución deberá indicar la parte que corresponda a cada uno, y si el que sobreviva tendrá derecho de acrecer. En su defecto, se entenderá que éste no existe, y que las porciones son iguales.

Pluralidad de beneficiarios.

1300. En caso de un solo beneficiario, y de haberse establecido el término de la renta teniendo en cuenta la vida de dos o más personas, se la deberá por entero hasta la muerte de la última.

Beneficiario único sobre la vida de dos o más personas.

1301. Si el beneficiario falleciere antes que la persona, cuya vida constituye el término del contrato, la renta pasará a los herederos de aquél.

Herederos del beneficiario.

TÍTULO XV

De la fianza

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Concepto.	1302. Habrá fianza, cuando una parte se obligue accesoriamente respecto de la otra, acreedora de un tercero, a cumplir la obligación de éste, siempre que el deudor no lo hiciere. La conformidad del último no será necesaria.
Promesa de fianza.	La promesa de fianza no produce ningún efecto, si no fuere aceptada por el acreedor.
Capacidad.	1303. Podrán ser fiadores los que tengan la libre administración de sus bienes. No podrán serlo: <ol style="list-style-type: none"> 1º Los menores emancipados, aunque obtengan licencia judicial, y la fianza sea inferior a quinientos pesos. 2º Las corporaciones y fundaciones con personería jurídica. 3º Los padres, tutores y curadores de incapaces en representación de éstos, ni aun con la venia del juez. 4º Los administradores de sociedades, si no tuvieren poderes especiales para afianzar. Quedan incluidos entre ellos los de sociedades anónimas. 5º Los mandatarios, a nombre de sus constituyentes, a menos de tener poderes especiales para ello. 6º La mujer casada sin acuerdo de su marido, no obstante que hubiere asumido el manejo de sus intereses.
Forma. Prueba.	1304. Puede contratarse la fianza en cualquier forma, verbalmente, por instrumento público o privado; pero desconocida en juicio, sólo podrá probársela por escrito.

1305. Es susceptible de fianza:

Obligaciones que pueden afianzarse.

- 1° Todo crédito válido que pueda demandarse en juicio, o ampararse en una excepción.
- 2° La obligación futura o de cantidad incierta, siempre que en ambos casos se determine su objeto preciso, aunque no su importe. La fianza será nula si no se constituyere por una suma limitada, dentro de la cual se obligue el fiador.

1306. Es nula la fianza si la obligación nunca hubiere existido, estuviere extinguida, o surgiere de un acto nulo o anulado.

Fianzas nulas y anulables.

Será anulable cuando la obligación principal derivare de un acto de tal naturaleza. Pero si el vicio consistiere en alguna incapacidad relativa del deudor, el que afianzó será el único responsable, aunque la hubiere ignorado. Lo será igualmente cuando tenga por objeto asegurar las obligaciones mencionadas en el art. 857, inc. 1°, y también las previstas en el inc. 3° del mismo, siempre que la garantía fuere constituida con conocimiento de la falta de solemnidad.

1307. No pueden afianzarse prestaciones diferentes de las que forman el objeto de la obligación principal. Cuando ésta no fuere de dinero o de un valor apreciable en él, la fianza sólo obligará a satisfacer los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Prestaciones diferentes de la obligación principal.

1308. El fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor. En este último caso, su responsabilidad se reducirá a los límites de la principal. Entiéndese en la duda, que se obligó por otro tanto.

Límite de la obligación del fiador.

1309. Si la deuda afianzada fuere ilíquida, y el fiador se obligó por una suma cierta, sólo responderá por ésta, aunque de la liquidación resultare un excedente sobre el valor prometido.

Deuda ilíquida afianzada por suma cierta.

1310. La fianza por la obligación principal comprenderá los intereses, determinados o no, salvo cláusula contraria.

Intereses.

1311. En las obligaciones a plazo o de tracto sucesivo, el acreedor que al contratar no hubiere exigido fianza, podrá reclamarla, si con posterioridad el deudor cayere en insolvencia, o trasladare su domicilio a otra provincia.

Insolvencia del fiador.

- Insolvencia del fiador.** **1312.** Siempre que el fiador se tornare insolvente, podrá el acreedor pedir otro idóneo en su reemplazo.
- Fiador solidario.** **1313.** El fiador responderá solidariamente con el deudor principal:
- 1° Cuando se hubiere así convenido.
 - 2° Si renunciare al beneficio de excusión de los bienes de aquél.
 - 3° Siempre que el acreedor fuere la hacienda nacional o provincial.
- Solidaridad y fianza.** **1314.** La solidaridad no quita a la fianza su carácter de obligación accesoria, y no convierte al fiador en deudor directo.
- Serán aplicables las reglas de la simple fianza, salvo en lo referente a los beneficios de excusión y división.
- Principal pagador.** **1315.** Cuando alguien se comprometiere como principal pagador, aunque fuere a título de garante, se le juzgará con respecto al acreedor, como obligado solidario.
- Fianza legal o judicial.** **1316.** En los casos de fianza legal o judicial, quien la prestare deberá tener su domicilio en el lugar del cumplimiento de la obligación garantizada, y ser de notoria solvencia. Los jueces tendrán facultad para admitir en lugar de esta garantía, prendas o hipotecas suficientes.
- Cartas de crédito.** **1317.** La carta de crédito sólo se reputa fianza, cuando el que la hubiere otorgado declare expresamente que se responsabiliza por la deuda.
- Carta de recomendación.** **1318.** La carta de recomendación, que asegure la probidad y solvencia de un solicitante de crédito, no importará fianza. Pero si de mala fe se afirmaron dichas cualidades, quien la subscriba responderá del daño que causare al destinatario la insolvencia del recomendado, salvo prueba de que ella no fué el motivo que indujo a tratar con él, o que sobrevino tal situación después de recibida.

CAPÍTULO II

Del efecto de la fianza

- Requisitos para demandar al fiador. Beneficio de excusión: excepciones.** **1319.** Sólo podrá demandarse al fiador, una vez que el crédito principal fuere exigible, y luego de excutirse todos

los bienes del obligado. No será necesario esto último, en los casos siguientes:

- 1° Si el fiador renunció expresamente tal beneficio.
- 2° Cuando la fianza fuere solidaria.
- 3° Si mediare falencia del deudor, o si éste se hallare ausente de su domicilio al vencimiento de la obligación.
- 4° Siempre que el deudor no pudiese ser demandado judicialmente dentro del territorio de la Nación.
- 5° Si la deuda afianzada fuere natural.
- 6° En caso de fianza judicial.
- 7° Cuando la deuda fuere al fisco de la Nación o de las provincias.
- 8° En el supuesto de que los bienes del deudor no se hallaren en el territorio de la provincia, o de la Capital de la República, donde el juez ejerza su jurisdicción, o si estuvieren embargados por terceros, o dependieren en alguna manera de otro juicio.

1320. Aunque el fiador no fuere demandado, podrá requerir judicial o extrajudicialmente al acreedor, una vez exigible la deuda, para que proceda contra el deudor principal, y en caso de inacción el fiador no será responsable por la insolvencia que sobreviniere durante el retardo.

Requerimiento al acreedor.

1321. Cuando habiendo varios deudores solidarios, uno de ellos diere fianza, el fiador demandado tendrá derecho a que se ejecuten igualmente los bienes de los demás obligados.

Fiador de un coobligado solidario.

1322. Si el acreedor fuere omiso o negligente en la excusión, y el deudor cayere entre tanto en insolvencia, cesará la responsabilidad del fiador.

Acreedor omiso o negligente.

1323. El que afianzare a un fiador gozará del beneficio de excusión, tanto respecto de éste, como del deudor principal.

Fiador del fiador.

1324. Si los bienes ejecutados sólo alcanzaren para un pago parcial, el acreedor deberá aceptarlo; y sólo podrá demandar al fiador por el saldo.

Insuficiencia de los bienes ejecutados.

1325. El fiador, solidario o no, podrá oponer al acreedor todas las excepciones propias y las correspondientes al deudor principal, aun contra la voluntad de éste, excepto las que se funden en la incapacidad del mismo.

Defensas oponibles por el fiador.

La renuncia voluntaria que hiciere el deudor de la prescripción, o de toda otra causal liberatoria, o de la nulidad o

rescisión de la obligación, no impedirá al fiador que invoque estas defensas.

Juicios en los que puede intervenir.

1326. El fiador podrá intervenir en los juicios entre el acreedor y el deudor, sobre la existencia o validez de la obligación principal; y de no hacerlo, las sentencias pronunciadas no le privarán de alegar esas excepciones.

Embargos a solicitud de fiador. Exoneración de la garantía.

1327. El fiador podrá pedir el embargo de los bienes del deudor o la exoneración de la garantía, en los casos siguientes:

- 1º Si fuere judicialmente demandado para el pago.
- 2º Cuando vencida la obligación, el deudor no la cumpliere.
- 3º Siempre que disipare sus bienes, los afectare en seguridad de otras obligaciones, o emprendiere negocios peligrosos.
- 4º Cuando quisiere ausentarse del territorio de la Nación, sin dejar bienes raíces suficientes y libres para el pago.

El derecho concedido al fiador en este artículo, no se extiende a quien se obligó contra la voluntad expresa del deudor.

Concurso del deudor.

1328. Concursado el deudor antes de satisfacer la deuda, el fiador tendrá derecho para ser admitido preventivamente en el pasivo de la masa.

Subrogación del fiador.

1329. El fiador que pagare, aunque se hubiere obligado contra la voluntad del deudor, se subrogará al acreedor, y tendrá derecho a la indemnización de todo perjuicio derivado de la fianza.

Pago anticipado por el fiador.

1330. Si el fiador pagó antes del vencimiento de la deuda, sólo podrá cobrarla después de aquél.

Fiador de uno o varios deudores solidarios.

1331. Quien afianzó a distintos deudores solidarios, tendrá derecho a repetir de cada cual la totalidad de lo pagado. El que sólo garantizó a uno de aquéllos, subrogará al acreedor en el todo; pero sólo podrá pedir contra los otros, lo que en su caso le correspondiere reclamar al deudor a quien aseguró.

Pagos realizados por el fiador y el deudor.

1332. Si el fiador pagare sin noticia del deudor, y éste ignorándolo, hubiese abonado la deuda, el primero no tendrá acción contra el segundo; pero le quedará a salvo el recurso contra el acreedor.

Pagando el fiador sin conocimiento del obligado, podrá éste hacer valer contra aquél todas las excepciones oponibles al acreedor.

1333. Tampoco al fiador le será permitido exigir del deudor el reembolso de lo pagado, si dejó de oponer las excepciones que sabía amparaban a éste contra el acreedor, o cuando no produjo las pruebas, o no interpuso los recursos susceptibles de enervar la demanda.

Negligencia del fiador.

1334. Cuando el fiador abonare sin haber sido demandado, y sin dar conocimiento al deudor, no podrá repetir el importe si éste probare que al tiempo del pago, tenía defensas que extinguían la obligación; pero le será lícito hacerlo, si con ello no irrogó perjuicio alguno al deudor.

Pago por el fiador sin ser demandado y sin noticia del deudor.

1335. El cofiador que satisfizo la deuda, quedará subrogado al acreedor contra los otros cofiadores, para cobrar a cada uno de éstos la parte que le correspondiere. Si pagó con exceso, la subrogación se producirá en esta medida, pudiendo exigir de aquéllos una parte proporcional.

Cofiador subrogado.

1336. Al fiador que hubiere hecho el pago, podrán los otros cofiadores oponerle todas las defensas que el deudor principal tuviere contra el acreedor; pero no las meramente personales. Tampoco les será permitido alegar estas últimas cuando correspondieren al que pagó contra el acreedor, y de las cuales no quiso aquél valerse.

Excepciones que pueden oponerle los cofiadores.

1337. El que afianzare a un fiador, en caso de insolvencia de éste, quedará responsable respecto de los otros en los mismos términos en que lo estaba aquél.

Responsabilidad del fiador.

CAPITULO III

Extinción de la fianza

1338. La fianza termina:

- 1º Por extinguirse el crédito garantizado, y por las mismas causas que las obligaciones en general y las accesorias en particular.
- 2º Cuando la subrogación en los derechos del acreedor se tornare imposible, por un hecho positivo o por ne-

Casos.

gligencia de aquél, siempre que las seguridades y privilegios hubieren sido constituidos con anterioridad a la fianza, o en el acto en que ésta se otorgó.

En caso de haberse imposibilitado parcialmente tal subrogación, el fiador sólo quedará libre en dicha medida.

- 3º Por la prórroga del término para el pago, que acordara el acreedor sin consentimiento del fiador.

Esta regla no se aplicará a las esperas tendientes a facilitar el pago de atrasos en obligaciones de tracto sucesivo, cuando no excedieren de dos meses.

- 4º Por la falta de aviso al fiador, de la demora en que incurrió el obligado, cuando se atrasare en más de dos períodos. La fianza quedará extinguida por el tiempo ulterior.

- 5º En caso de novarse la deuda por convenio entre acreedor y deudor, aunque el primero lo hiciere con reserva de sus derechos contra el fiador.

- 6º En virtud de la renuncia a título gratuito u oneroso, efectuada por el acreedor al deudor principal. No se comprende la otorgada en acuerdo de acreedores, aunque importe remisión de la deuda y no se reserve expresamente los derechos contra el fiador.

- 7º Cuando el acreedor aceptare en pago otra cosa que la debida, aunque después la perdiera por evicción.

Fianza por alquileres.

1339. En la fianza por alquileres, no obstante que se hubiere fijado plazo para ella, se entenderá que el fiador responde por el tiempo necesario para el desahucio.

Aun cuando el garante se hubiere comprometido como principal pagador, si el contrato contuviere cláusula que lo responsabilizare hasta la restitución del inmueble, sólo se entenderá que ella obliga por el tiempo necesario para obtenerla, una vez vencido el término del arrendamiento.

Exoneración.

1340. El fiador podrá pedir su exoneración al deudor, transcurridos cinco años desde que otorgó la garantía, a no ser que la obligación principal no estuviere sujeta a extinguirse en tiempo determinado, o que se hubiere contraído por un período más largo.

Confusión.

1341. La reunión en una misma persona de la calidad de deudor y fiador, dejará subsistentes las seguridades especiales acordadas al acreedor por el garante.

TITULO XVI

De las transacciones

1342. Podrán las partes, mediante concesiones recíprocas, prevenir o terminar un litigio, siempre que tuvieren capacidad para disponer de los objetos o derechos comprendidos en la transacción.

Concepto

Las reglas de los contratos, relativas a la capacidad, al objeto, modo, forma, prueba y nulidad de los mismos serán aplicables a las transacciones, salvo lo que en contrario se estableciere dentro del presente título.

Requisitos.

1343. No puede transigir el incapaz de disponer en todo o en parte de los derechos que se abandonan.

Quienes no pueden transigir.

Tampoco podrán hacerlo:

- 1º Los agentes del Ministerio Público, nacionales o provinciales, y los procuradores de las Municipalidades.
- 2º Los cobradores o empleados fiscales, de cualquier denominación, en todo lo concerniente a las ventas públicas.
- 3º Los representantes de las personas jurídicas, cuando no fueren autorizados especialmente en cada caso.
- 4º Los padres, tutores o curadores, con los incapaces bajo su guarda, en lo que se refiere a las cuentas de su gestión, aún cuando mediare venia judicial.
- 5º Los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones de la testamentaria, sin autorización del juez competente, con previa audiencia de los interesados.

1344 La transacción no podrá tener por objeto los derechos o cosas que interesen al orden público, ni las relaciones de familia, ni las facultades o estados que deriven de ellas; pero podrán transigirse los litigios que versaren sobre

Transacciones prohibidas.

Transacciones sobre
derechos litigiosos.

derechos pecuniarios subordinados al estado de las personas, siempre que no se comprenda este último o algún otro objeto prohibido. En tal supuesto, el acto será nulo por el todo.

1345. Para celebrar válidamente transacción sobre derechos ya litigiosos, será necesario presentarla al juez de la causa, con la firma de los interesados. Cuando constare en escritura pública, sólo tendrá efecto respecto de terceros, después de su agregación a los autos.

Caracteres y valor de
la transacción.

1346. La transacción declara o reconoce derechos, pero no los transmite. Es indivisible y de interpretación restrictiva. No obliga a la garantía, ni impone responsabilidad por la evicción. La nulidad de una de sus cláusulas la invalida por completo.

Efecto.

1347. La transacción extingue los derechos y obligaciones renunciados, y reviste para las partes y los sucesores de éstas, autoridad de cosa juzgada.

Transacción celebrada
con un deudor o
acreedor solidario.

1348. La transacción con uno de los deudores solidarios aprovechará a los otros, pero no podrá serles opuesta; la concluída con uno de los acreedores solidarios podrá invocarse por los otros, mas sólo podrá alegarse por su parte en el crédito.

Este artículo comprende a los deudores y acreedores de obligaciones indivisibles, y a todos los que, según este Código, pueden prevalerse de las sentencias dictadas sin su intervención.

Efecto en cuanto al
fiador.

1349. La transacción entre el acreedor y deudor no podrá ser opuesta al fiador, pero le será lícito a éste invocarla, aunque hubiera sido ya condenado al pago por sentencia firme.

Evicción de la cosa
renunciada o transfe-
rida.

1350. La evicción de la cosa renunciada por una de las partes, o transferida a la otra, no invalidará la transacción, ni permitirá reclamar lo que por ella se hubiere recibido. Quien transfirió a otro alguna cosa como suya, le deberá los daños y perjuicios, cuando el poseedor fuere vencido en el pleito; pero no revivirá la obligación extinguida.

Nuevo derecho adquiri-
do sobre la cosa.

1351. Si quien transigió obtuviera un nuevo derecho sobre la cosa renunciada o transferida, la transacción no impedirá el ejercicio de aquél.

1352. La transacción será anulable:

Transacción anulable.

1º Cuando hubiere tenido por objeto ejecutar un título nulo, o establecer el efecto de derechos constituidos

en virtud del mismo, conocieren o no las partes tal nulidad, o lo creyeren válido, por error de hecho o de derecho. En ese caso, la transacción podrá sólo ser mantenida, cuando expresamente se hubiere tratado sobre la nulidad del título.

- 2º Si por documentos de que no se tuvo noticia al tiempo de celebrarla, resultare que una de las partes no tenía derecho sobre el objeto litigioso.
- 3º Cuando versare sobre un pleito, ya decidido por sentencia firme, si la parte que pretendiere anularla hubiere ignorado el fallo.

La transacción no será anulable porque se descubrieren en ella errores aritméticos. Las partes podrán demandar que ellos sean subsanados.

TITULO XVII

De la evicción

CAPITULO I

Disposiciones generales

1353. Habrá evicción cuando quien a título oneroso adquirió bienes o los dividió con otro, fuere en virtud de fallo judicial y por causa ignorada, contemporánea o anterior a la transferencia, privado total o parcialmente del derecho adquirido.

Quando se produce.
Responsabilidad.

Responderá, tanto quien transmitió o dividió los bienes, como los antecesores en el título traslativo del dominio.

La sentencia arbitral sólo producirá efecto, en el caso de que el enajenante hubiere firmado el compromiso.

1354. La responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, corresponderá en los casos de turbación de derecho total o parcial, respecto del dominio, goce o posesión. También procederá cuando el adquirente debiere sufrir cargas ocultas, cuya existencia no le hubiere declarado el enajenante, y

de las cuales él no tuvo noticia. El resarcimiento se acordará, a falta de sentencia que declare la evicción, cuando el adquirente hubiere luego obtenido el derecho por un título distinto.

Causa anterior del derecho que originó la evicción.

1355. Si el derecho que causó la evicción, fuere de origen anterior a la transferencia de la cosa, pero adquirido ulteriores, no responderá el que transmitió o dividió los bienes, cuando se hubiere consolidado por incuria del vencido.

Los jueces resolverán, sin embargo, apreciando las circunstancias, si procede o no hacer efectiva la responsabilidad.

Garantía a favor del poseedor o tercer adquirente.

1356. Procederá la garantía por la evicción, haya ésta tenido lugar contra el mismo poseedor de la cosa, o respecto de un tercer adquirente. Este podrá ejercer en su propio nombre, contra el primer enajenante, los derechos que dá la evicción, aunque no pudiese hacerlo frente al autor de la transferencia.

Reglas relativas a la garantía.

1357. Se responderá por la evicción, aunque en los actos traslativos no hubiere cláusula alguna sobre ella; pero las partes pueden ampliarla, restringirla o suprimirla.

Es nulo todo pacto que exonere al enajenante de mala fe.

La exclusión o renuncia de cualquier responsabilidad, no exime de la que corresponda por la evicción. El vencido tendrá derecho a repetir el precio, aunque no los daños y perjuicios.

Casos de irresponsabilidad.

1358. El enajenante no responderá por la evicción:

- 1º Cuando la hubiere excluído expresamente.
- 2º Siempre que la enajenación fuere a riesgo del adquirente.
- 3º Cuando en forma expresa hubiere renunciado el adquirente a la garantía.
- 4º Si, conociendo o debiendo conocer el adquirente al efectuarse el acto, el peligro de la evicción, hubiere consentido en que la garantía se excluyere.

Obligación por hecho del transmitente.

1359. No obstante la renuncia a la responsabilidad, el transmitente quedará obligado por la derivada de un hecho suyo, anterior o ulterior.

1360. Cuando el enajenante hubiere declarado la existencia de una hipoteca sobre el inmueble, quedará a cargo del adquirente el pago de su importe, aunque se estableciera la garantía de evicción. El primero sólo responderá por esta suma, siempre que hubiera convenio expreso.

Hipoteca declarada.

1361. Si al transmitírsele el bien conoció el adquirente el peligro de la evicción, no tendrá derecho a ser indemnizado, ni podrá exigir del enajenante que le defienda en juicio, salvo convenio expreso en contrario.

Conocimiento del riesgo.

1362. Las cargas aparentes y aquéllas que gravan las cosas por la sola fuerza de la ley no dan derecho a garantía.

Cargas que no responsabilizan.

1363. Siempre que un tercero reclamare un derecho susceptible de causar evicción, o se turbare al adquirente en los términos de los arts. 1353 y 1354, las personas que se mencionan en ellos deberán, si fueren citadas, salir en defensa de aquél.

Citación de los obligados.

1364. Cesará la responsabilidad por la evicción:

Cesación de la responsabilidad.

1º Si el vencido en juicio no hubiere citado de saneamiento al enajenante, o lo hiciere después del plazo señalado por la ley procesal.

2º Si continuando el adquirente en el pleito, no opusiere por dolo o negligencia, las defensas oportunas, o no apelare del fallo contrario, o no prosiguiera el recurso.

3º Cuando el adquirente, sin citar de saneamiento al enajenante, reconociera la justicia de la demanda y fuera por ello privado del derecho. El primero responderá sin embargo, cuando se probare la inutilidad del emplazamiento, por no existir oposición justa que hacer al derecho del vencedor, o la de interponer o mejorar el recurso.

1365. La responsabilidad por la evicción es indivisible, y podrá demandarse u oponerse a cualquiera de los herederos del enajenante; pero será divisible la obligación de restituir lo recibido en el acto de la transmisión, como la de abonar los daños y perjuicios.

Indivisibilidad.

1366. Cuando el adquirente venciere en el juicio de que pudo resultar la evicción, no tendrá ningún derecho contra el enajenante, ni aun para cobrar los gastos efectuados.

Adquirente que triunfa en el juicio.

CAPITULO II

De la evicción en caso de venta

Evicción total: responsabilidad del vendedor.

1367. Producida la evicción total, el vendedor deberá:

- 1º Devolver el precio sin intereses, aunque la cosa hubiere disminuído de valor, sufriendo deterioros o pérdidas, por culpa del adquirente, o por caso fortuito.
- 2º Restituir el valor de los frutos, cuando el adquirente los debiere al verdadero dueño.
- 3º Satisfacer los costos del contrato, así como los daños y perjuicios, que se determinarán por la diferencia entre el precio de venta y el valor de la cosa al día de la evicción, si ese aumento no derivare de causas extraordinarias.
- 4º Pagar los gastos de reparación y las mejoras útiles, siempre que el comprador no recibiere ningún resarcimiento, o éste fuere incompleto.
- 5º Devolver únicamente el precio obtenido, cuando se tratare de ventas forzadas.

Vendedor de mala fe.

1368. El vendedor de mala fe, que conoció al tiempo de la venta el peligro de la evicción, deberá al arbitrio del comprador, el mayor precio de la cosa, o todas las sumas desembolsadas, aunque fueren gastos de lujo o de mero placer.

Derecho de retención.

1369. El vendedor tendrá derecho a retener lo que el adquirente hubiere recibido en pago de mejoras antes de la venta, y lo obtenido por las destrucciones en la cosa comprada.

Evicción parcial: opción.

1370. Si la evicción fuere parcial, el comprador podrá optar entre que se le indemnice proporcionalmente a la pérdida sufrida, o rescindir el contrato, cuando la parte que se le ha quitado, la carga o servidumbre que resultare, fueren de tal importancia, que sin ellas no habría comprado la cosa.

Le asistirá igual derecho, si versando el contrato sobre varios objetos comprados conjuntamente, se demostrare que no se habría adquirido el uno sin el otro.

1371. En caso de evicción parcial, si el contrato no se rescindiera, el resarcimiento se determinará por el valor que al tiempo de aquélla, tuvo la parte de que se privó al comprador. Pero si no cubriere a la que correspondería proporcionalmente al precio total de la operación, se fijará con referencia a éste.

Contrato que no se rescinde.

1372. En las transacciones, la evicción tendrá los mismos efectos que entre comprador y vendedor, respecto de los derechos no comprendidos en la cuestión transigida; pero no sobre los litigiosos o dudosos que una de las partes reconociere en favor de la otra.

Evicción en las transacciones.

CAPITULO III

De la evicción entre permutantes

1373. Si la evicción fuere total, el permutante vencido podrá optar entre dejar sin efecto el contrato, con las indemnizaciones que correspondan, o exigir el valor del bien al tiempo de la evicción, con los daños y perjuicios.

Evicción total: opción.

Cuando eligiere lo primero, el permutante restituirá el objeto, tal cual se hallare, como poseedor de buena fe.

1374. Si el bien fué enajenado o gravado a título oneroso por el permutante, el otro no podrá reclamar contra los terceros adquirentes; pero si lo hubiere sido a título gratuito, tendrá derecho a exigirles el valor del objeto, o la restitución del mismo.

Disposición a título oneroso o gratuito.

CAPITULO IV

De la evicción entre socios

1375. En caso de evicción de un bien aportado por cualquiera de los socios, la responsabilidad de éste se reglará según las disposiciones siguientes:

Evicción del bien aportado.

- 1º Disuelta la sociedad, responderá por los daños y perjuicios que de ello resultaren.

Casos.

- 2º Cuando la sociedad continuare, serán aplicables las reglas sobre evicción entre comprador y vendedor.
- 3º Si fué de un cuerpo cierto, comprenderá los daños y perjuicios, que de la evicción resultaran a la sociedad, o a los demás socios.
- 4º Cuando la prestación fué de créditos, estará obligado, como si hubiere recibido el importe de los mismos.
- 5º Si fué el usufructo de un inmueble, la evicción de éste le obligará como al vendedor de frutos, debiendo abonar a la sociedad lo que se juzgue valía aquel derecho.
- 6º Cuando consistiere en el uso de una cosa, responderá únicamente, si en el momento de contratar, supo que no le asistía derecho para concederlo; pero será reputado como socio que no cumplió con su aporte.

Substitución de las cosas.

1376. Cuando la evicción prive a la sociedad de cosas muebles o inmuebles, y el socio que las aportó quiera reemplazarlas por otras idénticas, tendrá derecho a que se le admita el cambio, pero abonará los daños y perjuicios. Los demás socios no podrán obligarle a substituir los bienes, objeto de la evicción, por otros semejantes.

CAPÍTULO V

Evicción entre copartícipes

Reglas aplicables. Bases para el resarcimiento.

1377. Lo dispuesto entre enajenantes y adquirentes en general, será aplicable á la evicción entre copartícipes.

Para el resarcimiento se tomará como base el valor de los bienes al tiempo de la evicción, y si hubiere créditos, el nominal de éstos a la fecha en que se dividieron. Dicha responsabilidad, sólo tendrá lugar cuando el deudor fuere insolvente al efectuarse la división.

Copartícipe insolvente.

1378. Siempre que los copartícipes deban indemnizar a uno de ellos, si alguno resultare insolvente, la cuota de éste, se dividirá entre los demás obligados.

CAPITULO VI

Evicción entre donantes y donatarios

1379. Si la cosa donada fuere objeto de evicción, el donatario no tendrá recurso contra el donante, ni aun por los gastos que hubiere hecho con motivo de la donación, salvo en los casos siguientes:

Irresponsabilidad del donante: excepciones.

- 1º Si el donante prometió expresamente la garantía.
- 2º Cuando la donación fué hecha de mala fe, sabiendo el donante que la cosa no era suya.
- 3º Siempre que existieren cargos.
- 4º Cuando fuere remuneratoria.
- 5º En caso de evicción producida por causa del donante.

Indemnizaciones.

1380. En el supuesto del inc. 2º del artículo anterior, el donante deberá indemnizar al donatario los gastos que la donación le hubiere causado; pero éste nada podrá reclamar cuando hubiere sabido al tiempo de aquélla que la cosa pertenecía a otro.

Tratándose del inc. 3º, el donante deberá abonar lo desembolsado por los cargos impuestos, cuando la evicción fuere total. Siendo parcial, si lo que conserve el donatario alcanza a cubrir el importe de los cargos, nada podrá reclamar; pero cuando fuere inferior al mismo, el donante indemnizará por el excedente, según las reglas del enriquecimiento sin causa. Si los cargos estuvieren impuestos en interés de un subdonatario, sólo tendrá acción contra éste.

1381. En la hipótesis del inc. 4º del art. 1379, si la cosa equivalía a los servicios prestados, se aplicarán las reglas de la evicción en los actos onerosos. Siendo mayor el importe de aquéllos, el donante responderá por su monto en caso de evicción total. Si ésta fuera parcial, nada se deberá cuando la parte conservada fuere equivalente a los servicios; si fuere menor se abonará la diferencia.

1382. En el caso del inc. 5° del art. 1379, si la causa fué anterior a la donación, el resarcimiento se registrá por lo dispuesto en el art. 1380.

Cuando el donante se obligó a levantar una hipoteca, y por no haberlo efectuado, el inmueble fuera vendido, sólo podrá reeptir la parte de precio con que se cubrió el gravamen y condenaciones accesorias. Si la evicción derivare de hecho del donante, ulterior a la donación, deberá éste el valor del bien con los daños y perjuicios.

Derecho del donatario.
vencido.

1383. El donatario vencido podrá, como sucesor del donante, demandar a la persona de quien éste hubo la cosa por título oneroso, aunque no le hubiere cedido expresamente sus derechos.

TÍTULO XVIII

De los vicios redhibitorios

Concepto.

1384. Si el dominio, uso o goce de una cosa se transmitió a título oneroso, y al tiempo de la transferencia existieron vicios ocultos que la tornaban impropia para su destino, éstos se juzgarán redhibitorios, cuando disminuyendo de tal modo el uso de la misma, el adquirente, de conocerlos, no hubiera tenido interés, o habría dado menos precio por ella.

Irresponsabilidad.

1385. No procederá la responsabilidad por vicios ocultos de la cosa:

- 1° Cuando la disminución en el valor o en la calidad, fueren de poca monta.
- 2° En caso de vicios aparentes.
- 3° Si por cualquier circunstancia, el adquirente los conocía o debía conocerlos.
- 4° Cuando la cosa fué adquirida en remate o adjudicación judicial.

Cargo de la prueba.

1386. Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la transmisión. No acreditándolo, se juzgará que sobrevino después.

Cláusulas permitidas.

1387. Las partes podrán renunciar, restringir o ampliar su responsabilidad por los vicios redhibitorios, siempre que

no mediar dolo en el enajenante. La exoneración en términos generales, no eximirá a éste, respecto de los que hubiere conocido, y no declaró al adquirente.

Será permitido a las partes crear por el contrato, vicios redhibitorios que naturalmente no lo sean, siempre que el enajenante garantice la no existencia de ellos, o la calidad de la cosa supuesta por el adquirente. Esta garantía tendrá lugar, aunque no se exprese, cuando el primero afirmó positivamente en el acto, que la cosa estaba exenta de defectos, o que tenía ciertas calidades, aunque al segundo le hubiere sido fácil conocer dichas circunstancias.

En las ventas sobre muestra o modelo, se entenderá que las calidades respectivas han sido garantizadas.

1388. Entre adquirente y enajenante que no sean comprador y vendedor, el vicio redhibitorio de la cosa, sólo dará derecho a la acción redhibitoria, pero no a la que tienda a obtener que se rebaje de lo entregado, el menor valor de aquélla.

Caso en que sólo procede la acción redhibitoria.

1389. Si la transmisión fué por venta, el vicio redhibitorio tendrá las siguientes consecuencias:

Responsabilidad del vendedor.

1º En cuanto al vendedor:

- a) Deberá sanear al comprador, de los vicios o defectos ocultos de la cosa, aunque los ignore.
- b) Si por razón de su oficio o arte debía conocerlos y los calló, indemnizará además al comprador cuando éste lo pidiere, por los daños y perjuicios, siempre que optare por rescindir el contrato.

2º Con respecto al comprador, podrá éste en el caso del primer apartado del inciso precedente, escoger entre el ejercicio de la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato, o exigir se le disminuya del precio, el menor valor de la cosa por el vicio que la afectare.

Vencido en una de estas acciones, no podrá intentar luego la otra.

1390. Vendiéndose dos o más cosas a la vez, sea bajo un solo precio, sea asignando un valor a cada una de ellas, el vicio de la una, sólo dará lugar a su redhibición, salvo prueba

Ventas conjuntas.

de que el comprador no habría adquirido la sana sin la dañada, o si la venta fuere de un rebaño, y se tratase de enfermedad contagiosa.

Pérdida de la cosa.

1391. Si la cosa perece por los vicios redhibitorios, el vendedor deberá restituir el precio. Cuando la pérdida fuere parcial, el comprador estará obligado a devolver la cosa en el estado en que se hallare, para que se le reintegre lo que abonó.

Quando se perdiere por caso fortuito, o por culpa del adquirente, podrá éste sin embargo, reclamar el menor valor ocasionado por el vicio redhibitorio.

Aplicación extensiva.

1392. Lo dispuesto sobre la acción redhibitoria entre comprador y vendedor, se aplicará a las adquisiciones derivadas de los actos siguientes:

- 1º Dación en pago.
- 2º Contratos innominados.
- 3º Remates o adjudicaciones, siempre que no provengan de un cumplimiento de sentencia.
- 4º Permutas.
- 5º Donaciones, cuando procediere la responsabilidad por la evicción.
- 6º Aportes en las sociedades, siempre que por tal causa se originara la disolución, o que pudiera excluirse al socio que llevó la cosa afectada.

Indivisibilidad.

1393. La acción redhibitoria es indivisible. Ninguno de los herederos del adquirente podrá ejercerla sólo por su parte; mas será permitido demandar a cada uno de los herederos del enajenante, por la cuota que les corresponda.

TÍTULO XIX

De las obligaciones abstractas

Concepto. Forma.

1394. Cuando se prometa una prestación, de manera que el acto pueda engendrar por sí mismo, obligaciones a cargo del ofertante, será necesaria la forma escrita, a menos que la ley impusiera otra distinta.

La misma regla se aplicará para el caso, en que de igual manera, se reconozca una deuda.

1395. No podrán invocarse contra los cesionarios de buena fe, a título oneroso, excepciones derivadas de la falta de causa, generadora de la promesa.

Cesionario de buena fe.

No se aplicarán a estos cesionarios, las reglas del enriquecimiento indebido, respecto de las obligaciones reconocidas o prometidas.

TITULO XX

Promesa pública de recompensa

1396. Aquél, que por anuncio público, prometa retribuir o gratificar a quien llenare ciertas condiciones o ejecutare un hecho, quedará obligado a cumplir lo ofrecido, aun a favor de quien procediere sin interés por la recompensa.

Obligación de quien promete.

1397. Antes de realizado el hecho o de llenada la condición, podrá revocarse la oferta, siempre que ello se verifique con la misma publicidad.

Revocación de la promesa.

Será lícito formular promesas irrevocables. Se entenderán tales, cuando se hubiere fijado plazo para ejecutar el acto determinante de la recompensa.

Promesas irrevocables.

La retractación obliga al prometiende a reembolsar los gastos realizados de buena fe hasta el importe de la oferta, a no ser que probare la imposibilidad del solicitante para obtener el resultado que se tuvo en mira.

1398. La promesa quedará sin efecto, una vez transcurrido el término fijado, sin haberse cumplido el hecho o la condición, motivo de aquélla.

Promesa sin efecto.

1399. Cuando el hecho fuere realizado por más de una persona, tendrá derecho a la recompensa quien primero lo ejecutó. En caso de hacerlo simultáneamente, el premio se partirá por igual, y siendo indivisible, se adjudicará por sorteo.

Hecho realizado por varias personas.

Si varios hubieren contribuido al resultado, el prometiende distribuirá entre ellos la recompensa en forma equitativa, y siempre que alguien se opusiere, resolverá el juez. El premio deberá consignarse a petición de parte.

Distribución del premio.

1400. La recompensa ofrecida como premio en un concurso, será tan sólo válida cuando se fijare un plazo para celebrarlo.

Premios en concurso.

El veredicto de la persona designada como juez en los anuncios, obligará a los interesados, y a falta de indicaciones al respecto, se entenderá que el ofertante se reservó dicha facultad. Cuando los candidatos tuvieran igual mérito, se distribuirá el premio conforme al artículo anterior.

Propiedad de la obra premiada.

Para que la obra favorecida pase a propiedad del promitente, se requiere cláusula expresa en los anuncios del concurso.

TÍTULO XXI

De la exhibición de las cosas

Casos en que procede.

1401. El poseedor de una cosa podrá ser obligado a exhibirla :

- 1º Cuando alguien sostenga una pretensión atendible respecto de ella, siempre que el examen fuere necesario para determinar la existencia o los límites del derecho alegado.
- 2º En el caso de que alguien quiera cerciorarse de que le asiste fundamento para sustentar la pretensión, a que se refiere el inciso anterior, con tal que median las circunstancias que en él se indican.
- 3º Cuando se tratase de un título o documento, si el que tuviere interés en inspeccionarlo, pretendiere que fué extendido a su favor, o que consigna una relación jurídica entre él y otra persona, o negociaciones suyas con un tercero, o de cualquiera de los dos con un intermediario común. El juez podrá, sin embargo, negarse a ordenar la exhibición, si el tenedor invoca un interés legítimo, u otro motivo grave para rehusarse.

Lugar en que debe realizarse.

Riesgos y gastos

1402. La exhibición deberá realizarse donde se encuentre la cosa, pero cada parte podrá, acreditando razones atendibles, pedir que se efectúe en otro lugar.

Los riesgos y gastos serán a cargo de quien la solicitare, y el que deba exhibir tendrá derecho a rehusarse hasta que la otra parte le adelante los gastos y garantice los riesgos que la presentación pudiese causarle.

LIBRO CUARTO

DERECHOS SOBRE LAS COSAS

SECCION PRIMERA

DE LA POSESION

TITULO I

Disposiciones generales

1403. Será poseedor quien de hecho ejerza plenamente o no, todas o alguna de las facultades relativas al dominio. Cuando el poseedor entregare la cosa a un tercero, para conferirle un derecho de usufructo, uso, locación, depósito, u otro análogo, ambos tendrán la posesión de aquélla: el primero como poseedor mediato, el segundo como inmediato.

Concepto.
Poseedor inmediato y
mediato.

1404. No será poseedor, quien por razones de su oficio o empleo ejerciere, para el dueño de la cosa, en establecimiento industrial o comercial ajeno, el poder de hecho sobre ella; ni tampoco el que se hallare obligado en virtud de relaciones de dependencia semejantes, a obedecer respecto de la misma, las órdenes e instrucciones de otro.

Poder de hecho que
no implica posesión.

1405. Todas las cosas que están en el comercio son susceptibles de posesión. No lo serán los bienes que no fueren cosas, salvo disposiciones especiales del presente Código.

Cosas susceptibles de
posesión.

1406. Nadie estará obligado a producir su título a la posesión, salvo cuando deba exhibirlo como obligación inherente a ésta: posee porque posee.

Exhibición del título
a la posesión.

1407. Nadie puede cambiar por sí mismo, ni por el transcurso del tiempo la causa de su posesión, ni mudar las cualidades o vicios de ella. Tal cual comenzó, así debe con-

Inmutabilidad de la
causa. Intervención
del título.

tinuar, mientras no se creare un título nuevo para adquirirla. No causará interversión del título la mera circunstancia de comunicar al poseedor mediato el propósito contrario, si esta noticia no fuere acompañada de actos que le priven de su posesión, o que por su naturaleza sean incompatibles con los que tiene derecho a ejecutar el poseedor inmediato.

Poseción de muebles: presunción.

1408. El que ejerciere un poder efectivo sobre cosas muebles, se presume que las posee a título de dueño, si pretende tenerlas en tal carácter. Si empezó a poseer por otro título, o se encontrare en el caso del artículo anterior, se juzgará que continúa bajo el mismo concepto.

Poseedor de buena y de mala fe.

1409. El poseedor será de buena fe, cuando el poder que ejerza naciere de un título, y por ignorancia o error de hecho o de derecho estuviere persuadido de su legitimidad. El título putativo se equipara al existente, cuando el poseedor tenga razones atendibles para juzgarlo tal, o para extenderlo a la cosa poseída. El poseedor será de mala fe, cuando conozca o deba conocer la ilegitimidad de su título.

Presunción de buena fe. Sucesor universal y particular.

1410. La buena fe se presume, y basta que haya existido en el momento de la adquisición. La del sucesor universal se juzga por la de su autor; la del sucesor particular, por su convicción personal.

Buena fe en cuanto a frutos.

1411. En materia de frutos, la buena fe debe existir en cada acto de percepción. La buena o mala fe del sucesor, universal o particular, será juzgada respecto de él y no por la del causante.

Poseción viciosa.

1412. La posesión será viciosa, si fué adquirida o continuada por delito contra el poseedor mediato o inmediato o sus dependientes. Respecto de inmuebles, si ello acaeciere por violencia material o moral, sea por clandestinidad en cuanto a las mismas personas, o bien provinieren de la negativa a restituir la cosa recibida. Este artículo regirá, tanto para los hechos ejecutados por el poseedor vicioso, como por sus agentes, con su conocimiento o aprobación.

Oponibilidad del vicio.

1413. La posesión viciosa podrá siempre oponerse al sucesor universal. Al particular, sólo cuando éste hubiere adquirido la cosa con conocimiento del vicio preexistente.

La posesión viciosa lo es tan sólo respecto del poseedor perjudicado por los hechos que la califican.

Poseción clandestina.

1414. Habrá clandestinidad cuando los actos por los cuales se tomó o continuó la posesión fueron ocultos, o se

realizaron en ausencia del poseedor, o de sus dependientes, o con precauciones para substraerlos al conocimiento de quienes pudieran oponerse.

1415. Si fueren varios los poseedores de una cosa, la naturaleza de la posesión se juzgará respecto de cada uno de ellos.

Coposeedores. Representantes.

Tratándose de personas representadas, se aplicará lo dispuesto por el art. 187.

1416. No pueden poseerse a título de dueño, partes materiales de cosas que integren un solo cuerpo; pero en la posesión de éstas por otro título, la de partes materiales y determinadas se juzgará según la naturaleza y contenido del derecho que se ejerza.

Partes materiales integrantes de un cuerpo.

TÍTULO II

De la adquisición y pérdida de la posesión

1417. Se adquiere la posesión de una cosa, cuando mediante su aprehensión se obtenga el poder efectivo sobre ella. Pueden adquirir por aprehensión la posesión originaria, quienes hubieren cumplido diez años, como también toda persona capaz de discernimiento, en los términos previstos por el art. 140. Dichos extremos no serán necesarios, cuando por acto de tercero se hubiere puesto una cosa bajo el poder de una persona, aunque fuere incapaz.

Aprehensión.

1418. Serán actos posesorios respecto de inmuebles: su cultura, percepción de frutos, deslinde, la construcción o reparación que en ellos se haga, y en general, su ocupación, de cualquier modo que se tenga, bastando hacerla en alguna de sus partes.

Actos posesorios.

1419. Adquirida la posesión, se transmite a los sucesores universales del poseedor. También podrá transferirse cuando por convenio entre el poseedor y el adquirente, éste último se encuentre en situación de ejercer su poder efectivo sobre la cosa. Dicho acuerdo no requiere forma especial para su validez.

Transmisión de la posesión.

1420. La posesión que pudo obtenerse por acuerdo, será ineficaz cuando alguna de las partes no tuviere la libre

Capacidad para la transmisión de la posesión.

administración de sus bienes. Los representantes podrán convenirla dentro de los límites de su mandato.

Preferencia para la posesión de ciertos muebles.

1421. Cuando se confiaren cosas muebles a un agente, a empresario de transportes o de depósitos, y existieren documentos para acordar derecho a la entrega, o papeles semejantes, será preferido al tenedor de ellos, el adquirente de buena fe a quien se hubiese hecho la tradición efectiva.

Transmisión de la posesión mediata.

1422. La posesión mediata puede ser transferida al poseedor inmediato, o a cualquier otra persona, por el tras-paso del derecho a pedir la restitución de la cosa.

Coposeedores en común.

1423. Cuando dos o más personas en común tomen la posesión de una cosa, cada una de ellas será coposeedora por el todo.

Ejercicio y conservación de la posesión mediata.

1424. La posesión mediata se ejerce y conserva por medio del poseedor inmediato.

Conservación y pérdida de la posesión.

1425. Se juzga que la posesión sobre la cosa continúa, mientras no ocurra un hecho que cause su pérdida. Esta se producirá:

- 1º Cuando hubiere sido puesta fuera del comercio.
- 2º Por su abandono, o en su caso, por cesación del poder de hecho ejercido sobre ella. La interrupción ocasionada por impedimento transitorio, no produce este efecto.
- 3º Por su pérdida o extravío sin posibilidad de encontrarla. No se perderá, mientras se conserve en el lugar en que fué colocada por el poseedor o sus dependientes, aunque no se recuerde donde se la dejó, sea en la casa, en heredad propia o en ajena.
- 4º Por especificación, siempre que el transformador adquiera el dominio.
- 5º Por desposesión, sea del poseedor mediato o del inmediato, cuando transcurriere un año sin ejercer acto de posesión, o sin turbar la del usurpador.

Obligación y derechos del poseedor inmediato.

1426. El poseedor inmediato debe entregar la cosa al poseedor mediato terminada su posesión, de acuerdo con lo establecido por el título o causa constitutiva. Si tuviere derecho a retribución o a reembolso por gastos o mejoras, podrá retenerla hasta ser pagado por el poseedor mediato.

TITULO III

De las obligaciones y derechos inherentes a la posesión

1427. Quien ejerciere la posesión de una cosa a título de derecho real, tendrá las facultades y obligaciones que correspondan a los bienes, y que no beneficien o graven a una o más personas determinadas, sino indeterminadamente al poseedor.

Facultades y obligaciones del poseedor.

Cuentan en esos derechos:

- 1º Las servidumbres activas, si la cosa poseída fuere un inmueble.
- 2º En la posesión de las heredades confinantes con bienes del dominio público, el de usar y servirse de ellos en la medida que autoricen las leyes.

Son también obligaciones inherentes a la posesión de cosas inmuebles:

- 1º Las servidumbres pasivas.
- 2º La hipoteca que las grave, y la restitución de la cosa cuando el poseedor fuese anticresista.
- 3º Las cargas de dar, hacer o no hacer, impuestas al nuevo poseedor por el precedente, siempre que estuvieren inscriptas en el Registro.

1428. Los poseedores a título personal estarán sujetos a las mismas obligaciones, y podrán usar de las facultades, a que se refiere el artículo anterior, en tanto lo permitiere la naturaleza de los derechos en cuya virtud poseen.

Poseedores a título personal.

TITULO IV

De las defensas y las acciones posesorias

1429. Un título válido, sólo da derecho a solicitar la posesión de la cosa, mas no a tomarla. Si alguien se opusiere, debe demandársela por las vías legales.

Jus possidendi. Prohibición de turbar arbitrariamente al poseedor.

Cualquiera que sea la naturaleza de la posesión, nadie puede turbarla arbitrariamente.

Autodefensa.

1430. El hecho de la posesión confiere el derecho de protegerse en ella y rechazar la fuerza con el empleo de una fuerza suficiente, cuando los auxilios de la justicia habrían de llegar demasiado tarde. Quien fuera desposeído, podrá recobrar la cosa de propia autoridad, siempre que no medie intervalo, y con tal que no exceda los límites de la propia defensa.

Esa facultad podrá ser ejercida por el poseedor, o, en su nombre, por los que tuvieren la cosa como subordinados de él, y en todos los casos del art. 1412.

Cosas que pasan a un fundo poseído por otro.

1431. Cuando una cosa pasare del poder de su poseedor o subordinados a un fundo poseído por otro, el ocupante deberá permitir a los primeros buscarla y extraerla, si la posesión de la cosa no hubiere sido adquirida durante el intervalo.

El poseedor del fundo podrá exigir un resarcimiento por el daño derivado de la búsqueda y de la extracción, y aún rehusarse a permitir las hasta que medie garantía suficiente, cuando tuviere motivos razonables para temer un perjuicio, siempre que no hubiere peligro en la demora.

Poseción dudosa.

1432. Siendo dudoso el último estado de la posesión, entre el que se dice poseedor y el que pretende despojarlo, o turbarlo en ella, se juzgará que la tiene quien probare una más antigua.

Cuando no fuese posible determinar así, quien tiene la posesión actual, o cual de las dos es la más caracterizada, ordenará el juez que las partes ventilen su derecho en el petitorio, y dispondrá el secuestro de la cosa a las resultas de ese juicio.

Poseción y propiedad.

1433. La posesión nada tiene de común con el derecho de poseer, y será inútil la prueba de éste en las acciones posesorias. Sin embargo, el juez podrá examinar los títulos presentados para apreciar la naturaleza, extensión y eficacia de la posesión.

Requisitos para las acciones posesorias.

1434. Para que la posesión dé lugar a las acciones posesorias, debe ser pública e inequívoca, sin exigirse la buena

1435. Quien sin consentimiento del poseedor, le turba en la posesión o le priva de ella, cometerá un acto ilícito, a menos que hubiere procedido, autorizado por la ley.

Turbación y desposesión.

El turbado en su posesión podrá reclamar del autor y de los sucesores de éste, aunque fueren de buena fe, la cesación de los hechos, y cuando se temiere otros nuevos, el poseedor podrá pedir además, sean prohibidos para el futuro.

El desposeído tendrá acción para exigir el reintegro contra el autor de la desposesión y los sucesores de éste, universales o particulares.

1436. Las acciones posesorias procederán, aunque el demandado pretendiere que no impugna la posesión del actor, cuando los hechos invocados causaren por su naturaleza, la turbación o el despojo.

1437. En los supuestos del art. 1435, la demanda no procederá, cuando la posesión de quien la promoviere fuere viciosa respecto del autor o de su causante y hubiere sido adquirida durante el año que precedió a la turbación o despojo.

Poseedores no protegidos.

Tampoco se admitirá respecto de los terceros que poseyeren cosas muebles como sucesores particulares de buena fe, sino en el caso de que hubieran sido aquéllas robadas o perdidas.

1438. El turbado o desposeído que tuviere derecho a poseer, podrá intentar la acción real que le compete, o servirse de las acciones posesorias, con arreglo a las normas que siguen:

Petitorio y posesorio. Normas.

- 1º No podrá acumular el petitorio y el posesorio. Intentada acción real, se perderá el derecho a deducir las acciones posesorias; pero si usare una de éstas, podrá iniciar después aquélla.
- 2º Iniciado el juicio posesorio, el petitorio no podrá admitirse antes de que la instancia posesoria haya terminado.
- 3º El actor en el petitorio no podrá usar de acciones posesorias por turbaciones anteriores a la demanda, pero podrá hacerlo el demandado.
- 4º Si en el posesorio fuere vencido el demandado, no podrá comenzar el petitorio, sin haber satisfecho plenamente las condenaciones pronunciadas en su contra.

En el caso del inc. 1º, el juez del petitorio, podrá tomar en el curso de la instancia, medidas provisionales relativas a la guarda y conservación de la cosa litigiosa.

Poseedores de inmuebles que lindan con calles, etc.

1439. Los poseedores de inmuebles que limitan con calles, caminos, ríos y lagos no navegables, podrán intentar acciones posesorias para proteger los derechos que este Código concede a los propietarios de esos bienes.

Terceros no afectados por ciertas sentencias.

1440. Las acciones posesorias procederán en favor de los poseedores, contra quienes no produzcan efecto las sentencias que ordenaren la entrega o afectación de cosas, según las reglas generales de este Código.

Obra nueva.

1441. La obra nueva que comenzare a ejecutarse en inmuebles poseídos por el actor, o la destrucción de las ya existentes en ellos, se juzgará como despojo regido por el art. 1435, última parte. Si lo fuere en inmuebles no poseídos por el demandante, se aplicará la segunda parte del mismo artículo. En ambos casos, la acción tendrá por objeto suspender la obra durante el juicio, y una vez terminado éste, destruir o reparar lo hecho. El juez podrá negar la suspensión provisional, si no la estimare justificada por las circunstancias.

Extinción de las acciones posesorias.

1442. Las acciones posesorias se extinguirán en el caso del art. 328, inc. 7º, y cuando por sentencia firme, posterior a los hechos, se decida que el autor de ellos tenía un derecho en la cosa, que le facultaba para exigir el restablecimiento de la posesión.

Coposeedores.

1443. Cualquiera de los coposeedores podrá ejercer las acciones posesorias contra terceros sin el concurso de los otros, y también contra éstos, si lo excluyeren o turbaren en el ejercicio de la posesión común. Ellas no procederán cuando la controversia entre coposeedores sólo versare sobre la mayor o menor participación de cada uno.

Poseedores de partes materiales de una cosa.

1444. Corresponden las acciones posesorias a los poseedores de partes materiales de una cosa, como locales distintos, de habitación, comercio u otros.

Poseedores mediatos.

1445. Los poseedores mediatos podrán ejercer las acciones posesorias por hechos producidos contra el poseedor inmediato, y pedir que éste sea reintegrado en su posesión, y si no quisiera recibir la cosa, quedarán facultados para tomarla directamente.

Podrán también usar del derecho establecido en el art 1435, segunda parte.

1446. Las acciones posesorias serán juzgadas sumariamente y en la forma prescripta por las leyes procesales. Cuando la sentencia hiciere lugar a ellas, podrá disponer según los casos, que se restituya la cosa, el cese de la turbación, el restablecimiento a costa del vencido del estado material existente en el momento del hecho que funda la demanda, el resarcimiento de los daños causados, y el pago de los gastos del pleito.

Acciones posesorias:
trámite y sentencia.

La indemnización no afectará a los sucesores particulares de buena fe, y el pago de los gastos de restablecimiento y del juicio podrá serles dispensado, según las circunstancias de la causa.

1447. La sentencia dictada en el juicio sumario revestirá carácter de definitiva, sin perjuicio del derecho de las partes para intentar las acciones reales que les competan.

Carácter definitivo de
la sentencia.

SECCION SEGUNDA

DE LOS DERECHOS REALES

TITULO I

Disposiciones generales

1448. Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Los contratos o disposiciones de última voluntad que tuvieran por fin constituir o modificar los que este Código reconoce, valdrán sólo como actos constitutivos de derechos personales, si como tales pudieren valer.

Fuente.

1449. Son derechos reales:

Enumeración.

- 1º El dominio y el condominio.
- 2º El usufructo.
- 3º El uso y la habitación.
- 4º Las servidumbres activas.
- 5º La hipoteca.
- 6º La prenda.
- 7º La anticresis.
- 8º Los censos.

Derechos reales con
validados.

1450. La constitución de derechos reales que se hiciere válida conforme a lo dispuesto en el art. 199, no perjudicará la eficacia de los establecidos según las reglas especiales de este Código.

TÍTULO II

De la inscripción y de la prenotación de los derechos reales sobre inmuebles

Necesidad de la ins-
cripción.

1451. Para transferir el dominio de los inmuebles, gravarlos con derechos reales y transmitir o afectar estos últimos por actos entre vivos, será necesario el acuerdo de las partes sobre esa transmisión o afectación, y que ella se inscriba en el Registro.

El contrato no inscripto, sólo engendrará obligaciones personales. Cuando fuere otorgado por escritura pública, autorizará también a exigir su inscripción.

Otros actos jurídicos
que deben registrar-
se.

1452. Será necesario inscribir, además, respecto de los inmuebles:

- 1º Toda modificación de derechos reales sobre ellos que se hiciere por contrato, rigiendo, con respecto a la falta de inscripción, lo dispuesto en el artículo anterior.
- 2º La renuncia a un derecho real.
- 3º Toda transmisión, adquisición, modificación y extinción de derechos reales, sea cual fuere la causa que las determine.
- 4º Las sentencias firmes que se refieran a derechos reales.
- 5º Las particiones de bienes.

Efecto de la inscrip-
ción.

1453. La inscripción producirá los siguientes efectos:

- 1º Hará presumir que el derecho inscripto corresponde a su titular, y en el supuesto de cancelación, que él ha quedado extinguido.
- 2º Validará con respecto a terceros, todo derecho que para su constitución deba ser inscripto; mas no tornará eficaces los actos jurídicos nulos o anulables.
- 3º El orden de preferencia entre los derechos establecidos sobre un inmueble, se determina por la fecha de

las respectivas inscripciones. Se juzgará tal, para todos sus efectos, la del asiento de presentación al Registro.

Los derechos inscriptos simultáneamente se consideran de igual grado.

1454. La renuncia a un derecho real sobre inmuebles, no producirá efecto antes de quedar cancelado aquél en el Registro; pero el beneficiario de ella podrá exigir el cumplimiento de tal requisito. Será aplicable esta misma regla, para las modificaciones de derechos reales sobre inmuebles derivadas de una renuncia. En todos los casos, ésta deberá constar por escritura pública, o por testamento.

Renuncia a un derecho real.

1455. Cuando los derechos reales, a que se refiere el artículo precedente, estuvieren gravados en favor de un tercero, se exigirá el acuerdo de éste, para la renuncia. Si el derecho objeto de la misma, perteneciere al propietario de otro inmueble, que reconociere un gravamen de igual carácter, será necesaria la conformidad del titular, a menos que él no se perjudicare con la renuncia.

En todos los casos, el acuerdo deberá ser inscripto.

1456. No se permitirá la inscripción de ningún derecho si no estuviere anotado su antecedente, a menos de recabarse el registro simultáneo de ambos. En este caso, el adquirente podrá exigir del propietario, o de quien lo hubiere constituido, la anotación de su título, y cuando se opusiere, pedir la judicialmente.

Inscripción de un derecho no registrado.

1457. La acción reivindicatoria del legítimo propietario, o cualquier otra real, así como las de nulidad, resolución o revocación de los actos jurídicos, y la de reducción de las donaciones, no podrán intentarse contra terceros, ni producir efecto en cuanto a ellos, siempre que ignorando los vicios del título de su autor y por actos de carácter oneroso, hubieren adquirido derechos de quien aparezca en el Registro, en condiciones para constituirlos.

Acciones no permitidas contra terceros.

Podrá, sin embargo, la parte interesada, desconocer los derechos inscriptos con fecha posterior a la prenotación hecha a su pedido.

En el caso de este artículo, los adquirentes sucesivos, aún a título gratuito, quedarán a cubierto de toda evicción.

Las presentes reglas se aplicarán a las nulidades, que en caso de concurso, determinan este Código y el de Comercio.

Prenotación.

1458. Podrá efectuarse una anotación preventiva en el Registro:

- 1º Para asegurar el establecimiento, modificación, gravamen o extinción de un derecho real inmobiliario, o para alterar su rango.
- 2º Para seguridad de los derechos reales o los actos jurídicos que los modifiquen, sujetos a condición suspensiva o resolutoria, y que por tal causa, no puedan inscribirse.

Efecto de la misma.

1459. La anotación preventiva hará ineficaz todo acto dispositivo ulterior referente al inmueble o al derecho, así garantizado, pero sólo en cuanto perjudicare a éste, aunque provenga de expropiación forzada, juicio de apremio, o de actos regulares del síndico de un concurso.

En estas prenotaciones, la preferencia se determinará con arreglo a lo dispuesto en el art. 1453, inc. 3º.

Ineficacia del conocimiento de los terceros.

1460. La falta de inscripción o de prenotación no se entenderá subsanada con la noticia que tuvieren los terceros sobre la existencia del derecho, por otras vías que las del Registro, salvo que mediare colusión fraudulenta entre ellos y el constituyente, o que el conocimiento resultare del ejercicio de un cargo, o del propio título adquisitivo, o de cualquier participación en el instrumento no inscripto.

Buena fe de los terceros.

1461. Las disposiciones de los artículos precedentes se aplicarán a los terceros, que sobre la base de los derechos inscriptos, realizaren prestaciones o actos jurídicos con el titular registrado.

Regirán asimismo, respecto de quienes hubieren adquirido o modificado derechos pertenecientes a personas, que estuvieron inhibidas o limitadas en su capacidad para disponer.

Actos anteriores a la inscripción de la incapacidad.

1462. La pérdida o la disminución de la capacidad para disponer en el constituyente, o en el que modifica o renuncia un derecho, no obstará a que se inscriban los actos jurídicos válidos que se hubieren presentado al Registro con ese fin, antes de ser anotada la incapacidad.

Requisitos para la prenotación.

1463. La prenotación podrá efectuarse con el asentimiento de aquel a quien compete el derecho afectado por ella.

o mediante providencia judicial interlocutoria o definitiva. En este caso, no será necesario justificar el peligro en la demora para el derecho que se intenta asegurar; con tal que éste aparezca verosímil. Si fuere condicional o dependiere de término, deberá acreditarse aquella circunstancia.

1464. Quien tuviere derechos sobre el inmueble, afectados por la prenotación, y contare con una defensa perentoria que permita rechazar las pretensiones garantizadas por ella, podrá exigir que se la cancele en el Registro. Si el acreedor fuere desconocido, o se hallare ausente, se le citará por edictos, y si no compareciere, se le nombrará defensor. La sentencia que ordene cancelar, extinguirá los efectos de la prenotación.

Cancelación de la prenotación.

1465. Cuando la adquisición o modificación de un derecho inscripto, o fundado en él, fuere nula respecto de quien obtuvo la prenotación, deberá el adquirente prestar su conformidad, para que se practiquen los asientos o cancelaciones a fin de hacer efectivo el derecho garantizado.

Actos nulos respecto de quien ha obtenido la prenotación.

Se aplicará también este precepto a las prohibiciones para enajenar.

1466. Si una inscripción o prenotación no coincidiera con la realidad, la persona, cuyo derecho no se hallare registrado, o no lo estuviere exactamente, o se perjudicare con la inscripción de cargas o restricciones que no existan, podrá demandar a quien afectare la rectificación, para que preste su asentimiento. Si para ello fuere necesario inscribir previamente el derecho del requerido, podrá exigírsele el cumplimiento de este requisito.

Rectificación de la inscripción y prenotación.

La rectificación se hará por acuerdo del obligado a ella, o en virtud de sentencia firme.

La facultad concedida por este artículo, prescribe juntamente con el derecho que habría de inscribirse.

1467. Entablada la demanda en los casos del artículo anterior, podrá ordenar el juez se inscriba una oposición contra la exactitud de los asientos respectivos. No será necesario justificar peligro en la demora, pero sí, que es verosímil el derecho ejercido.

Juicio de rectificación.

En caso de sentencia favorable, o de reconocimiento ulterior del demandado, la inscripción invalidará respecto del actor, en tanto le perjudiquen, los actos de disposición o las restricciones a la capacidad, inscriptos posteriormente.

Cancelaciones indebi-
das.

1468. Si por error, o en virtud de acto anulado luego, de instrumento reconocido como falso, o de sentencia revocada, se cancelara indebidamente una inscripción, una prenotación, o el asiento que autoriza el art. 1467, estos no revivirán y será menester registrarlos otra vez.

El nuevo registro producirá efecto desde su fecha, para quienes hubieren adquirido derechos después de la cancelación; pero tendrá la fuerza del primitivo, respecto de los titulares de los inscriptos con anterioridad a ella, salvo que a consecuencia de la misma, sufrieren perjuicios en virtud de hechos realizados o aceptados de buena fe.

No podrá restablecerse el asiento cancelado, cuando la acción estuviere prescripta, o extinguido el derecho.

Derecho de los perju-
dicados por invalida-
ción de anotaciones.

1469. Siempre que un derecho de resolución, o revocatorio, o una acción de nulidad o de reivindicación, perjudicare los derechos de terceros adquirentes, o de acreedores privilegiados, serán atribuidas a éstos las sumas que el titular anterior o el reivindicante debieren reembolsar, en la medida que les corresponda por su orden de preferencia.

TÍTULO III

Del dominio en general

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Facultades.

1470. El dueño de una cosa tiene el derecho de usar, gozar y disponer de ella, sin otras limitaciones que las establecidas en las leyes, y el de reivindicarla contra cualquiera que injustamente la posea.

Caracteres.

El dominio se presume exclusivo e ilimitado. Es perpetuo, y se pierde en los casos de extinción, previstos por este Código.

Espacio aéreo y subsuelo.

1471. Con las reservas contenidas en la ley, la propiedad de un inmueble, además de comprender la superficie del terreno, se extiende a todo el espacio aéreo y al subsuelo que dentro de sus límites fueren útiles al ejercicio de ese derecho.

No podrá el dueño impedir los actos que se realicen a tal altura, o a tal profundidad, que no tenga interés en excluirlos.

1472. La propiedad de una cosa comprende simultáneamente la de los accesorios que se encuentren en ella, unidos de un modo natural o artificial.

Accesorios.

Todas las construcciones, plantaciones y obras existentes en la superficie o en el interior de un terreno, pertenecen al dueño de éste sin admitir prueba en contra, y sin perjuicio del derecho de los usufructuarios y locatarios, y de las indemnizaciones que procedan a favor de tercero, según las reglas de este Código.

1473. Los propietarios de bienes raíces no podrán constituir sobre ellos derechos de enfiteusis, ni de superficie, ni de dominio limitado por término cierto o incierto, ni hacer en ellos vinculación alguna; ni tampoco dividirlos horizontalmente entre varios dueños.

Facultades negadas a los propietarios de inmuebles.

1474. Nadie puede ser privado del dominio, o de alguna de sus facultades, sino por causa de utilidad pública; ni desposeído sin previa y justa indemnización. Se entenderá por ésta, el pago del valor real de la cosa o del derecho, y también el del perjuicio directo que la privación le ocasiona.

Requisitos para expropiar.

1475. Cuando la urgencia de la expropiación fuere tan imperiosa, que no permita emplear ninguna forma de procedimiento, la autoridad pública, bajo su responsabilidad, podrá disponer inmediatamente de los bienes.

Expropiación urgente.

1476. El propietario no podrá impedir a otro el uso de la cosa, cuando le fuere indispensable a éste para evitar un peligro actual, incomparablemente mayor que el daño que sufra con ello. El perjuicio deberá serle indemnizado.

Uso de la cosa ajena en caso de necesidad.

1477. Cuando después de construido un edificio, su propietario, sin dolo ni negligencia grave, hubiere invadido el terreno del vecino, el dueño de éste deberá tolerar lo hecho, a menos de haber mediado oposición antes o en el momento de excederse la línea divisoria.

Construcción sobre terreno del vecino.

El resarcimiento se ajustará a lo dispuesto en el art. 1474, y el terreno ocupado pasará al dominio del que construyó, a no ser que éste se allane a retirar lo edificado.

Si el empleo o la explotación normal de la heredad vecina sufre menoscabo, el propietario podrá exigir la adquisición completa.

En todos los casos, si no se abonare el precio, podrá ser obligado el constructor a demoler, y la expropiación quedará sin efecto.

Resolución del dominio: plazo.

1478. Las condiciones resolutorias, o las estipulaciones que permitieran resolver el dominio a voluntad del propietario enajenante, se entenderán limitadas al término de cinco años, aunque no pudiera realizarse el hecho previsto dentro de aquel plazo, o éste sea mayor o incierto.

Si los cinco años transcurrieran sin haberse producido la resolución, el dominio quedará, por ese solo hecho, definitivamente establecido, sin perjuicio de lo dispuesto en el título precedente.

Prohibiciones de enajenar.

1479. Las prohibiciones de enajenar y las cláusulas de no poder ser vendidos los bienes, en caso de ejecutarse por deudas, se tendrán como no escritas, y el dominio, por definitivo, desde su constitución.

Dominio fiduciario.

1480. Cuando por la existencia de un fideicomiso condicional, debiera restituirse a tercero la cosa heredada, legada o donada, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. Si fuere a plazo, se entenderá establecido el de cinco años, pasando luego el dominio al nombrado en segundo lugar.

CAPÍTULO II

De la adquisición y pérdida del dominio sobre inmuebles

§ 1. — Disposiciones generales

Medios de adquisición.

1481. Se adquiere la propiedad inmueble:

- 1º Por inscripción del título de transferencia en el Registro.
- 2º Por accesión.
- 3º Por usucapión.
- 4º Por causa de muerte.

Acuerdo e inscripción.

1482. La transmisión del dominio de un inmueble, convenida entre el enajenante y el adquirente, se realiza por la inscripción del acuerdo en el Registro.

1483. Cuando las partes convinieran que la transferencia se extendiera a los accesorios del inmueble, el adquirente recibirá, con la propiedad de aquél, los que existían en el momento de la enajenación, de pertenencia del enajenante. En la duda, se presume que los accesorios se encuentran comprendidos.

Transferencia de los accesorios.

Si por virtud de la transferencia, el adquirente entra en posesión de accesorios que no pertenecieron al enajenante, o que estuvieren gravados con derechos en provecho de un tercero, se aplicarán los principios generales sobre la posesión de las cosas muebles. Para apreciar la buena fe del adquirente, se estará a la época de la toma de la posesión.

1484. La inscripción en el Registro no impide las acciones que procedan entre enajenante y adquirente para recuperar la cosa, ni tampoco las dirigidas contra terceros en los casos de anotación preventiva, respecto de los derechos constituidos después de ésta.

Acciones no impedidas por la inscripción.

1485. Los actos jurídicos entre vivos, que declaren o modifiquen el dominio, se registrarán por las disposiciones precedentes.

Actos que declaran o modifican el dominio.

1486. Se pierde el dominio de los inmuebles:

Pérdida del dominio.

- 1º Por su enajenación.
- 2º Por transmisión o declaración judicial.
- 3º Por ejecución de sentencia.
- 4º Por expropiación en caso de utilidad pública.
- 5º Por el abandono en virtud de escritura pública, o de la declaración correspondiente ante el Registro, debidamente inscriptas, y en los demás casos previstos en este Código.

1487. Los inmuebles abandonados pertenecen al Estado Nacional, o a las provincias, en cuya jurisdicción inmediata se encuentran.

Inmuebles abandonados.

Si lo abandonado fuese la parte de un condominio, ella acrecerá proporcionalmente a la de los otros comuneros. En este caso, será necesario que la declaración se efectúe por escritura pública.

El propietario exclusivo de una cosa, no podrá hacer abandono por una parte indivisa de ella.

§ 2. — Del aluvión y la avulsión

Acrecentamiento natural causado por las aguas.

1488. Pertenecen a los dueños de las heredades confinantes con ríos navegables o no, arroyos y torrentes, el acrecentamiento que reciban por efecto de la sedimentación o retiro natural de las aguas. Lo acrecido se adquiere cuando se adhiere al terreno, dejando de hacer parte del cauce. Esta disposición es aplicable a los lagos.

Acrecentamiento por obras de los ribereños.

1489. El aumento de tierra no se reputará efecto espontáneo de las aguas, si fuere la consecuencia de obras hechas por unos ribereños en perjuicio de otros. Estos podrán pedir el restablecimiento de las aguas en su álveo, y si no fuere posible, la destrucción de esas obras.

Cualquiera de los ribereños podrá exigir la supresión de los trabajos efectuados por otro, cuando no fueren simplemente defensivos y avanzaren sobre la corriente del agua.

Tierra dividida por la corriente.

1490. La isla separada de un fundo por la corriente de las aguas al abrirse un nuevo cauce, continuará perteneciendo al dueño de aquél; pero el álveo entrará en el dominio público sin indemnización alguna. Si las aguas lo abandonaran, sea por obras autorizadas, sea naturalmente, el dueño de la heredad recobraré el dominio.

Aluvión que acrecienta varias heredades.

1491. Cuando se formare aluvión a lo largo de varias heredades, se dividirá entre los propietarios con derecho a él, en proporción al frente de cada una sobre el antiguo río.

Aluviones que corresponden al Estado.

1492. Corresponde al Estado:

- 1º El aluvión que accediere a un camino del dominio público.
- 2º La parte del álveo, descubierta por causa de canalización, diques u otras obras artificiales.
- 3º El aluvión que se produzca en la orilla del mar.

Cauce abandonado.

1493. El cauce totalmente abandonado, de los ríos y lagos pertenecerá al dominio privado del Estado. El de los ríos no navegables, de los arroyos y pequeñas lagunas, a los propietarios ribereños, y hasta la línea media, cuando fuere divisorio. En el primer caso, si las aguas no se reintegraren al cauce primitivo, por obras, o naturalmente, se tendrán como sobrantes de tierra pública, y de acuerdo con las leyes

respectivas, los ribereños serán preferidos para su adquisición.

El importe de esos sobrantes se entregará a los propietarios de las heredades, en que las aguas se hubieren abierto un nuevo álveo, proporcionalmente a la superficie perdida, sin otra indemnización.

1494. El acrecentamiento de terreno pertenecerá al propietario de la heredad confinante con las aguas, cuando se formare de un modo súbito por efecto natural de la corriente, o si procediere de plantaciones u obras defensivas realizadas en su fundo.

Avulsión.

También le corresponderá en el caso del art. 1489, cuando los ribereños perjudicados no usaren de los derechos que la ley les confiere.

1495. Si la corriente de las aguas segregare de una ribera una parte del terreno transportándola a otra heredad, su dueño podrá retirarla, mientras no se hubiere producido su adhesión natural, pero no estará obligado a hacerlo.

Segregación de parte de un terreno, y adhesión a otra heredad.

En caso de objetos no susceptibles de adhesión natural, se aplicará lo dispuesto sobre cosas perdidas.

§ 3. — De la edificación y plantación

1496. El que en terreno propio siembre, plante, o edifique con materiales ajenos, adquiere la propiedad de éstos, pero deberá su valor. Si hubiere procedido de mala fe, responderá, además, por los daños. El dueño de los materiales podrá reivindicarlos, si ulteriormente llegaren a separarse.

En terreno propio, con material ajeno.

1497. Cuando de buena fe y sin derecho, alguien sembrare, edificare o plantare en terreno ajeno, el dueño de éste podrá impedir la demolición o el deterioro de los trabajos, pero deberá abonarle el mayor valor producido por causa de esas obras en el momento de la restitución.

En terreno ajeno.

No deberán pagarse las mejoras voluptuarias. El autor podrá levantarlas, si con ello no causare perjuicio al inmueble.

1498. El que edificare, plantare o sembrare, sabiendo que no tenía derecho en el bien, estará obligado, si procedió

Trabajos realizados de mala fe.

sin autorización bastante del propietario, a reponer a su costa las cosas en su estado primitivo.

Si el dueño quisiera conservar lo hecho, no podrán ser destruidas las mejoras. Deberá entonces, el mayor valor que a causa de los trabajos hubiera adquirido el inmueble. Las mejoras voluptuarias podrán ser retenidas siempre que no se perjudique la cosa, y que de ello resulte algún beneficio para quien lo realiza.

Mala fe de ambas partes.

1499. Si hubiere mala fe de las dos partes, se reglarán los derechos de ambas según lo dispuesto en el art. 1497. Se entenderá que existió mala fe en el dueño cuando las obras se hicieron a la vista de él y sin oposición suya.

Impensas y mejoras a cargo del dueño.

1500. El dueño no deberá las impensas y mejoras útiles ulteriores a la notificación de la demanda; pero sí las necesarias.

Trabajos con material ajeno.

1501. Cuando un tercero ejecutare la obra con trabajo o materiales ajenos, el propietario de éstos o quienes los hubieren prestado, no podrán demandar al dueño del terreno, y si ejercer tan sólo las acciones de su deudor.

Derecho de retención.

1502. El poseedor, en el caso del art. 1497, tendrá derecho de retención, y también en el del art. 1498, hasta que el propietario hubiese optado por demoler, y en su caso, hasta ser indemnizado.

CAPITULO III

De la adquisición y pérdida del dominio de cosas muebles

§ 1. — De la apropiación

Muebles sin dueño o abandonados.

1503. Pueden ser apropiadas las cosas muebles sin dueño o abandonadas por quien lo fuere, con ánimo de renunciar al dominio.

Si el abandono se hubiera efectuado para favorecer a ciertas personas, sólo éstas podrán aprehenderlas. Si otras las toman, quien las abandonó podrá reivindicarlas o exigir su valor.

Muebles no apropiados.

No se comprenden en la apropiación, las cosas perdidas, las que sin voluntad de los dueños cayeren al mar o a los

ríos, o fueren arrojadas para alijar; ni los buques, máquinas aéreas, o los despojos de los accidentes de todo género.

En caso de duda, se entenderá que la cosa, si es de algún valor, ha sido perdida.

1504. El que hallare una cosa perdida y la tomare, cargará mientras la retenga, con las obligaciones del depositario que reciba recompensa por sus cuidados. Si conociere o pudiere conocer quien es su dueño, deberá, o darle noticia inmediata, o bien entregar el objeto al juez o a la policía del lugar, para que se anuncie el hallazgo al propietario en su caso, o por avisos que se publicarán durante seis meses, de treinta en treinta días.

Derechos y obligaciones de quien tomó una cosa perdida.

Transcurrido ese término sin que se justifique el dominio, se venderá la cosa en pública subasta, pudiendo anticiparse la venta, si fuere corruptible o de conservación dispendiosa. Deducidos del producto, los gastos de aprehensión, mantenimiento y una recompensa para el que la encontró, el remanente pertenecerá a la municipalidad del lugar en que fué hallada.

1505. Siempre que antes de la venta apareciere el dueño, le será restituída la cosa, pero deberá lo que a título de recompensa, adjudicare el juez a quien la halló. Si también la hubiere ofrecido el dueño, el que la encontró podrá elegir entre ambas.

Derechos del dueño.

Cuando se presentare después de la venta, el propietario sólo tendrá derecho a que se le restituya el sobrante a que se refiere el art. 1504.

1506. Será ilícita la apropiación que no se ajustare a las reglas precedentes, como también la que se hiciere de los despojos mencionados en el art. 1503.

Apropiaciones ilícitas.

1507. Se podrá cazar en terreno propio y también en fundo de otro, siempre que éste no se hallare cercado, plantado o cultivado, debiendo respetarse los reglamentos policiales.

Caza.

La caza obtenida sin permiso del dueño en los terrenos ajenos que antes se indican, pertenecerá a éste, debiendo el cazador pagar el daño que hubiera causado.

1508. El animal bravío o salvaje que se hallara en su libertad natural, pertenecerá al cazador que lo tomase, o en cuyas trampas cayera. Tendrá derecho a la caza, a pesar de que otro lo hubiera aprehendido, cuando fuese en seguimiento

Animales salvajes, domésticos y domesticados.

de ella, una vez herida. Los animales domésticos no serán susceptibles de aprehensión, aunque huyendo se acogieren a predios ajenos. Los domesticados no podrán serlo, mientras su dueño fuere en procura de ellos, pero si emigrando, se habituasen a vivir en otro inmueble, pertenecerán al propietario de éste, siempre que no se hubiera valido de artificio para atraerlos. En caso de emplearlo, responderá de él como por acto ilícito.

Enjambres.

1509. Las abejas, que huyendo de su colmena, posaren en heredad no perteneciente a su dueño, tornarán a su libertad natural, si aquél no fuere en su seguimiento. Salvo este caso, corresponderán a quien las tomare, pero cuando se incorporasen a otra colmena ya ocupada, serán del propietario de ésta, no obstante que el anterior continuare en su persecución.

Para penetrar en seguimiento de enjambres o de animales domesticados, en heredades ajenas, cercadas o cultivadas, será necesario el permiso del dueño.

Pesca.

1510. La pesca es libre en los mares, así como en los lagos y ríos navegables. Cuando ellos no lo fueren, lo mismo que en los arroyos, ese derecho corresponderá solamente a los propietarios ribereños, desde su orilla hasta el medio del cauce.

La pesca queda sujeta a los reglamentos dictados por la Nación o por las provincias.

Tesoro.

1511. Se tendrá por tesoro, todo objeto de valer, sin dueño conocido, que estuviera oculto o enterrado en un inmueble, sea de creación antigua o reciente. No lo serán, aquellos que se encuentran en las sepulturas, o en los lugares públicos destinados a ese fin.

El que halle un tesoro en casa o fundo propio, adquiere el dominio de él, pero si el descubrimiento fuere en predio ajeno, lo dividirá por mitad con el dueño de éste.

Descubridor.

1512. Repútase descubridor al primero que por obra de la casualidad lo hizo visible, en todo o en parte, no obstante ignorar que se trataba de un tesoro, tome o no posesión de él, y aunque otras personas hubieran trabajado en su compañía.

Si en el mismo lugar, o en alguno inmediato, se hallare uno nuevo, será descubridor, quien primero lo hiciere visible. No así el obrero a quien el dueño del predio hubiere encargado la búsqueda, ni los que la hicieron sin autorización del

propietario. En ambos casos, pertenecerá a éste, íntegramente el hallazgo.

1513. El obrero, que trabajando en fundo ajeno, encontrare un tesoro, tendrá derecho a la mitad de él, aunque la persona que le encomendó la tarea le hubiere anunciado la posibilidad del hallazgo.

Hallazgo por quien trabaja en fundo ajeno.

Esta regla se aplicará a quien emprendiere trabajos en predio ajeno, con otro objeto que el de buscar tesoros, tenga o no la anuencia del propietario.

1514. No será permitida la búsqueda de tesoros en predio ajeno, sin licencia del dueño o de quien lo represente. Tanto el poseedor inmediato como el coposeedor, podrán emprenderla, con tal de que restituyan el inmueble al estado en que se hallaba.

Búsqueda de tesoros.

Si alguien dijere que tiene un tesoro en fundo de otro, y designare el lugar en que se encuentra, podrá buscarlo, aún sin el consentimiento del propietario, pero garantizando la indemnización de todo daño.

1515. Cuando el que hallare un tesoro fuere copropietario, le corresponderá la mitad como descubridor y recibirá sobre la otra una parte proporcional a su derecho en el dominio.

Tesoro y copropiedad.

1516. Descubierto un tesoro, quien se diga su dueño, podrá justificar el dominio, mediante todo género de pruebas.

Prueba de la propiedad del tesoro.

Se presume que los objetos de origen reciente, pertenecen al dueño del inmueble en que se encontraren, si aquél falleció en la casa que hacía parte del predio.

1517. Serán aplicables las reglas de los artículos anteriores, al tesoro hallado dentro de un mueble.

Tesoro hallado en un mueble.

Quando se descubriese en un inmueble hipotecado, dado en prenda o en anticresis, el tesoro no se entenderá comprendido en los derechos del acreedor.

Idem en inmueble gravado.

§ 2. — De la especificación y la adjunción

1518. El que con su trabajo, de buena o mala fe, transformare materia ajena en una cosa nueva, la hará suya, aunque fuere posible volverla a su forma anterior. En los dos casos, el que especifique deberá pagar lo que valiere la materia, pero en el segundo, el dueño de esta tendrá derecho a ser in-

Especificación.

demnizado de todo daño, si no prefiriese tomar la cosa, pagando al transformador el aumento de valor que hubiere adquirido.

Adjunción.

1519. Cuando dos cosas muebles, pertenecientes a distintos propietarios, se unieren formando partes integrantes de una sola, ésta pertenecerá al dueño de la principal, aún en el caso de ser posible la separación, mas deberá pagar el importe de lo accesorio.

Si no se pudiese determinar cuál de las cosas es la principal, sus dueños quedarán en condominio proporcionalmente al valor de ellas en el momento de la unión.

Mezcla y confusión.

1520. El mismo principio regirá, siempre que por un hecho casual o voluntario, dos cosas muebles de distintas personas, se mezclaren o confundieren, resultando materialmente inseparables, o cuando la división sólo pudiera hacerse con gastos desproporcionados.

Si fuere posible separarlas, ello se hará a costa común, cuando la mezcla fué casual, o por cuenta de su autor si hubiere sido voluntaria.

Extinción del dominio y derechos reales.

Cuando, de acuerdo con los artículos anteriores se extinguiere el dominio, también fenecerán los otros derechos reales que afecten la cosa. Constituido un condominio, ellos continuarán sobre la parte indivisa; pero si el dueño de un objeto adquiere el conjunto o la nueva especie, los derechos se extenderán a ella o al total.

Indemnización.

1521. Todo el que por efecto de las reglas de este § 2. experimente una lesión en su derecho, deberá ser indemnizado, según los principios del enriquecimiento sin causa, o de los actos ilícitos, en su caso. No podrá pedir se restablezcan las cosas a su estado anterior, pero gozará sobre el importe de ellas, del privilegio contenido en el art. 778. inc. 9º.

Cosas robadas o perdidas.

1522. Cuando se tratare de cosas robadas o perdidas, las disposiciones precedentes sólo se aplicarán al poseedor de buena fe, que hubiere efectuado la especificación o la adjunción.

§ 3. — De la adquisición de los productos y otras partes constitutivas de las cosas

Productos y partes constitutivas.

1523. Pertenecen al propietario de una cosa los productos y las partes constitutivas de ella, aun después de se-

parados, salvo lo dispuesto en cuanto al poseedor de buena fe y a los terceros con derecho al goce.

1524. Quien por virtud de un derecho real, se hallare autorizado para hacer suyos los productos o las partes constitutivas de una cosa ajena, obtendrá la propiedad de ellos por la separación. Los frutos civiles le pertenecerán proporcionalmente al tiempo de existencia de su derecho, aunque no los hubiere percibido.

Apropiación de productos y de frutos. Casos.

1525. Los que sin título poseyeren de buena fe, inmuebles como dueños o por otro derecho real, harán suyos los frutos naturales e industriales, una vez separados, y los civiles, sólo percibiéndolos efectivamente, aunque éstos correspondieren al tiempo de su posesión. Cuando al comienzo de ella existieren explotaciones, también les pertenecerán los productos que hubieren separado; pero deberán al propietario, y en su caso al usufructuario, las sumas percibidas por los que hubieran realizado.

Terminada la posesión, los frutos pendientes corresponderán al dueño o usufructuario; pero será resarcido el poseedor de buena fe, por los gastos efectuados para producirlos. También deberá reintegrársele los impuestos que abonó, relativos a la propiedad en la parte y tiempo de preparación y cultivo de esos frutos.

1526. Si el poseedor fuere de mala fe, pertenecerán al propietario, o al usufructuario en su caso, todos los frutos y productos existentes o realizados, los que deberán restituirse con deducción de los gastos de cultivo y cosecha y de los impuestos que correspondieren, según se dispone en el artículo anterior. Deberá también el valor de las partes constitutivas de que hubiere dispuesto, aunque el precio obtenido por ellas fuere menor. El heredero del poseedor de mala fe, hará suyos los frutos y productos percibidos de buena fe.

1527. Los dos artículos precedentes se aplicarán al poseedor, que dueño de la cosa o titular del uso y goce sobre ella, hubiere constituido derecho real a favor de un tercero, para usar y gozar de ese bien.

1528. Cuando el propietario autorizare a un tercero para apropiarse los productos u otras partes constitutivas de un inmueble y le hubiere conferido la posesión del mismo, los podrá adquirir separándolos; en caso contrario, solamente por la percepción. Si la facultad acordada por el propie-

tario resultare de una obligación a cumplir, no podrá revocarla en tanto que el tercero poseyere la cosa.

La misma regla se aplicará a la autorización concedida por el que no fuere propietario, pero a quien pertenecieren los productos y partes constitutivas de las cosas, una vez separadas. Regirá también, cuando el que hiciere la concesión no tuviere derecho para efectuarla, siempre que el adquirente de ellas fuere de buena fe en el momento de la toma de posesión y en aquel en que los productos y demás partes constitutivas fueron separados.

§ 4. — De la tradición

Requisitos para que transfiera propiedad: justa causa traditio-
nis.

1529. Para que la tradición de una cosa mueble, efectuada por su propietario, permita adquirir el dominio, es indispensable que medie entre las partes acuerdo en transferir y recibir la propiedad.

1530. La entrega material no será necesaria:

Casos en que no es necesaria la entrega material.

1º Si el adquirente poseyera la cosa en el momento en que el acuerdo se produjo, y esa posesión la hubiese tenido del enajenante.

2º Cuando el propietario convenga con el adquirente en quedar como poseedor inmediato.

Si la cosa no hubiere pertenecido al enajenante, el adquirente sólo se convertirá en propietario por medio de la entrega, si tuvo buena fe en el momento de recibirla.

3º Si poseyendo un extraño la cosa, el propietario cediere al adquirente sus acciones de restitución.

Buena fe del adquirente.

1531. En el caso del inc. 3º del artículo anterior, si cedió las acciones no era propietario, el adquirente sólo hará suya la cosa cuando hubiere tenido buena fe en el momento de la cesión y el cedente fuere poseedor mediato. También se convertirá en dueño, cuando no siendo el cedente poseedor mediato, hubiere obtenido del tercero la posesión de la cosa, existiendo buena fe en el acto de la entrega.

Efecto.

1532. Aunque la cosa no perteneciere a quien la transfirió, el adquirente de buena fe la hará suya, salvo que fuere robada o perdida.

La buena fe del adquirente deberá existir al efectuarse la tradición. No la habrá cuando la creencia en el derecho del enajenante, proviniera de culpa por no tomar las informaciones o precauciones ordinarias, según las circunstancias.

Los derechos reales que existieren sobre la cosa, quedarán extinguidos y no podrán hacerse efectivos contra el nuevo propietario, las acciones de resolución, nulidad o rescisión a que estuviere sometido el enajenante, a menos que se impugnara la validez del acuerdo y el vicio de nulidad excluyera la buena fe.

1533. Las acciones derivadas de las relaciones jurídicas entre enajenante y adquirente, sólo se harán efectivas en la cosa, mientras ésta permaneciere en poder del último. También podrá exigirse la restitución, de quien estuviere obligado a ella en virtud de un acto lícito o ilícito.

Exclusión de las acciones persecutorias.

Cuando la tradición se hiciere por cesión de los derechos del enajenante contra el tercero poseedor, no quedarán extinguidos los derechos de éste sobre la cosa, aunque el adquirente fuere de buena fe, pero cesarán en los demás casos, bajo las mismas condiciones que el de propiedad.

1534. No se hallan comprendidas en las disposiciones del presente párrafo, las cosas muebles del dominio público de la Nación y de las provincias.

Muebles excluidos.

Tampoco se aplicarán a las cosas, cuya restitución se solicitare como accesorias de un inmueble reivindicado.

Accesorios de inmueble reivindicado.

1535. La tradición de cosas muebles, en virtud de otro derecho que no sea el dominio, se regirá en cuanto a sus efectos, por las disposiciones del presente párrafo.

Aplicación extensiva.

También se aplicarán, cuando en la transmisión de propiedad de un inmueble se comprendan muebles accesorios, pero cuyo dominio no corresponda al enajenante.

§ 5. — De la propiedad de los ganados y máquinas locomóviles

1536. La marca o señal probará la propiedad del ganado mayor o menor que las llevare, en beneficio de quien las tuviere registradas. Cumplida esta exigencia, ellas constituirán bienes exclusivos de las personas, a quienes se hubieren concedido. Sus titulares podrán transmitir las, pero no se-

Marca y señal.

rán susceptibles de embargo, ni de ejecución por parte de los acreedores.

Transferencia de ganados.

1537. La transferencia del dominio de los ganados, convenida entre el enajenante y el adquirente, deberá realizarse por la inscripción en el Registro. Salvo lo dispuesto sobre cumplimiento de sentencias, no se reconoce otra manera de transmitirlos por actos entre vivos.

La inscripción equivale a título efectivo, y le será aplicable lo dispuesto en el art. 1484.

Transferencia de locomóviles.

1538. La transmisión de la propiedad de toda clase de máquinas locomóviles, se efectuará mediante la inscripción en el Registro, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPÍTULO IV

De la usucapión

Árboles, etc., trasladados por el agua.

1539. La posesión de seis meses hará adquirir el dominio de los árboles, porciones de terreno, u otros objetos que, arrancados por la corriente de los ríos, se depositaren en terreno ajeno.

Cosas robadas o perdidas.

1540. Cuando una cosa mueble, cuya transferencia exija inscripción en el Registro, hubiere sido robada o perdida, el poseedor podrá usucapirla en el término de dos años, contados desde que fuera anotada a su nombre. El plazo se extenderá a tres años, para aquellas que en el mismo supuesto no requieran ser inscriptas.

La posesión deberá ser en ambos casos, de buena fe, continua y en calidad de dueño.

Las reglas del presente título se aplicarán a la usucapión de cosas muebles, y a las dadas en prenda.

Inmueble o derecho real sin buena fe ni título.

1541. Quien hubiere poseído como suyo por espacio de veinte años, un inmueble o un derecho real, de un modo público, continuo y excluyente, podrá adquirirlo sin necesidad de buena fe ni de título, salvo lo dispuesto sobre las servidumbres que lo requieran para la usucapión. En todos los casos, será necesario inscribir la sentencia judicial que reconozca los derechos originados en la posesión.

1542. El coheredero o copartícipe en una masa de bienes y el condómino de un inmueble, podrán adquirir por el transcurso de veinte años, el derecho correspondiente a los demás, cuando se hubieren conducido en forma pública, como únicos propietarios, y hubiere cesado de hecho, por tal causa, la indivisión.

De una masa de bienes por el coheredero, o de una copropiedad por el condómino.

Si lo poseído fué sólo una parte, o la interversión se redujo a bienes determinados, se prescribirá en esa medida, subsistiendo la comunidad o el condominio sobre lo restante.

1543. En el juicio, cuya sentencia deberá inscribirse, según lo dispone la última parte del art. 1541, se observarán las reglas que siguen:

Reglas del juicio para acreditar la usucapción.

- 1º Será competente el juez del lugar, donde estuviere situado el inmueble.
- 2º La demanda será acompañada del certificado del Registro, donde consten las circunstancias requeridas en los incs. 6º, 7º y 8º, como también el de las respectivas oficinas, que acredite que el solicitante y sus autores han abonado a su nombre los impuestos a que esté sujeto el inmueble por todo el tiempo de su posesión. Se agregará asimismo, un plano firmado por peritos y visado por el registro geodésico o gráfico, que determine el área, linderos y ubicación del inmueble.
- 3º En el juicio informativo se admitirá toda clase de prueba documental; pero no la de testigos, a menos que fueren o hubieren sido vecinos del lugar donde esté situada la cosa, y siempre que justifiquen tal calidad.
- 4º Será parte en el juicio el funcionario encargado de la defensa de los intereses fiscales.
- 5º La sentencia que declare adquirido el derecho mandará cancelar la anotación opuesta.
- 6º Si no hubiere asiento en contra, bastará pedir la inscripcón por la vía judicial, debiendo efectuarse previamente las publicaciones del caso, y con los trámites exigidos para las personas inciertas.
- 7º El procedimiento del inciso anterior, se aplicará cuando fuera ignorado el nombre del titular o figurase el de una persona incierta o desaparecida, siempre que

no hubiere anotación alguna efectuada con la anuencia del propietario inscripto, o una declaratoria de sus herederos en los últimos veinte años.

- 8º Registrado el dominio o la declaración de herederos, sólo podrá ser anotada la prescripción adquisitiva, en virtud de sentencia firme, dictada en juicio contencioso contra los titulares inscriptos. Este asiento no podrá ser opuesto a terceros con derecho constituido por el propietario durante el término de la prescripción, ni tampoco frente a quien hubiere hecho anotar el dominio a su nombre durante el mismo intervalo, o una contradicción a las constancias del Registro.

Situación del propietario afectado.

1544. En ningún caso será oponible la sentencia al propietario, a menos de habérsele citado en persona. Podrá éste requerir se anote preventivamente su oposición al título inscripto, y obtener sea cancelado al hacerse lugar a la demanda. Ella deberá deducirse ante el juez que dispuso el registro, dentro de los treinta días contados desde que el impugnante tuvo conocimiento del fallo, o del hecho que originó la nulidad. No podrá intentarse, transcurridos diez años de la ejecutoria.

Justo título y buena fe.

1545. Quien hubiere adquirido un inmueble, de buena fe y con justo título, obtendrá el dominio del mismo por la posesión continua de diez años, contados desde que el acto traslativo estuviere inscripto en el Registro, y siempre que por este medio no hubiere ya logrado la propiedad.

En iguales condiciones podrá adquirir los bienes el que posca una herencia, cuando medie declaratoria a su favor en virtud de la muerte real o presunta del titular.

Este artículo se aplica al legatario de cosa determinada.

Sucesor universal.

1546. El sucesor universal, de quien poseyó un inmueble, aunque sea de mala fe, prescribirá por diez años cuando su autor fué de buena fe, y recíprocamente, no será admitida la prescripción en el caso contrario, a pesar de su buena fe personal. Le será lícito unir su posesión a la del causante.

Sucesor particular.

1547. El sucesor particular de buena fe puede unir su posesión a la de su causante, aunque éste sea de mala fe, y beneficiar del plazo fijado en el art. 1541.

La causa, la naturaleza y los vicios de la posesión del autor, no serán considerados en el adquirente a los efectos de la prescripción.

1548. La posesión debe ser pública y ejercida de acuerdo con el derecho acreditado por el título. Si éste fuere traslativo de dominio, y se hallare inscripto, se presumirá que la posesión es continua desde la fecha del registro.

Requisitos de la posesión.

1549. La buena fe, que exige el art. 1545, es la creencia firme en el poseedor, de ser titular del derecho. Son aplicables al caso las disposiciones contenidas en el Título I, Sección I de este Libro.

Buena fe.

1550. Será justo título para la prescripción, aquel, que teniendo por fin transmitir el dominio o un derecho real, reuna las solemnidades exigidas para ser válido; pero que no lo es, sin embargo, por motivos referentes al derecho del otorgante.

Justo título.

1551. Cuando para la perfección del título fuere necesaria la forma instrumental, será menester inscribir el documento. La falta de éste, sólo podrá ser suplida con arreglo a lo dispuesto en el presente Código, y en ningún caso por información de testigos.

Inscripción del título

1552. El título debe ser verdadero y aplicado en realidad al inmueble poseído. No bastará el putativo, sean cuales fueren las razones del poseedor para juzgarle suficiente.

Ineficacia del título putativo.

Quando el título estuviere subordinado a una condición suspensiva, sólo será eficaz para prescribir desde el día de su cumplimiento. En caso de ser resolutoria, valdrá desde su origen, salvo cuando hubiere acaecido aquélla.

1553. La prescripción adquisitiva fundada en título inscripto, puede oponerse a quienes hubieren constituido sus derechos después de registrado aquél, a menos de prenotación contraria.

Oponibilidad de la usucapción inscripta.

1554. Las reglas del presente título son aplicables al usufructo, uso y habitación y servidumbres prediales, en los casos previstos dentro del presente libro.

Usucapción de derechos reales distintos del dominio.

1555. Rigen para la usucapción las normas contenidas en el Libro I, Sección V, sobre el modo de computar el término, el curso del mismo, la suspensión y la interrupción, como también los arts. 307 y 308.

Aplicación de las reglas sobre cómputo del término.

Interrupción natural
de la usucapión.

1556. La usucapión se interrumpe cuando el poseedor es privado del goce de la cosa durante un año, aunque la nueva posesión sea ilegítima, injusta o violenta.

El efecto expresado no se producirá, a pesar de que la segunda ocupación se prolongue por mayor tiempo, cuando ella hubiere sido a su vez, interrumpida por demanda o por reconocimiento.

Id. por demanda contra el poseedor inmediato.

1557. La demanda contra el poseedor inmediato, en los casos de los arts. 1833 y 1834, interrumpe la prescripción.

Id. por o contra el copropietario.

1558. La interrupción efectuada por uno de los copropietarios, o de los diversos titulares de un derecho real, no aprovecha a los demás, salvo si hubiere resultado privación de la posesión, y recíprocamente, la causada contra cualquiera de ellos no es oponible a los otros.

TÍTULO IV

De las restricciones y límites del dominio

Remisión al derecho
administrativo.

1559. Las restricciones que se impusieren al dominio privado, sólo en el interés público, serán regidas por el derecho administrativo.

Restricciones al dueño
o poseedor de inmuebles.

1560. No podrá el dueño o poseedor de un inmueble:

- 1º Excavar ni abrir fosos, que puedan producir la ruina de los edificios de la heredad vecina, perjudicar las plantaciones existentes en ella, u ocasionar desmoronamientos.
- 2º Causar ruidos o molestias, aunque provengan de establecimientos industriales, cuando por su intensidad o duración, fueren intolerables, excediendo la medida de las incomodidades ordinarias de la vecindad.
- 3º Efectuar cerca de una pared divisoria exclusiva o común, obras que causen humedad, tener establos, depósitos de sal o de materias corrosivas, motores, máquinas, fábricas o empresas peligrosas para la seguridad y solidez de los edificios, o el sosiego y salud de los vecinos, a no ser que se observaren las distancias pres-

criptas por los reglamentos y usos del país. A falta de unos y otros, se recurrirá al juicio de peritos.

- 4° Apoyar sobre un muro exclusivo del vecino, o sobre el común no medianero, obras o construcciones, o usarlo de cualquier manera, sin perjuicio del derecho que acuerdan los arts. 1600, 1603 y 1606.
- 5° Plantar árboles a menos de tres metros de la línea divisoria con la heredad vecina, sea ésta rústica o urbana, esté o no cercada, y aunque se destine a bosque. Si fueren arbustos, no podrán tenerse a menos de un metro.
- 6° Construir los techos, de manera que las aguas pluviales caigan sobre la heredad vecina. Podrán verse sobre la calle o sitios públicos, salvo lo dispuesto por los reglamentos locales.
- 7° Construir ventanas o troneras en un muro medianero, sin el consentimiento del condómino.
- 8° Abrir sobre el muro común contiguo a finca vecina, luceras a menos de tres metros de altura del piso de la habitación, a que se procura dar luz.

Podrán efectuarlo, a contar de esa distancia, en parte en que la pared no sea medianera, debiendo las aberturas protegerse con rejas de hierro, cuyas barras no dejen mayor claro que setenta y dos milímetros.

Si fueran para escaleras, la altura se medirá desde la línea inferior del vano, hasta la grada más elevada que existiere debajo de él.

- 9° Tener vistas sobre el predio vecino por medio de ventanas, balcones u otros voladizos, a menos que intermedie una distancia de tres metros de la línea divisoria; o vistas de costado u oblicuas sobre propiedad ajena, si no mediere una distancia de sesenta centímetros. Esta se contará desde el paramento exterior de la pared, o de los voladizos en su caso, y para las oblicuas, desde el límite de las dos propiedades.

1561. Todo propietario está obligado a mantener sus edificios, de manera que los materiales, que de ellos se desprendan, no puedan lesionar a los vecinos o transeúntes, de-

Conservación de edificios.

biendo satisfacer los daños y perjuicios que por su negligencia les causare.

En caso de daño inminente, el vecino podrá exigir las medidas de seguridad necesarias.

Privación de ventajas.

1562. Los trabajos u obras, que sin causar a los vecinos un perjuicio positivo o una lesión en su derecho de propiedad, tuvieren simplemente por resultado, privarles de las ventajas que hasta entonces gozaran, no darán derecho a indemnización.

Construcción de pozos.

1563. Será necesario un contramuro de treinta centímetros, para construir pozos contra una pared divisoria, sea o no exclusiva.

Obras o servicios provisionales en inmueble vecino.

1564. Si para cualquier obra fuere indispensable establecer andamios, u otro servicio provisional en el inmueble del vecino, hacer pasar obreros o entrar materiales, su dueño no tendrá derecho para impedirlo; pero será a cargo de que la hiciere construir, la indemnización del daño que se causare.

Caída de aguas pluviales.

Toda oposición será resuelta sumariamente por el juez.
1565. Cuando por costumbre del pueblo, los edificios se hallaren contruídos, de manera que las aguas pluviales de parte de los tejados, caigan sobre predio ajeno, el propietario de éste no tendrá derecho para impedirlo. Tal disposición no importará servidumbre para el inmueble que las reciba, y su dueño podrá hacer construcciones sobre la pared divisoria, que modifiquen el descargue del predio vecino; pero con la obligación de ejecutar las obras necesarias para que el agua vaya al suelo en que antes caía.

Aberturas para aire y luz.

1566. El propietario de un inmueble podrá dejar aberturas que no constituyan vistas, en muros levantados a menos de tres metros del límite separativo de la finca vecina, para recibir por ellos aire y luz. Tales aberturas no podrán distar menos de un metro ochenta centímetros del suelo de la habitación o dependencia a la que benefician, contándose la distancia, en la forma prevenida en el inc. 9º del art. 1560.

Obras o establecimientos que causen perjuicio.

1567. Aunque la obra o el establecimiento que causare perjuicio al vecino, hayan sido autorizados, y observados los reglamentos, podrá el juez acordar indemnización, mientras se mantenga ese estado de cosas. El monto de ella se determinará por el perjuicio material causado a la propiedad

vecina, y el menoscabo que en el valor locativo o venal, ésta hubiere sufrido.

1568. Si las ramas de un árbol se extendieren sobre las construcciones, jardines o patios de un predio vecino, el dueño de éste, podrá exigir que se corten en todo lo que invadieren su propiedad.

Ramas y raíces.

Si las raíces penetrasen en el suelo, el propietario podrá cortarlas. Estos derechos corresponden, aún cuando los árboles se hallaren a la distancia fijada por la ley.

1569. La existencia de las ventanas, luceras y aberturas a que se refieren los incs. 8° y 9° del art. 1560 y art. 1566, no impedirá que el propietario del predio vecino, levante una pared que cierre las ventanas en su caso, o les prive de luces.

Derecho a levantar un muro a pesar de las vistas y luces pre-existentes.

Las luceras a que se refieren los inc. 8° y 9° del art. 1560, no importan servidumbres, y el lindero podrá adquirir la medianería de la pared y cerrar las ventanas, siempre que edificarle, apoyándose en dicho muro.

TITULO V

De las aguas

1570. Pertenecen a los propietarios ribereños, el uso y goce de los lagos no navegables por embarcaciones de más de cien toneladas de registro bruto.

Uso y goce de los lagos.

1571. Las vertientes que nazcan y mueran dentro de una misma heredad, pertenecen en dominio, uso y goce al dueño de aquélla.

Vertientes que nazcan y mueren dentro de una heredad.

1572. Los propietarios limitrofes con ríos o lagos que sirvan para la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle destinada a uso público, de treinta y cinco metros a contar de la orilla, sin indemnización alguna. Aunque conservan el dominio de esas bandas, no podrán levantar construcciones en ellas, reparar las existentes, ni deteriorar el terreno.

Calle ribereña.

Si el río atraviesa alguna población, el ancho de la calle podrá reducirse por la respectiva municipalidad, hasta un mínimo de quince metros.

Prohibiciones a los ribereños.

1573. Se prohíbe a los ribereños alterar la corriente natural o el cauce, o efectuar derivaciones sin permiso de la autoridad.

En los ríos navegables queda vedado el uso de las aguas, que estorbe o perjudique el tránsito fluvial.

Alteraciones perjudiciales; facultades para corregirlas.

1574. Si las aguas se estancaran, corrieren más lentas o impetuosas, o torcieren su curso natural, los ribereños, a quienes tales alteraciones perjudiquen, podrán remover los obstáculos, construir obras defensivas, o reparar las destruidas, con el fin de restablecer el estado anterior.

Cuando las alteraciones fueren motivadas por caso fortuito, o fuerza mayor, corresponderán al Estado o provincia los gastos necesarios, pero éstos serán a cargo del ribereño culpable, que hubiere hecho obra perjudicial, o destruido defensas, sin perjuicio de la indemnización del daño.

Obras para represar aguas.

1575. Ni con licencia del Estado Nacional o provincial, podrán los ribereños extender sus diques de represas, más allá del medio del río o arroyo.

Tampoco les será permitido, sin el consentimiento de los otros, represar las aguas de los ríos o arroyos, de manera que las alcen fuera de los límites de su propiedad, hagan más profundo el cauce en el curso superior, o inunden los terrenos inferiores; ni detenerlas de manera que los vecinos queden privados de ellas.

Aguas surgentes.

1576. Los dueños de los terrenos, en los cuales surjan aguas, podrán usar libremente de ellas y cambiar su dirección natural, sin que el hecho de correr por los fundos inferiores acuerde a los propietarios de éstos, derecho alguno.

Cuando sean aguas que corran naturalmente, pertenecen al dominio público, y el dueño no podrá cambiar su dirección. Le será permitido, sin embargo, usar de tales aguas para las necesidades de su heredad.

Aguas pluviales.

1577. Las aguas pluviales pertenecen a los dueños de las heredades donde cayeren, o donde entraren, y les será libre disponer de las mismas o desviarlas, en detrimento de los terrenos inferiores.

Todos pueden reunir las aguas pluviales que caigan o corran en lugares públicos, aunque sea desviando su curso natural, sin que los vecinos puedan alegar ningún derecho sobre ellas.

1578. Los terrenos inferiores deben recibir las aguas que naturalmente y sin obra del hombre, descienden de los superiores.

No se comprenden en este supuesto las subterráneas que afloren por trabajo de arte, las pluviales que cayeren de los techos o de depósitos en que se hubieren recogido, o las servidas empleadas en limpieza doméstica o en trabajos de fábrica.

Quien hiciere obras para impedir la entrada en su predio, de aguas que no está obligado a recibir, no será responsable de los daños que con ello causare.

Las aguas, a que se refiere la primera parte de este artículo, no habrán de emplearse en uso que las torne perjudiciales para las heredades inferiores, y están vedados al dueño de las superiores, los actos que agraven la sujeción de aquéllas.

1579. Los terrenos inferiores deberán recibir las arenas y piedras que arrastren en su curso las aguas pluviales, y no podrán reclamar su devolución los dueños de las heredades de que provengan.

A su vez, los de las inferiores no podrán construir diques que contengan o hagan refluir en los primeros, las aguas, arenas o piedras que desciendan naturalmente. Aunque las obras se hubieren hecho a la vista del dueño del terreno superior, podrá éste exigir que se destruyan, si no advirtió el peligro y la defensa no tuviera una antigüedad de veinte años.

Situación de los predios inferiores.

TITULO VI

Del condominio

CAPITULO I

Disposiciones generales

1580. Cuando la propiedad de una cosa perteneciere en común a varias personas, corresponderá a éstas un derecho de condominio en la medida de su interés respectivo. Las pro-

Concepto.

porciones de cada condómino se denominan en este Código partes indivisas, presumiéndose iguales en caso de deuda.

No será condominio la comunidad de bienes que no sean cosas.

Derechos del condómino.

1581. Cada condómino tendrá derecho:

- 1º A ejercer sus facultades sin consentimiento de los demás.
- 2º A hipotecar y enajenar su cuota. El gravamen no tendrá efecto en el caso de que el inmueble se adjudicare a otro condómino, o fuere enajenado a tercero para dividir la comunidad.
- 3º A gozar de la cosa común, conforme a su destino, siempre que no la perjudicare en su provecho, ni impidiere el goce de los demás.
- 4º A obligar a sus copartícipes en la medida de sus cuotas, por los gastos de conservación o reparo de la cosa, pudiendo exigir intereses sobre las sumas pagadas con ese fin, y retener aquélla entre tanto. Los condóminos requeridos podrán liberarse, haciendo abandono de su derecho.
- 5º A pedir en cualquier tiempo que se divida el condominio, cuando no hubiere indivisión forzosa.
- 6º A reivindicar su parte contra los otros condóminos, y hacer valer frente a terceros los derechos resultantes del dominio, respecto de la totalidad de la cosa. Si ésta hubiera de restituirse, la entrega se hará por consignación o secuestro por cuenta de todos los copartícipes, con arreglo a los principios sobre cosa juzgada en materia de obligaciones indivisibles.

Coordinación de facultades entre los condóminos.

1582. Ningún condómino podrá, sin el consentimiento de los demás, realizar sobre la cosa común, o sobre parte de ella, físicamente determinada, actos materiales o jurídicos, que importen el ejercicio actual e inmediato del dominio.

La oposición de uno solo bastará para impedir las decisiones de la mayoría a ese respecto.

Sin embargo, la enajenación, las servidumbres, hipotecas y alquileres o arriendos hechos por uno de los condóminos, podrán ser parcial o íntegramente eficaces, si al dividirse la cosa, ésta fuere en todo o en parte adjudicada al constituyente.

1583. Sólo responderá por las deudas constituidas en pro de la comunidad y durante ella, el condómino que las hubiere contraído; pero tendrá acción contra los otros para el reembolso de lo pagado.

Deudas contraídas en favor de la comunidad.

Si todos se hubieren obligado sin expresión de cuotas y sin estipular solidaridad, deberán satisfacer por partes iguales, salvo el derecho de cada uno contra los otros, para que se le restituya lo pagado de más, con respecto a la cuota que le corresponda.

1584. El condómino acreedor por desembolsos en concepto de cargas, por gastos conservatorios o de reparación, tendrá derecho a exigir el pago preferente de ellas, al ser dividida la comunidad. Esta facultad podrá hacerse valer, aún contra los sucesores a título particular, siempre que las deudas estuvieren inscritas en el Registro, o se hubiese hecho una anotación preventiva, cuando se tratare de inmuebles.

Gastos de conservación o reparación.

Si para obtener el pago fuere necesario vender la cosa, se procederá como en el caso de cesar la indivisión.

1585. El artículo anterior se aplicará cuando uno de los condóminos adeudare a otro un crédito originado por la indivisión, y hubiere afectado su parte en garantía del pago. Si resultase insolvente, la deuda se dividirá entre los demás en proporción a sus cuotas.

Aplicación extensiva, Cláusulas de indivisión.

1586. Los condóminos no podrán renunciar de una manera indefinida al derecho de pedir la división; mas les será permitido suspenderla por convenio, hasta un término que no exceda de cinco años, y renovarlo todas las veces que lo juzgaren conveniente. Es lícito al testador y al donante imponer igual condición.

Estos convenios o cláusulas producirán efecto respecto de los sucesores particulares, pero tratándose de inmuebles, será indispensable la inscripción de unos y otros en el Registro.

1587. Es válida la afectación de un bien indiviso:

Afectación de un bien indiviso o a favor de éste.

1º En favor de alguno de los condóminos.

2º En beneficio de otro inmueble, perteneciente a cualquiera de los conparticipes.

También lo será la afectación de un inmueble perteneciente a uno de los condóminos, que se hiciera en favor del inmueble indiviso de aquéllos.

Régimen sobre partición.

1588. Las reglas relativas a la división de las sucesiones, a la manera de hacerla, y a los efectos que produce, se aplicarán a la de cosas particulares.

La licitación y todos los actos a título oneroso, por los cuales uno de los condóminos adquiere el dominio exclusivo de la cosa común, producirán los efectos de la partición.

CAPITULO II

De la administración de la cosa común

Destino de la cosa.

1589. Si no fuere posible por la calidad de la cosa, o por oponerse alguno de los condóminos, el uso y goce o la posesión común, la mayoría decidirá si se da en locación, o se administra por cuenta de todos, y en este caso fijará las condiciones, y nombrará o removerá administradores.

Cuando se resolviera alquilar, será preferido a un tercero el copartícipe que ofreciere las mismas ventajas, y entre condóminos por iguales ofertas, decidirá la suerte.

Reglas sobre administración.

1590. Las resoluciones sobre la administración se tomarán, una vez citadas todas las partes, por mayoría absoluta de votos, computados según el valor de las cuotas, y aunque ella correspondiese a uno sólo de los condóminos.

En caso de empate decidirá la suerte. Toda dificultad referente a la administración, será sumariamente resuelta por el juez, a solicitud de cualquier copartícipe, y con audiencia de los demás.

Los frutos se dividirán proporcionalmente al interés de los comuneros.

Condómino administrador.

1591. Al condómino que administrare por nombramiento de la mayoría, le serán aplicables las reglas del mandato, y si no lo tuviera, será considerado como gestor de negocios.

CAPITULO III

De la indivisión forzosa

Casos.

1592. Habrá indivisión forzosa:

1º Cuando la ley la establezca.

2º En los casos prevenidos por el art. 1586.

3º Cuando el condominio recayere sobre cosas afectadas como indispensables al uso común de dos o más heredades, pertenecientes a diversos propietarios.

4º Siempre que la división fuere nociva por cualquier causa. En este caso, podrá mantenerse cuanto sea necesario para no perjudicar a los partícipes.

1593. En el supuesto del inc. 3º del artículo anterior, será necesario para proceder al repartimiento, el acuerdo unánime de todos los condóminos. Los derechos que en tales casos correspondan a éstos en la indivisión, reconocerán como título el condominio, y no una servidumbre. Régimen.

Los copropietarios sólo podrán usar de la cosa común, para los fines, en cuyo interés la indivisión fué creada.

A falta de acuerdo, el destino de la cosa se determinará por su naturaleza y el uso al cual hubiere sido afectada.

CAPITULO IV

Del condominio de los muros, cercas y fosos

1594. Es de indivisión forzosa el condominio de los muros, fosos y cercas, que separan dos heredades contiguas. Indivisión forzosa

1595. Cuando un muro separativo de dos heredades, sólo se asienta en el terreno de una de ellas, es exclusivo del dueño de aquella en que se encuentra. Muro exclusivo.

También lo será, si levantada la pared en la banda colindante de dos heredades, el propietario de una de éstas, renunciare al condominio en favor del vecino, cediéndole la parte del terreno, en que la mitad del muro se apoya.

1596. El propietario de un muro divisorio exclusivo, no podrá reclamar del vecino, la mitad del valor del terreno y la del costo de ese muro, salvo que éste quisiera servirse de él. Pero el lindero podrá adquirir el condominio en la forma prevenida por el art. 1600. Régimen.

No importará usar del muro el hecho de que éste contribuya al cerramiento de la heredad vecina.

1597. Un muro pertenecerá en condominio a los propietarios de heredades contiguas, cuando se hubiere levantado en el límite separativo, asentándolo sobre terreno de ambas. Muro en condominio

El muro será medianero, si fuere construido a gastos comunes por los dos propietarios vecinos, o cuando hecho a costa de uno de ellos, el otro abonare la mitad de su valor.

Será totalmente medianero, siempre que esa comunidad de gastos corresponda a toda la extensión y altura, comprendidos los cimientos.

Cercamiento forzoso.

1598. El que en pueblos y sus arrabales edifique primero en un terreno no deslindado aún por paredes del predio vecino, podrá asentar sobre éste la mitad de la que construya, con tal que el muro fuere de piedra o del material usado en el lugar, tuviere una altura mínima de tres metros y su espesor no excediere de cuarenta y cinco centímetros, en defecto de los reglamentos municipales.

En este caso, podrá exigir al lindero el pago de la mitad de su valor hasta esa altura, sin que el requerido tenga derecho a liberarse de esa obligación, por el abandono de la franja de su terreno en que el muro se asentare.

1599. Cuando el muro común se hubiere levantado a expensas del que lo construyó, sin que mediare el requerimiento a que se refiere el artículo anterior, no cesará por ello el derecho a exigir la contribución que en él se establece. Tampoco podrá en este caso, el requerido, hacer abandono del muro común.

Adquisición de la medianería sobre muro exclusivo.

1600. Todo propietario, cuya finca linde con un muro exclusivo, tendrá la facultad de adquirir la medianería en toda su extensión, o sólo en la parte que alcance a tener la construcción de su propiedad, hasta la altura de las paredes divisorias, reembolsando la mitad del valor actual de la pared o de la porción que adquiriera, como también la mitad del valor del suelo en que esté asentado, pero no podrá limitarla a solo una parte del espesor. Cuando se quisiere adquirir tan sólo la porción de la altura que corresponda a los muros separativos, abonará el valor de los mismos con los cimientos usuales, sin que le será permitido hacerlo por menos de tres metros.

Presunciones relativas a medianería.

1601. Se presumen medianeros:

- 1º Los muros divisorios entre edificios contiguos, hasta la línea común de elevación.
- 2º Los que separen patios, jardines, quintas u otros espacios abiertos.

- 3º Los vallados, cercas, setos vivos, zanjas y acequias que dividen los predios rústicos, a no ser que una sola de las heredades se encuentre cerrada.

Estas presunciones cederán a lo que resulte de los instrumentos públicos o privados, o de los signos materiales.

Se considera signo contrario a la medianería de zanjas y acequias, el hecho de estar la tierra extraída para abrirlas, o para su limpieza, de un sólo lado, y se presume entonces, que pertenecen al dueño de esta heredad.

1902. Los condóminos de una pared, u otra divisoria medianera, están obligados en la medida de su derecho, a los gastos de reparación o reconstrucción. Cualquiera de ellos podrá liberarse de contribuir, renunciando a la comunidad, salvo cuando la pared forme parte de un edificio que le pertenezca, o si los trabajos a efectuarse hubieren llegado a ser necesarios por un hecho suyo.

Gastos de reparación
o reconstrucción.

Esta facultad compete a cada uno de los vecinos, aún en los lugares donde el cerramiento es forzoso, y no les privará del derecho de readquirir la medianería en los términos del art. 1600.

1603. Adquirida la medianería, cada uno de los vecinos se colocará en pie de igualdad respecto del uso del muro. Les corresponderán los siguientes derechos:

Uso de muro medianero.

- 1º Emplearlo para todos los usos a que esté destinado según su naturaleza, con tal que no le causen deterioros, se comprometa su solidez, o se estorbe al vecino el ejercicio de iguales facultades.
- 2º Arrimarle cualquier construcción y cargar sobre él.
- 3º Empotrar tirantes en todo su espesor, salvo el derecho del lindero para solicitar que se retiren hasta la mitad de la pared, cuando él también quiera hacerlo o instalar el caño de una chimenea.
- 4º Abrir armarios o nichos, aún más allá del eje de la pared, con tal que no se cause perjuicio a ésta o al condómino.
- 5º Alzarlo a su costa sin indemnizar al lindero por el mayor peso que cargue sobre él, pero será por cuen-

ta del que lo hiciere, el aumento de los gastos de conservación que se originen por esa causa.

- 6º Construir una chimenea, fogón u hogar sobre la pared medianera, siempre que se protejan estas obras con un contramuro de ladrillo o piedra de dieciséis centímetros de espesor, pero cuando se tratare de horno o fragua, deberá dejarse esta misma distancia entre la obra y el muro.

Elevación de muro.

1604. Cuando la pared no pudiera soportar mayor altura, el condómino que deseara elevarla, la reconstruirá a su costa, y si fuere necesario darle mayor espesor, tomará el excedente sobre su terreno.

En este caso, como en el del inc. 5º del artículo precedente, el lindero no podrá reclamar ninguna indemnización por los embarazos que le causen los trabajos, a menos que éstos hayan disminuído o impedido excesivamente el uso de la heredad, por haberse omitido las precauciones necesarias para reducir las molestias.

1605. En el caso del artículo precedente, el nuevo muro, aunque construído por uno de los propietarios, será medianero hasta la altura del antiguo y en todo su espesor, salvo el derecho del que ha puesto el excedente del terreno, para volver a tomarlo, si la pared llegase a ser demolida.

Reconstrucción de muro exclusivo.

1606. Si fuere necesario reconstruir un muro exclusivo, podrá también demolerlo el vecino que no fuere su dueño. Deberá en tal caso, pagar la mitad de su valor, y si quedare emplazado en el mismo lugar del antiguo, el terreno en igual proporción. El nuevo muro podrá, sin embargo, asentarse sobre el límite de las dos heredades, de modo que el eje coincida con aquél, siempre que su espesor no excediere de cuarenta y cinco centímetros.

Adquisición de medianería sobre parte alzada.

1607. El vecino que no hubiere contribuído a los gastos para aumentar la altura de la pared, podrá adquirir la medianería de la parte alzada, reembolsando la mitad de aquéllos y la del terreno excedente que se tomara para aumentar el espesor.

Cerramientos de predios rústicos.

1608. En los predios rústicos, los cerramientos medianeros deben hacerse a comunidad de gastos, si las dos heredades se encerraren. Cuando alguna de ellas no tuviere cerca, su dueño no estará obligado a contribuir a la construcción de paredes, fosos u otras divisorias.

1609. Lo dispuesto en los artículos anteriores sobre paredes o muros medianeros, en cuanto a los derechos y obligaciones de los condóminos entre ellos, regirá en lo que fuere aplicable respecto de zanjás o cercas, o de otras separaciones de los terrenos en las mismas circunstancias.

Aplicación a zanjás, cercas, etc.

1610. Los árboles existentes en cercas o zanjás medianeras, se presume que también lo son, y cada uno de los condóminos podrá exigir que sean arrancados, siempre que le causaren perjuicio. Si cayeren por algún accidente, no podrá replantarse sin consentimiento del otro vecino. Lo mismo se observará en cuanto a los árboles comunes, por estar su tronco en el extremo de dos terrenos de diversos dueños.

Árboles situados en cercas o zanjás medianeras.

1611. La adquisición de la medianería en los casos prevenidos anteriormente, queda subordinada a la inscripción en el Registro, y al pago de su valor, si en aquélla constare la deuda. También debe anotarse el abandono de la medianería, para que produzca efecto legal.

Registro necesario.

En caso de construcción de muros o cercas divisorios y en el del art. 1598, el deber de contribuir a los gastos comunes, no podrá hacerse efectivo en perjuicio de terceros, cuando no se hubiera anotado preventivamente la deuda existente.

1612. Las disposiciones de este capítulo, no se aplican a los bienes del dominio público. Se observarán respecto de ellos, los reglamentos administrativos.

Bienes del dominio público.

TITULO VII

Del usufructo

CAPITULO I

Del usufructo de cosas

§ 1. — Disposiciones generales

1613. Quien fuere titular del usufructo sobre una cosa, tendrá el derecho de uso y goce de ella conforme a las disposiciones de este Código.

Concepto.

Podrá establecerse sobre porciones materiales o indivisas, o limitarse a una parte del uso o goce de la cosa; constituirse sobre objetos de mero esparcimiento, o sobre un fundo improductivo.

Si recayere sobre cosas consumibles, la propiedad de éstas quedará transferida al usufructuario, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1638.

Objeto.

1614. No pueden ser objeto de usufructo:

- 1º El propio usufructo.
- 2º Los derechos reales de uso y habitación.
- 3º Las servidumbres activas, separadas de los inmuebles a que fueren inherentes.
- 4º La hipoteca, la anticresis y la prenda, independientemente de los créditos garantizados con ella.

Duración.

1615. No podrá existir usufructo por mayor tiempo que la vida del adquirente. Si hubiere término establecido, cesará con la muerte del usufructuario. En caso de fijarse otro, se extinguirá con el fallecimiento del titular, aunque el tiempo no se hallare cumplido.

Quando se tratare de personas jurídicas, sociedades, o asociaciones no luerativas registradas, el término máximo será de veinte años, a menos que en ese intervalo la entidad se disolviera.

Exclusión del acrecimiento.

1616. El usufructo a favor de varias personas, no acuerda el derecho de acrecer, salvo lo que en contrario disponga el título constitutivo.

Modos de adquisición.

1617. Se adquiere el usufructo:

- 1º Cuando mediare contrato, por la tradición de las cosas muebles en las mismas condiciones que para el dominio.
- 2º De los inmuebles, por su inscripción en el Registro.
- 3º Por prescripción, en iguales casos que la para propiedad de los muebles e inmuebles.

No puede constituirse por sentencia judicial.

Condiciones y plazos.

1618. En la constitución del usufructo, quedan prohibidas las condiciones o plazos que suspendan su ejercicio. Sin embargo, el usufructo valdrá cuando se estableciere por testamento, y la condición se hubiere cumplido, o expirado el plazo antes de fallecer el otorgante.

§ 2. -- Derechos y obligaciones del usufructuario

1619. Los derechos y deberes del usufructuario se regularán por el título constitutivo. En su defecto, o por insuficiencia de éste, regirán las disposiciones del presente párrafo. Régimen.

1620. El usufructuario, antes de asumir el usufructo, levantará a su costa inventario de los bienes que recibiere, determinando el estado en que se encuentren. Este requisito, del que no podrá dispensársele, se cumplirá por instrumento público o privado, pudiendo las partes de común acuerdo, referirse a un estado judicial ya existente. Deberá comprender el avalúo de las cosas muebles, cuya disposición corresponda al usufructuario. Inventario.

1621. Cuando la entrega se efectuare sin previo inventario, no por ello quedarán perjudicados los derechos del titular, ni se le obligará a restituir las cosas ni sus frutos; pero se presumirá que aquéllas se hallaban en buen estado cuando las recibió. Presunción en caso de omitirse el inventario.

1622. El usufructuario deberá dar caución real o personal de que las cosas serán conservadas y restituídas al finalizar su derecho. No estarán obligados a prestarla, salvo caso de peligro justificado: Cautión. Personas eximidas.

- 1º Los padres, respecto de los bienes de sus hijos.
- 2º Los que a título oneroso o gratuito, hubieren enajenado bienes con reserva de usufructo.
- 3º Aquellos, a quienes el propietario hubiere dispensado de ello.
- 4º Quienes fueren eximidos por el juez respecto de los muebles necesarios para su uso.

1623. Cuando no se cumpliera lo dispuesto en el art. 1620 o por el 1622, en su caso, el usufructuario no podrá reclamar la entrega de la cosa, y el nudo propietario, haya o no recibido aquél los bienes, tendrá derecho a exigir el secuestro judicial de los inmuebles, o que se den ellos en arrendamiento. Será facultativo del juez, cuando no hubiere peligro en la demora, conceder un breve plazo para que se cumplan ambos requisitos. Corresponderá el depósito al nudo propietario. Omisión de inventario y fianza.

Decretado el secuestro, el excedente líquido de alquileres se entregará al usufructuario.

1624. En el supuesto del artículo precedente, si el usufructo consistiere en dinero, se colocará a interés o en rentas del Estado; si en mercancías, ellas se venderán invirtiéndose el producto como en el caso anterior.

El nudo propietario podrá exonerarse de tener a disposición del usufructuario los muebles que se deterioren por el uso, y exigir que sean vendidos para que se invierta su precio. Sin embargo, aquél podrá conservar los objetos del usufructo hasta que se dé fianza, sin estar obligado al pago de intereses por su valor estimativo.

El usufructuario mantendrá su derecho a los frutos desde que le fueren debidos.

Derechos del usufructuario.

1625. El usufructuario tendrá derecho:

- 1º A poseer la cosa, y a reclamar su entrega con todos sus accesorios, salvo que el usufructo se limitare a una parte de ella.
- 2º A los frutos naturales, así como a los provenientes del cultivo de la tierra, que le pertenecerán desde su separación.
- 3º A los frutos pendientes al comenzar el usufructo, sin hallarse obligado a resarcimiento alguno respecto del propietario.
- 4º A los frutos civiles, que por juzgarse adquiridos día a día, correspondan al tiempo del usufructo, aunque no los hubiere percibido.
- 5º A ejercer las servidumbres activas y los derechos de uso y goce que correspondieren al propietario, en los fundos ribereños con ríos o lagos o en los inmuebles vecinos.
- 6º Al uso y goce de los aumentos que la cosa recibiere por accesión, pero no a la parte que al propietario le corresponda en el tesoro que se hallase en el fundo, ni lo que a éste se le abonare por su crédito de medianería o cercas.
- 7º A ceder el ejercicio del usufructo o darlo en arriendo, pero responderá directamente como fiador, aún por los menoscabos que sufran los bienes, debido a negligencia de quienes le substituyan.

- 8º A servirse de las cosas que se gastan y deterioran lentamente, en los usos a que se las destina. Deberá devolverlas en el estado en que se encuentren, salvo la responsabilidad por los deterioros producidos por su culpa.
- 9º A ejercer todas las acciones inherentes a los derechos comprendidos en el usufructo e intentar las posesorias y petitorias, que el nudo propietario estaría autorizado a deducir. Si este último no hubiere intervenido en tales juicios, podrá beneficiarse con la sentencia favorable, mas no le afectará la dictada contra el usufructuario.
- 10º A retener la cosa fructuaria hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones que le deba el propietario, según las reglas de este párrafo.

1626. Cuando al concluir el usufructo, existieren frutos pendientes, corresponderán al propietario, y si estuvieren vendidos, tendrá derecho a su precio. En este caso abonará los gastos que el usufructuario, según las reglas de una buena administración, hubiere realizado para producirlos, y siempre que no excedan del valor líquido de los cosechados.

Frutos pendientes al
finestar el usufructo.

Tanto en este supuesto como en el del inc. 3º del art. 1625, quien perciba los frutos abonará lo que a terceros se adeudare por trabajos o suministros hechos para su producción.

Ni el propietario ni el usufructuario, podrán separar los frutos antes de hallarse en estado de ser recogidos.

1627. No corresponden al usufructuario de un predio en que existen minas, los productos de las denunciadas, concedidas o que se hallaren en laboreo al principiarse el usufructo, a no ser que expresamente se le concedieren en el título constitutivo, que se tratare del establecido por la ley, o del previsto en el art. 1660.

Minas.

La calidad de usufructuario no obstará al derecho que acuerde el Código de Minería, para denunciar y obtener la concesión de las que pudieren existir dentro del predio en los términos establecidos por aquél.

1628. Los contratos de locación, que de buena fe celebrare el usufructuario vitalicio, subsistirán después de su muerte por un plazo que no exceda de dos años, cuando se hubieren inscripto en el Registro, y salvo lo dispuesto en el art. 1065. En el mismo caso, y bajo iguales

Locación o aparcería
constituídas por el
usufructuario.

condiciones, se mantendrán los realizados por el usufructuario a término fijo durante el tiempo aún pendiente, si falleciere antes de su cumplimiento. Los de aparcería subsistirán, muerto el usufructuario, por el año agrícola, determinado según las costumbres del lugar y la naturaleza de los cultivos o de la explotación.

Mejoras.

1629. Al usufructuario le será permitido hacer mejoras en la cosa, con tal que no alteren su forma y distribución; como también reconstruir cualquier edificio arruinado, pero en ambos casos no tendrá derecho al pago de las impensas. Podrá levantar las útiles y las voluptuarias, siempre que obtuviere algún beneficio y fuese posible extraerlas sin daño de la cosa. Tendrá derecho a compensar su valor actual, con el de los deterioros que esté obligado a satisfacer.

Si el propietario quisiere retener las mejoras que pueden ser retiradas, se procederá como lo dispone el art. 1498.

Obligaciones del usufructuario.

1630. El usufructuario está obligado:

- 1º A usar y gozar de la cosa, según el destino económico que ella tuviera al serle entregada, y conforme a las reglas de una prudente administración.
- 2º A mantener el estado de la cosa, sin que pueda modificarla, aún cuando ello la tornare mejor o más útil.
- 3º A no cortar los árboles frutales o de adorno, ni los que guarnecen los caminos o dan sombra a las casas. Los frutales que secaren o cayeren por cualquier causa, le pertenecerán, más deberá reponerlos.
- 4º A reparar por su cuenta la cosa, a fin de conservarla en el estado requerido para su explotación regular, siempre que tales arreglos sean los ordinarios y de causa posterior a la entrega. Estará también obligado a efectuar los extraordinarios, cuando fueren determinados por falta de los que tenía a su cargo, o provinieren de su culpa.
- 5º A satisfacer los impuestos públicos, considerados gravámenes a los frutos o deudas del goce de la cosa, y también las contribuciones directas que afectaren a esta última.
- 6º A concurrir con el nudo propietario para el pago de las cargas que, durante el usufructo hubieren sido impuestas a la propiedad.

- 7° A contribuir con el abono de los intereses legales, a los gastos de cerramiento forzoso y deslinde, siempre que fueren requeridos por el vecino, y cuyo capital corresponda satisfacer al nudo propietario. Podrá el usufructuario optar por el pago de esos gastos, con cargo de restitución, sin intereses, al fin del usufructo.

Del mismo modo se procederá con las cargas, a que se refiere el inc. 6° y los gastos causados por la apertura de calles y caminos, u otros semejantes.

- 8° A ejercer las servidumbres activas y a impedir los actos de terceros que perturben los derechos del propietario, dando aviso a éste.
- 9° A comunicar de inmediato al propietario la destrucción o deterioro de la cosa, o cuando ésta exija reparaciones extraordinarias.
- 10° A constituir por el tiempo del usufructo, seguro contra incendio y otros siniestros, cuando así lo impusiere las reglas de una prudente administración, y a pagar las primas si la cosa ya estuviere asegurada. El crédito contra el asegurador pertenece al nudo propietario.

En caso de inobservancia de los incs. 8° y 9°, responderá al dueño por los perjuicios irrogados, como si provinieren de su culpa.

1631. En caso de siniestro, el derecho del usufructuario se transfiere al valor del resarcimiento. Tanto aquél como el dueño, podrán exigir que el importe se invierta en reconstruir o restablecer la cosa, cuando así lo impongan las reglas de una prudente administración.

Cosa perjudicada por siniestro.

El nudo propietario podrá encargarse de esas obras, o delegarlas en el usufructuario, sin que éste deba ser retribuido.

El usufructo continuará sobre la cosa restablecida.

1632. El usufructuario de un bien particular no está obligado a satisfacer intereses por las deudas, ni aún respecto de aquellas garantizadas con hipoteca. Si debiera pagarlas para conservar el goce, podrá repetir contra el deudor el capital y los réditos, o contra el propietario no obligado, el capital solamente.

Deudas garantizadas con la cosa.

Reconstrucción o reparaciones extraordinarias.

1633. Siempre que el usufructuario de un inmueble hiere por sí, las reparaciones extraordinarias o lo reconstruyere, podrá dentro de los límites de una buena administración, emplear con este fin las partes integrantes de la cosa.

Si no realizare las obras, deberá permitir al propietario que las ejecutare, el empleo de aquellas partes constitutivas, y tolerar los trabajos sin indemnización.

Falta de acción para exigir reparaciones del nudo propietario.

1634. El usufructuario no podrá exigir que el nudo propietario efectúe en la cosa, reparaciones o gastos de ninguna especie, por necesarios que sean. Cuando el usufructuario hiere reparaciones o reconstrucciones que no fueren de su cargo, no tendrá derecho a resarcimiento.

Expropiación de la cosa.

1635. Si la cosa fuere expropiada por causa de utilidad pública, el usufructuario, aunque solvente y dispensado de dar caución, no podrá recibir el precio, salvo que prestare fianza bastante.

Usufructo de bosques.

1636. El usufructuario de un bosque disfruta de todos los provechos que pueda producir según su naturaleza. Si fuere tallar o de madera de construcción, podrá realizar los cortes normales, ajustándose en el modo, porción y épocas, a las costumbres del lugar.

Plantas destruidas por siniestro.

1637. Si a consecuencia de un siniestro, o caso extraordinario, las vides, olivos, u otros árboles o arbustos hubieren desaparecido en número tal, que no fuere posible o resultase demasiado gravosa la reposición, el usufructuario podrá poner los pies secos, caídos o tronchados, a disposición del propietario para que éste los retire y deje el suelo expedito, a menos que prefiriese aquél abandonarlos.

Mercaderías y cosas fungibles o consumibles.

1638. El usufructuario de mercaderías o de cosas fungibles o consumibles por el primer uso, adquiere su dominio y dispone libremente de ellas, con cargo de restituir al fin del usufructo el valor establecido en el inventario. Si no se avaluaron, deberá restituir otras de igual clase y calidad, o pagar el precio corriente al cesar el usufructo, y en su caso, con los daños e intereses.

Establecimiento comercial, industrial o agrícola.

1639. El usufructuario de un establecimiento de comercio, fabril o agrícola, podrá disponer de las mercaderías y materias primas y estará obligado a conservarlo en funcionamiento constante, según el objeto y carácter de la gestión del constituyente, en forma de mantenerle su crédito y clientela.

Terminado el usufructo, se estimarán las existencias y cada parte abonará, en su caso, el excedente entre el valor actual y el establecido en el inventario.

El usufructuario deberá invertir en la renovación de los enseres y máquinas, la rebaja anual que sea de práctica en establecimientos de la misma especie.

1640. El usufructuario de un rebaño, o de un conjunto de animales de cualquier especie, deberá reemplazar con las crías los que perezcan o se pierdan por caso fortuito, así como los que se tornaren ineptos para la reproducción. Si hubiere destrucción total, sin culpa del usufructuario, por efecto de un contagio o accidente no común, aquél cumplirá con entregar los despojos salvados.

Usufructo de rebaño o animales en conjunto.

Cuando por accidente y sin culpa del usufructuario perecieren en parte importante, el derecho continuará sobre el resto, y en lo sucesivo se repondrá la pérdida con las crías. Si el usufructo fuere de ganado estéril, se juzgará constituido sobre cosas fungibles.

1641. En el usufructo de animales, individualmente considerados, el titular podrá servirse de ellos, obtener los productos que dieren y alquilarlos, si tal fuere su destino. Cuando se perdieren o murieren, no tendrá obligación de substituirlos con las crías, y respecto de ellos quedará terminado el usufructo.

Animales individualmente determinados.

1642. El usufructuario de parte indivisa tendrá los derechos del condómino para administrar la cosa y percibir los frutos. Si el condominio cesare, el usufructo quedará transferido sobre los objetos adjudicados al nudo propietario. Sólo de común acuerdo podrá pedirse la división por el condómino y el usufructuario.

Usufructo de parte indivisa.

1643. Cuando el usufructo fuere a título gratuito, los gastos judiciales se reglarán según las distinciones siguientes.

Gastos judiciales.

Si el pleito se refirió al goce de la cosa, todos ellos, así como las condenaciones al usufructuario, serán a cargo de éste.

Si, versando sobre la plena propiedad, se ganare el litigio, los gastos no reembolsables deberán soportarlos el nudo propietario y el usufructuario, conforme al inc. 7º del art. 1630. Cuando se perdiere y ambos fueron parte, se aplicará la misma regla, pero si el usufructo se extinguió por esa causa, se dividirán por igual. En caso de intervenir tan sólo uno de ellos, todos quedarán a su cargo exclusivo.

Siempre que se hubiere discutido la nuda propiedad, los gastos corresponderán al dueño.

Embargabilidad.

1644. Los acreedores del usufructuario podrán embargar el derecho de usufructo, y obtener se les conceda el ejercicio de éste para cobrar sus créditos, prestando en tal caso fianza suficiente.

§ 3. — Derechos y obligaciones del nudo propietario

Derechos.

1645. El nudo propietario podrá:

- 1º Ejecutar los actos que exigiere la conservación de la cosa.
- 2º Reconstruir los edificios destruidos por accidente.
- 3º Inspeccionar con moderación el bien dado en usufructo.
- 4º Enajenar e hipotecar la cosa, constituir servidumbres activas, y aún pasivas; mas éstas últimas no podrán ejercerse sin el asentimiento del usufructuario, mientras subsista su derecho.
- 5º Demandar la cesación del empleo abusivo por parte del usufructuario, que causare peligro a la cosa.
- 6º Exigir del usufructuario el cumplimiento de todas sus obligaciones, sin esperar que termine el usufructo.
- 7º Cobrar las reparaciones a cargo de aquél.
- 8º En general, ejercer todas las facultades, cuyo uso no irrogare perjuicio o molestias al usufructuario.

Obligaciones.

1646. El nudo propietario no podrá dañar o restringir los derechos del usufructuario, ni hacer reformas en la cosa, aunque no perjudiquen a éste. No tendrá obligación de retirar los materiales, árboles u otras partes constitutivas de la cosa, que provengan de destrucciones de ella, si prefiriese abandonarlos.

Reparaciones a que no está obligado.

1647. El constituyente del usufructo, o el nudo propietario, no están obligados a reparar los bienes, antes de su entrega al usufructuario, aunque ellos sufran deterioro. Más si la tardanza en recibirlos fuere porque el usufructuario no llenó sus obligaciones previas, y el nudo propietario hizo las reparaciones a cargo de aquél, tendrá derecho para exigir lo gastado y retener los objetos.

1648. Se aplicará al nudo propietario lo dispuesto respecto del usufructuario en el segundo apartado del art. 1627. Remisión.

§ 4. — De la extinción

1649. Sin perjuicio de las causas que extinguen los derechos reales, y de lo convenido por las partes, el usufructo termina: Modos.

- 1º Por pérdida o destrucción total de la cosa, no siendo ésta fungible.
- 2º Por la muerte del usufructuario, y si fuere a favor de una persona jurídica o de una sociedad, en la forma prevenida por los arts. 90 y 1615, segundo apartado.
- 3º Por vencimiento del plazo de su duración, y antes, si falleciere el usufructuario.
- 4º Por cesación de la causa en que se originó.
- 5º Por consolidación en la persona del usufructuario.
- 6º Por el no uso durante el término de diez años.
- 7º Por renuncia a título gratuito u oneroso, inscrita en el Registro, si la cosa fuere inmueble, o el usufructo comprendiere algún bien de esta calidad. Cuando se tratare de muebles, será menester la comunicación de la renuncia al propietario.

1650. Extinguido el usufructo, deberá dejarse libre la posesión del bien y restituirlo al nudo propietario, salvo lo dispuesto sobre locación en el art. 1628. Los frutos, así como los intereses, pertenecen a este último de pleno derecho, desde el momento de la extinción, aunque el usufructuario, de buena o mala fe, continuare en el goce de la cosa. Obligaciones del usufructuario al extinguirse su derecho.

1651. Terminado el usufructo por muerte del titular, la familia de éste dispondrá de noventa días para el desahucio del inmueble que habitare, sin cargo alguno por la ocupación. Desahucio del inmueble.

Las personas jurídicas, asociaciones registradas y sociedades, gozarán de igual término para el desalojo del inmueble en que funcionaren, contados desde su disolución, cuando ésta se produjere antes de vencer el usufructo.

CAPITULO II

Del usufructo de derechos

Aplicabilidad del régimen sobre usufructo de cosas.

1652. Se aplicará al usufructo de derechos lo dispuesto sobre el de cosas, con las salvedades contenidas en el presente capítulo.

Derechos excluidos.

Los derechos intransmisibles no pueden ser objeto de usufructo.

Constitución.

1653. Para constituir este usufructo, se aplicarán las disposiciones de la cesión de derechos. Cuando se tratase de un derecho que faculte para exigir una prestación del obligado, regirán las normas que gobiernan las relaciones entre cesionario y deudor.

Realizada la prestación, el acreedor se hará dueño del objeto, y el usufructuario obtendrá el usufructo.

Créditos por sumas productivas de intereses.

1654. Cuando el usufructo tuviere por objeto créditos por sumas productivas de intereses, el deudor deberá pagar el capital al acreedor y al usufructuario conjuntamente, y cualquiera de ellos podrá reclamar que el pago se haga en esa forma o por consignación en cuenta común. Si la exigibilidad dependiere de una declaración o de una opción, éstas deberán realizarse por ambos. En caso de desacuerdo, cada interesado podrá pedir el depósito.

Pagado el crédito, el usufructuario y el acreedor estarán obligados a reinvertir el capital. El primero podrá hacerlo según las reglas de una prudente administración.

En caso de desacuerdo, se aplicarán las normas para el empleo del dinero de menores.

Otros créditos.

1655. El usufructuario de un crédito no comprendido en el artículo anterior tendrá derecho a cobrarlo, y cuando su exigibilidad dependiere de una declaración u opción del acreedor, le será lícito efectuarla. Estará obligado a realizar todos los actos judiciales para obtener el cobro del crédito, sin poder extinguirlo o modificarlo por otros medios que no sean el pago efectivo o la compensación.

En caso de rentas vitalicias o temporarias, pensiones u otros derechos semejantes, la prestación que pueda exigirse corresponderá al usufructuario. Rentas, pensiones, etc.

1656. Si el usufructo fuere de títulos al portador, o endosables en blanco, la posesión del papel y de sus renovaciones corresponderá en común al usufructuario y al propietario. La posesión de los cupones de interés o dividendo, pertenecerá al primero. Títulos.

Para constituir el usufructo no será necesaria la entrega del título: bastará que se posea en común. A solicitud de cualquiera de las partes, deberá depositarse el documento en el Banco de la Nación, a la orden conjunta de aquéllas.

1657. En caso de reembolso del título, se procederá como lo determina la segunda parte del art. 1654. Si con tal motivo hubiere prima, o si en los cupones estuviere incluida la amortización del capital, la prima y la amortización formarán parte de éste.

1658. Si el ejercicio de un usufructo hubiere sido confiado a un administrador, la entrega sólo producirá efecto en cuanto al obligado, después de notificársele del auto en que se le nombra, o cuando tuviere conocimiento de su existencia. Lo mismo ocurrirá respecto de la cesación del administrador. Usufructo por administración.

CAPITULO III

Del usufructo sobre un patrimonio

1659. El usufructo constituido sobre un patrimonio, o parte alícuota del mismo, se reglará por las disposiciones del presente capítulo, y subsidiariamente, en cuanto sean compatibles con ellas, por las contenidas en los dos anteriores. Régimen aplicable.

Al usufructuario de parte alícuota, se aplicará en proporción a su cuota, cuanto se establece respecto del que lo sea de todo el patrimonio.

1660. Al titular de un usufructo universal le corresponderá todo cuanto pueda provenir de las cosas dadas en usufructo, aunque no fueren frutos. Usufructo universal.

1661. El usufructo de todos los bienes, establecido a título gratuito, no obstará a que los acreedores ya existentes, Derecho de los acreedores del constituyente.

de quien lo constituyó, reclamen sobre ellos el pago de sus créditos.

Cuando el usufructuario hubiere adquirido la propiedad de cosas consumibles, podrán ejercer ese derecho sobre el valor de ellas, requiriendo el pago inmediato.

Pago de las deudas del constituyente por el adquirente a título gratuito.

1662. El adquirente a título gratuito de un usufructo universal, podrá anticipar el pago de las deudas de la sucesión o del donante, y en este caso, le será restituído el capital sin intereses al fin del usufructo. Pero si no las abonare, el heredero o el constituyente podrán elegir entre vender los bienes necesarios, o pagar las obligaciones, y en tal supuesto, el usufructuario deberá los réditos de pleno derecho, mientras gozare del beneficio.

Si al usufructuario que abonó las deudas no se le reembolsare su importe al finalizar el usufructo, correrán de pleno derecho los intereses a su favor.

Obligaciones del usufructuario universal a título gratuito.

1663. El usufructuario universal a título gratuito estará obligado a pagar en proporción de su goce, y sin derecho a repetir, las pensiones alimenticias, las rentas, sueldos e intereses devengados, que graviten sobre el patrimonio por créditos ya existentes.

TÍTULO VIII

Del uso y de la habitación

Alcance y límites.

1664. Tanto el derecho real de uso de cosa ajena, como el referente al de habitación, deben limitarse a las necesidades personales del beneficiario y su familia. A este efecto, entiéndese por familia el cónyuge del titular, sus descendientes legítimos o naturales, los acreedores por alimentos — con tal que unos y otros vivan con él — y las personas de servicio.

Concepto de "necesidades personales del beneficiario y su familia".

1665. Las necesidades a que se refiere el artículo anterior, se juzgarán según la condición de los titulares y las circunstancias que puedan aumentarlas o disminuirlas, sin que sea permitido objetar, para limitarlas, el que no se tratase de persona menesterosa.

No se comprenderán en ellas, las que sólo fueren relativas a la industria o comercio que ejerciere el usuario. El habita-

dor podrá instalar un establecimiento de aquella naturaleza, cuando fuere compatible con el destino de ella.

1666. El deber de inventario y la caución establecidos en el título del usufructo, regirán para el usuario o habitador que poseyere el inmueble; pero no si éste quedare en poder del propietario, o aquél sólo habitare una parte del mismo. Inventario y caución.

1667. El uso y la habitación, se constituyen del mismo modo que el usufructo, pero no habrá uso legal, ni sobre cosas consumibles. Ambos derechos se rigen por el título constitutivo, y en su defecto, por las presentes disposiciones. Constitución.

1668. El usuario tendrá derecho: Derechos del usuario.

- 1º A requerir la entrega total del fundo, cuando en un año común éste no llegue a producir más que los frutos suficientes para satisfacer sus necesidades. La misma facultad asistirá al que tenga el uso de una casa, y ésta sólo bastare para él y su familia.
- 2º A usar de todos los frutos que la cosa produzca, cuando tuviere el uso de los frutos de un fundo. Pero si aquéllos proviniesen del trabajo del propietario o usufructuario, sólo los tendrá, pagando los gastos exigidos para obtenerlos. Será preferido al dueño o al usufructuario, aunque con tal uso se consumieren todos los frutos.
- 3º A utilizar las crías, leche y lana, en la extensión de su derecho, cuando el uso recayere sobre un rebaño o conjunto de animales.
- 4º Si fuere sobre animales, a emplearlos en los trabajos y servicios a que se destinan, y aún para las necesidades de su comercio o industria.
- 5º A dar en locación el fundo, siempre que no fuere habitador, rigiéndose entonces sus obligaciones por las del usufructuario.
- 6º A ejercer una acción real, contra el propietario que goce del fundo, y contra los terceros, en cuyo poder se encuentre la heredad.
- 7º A promover las acciones posesorias que correspondan al usufructuario.

En el caso del inc. 1º, serán a cargo del usuario los gastos de conservación y las contribuciones del inmueble, cuya posesión le fué entregada, pero cuando

sólo tomare parte de los frutos o no ocupare toda la casa, el aporte será proporcional a su goce.

- Usuario de muebles.** **1669.** El usuario de muebles no podrá ceder el uso de ellos, aunque se tratare de objetos que el propietario tenía costumbre de alquilar.
- Usuario de frutos.** **1670.** El que a título gratuito tuviere el uso de los frutos de una cosa, no podrá conferir a otro por cesión o locación, el derecho de percibirlos; pero sí cuando fuere a título oneroso. En uno y otro caso, el uso de los frutos que tuvieran la calidad de alimenticios, no podrá ser embargado por los acreedores del usuario.
- Extinción.** **1671.** Lo dispuesto sobre la extinción del usufructo, se aplicará al uso y la habitación; pero los acreedores del usuario no podrán atacar la renuncia que éste hiciere.
- El derecho de habitación se extingue por el abuso grave del habitador, que el juez calificará según las circunstancias.
- Uso limitado.** **1672.** Podrá gravarse un inmueble a favor de tercero, con el fin de concederle el derecho de usarlo en cierta manera, o de gozar otra facultad susceptible de constituir el objeto de una servidumbre predial. La extensión de estas cargas se determinará, en caso de duda, según las necesidades personales del titular; no pudiendo cederse ni en su existencia ni en su ejercicio. Se constituirán y extinguirán, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del derecho de uso.

TÍTULO IX

De las servidumbres prediales

CAPÍTULO I

De las servidumbres prediales en general

§ 1. — Disposiciones generales

- Concepto.** **1673.** Habrá servidumbre, cuando un predio contiguo o vecino de otro, soporte en utilidad presente o futura de éste.

cualquier gravamen real que le imponga un uso, o prive a su titular o poseedor del ejercicio de alguna facultad comprendida en el dominio.

En caso de duda respecto de la existencia, extensión, o modo de ejercicio de la servidumbre, se estará a favor de la libertad del inmueble gravado.

1674. Son calidades de las servidumbres prediales: Caracteres.

- 1º Su perpetuidad, salvo disposición en contrario.
- 2º El ser inherentes al fundo dominante y al sirviente, no pudiendo separarse de ellos, ni someterse a gravamen alguno.
- 3º Ser indivisibles, ya como derechos, ya como cargas, no siendo susceptibles de adquirirse o perderse por partes aliecuotas.

A los copropietarios del fundo dominante corresponderá el ejercicio indistinto de ellas, pero sin que ésto importe agravar la condición del inmueble afectado.

La indivisibilidad de las servidumbres no impedirá que puedan ser limitadas con respecto al lugar, tiempo y modo de ejercerlas.

1675. Las servidumbres se denominan en este Código: Denominaciones.

- 1º *Continuas*, cuando se ejercen o pueden ejercerse sin necesidad de un hecho actual del hombre.
- 2º *Discontinuas*, cuando suponen el hecho actual del hombre, que puede realizarse con intervalos más o menos largos.
- 3º *Aparentes*, cuando se anuncian por signos exteriores.
- 4º *Inaparentes*, cuando no se conocen por señales externas.

1676. No es servidumbre el gravamen que consista en Obligación de hacer
cualquier obligación de hacer.

La que así fuere constituida, valdrá como simple obligación para el deudor y sus herederos, sin afectar a los inmuebles, salvo lo dispuesto en el art. 1672.

§ 2. — Adquisición de las servidumbres

Quienes pueden constituir.

1677. Sólo podrán constituir servidumbres los propietarios de los inmuebles que hayan de ser beneficiados o gravados con ellas. Si quien aparezca inscripto en el Registro como dueño, la estableciere a favor de ese predio, la servidumbre subsistirá respecto del verdadero titular, sin necesidad de declaración alguna.

Las constituidas a favor del fundo por el usufructuario, usuario, o acreedor anticresista, expresando que estipulan para el dueño, sólo producirán efecto cuando se inscribiere en el Registro la ratificación de éste. A falta de tal extremo, valdrá personalmente para quienes la estipularon, siempre que mediare prenotación. Lo mismo resultará del convenio que limitare sus consecuencias a las partes.

Modo de adquirirlas.

1678. Se adquieren las servidumbres:

- 1º Por título, o por la posesión treintaañal, si fueren continuas y aparentes.
- 2º Sólo por título, cuando fueren continuas inaparentes, o discontinuas, de cualquier clase.

Todos los actos constitutivos de servidumbre, deben ser inscriptos en el Registro para su validez. Llenadas las condiciones de forma exigidas, las partes podrán pedir el cumplimiento de aquel requisito.

La forma de constituir las servidumbres será regida por las disposiciones de la venta, cuando fueran a título oneroso, y por las referentes a donaciones o testamentos, en aquellas a título gratuito.

Concurrencia con otros derechos reales.

1679. Las servidumbres no perjudicarán los derechos reales ya inscriptos. Los acreedores hipotecarios podrán pedir en este caso, que la cosa se venda como si el gravamen no hubiere existido.

Si en igual rango concurrieren sobre el mismo fundo, una servidumbre predial con otra semejante, o con un derecho de uso, y por su naturaleza no fuere posible ejercer aquellas conjuntamente, o sólo pudieren serlo de un modo incompleto, los interesados podrán pedir a los jueces una reglamentación equitativa, que consulte los diversos derechos.

1680. Cuando el dueño de dos heredades, entre las cuales exista un signo aparente de servidumbre, dispusiere de una de ellas sin que el contrato contenga cláusula relativa al gravamen, éste continuará en favor o sobre el fundo enajenado, pero sólo producirá efecto después de su inscripción. Cada uno de los propietarios podrá exigirla judicialmente, consignando las determinaciones del caso, y gozará también de las acciones posesorias.

Destino del padre de familia.

§ 3. — Derechos y obligaciones

1681. La extensión de las servidumbres establecidas por voluntad del propietario, se regirá de acuerdo a los términos del título de su origen, y en su defecto, por los principios siguientes.

Extensión de las servidumbres.

Las activas o pasivas, serán ejercidas en la medida que los inmuebles tuvieren el día de su establecimiento, con lo acrecido por accesión natural.

Las constituidas para un uso determinado no podrán ampliarse para otros, y si lo fueren por prescripción se limitarán al que tuvo el adquirente.

1682. Corresponde a los titulares de una servidumbre:

Derecho del titular de una servidumbre.

- 1º El derecho de ejercer las accesorias indispensables para el uso de la principal, pero la concesión de una servidumbre no comportará la de otras para hacer más cómodo su goce.
- 2º La facultad de realizar en el predio sirviente, todos los trabajos necesarios para el ejercicio y conservación de la servidumbre, cargando con los gastos, aún en el caso de que la reparación se hiciere indispensable por vicio propio del fundo.
- 3º El derecho de gozar de la servidumbre en la extensión compatible con la naturaleza del inmueble dominante, aunque las necesidades de éste hubieren acrecentado desde la época en que se constituyó el gravamen. Pero si tal consecuencia proviniera de cambios en el destino o en la condición del inmueble, que agravasen de un modo anormal la carga del predio sirviente, el juez podrá limitar el uso, y si ello fuese imposible, declarar extinguida la servidumbre.

- 4º El derecho de usar de los remedios y acciones posesorias. Tendrán esta facultad, tanto los poseedores mediatos como los inmediatos de las heredades dominantes, siempre que fueren turbados o impedidos de usar las servidumbres inscriptas y hubieren ejercido estas últimas dentro del año, aunque fuere una sola vez.

Limitación al ejercicio de servidumbres.

1683. El propietario de la heredad dominante deberá ejercer la servidumbre del modo menos perjudicial para el fundo sirviente. No podrá introducir en éste, cambios innecesarios y estará obligado—si posee una construcción sobre él para el ejercicio de la servidumbre—a mantenerla conforme lo requiera el interés del propietario del inmueble gravado.

Modo de ejercicio.

1684. Si el modo de ejercicio de la servidumbre no estuviera designado por el título, o fuese de otro modo incierto, corresponde al dueño de la heredad sirviente indicar por donde habrá de ejercerse. Una vez fijado, no podrá mudarlo; pero si el que señaló, o el establecido al constituir el gravamen, hubiere llegado a serle más oneroso o incómodo, o le privare de efectuar construcciones o mejoras, podrá el propietario del sirviente, ofrecer al del dominante otro igualmente apto, y éste deberá aceptarlo. Los gastos que exija el cambio serán de cargo del primero. Tal derecho no podrá renunciarse por contrato.

División de los fundos.

1685. En caso de dividirse el fundo dominante, la servidumbre subsistirá en beneficio de cada lote, sin que este hecho pueda agravar la condición del sirviente, según lo prevenido en el inc. 3º del art. 1682. Cuando la servidumbre sólo aprovecharse a una de las fracciones, o debiera ejercerse por cierta parte del fundo, quedará extinguida respecto de las restantes. Dividido el predio sirviente, se aplicará la misma regla.

1686. El dueño o poseedor del fundo sirviente estará obligado:

Obligaciones del dueño o poseedor del fundo sirviente.

- 1º A contribuir a los gastos de reparación o conservación de las obras exigidas por la servidumbre, cuando las utilice en su provecho.

- 2º A permitir el uso de la servidumbre, sin menoscabar en modo alguno su ejercicio; pero podrá exigir que él se regle de una manera menos perjudicial para sus intereses, con tal que no se prive a la heredad dominante, de las ventajas derivadas de aquélla.
- 3º A restablecer por su cuenta las cosas a su antiguo estado, cuando efectuare trabajos contrarios al ejercicio de la servidumbre, indemnizando, en su caso, los perjuicios. Si la heredad pasare a un sucesor particular, éste sólo deberá permitir aquel restablecimiento; pero no satisfacer los daños ni los gastos que estas obras exijan. Por unos y otros, el titular de la servidumbre podrá demandar al que realizó las obras.

1687. El propietario o poseedor del fundo sirviente conservará todos los derechos propios del dominio, y podrá efectuar las construcciones que no impidieren el ejercicio de la servidumbre.

Derechos del propietario o poseedor del fundo sirviente.

1688. Los poseedores de fundos, sobre los cuales se pretendiere ejercer servidumbres no inscritas, podrán usar de los remedios y acciones posesorias para impedirlo, y en caso de hallarse registradas, para limitar su ejercicio.

Protección posesoria.

1689. Será lícito convenir entre las partes:

Clausulas autorizadas.

- 1º Que el propietario de la heredad dominante, tome a su cargo los gastos de conservación y reparación de las obras exigidas por la servidumbre, aún en el caso de que usara de ellas el dueño del predio gravado. Tal acuerdo es aplicable a las construcciones sobre las cuales el propietario del fundo dominante pueda establecer otras suyas.
- 2º Que el dueño del inmueble sirviente tome por su cuenta los gastos, a que se refiere el inciso anterior. No puede pactarse que esa carga se extienda a las obras existentes en el predio dominante, y cuando se hiciere, valdrá como obligación personal, si como tal pudiese valer.

El dueño del fundo dominante podrá eximirse de su carga en el primer caso de este artículo, renunciando a la servidumbre. En el segundo, el propietario del sirviente quedará exonerado de ella, si aban-

donare el dominio de la parte en que existieren las obras.

§ 4. — De la extinción

Cancelación. **1690.** Inscripta una servidumbre en el Registro, sólo se extinguirá respecto de terceros por su cancelación.

Causas de extinción. **1691.** Son causas de extinción de las servidumbres:

- 1º La renuncia del propietario de la heredad dominante. Si ésta resultare de su autorización escrita para que en el predio gravado se ejecuten obras, que en forma permanente impidan el ejercicio de la servidumbre, el dueño de éste podrá pedir la cancelación por vía judicial. Fuera de este caso, tales trabajos, aunque permanentes y visibles, hechos por el propietario dominante o el sirviente, sólo extinguirán el gravamen cuando hubiere transcurrido el tiempo fijado en el inc. 5º.
- 2º La confusión que reúna ambos predios en un mismo dueño. La servidumbre no revivirá, si luego fueren separados, salvo constancia expresa en el instrumento de enajenación, o si fuere el caso previsto en el apartado final de este artículo.
- 3º Cuando la servidumbre no reportare utilidad alguna para el predio dominante.
- 4º Cuando los cambios sobrevenidos en las heredades, impidieren definitivamente su ejercicio.
- 5º El no uso durante diez años, que se contarán en las continuas desde que se hiciere un acto contrario, y en las discontinuas, desde que dejaren de gozarse.

En los casos de los incs. 3º y 4º, la servidumbre revivirá si las condiciones anteriores de los predios se restablecieren, a menos que se hubiere producido la extinción por el no uso.

Casos en que no se extinguen por prescripción.

1692. No se extinguirá la servidumbre por prescripción:

- 1º Siempre que terceros hicieren uso de ella, aunque no contaren con autorización del titular, o al hacerlo contrariasen su voluntad.

- 2º Cuando el uso del beneficiario de la servidumbre, aunque conforme al título, se hubiere limitado a sus conveniencias o necesidades, no obstante que con ello no hubiere hecho todo lo que estaba autorizado a efectuar.
- 3º Si uno de los titulares pro-indiviso de la heredad dominante, continuara gozando de la servidumbre, aunque no lo hiciesen los demás.
- 4º Si entre los condueños del fundo dominante, hubiera alguno contra el cual la prescripción no pudiese correr.

1693. Puede extinguirse por el no uso, tanto la servidumbre, como el modo particular de ejercerla. El uso incompleto la reducirá a la forma en que fuere gozada.

Extinción por el no uso.

CAPITULO II

De las servidumbres prediales en particular

§ 1. — De la servidumbre de tránsito

1694. Si una heredad estuviere privada de salida al camino público, o cuando ésta no bastare para su explotación rural o industrial, podrá exigirse de los predios interpuestos, cualquiera sea su destino, la servidumbre de tránsito, debiendo indemnizarse el valor del uso del terreno necesario, y todo otro perjuicio.

Requisitos.

Se considera cerrado el predio, cuyo acceso a la vía pública fuere impracticable o peligroso, o exigiere gastos que no se hallaren en proporción con el daño que causaría al vecino el establecimiento de la servidumbre. No se juzgará tal, la heredad a la que separen de la vía pública, construcciones existentes en aquélla.

1695. El tránsito debe ser concedido en la medida necesaria para la explotación y uso del inmueble, y tomado sobre los fundos contiguos que presenten el trayecto más corto, a no ser que el interés de éstos, el del predio encerrado, la situación de los lugares, o circunstancias especiales, impusieran otra regla.

Medida en que debe concederse.

Modo de ejercicio.

1696. Cuando esta servidumbre hubiere sido constituida por título, y en él no se expresare el modo de ejercer el tránsito, éste comprenderá el de pasar en todas las formas necesarias, según la naturaleza y destino del inmueble dominante. Si aquél estuviere determinado, no será permitido ampliarlo, o ejercerlo de otra manera, por ninguna causa o necesidad.

Constitución ex-lege.

1697. Siempre que se adquiriera o divida parte de un predio, que por consecuencia del fraccionamiento quedare separada del camino público, se entenderá constituida sobre las intermedias restantes, una servidumbre de tránsito, sin indemnización alguna.

Desaparición de la necesidad originaria.

1698. La servidumbre de tránsito no se extingue, aunque el paso se haga innecesario para el fundo dominante, por la apertura de un camino, o por cualquier otra circunstancia.

§ 2. — De la servidumbre de acueducto

Cuando es obligatoria.

1699. La servidumbre de acueducto será obligatoria para toda heredad, en los casos siguientes:

- 1º Cuando beneficie a un predio, que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de las sementeras, plantaciones o pastos.
- 2º Si fuere a favor de un pueblo, que la exija para el servicio doméstico de sus habitantes.
- 3º Cuando fuere en utilidad de un establecimiento industrial.

No estarán sujetas a esta servidumbre las casas, los corrales, patios y jardines que dependan de ellas, y las huertas de superficie menor de una hectárea.

Esta servidumbre es siempre continua y aparente.

Aguas susceptibles de dar lugar a esta servidumbre.

1700. Puede constituirse acueducto:

- 1º Respecto de aguas que corran, bajo concesión de autoridad competente.
- 2º De las que afloran a la superficie, naturalmente o por medios mecánicos.
- 3º De las que se encuentren reunidas en represas o canales que pertenezcan a particulares, siempre que éstos hubieren concedido la disposición de ellas.

1701. El titular de un acueducto deberá llevarlo por el rumbo que permita el libre descenso de las aguas, siempre que por la naturaleza del suelo no resulte excesivamente dispendiosa la obra. Modo de ejercicio.

Llenados estos extremos, el acueducto se establecerá en la dirección que menos perjuicio ocasione al fundo sirviente, juzgándose tal, el trayecto más corto para la heredad sirviente, y el menos costoso para el interesado, salvo prueba en contrario.

1702. La conducción se hará en forma que no permita derrames, ni deje estancar el agua o acumular basuras y que ofrezca, de trecho en trecho, los puentes necesarios para la cómoda administración y cultivo de las heredades sirvientes. Indemnizaciones a cargo del titular.

Deberá permitirse la entrada de trabajadores para la limpieza y reparación del acueducto, como también la de un inspector o cuidador, previo aviso al encargado del predio; pero sólo de tiempo en tiempo, o con la frecuencia que el juez determinare, atendidas las circunstancias.

1703. La servidumbre de acueducto impone al titular de ella el pago: Causas de oposición.

- 1º Del terreno que habrá de ocupar.
- 2º Del valor de un franja de tierra a cada lado, que no bajará de un metro de ancho en todo el curso, la que podrá ampliarse por convenio de partes o disposición del juez.
- 3º De un diez por ciento más, sobre la suma que arrojen los dos incisos anteriores.
- 4º De todo perjuicio causado por la construcción del acueducto, y el que provenga de las filtraciones o derrames originados por defectos de aquél.

1704. El dueño o poseedor del fundo sobre el que se intente establecer acueducto, podrá oponerse a ello:

- 1º Cuando el que pretendiere construirlo, no fuese dueño o usufructuario del predio, al que han de llevarse las aguas, o no lo fueren respecto de éstas, o no tuviere la concesión de las mismas.
- 2º Si pudiese establecerse sobre otros fundos, con iguales ventajas y menores molestias.

1705. El acueducto deberá construirse:

Cómo debe construirse.

- 1º Con acequia abierta, cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación, ni ofrezca otros inconvenientes.
- 2º Con acequia cubierta, cuando lo exijan su hondura, su contigüidad a las habitaciones o caminos, o cualquier otro motivo análogo, según el criterio del juez.
- 3º Con cañerías, o tuberías, cuando puedan sus aguas ser absorbidas por las pertenecientes a terceros, o haya peligro de que inficionen a otras, o lleguen a contaminarse con substancias nocivas, o causen daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario según las circunstancias.

Obras requeridas por la construcción.

1706. El titular de la servidumbre tendrá derecho para alzar o rebajar el terreno del inmueble sirviente, a fin de que las aguas lleguen a su destino, pudiendo también tomar la tierra o arena, que para esos trabajos le fuere menester.

Si el acueducto hubiere de atravesar aguas naturales u otros acueductos, el dominante construirá y conservará las obras necesarias para que no se retarde o acelere la corriente de aquéllos, ni disminuya su caudal, ni se dañe la calidad del agua del curso atravesado.

Conversión del descubierto en subterráneo y viceversa.

1707. Quien tuviere acueducto no podrá convertir en descubierto el subterráneo o viceversa, privando al poseedor del inmueble sirviente del agua necesaria para el uso doméstico o para abreviar a sus animales. Estos derechos deberán ser ejercidos por el dueño del bien gravado, en la medida del art. 1711.

Preexistencia de un acueducto utilizable.

1708. No podrá establecerse servidumbre de acueducto dentro de otro preexistente.

Quien tuviere a beneficio propio, un acueducto en su heredad, podrá oponerse a que se construya otro en la misma, ofreciendo paso por el suyo a las aguas de que alguien quisiere servirse, siempre que con ello no se irrogue daño considerable al que deseara abrir el nuevo.

Aceptada la oferta, se pagará previamente al dueño de la heredad, el valor del suelo ocupado por el antiguo acueducto, incluso el del espacio lateral de que habla el art. 1703

a prorrata del nuevo volumen de agua introducido, y se le reembolsará además, en la misma proporción lo que valiere la obra en toda la longitud que aprovechase el interesado.

Este, en caso necesario, ensanchará el acueducto a su costa, y pagará el nuevo terreno ocupado por él y por la banda lateral, y cualquier otro perjuicio, pero sin el diez por ciento de recargo.

1709. Establecido un acueducto, podrá introducirse por él mayor volumen de agua, indemnizando a la heredad sirviente del daño derivado de esa causa, y si para ello fuese necesario realizar obras nuevas, se estará a lo dispuesto en el art. 1705.

Utilización con mayor caudal de agua.

1710. El dueño del predio sirviente conserva la propiedad del suelo en que existe el acueducto, y todos los derechos compatibles con el ejercicio de la servidumbre. Abandonado un acueducto, el propietario del fundo en que se encuentre, sólo está obligado a restituir lo que recibió por el valor del terreno.

Propiedad del suelo.
Abandono del acueducto.

1711. El poseedor del inmueble sirviente podrá usar de las aguas que corrieren por el acueducto descubierto, y emplearlas en su heredad, si con ello no dañare al predio dominante. En tal supuesto restituirá o abonará, según el caso, la parte proporcional del costo de instalación y de conservación, en la medida prevista por el art. 1708.

Uso por el poseedor del predio sirviente.

No podrá cubrir el acueducto abierto para utilizar el terreno, ni plantar árboles a los lados de aquél, sin asentimiento del titular de la servidumbre.

1712. Cuando un inmueble que recibe el agua por un solo punto, se dividiere entre dos o más dueños, el que llegare a serlo de la parte superior quedará obligado a dar paso al agua para ser utilizada en las inferiores. Por esta servidumbre no recibirá indemnización.

División del predio sirviente.

1713. Las disposiciones anteriores se aplicarán al paso de las aguas sobrantes llevadas a un fundo o acumuladas en él, o que provinieren de su explotación, cuya salida fuere necesaria para el terreno; y también a las que, procedentes del desagüe de lagunas, predios pantanosos, o de su producción industrial, agrícola o minera, fueran conducidas a un río o arroyo, o con otro destino análogo.

Desagües.

El paso de esas aguas se acordará bajo la condición de proporcionarles una corriente adecuada, para evitar que ellas se estanquen.

Conductores de energía eléctrica a otra análoga.

1714. El propietario de un fundo privado de acceso a la vía pública, podrá según las disposiciones de este parágrafo sobre paso de aguas, exigir la instalación de conductores de energía eléctrica, u otra análoga, ya aéreos, ya subterráneos, según lo decida el juez, teniendo en cuenta las circunstancias y la seguridad del fundo sirviente.

TÍTULO X

De la hipoteca

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Concepto.

1715. La hipoteca es el derecho real establecido en seguridad de un crédito cierto en dinero, sobre inmuebles determinados, que continúan en poder del constituyente. Cuando alguien lo hiciere en garantía de una deuda ajena, no por ello se obligará personalmente, como deudor directo o subsidiario.

Requisitos.

1716. Para que la hipoteca convencional—única que es el Código reconoce—pueda válidamente constituirse, es necesario:

- 1º Que recaiga sobre uno o varios inmuebles, especial y expresamente individualizados.
- 2º Que la suma que ella garantiza sea cierta y determinada; debiendo fijarse un importe estimativo al constituirla, cuando el crédito fuere eventual, bajo condición o de valor incierto, o la deuda fuese de hacer o de no hacer, o tuviere por objeto prestaciones en especie.
- 3º Que conste de escritura pública, en la que se consigne la aceptación del acreedor. Si éste no la hubiere

expresado en aquélla, deberá manifestarla en otra posterior, en cuyo caso se le acordará efecto desde que ella se inscriba. No será exigible la promesa de constituir hipoteca.

1717. No pueden hipotecarse:

Bienes que no pueden hipotecarse.

- 1º Los derechos de usufructo, uso, habitación y de servidumbre.
- 2º Los derechos hipotecarios.
- 3º Las cosas inmovilizadas por accesión, separadamente del inmueble principal.
- 4º Las partes de un condominio de indivisión forzosa.
- 5º Las partes materiales de un inmueble, a no ser que formaren fracciones determinadas de una extensión mayor, susceptibles por sí mismas de constituir el objeto de un dominio independiente.

1718. La hipoteca se extiende:

Extensión.

- 1º A los accesorios del inmueble, mientras permanezcan como tales, y a todas las mejoras ulteriores, aunque provengan de hechos de terceros.
- 2º A las ventajas resultantes de la extinción de las cargas o servidumbres que pesaban sobre el bien gravado.
- 3º A los productos de la cosa, a sus rentas o alquileres debidos por los arrendatarios y aparceros, con exclusión de los productos pertenecientes a éstos.
- 4º Al inmueble que se inscriba en el Registro como parte integrante de otro ya hipotecado, sin perjuicio de la prioridad que corresponda por los gravámenes en él preexistentes.
- 5º A lo que el asegurador deba al propietario por la pérdida de los objetos hipotecados. El pago no será válido cuando se efectúe sin intervención del acreedor hipotecario; a menos que con noticia de éste, su importe se emplee en reconstruir o reponer la cosa afectada.
- 6º A la indemnización que se obtuviere por el inmueble, en caso de ser expropiado por causa de utilidad pú-

blica, suma que no podrá ser percibida sin que intervenga el acreedor.

Liberación de los productos y cosas accesorias.

1719. Los productos y las cosas accesorias quedarán libres de la hipoteca, una vez enajenados y extraídos del inmueble.

Si la transferencia precedió a la separación, el adquirente no podrá oponerla al acreedor hipotecario, invocando su buena fe, fundada en la ignorancia del gravamen. Si ya se hubiese retirado la cosa, un embargo anterior del acreedor hipotecario no producirá efecto, a menos que el adquirente tuviese conocimiento de él cuando procedió a sacarla.

1720. Cuando se retirasen los productos o las partes constitutivas, dentro de los límites de una buena administración, quedarán libres de la hipoteca, aún sin ser enajenados, siempre que fueren extraídos con anterioridad al embargo, a menos que se tratase de una separación provisional. Lo mismo regirá para las cosas accesorias, con tal que perdieren ese carácter en las condiciones expresadas.

Indivisibilidad.

1721. La hipoteca es indivisible: cada una de las cosas afectadas a una deuda y cada parte de ellas, están obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de la misma. Pero si al ejecutarse el crédito, o al dividir el inmueble gravado, fuere éste susceptible de un cómodo fraccionamiento, la venta o la partición se realizarán en esta forma.

Hipoteca sobre varios inmuebles.

1722. El acreedor, cuya hipoteca comprenda varios inmuebles, podrá a su elección perseguirlos a todos simultáneamente, o sólo a uno de ellos, aunque hubieren pertenecido o pasado al dominio de diferentes personas, o existieren otras hipotecas. Ello no obstante, el juez podrá, con conocimiento de causa, fijar un orden para la venta de los bienes afectados.

1723. Si fueren varios los inmuebles gravados en garantía de un mismo crédito, el propietario de uno de ellos, contra quien se dirigiere la acción, podrá exigir que se cite al juicio a los otros propietarios, para que contribuyan al pago de la deuda, proporcionalmente al valor de cada inmueble.

Parte indivisa.

1724. La parte indivisa de un inmueble puede gravarse, cuando importe la cuota de un condominio; pero la hipoteca quedará subordinada en cuanto a sus efectos, al resultado de la división o licitación entre los condóminos.

Cuando el condueño constituyente viniere a ser propietario de la totalidad, el gravamen quedará limitado al derecho que a él correspondía sobre la cosa.

1725. El instrumento constitutivo de la hipoteca debe contener:

Requisitos del instrumento constitutivo.

- 1º El nombre, apellido y domicilio del deudor y del acreedor. Si fueran personas jurídicas, su denominación legal, y el lugar de su establecimiento.
- 2º La fecha y la naturaleza del contrato a que accede, y el archivo en que éste se encuentra.
- 3º La situación de la finca y sus linderos. Si fuere rural, el distrito a que pertenece, y siendo urbano, la ciudad o villa, y la calle en que se encuentre. No será suficiente para cumplir este requisito, la designación colectiva de los inmuebles que existiesen en un lugar determinado.
- 4º La cantidad cierta de la deuda.

La falta de alguna de las enunciaciones antedichas, no anulará la constitución de la hipoteca, siempre que los jueces, por las constancias del instrumento, pudieren salvar las omisiones o deficiencias.

1726. En la convención hipotecaria, serán nulas las siguientes cláusulas:

Cláusulas nulas.

- 1º La que prohíba al deudor oponer las excepciones de pago y de falsedad extrínseca del título.
- 2º Aquella que permita exigir el capital en caso de mora por intereses, antes de que se adeudare un semestre vencido.
- 3º La que autorice el remate del inmueble afectado, con una base inferior a las dos terceras partes de la tasación fiscal.
- 4º La que prohíba al propietario vender o gravar el bien hipotecado.
- 5º Aquella que, concertada antes del vencimiento de la deuda, acuerde al acreedor el derecho de quedarse con la propiedad del bien en caso de falta de pago, o de ser enajenado de otra manera que por ejecución judicial.

6° La renuncia de la facultad establecida en el art. 1756, o la designación de un plazo mayor para ejercerla. Aquel derecho no podrá ser concedido al acreedor.

Limitación de responsabilidad.

1727. Las partes podrán limitar la responsabilidad del deudor al inmueble afectado. Tal cláusula restrictiva deberá siempre inscribirse en el Registro.

Intereses atrasados.

1728. Al constituirse la hipoteca por un crédito anterior, los intereses atrasados, si los hubiere, deberán liquidarse, y designarse en suma cierta. La indicación de que la hipoteca comprende los réditos ya devengados, sin designación de su cuantía, no produce efecto alguno.

Documentos hipotecarios.

1729. Al constituirse la hipoteca podrán otorgarse letras o títulos a la orden, o pagarés simples, por el importe de la deuda, siempre que ésta no sea condicional ni eventual. Dichos documentos se anotarán en el Registro, y serán subscriptos por su encargado. Sin esa formalidad no se les tomará en cuenta. Deberá constar en ellos la inscripción del instrumento originario, así como los datos suficientes para individualizarlo.

Estos papeles son transmisibles por endoso, y tendrán fuerza ejecutiva. Si fueren a la orden, serán regidos por el Código de Comercio, y en los demás casos, por los preceptos de la cesión de créditos. Podrán constituirse por contrato posterior, extendido en escritura pública, e igualmente registrado.

Hipotecas constituidas en el extranjero.

1730. Las hipotecas convencionales, constituidas por escritura pública en el extranjero, sobre inmuebles situados en el territorio de la Nación, serán inscriptas, una vez protocolizadas, en el Registro del lugar en que se encuentre el bien. Si fueren varios los inmuebles, se inscribirán en los distritos locales, bastando una sola protocolización.

No se registrará la hipoteca que no reuna las condiciones exigidas por este Código.

Duración de los efectos de las inscripciones.

1731. Las inscripciones hipotecarias conservarán sus efectos hasta su cancelación, dentro de los términos del art. 1757.

CAPITULO II

Del efecto de la hipoteca entre las partes

1732. La hipoteca inscrita confiere al acreedor, un Derecho del acreedor. derecho preferente para cobrar su crédito sobre el precio del inmueble. Con tal fin, podrá pedir la ejecución y venta de la cosa hipotecada, así la tenga el deudor, el constituyente o un tercer poseedor.

1733. La garantía hipotecaria se extiende: Extensión de la garantía hipotecaria.

- 1º Al capital adeudado.
- 2º A los réditos convenidos, hasta dos años.
- 3º A los intereses devengados durante el juicio, aunque no se hubieren establecido en la escritura.
- 4º A los daños y perjuicios de la ejecución, estimados en el acto constitutivo, cuando la deuda no fuere de dinero. Si no estuvieren convenidos, los intereses garantizados por la hipoteca no podrán exceder de los legales por el término fijado en el inc. 2º.
- 5º A las costas y gastos judiciales.

1734. El propietario del inmueble conserva el ejercicio de todas las facultades inherentes al dominio; pero no podrá con detrimento del acreedor hipotecario, efectuar ningún acto de disposición material o jurídica, que disminuya el valor del inmueble. Facultades que conserva el propietario.

1735. El acreedor hipotecario, aunque su crédito fuere a término, bajo condición o eventual, podrá solicitar todas las medidas conservatorias para asegurar su derecho, e impedir los actos prevenidos en el artículo anterior. Medidas conservatorias.

Cuando los actos perjudiciales se hubieren realizado, el acreedor podrá exigir al deudor la estimación de los deterioros, aunque provinieren de caso fortuito o de terceros, y el depósito judicial de su valor, o bien demandar un suplemento de hipoteca.

Las mismas facultades corresponden a los acreedores hipotecarios, cuando se hubieren separado o sufrido detrimento los muebles accesorios, siempre que fuere contra las reglas de una buena administración.

Pérdida del plazo.

1736. En los casos de los dos artículos precedentes, los acreedores hipotecarios podrán, aunque sus créditos no estuvieren vencidos, pedir que se prive al deudor del beneficio del término, que el contrato le acordare.

Derecho contra el tercer poseedor.

1737. El acreedor podrá usar de los derechos que le atribuye el art. 1735, contra los terceros poseedores de los bienes hipotecados, con el fin de impedir los perjuicios o menoscabos, y para ser indemnizado del daño sufrido.

CAPITULO III

Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros acreedores

Rango de las hipotecas.

1738. El privilegio reconocido por el art. 1732, se ejercerá sobre el precio del inmueble, en el orden determinado por la fecha de las inscripciones respectivas. Efectuadas en el mismo día, aunque en horas distintas, los acreedores tendrán igual rango. La preferencia subsistirá sobre el precio no pagado de los accesorios vendidos.

Prelación sobre créditos hipotecarios

1739. Tendrán prelación sobre los créditos hipotecarios:

- 1° Los gastos de justicia, devengados para la realización del inmueble.
- 2° Las cargas e impuestos fiscales o municipales, que pesaren directamente sobre la cosa, siempre que, anteriores a la constitución de la hipoteca, aparecieren consignados en las certificaciones requeridas para otorgar la escritura.

Las cargas e impuestos posteriores a la hipoteca, si fueren periódicos, solo tendrán prelación por los dos últimos años, y por el tiempo que transcurra durante el juicio.

- 3° El crédito del propietario vecino que levantó el muro divisorio, conforme a lo dispuesto en este Código, si hubiere sido prenotado en el Registro, antes de cons-

tituirse la hipoteca. Si la construcción fuere posterior, la prenotación será innecesaria.

1740. Si el crédito estuviere sometido a una cláusula resolutoria, el acreedor podrá pedir una colocación actual, dando fianza de restituir la suma que se le asignara, en el caso de cumplimiento de la condición.

Crédito sujeto a condición.

Si ésta fuere suspensiva, o el crédito eventual, el acreedor podrá solicitar que los fondos se depositen, siempre que los titulares ulteriores no prefiriesen darle una fianza hipotecaria de restituir, para el supuesto de que la condición llegare a cumplirse.

CAPITULO IV

Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros poseedores

1741. Cuando el inmueble hipotecado estuviere en todo o en parte en poder de terceros, el acreedor deberá hacer intimar judicialmente al deudor el pago del capital e intereses exigibles. Si no lo verificare, sea cual fuere la causa, podrá entonces recurrir contra aquéllos, exigiéndoles el pago de la deuda, o el abandono de la cosa.

Inmueble hipotecado que se halle en poder de terceros.

Si el tercer poseedor no accediere a ese requerimiento, no podrán los jueces por esa causa, pronunciar contra él, condenaciones personales a favor del acreedor, quien sólo tendrá derecho a perseguir la venta del bien afectado.

1742. El tercer poseedor tendrá derecho:

Derechos reconocidos al tercer poseedor.

- 1º A los plazos que se acordaren al deudor por el contrato, o por un acto de gracia, pero no a los concedidos al concursado para facilitarle el pago de sus deudas.
- 2º A que se le demande la deuda hipotecaria, sólo cuando fuere exigible al deudor.
- 3º A excepcionarse en la ejecución del bien, alegando la no existencia o la extinción del derecho hipotecario, la nulidad de la toma de razón, o la inexigibilidad de la deuda.

- 4º Al abandono del inmueble, siempre que no estuviere personalmente obligado como deudor directo o subsidiario, o no hubiere asumido el pago del crédito por el contrato de adquisición, o por un acto posterior. El abandono sólo podrá hacerse por persona capaz de enajenar sus bienes.
- 5º A ser indemnizado por el deudor, cuando fuere desposeído del inmueble, o debiera abandonarlo a solicitud de acreedores hipotecarios, con inclusión de las mejoras efectuadas.

Abandono.

1743. El abandono que hiciere el tercer poseedor, no autoriza al acreedor para apropiarse del bien. Su derecho se reduce a hacerlo vender para cobrarse con su precio, ejecución que deberá tramitar con el curador que se designe al inmueble abandonado.

Mientras por sentencia del juez no se adjudicare el bien, éste continuará perteneciendo al tercer poseedor, quien podrá recuperarlo en cualquier momento, pagando el capital y los intereses exigibles, aunque no poseyere sino una parte del inmueble, o la suma debida fuere más considerable que el valor de éste.

Oposición al abandono.

1744. Será permitido al vendedor del inmueble hipotecado oponerse al abandono, cuando la ejecución pura y simple del contrato de venta pueda producir lo suficiente para el pago de los créditos.

Obligación de tomar nuevamente el inmueble abandonado.

1745. El vendedor del inmueble que hubiera satisfecho el crédito hipotecario, podrá obligar antes de la adjudicación, al tercer poseedor que lo abandonó, a tomarlo nuevamente para cumplir el contrato de venta.

Derechos que no corresponden al tercer poseedor.

1746. El tercer poseedor no podrá exigir la previa ejecución de otros inmuebles hipotecados al mismo crédito que se hallaren en poder del deudor originario, ni alegar que el bien poseído por él, reconoce otras hipotecas anteriores, que no llegarán a cubrirse por su precio.

Tampoco podrá invocar la retención del inmueble para cobrar las impensas necesarias o útiles, y su derecho se limitará, aún respecto de las primeras, al mayor valor que produzca la cosa gravada, una vez satisfecho el acreedor y los gastos de la ejecución.

1747. Los arrendamientos concertados por el tercer poseedor podrán quedar sin efecto, cuando no hubieren adquirido fecha cierta antes de la intimación del pago, o abandono del inmueble; pero si ya la tuvieren, se regirán por las disposiciones establecidas para los locadores en general.

Arrendamientos concertados por el tercer poseedor.

1748. Los derechos reales que el tercer poseedor hubiere tenido sobre el inmueble antes de adquirirlo, y que se extinguieron luego, por la consolidación o confusión, revivirán después de expropiado el bien; recíprocamente renacerán las servidumbres activas de este último, cuando el inmueble sirviente perteneciere al tercer poseedor.

Derechos reales extinguidos por consolidación o confusión.

El tercer poseedor podrá hacer valer en el orden que corresponda, las hipotecas por él adquiridas sobre el inmueble afectado, antes de haber sido propietario del mismo.

1749. Los acreedores podrán exigir que el inmueble se venda, libre de las servidumbres y otros derechos reales, que le hubiere impuesto el tercer poseedor.

Venta libre de gravamen.

1750. Pagados los créditos hipotecarios, el saldo del precio pertenecerá al tercer poseedor, con exclusión del dueño precedente y acreedores quirografarios de éste.

Saldo del precio.

1751. Si quien constituyó hipoteca en garantía de una deuda ajena, por incumplimiento del deudor fuere privado de su inmueble, gozará de la acción concedida al fiador que hubiere hecho el pago, y podrá reclamar de aquél, el valor íntegro de la cosa, sea cual fuere el precio de la venta.

Hipoteca constituida por terceros.

1752. En las transmisiones a título gratuito, de fincas hipotecadas, se presume que el adquirente toma sobre sí la obligación que la hipoteca garantiza, hasta la concurrencia del valor del inmueble, a menos que del acto constitutivo, resultare lo contrario.

Responsabilidad del adquirente a título gratuito

CAPITULO V

De la extinción de las hipotecas

1753. La hipoteca termina:

Causas de extinción.

- 1º Cuando se extingue la obligación principal.
- 2º Por renuncia expresa, mediante escritura pública, que hiciere el acreedor de su derecho hipotecario, consintiendo en que el gravamen se cancele. En este caso,

el deudor podrá solicitar que la extinción se anote en el Registro y en el instrumento de la deuda.

3º Cuando el dominio irrevocable y la calidad de acreedor hipotecario, se encontraren reunidos en la misma persona.

4º Por el transcurso de cuarenta años desde el día de su inscripción, aunque se hubiere convenido un plazo mayor.

Extinción respecto de
adquirente en públi-
ca subasta.

1754. La hipoteca se extinguirá aunque no estuviere cancelada, respecto de quien hubiere adquirido la finca en remate público, dispuesto por el juez con audiencia previa del Fisco, y de los acreedores que tuvieran constituidas hipotecas sobre el inmueble, desde que, aprobada la subasta, el adjudicatario consignare judicialmente el precio de venta. El privilegio subsistirá sobre esos fondos. Las citaciones se harán al iniciarse los trámites para el cumplimiento de la sentencia, pudiendo los notificados impugnarla, e intervenir en todas las medidas tendientes a cumplirla y distribuir el precio. No llenados los extremos, a que se refiere la primera parte del presente artículo, se mantendrá el gravamen sobre la cosa con relación a los acreedores omitidos.

Subsistencia del cré-
dito en caso de sub-
rogación o confusión.

1755. El pago de la deuda por un tercero subrogado en los derechos del acreedor, no extinguirá la hipoteca.

El deudor que la abonare o fuere condenado a ello, quedará subrogado al acreedor, contra quien poseyere bienes hipotecados, y que como deudor directo, se hubiere hecho cargo del gravamen. Esta regla se aplica al caso de confusión.

Derecho del deudor,
cumplidos diez años
del registro.

1756. Transcurridos diez años desde el registro de la hipoteca, el deudor, siempre que diere aviso al acreedor con seis meses de anterioridad, podrá restituir en cualquier tiempo, el importe no amortizado de la obligación, sin suplemento alguno, fuera de los intereses que adeudare.

CAPITULO VI

De la cancelación de las hipotecas

Forma.

1757. La hipoteca y la toma de razón serán canceladas:

1º Por escritura pública, en que la persona a cuyo favor se hiciere la inscripción, o sus representantes o causa-

habientes, expresen su consentimiento, o declaren la extinción del crédito. Cuando la toma de razón no se hubiere fundado en escritura pública, o cuando la hipoteca se hubiere extinguido, los jueces dispondrán la cancelación de aquélla.

- 2º En virtud de providencia judicial con fuerza definitiva.

1758. Cuando se hubieren otorgado letras o pagarés por el importe de la deuda, y éstos se hallaren registrados, el deudor o un tercero, podrá solicitar la cancelación de la hipoteca entregándolos al Registrador, quien al archivarlos hará constar en ellos que representan el importe íntegro de la deuda hipotecaria. El oficial anotará en el Registro esta circunstancia, consignando el instrumento o inscripción de que derivan, y la fecha de la entrega.

Letras o pagarés por el todo o parte de la deuda.

Si las letras o pagarés representasen sólo parte de la deuda, no se cancelará la hipoteca; pero el Registrador que los reciba anotará el valor de ellos en la inscripción inicial, archivándolos como está prevenido.

1759. Siempre que el acreedor se hallare ausente, y el deudor hubiere satisfecho la deuda, podrá pedir al juez del lugar donde el pago debía hacerse, que le cite por edictos para que haga cancelar la hipoteca. No compareciendo, se le nombrará un defensor para continuar el juicio.

Citación judicial al acreedor ausente.

1760. El coheredero del obligado, o el codeudor de éste que hubieren pagado su cuota en la hipoteca, no podrán exigir la cancelación hasta que la deuda se halle extinguida por completo. El coacreedor o coheredero del acreedor, a quien se hubiere satisfecho su cuota, tampoco podrá hacer cancelar el gravamen, mientras no se pague a los otros cointerésados.

Necesidad de la extinción total.

TITULO XI

De los censos

1761. Los censos autorizados por este Código, como gravámenes de un inmueble que continúa en poder del deudor, sólo podrán consistir en el pago periódico de cierta su-

Censos autorizados.

ma de dinero, ya por término fijo, ya por la vida del titular, pero siempre dentro de un plazo que no podrá exceder de cuarenta años. Dichos censos deberán inscribirse como las hipotecas y les serán aplicadas las demás reglas relativas a ellas, en cuanto no estuvieren modificadas por el presente título.

Extinción a falta de convenio expreso.

1762. En defecto de estipulación expresa, se juzgará que los pagos periódicos producen la extinción del gravamen, dentro del término convenido.

Cantidad por la cual se hará la inscripción.

1763. Las partes deberán fijar la cantidad por la cual se hará la inscripción, de acuerdo con el art. 1716, inc. 2º. Si en el censo constituido por testamento se hubiere omitido dicha suma, se inscribirá la que resulte de la capitalización de la renta en el año, calculada al tipo de interés que cobre a sus deudores el Banco Hipotecario Nacional.

Intransmisibilidad.

1764. Salvo cláusula contraria, el censo constituido por donación o testamento será intransmisible. Su renta podrá ser embargada en los casos prevenidos en el Título I de la Sección I del Libro III.

Embargabilidad de la renta.

Reglas para la redención.

1765. A falta de convenciones, podrá redimirse el censo con arreglo a los siguientes principios:

1º Si fuere a término fijo, se deberá la suma de las prestaciones hasta su vencimiento, deducido el interés corriente por el adelanto de ellas.

2º Cuando se tratare de renta vitalicia, se depositará judicialmente a usuras pupilares un capital, que según el interés que ellas devenguen, alcance para abonar la renta. Ese capital pertenecerá al propietario que redimió el bien, y le será devuelto a la muerte del censalista.

Redención a los diez años.

1766. Cuando el propietario ejerciere la facultad de redimir el inmueble gravado, en los casos del art. 1756, se procederá con arreglo a lo que dispusiere el título constitutivo de la renta. No se presumirá que el capital estimativo para la inscripción deba ser el mismo para redimirlo.

Venta forzada del inmueble.

1767. Cuando por acción de otros acreedores, o porque fuere concursado el propietario del bien, o por otra causa, se procediere a la venta forzada de éste, se aplicará lo dis-

puesto en los dos artículos precedentes. El privilegio no podrá exceder del capital estimado para la inscripción.

Si no pudiese reunirse la suma prevenida en el inc. 2º del art. 1765, podrá autorizarse al titular para que tome anualmente sobre ella la necesaria hasta cubrir la renta, sin perjuicio de entrar en el concurso.

1768. Los censos consignativos perpetuos, constituidos antes de la sanción de este Código, serán redimibles de acuerdo con lo que disponen los artículos precedentes. El capital depositado se afectará al servicio de la renta.

Redención de censos consignativos perpetuos.

1769. Los censos reservativos perpetuos y las capellanías de igual carácter, serán redimibles en la siguiente forma:

Id. de censos reservativos perpetuos.

1º Si al constituirse el gravamen se determinó un capital, se depositará judicialmente su importe a usuras pupilares, aún cuando se hubiera afectado la totalidad del inmueble.

2º Si esta afectación se hubiere realizado sin indicar el capital, aun cuando se determinaren las cargas, deberá depositarse en la misma forma, una suma igual al valor del inmueble en la época de la fundación.

1770. Cuando durante dos años no le fueren pagadas las rentas periódicas, el acreedor podrá pedir la ejecución del bien, y se procederá como lo dispone el art. 1767.

Falta de pago de las rentas.

TITULO XII

De la prenda

CAPITULO I

De la prenda de cosas en general

1771. Habrá constitución de prenda, cuando por contrato se entregare al acreedor, cosa mueble o título de crédito en seguridad de una obligación cierta o condicional, presente o futura.

Concepto.

La prenda convencional —única que este Código reconoce— podrá ser constituida por el deudor, o por un tercero. Este no quedará por ello, personalmente obligado, pero responderá por la evicción.

Capacidad.

1772. Sólo podrá constituir prenda, el dueño de la cosa o titular del crédito afectado, que tuviere capacidad para disponer de sus bienes.

Forma.

1773. La prenda, para oponerse a terceros, deberá constar en instrumento público o privado de fecha cierta, sea cual fuere la importancia del crédito. El documento mencionará el importe de la obligación, así como en detalle la especie y naturaleza de los objetos empeñados, su calidad, peso y medida, cuando tales datos fueren necesarios para individualizarlos.

Cláusulas prohibidas.

1774. Quedan prohibidas las cláusulas siguientes:

- 1º La que impida al deudor oponer las excepciones de pago y falsedad extrínseca del título.
- 2º La que permita exigir el capital en caso de mora por intereses, salvo que se adeudare un bimestre vencido.
- 3º La que, concertada antes de la exigibilidad del crédito, autorizare al acreedor para apropiarse de la prenda, aunque el importe de ella fuere inferior a la deuda, o la que permitiera disponer de la cosa de otra manera que la señalada por este título.
- 4º La que privare al acreedor del derecho de solicitar la venta de la cosa. El dueño de ella podrá convenir, sin embargo, se adjudique al primero por la estimación que se hiciere al tiempo del vencimiento de la deuda; pero no al celebrarse el contrato.
- 5º El pacto comisorio.

Sujeto de la garantía.

1775. La prenda garantiza el pago preferente de la deuda, sus intereses convencionales y moratorios, las cláusulas penales, y en su caso, los daños y perjuicios causados por el incumplimiento, así como los gastos judiciales de la ejecución. Si fuere constituida por un tercero, no podrá ser extendida la garantía en virtud de actos jurídicos posteriores del deudor.

Objeto de la garantía.

1776. La prenda se extiende a los accesorios y aumentos de la cosa, cuya propiedad correspondiera al constituyen-

te. Si aquella produjere frutos, el acreedor deberá percibirlos por cuenta del obligado, y se imputarán, en defecto de convención, a los intereses cuando se debieren, o al capital en caso contrario. Podrá convenirse que los frutos, en todo o en parte, pertenezcan al acreedor en vez de los réditos, aunque de hecho no se hubieran obtenido.

1777. El acreedor estará obligado como depositario de la prenda: Obligaciones del acreedor.

- 1º A emplear en la conservación de la cosa la diligencia exigida por su naturaleza, sin que le sea permitido servirse de ella.
- 2º A restituirla, extinguida la deuda, con los frutos y accesorios al tiempo del contrato y los aumentos que después hubiere recibido; pero estará facultado para retenerla hasta ser reintegrado de las mejoras a que se refiere el inc. 3º del art. 1778.
- 3º A entregar el remanente del precio, después de cobrado el crédito.
- 4º A responder por la pérdida o deterioro de la cosa, si fuere causado por su culpa. Cuando la primera situación fuere inminente, deberá dar aviso inmediato al propietario.

1778. El acreedor prendario tendrá, con respecto a la cosa, los siguientes derechos: Derechos del acreedor.

- 1º Pedir la venta en remate público, a falta de pago. Si el valor de ella no excediere de quinientos pesos, podrá el juez ordenar la venta privada.
- 2º Adquirirla por compra en remate, o en la venta particular autorizada, o por adjudicación judicial, solamente en caso de no existir postores.
- 3º Exigir el reembolso de las impensas necesarias, aunque ella hubiere perecido después. Sólo podrá reclamar las demás cuando hubieren aumentado el valor de aquella.
- 4º Solicitar en los casos del inc. 4º del artículo precedente, o por apreciable disminución de su valor, la venta con arreglo al inc. 1º. La garantía se trasladará al precio que habrá de consignarse.

El constituyente podrá oponerse a la venta, ofreciendo otras seguridades reales suficientes, según el arbitrio judicial.

Abuso de la prenda por el acreedor. Derecho del deudor a la restitución.

1779. Si el acreedor abusara de la prenda, o no percibiera sus frutos, o de cualquier modo la perjudicase, o la pusiera en riesgo de pérdida o deterioro, el dueño de la cosa podrá pedir el secuestro a costa de aquél. Estará también autorizado para solicitar la restitución del objeto, mediante el pago. Cuando en este caso la deuda no estuviera vencida, se descontarán los intereses correspondientes al tiempo que faltare hasta cumplirse el término.

Peligro de pérdida o desvalorización.

1780. Si hubiere motivo para temer que la prenda perezca, o que sufra considerable disminución de valor, el constituyente podrá exigir le sea restituida, reemplazándola por otras garantías reales, o bien solicitar su venta.

Venta de la cosa prendada, a pedido del constituyente.

1781. El constituyente, si mediare ocasión favorable, podrá pedir al juez le autorice para vender la cosa, previa audiencia del acreedor. En éste, como en los casos de los dos artículos anteriores, el procedimiento será sumario, debiendo consignarse el precio, que subrogará a la prenda.

Idem a instancia de los acreedores del constituyente.

1782. Los acreedores del constituyente podrán exigir la venta de la cosa, bajo las condiciones establecidas en el art. 1778, sin estar obligados a satisfacer antes al acreedor prendario, cuyo derecho se limitará al privilegio sobre el precio.

Indivisibilidad.

1783. La prenda es indivisible, no obstante la división de la deuda. El heredero del obligado, que pagare su cuota, no podrá demandar la parte que le corresponde en la cosa, mientras la deuda no hubiere sido satisfecha. Recíprocamente, el heredero del acreedor que recibiere su porción en el crédito, no podrá devolver el objeto en perjuicio de los coherederos aun impagos.

Cuando varias cosas hubieren sido empeñadas en garantía del mismo crédito, no se podrá rescatar una de ellas, sin satisfacer antes toda la obligación. En caso de ejecutarse la prenda, el juez podrá, con conocimiento de causa, fijar un orden para la venta de los muebles afectados.

Subsistencia de los derechos que acuerda la prenda.

1784. Los derechos que acuerda la prenda subsistirán, mientras se halle la cosa en poder del acreedor, sea por sí o por medio del tercero, que designarán las partes. La entrega

de los objetos pignorados, que como poseedor mediato tuviere el constituyente, se efectuará al transmitir esa posesión al titular del gravamen, con aviso al poseedor inmediato.

Se juzgará que el acreedor continúa en la posesión de la prenda, cuando la hubiere perdido, le fuere robada, o la entregare a otro, obligado a devolvérsela.

1785. Si el acreedor perdiera la posesión de la cosa, podrá recobrarla de quien la retuviere, sin exceptuar al propio constituyente.

Pérdida de la posesión por el acreedor.

1786. Perdida la cosa, o robada a su dueño, si el constituyente la hubiere adquirido en venta pública, o de un individuo que acostumbrara vender objetos semejantes, el propietario podrá reivindicarla del acreedor, mediante el pago del precio de su compra.

Cosa robada o perdida.

El acreedor, que de buena fe, recibió prenda que no pertenecía al constituyente, podrá rehusar su entrega al propietario, cuando no hubiere sido robada o perdida.

Acreedor de buena fe.

1787. La prenda de cosa ajena, producirá tan sólo obligaciones personales entre las partes. El acreedor de buena fe, compelido a restituir al propietario el objeto, así recibido en prenda, podrá exigir del constituyente otro de igual valor; si éste no lo entregare, tendrá derecho al pago de la deuda, aunque estuviere pendiente de término, sin perjuicio de reclamar por la evicción.

Prenda de cosa ajena.

1788. Puede constituirse una nueva prenda sobre el mismo objeto a favor de otro acreedor, con tal que éste obtenga la posesión conjunta con el primero, o sea puesta la cosa en posesión de un tercero por cuenta común.

Nueva prenda sobre el mismo objeto.

1789. Cuando el deudor contrajere posteriormente otra obligación a favor del mismo acreedor prendario, que fuere exigible antes de la primera, podrá negarse el último a restituir la cosa sin previo pago de ambos créditos. Este derecho no comportará un privilegio, ni existirá cuando el gravamen fuere constituido por terceros, o el acreedor hubiere adquirido el segundo crédito como cesionario, subrogado o por sucesión.

Prenda tácita.

1790. Si el que otorgó la prenda no fuere el obligado, podrá oponer en la ejecución de aquélla, todas las defensas que competan a un fiador; pero fallecido el acreedor, no podrá el constituyente invocar la aceptación beneficiaria del heredero.

Defensas del tercero constituyente de la prenda.

Extinción.

1791. La prenda termina:

- 1º Por extinguirse la obligación principal;
- 2º Cuando, por cualquier título, la propiedad del objeto empeñado pasare al acreedor;
- 3º Por renuncia;
- 4º Por entrega de la cosa.

CAPITULO II

De la prenda con registro

Concepto.

1792. La prenda con registro, que este Código reconoce, no requiere la entrega ni la tradición exigidas por el art. 1771. Bastará para constituirla, la inscripción en el Registro creado al efecto, quedando las cosas prendadas en poder del deudor, a título de depositario regular, con las obligaciones y derechos inherentes a este carácter.

Objeto.

1793. Esta prenda podrá recaer sobre los objetos siguientes:

- 1º Máquinas locomóviles, e instrumentos de labranza.
- 2º Máquinas fijas, que pertenecieren a arrendatarios, usuarios o usufructuarios, con excepción de las que hubieran introducido en los inmuebles para cumplir los respectivos contratos.
- 3º Frutos de cualquier naturaleza, que correspondan al año agrícola en que el contrato se realizare, así estén pendientes o separados de las plantas, como también las maderas, los productos de la minería y los de la industria nacional.
- 4º Semovientes de todo género.

Prenda sobre frutos
pendientes y produc-
tos de la tierra.

1794. Cuando en la hipótesis del inc. 3º del art. 1793. la prenda se constituyere sobre frutos pendientes, el privilegio del acreedor sólo se extenderá hasta la suma prudencial para levantar la cosecha y proveer a su cuidado y mejor rendimiento, con más la décima parte de esa cantidad, destinada a subvenir a las necesidades del productor. La precedente restricción se aplicará a la prenda constituida sobre los productos de la tierra.

La prenda, a que se refiere este artículo, no podrá establecerse por el propietario del inmueble sin el consentimiento del acreedor hipotecario, quien deberá expresarlo en el mismo instrumento constitutivo.

1795. En la prenda con registro, los objetos habrán de individualizarse por su clase, lugar en que se encuentren, nombre del fabricante o productor, número de fabricación, estado y superficie de los cultivos o del establecimiento industrial. Cuando fueren semovientes, por las marcas, señales, raza, y cualquier otro dato que pueda precisarlos. No será válida la afectación cuando tales elementos no aparezcan tomados directamente de la cosa pignorada.

Individualización de la prenda.

Llenados estos requisitos, el acreedor podrá perseguir la cosa en manos de los terceros adquirentes.

1796. Esta prenda no afectará el privilegio del locador, correspondiente a un año de arrendamiento vencido, ni la cantidad pagadera en especie por el uso o goce de la cosa durante el mismo tiempo, siempre que en ambos casos se adeudaren al constituirse el gravamen, y que el contrato respectivo tuviera fecha cierta anterior a la inscripción de la prenda.

Privilegio del locador.

1797. Serán aplicables a la prenda con registro las disposiciones de la prenda ordinaria. El acreedor gozará del mismo privilegio que se reconoce a quien tuviera la cosa bajo su poder.

Régimen aplicable.

CAPITULO III

De la prenda sobre títulos de crédito

1798. Si lo preñado fuere un crédito, o títulos no negociables por endoso, para que el gravamen quede constituido, deberá notificarse al deudor, y hacerse entrega del documento al acreedor o a un tercero, aunque su monto excediere de la deuda.

Requisitos.

No podrá darse en prenda, crédito que no conste por escrito.

1799. Corresponderán al acreedor los siguientes derechos:

Derechos del acreedor

- 1º Exigir el cumplimiento de la obligación, pero sin facultad para solicitar la venta o la adjudicación.

- 2º Notificar al deudor, cuando el crédito fuere exigible antes que la prenda, para que realice el pago por consignación, a nombre conjunto de él y de quien fuere acreedor.
- 3º Reclamar el pago del crédito, sin perjuicio de lo prevenido en el inciso precedente, para el supuesto de que el suyo no fuere exigible.
- 4º Solicitar, cuando el crédito que se dió en prenda fuere exigible antes que el garantizado con ella, que la suma percibida se coloque a usuras pupilares o en valores, según las reglas establecidas para la inversión de fondos de incapaces, por el tiempo que faltare hasta poder reclamar el crédito prendario.
- 5º Requerir, en el supuesto del inciso precedente, cuando lo percibido fueren cosas ciertas o inciertas, susceptibles de deterioro o de pérdida de valor, u ocasionaren gastos de conservación, o en otros semejantes, que el juez autorice su venta.

El mismo derecho corresponderá también al deudor, tanto en el caso de este inciso, como en el del 4º, y en ambos supuestos la prenda continuará sobre los valores adquiridos o depositados.

Consecuencias del pago del crédito prendado.

1800. Satisfecho el crédito dado en garantía, se producirán las consecuencias siguientes:

- 1º Cuando en virtud del crédito prendado, el deudor de él entregare una cosa mueble, la prenda subsistirá sobre ella.
- 2º Si lo entregado fuere un inmueble, éste quedará hipotecado bajo la condición de su registro inmediato.
- 3º Cuando se pagare en efectivo y el crédito principal fuere de dinero, aquel importe se aplicará a satisfacerlo.
- 4º Siempre que el crédito principal no consistiere en dinero, el numerario que se abonó quedará afectado a la seguridad de aquél.
- 5º Si la prenda no hubiere sido avaluada y el deudor pagare en efectivo, quedarán los frutos afectados a la seguridad del crédito.

1801. Prendado un crédito a varios acreedores, su cobro sólo podrá hacerse por aquél, cuyo derecho tuviese prioridad sobre los demás.

Pluralidad de acreedores.

1802. Cuando la exigibilidad del crédito pignorado dependiera de una opción o declaración del acreedor, el prendario podrá efectuarla si su propio crédito fuese exigible. No siendo éste el caso, deberá realizarla de común acuerdo con el obligado. Cuando la opción o comunicación correspondiesen al deudor del crédito dado en garantía, sólo producirán efecto, si fueren hechas al propio acreedor y al prendario.

Crédito sujeto a opción o declaración del constituyente.

Serán válidas las convenciones que sobre el particular concierten el acreedor pignoraticio y su deudor.

1803. El acreedor prendario no estará obligado a satisfacer las nuevas cuotas exigidas por los emisores de los papeles dados en prenda. Las abonará el deudor, salvo convención distinta, pero si lo hiciere el acreedor, la prenda se extenderá a ellas, pudiendo exigir su reembolso inmediato.

Nuevas cuotas del crédito preñado.

1804. Cuando la prenda fuere constituida por un tercero, éste podrá oponer la compensación con su propio crédito.

Prenda constituida por un tercero.

1805. En esta prenda regirán subsidiariamente las disposiciones relativas a la de cosas.

Aplicación subsidiaria.

TITULO XIII

De la anticresis

1806. Habrá anticresis convencional —única que este Código reconoce— cuando el acreedor fuere puesto en posesión de un inmueble por el deudor o un tercero, a fin de percibir los frutos, e imputarlos anualmente al pago de los intereses, si fueren debidos, y después al del capital de su crédito.

Concepto.

Para acordar anticresis deberá el deudor o el tercero, tener el dominio o el usufructo del bien y gozar, en los dos casos, de capacidad para disponer.

Capacidad.

Vendida la cosa, el anticresista no tendrá privilegio sobre su precio.

- Forma.** 1807. La convención debe constar en escritura pública, e inscribirse en el Registro. Podrá pactarse en ella que el acreedor reciba los frutos, en todo o en parte, en vez de intereses, sea cual fuere su importe y aunque ninguno se obtuviere.
- Cláusulas prohibidas.** Serán cláusulas prohibidas, las que permitan al acreedor impago adueñarse del inmueble por el importe de la deuda, o por el precio que fijaren peritos, o vender por sí el bien dado en anticresis.
- Derechos del acreedor.** 1808. Corresponde al acreedor.
- 1º Retener el inmueble hasta el pago íntegro del capital y accesorios, con el mismo carácter indivisible que en el caso de prenda.
 - 2º Hacer suyos los frutos del inmueble producidos de acuerdo a una administración regular, ya percibiéndolos como consecuencia del cultivo directo, ya mediante arrendamiento del fundo, o alquiler de la finca.
 - 3º Percibir los frutos, aun en el caso de hipoteca anterior, mientras el titular de ella no los embargare;
 - 4º Solicitar la venta judicial del inmueble, si el deudor no pagare la deuda.
 - 5º Mientras no sea vendida la cosa, la preferencia sobre los acreedores quirografarios y terceros adquirentes del bien, así como respecto de los hipotecarios posteriores a la inscripción de su anticresis.
 - 6º Restituir el inmueble en cualquier tiempo;
 - 7º Perseguir el pago de su crédito por los medios legales, salvo convención contraria.
1809. El acreedor podrá descontar de los frutos percibidos el importe de los gastos de conservación, y si aquéllos fueren insuficientes, cobrarlos del deudor; a menos que se hubiere convenido que en su totalidad habrían de compensarse con los intereses. En este caso, sólo podrá repetir aquellas impensas que el usufructuario estuviere autorizado a reclamar del nudo propietario. Las mejoras útiles no serán exigibles, aunque hubieren acrecido el valor del inmueble.
- Obligaciones del acreedor.** 1810. El acreedor estará obligado:
- 1º A rendir cuenta de los frutos al deudor.
 - 2º A cuidar la cosa y proveer a su conservación, repa-

rando el detrimento que sufiere por su culpa o negligencia.

- 3º A mantener el inmueble, sin introducir cambios en él o mudanza en la explotación, cuando de ello resultare que restituido el bien, el deudor no podría utilizarlo de la manera que antes lo hacía.
- 4º A pagar las contribuciones y cargas anuales del inmueble, descontando de los frutos el desembolso que hiciere, o repitiéndolo del deudor.
- 5º A conservar todos los derechos que tuviere la heredad, cuando la recibió en anticresis.
- 6º A restituir la cosa al constituyente, una vez satisfecho el crédito, y aun antes, si habiendo abusado de sus facultades, le fuere exigida por el deudor.

1811. El acreedor, que tenga hipoteca sobre el inmueble en anticresis, podrá usar de su derecho como si no fuera acreedor anticresista.

Acreedor hipotecario sobre inmueble que tiene en anticresis.

1812. La constitución de anticresis por un tercero no deudor, le atribuye las excepciones y derechos de un fiador.

Anticresis constituida por un tercero.

SECCION TERCERA

PROTECCION DE LOS DERECHOS REALES

TITULO I

De la demarcación de los inmuebles

1813. El titular de derechos reales sobre una heredad, no separada de otra por edificios, muros, cercas u obras permanentes, podrá exigir de quienes lo sean respecto de la contigua, que concurran con él a demarcar en el terreno el límite divisorio, o bien a fijar de nuevo los mojones desaparecidos o removidos. Podrá citarse a los demás poseedores, que lo fueren a título de derechos reales, para que intervengan en el juicio. La acción habrá de dirigirse contra el Estado, cuando se tratare de sus bienes privados.

Derecho al deslinde.

Gastos.

1814. Los gastos de la demarcación serán comunes para los colindantes. Cuando hubiere exigido la mensura de los fundos o de uno de ellos, se dividirán proporcionalmente a la superficie de las heredades.

Bases para determinar los límites confusos.

1815. Si hubiere confusión en los límites, o desacuerdo respecto del trazado, decidirá el juez, sobre la base de los títulos respectivos, de la posesión en su defecto, o finalmente por las circunstancias del caso, con arreglo a los hechos demostrados.

Trámites para el deslinde.

1816. Todo deslinde deberá practicarse por agrimensor público, con audiencia o intervención de la autoridad administrativa. Si fuere convencional, para que el acuerdo tenga eficacia, deberá presentarse con la mensura, a la aprobación del juez competente.

Esta homologación y el fallo respectivo, si el deslinde fuere judicial, constituirán título de propiedad entre las partes y los sucesores, siempre que se hubieren inscripto en el Registro. Sólo podrán ser impugnados cuando las sentencias o los actos jurídicos puedan serlo.

Bienes del dominio público.

1817. El deslinde de los bienes del dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa.

TÍTULO II

De las acciones reales

Finalidad.

1818. Las acciones legisladas en el presente título persiguen la declaración judicial de la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, con el fin de impedir los hechos que se opongan a su libre ejercicio, o puedan perturbarlo.

CAPÍTULO I

De la acción reivindicatoria

A quienes corresponde.

1819. Corresponde la acción reivindicatoria:

- 1º Al propietario de la cosa.
- 2º A todos los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión.
- 3º Al acreedor hipotecario.

1820. No podrá ejercerla:

Quienes no pueden ejercerla.

- 1º Quien careció de derecho a poseer la cosa cuando iniciara la demanda, aunque viniere a tenerlo al tiempo de la sentencia.
- 2º Quien no lo tuviere al fallarse la causa, aunque lo hubiera tenido al deducir la acción.

1821. Pueden ser demandados por reivindicación:

Contra quienes puede dirigirse.

- 1º El heredero del poseedor, siempre que posea la cosa, objeto de ella; pero sólo estará obligado por la parte que tenga en la posesión.
- 2º El poseedor que deba restituir la cosa.
- 3º Con referencia a un inmueble, quien lo hubo del reivindicante o de su autor, aunque fuese de buena fe, por un título nulo a anulable, con la reserva establecida en el art. 210.
- 4º El poseedor actual de un inmueble que lo obtuvo de un enajenante contra quien procedía la acción, salvo lo prevenido en el Título II, Sección II de este libro, respecto de los adquirentes a título oneroso y de buena fe.

1822. Pueden reivindicarse:

Objeto de la reivindicación.

- 1º Las cosas particulares, de que se tenga dominio, tanto muebles como inmuebles, y las que por su carácter representativo se consideren tales.
- 2º Los restos de las cosas que hubieren perecido, o los accesorios que subsistieren de ellas, siempre que fueren determinables de modo cierto.
- 3º Las universalidades de hecho.

1823. No podrán reivindicarse:

- 1º Las cosas futuras.
- 2º Las accesorias, aunque llegaren a separarse de las principales, a no ser que éstas fueren reivindicadas con ellas.
- 3º Los muebles, cuya identidad no pueda ser reconocida.

4° Los muebles enumerados en el art. 1829.

5° Las universalidades de derecho.

Posesión de cosas
muebles: presunción
de dominio

1824. Quien posea de buena fe de una cosa mueble, se presume propietario de ella.

El poseedor anterior de una cosa mueble, se juzgará haber sido propietario de la misma, durante el tiempo de su posesión.

Quien fuere poseedor inmediato, podrá invocar la presunción de propiedad que correspondiere al mediató.

Cuando alguien pretenda poseer en virtud de un derecho personal, o de uno real distinto del dominio, se tendrá por existente el derecho invocado, más esta presunción no podrá oponerse a la persona, de quien la cosa fue recibida.

Excepción al artículo anterior.

1825. La presunción del artículo precedente no podrá oponerse al poseedor que hubiere perdido la cosa, o a quien le hubiere sido robada; ni tampoco al poseedor mediató, por el inmediato.

Se consideran cosas robadas, las substraídas violenta o clandestinamente; más no aquellas que por abuso de confianza, violación de un depósito u otro acto de engaño o estafa, hubieren salido del poder del propietario.

Presunción de mala fe.

1826. Se juzgará de mala fe, quien comprare la cosa robada o perdida a persona sospechosa, que no acostumbraba a vender objetos semejantes, o que no tenía capacidad o medios para adquirirla.

El anuncio de que una cosa fué robada o perdida, no bastará para considerar de mala fe al poseedor de ella, que la hubiere adquirido con anterioridad, a no ser que se pruebe que tuvo conocimiento de aquél.

Muebles registrados: presunción.

1827. Tratándose de cosas muebles, para cuya transmisión se exige el registro, se presumirá que la propiedad pertenece a quien las tuviere anotadas a su nombre, o a quien corresponda la marca inscripta.

Reivindicación de cosa robada o perdida.

1828. Quien hubiere perdido una cosa mueble, o aquel a quien le hubiere sido robada, podrá reivindicarla aunque ella se hallase en poder de un tercero de buena fe. El reivindicante no estará obligado a reembolsarle el precio que pagó, a no ser que la cosa hubiera sido comprada en feria, mercado, venta pública, o a quien comerciare en objetos semejan-

tes. En estos casos, el reivindicante tendrá derecho a repetir lo pagado contra el vendedor de mala fe.

1829. No serán reivindicables los muebles:

Muebles no reivindicables.

1° Cuando el poseedor invocare la presunción del art. 1824.

2° Si los poseyere una persona que, aun siendo de mala fe, los hubo de quien podía alegar esa misma presunción.

3° Cuando la cosa hubiere sido transmitida a un poseedor de buena fe, por quien la recibió en confianza del dueño o del representante de éste. No obstará el hecho de que hubiere sido entregada sin facultad para ello, o en virtud de engaño o de acto ilícito.

La acción procederá en el caso de este inciso, cuando la cosa se transfirió a título gratuito, y se hallare en poder del beneficiario.

1830. Cuando proceda la reivindicación contra el nuevo poseedor, podrá optarse entre intentarla directamente, o deducir una demanda subsidiaria contra el enajenante o sus herederos, para indemnizar el daño causado por la transferencia. En caso de obtenerse completo resarcimiento, cesará el derecho de reclamar la cosa.

Acción subsidiaria.

1831. Sea o no posible la reivindicación contra el nuevo poseedor, si éste adquirió la cosa del enajenante responsable de ella y no hubiere pagado el precio en todo o en parte, el reivindicante tendrá acción contra el actual poseedor para reclamar lo que adeude.

Acción para reclamar el precio adeudado.

1832. Las demandas accesorias que procedan contra el poseedor por restitución de los frutos o productos, así como por los daños que haya causado en la cosa, pueden intentarse contra los herederos por la parte que a ellos corresponda.

Demandas contra los herederos.

1833. El demandado que reconoce un poseedor mediato, deberá declarar el nombre y residencia de aquél, para que se le cite en juicio. Siempre que éste compareciere, el primero podrá continuar en defensa de su derecho, o cesar en su intervención. La sentencia que se dicte, constituirá respecto de él, cosa juzgada en todos los casos.

Denuncia del poseedor mediato.

1834. Cuando el compareciente no confirmare lo expuesto por el demandado, o si transmitiere luego sus derechos, o dijese haberlos transmitido con anterioridad, y la transfe-

Denunciado que niega o transfiere la posesión mediata.

rencia no estuviere inscripta o prenotada, se dará la posesión mediata o inmediata al actor, según que el demandado opusiere o no, su derecho a esta última o a la posesión por parte indivisa.

Alegación o abandono
malicioso de posesión.

1835. El que de mala fe se diere por poseedor sin serlo, será condenado a indemnizar cualquier perjuicio que de ese hecho resultare al reivindicante.

Esta regla se aplicará al que por dolo o hecho suyo, dejare de poseer para dificultar o imposibilitar la reivindicación.

Medidas de seguridad.

1836. Durante el juicio, el demandante podrá impedir que el poseedor deteriore la cosa. Si fuere mueble, y hubiere motivo para temer que se pierda o menoscabe en manos del poseedor, podrá pedir el secuestro de ella, o caución suficiente de que será restituída en caso de condena.

Prohibición de realizar mejoras.

1837. Notificada la demanda, no será permitido al poseedor efectuar impensas, ni construcciones, por útiles que sean, y sólo podrá cobrar las necesarias.

Si el reivindicante, conociendo los nuevos trabajos o gastos útiles los tolerase, regirá lo dispuesto por el art. 1499.

Acciones compatibles con la reivindicación.

1838. Con la acción reivindicatoria, podrán deducirse todas las personales que competan por el acto ilícito cometido contra el reivindicante, las de resarcimiento por los deterioros que el poseedor hubiere causado en la cosa, y la de restitución de los frutos y productos, cuya propiedad no le corresponda según lo dispuesto por este Código.

Reglas sobre la prueba.

1839. Respecto de la prueba, en la reivindicación de inmuebles, se observará lo que sigue:

- 1º El derecho invocado se demostrará con el asiento en el Registro, de acuerdo con el art. 1453. El demandado justificará de igual modo, el título que oponga.
- 2º Si el derecho del demandante no estuviere inscripto, deberá justificar su existencia y la rectificación, en su caso, de los asientos del Registro. Cuando careciere de inscripción el derecho del demandado, incumbirá a éste acreditar el que invocare contra el actor.
- 3º A falta de inscripción, o cuando se tratase de rectificar la existente, si el título del reivindicante o el de su autor, fuere posterior a la posesión del deman-

dado, no procederá la demanda, aunque éstos no presentaren título alguno.

- 4º Si el reivindicante exhibiere título anterior a la posesión del demandado, y éste no lo presentare por su parte, se hará lugar a la acción.
- 5º Cuando ambas partes, en el caso del inciso anterior, presentaren cada una, título sobre el inmueble, emanado de un autor común, será preferida aquella que lo hubiere inscripto primero.
- 6º Si el título fuere anterior a la vigencia de este Código, será considerado propietario el que antes hubiese sido puesto en posesión de la heredad. Cuando se tratare de otro derecho, el que hubiere llenado primero los requisitos exigidos por la ley que entonces rigiera.
- 7º Siempre que el actor y el demandado presentaren cada uno, títulos de adquisición, derivados de personas distintas, sin que se pueda decidir a quien corresponde el derecho controvertido, se presumirá que pertenece al que lo tuviere inscripto.
- 8º En caso de doble inscripción contradictoria, o de no existir ninguna, se juzgará que el derecho corresponde al poseedor actual. Cuando se tratare de derechos sobre la cosa de otro, se presumirá que la propiedad es libre y plena, no obstante la posesión y la inscripción.

1840. El cumplimiento de la sentencia se ajustará a las reglas siguientes:

Reglas sobre cumplimiento de la sentencia.

- 1º Si la cosa fuere mueble, el vencido deberá entregarla donde aquélla se hallare, y si, después de la demanda, la hubiere transportado a otro lugar, volverla al sitio anterior.
- 2º El condenado a restituir el inmueble, ejecutará la sentencia, desocupándolo, de manera que el demandante pueda entrar en su posesión.
- 3º El poseedor condenado a restituir la cosa o a pagar su precio, abonará los frutos percibidos desde la notificación de la demanda, aunque no hubieren sido solicitados, salvo cuando se debieren por la naturaleza del derecho.

La condenación comprenderá el valor de los frutos no percibidos por negligencia del poseedor durante el expresado período. Si medió mala fe por parte de aquél, deberá también los que el reivindicante hubiera podido percibir, y aun los civiles que hubiere sido susceptible de producir la cosa no fructífera.

- 4º El poseedor de mala fe será responsable de la ruina o deterioro de la cosa, aunque fueren motivados por caso fortuito, a no ser que hubieren ocurrido igualmente en poder del reivindicante.
- 5º El poseedor de buena fe sólo responderá por la destrucción o deterioro de la cosa, aunque resultaren de hecho suyo, hasta concurrencia del beneficio obtenido por la enajenación de los materiales o accesorios o su empleo en otros bienes; pero el de mala fe deberá satisfacer el valor del objeto, aunque no hubiere obtenido provecho alguno.
- 6º Los gastos necesarios o útiles, serán satisfechos al poseedor condenado a la restitución. Se consideran tales, los relativos a impuestos extraordinarios sobre el bien y por las hipotecas o tributos que lo gravaban cuando comenzó a poseer el demandado, o su autor.
- 7º El reivindicante deberá la plusvalía que la cosa hubiere obtenido por gastos en ella, útiles o necesarios; pero las mejoras voluptuarias podrá retirarlas el reivindicado, si al hacerlo no se causare daño al objeto. Las mejoras que consistieren en construcciones nuevas, o en trabajos de igual índole, se registrarán por lo dispuesto en los arts. 1497, 1498, 1618 y siguientes.
- 8º Los gastos hechos por el poseedor de buena fe, para la conservación normal de la cosa, así como las contribuciones ordinarias de la propiedad, son de su cargo hasta la concurrencia del valor de los frutos percibidos. Le serán abonados los primeros, en cuanto excedieren al valor de éstos.

En todos los casos, el poseedor de mala fe podrá cobrar los gastos expresados.

- 9º El poseedor podrá exigir las impensas y mejoras por construcciones y trabajos hechos que hubiere efectuado su autor durante la posesión, y serán juzgados según la calidad que ella tenga en el sucesor.

El reivindicante las deberá, aunque fueren anteriores a su adquisición.

10º Procederá la compensación entre reivindicante y poseedor, en cuanto a las sumas que respectivamente debieren pagarse. El segundo, podrá retener la cosa reivindicada hasta percibir el importe de las indemnizaciones que le correspondan, y si la enregare, subsistirán sus créditos.

11º Si la retención procediere, podrá el poseedor estimar su crédito y requerir del dueño manifieste dentro del tiempo que señalará el juez, si está o no conforme. Cuando no hubiere juicio, el poseedor fijará por sí un plazo prudencial según las circunstancias. Vencido el término sin respuesta del propietario, podrá perseguir el pago sobre la cosa poseída; pero si aquél objetare la suma reclamada, el poseedor deberá hacerla establecer en juicio, antes de iniciar la ejecución.

No tendrá derecho a retener, el poseedor que hubiere obtenido la cosa por delito.

12º La responsabilidad del propietario por las indemnizaciones debidas al poseedor, sólo se hará efectiva en la cosa reivindicada. Podrá aquél liberarse de ella, haciendo abandono, siempre que no hubiere aceptado la estimación del poseedor en el caso del inco precedente. Serán aplicables las disposiciones que rigen al que hiciere el tercer poseedor de un bien hipotecado.

1841. Cesa la buena fe a que se refiere el inc. 3º del artículo precedente, cuando el poseedor conociere la falta de su derecho a poseer. Ese conocimiento resultará de circunstancias incompatibles con una creencia razonable sobre la legitimidad de aquel derecho.

Reglas sobre buena y mala fe del reivindicado.

Los actos de percepción, disposición, y construcción o destrucción, se reputarán de buena o mala fe, con referencia a la época en que se hubieren realizado.

El heredero de un poseedor de mala fe, será juzgado según su buena fe, respecto de los hechos cumplidos por él.

1842. Las reglas de este capítulo se aplican en lo pertinente a la acciones confesoria y negatoria, y también a las cosas muebles que deben inscribirse para su adquisición.

Aplicación extensiva.

CAPITULO II

De la acción confesoria

Contra quien procede. **1843.** Procede la acción confesoria contra quien por sus actos, de cualquier modo impidiere la plenitud de los derechos reales o las servidumbres activas, con el fin de que unos y otras se restablezcan. Ella compete:

A quienes compete. 1º A los poseedores de inmuebles con derecho a poseer.
2º A los titulares verdaderos o putativos de servidumbres personales o activas;
3º A los acreedores hipotecarios de inmuebles dominantes.

Prueba. **1844.** Le bastará al actor probar su derecho de poseer el inmueble, cuando no se tratase de una servidumbre; su derecho de poseer el inmueble dominante y su servidumbre activa, o su derecho de hipoteca, cuando tal fuere lo impedido.

Inmuebles en condominio. **1845.** Si el inmueble dominante o sirviente perteneciere a diversos poseedores con derecho de poseer, la acción confesoria corresponderá a cada uno de ellos y contra cada uno de ellos, en los casos prevenidos en los artículos anteriores; y las sentencias que se pronunciaren, perjudicarán o aprovecharán a todos en su efecto principal, más no en el accesorio de la indemnización del daño causado.

CAPITULO III

De la acción negatoria

Contra quien procede. **1846.** Procede la acción negatoria contra quien impidiere la libertad del ejercicio de los derechos reales, con el fin de que ella se restablezca. Corresponde;

A quienes compete. 1º A los poseedores de inmuebles con derecho a poseer.

- 2º A los acreedores hipotecarios, impedidos de ejercer su derecho.
- 3º A quien se viere imposibilitado por cualquiera que se atribuya una servidumbre indebida.

1847. Al actor le bastará probar su derecho de poseer o el título hipotecario, en su caso. Prueba.

1848. Si el hecho del demandado, aun cuando impidie- Demandado que no se atribuye derecho real.
re el libre ejercicio del derecho real, no importara arrogarse uno de la misma naturaleza, la acción por el daño causado, si procediere, sólo será juzgada como personal.

1849. También podrá la acción perseguir como efecto Finalidades accesorias.
accesorio en cuanto al demandado:

- 1º Que se le prive del ulterior ejercicio de los actos que la motivaron.
- 2º Que se reduzca a sus verdades límites el derecho real que se ejerciere con título para ello.
- 3º Que abone los perjuicios causados por sus actos.
- 4º Que asegure mediante caución, que no habrá de turbar el derecho reclamado.

LIBRO QUINTO
DE LA SUCESIÓN HEREDITARIA
SECCIÓN PRIMERA
DE LA TRANSMISIÓN POR CAUSA DE MUERTE

TÍTULO I

Del derecho sucesorio

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

- Apertura de la sucesión.** **1850.** La sucesión legítima o testamentaria, sólo se abre por muerte de la persona, o en virtud de la presunción legal de su fallecimiento.
- Contenido de la herencia.** **1851.** La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones del causante, que no se hubieren extinguido por su deceso.
- Capacidad para suceder.** **1852.** Goza de la capacidad para suceder, toda persona natural o jurídica que exista en el momento de la muerte del autor, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 105.
- Transmisión ipso jure.** **1853.** Desde la muerte del causante, quedan los herederos investidos del patrimonio de éste. Le suceden en sus derechos efectivos y en los eventuales. Son poseedores de lo que el autor poseía, aun antes de tomar el poder real sobre los bienes.
- Ley aplicable.** **1854.** El derecho hereditario es regido por la ley local del domicilio que tuvo el causante al ocurrir su muerte. A los inmuebles situados en el territorio de la Nación, les serán exclusivamente aplicables las normas de este Código.

1855. Cuando por sucesión abierta en el extranjero, se atribuyere al fisco respectivo cualquier clase de bienes existentes en el territorio de la Nación, sea en virtud de vacancia o de herencia legítima, ello no producirá efecto, y tales valores serán transmitidos con arreglo a las disposiciones del presente Código.

1856. Corresponde a los jueces del último domicilio del causante, el conocimiento de la sucesión de éste, así como también el de las demandas siguientes:

Juez competente. Universalidad del juicio.

- 1º Las relativas a los bienes hereditarios hasta la partición inclusive, cuando fueren interpuestas por alguno de los herederos contra los demás.
- 2º Las concernientes a la garantía de los lotes entre los coparticipes, y las que tiendan al cumplimiento, reforma o nulidad de la división.
- 3º Aquellas que persigan la ejecución de las cláusulas testamentarias, aunque éstas fueren a título singular.
- 4º Las personales de los acreedores del causante, mientras no mediare partición.

En el caso del art. 1854, segunda parte, los juicios sucesorios respectivos, quedarán radicados ante los jueces del lugar en que los bienes se hallaren; pero si estuvieren en provincias o territorios diversos, el conocimiento de aquéllos competirá a los tribunales de la Capital Federal, aun cuando no existieren bienes en ésta.

CAPITULO II

De la aceptación y de la renuncia de la herencia

1857. El heredero adquiere la sucesión desde la muerte del causante, bajo reserva de su facultad para renunciarla. Este derecho deberá ejercerlo dentro de los ciento veinte días, corridos desde que tuvo conocimiento del deceso y del título en cuya virtud fuere llamado. Cuando residiere en el extranjero, el plazo será de ciento ochenta días.

Adquisición.

Plazo para renunciar.

La citación por edictos no hará presumir ese conocimiento.

Transmisión del derecho de renunciar.

1858. La facultad de renunciar pasa a los herederos de quien hubiera fallecido antes de vencer el término sin ejercerla. El período legal se juzgará entonces, prorrogado por todo el tiempo necesario para aceptar o repudiar la herencia del propio causante.

Restricciones a la aceptación y a la renuncia.

1859. No pueden aceptar ni repudiar los que no tienen la libre disposición de sus bienes, salvo lo dispuesto en el art. 365, inc. 4° y 5°, con respecto a la mujer casada. Una herencia futura no podrá ser objeto de aceptación o renuncia. Tampoco será lícito renunciar una herencia ya aceptada, ni después de transcurrido el término que fija el art. 1857.

La aceptación y la renuncia son irrevocables.

Pedido de inventario.

1860. Durante el plazo del art. 1857, el heredero podrá manifestar ante el juez de la sucesión, su propósito de hacer inventario, para deliberar lo que le convenga decidir.

En tal supuesto, deberá citarse de oficio a los acreedores presentados o que aparezcan en los papeles del causante, a los legatarios y a los coherederos, y por edictos a los desconocidos, a fin de que concurran a la formación del inventario, el que será judicial, siempre que alguno de ellos lo solicite, y en otro caso se efectuará por el escribano que designe el heredero.

Prórroga.

1861. El plazo no podrá extenderse por el mero hecho de no estar concluido el inventario. Se requiere para ello resolución judicial, que sólo procederá cuando la diligencia hubiere comenzado dentro de los treinta primeros días y fuere imposible terminarla sin culpa del heredero. Si éste se hallare fuera del país, para gozar de la prórroga deberá iniciar el inventario dentro de los primeros noventa días. El juez fijará en ambos supuestos, la fecha en que habrá de producirse la declaración del interesado.

Luto y llanto.

1862. Hasta transcurridos nueve días desde la muerte del causante, los acreedores o legatarios no podrán intentar acción contra el heredero.

Alcance de ciertas aceptaciones.

1863. La aceptación de una parte de la herencia, implicará la del todo; la que se hiciere a término, valdrá como pura y simple, y la sujeta a condición carecerá de efecto. Sin embargo, el llamado a recoger varias porciones hereditarias, conforme al art. 2068, podrá aceptar las unas, y repudiar las otras, cuando la vocación se fundare en títulos distintos.

1864. Las reglas contenidas en el artículo anterior, se aplicarán a la renuncia. Si ella fuere parcial, equivaldrá a una aceptación.

Aplicación a la renuncia.

1865. La aceptación pura y simple, resultará de la declaración expresa formulada ante el juez que intervenga en el juicio sucesorio; la tácita, de actos sólo compatibles con la calidad de aceptante puro y simple. No se consideran tales, los meramente conservatorios o de administración y guarda provisional. Cuando después de practicados, renunciare el heredero, sus relaciones con la masa serán las de un gestor de negocios.

Aceptación expresa y tácita.

1866. Cuando el heredero presuntivo ejecute actos, que creyó o pudo creer tenía derecho de realizar en otra calidad que la de aceptante, no se juzgará que hubo adición tácita de la herencia, aunque realmente sólo estuviere habilitado para cumplirlos en carácter de heredero.

Actos realizados en otra calidad que la de aceptante.

1867. La aceptación fija en el heredero el derecho sobre los bienes dejados por el causante, a partir del fallecimiento de éste. Si ella fuere pura y simple, el aceptante quedará obligado al pago de las deudas y cargas, tanto con el activo sucesorio, como con el suyo propio; pero sólo deberá satisfacer los legados hasta la concurrencia del valor recibido.

Efecto de la aceptación.

1868. El heredero, salvo disposición contraria del testador, está obligado respecto de los miembros de la familia del causante, a quienes éste atendía, y que habitaban con él cuando se produjo el fallecimiento, a mantenerlos en la misma medida durante un mes a partir de la muerte, y a concederles por ese tiempo el uso de la habitación y enseres.

Cargas de familia.

1869. Cuando el autor hubiere fallecido en estado de concurso judicial, no se producirá la confusión de patrimonios, ni la responsabilidad ilimitada del aceptante. Cesarán los efectos de la aceptación cuando los acreedores soliciten dentro de los seis meses de abierta la sucesión, el concurso de esta última.

Concurso del causante o de la sucesión.

En ambos supuestos, el heredero responderá a los acreedores por los actos siguientes a la aceptación, como si hubiere recibido de ellos mandato para administrar; pero los ya producidos se regirán por los principios de la gestión de negocios.

Los gastos satisfechos por el heredero, serán a cargo de la masa, mas no podrá ejercer el derecho de retención para seguridad de su cobro.

Efecto de la renuncia. 1870. Se juzgará que el renunciante nunca fué heredero. Los bienes se transmitirán como si éste no hubiere existido, salvo el derecho de representación.

Inscripción. 1871. La aceptación o la renuncia, para ser válidas respecto de terceros, deberán ser inscriptas por orden judicial, así como los fallos que reconocieren su existencia.

Retención de donaciones y legados. 1872. El heredero que renunciare a la sucesión, podrá retener las donaciones entre vivos que el testador le hubiere efectuado, y reclamar los legados, cuando no excedieren de la porción disponible.

Nullidad de la aceptación y de la renuncia. 1873. La aceptación y la renuncia podrán ser anuladas a pedido del heredero, o de sus acreedores a nombre de él, en los casos siguientes:

- 1º Cuando hubieren sido efectuadas sin observar las formas prescriptas para suplir la incapacidad del heredero.
- 2º En el caso del art. 1866 y cuando mediare error sobre la causa de la vocación.
- 3º Cuando fueren determinadas por dolo o violencia, cualquiera sea el agente.

Fraude en la aceptación. 1874. Los acreedores del heredero podrán, en el caso de que éste hubiere aceptado una sucesión que le fuere manifestamente perjudicial, en connivencia fraudulenta con los acreedores hereditarios, pedir la revocatoria en su propio nombre.

Renovación de la renuncia a pedido de los acreedores. 1875. Los acreedores del renunciante, anteriores a la repudiación, y toda persona interesada, podrán exigir se la deje sin efecto, cuando fuere en perjuicio de ellos, y hacerse autorizar para el ejercicio de los derechos hereditarios del deudor, hasta la concurrencia de sus respectivos créditos.

Acción subrogatoria.

CAPITULO III

Del beneficio de inventario

Requisitos. 1876. Todo heredero puede aceptar la herencia con beneficio de inventario, siempre que lo declare ante el juez.

dentro del plazo que fijan los artículos 1857 y 1858 y observe lo que ellos prescriben sobre tal formalidad. Perderá este derecho quien hubiere renunciado la sucesión, o la aceptare expresa o tácitamente.

La aceptación en tal caso producirá efecto una vez inscripta en el Registro de la Propiedad, lo que deberá hacerse por orden judicial y de oficio.

Inscripción

1877. Deberán aceptar bajo beneficio de inventario, quienes no tuvieren la libre disposición de sus bienes, y especialmente:

Aceptación beneficiaria forzosa.

- 1º Los fallidos y concursados, así como el síndico en el caso del art. 759.
- 2º Los incapaces, por medio de sus representantes legales.
- 3º Las mujeres casadas, salvo que mediare conformidad del marido o autorización del juez para aceptar pura y simplemente

1878. Las personas, a que se refiere el artículo precedente, gozarán del beneficio de inventario, aunque no se cumplieran las prescripciones anteriores; pero si la inobservancia de ellas proviniese de sus representantes legales, deberán éstos satisfacer a los acreedores, los perjuicios que su omisión les causare.

Omisión del representante.

1879. La aceptación con beneficio de inventario no hace perder al heredero su carácter de tal, ni su derecho a la herencia. Queda sometido a todas las obligaciones que le impone dicha calidad, en cuanto no se hallen modificadas en este capítulo.

Efectos del beneficio de inventario. Derechos y obligaciones del heredero.

1880. Aceptada la herencia con beneficio de inventario, quedarán separados el patrimonio del causante y el del heredero. Este conservará contra la sucesión, los derechos que tuvo respecto de aquél, y sólo responderá por las deudas y cargas con los bienes que hubiere recibido; pero deberá satisfacer a la masa lo que adeudare al autor.

Separación de patrimonios.

Los acreedores de la sucesión y los legatarios, tendrán preferencia sobre los acreedores personales del heredero, para ser pagados con esos bienes.

1881. El beneficio de inventario suspende el derecho de ejecución particular de los legatarios y de los acreedores que

Suspensión de ejecuciones.

no tengan garantías reales. El juez puede ordenar la suspensión de los juicios derivados de esos créditos, por un plazo perentorio, que no excederá de sesenta días.

Liberación de los bienes recibidos en vida o colacionables.

1882. El heredero beneficiario no estará obligado con los bienes que recibió en vida del autor, aunque debiese colacionarlos, ni con aquellos que él tenga derecho a hacer colacionar a los demás copartícipes de la herencia.

Reglas para la administración.

1883. El acervo hereditario se administrará y vigilará con intervención judicial, según las reglas que siguen, y subsidiariamente por las establecidas para los concursos:

- 1º El heredero beneficiario será el administrador. Cuando fueren varios, lo elegirán entre ellos, y si todos no concordaren, lo designará el juez.
- 2º El administrador deberá depositar a la orden del juez las sumas que perciba, inclusive los frutos y rentas, sin que pueda retener tales entradas para abonarse a sí mismo.
- 3º El heredero administrador deberá presentar al juez cada tres meses, los estados demostrativos de su gestión, y liquidados los bienes, rendirá cuenta general.
- 4º El administrador podrá efectuar el pago de los sueldos y gastos que demande la gestión de los bienes hereditarios, luego de aceptada la herencia, siempre que hubieren sido aprobados judicialmente.
- 5º Podrá pedirse el reemplazo del heredero administrador, cuando por su insolvencia notoria, irregularidad, incuria o ineptitud, pusiere en peligro los derechos de cualquier interesado o diere motivo para temerlo.
- 6º Satisfechos los créditos de la sucesión, se abonarán los legados. Si mientras aquélla se liquida, se presentaran nuevos acreedores, solo se pagarán con los bienes existentes, sin restitución de los dividendos percibidos por los otros.
- 7º En el caso del inciso precedente, cuando se tratare de legados cubiertos en todo o en parte, éstos deberán restituirse proporcionalmente al valor de los créditos, con acción directa del acreedor contra los legatarios, la que caducará si no se deduce dentro de los tres años del pago.

- 8º Serán a cargo de la masa los gastos, a que diere lugar el inventario, la administración de los bienes o la seguridad de ellos, y los que el juez autorizare por la rendición de cuentas del heredero. Si éste los anticipó, le serán reembolsados con privilegio sobre todos los bienes.
- 9º Los acreedores y legatarios podrán autorizar la liquidación, bajo las cláusulas que establezcan por mayoría de personas y capitales.
- 10º Pagados los acreedores y legatarios, los bienes excedentes pertenecen al heredero, quien sólo será responsable por el valor recibido, si con posterioridad se presentase algún interesado.

1884. Las acciones del aceptante respecto de la masa, serán dirigidas contra los coherederos; si no los hubiere, se nombrará un curador, y cuando la herencia estuviere concursada, se entenderán con el síndico.

Acciones recíprocas del heredero y la sucesión.

Las acciones de la sucesión contra el beneficiario, pueden ser promovidas por los otros coherederos. A falta de ellos, el pago de las deudas del aceptante se hará en la cuenta que él presente de su administración.

1885. El heredero beneficiario no podrá aceptar o renunciar la herencia deferida al autor de la sucesión, sin la venia del juez, y si éste no la diere, deberá hacerlo con beneficio de inventario.

Herencia deferida al causante.

1886. El beneficiario puede exonerarse del pago de las deudas y legados, abandonando todos los bienes del acervo a los acreedores y legatarios; pero ello no importará renunciar a la sucesión.

Abandono.

En el caso de este artículo, el heredero deberá colacionar, si hubiere lugar a ello, y también exigir a sus coherederos el valor de los bienes que en vida les hubiese donado el difunto.

Los bienes abandonados sólo podrán venderse en la forma prescripta para el mismo heredero.

1887. Perderá el beneficio el heredero que ocultó fraudulentamente valores de la masa al practicar el inventario, como también si contraviniera las normas que rigen la gestión de la herencia.

Pérdida del beneficio.

En cuanto a los muebles, quedará librado al criterio judicial, decidir si el haber dispuesto de ellos constituyó o nó, un acto de buena administración.

Efecto.

1888. Cuando el heredero incurriere en la pérdida del beneficio, será considerado puro y simple. Los acreedores y legatarios podrán exigir se mantenga la separación de patrimonios. El heredero indemnizará con sus bienes personales el perjuicio que sus actos hubieran causado a la masa; liquidada ésta, podrán los acreedores y legatarios perseguir el pago en los bienes propios del heredero.

Nullidad de los actos en contavención.

1889. Los actos del heredero que contravengan las disposiciones contenidas en el art. 1883 son de ningún valor.

CAPITULO IV

De la separación de patrimonios

Quienes pueden pedir-la.

1890. Unicamente los legatarios y los acreedores de la sucesión, podrán solicitar al juez que, previo inventario, queden separados el patrimonio del causante y el del heredero. Esta facultad caducará, si no fuere ejercida dentro de noventa días del fallecimiento.

Medidas conservatorias.

1891. Antes de solicitar la separación de patrimonios, será permitido a los acreedores y legatarios requerir las medidas conservatorias de sus derechos.

Curador.

A falta de aceptante, o pendiente el plazo para renunciar, o si mediare litigio sobre la herencia misma, podrán pedir que para liquidar los bienes y satisfacer los créditos y mandas, se designe un curador, quien procederá de acuerdo con las reglas establecidas para el beneficio de inventario.

A partir de aquel nombramiento, perderá el heredero la facultad de administrar la sucesión y de disponer de ella.

El designado, no siendo heredero, tendrá derecho a percibir emolumentos.

Prenotación.

1892. El nombramiento del curador, a que se refiere el artículo precedente, y la separación de los patrimonios, deben ser, de oficio, prenotados en el Registro.

1893. La separación de patrimonios producirá los siguientes efectos: Efecto.

- 1º Los legatarios y acreedores del causante deberán ser pagados con preferencia a los acreedores del heredero.
- 2º El heredero no responderá con sus bienes personales, aunque hubiere aceptado la herencia pura y simplemente, salvo el caso del art. 1887. A su vez, podrá hacer valer el crédito que tuviere contra el causante o la sucesión.
- 3º Sólo se aplicará a los bienes que pertenecieron al autor en la época de su fallecimiento, y no a los demás donados en vida, aunque deban colacionarse, ni a los procedentes de una donación, reducida en virtud de sentencia.
- 4º Subsistirán los actos a título oneroso, realizados por el heredero antes de prenotarse la separación; pero el adquirente deberá a la masa las prestaciones correlativas.
- 5º La masa podrá reclamar los bienes que se hallaren en poder del adquirente, cuando la disposición fué a título gratuito, así como los que hubiere obtenido el heredero con el producto de las enajenaciones, siempre que constaren el origen e identidad. También le corresponderán los bienes o valores que se recuperasen por cualquier causa de resolución.
- 6º Regirá respecto de todos los herederos y acreedores, aunque hubiere sido solicitada por uno solo de éstos.

1894. La separación de patrimonios puede ser pedida a los cesionarios de la herencia, o de parte alícuota de ella, aunque el traspaso fuere a título oneroso, o anterior a la prenotación. Cesionarios.

1895. El derecho de los acreedores para pedir la separación de patrimonios, no podrá ser ejercido cuando hubieren aceptado al heredero por deudor, no haciendo valer los títulos conferidos por el difunto. Novación.

No se juzgará prestado ese consentimiento, si el acreedor se limitare a recibir del heredero, intereses vencidos.

Normas aplicables.

1896. Las reglas sobre aceptación bajo beneficio de inventario, se aplicarán en todo lo que no esté previsto en el presente título.

CAPITULO V

De la indignidad

Casos.

1897. Podrá ser excluido como indigno, el heredero o legatario:

- 1º Que hubiere sido autor o cómplice de un delito contra la persona o la honestidad del causante, o de su cónyuge, o ascendiente, o descendiente, o hermanos. La indignidad no queda cubierta por el indulto o la amnistía, ni por la prescripción del delito, o de la pena.
- 2º Que calumniare, maltratare de obra, o injuriare en forma grave al autor de la sucesión.
- 3º Que voluntariamente, hubiere acusado o denunciado al causante por un delito, al que la ley señale pena de reclusión o de prisión.
- 4º Que, mayor de edad y en conocimiento de la muerte violenta del autor de la sucesión, no la denunciare dentro de un mes a la justicia, salvo cuando ésta ya hubiere procedido de oficio.
No se aplicará este inciso cuando los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge o hermanos del heredero;
- 5º Que, siendo pariente del causante no le recoge, o suministrare alimentos, cuando supo que se hallaba en abandono; u omitiere internar al insano en establecimiento apropiado; o prostituyere a la autora de la sucesión, o a sus descendientes.
- 6º Siempre que colocare al causante en situación que le impidiera hasta su muerte, hacer o revocar su testamento; u obligádole con fuerza, o por fraude, a otorgarlo o dejarlo sin efecto.

7° Cuando hubiere falsificado o alterado, ocultado o su-
plantado una disposición de última voluntad.

8° En los demás supuestos expresamente consignados en
este Código.

1998. La indignidad deberá declararse, previo juicio
ordinario, a instancia de quien tuviere interés en la sucesión.
Este derecho no corresponde a los acreedores del causante.

Procedimiento.

1899. Los descendientes del indigno, llamados a here-
dar en su defecto, no se perjudican por las faltas de aquí,
y suceden al causante por derecho de representación. En nin-
gún caso, el indigno tendrá el usufructo que acuerda el
art. 505.

Descendientes del in-
digno.

1900. Excluido el indigno, deberá restituir los bienes
con sus frutos y rendimientos, según lo dispuesto para el
poseedor de mala fe. Sin embargo, serán válidas las disposi-
ciones que él efectuare a título gratuito u oneroso, cuando el
contratante fuere de buena fe. Quedarán a salvo para los he-
rederos, la acción de daños y perjuicios contra el indigno.

Restituciones por el
indigno.

Actos válidos.

1901. Ejecutoriada la sentencia, los créditos del indig-
no contra la sucesión, así como sus deudas, y también los de-
rechos que tuviere, renacerán con las garantías que los ase-
guraban.

Resurgimiento de los
derechos y obligacio-
nes.

1902. Cesa la indignidad:

Cesación.

1° Por el perdón del causante.

2° Por el transcurso de tres años en la posesión de la
herencia o legado. Transferidos los bienes a los here-
deros del indigno, subsistirá el vicio hasta el venci-
miento del término.

TÍTULO II

De la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios

CAPÍTULO I

De las medidas conservatorias

1903. Abierta la sucesión, mientras no haya declarato-
ria de herederos, podrán tomarse medidas de seguridad res-

Oportunidad.

pecto de los bienes, tanto por el juez, de oficio, como a pedido de los interesados.

Casos de oficio.

1904. Podrán decretarse de oficio:

- 1° Cuando el heredero fuere incapaz, tenga o no representante.
- 2° Si mediare ausencia prolongada del heredero, que no hubiere dejado mandatario.
- 3° Siempre que los bienes estuvieren abandonados, o en poder de intrusos.

Medidas urgentes.

1905. Pendiente el plazo concedido al heredero para renunciar, el juez podrá permitir la venta de los muebles, que por su naturaleza lo exijan con urgencia, como también la continuación del comercio o industria del causante.

En ambos casos, todo se hará con intervención del juzgado, y se depositarán a su orden, los fondos netos percibidos.

Publicidad.

1906. La iniciación de todo juicio sucesorio deberá inscribirse en el Registro, y será también indispensable la citación por edictos a todas las personas que se consideren con derecho como herederos, legatarios o acreedores.

Ambas medidas deberán decretarse de oficio.

Curatela.

1907. El juez designará curador:

- 1° Cuando, no mediando aceptación de la herencia, un tercero solicitara tal nombramiento, con el fin de ejercer acciones contra la masa, o continuar los juicios pendientes.
- 2° Siempre que esa medida fuere impuesta por el interés del heredero único y ausente, cuando éste no hubiere dejado persona con poder bastante.
- 3° Cuando los pretendientes a la sucesión no puedan traer la prueba de su derecho, o sea incierta la existencia de herederos.

Curatela de albaces.

1908. La curatela de la sucesión corresponde al albacea, y terminará con la declaratoria de herederos.

CAPITULO II

De la declaratoria de herederos

1909. Corresponde al juez de la sucesión declarar la efectividad del derecho hereditario, una vez acreditados los siguientes extremos: Requisitos.

- 1° El fallecimiento del causante.
- 2° El vínculo alegado. Si hubiere testamento, deberá presentarse o indicarse dónde se encuentre. En todos los casos, se librárá oficio al Registro para establecer si existen disposiciones de última voluntad. El pretendiente expresará si el derecho que ejercita es exclusivo, o si concurren otros herederos.

1910. El juez notificará a los interesados, cuya existencia resulte de los autos, sin perjuicio de la citación por edictos, ordenada en el art. 1906. Efectuadas las publicaciones, dictará declaratoria si hubiere lugar, resolviendo previamente en forma sumaria, cualquier incidencia surgida entre los pretendientes, y podrá, fuera de los elementos de prueba aportados, disponer las verificaciones que estimare necesarias. Procedimiento.

1911. Si existiere un heredero eventual concebido, que de nacer con vida, excluiría a otros, no se dictará declaratoria hasta que la incertidumbre desaparezca; pero cuando su vocación no fuere excluyente, procederá hacerlo en forma provisional a favor de los demás. Heredero eventual por nacer.

1912. La declaratoria crea en beneficio del heredero, la presunción de que es titular del derecho sucesorio. Cualquier pretendiente podrá, sin embargo, promover juicio ordinario a los efectos que se determinan en el inc. 1° del art. 1918. Si el pleito ya estuviere entablado, el juez suspenderá la declaratoria hasta la resolución de aquél. Valor de la declaratoria. Su impugnación.

También deberá substanciarse en forma ordinaria, el juicio que versare sobre la validez o inexactitud de la declaratoria.

Terceros que pueden
invocar la declarato-
ria.

1913. Podrá invocar la declaratoria dictada a favor de un heredero, quien mediante un acto jurídico a título oneroso, hubiere adquirido de él, uno de los bienes sucesorios o cualquier derecho sobre ellos, o la liberación de un crédito comprendido en el acervo.

Le será permitido prevalerse de ese mismo título, a todo aquel que en virtud de un derecho incluído en la masa, cumpliera una prestación a favor del heredero, o celebrare con él un acto que importare modificar o disponer de ese derecho.

Actos del heredero
aparente.

1914. Serán válidos los actos del heredero aparente, en los casos previstos por el art. 1913. Lo serán también los de simple administración, y los pagos de las deudas y cargas efectivas de la masa, aunque no existiere declaratoria.

Adquirentes a título
gratuito.

1915. Si un tercero hubiere adquirido a título gratuito, bienes de la herencia, por acto concertado con el heredero aparente, podrá reclamarse contra él la restitución.

Inscripción.

1916. La declaratoria de herederos deberá ser inscrita en el Registro, así como la sentencia que la rectifique o anule. La prueba de la efectividad del derecho hereditario sólo puede hacerse mediante el certificado de la inscripción.

CAPÍTULO III

De la petición de herencia

Petición de herencia.

1917. El heredero podrá hacer valer los derechos que le corresponden, mediante petición de herencia, a fin de que se le entreguen todos los bienes que la componen.

Casos.

1918. Procede la petición de herencia:

- 1° Contra el declarado heredero, ya para excluirle totalmente, ya para ser reconocido junto con él.
- 2° Respecto del poseedor de bienes hereditarios, que sin derecho suficiente, los tuviere a título de sucesor del causante, aunque hubiere sido reconocido por declaratoria.
- 3° Contra todo aquel, que poseyendo bienes del acervo sucesorio a la muerte del autor, ocultó su título.
- 4° Respecto de quien substraiga bienes, o se apoderó de ellos indebidamente.

1919. Cuando se hiciere lugar a la petición de herencia, **Reglas aplicables.** se aplicarán las reglas siguientes:

- 1º Si el poseedor hubiere transmitido por contrato a un tercero, la totalidad o una parte alícuota de la herencia, éste quedará equiparado al primer poseedor, en cuanto a sus relaciones con el demandante.
- 2º Deberán restituirse al heredero los bienes de la masa, y todos aquellos que el causante hubiere poseído, aunque solo hubiere gozado de un derecho de retención respecto de ellos. De no ser posible, se aplicarán las reglas del enriquecimiento sin causa.
- 3º Lo dispuesto en la reivindicación, respecto de las obligaciones del poseedor de buena o mala fe, impensas, mejoras, restitución de frutos, responsabilidad por las pérdidas, será aplicable en cuanto no se hallare modificado en el presente capítulo.
- 4º Cuando se hubieren satisfecho deudas o legados, que no obligaban al heredero, podrá éste repetir lo que se entregó, y no siendo ello posible, se aplicarán las disposiciones del enriquecimiento sin causa.

1920. Será considerado poseedor de mala fe, aquel que **Poseedor de mala fe.** supo o debió conocer la existencia de herederos preferentes, o la de legatarios, y a quienes no hubiere hecho citar para que ejerzan sus derechos.

1921. Compete al heredero una acción posesoria para **Acción posesoria.** ser mantenido o reintegrado en la posesión de la herencia, o de los bienes que dependen de ella.

Se aplicará, en tal caso, lo dispuesto en el capítulo anterior. El juez podrá dictar sumariamente las medidas necesarias para hacer efectiva la posesión del heredero.

TITULO III

De la pluralidad de herederos

CAPITULO I

Del estado de indivisión

1922. Cuando dos o más personas fueren simultáneamente llamadas a la herencia, la masa pertenecerá en común **Comunidad.** a todas ellas, hasta que se verifique la partición.

Masa hereditaria.**1923.** Forman parte de la masa hereditaria:

- 1º Los bienes dejados por el causante.
- 2º Todo lo adquirido en virtud de un derecho de la sucesión, o de actos jurídicos referentes a la misma.
- 3º Lo que se obtuvo como resarcimiento de daños causados en ella.
- 4º Los frutos de los bienes sucesorios.

Administración.

1924. Mientras los bienes permanezcan indivisos, la administración corresponderá en común a todos los coherederos, bajo las reglas que siguen:

- 1º El administrador será el cónyuge supérstite. En su defecto, o si no fuere idóneo, el juez designará a la persona que indique la mayoría, salvo que existieren razones especiales para no hacerlo, que expresará en auto fundado.
- 2º Cada coheredero deberá prestar su concurso en la medida conveniente para la gestión, sea ésta general o particular.
- 3º Se aplicará subsidiariamente al caso, lo dispuesto sobre la administración de la cosa común.

Facultades de los coherederos.**1925.** Podrán los coherederos durante la indivisión:

- 1º Disponer de sus derechos hereditarios, sin que les sea lícito ejercerlos sobre bienes determinados, o parte alguna de ellos.
- 2º Adoptar medidas de seguridad sobre los derechos sucesorios, como también las acciones correlativas, aun sin el concurso de los otros coherederos.
- 3º Deducir petición de herencia, o las acciones reales y posesorias que competan a la sucesión, ejerciéndolas por el todo, sin perjuicio de que intervengan en el pleito los demás coherederos, cuando así lo desearan, o lo pidiere el demandado.
- 4º Exigir se consigne judicialmente por cuenta común lo debido a la masa, y cuando no lo permitiere la naturaleza de la prestación, que se nombre depositario judicial. El pago deberá efectuarse a todos los coherederos conjuntamente.

Para disponer de los bienes indivisos, será necesario el acuerdo unánime de los coparticipes.

1926. Tratándose de la división del bien de familia, se observará especialmente:

Administración del bien de familia.

- 1º El administrador decidirá cuál o cuáles de los herederos tienen derecho a la habitación en la casa paterna, facultad que podrá extenderse a los ascendientes u otros deudos necesitados. El valor de tal derecho se deducirá de la parte de renta correspondiente a cada coparticipes que goce de ese beneficio. Las controversias serán resueltas por el juez, procediendo siempre con el criterio de un buen padre de familia.
- 2º Los herederos, a quienes no se conceda el derecho de habitar en el inmueble, podrán exigir la entrega periódica de la parte proporcional sobre los frutos de aquél, deducidas prudencialmente por el juez las cargas, impuestos y demás quebrantos de la propiedad.
- 3º El cónyuge supérstite, y también el heredero administrador, podrán solicitar se desligue de la comunidad a uno o a varios de los coparticipes, mediante la entrega en efectivo de la porción hereditaria, previo avalúo de la misma.

1927. Queda prohibido a los acreedores de los herederos ejercer, antes de la partición, sus acciones sobre los bienes comunes. Durante el mismo período, los coparticipes podrán impedir a los acreedores hereditarios que hagan efectivo su derecho sobre los bienes personales; pero les será permitido a los segundos deducir demandas contra la sucesión. Los gastos de entierro y sepultura del causante, de acuerdo con su condición y fortuna, serán créditos contra la masa.

Acciones contra los bienes comunes.

1928. Cada heredero, acreedor o legatario, podrá exigir se publiquen edictos a los fines del art. 1906, y oponerse a que se dividan los bienes, antes de cubrirse las deudas y cargas pendientes de pago.

Citación y pago de los acreedores y legatarios.

El juez fijará un plazo, no inferior a treinta días ni mayor de noventa, para que se presenten los interesados. Vencido el término, que contará desde la primera publicación, podrá efectuarse el repartimiento, siempre que se dejaren

bienes indivisos bastantes para cubrir los créditos y legados pendientes, o litigiosos, o sujetos a plazo, o condicionales.

No será admisible substituir esta reserva con ninguna garantía.

Liquidación para el pago de deudas y cargas.

1929. Antes de la partición, los herederos podrán liquidar el acervo en la medida necesaria para el pago de las deudas y cargas. Este procedimiento será judicial cuando algún heredero fuere incapaz o estuviere ausente, o si cualquiera de los interesados lo solicitare, sin necesidad de justificar motivo alguno.

Suspensión de la partición.

1930. Podrá suspenderse la partición:

- 1º En el caso del art. 1911.
- 2º Mientras las porciones hereditarias fueran inciertas, por depender de un litigio sobre filiación, validez de matrimonio u otra causa semejante.
- 3º Cuando la incertidumbre se debiere a una fundación instituida por el autor, no aprobada todavía.
- 4º En tanto no se hubiere cumplido la citación que prevé el art. 1928, o estuviere pendiente su término.

En todos los casos, el juez a pedido de parte y con audiencia de los interesados, podrá tomar medidas conservatorias o disponer se enajenen los bienes que lo requieran, ya por su naturaleza, ya por las necesidades de la liquidación. Las partes que se opongan podrán ofrecer pruebas.

Indivisión establecida por el causante.

1931. Si no hubiere herederos forzosos, el causante podrá ordenar en su testamento que se mantenga la indivisión por un plazo no mayor de diez años. Respecto de un bien determinado, o de un establecimiento comercial o industrial, le será lícito extender esa prohibición cuando hubiere menores, hasta tanto el último de éstos llegare a la mayor edad. Toda cláusula que en los dos casos amplíe el término de la indivisión, se tendrá por no escrita en lo relativo al excedente. Este artículo regirá también para la cuota disponible, cuando existieren herederos legitimarios.

Prórroga Convencional.

1932. Los coherederos podrán convenir que la indivisión a que se refiere el artículo anterior, continúe total o parcialmente, por un término que no exceda de diez años, sin perjuicio de partir en forma provisional el uso y goce de los bienes.

Si hubiere incapaces, sus representantes legales debidamente autorizados, podrán intervenir en estos convenios, que homologará el juez.

1933. Satisfechos los acreedores de la sucesión y los legados, el excedente de los bienes pertenece a los herederos, en proporción de sus respectivos derechos. Remanente.

No se pagarán los legados hasta después de cubiertos los créditos comunes y cargas de la herencia.

1934. Será nula toda cesión que el heredero hiciere de su parte indivisa a persona extraña, sin haberla ofrecido previamente a sus copartícipes. Estos serán preferidos en igualdad de circunstancias, quedando obligados a comunicar su decisión al enajenante dentro de treinta días, que contarán desde que se les hizo conocer el ofrecimiento. Cesión de parte indivisa.

La preferencia se ejercerá mediante la aceptación de las condiciones reales y efectivas concertadas con el tercero, y extinguirá el derecho de este último. Preferencia.

CAPITULO II

De la partición

1935. Cumplido lo prescripto en el art. 1933, cualquiera de los herederos podrá solicitar la división conforme a las reglas del presente capítulo. Esta acción deberá deducirse contra todos los demás. Oportunidad.

1936. La partición entre herederos mayores, si estuvieren todos presentes, podrá efectuarse en la forma y de la manera que convinieren por unanimidad, debiendo observarse lo dispuesto por el art. 817, inc. 2º. Partición convencional.

Los que no estuvieren presentes podrán constituir mandatario con poder especial, o bien expresar por escritura pública, si ésta fuere exigida, que aprueban la división, y esa conformidad tendrá efecto retroactivo al día en que el acto fué celebrado.

1937. Cuando todos fueren herederos mayores podrán separarse por acuerdo unánime, de la división judicial, si hubieren optado por ella. Abandono de partición judicial.

1938. La masa para la división se formará reuniendo a las cosas existentes, los créditos hereditarios, tanto a cargo de extraños como contra los mismos herederos, y lo que cada uno de estos debe colacionar. Formación de la masa partible.

Partición judicial.

1939. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 1931, la partición para su validez deberá ser judicial:

- 1º Si hubiere incapaces o menores emancipados.
- 2º En caso de que el autor fuere un presunto fallecido, y sus herederos tuvieren la posesión de sus bienes.
- 3º Cuando hubiere interesados ausentes. Se consideran tales los herederos y legatarios que no se encuentran en la jurisdicción, aunque su existencia no fuere dudosa. Se observará lo prevenido en el art. 73.
- 4º Siempre que terceros, fundándose en un interés legítimo, se opusieren a la partición privada.

Acreedores argentinos o domiciliados en el país.

Siempre que los herederos argentinos, o extranjeros domiciliados en el territorio de la Nación, fuesen excluidos de todos los bienes situados en el extranjero, o de parte de ellos, se tomará de los existentes en el país, cuanto fuere necesario para compensar la cuota respectiva, si el interesado lo pidiere.

Esta regla no se aplicará cuando la causal de exclusión fuera de las autorizadas en el presente código.

Avalúo.

1940. Se procederá al avalúo de los bienes cuando la formación de la masa, o su división en lotes así lo exija. Aquél deberá efectuarse por el perito que indique la mayoría de los herederos, salvo que existieren razones especiales para no designarlo, las que deberá expresar el juez en auto fundado.

Reglas aplicables.

1941. En las divisiones judiciales, se observarán las siguientes normas:

- 1º Los herederos designarán partidores en la forma establecida por el artículo anterior.
- 2º Los interesados propondrán las bases que entendieren ser más ajustadas, a fin de que los peritos las tengan presentes.
- 3º Se dividirán los bienes que admitan cómodo fraccionamiento. Se consideran tales, aquellos que con el reparto en lotes no queden perjudicados en su valor o explotación económica.
- 4º Los bienes que no se hallaren en el caso del inciso anterior, podrán ser adjudicados a uno de los herederos, o a varios de ellos, que los aceptaren, y cuando excediere su valor de los respectivos haberes, se com-

pensará la diferencia en dinero u otros bienes. El saldo deudor podrá ser garantizado con hipoteca o prenda, siempre que el acreedor lo exigiere.

- 5º Las cosas que no admitan cómoda división y fueren pedidas por varios herederos a la vez, se licitarán entre ellos al mejor postor. El precio ofrecido se juzgará parte integrante de la masa, como también el de aquellas que, no siendo reclamadas, o cuya adjudicación no fuere aceptada, se vendieren en remate público.
- 6º Aunque hubiere incapaces interesados, podrá diferirse temporalmente la venta de un bien, cuando las circunstancias así lo aconsejaren. La voluntad unánime de las partes decidirá al respecto. Si no se obtuviera, resolverá libremente el juez.
- 7º Dentro de lo posible, se formarán lotes en igualdad de condiciones y se cubrirán las diferencias con sumas de dinero, que abonará el adjudicatario, observándose lo dispuesto en el inc. 4º, parte final. En caso de no aceptarse las adjudicaciones, los lotes serán sorteados.
- 8º Podrá diferirse la división de algún bien por acuerdo de todos los interesados, aunque hubiere incapaces entre ellos. Cuando aquél no llegara a obtenerse, decidirá el juez, a pedido de cualquiera de las partes, si en su sentir las circunstancias aconsejaren ese aplazamiento.
- 9º Se reservarán sin adjudicar, bienes bastantes para el pago de créditos y cargas pendientes, así como el de legados no cumplidos.

1942. En las particiones judiciales, no será permitido adjudicar la nuda propiedad a unos herederos y el usufructo o el uso o habitación a otros, pero sí constituir servidumbres prediales a beneficio de un lote sobre los demás. Tampoco podrán quedar sujetas a condición. Las privadas que lo estuvieren, no serán inscriptas en el Registro: sólo serán prenotadas.

Desmembraciones autorizadas y prohibidas.

1943. Los créditos contra la sucesión, que no se pudieren cubrir por insuficiencia de la masa, se dividirán en tantos independientes y separados, como aceptantes puros y simples existieren, de acuerdo a las porciones hereditarias, y podrán

División de deudas.

hacerse efectivos en esa medida, sobre los bienes personales de cada uno.

Títulos valores afectivos y documentos.

1944. Cada heredero recibirá los títulos de las propiedades y de los créditos que le fueren adjudicados. Si quedare alguno en común, el título corresponderá a quien tuviere la mayor cuota, dándose a los otros copia fehaciente a costa de la sucesión. Los objetos que representen recuerdos de familia, los papeles y la correspondencia del causante, así como las distinciones honoríficas, serán indivisibles y permanecerán depositados en manos del heredero que las partes elijan. En su defecto, lo designará el juez. Lo mismo se observará para los documentos comunes a toda la herencia.

Partición provisional.

1945. Cuando la partición fuere provisional deberá serlo con respecto a todos los herederos, y no podrá confirmársela para que valga como definitiva. Cualquiera de los copartícipes, tendrá derecho a exigir que sean divididos los bienes, sin previa demanda de nulidad.

Interrupción de la comunidad.

1946. No obstante lo dispuesto por el testador, o lo convenido por los herederos, podrá el juez autorizar la partición definitiva, cuando sobrevinieran circunstancias graves y urgentes que tornaran dañoso para los interesados mantener la comunidad.

Particiones anulables.

1947. Será anulable toda partición privada o judicial:

- 1º Cuando no se hubiere inscripto la sucesión en el Registro, y citado previamente en la forma que determina el art. 1906, a los acreedores y legatarios.
- 2º Cuando no se hubieren reservado bienes suficientes para el pago de los créditos y legados, cuya existencia o representación constaba en los autos.

En los dos casos, sólo el perjudicado podrá invocar esa nulidad, para hacer efectivo su derecho por el todo sobre los bienes repartidos.

Acreedores o legatarios omitidos.

1948. Los acreedores o legatarios omitidos, podrán dirigirse contra los bienes en poder de los herederos, como si la partición no se hubiere efectuado, salvo los derechos constituidos a favor de terceros con posterioridad a la inscripción.

Partición definitiva nula que vale como provisional.

1949. La partición definitiva, nula por no haberse practicado ante juez en los casos del art. 1938, o por inobservan-

cia de las formas prescriptas, valdrá como provisional en cuanto al uso de los bienes.

1950. Los gastos de la liquidación y los efectuados en beneficio común se imputarán a la masa; los producidos por la partición en igual supuesto, sobre los bienes adjudicados, en la medida de su valor.

Gastos.

No se juzgarán comunes, los trabajos o desembolsos innecesarios o referentes a pedidos desestimados, y serán por cuenta de las partes que los causaren.

CAPITULO III

De la colación

1951. Antes de partirse los bienes, el cónyuge y los descendientes y los ascendientes que concurren a la sucesión, deberán colacionar el valor de todas las liberalidades recibidas en vida del causante, que se determinan en este capítulo.

Noción y oportunidad.

1952. Sólo pueden demandar la colación:

Quienes pueden reclamarla.

- 1º Un coheredero a otro.
- 2º Los acreedores personales del coheredero que pueda exigir la colación.
- 3º Los acreedores del causante, en el único supuesto de que el heredero a quien la colación fuere debida, aceptar la herencia pura y simplemente, y no mediare separación de patrimonios.
- 4º Los legatarios, en el único caso del inciso anterior.

1953. Están obligados a colacionar:

Quienes están obligados a colacionar.

- 1º Las personas comprendidas en el art. 1951.
- 2º Los instituidos por testamento, cuando éste no modifique el orden de la sucesión legítima.
- 3º El heredero, que no siendo presuntivo en el momento de la liberalidad, resultare forzoso al abrirse la sucesión.
- 4º Los nietos, que por representación sucedan al abuelo juntamente con tíos y primos. La colación se extenderá a todo lo que el padre debió aportar en el caso de haber vivido, aunque ellos no le hubieren heredado.

Valor colacionable.

1954. La colación comprende:

- 1º El valor de las donaciones que el causante hubiere hecho en vida a favor del heredero obligado a colacionar.
- 2º Lo invertido por el causante para el establecimiento independiente de sus hijos, sea con motivo del matrimonio, sea para permitirles explotar una empresa de carácter económico, y también para mejoras en sus bienes.
- 3º Las liberalidades encubiertas bajo la apariencia de actos a título oneroso, de los que resultó enriquecimiento.
- 4º El crédito cedido gratuitamente.
- 5º La obligación del heredero a favor del causante, que éste hubiere renunciado en forma desinteresada.
- 6º Lo pagado por el autor de lo que no se debía al heredero, con ánimo de beneficiarle.

Valores excluidos.

1955. No deben ser colacionados:

- 1º Los gastos de alimentos y curación, por crecidos que sean.
- 2º Los destinados a educar los hijos o descendientes, o los que se hicieren a fin de prepararles para el ejercicio de un arte o profesión.
- 3º Los presentes de costumbre.
- 4º El importe invertido en un seguro de vida; pero si las primas pagadas al asegurador.

Otro supuesto de exclusión.

1956. Tampoco será colacionable lo que un hijo del heredero o el cónyuge de éste, hubiere recibido del causante, aun cuando el autor dispusiere lo contrario.

Monto.

1957. La colación deberá hacerse por el valor que los bienes tenían en el momento de la liberalidad, y aunque las cosas hubieren ya perecido.

Dispensa.

1958. Los valores colacionados se imputarán como anticipo a la parte hereditaria, a menos que el causante hubiere establecido la dispensa en su testamento, dentro de los límites de su cuota disponible. Podrá también acordarla en el título constitutivo de la liberalidad. No se entenderá conec-

dida por la mera disimulación de aquella, bajo la apariencia de un acto a título oneroso, o realizado por interpósita persona.

1959. El heredero obligado a colacionar no podrá eximirse de ello, invocando la compensación. El renunciante queda en cambio dispensado de hacerlo, aunque el testador dispusiera lo contrario, a menos que éste al realizar el acto lo hubiere establecido como cláusula resolutoria.

Exención.

1960. La colación no puede perjudicar a los acreedores hereditarios, en su derecho sobre el patrimonio del deudor.

Terceros.

CAPITULO IV

De la división hecha por los ascendientes

1961. El padre, la madre y los otros ascendientes, podrán hacer partición anticipada de sus bienes propios, a favor de sus hijos y demás descendientes, ya por donación entre vivos, ya por testamento.

Noción y formas.

1962. Sea cual fuera la forma de esta partición se ajustará a las reglas siguientes:

Reglas.

- 1º Deberá comprender al otro cónyuge, sin perjuicio de extenderse a las personas que el causante deseara favorecer dentro de su porción disponible.
- 2º La masa quedará formada, reuniendo los valores que debieron colacionarse, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo anterior.
- 3º Podrá adjudicarse a uno o varios descendientes o al cónyuge, una explotación industrial o agrícola, o fabril, cubriendo la parte de los demás con otros bienes, o imponiendo a los adjudicatarios el pago de una suma de dinero, para integrar la herencia de los restantes o los gananciales del cónyuge excluido.

Cuando los interesados lo exigieren, dicho saldo podrá ser garantizado con prenda o hipoteca.

1963. La partición por actos entre vivos, exigirá para ser válida:

Partición por actos entre vivos. Requisitos.

- 1º Que se transmitan los bienes en forma irrevocable. No obstante, podrá reservarse el usufructo o renta vitalicia a favor del donante.
- 2º Que ella sea aceptada por todos los interesados.
- 3º Que no esté sujeta a condición que dependa de la sola voluntad del disponente, ni al cargo de pagar otras deudas de éste, fuera de las que existieren a la fecha de la liberalidad.
- 4º Que tenga por objeto todos o parte de los bienes presentes. Regirá entonces, lo establecido en el art. 684.

Efecto.

1964. La partición a que se refiere el artículo anterior, tendrá el efecto siguiente:

- 1º Transmitirá al donatario el dominio de los bienes, sin que ello obste para que pueda revocarse por inejecución de las cargas y condiciones impuestas o por causa de ingratitud. Si hubiere distintos beneficiarios, la revocación solo afectará al que dió motivo para ella.
- 2º Si hubiere excedente en la parte adjudicada a cualquiera de los beneficiarios, no se entenderá que ello constituye mejora, ni será permitido así declararlo en la división por actos entre vivos.
- 3º Los beneficiarios, sus herederos y los sucesores de éstos, podrán ejercer, aún antes de fallecido el ascendiente, todos los derechos que el acto confiera a los unos respecto de los otros, siéndoles permitido exigir la garantía por las cosas comprendidas en sus lotes, desde que se produjo la evicción.

En el supuesto del inciso 1º, se consideran casos de ingratitud, los establecidos para las donaciones y los que causen la indignidad del heredero.

Revocación por ingratitud.

1965. Revocada la donación por causa de ingratitud y si ésta no subsistiere al fallecer el causante, podrá el heredero integrar su legítima con lo que restare indiviso. No cubierta por este medio, le será permitido exigir el reintegro contra los demás donatarios.

Partición por testamento.

1966. La partición por testamento está sujeta a los principios siguientes:

- 1º Quedará subordinada a la muerte del causante, quien mientras viva, podrá revocarla.

- 2° Si el disponente enajenare algunos bienes comprendidos en ella, se aplicarán los principios de la reducción, en el caso de que se afectaren las legítimas de los interesados.
- 3° Los herederos cargarán con todas las obligaciones del testamento, a menos que hubieran aceptado la sucesión bajo beneficio de inventario.
- 4° Tendrán los mismos efectos que las divisiones ordinarias, quedando las partes recíprocamente obligadas a la garantía del lote recibido. Ella se juzgará con referencia al día de la apertura de la sucesión. Si luego del reparto, el ascendiente hubiere dispuesto de objetos adjudicados a un coheredero, los otros le deberán la garantía de tales bienes.
- 5° Cuando una hijuela contuviere excedente a favor del heredero, se imputará a la respectiva cuota, y la demás a la disponible.

1967. Los padres podrán en vida, partir por donación conjunta sus bienes propios y gananciales a favor de sus descendientes.

Donación conjunta.

En esta donación se observarán las reglas que siguen:

- 1° Cada uno de los esposos podrá revocarla, en virtud de las causas expresadas en el inc. 1°, del art. 1964, pero esta revocación sólo afectará a la parte del donante que la hiciere valer.
- 2° Los cónyuges podrán reservarse el usufructo de los bienes, o afectarlos hipotecariamente al servicio de una renta vitalicia a su favor, y disponer que uno y otra beneficien íntegramente al cónyuge supérstite. Todo sin perjuicio de los derechos de los descendientes, cuando se afectare la legítima en la sucesión del premuerto.
- 3° Mientras la sociedad conyugal subsista, el acuerdo de los esposos será necesario para dividir por donación los bienes propios y gananciales entre los hijos; pero cada uno de aquéllos podrá efectuarlo por testamento.

1968. El cónyuge o ascendiente supérstite podrá hacer la partición de los bienes propios y gananciales del fallecido,

Partición por el cónyuge o ascendiente supérstite.

y comprenderlos también en el reparto por donación que hi-
ciere de sus bienes personales.

Causas que dejan sin
efecto la partición.

1969. La partición quedará sin efecto:

- 1º Si no comprendiere a todos los hijos legítimos y naturales que vivan a la muerte del causante, a la descendencia de los fallecidos y al cónyuge supérstite. Pero cuando se hubiere omitido distribuir entre todos los descendientes de un hijo representado, la parte correspondiente a éste, subsistirá el acto en cuanto a los demás, siendo nulo tan sólo respecto de la rama en que se produjo la omisión.
- 2º Con el nacimiento de un hijo del ascendiente, habido en otro matrimonio posterior a la partición, o con el de uno póstumo.

No se invalidará el acto por haberse omitido un hijo que, vivo al tiempo del reparto, falleciere sin sucesión antes del deceso del causante.

Partición inoficiosa.

1970. La partición a que se refiere el presente título podrá ser rescindida, cuando afectare la legítima. La demanda deberá intentarse después de la muerte del ascendiente.

Igual facultad compete al cónyuge supérstite, cuando la división perjudique su derecho sobre los bienes del matrimonio.

CAPÍTULO V

Del efecto de la partición

Propiedad exclusiva.

1971. La partición inscripta confiere a cada heredero, la propiedad exclusiva de los bienes comprendidos en su hijuela.

Producirá el mismo efecto, cualquier acto a título oneroso, que pusiere fin a la división y adjudicare bienes en propiedad exclusiva a un coheredero.

Garantía recíproca.

1972. Los coherederos responden recíprocamente:

- 1º De toda evicción en cuanto a los bienes que les hayan correspondido en el reparto, cuando la causa de ella, fuere anterior a éste.

- 2º De cualquier turbación de derecho en el goce pacífico de los objetos mismos, o de las servidumbres activas, si concurriere el extremo del inciso precedente.
- 3º Por los defectos ocultos de los objetos que se adjudicaron.

La garantía a que se refiere el inc. 1º, se deberá por el valor de la cosa al tiempo de la evicción; pero si a los coherederos no les conviniera satisfacerlo, podrán exigir que se dividan nuevamente los bienes, con arreglo al precio actual de los mismos, aunque algunos de ellos hubieren sido ya enajenados.

Se aplica subsidiariamente a la garantía de los coherederos, lo dispuesto en los arts. 1377 y 1378.

1973. Cesará la responsabilidad cuando hubiere sido expresamente renunciada en el acto del reparto, y respecto de un caso determinado de evicción. Una cláusula general, por la cual los herederos se declaren exonerados recíprocamente de ella, será de ningún valor.

Cesación de responsabilidad.

Aunque el heredero conociera al tiempo de partirse los bienes el peligro de perder el objeto recibido, tendrá derecho a exigir la garantía, una vez producida la evicción.

TITULO IV

Régimen especial de los sepulcros

1974. Toda persona podrá disponer por testamento, o por otros escritos firmados, el modo y circunstancias en que se cumplirán sus exequias. Podrá también ordenar se destine un sepulcro para su cuerpo y los de su familia.

Exequias y sepultura.

1975. En defecto de disposiciones, se observarán las que siguen:

Reglas supletorias.

- 1º Constituirá carga de la masa hereditaria, la sepultura del causante en la tumba familiar, y en defecto de ésta, en la que corresponda, de acuerdo con la condición y fortuna del difunto. Estas circunstancias, en caso de disenso de los herederos y legatarios, serán apreciadas por el juez.
- 2º Los herederos y los sucesores de éstos, tendrán a su cargo los gastos de conservación de la sepultura, a que se refiere el inciso anterior.

3º El sepulcro no podrá ser objeto de enajenación o de cesión por parte de los herederos, ni a título oneroso ni gratuito. Corresponderá al juez, sin embargo, autorizar dichos actos, con tal de que se trasladen los restos a otra tumba que considere adecuada.

4º Sólo con la conformidad de todos los condóminos, podrán inhumarse en el sepulcro común, cadáveres que no sean los del cónyuge del causante fundador, de los esposos de los herederos y sus descendientes.

Exclusión del acervo.
Inalienabilidad.

1976. El dueño de un sepulcro podrá excluirlo de su acervo hereditario, o determinar su inalienabilidad, aun cuando permita a sus herederos disponer de los sitios libres en él. Ese derecho se entenderá limitado al término de la concesión administrativa.

Aplicación de derecho
administrativo.

1977. Las concesiones de sepulturas, la inhumación y la exhumación, serán regidas por el derecho administrativo, bajo reserva de lo que se establece en este capítulo.

División. Embargabilidad.

1978. El juez, de acuerdo con las circunstancias, y la denuncia de todos los herederos, podrá autorizar el fraccionamiento de los terrenos ocupados por sepulcros. Estos no serán embargables, salvo por el saldo de precio de venta o construcción.

Disposiciones acerca
del cadáver.

1979. No habiendo disposiciones del causante, relativas a su cadáver, las adoptará el cónyuge superviviente si lo hubiere, y, en su defecto, los descendientes y ascendientes por el orden en que son llamados a la sucesión.

Podrá modificarse este principio si concurrieren motivos especiales, que apreciará el juez.

TÍTULO V

De las sucesiones vacantes

Casos.

1980. Se reputará vacante la sucesión:

1º Cuando, después de citados según lo prevenido en el art. 1906, los que se consideren con derecho a la herencia, ningún pretendiente se hubiere presentado.

2º Cuando hubiesen renunciado los herederos.

Curador.

Si existiere albacea, éste será el curador de la sucesión. para ejecutar el testamento. En los demás casos, el juez, de

oficio, lo designará, cuando no se hubiera ya nombrado en virtud de disposiciones anteriores, o de leyes especiales.

1981. Se formará inventario, de acuerdo con las disposiciones legales, si ya no se hubiere practicado en los autos. El curador quedará sometido a las normas que rigen para el heredero beneficiario, no pudiendo recibir pagos ni efectuarlos, sin autorización judicial. Los dineros de la herencia se depositarán a la orden del juez.

Medidas de seguridad.

Los pagos que hicieren los deudores hereditarios al curador de la herencia, no les eximirán de sus obligaciones, a no ser que la suma abonada por ellos se hubiera convertido en beneficio de la sucesión.

1982. Designado el curador, los que después vengan a reclamar la sucesión, la tomarán en el estado en que se encontrare, por efecto de las operaciones regulares de aquél.

Aparición de sucesores durante la curatela.

1983. Los bienes serán enajenados sólo en cuanto fuere necesario para el cumplimiento de las cargas, legados o deudas de la sucesión. Una vez satisfechos, el juez, de oficio, pronunciará la vacancia y los bienes pasarán bajo inventario al dominio de la Nación o de las provincias en que se hallaren. Los que no tuvieran situación permanente, pertenecerán al fisco del territorio respectivo. Los créditos se entienden radicados en el lugar en que deban ser cumplidos, y si fueren al portador, en el de su situación.

Enajenaciones y pagos.

Declaración de vacancia y adjudicación.

1984. Si posteriormente, se presentare alguna persona reclamando la sucesión declarada vacante, se procederá como en caso de petición de herencia contra un heredero aparente de buena fe.

Aparición de sucesores después de la vacancia.

1985. Al fisco no le será permitido por su sola autoridad, apoderarse de los bienes vacantes.

Intervención judicial necesaria.

SECCION SEGUNDA

DE LAS SUCESIONES INTESADAS

TITULO I

Disposiciones generales

1986. Las sucesiones abintestato corresponden a las personas llamadas en el orden y según las reglas establecidas por el presente Código.

Orden.

Modos de adquisición.

1987. La sucesión intestada se adquiere por derecho propio o por representación. Salvo el caso de esta última, dentro de cada línea, el pariente más cercano en grado, excluye al más remoto.

TÍTULO II

De la representación

Noción. Reglas.

1988. Los descendientes legítimos de una persona que, de haber sobrevivido al causante, sería su heredero, vienen en lugar de ésta para recoger su parte en la sucesión.

Esta regla es aplicable a los herederos del indigno.

Vocación directa. Limitación.

1989. El representante debe su llamamiento exclusivamente a la ley, y no al representado. Pero será necesario que posea la aptitud para heredar a éste último.

No se podrá representar a la persona, de cuya sucesión el descendiente hubiere sido excluido por indigno o desheredado.

Personas representadas.

1990. La representación se extiende:

- 1º Al ausente con presunción de fallecimiento, a menos de probarse que existía al tiempo de la muerte del autor.
- 2º A la persona, cuya herencia se hubiera renunciado.
- 3º Al renunciante.
- 4º A varias personas dentro de la misma sucesión, subiendo todos los grados intermedios que las separan del causante, siempre que no estuvieren ocupados por un heredero.

Representación en línea directa.

1991. La representación se produce sin límite en la línea recta descendente, sea que los hijos del causante, aunque fueren de diversos matrimonios, concurran con los descendientes de un hijo premuerto, sea que los llamados a la sucesión por haber fallecido sus padres, se encuentren entre ellos en grados iguales o desiguales.

No se reconoce la representación a favor de los ascendientes.

1992. En la línea colateral la representación sólo se opera en beneficio de los hijos y descendientes de los hermanos, bien sean de padre y madre, bien de uno solo de ellos, cuando concurran con los tíos y estén comprendidos en el sexto grado. Idem en la colateral.

1993. En la representación, la herencia se dividirá por estirpes. Cuando una de ellas origine varias ramas, la subdivisión se hará también por estirpes dentro de la misma, y los miembros de cada rama se distribuirán la cuota por cabeza. Estirpes.

TITULO III

Del orden hereditario en las sucesiones intestadas

CAPITULO II

Sucesión de los descendientes legítimos

1994. Los hijos legítimos del autor de la sucesión, sean de un solo matrimonio o de varios, le heredan por derecho propio y en partes iguales, salvo lo dispuesto sobre los hijos ilegítimos y el cónyuge sobreviviente. Hijos.

1995. Los nietos y demás descendientes heredan a los ascendientes por derecho de representación, con arreglo a lo establecido en el título anterior. Otros descendientes.

CAPITULO II

Sucesión de los ascendientes legítimos

1996. A falta de descendientes legítimos, heredan los ascendientes de igual carácter, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la ley a los descendientes ilegítimos y al cónyuge supérstite. Cuándo heredan.

1997. Siempre que el difunto dejare padre y madre, lo heredan por partes iguales, y cuando sólo hubiere uno de ellos, recibirá toda la herencia. En defecto de padre y madre, sucederán los ascendientes más próximos en grado, por iguales partes, aunque fueren de distintas líneas. Orden y cuotas.

CAPITULO III

Sucesión de los cónyuges

Concurrencia y partes.

1998. El derecho hereditario del cónyuge supérstite será:

- 1º El mismo que corresponda a cada uno de los hijos legítimos que concurren con él.
- 2º El tercio o la mitad respectivamente, si quedaren padre y madre del causante o uno sólo de ellos.
- 3º La mitad, si fallecidos los dos suegros, concurrieren otro u otros ascendientes.
- 4º La totalidad, si no existieren descendientes, ni ascendientes legítimos, salvo los derechos que este Código reconoce a los padres e hijos ilegítimos.

Casos de exclusión.

1999. La sucesión entre esposos no tendrá efecto:

- 1º Cuando el matrimonio se hubiera celebrado *in extremis*, y el cónyuge muriese de la misma enfermedad, dentro de los treinta días siguientes. Este precepto no regirá en caso de probarse que el casamiento tuvo por fin regularizar una convivencia anterior.
- 2º Si estuvieren separados por sentencia judicial, respecto del que hubiere dado causa para ello.
- 3º Siempre que, separados de hecho sin voluntad de unirse, o provisionalmente por mandato del juez, mediare la circunstancia del inciso anterior.

Gananciales.

2000. El cónyuge que concorra con ascendientes o descendientes legítimos, no tendrá parte a título de herencia, en los bienes que correspondieren al causante como gananciales de su matrimonio.

Viuda sin hijos.

2001. La viuda que permaneciere en ese estado y no tuviere hijos, o que si los tuvo, no sobrevivieren en el momento

en que se abrió la sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes que hubieren correspondido a su esposo en las dichas sucesiones.

Este derecho no podrá ser invocado por la mujer en los casos del art. 1999.

CAPITULO IV

Sucesión de los hijos ilegítimos

2002. Los hijos naturales tendrán vocación hereditaria dentro del patrimonio del causante, en la medida que a continuación se expresa:

Hijos naturales en la sucesión de los padres: concurrencia y cuotas.

- 1º La totalidad, cuando no quedaren ascendientes ni descendientes legítimos, ni cónyuge supérstite.
- 2º La mitad a distribuirse por cabeza entre ellos, en el caso de que concurren viudo o viuda.
- 3º La mitad de la que se asigne a cada hijo legítimo, cuando los hubiere.
- 4º La mitad del acervo, si existieren ascendientes legítimos. Cada una de estas fracciones las tomarán unos y otros para dividir las entre ellos.
- 5º Una parte igual al número de personas que concurren a la herencia, cuando junto con el hijo natural fueren llamados los padres legítimos y el cónyuge supérstite. Si los hijos naturales fuesen varios, la cuota que hubiere correspondido a uno sólo se distribuirá entre todos ellos.
- 6º Cuando quedaren además, ascendientes legítimos y cónyuge, los hijos naturales en conjunto, todos los ascendientes reunidos y el viudo, o viuda, recibirán cuotas iguales.

2003. El hijo natural nunca hereda a los abuelos naturales, ni a los hijos y parientes legítimos del padre o la madre que le hubiere reconocido. Recíprocamente, ninguno de ellos hereda al hijo natural.

Nieto natural.

Los descendientes legítimos del hijo natural, pueden representarle en la sucesión de los padres de éste.

Hijos adulterinos e incestuosos.

2004. Los hijos adulterinos o incestuosos, voluntariamente reconocidos por sus padres en instrumento público o privado, o por testamento, gozan de los derechos hereditarios conferidos a los hijos naturales.

CAPITULO V

Del derecho hereditario de los padres ilegítimos

Condiciones, concurrencia y cuotas.

2005. Sólo en el caso de que el hijo ilegítimo falleciere sin posteridad legítima, podrán heredarle el padre y la madre, que le hubieren reconocido. Si ambos lo verificaron, le sucederán por partes iguales. La cuota de los padres ilegítimos será:

- 1º La mitad de la herencia, cuando concurren con el cónyuge supérstite. Para formar la masa se tomarán en cuenta los gananciales del causante. La mitad que corresponda a los ascendientes se dividirá entre ellos por cabeza.
- 2º La tercera parte, cuando sólo quedare padre o madre. El viudo o viuda recibirá las dos restantes.

Necesidad de la posesión de estado.

2006. Para que los padres ilegítimos puedan heredar, será necesario que durante la vida del causante, hubiere existido posesión de estado.

CAPITULO VI

Sucesión de los colaterales

Reglas.

2007. A falta de los herederos, a que se refieren los arts. 1994 a 2006, sucederá al causante los hermanos y los descendientes legítimos de éstos, de acuerdo con las reglas de la representación.

Medios hermanos.

Los medios hermanos recibirán la mitad de la parte correspondiente a los hermanos de padre y madre.

Cuando no hubiere hermanos, heredarán por cabeza, los colaterales legítimos más próximos en grado, hasta el sexto inclusive. Otros colaterales.

2008. A la sucesión del hijo ilegítimo, en defecto de las personas mencionadas en este capítulo, concurrirán sus hermanos ilegítimos, y por representación, los descendientes legítimos de éstos. Hermanos ilegítimos

TITULO IV

De la legítima

2009. La legítima es un derecho de sucesión a determinada parte de los bienes. El causante no podrá disponer de ella a título gratuito, ni gravarla, ni someterla a condición, y si lo hiciere no será válido. Noción.

2010. La legítima que la ley reconoce a los diversos herederos queda fijada como sigue: Cuotas.

- 1º En las dos terceras partes de los bienes, para los descendientes legítimos.
- 2º En la mitad, respecto de los ascendientes legítimos.
- 3º En la mitad, en cuanto a los cónyuges, siempre que no concurren ascendientes ni descendientes legítimos, aunque se trate de gananciales que correspondían al causante.
- 4º En la mitad de su cuota, dentro de la sucesión intestada, para los hijos ilegítimos, cuando no existan descendientes o ascendientes legítimos, ni cónyuge.
- 5º En la mitad de la porción asignada por el art. 2005 a los padres ilegítimos.

2011. Abierta la sucesión, las disposiciones testamentarias y las donaciones que menguaren la legítima, se reducirán a la cuota disponible, cuando lo pidiere el damnificado. Reducción. Orden para efectuarla.

Se observará, con referencia a los legados, lo dispuesto en el art. 2099; pero no se afectarán las donaciones cuando

podiere cubrirse la legítima, ya mediante prorratio, ya dejando sin efecto las disposiciones testamentarias, si fuere menester. En su caso, deberán reducirse comenzando por la última liberalidad, para remontar de la más reciente a la más antigua.

Cómputos.

2012. Para fijar la legítima se atenderá al valor de los bienes que hayan quedado a la muerte del causante, con deducción de las deudas y cargas, sin comprender entre ellas las impuestas por el testamento. Al importe líquido del acervo, se agregará el de las donaciones del causante, al tiempo de haberse efectuado.

No serán computados los derechos y obligaciones dudosos o perdidos, ni los que estuvieren en litigio, o sujetos a condición suspensiva. Siempre que ésta fuere resolutoria, se tendrán como puros y simples

Exclusión del renunciante y del indigno.

Para el cálculo de la legítima, no será tenido en cuenta el renunciante; ni tampoco el indigno, a menos de existir descendientes de éste, que concurren por representación.

Caso de usufructo y de nuda propiedad.

2013. Cuando la disposición testamentaria consistiere en usufructo o derecho de uso o habitación, o renta vitalicia, los herederos forzosos podrán elegir entre su cumplimiento, o transferir al beneficiario en pleno dominio, la parte disponible.

Esta regla se extiende a la nuda propiedad, pero no a los casos en que deban reducirse las disposiciones testamentarias o las donaciones entre los favorecidos con ellas.

Acción de reducción.

2014. Cuando debiere completarse la legítima, la demanda por reducción podrá ser dirigida contra los herederos o donatarios, a fin de que integren el valor que están obligados a restituir según las reglas precedentes. Esta acción será personal, y podrá ser intentada en la misma medida contra el poseedor del inmueble donado, si lo hubo a título gratuito del beneficiario. En este último caso procederá el abandono.

Parte disponible.

2015. Sobre la porción disponible, el testador podrá instituir los legados que estime convenientes, o mejorar a sus herederos legítimos. No le será permitido favorecer a éstos con ninguna otra parte de la herencia.

SECCION TERCERA

DE LA SUCESION TESTAMENTARIA

TITULO I

Disposiciones generales

2016. Las personas capaces pueden disponer de sus bienes para después de su muerte, con tal que observen las solemnidades legales. Se aplicarán a los testamentos las reglas establecidas para los actos jurídicos, en cuanto no fueren especialmente modificadas.

Requisitos.

2017. La ley del domicilio del testador al otorgar sus disposiciones, fija su capacidad o incapacidad para el acto.

Contenido y validez del testamento. Ley aplicable.

El contenido del testamento y su validez serán juzgados conforme a la ley del domicilio del otorgante en el momento de su muerte, salvo lo dispuesto por los arts. 4 y 1938.

2018. Para testar es menester que el otorgante goce de sus facultades al realizar el acto. No podrán hacerlo quienes no hubieren cumplido dieciocho años, ni los sordomudos comprendidos en el art. 54, ni los dementes declarados.

Capacidad del testador.

Cualquier alteración sobreviniente en la incapacidad de hecho, no afectará la validez del acto, pero la de derecho deberá también existir en el momento del deceso.

Los que se encuentren en estado habitual de alienación, sin que haya mediado sentencia, sólo pueden testar en intervalos lúcidos, suficientemente ciertos para asegurarse de que la enfermedad ha cesado por el momento.

2019. Corresponde al que impugnare el testamento, la prueba de que el autor no se hallaba en el pleno ejercicio de sus facultades al otorgarlo. Pero si el causante las hubiere tenido alteradas algún tiempo antes de testar, quien pretenda la validez del acto, deberá establecer que se formalizó en un intervalo lúcido.

Cargo de la prueba.

Carácter personal.

2020. Las disposiciones testamentarias serán la expresión directa de la voluntad del testador, quien no podrá delegarlas, ni someterlas al arbitrio ajeno, ni conferir poder a otro para testar.

Captación.

Las maniobras dolosas de captación, aún realizadas por terceros, anularán el testamento en todo o en parte, según el carácter que revistan.

Cláusulas nulas.

2021. Es nula toda disposición del testamento:

- 1º Cuando favoreciere a personas inciertas, salvo que por cualquier evento pudieren resultar determinadas.
- 2º Siempre que estuviere sujeta a condiciones o cargas, legal o físicamente imposibles, o contrarias a las buenas costumbres.
- 3º Si instituyere legatarios o herederos con referencia a cédulas o papeles privados, que después de la muerte aparecieren entre los del testador, o en poder de otro, a no ser que tales cédulas o papeles reunieren los requisitos de la forma ológrafa.

Registro.

2022. El escribano, ante quien pasare un testamento, estará obligado a dar cuenta al Registro para su inscripción. Cuando fuere ológrafa, sólo podrá ser anotado a instancia de su firmante o de persona autorizada al efecto.

Comunicación.

Quien tuviere en su poder las disposiciones de última voluntad otorgadas por otro, deberá al fallecimiento de éste, comunicarlo a los interesados, con cargo de cualquier perjuicio que la omisión les causare.

Caducidad.

2023. Toda disposición testamentaria caducará si el favorecido con ella no sobreviviere al testador.

TÍTULO II**De las formas de los testamentos****CAPÍTULO I****Disposiciones generales****Clases. Capacidad.**

2024. Toda persona capaz de disponer por testamento, podrá otorgarlo por acto público o en forma ológrafa, siem-

pre que poseyere las cualidades físicas e intelectuales requeridas en cada caso.

2025. La validez del testamento con respecto a la forma, está sujeta a la ley en vigor al tiempo de ser otorgado. Las ulteriores serán de ningún efecto, aunque se dictaren durante la vida del testador.

Forma.

2026. La forma de una clase de testamento, no puede extenderse a los de diversa especie.

Formas exclusivas.

La observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del testamento mismo, con exclusión de toda otra prueba.

2027. El incumplimiento de cualquiera de las solemnidades prescriptas, lo mismo que la ejecución irregular o incompleta de ellas, determina la ineficacia del acto en todo su contenido.

Nulidad.

La nulidad de alguna de las cláusulas, o de la institución de heredero, no perjudica las otras.

2028. El empleo de formalidades inútiles o sobreabundantes, no vicia un testamento, aun cuando aquéllas, en el caso de reputarlas indispensables el autor, no se hubieren cumplido válidamente.

Exceso de formas.

2029. El otorgante, para confirmar las disposiciones contenidas en un testamento nulo por motivos de forma, deberá reproducir aquéllas en un acto que llene todos los requisitos. Pero cuando el primer testamento hubiere caducado, bastará con referirse a él, siempre que no existiere vicio extrínseco.

Confirmación.

Los herederos no podrán atacar el testamento nulo por inobservancia de las solemnidades, cuando lo hubieren ejecutado con conocimiento de ello.

2030. El testamento, revestido de las formalidades legales, subsiste durante la vida del autor, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde su otorgamiento, sin perjuicio del derecho para revocarlo.

Persistencia mientras no sea revocado.

2031. Siempre que en los testamentos se requiera la firma, deberá ésta contener el nombre y apellido, como el autor acostumbrara usarla en los instrumentos públicos o escritos privados. Los errores de ortografía, o la omisión de letras, no la viciarán necesariamente. La validez del acto quedará librada a la apreciación judicial, según las circunstancias.

Firma.

Testamento otorgado
en el extranjero.

2032. El testamento formalizado en el extranjero, sólo tendrá efecto en el territorio de la Nación, si fuere por escrito, y siempre que lo hiciere u otorgare el testador personalmente, de acuerdo con las leyes del lugar, o según las del estado a que pertenezca, o con arreglo a las solemnidades impuestas por este Código. Tal acto será siempre válido, aunque el testador viniere al país, y cualquiera fuese la fecha de su muerte.

CAPITULO II

Del testamento ológrafo

Requisitos.

2033. El testamento ológrafo debe ser totalmente escrito, fechado y firmado de puño y letra del testador. Si por mandato del otorgante, una parte del instrumento fuere de mano extraña, el acto será nulo. No le afectará la circunstancia de que intervinieren testigos, que el testador hubiere aplicado su sello, o depositare el instrumento en poder de escribano, o adoptare cualquier otra medida para asegurar la autenticidad.

Caracteres de la escritura.

2034. El testamento ológrafo deberá ser escrito con los caracteres propios del idioma en que fuere otorgado. Las cantidades o las fechas podrán constar en cifras.

Fecha.

2035. No será indispensable que las indicaciones del día, mes y año, respondan al calendario, pudiendo substituirse por enunciaciones equivalentes, que fijen de una manera precisa el momento del acto.

La fecha puede ser colocada antes o después de la firma.

Corrección de la fecha.

2036. Una fecha errada o incompleta podrá considerarse suficiente, cuando resultando de la simple inadvertencia del testador, existieren dentro del propio instrumento, enunciaciones o datos materiales que la determinen de una manera cierta. Para apreciar tales antecedentes, podrá el juez admitir prueba fuera del acto mismo.

Unidad de tiempo.

2037. No será necesario redactar las disposiciones de una sola vez, ni en la misma fecha. Escritas en épocas distintas, podrá el otorgante suscribir y datar cada una de ellas

por separado, o poner a todas, la fecha y firma el día en que termine el testamento.

2038. El testamento ológrafo podrá revestir la forma de carta misiva, o insertarse en un libro doméstico; pero las disposiciones contenidas en una carta, aunque sean detalladas, sólo valdrán como testamento cuando la voluntad del autor fuere inequívoca.

Cartas, misivas o libros domésticos.

2039. El testamento ológrafo, aun después de su protocolización, podrá ser impugnado, mediante cualquier clase de pruebas, por todos aquellos a quienes perjudique, en cuanto a su fecha, firma o escritura, o con respecto a la capacidad del testador.

Impugnación.

CAPITULO III

Del testamento por escritura pública

2040. El testamento por escritura pública debe ser otorgado ante escribano y tres testigos con residencia en el lugar. No podrá autorizarlo el notario, que fuere pariente del testador en línea recta, y en la colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad inclusive, o cuyo consorte se hallare en el mismo caso.

Formalidades.

2041. A falta de escribano en el lugar, el testamento podrá formalizarse ante el juez de paz y tres testigos. Si dicho funcionario no pudiere intervenir, el acto deberá ser otorgado ante alguno de los miembros de la municipalidad. La escritura será extendida en el protocolo del juzgado de paz, y si el titular no hubiere actuado, se le insertará de inmediato en el registro que para tales casos, hubiera establecido el tribunal que ejerza jurisdicción en ese distrito.

Substitución del escribano.

2042. El ciego podrá testar por acto público. No le será permitido al sordo, al mudo y al sordomudo que no sepan darse a entender por escrito. Cuando lo supieren, deberán ajustarse a lo que determina el presente capítulo.

Ciego, sordo, mudo y sordomudo.

2043. El testador deberá expresar sus disposiciones al escribano, o dárselas escritas para que las redacte en la forma ordinaria. En el segundo caso, si la minuta no fuere de puño y letra del otorgante, llevará su firma. El escribano agregará siempre dicha minuta al protocolo.

Dictado Minuta.

- Caso de urgencia.** **2044.** Sólo cuando hubiere urgencia, el notario podrá autorizar el acto aunque no le constare la identidad del otorgante y faltaren testigos de conocimiento, debiendo mencionar tales circunstancias en la escritura. A quien invoque el testamento, le corresponderá la prueba de esa identidad.
- Constancias necesarias.** **2045.** El testamento consignará el lugar en que se otorga, su fecha, el nombre, edad y residencia de los testigos, como también si el escribano recibió redactadas las disposiciones, o si le fueron dictadas por el testador.
- Presencia y lectura.** **2046.** El dictado y la redacción del testamento deberán efectuarse ante los testigos del acto. El texto será leído asimismo, al otorgante en presencia de aquéllos, pudiendo uno y otros examinarlo directamente.
- En el supuesto del art. 2042, última parte, la lectura queda suplida por la que verifiquen el testador y los testigos. Estos deben ver al testador en todo el transcurso del acto, circunstancia que se hará constar, lo mismo que las demás expresadas en este artículo.
- Firma del testador.** **2047.** El otorgante deberá suscribir el testamento, a menos que no supiere, o no pudiese hacerlo. En ambos casos, lo firmará otra persona o alguno de los testigos, dejándose constancia de ello y del motivo de la imposibilidad.
- Cuando falleciere antes de firmar, el acto será nulo, aunque lo hubiese comenzado a suscribir.
- Siempre que sabiendo firmar, manifestare lo contrario, el testamento será de ningún efecto.
- Id. de los testigos.** **2048.** El testamento será suscripto por los testigos que sepan y puedan hacerlo: uno por lo menos deberá llenar estos requisitos, y firmará por los otros dos. Si alguno lo suscribiere por el testador, otro de los dos restantes deberá firmar.
- Cláusulas nulas.** **2049.** Son nulas las cláusulas que beneficien al notario, o al oficial público, o a los testigos, o al intérprete en su caso, y a los cónyuges o parientes y afines de ellos, dentro del cuarto grado.
- Caso de epidemia.** **2050.** Si por causa de epidemia no se hallare en el lugar o en el lazareto, escribano o funcionario habilitados por los art. 2040 y 2041, y el testamento podrá otorgarse ante el jefe del mismo.

CAPITULO IV

De los testamentos especiales

2051. Los militares, que prestaren servicio en lugar donde no hubiere escribano, o situado fuera del territorio de la Nación, y las personas empleadas o agregadas al ejército, así como los prisioneros, podrán testar ante un oficial de graduación no inferior a la de capitán, o un asimilado de igual jerarquía, o ante el cirujano o capellán que les asista. Cuando se tratare de un puesto o destacamento, podrá intervenir el jefe del mismo, aunque sea de grado inferior. El acto se otorgará en presencia de dos testigos, que si fueren militares podrán ser menores de edad, debiendo expresar el lugar y fecha, el estado del testador, si estuviere enfermo o herido, y todas las indicaciones necesarias para identificarlo. Testamento militar.

2052. El testamento será firmado por el otorgante, cuando supiere y pudiese hacerlo, y por el funcionario que lo autorice. De los testigos, uno por lo menos deberá subscribirlo. Firma.

Cuando el testador no supiere o no pudiese firmar, se dejará constancia de ello, y deberán subscribir el acto ambos testigos.

2053. El testamento deberá remitirse al Ministerio de Guerra, para ser archivado e inscripto en el registro. En caso de fallecer el otorgante, se enviará al juez del último domicilio del testador, para que conozca en el juicio sucesorio. Si aquél fuere ignorado, deberá intervenir uno de los jueces de la Capital Federal. Registro.

2054. El que se hallare en buque de guerra, o mercante bajo bandera argentina, imposibilitado para recurrir a un cónsul de la Nación o a un escribano, podrá testar ante el comandante, o su segundo y dos testigos. El testamento será fechado y extendido en doble ejemplar, y firmado por el testador, si supiere y pudiese hacerlo, y los testigos. El testamento será custodiado entre los papeles más importantes del buque, y se hará mención de él en el diario. Testamento. marítimo

Registro del mismo.

2055. Si el buque arribare a puerto extranjero, en que exista agente diplomático o consular de la Nación, el comandante le confiará un ejemplar del testamento, para que lo remita al Ministerio de Marina, a fin de que se proceda en forma análoga a la del art. 2053.

En caso de llegar a puerto nacional, lo entregará al capitán del mismo para seguir igual trámite.

Cláusulas nulas.

2056. Es nula toda disposición contenida en el testamento marítimo a favor de los oficiales del buque, a menos de ser ellos parientes del testador.

Caducidad.

2057. El testamento militar o marítimo, sólo valdrá hasta los noventa días, contados desde la cesación de las circunstancias que habilitaban para otorgarlo.

CAPITULO V

De la apertura y protocolización de algunos testamentos

Testamento público
que debe protocoli-
zarse.

2058. El testamento por acto público, otorgado ante un juez de paz, un miembro de la municipalidad, o el jefe del lazareto, se mandará protocolizar a solicitud de parte, sin ninguna otra diligencia previa.

Testamento ológrafo.

2059. El testamento ológrafo deberá presentarse tal como se hallare, al juez del último domicilio del autor, explicando quien lo exhiba, la causa por que se encuentra en su poder. Todo el que tuviere interés justificado, podrá pedir al juez ordene la presentación y proceda a la apertura de aquél.

Procedimiento.

2060. Cuando el testamento fuere ológrafo, el juez, previa apertura del mismo, si estuviere cerrado, procederá al examen de testigos, que reconozcan la letra y la firma del testador. Acreditados tales extremos, se hará constar el estado del documento, y si contuviere fecha y no se hallare roto o testado o cancelado en su cuerpo, data o firma, rubricará el principio y fin de cada una de las páginas y mandará protocolizarlo por escribano público. Se dará copia a quien corresponda.

CAPITULO VI

De los testigos en los testamentos

2061. No podrán ser testigos en los testamentos, aparte de los mencionados en el art. 244, inc. 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 8º:

Incapacidad.

- 1º Los sordos y los mudos.
- 2º Los ascendientes, los descendientes y el cónyuge del testador.
- 3º El heredero instituido, sus ascendientes, descendientes y cónyuge.
- 4º Los legatarios, y todos los que reciban algún beneficio por las disposiciones del causante; así como los albaceas.

2062. La capacidad de los testigos deberá existir al tiempo de la formación del testamento. Regirá para los testigos lo dispuesto en el art. 244, última parte.

Epoca de su capacidad.

2063. El testamento en que hubiere intervenido algún testigo incapaz será nulo, si excluido éste, no quedaren testigos en número suficiente.

Nulidad.

TITULO III

De la institución y substitución de herederos

2064. La institución de heredero sólo puede hacerse por testamento, y será facultativa del otorgante. Cuando éste no usare de aquel derecho, las disposiciones testamentarias deberán cumplirse, y sobre el remanente de los bienes, aplicarse las reglas de las sucesiones intestadas.

Institución.

Requisitos.

2065. El testador debe designar al heredero en forma clara, que no deje duda sobre el instituido. Cuando hubiere lugar a equívoco entre dos o más personas, ninguna de ellas será tenida por heredera.

Designación inequívoca.

Sucesión a título universal. Calidad de heredero.

2066. La disposición que atribuya la universalidad o una cuota parte de los bienes del causante, en favor de una o varias personas, se juzgará a título universal, e importa instituir heredero, aún cuando se limite a la nuda propiedad. Toda otra disposición será considerada a título particular, acordando sólo el carácter de legatario.

Cuotas no designadas.

2067. Los herederos instituidos sin designación de partes, suceden por cuotas iguales.

Cuotas incompletas.

2068. Cuando las personas instituidas debieran, según la voluntad del testador, ser los únicos herederos, y les hubiere asignado partes, que reunidas no llegaran a absorber toda la herencia, tales cuotas se aumentarán proporcionalmente. En la misma forma se les reducirá, cuando sumadas las fracciones, excedieren el total del acervo

Si la institución se limitare a una cuota de los bienes, o a varias, que en conjunto no agotaran todo el patrimonio, el remanente corresponderá a los herederos legítimos.

Beneficiario incierto.

2069. Las disposiciones testamentarias en beneficio de personas inciertas, o colectivamente designadas, o de entidades no investidas con personería jurídica, son nulas. Si en el último caso, se tratare de congregaciones o instituciones religiosas, el beneficio pasará al diocesano del lugar, en que ellas se encontraren, o a las autoridades del respectivo culto, para que cumplan bajo su responsabilidad, los fines designados por el causante.

Institución a los pobres o al alma.

2070. Cuando el testador no hubiere ordenado otro empleo, las instituciones o legados a los pobres serán distribuidos a beneficencia pública, con destino al sostenimiento o creación de hospitales, hospicios o asilos, en lo posible dentro del municipio donde estuvo domiciliado el causante.

De igual modo, las disposiciones de bienes para el alma del testador o para la de aquellos designados por él, se invertirán en capitales productivos de réditos, con intervención del obispo diocesano del último domicilio del causante. El prelado aplicará las rentas a sufragios o limosnas, y el capital ingresará en depósitos judiciales.

En todo caso, la fiscalización corresponderá a las autoridades indicadas.

Substitución.

2071. La facultad de instituir heredero, no comprende la de imponer a éste un sucesor.

El otorgante podrá, sin embargo, subrogar al instituido, para el caso de que éste no quiera, o no pueda aceptar la herencia. La substitución establecida para uno de estos dos supuestos, comprende también el otro. Lo mismo se resolverá, cuando la substitución no aludiere a ninguno de ellos.

2072. Dos o más personas pueden ser substituidas a una sola, y viceversa. Casos.

Cuando el testador substituye recíprocamente los herederos instituidos en partes desiguales, tendrán éstos en la substitución las mismas cuotas originarias, si aquél no hubiere dispuesto de otro modo.

El reemplazante del substituto se entiende serlo también del heredero nombrado en primer término.

2073. El heredero substituto queda sujeto a las mismas cargas y condiciones impuestas al instituido, cuando la voluntad de limitarlas a este último, no apareciere claramente expresada en el testamento. Cargas y condiciones.

2074. La substitución fideicomisaria es nula. Sin embargo, dicha nulidad no perjudica la institución de heredero, ni afecta los derechos del designado en primer término. Nulidad del fideicomiso.

Serán de ningún valor las disposiciones del causante, por las cuales llame a otra persona para recibir todo o parte de lo que reste de la herencia, al fallecer el heredero instituido.

TITULO IV

De la capacidad para recibir por testamento

2075. No obstante lo dispuesto en el art. 1852, podrán recibir por testamento las entidades que no revistan el carácter de personas jurídicas, en el caso previsto por el art. 105. Personas inexistentes.

De igual modo podrán adquirir herencias o legados, aún las personas no concebidas al fallecer el causante, cuando se tratare de la prole eventual de sujetos claramente determinados y existentes al abrirse la sucesión.

2076. Los tutores y los curadores no podrán recibir beneficio alguno en virtud del testamento de los incapaces, que fallecieren bajo su guarda, y aun después de haber ésta cesado, cuando no se aprobaren las cuentas de la administra- Tutores y curadores.

ción. Este artículo no comprende a los herederos forzosos, que son o han sido tutores o curadores del causante.

2077. El segundo marido de la mujer que conserve la patria potestad o ejerza la curatela de sus hijos de un matrimonio precedente, será incapaz de recibir por testamento de éstos, mientras fueren menores.

2078. Son incapaces de suceder y de recibir legados, los confesores del causante, o los ministros de cualquier religión, con tal que unos u otros le hubieren asistido en su última enfermedad; los parientes de ellos dentro del cuarto grado, siempre que no lo fueren del testador; las iglesias en que prestaren su ministerio, con excepeión de la parroquial del otorgante, así como las comunidades religiosas a que pertenecieren.

2079. Toda disposición a beneficio de los incapaces mencionados en el presente título será de ningún valor, ya se oculte bajo la forma de un contrato oneroso, o se disimule con personas interpuestas. Se juzgarán tales, los ascendientes, descendientes y el cónyuge. El fraude a la ley podrá probarse por todos los medios. Los poseedores serán considerados de mala fe.

TÍTULO V

De la revocación de los testamentos

2080. El testamento es revocable a voluntad del causante, y no confiere a los instituidos ningún derecho hasta la apertura de la sucesión.

La facultad de dejarlo sin efecto no podrá ser renunciada ni restringida.

2081. La revocación que de su testamento hiciera una persona domiciliada o no en el país, será válida cuando se efectuare con arreglo a las formas de la ley del lugar donde se realizó, o en que tuviere su domicilio, o de conformidad con las disposiciones de este Código.

2082. El testamento sólo quedará revocado:

- 1º Por otro nuevo, únicamente en el caso de que éste contuviera cláusula expresa. De otro modo, el primero subsistirá en cuanto no fuera contrario al segundo.

2º Cuando, siendo ológrafo, fuera cancelado, rasgado o tachado, ya en su contenido, ya en su fecha o firma, siempre que exista un solo original.

3º Si extendido en varios ejemplares, todos ellos se inutilizaren en la forma prevista por el inciso precedente; pero la revocación subsistirá si hubiere quedado algún original sin destruir, por engaño o fraude padecido por el testador.

Caducará el testamento si el otorgante contrajere nuevas nupcias. Caducidad.

2083. No se reputará revocado el testamento, cuando las alteraciones o supresiones a que se refiere el inc. 3º del artículo anterior, se debieron a un accidente o al hecho de un extraño, siempre que en este último caso, él no hubiere procedido en virtud de orden escrita, fechada y firmada por el causante.

Alteraciones y supresiones involuntarias y parciales.

Si las alteraciones o supresiones fueren de carácter parcial y no afectaren los elementos constitutivos del acto, la revocación quedará limitada en esa misma medida. Cuando, siendo ológrafo, se encontrare en la casa del testador, se presume que las modificaciones se han producido por acto de éste.

2084. Revocado un testamento, subsistirá el anterior, si lo hubiere, como también cuando el nuevo fuere declarado nulo por vicio de forma. Pero si las disposiciones contenidas en el último, no tuvieran efecto por razón de incapacidad de los herederos o legatarios, o llegaren a caducar por cualquier causa, valdrá siempre la revocación del primero, motivada por el segundo.

Subsistencia del testamento anterior.

2085. El testador no puede confirmar sin reproducir las disposiciones contenidas en un testamento nulo por sus formas, aunque el acto esté revestido de todas las solemnidades requeridas para la validez de los testamentos.

Confirmación.

2086. Toda disposición que el testador fundare en una falsa causa, o en una causa que no tuviere efecto, queda sin valor alguno.

Disposición sin causa.

2087. Si el testamento hubiera sido destruido, aunque fuese por caso fortuito o fuerza mayor, no se admitirá prueba tendiente a justificar las disposiciones que él contenía.

Destrucción involuntaria.

TÍTULO VI

De los legados

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Objeto.

2088. Pueden ser objeto de legados:

- 1º Todas las cosas y derechos que estén en el comercio.
- 2º Las cosas, aun no existentes, siempre que llegaren a existir después.
- 3º Los sepulcros.
- 4º La correspondencia y los objetos que constituyan recuerdos personales o de familia.

Bien común parcialmente ajeno.

2089. El legado de un objeto que el testador tenga en comunidad con otra persona, importa solamente la transmisión de los derechos de aquél.

Quando el bien estuviere comprendido en una masa patrimonial, común a varios coparticipes, valdrá como legado de cantidad por el importe que pertenecía al causante, salvo disposición en contrario.

Nulidad.

2090. Es nulo el legado:

- 1º Cuando siendo de cosa cierta y determinada, ésta no perteneciere al testador en el momento de la apertura de la sucesión, supiere o no el causante que se trataba de cosa ajena.
- 2º Si fuere de cosas fungibles, cuando la cantidad no apareciere determinada.
- 3º Siempre que se dejare al arbitrio de un extraño. Podrá quedar a juicio del heredero la oportunidad de su entrega.

2091. Cuando el testador sin fijar la cantidad de las cosas fungibles, objeto de un legado, se refiriese a las que habrían de encontrarse en determinado sitio, aquél comprenderá las que allí existieren a la muerte del causante. Si mediare indicación del lugar y de la suma a entregarse, el legatario recibirá sólo esa cantidad cuando hubiere exceso, o hasta donde alcance la existencia, en el supuesto contrario.

Legado de género ilimitado.

2092. Si el testador hubiere ordenado la adquisición de cosa ajena para darla, el heredero deberá obtenerla y hacer entrega de ella al beneficiario. Cuando ésto no fuere posible, porque el dueño rehusare enajenarla o pidiere por ella una suma excesiva, cumplirá dando el valor de la cosa. Pero si ésta hubiere sido adquirida por el legatario antes de la apertura de la sucesión, le reembolsará el precio pagado, siempre que fuere equitativo.

De cosa ajena a obtenerse.

2093. Tanto para el legado de cosas a tomar dentro de las de cierta especie que se encontraren en la sucesión, como para el que fuere alternativo, se aplicará lo dispuesto en los arts. 634 y siguientes.

Aplicación extensiva.

2094. El error sobre el nombre de la cosa legada no producirá efecto, siempre que se pueda reconocer cual fué el objeto que tuvo en mira el testador.

Error en el nombre de la cosa.

2095. En cuanto a la extensión de los legados, se observará lo que sigue:

Extensión del legado.

- 1º La cosa deberá entregarse, tal como se encontrare a la muerte del testador, comprendiendo los útiles necesarios para el uso de la misma, cuando existieren en ella.
- 2º En el predio legado no se comprenderán los terrenos que agregó el causante después del testamento, pero sí las mejoras accesorias del suelo.
- 3º Cuando la manda tuviere por objeto parte de un fundo, o alguno contiguo a otro perteneciente al testador, se entenderá que comprende las servidumbres de tránsito o acueducto, necesarias para su goce o cultivo.
- 4º El de una casa con sus muebles o con todo lo que se encontrare en ella, solo incluirá el ajuar que exista en la misma.
- 5º Tratándose de un crédito del causante, comprenderá el capital adeudado y los intereses desde el día de la muerte de aquél.

6° En la duda sobre la cantidad o valor del legado, se entenderá lo más favorable a la masa.

Cosa gravada.

2096. Cuando el testador hubiere constituido prenda, hipoteca, usufructo, servidumbre u otra carga real sobre el objeto, antes o después del testamento, pasará con esos gravámenes el legatario. Este responderá de las obligaciones garantizadas, hasta la concurrencia del valor de la cosa.

Normas aplicables.

2097. Es aplicable a los legados, lo dispuesto en los arts. 2065, 2072, 2073 y 2074.

CAPITULO II

Del efecto de los legados

Obligación del heredero. Pago de las mandas.

2098. Todos los llamados a recoger la sucesión o una parte alícuota de ella, sea por ley o por testamento, estarán obligados al pago de las mandas, en la medida de sus hijuelas y hasta la concurrencia de ellas. Cuando se tratare de usufructo sobre la universalidad de los bienes, se aplicará lo dispuesto en el art. 1662, y si éste fuera limitado a determinada clase, se estimará su valor y el resto del patrimonio para establecer las contribuciones respectivas. Quienes sólo deban recibir bienes particulares, estarán dispensados de contribuir a ese pago, sea cual fuere la importancia de aquéllos con relación a la masa, a menos que el testador hubiere dispuesto lo contrario.

Prelación.

2099. Si los bienes de la herencia, o la cuota libre del testador no alcanzaren a cubrir sus disposiciones, las cargas comunes serán tomadas de la masa hereditaria; luego se pagarán las mandas de cosa cierta, después las otorgadas en compensación de servicios, y, lo que reste de los bienes, o en su caso, de la porción disponible, se distribuirá a prorrata entre los legatarios de cantidad.

El testamento podrá establecer otro orden de preferencia.

Deudas y cargas de la masa.

2100. Cuando la masa fuere solvente, las deudas y cargas de la misma no afectarán los legados, aunque ellas hubieren sido contraídas para adquirir, conservar o mejorar esos bienes. En el caso contrario, las mandas, aun de cosa cierta, deberán ser cumplidas después de las deudas.

2101. El legatario no puede tomar la cosa sin pedirla al heredero o albacea, aunque por cualquier título tuviera la posesión de ella. Los gastos de la entrega son a cargo de la masa.

Petición de la cosa legada.

2102. Si hubiere condición suspensiva o plazo incierto, el legado se adquiere desde el cumplimiento de aquéllos. Pero cuando fueren relativos a la manera de ejecución, y no a la manda misma, ésta se tendrá como pura y simple, por lo que hace a la transferencia del dominio.

Legados con modalidades.

2103. El legado de cosa cierta se regirá en particular por los siguientes principios:

Legado de cosa cierta. Reglas.

- 1º El legatario se juzgará dueño de ella desde la muerte del testador, transmitiendo ese derecho de sus herederos.
- 2º Pertenece al beneficiario los frutos de la cosa desde la apertura de la sucesión, conforme a los arts. 1523 y siguientes.
- 3º El legatario podrá reivindicarla contra el poseedor, debiendo citar al heredero.
- 4º El heredero no responderá por la evicción.

El presente artículo se aplica a los legados bajo término cierto, o cláusula resolutoria.

2104. En las mandas de objetos determinados tan sólo por su género, o de varios bajo alternativa, producida la evicción, podrá reclamarse otra cosa de la especie indicada, o la restante que hubiere podido elegirse.

Legados de género o alternativas. Evicción.

2105. El legado de liberación faculta a exigir la entrega del título de la deuda, si existiere.

Idem de liberación.

Aunque la manda comprenda la liberación de todas las deudas del beneficiario, no se extenderá a las demás contraídas por éste, después de otorgado el testamento.

2106. El reconocimiento de deuda, contenido en el testamento, se juzgará como legado, mientras no se pruebe lo contrario, y podrá quedar sin efecto por una disposición ulterior.

Reconocimiento de deuda.

Si el testador ordenare el pago de lo que creyere deber sin adeudarlo realmente, la disposición se tendrá por no escrita. Siempre que con motivo de una deuda determinada, dispusiere satisfacer más de su importe, no podrá reclamarse el exceso, ni aun como legado.

- Legado de crédito.** 2107. Legado un crédito a favor del causante, el heredero no responderá por la insolvencia del deudor; pero el legatario podrá ejercer todas las acciones de aquél.
- Legado al acreedor.** 2108. Si el testador hiciere un legado a su acreedor, no podrá el heredero pretender compensarlo con la deuda del causante.
- Legado con cargo: normas aplicables.** 2109. Son aplicables a los legados con cargo las reglas sobre las donaciones entre vivos de la misma naturaleza.
- Legado a los parientes.** 2110. Lo que fuere legado indeterminadamente a los parientes, se entenderá a favor de los consanguíneos del grado más próximo, según el orden de las herencias intestadas, teniendo en cuenta el derecho de representación. Si a la fecha del testamento existiere un solo pariente de ese grado, se juzgarán también llamados los del inmediato.
- Legado de pago periódico.** 2111. Cuando el testador legare una cantidad a pagar periódicamente, se entenderá para todos los efectos jurídicos, que existen tantos legados como términos corrieron desde la muerte del causante, hasta el deceso del beneficiario. El primero de ellos comenzará desde el fallecimiento del autor, y el legatario tendrá derecho a un periodo íntegro, aunque hubiere muerto al iniciarse el mismo.
- Legado de alimentos.** 2112. El legado de alimentos comprende la instrucción adecuada a las condiciones del legatario, el sustento, vestido, albergue y asistencia en las enfermedades hasta la edad de diez y ocho años; pero si le fuere imposible al favorecido procurarse los medios indispensables, se prolongará cuanto fuere menester, aun durante la vida entera del mismo.
- Pluralidad de legatarios.** 2113. Cuando se legare una cosa a diversas personas, de tal manera que una o varias de ellas pudieran quedar con el todo, se juzgará que la elección corresponde al heredero. El testador podrá también autorizarle para determinar la porción de cada beneficiario.
- Si el heredero no eligiere, o si en caso de ser varios no pudieren ponerse de acuerdo, vencido el plazo que al efecto le señalará el juez, se entenderá que todos son llamados por partes iguales.
- Se aplicarán a estas disposiciones las reglas de los arts. 2067 y 2068.
- Registro.** 2114. Siempre que los legados tuvieren por objeto transmitir el dominio o derechos reales sobre inmuebles, será menester su inscripción en el registro respectivo.

CAPITULO III

Del acrecimiento

2115. A falta de disposiciones del testador, el acrecimiento entre los legatarios, se ajustará a lo que sigue: Reglas supletorias.

- 1º Sólo procederá cuando el mismo objeto hubiere sido legado a varias personas, y alguna de ellas no pudiese recoger su cuota.
- 2º Será proporcional a la parte de cada legatario, aunque el testador al efectuar la manda, les hubiere asignado las cuotas.
- 3º Serán preferidos en el derecho de acrecer, los legatarios que fueron designados conjuntamente para la misma porción, cuando el que no recoge su parte se contare entre ellos.
- 4º Los favorecidos con el acrecimiento, quedarán sujetos a las obligaciones y cargas que pesaban sobre la parte acrecida.
- 5º Los colegatarios, a beneficio de los cuales se abriere o pudiese abrirse el derecho de acrecer, lo transmitirán a sus herederos con las porciones que en la manda les pertenezcan.

2116. Cuando el legado de usufructo, instituido conjuntamente a favor de dos personas, hubiere sido aceptado por ellas, la porción de la una, que después quedare vacante por su muerte, no acrecerá a la otra, consolidándose en el titular del dominio. Legado de usufructo

CAPITULO IV

De la caducidad

2117. Caducará el legado:

Casos.

- 1º Cuando el legatario falleciere antes que el testador, o previamente al cumplimiento de la condición suspensiva, a que estaba sujeta la liberalidad.

2º Si la cosa legada hubiere perecido totalmente con anterioridad a la apertura de la sucesión, o después de ella, sin culpa del heredero.

3º Cuando el legatario fuere excluido de la sucesión.

4º Por renuncia del beneficiario. El heredero podrá exigir que éste opte dentro de treinta días, bajo apercibimiento de tenerlo por aceptante.

Carácter expreso de la renuncia.

2118. Se presume siempre aceptada la manda, mientras no conste su renuncia. Aún producida ésta, podrán aceptarla los acreedores del beneficiario.

Alcance total. Irrevocabilidad.

2119. No puede renunciarse una parte del legado y aceptarse la otra. La renuncia es irrevocable.

CAPITULO V

De la revocación

Enajenación total o parcial.

2120. Toda enajenación de la cosa legada, sea por título gratuito u oneroso, o con pacto de retroventa, revoca la liberalidad, aunque el acto fuere nulo, o el objeto vuelva al dominio del testador.

La enajenación parcial solo revocará el legado en esa misma medida.

Venta judicial de la cosa.

2121. La venta judicial de la cosa a instancia de los acreedores del causante, revoca el legado, a menos que ella volviere al dominio del testador.

Gravámenes ulteriores.

2122. La afectación de la cosa con derechos reales, no revoca la liberalidad; pero aquélla pasa al beneficiario con el gravamen impuesto.

Especificación.

2123. Importa revocar el legado la modificación que el testador hiciere de la cosa, cuando ésta no presentare ya su forma anterior, y no le corresponda la designación que antes tuviera.

Incumplimiento de los cargos. Ingratitud.

2124. Procederá la revocación después de fallecido el causante:

1º Cuando ella se fundare en el incumplimiento de las cargas impuestas al legatario, aplicándose en el caso las reglas de las donaciones entre vivos.

- 2° Por causa de ingratitud, sólo en los supuestos siguientes:
- a) tentativa de homicidio contra el testador, sevicia o delito grave contra el mismo, después de la fecha del testamento.
 - b) injuria grave a la persona o a la memoria del causante.

TITULO VII

De los albaceas

2125. El testador podrá nombrar, bajo las formas prescriptas para los testamentos, uno o más albaceas a fin de que ejecuten sus últimas disposiciones.

Designación por el testador.

2126. Sólo pueden desempeñar el cargo las personas capaces de obligarse al tiempo de ejercerlo; pero no los menores emancipados, ni aquellos a quienes se prohibiere recibir mandatos del causante.

Capacidad.

2127. Son facultades del albacea:

Facultades.

- 1° Las conferidas por el testador, y si él no las hubiere indicado, todas las que según las circunstancias fueren necesarias para la ejecución del testamento.
- 2° La posesión de la herencia, a falta de herederos.
- 3° Reclamar de los herederos lo necesario para el pago de las deudas, cargas y legados. Los herederos podrán, sin embargo, rehusar la entrega para el cumplimiento de estos últimos, si juzgaren que se perjudicarían sus legítimas.
- 4° Demandar a los herederos y legatarios, para la ejecución de las cargas que el testador les hubiere impuesto en su propio interés.
- 5° Intervenir en los pleitos relativos a la validez del testamento o a la ejecución de sus cláusulas. No podrá actuar en los litigios que promuevan los acreedores hereditarios u otros terceros, si no comprometieren aquel cumplimiento.

2128. El albacea no podrá delegar el mandato recibido, ni se transmitirá a sus herederos; pero no está obligado a obrar

Delegación prohibida

personalmente; le será permitido hacerlo por mandatarios que actúen a su costa, bajo sus órdenes, respondiendo por los actos de éstos. Podrá nombrarlos, aun cuando el testador hubiere designado otro albacea subsidiario.

Obligaciones.

2129. Son deberes del albacea:

1º Asegurar los bienes sucesorios e inventariarlos, con citación de los herederos, legatarios y demás interesados, aunque el testador le hubiere eximido de hacerlo.

Habiendo herederos ausentes, o incapaces, esta diligencia será judicial.

2º Abonar las mandas con conocimiento de los herederos, pero si éstos se opusieren, deberá suspender el pago hasta que el juez resuelva.

3º Cuando hubiere mandas para fines de beneficencia, o destinadas a obras de piedad religiosa, ponerlo en conocimiento de las autoridades que las presidan, o que estén encargadas de ellas.

4º Responder a los herederos y legatarios por cualquier falta de cumplimiento en sus obligaciones, que hubiere comprometido los intereses de aquéllos.

5º Rendir cuenta a los herederos de su administración, no obstante cualquier cláusula contraria del testamento.

Facultades de los herederos y legatarios.

2130. Corresponde a los herederos, cuando intervengan ejecutores testamentarios:

1º Todas las facultades, cuyo desempeño no se atribuya especialmente a los albaceas. El mismo principio regirá, en lo pertinente, para los legatarios.

2º Solicitar la destitución del albacea por incapacidad para ejecutar el testamento, o por negligencia o mala conducta en el ejercicio de sus funciones, o por haber sido declarado en concurso.

3º Pedir las garantías necesarias para el caso de justo temor sobre la seguridad de los bienes, que estuvieren en poder del albacea. Igual derecho pertenece a los legatarios.

2131. Cuando un funcionario ha sido nombrado albacea en esa calidad, sus poderes pasarán a la persona que le suceda en el cargo.

Albaceazgo conferido a un funcionario.

2132. Cuando fueren varios ls albaceas, el cargo será ejercido por cada uno de ellos en el orden en que estuvieren designados, a no ser que el testador hubiere dispuesto expresamente que lo desempeñen de común acuerdo. En este último caso, aquéllos resolverán por mayoría, y a falta de ésta, las dificultades serán dirimidas por el juez.

Pluralidad de albaceas.

2133. La remuneración del albacea será la que hubiere establecido el testador. A falta de ella, el juez la regulará, tomando en consideración el trabajo realizado y el caudal de la herencia.

Remuneración. Gastos.

Los gastos hechos por el ejecutor testamentario para llevar su cometido, son a cargo de la masa.

2134. Examinadas las cuentas por los respectivos interesados, y deducidas las expensas legítimas, el albacea pagará o cobrará el saldo que en su contra o en su favor resultare, según lo dispuesto sobre los tutores en iguales casos.

Cobro del saldo.

2135. Si el testador no hubiere establecido tiempo para la duración del albaceazgo, esta no excederá de un año contado desde el día en que el ejecutor entró en ejercicio de su cargo. El juez podrá prorrogar el plazo, siempre que hubieren surgido dificultades graves.

Duración.

2136. Cuando no hubiere albacea, o el designado cesare en sus funciones por cualquier causa, los herederos y legatarios podrán ponerse de acuerdo para elegir un ejecutor testamentario; pero si no lo hicieren, este derecho no corresponderá a los acreedores de la sucesión, ni a otros interesados.

Nombramiento por los herederos y legatarios.

2137. El albaceazgo termina por la ejecución completa del testamento, por la muerte del albacea, por incapacidad ulterior, por renuncia voluntaria y por la destitución.

Cesación.

TITULO COMPLEMENTARIO

De la aplicación de las leyes civiles

Aplicación de las leyes nuevas. Casos.

2138. Las leyes nuevas regirán:

- 1° La capacidad y estado civil de las personas;
- 2° Los derechos de familia;
- 3° El contenido y extensión de los derechos reales, aun constituidos con anterioridad;
- 4° Las sucesiones ya abiertas, en cuanto al beneficio de inventario, a la separación de patrimonios y a la división de los bienes solicitados después de su vigencia.
Lo dispuesto en este inciso se entenderá sin perjuicio de lo que determine el art. 1854.
- 5° Las relaciones jurídicas que la ley establezca con prescindencia de la voluntad de las partes, aun cuando se aplicaren a los actos ulteriores.

En los supuestos de los incs. 1° y 2°, ellas regirán aun cuando abroguen o modifiquen las cualidades establecidas por las antiguas; pero sólo en lo que concierne a los actos y consecuencias ulteriores.

Ley en vigor al celebrarse el acto.

2139. La ley en vigor al tiempo de celebrarse el acto jurídico, regirá la capacidad de las partes, el objeto, la forma, las causales de nulidad o rescisión, así como los efectos producidos por ellos.

Derechos reales.

2140. Tratándose de derechos reales, los modos de adquirir admitidos por las leyes anteriores, conservarán su eficacia respecto de los ya existentes; pero ellos deberán inscribirse en el Registro.

Gravámenes reales no reconocidos.

2141. Los gravámenes sobre inmuebles, no reconocidos por este Código, podrán ser cancelados por el propietario, previa indemnización que fijará el juez.

2142. Las prescripciones cumplidas o iniciadas bajo el imperio de leyes precedentes, quedarán sujetas a ellas, a menos que las nuevas fijaren términos más breves, pues se tendrán entonces como producidas al vencimiento de éstos.

Régimen para la prescripción.

Cuando la prescripción adquisitiva se fundare en título, el mérito del mismo será estimado según la ley, bajo cuyo imperio se constituyó. En los demás casos, la prueba de la usucapión se regirá por las nuevas normas, salvo sentencia firme dictada en pleito contra el dueño del bien.

2143. Las leyes nuevas deberán aplicarse, aun cuando priven, dentro de los límites constitucionales, a los particulares, de facultades que les eran propias, con tal que no las hubieren utilizado, o que no hayan producido efecto.

Facultades no utilizadas.

2144. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriormente en vigor sobre materias legisladas en este Código.

Derogación de las disposiciones anteriores.

LEY SOBRE REGISTROS DE INSCRIPCIONES

TITULO I

Disposiciones generales

1. La Nación y cada una de las provincias, desde que comience a regir el nuevo Código Civil, establecerán en las respectivas capitales y en cada territorio, Registros Generales de Incripciones, que funcionarán bajo la superintendencia de la autoridad judicial competente.

2. Cada Registro General comprenderá las siguientes secciones:

- 1º Estado civil.
- 2º Dominio y derechos reales sobre inmuebles.
- 3º Embargos, inhibiciones, declaraciones de concurso e interdicción.
- 4º Personas jurídicas, asociaciones, sociedades civiles, regímenes matrimoniales y mandatos.
- 5º Sucesiones.

3. Los Registros a que se refieren los artículos anteriores, formarán en la Capital Federal y en cada provincia o territorio, una sola unidad, aun cuando sus actas y documentos deberán llevarse dentro de cada municipio en volúmenes separados.

4. Todo asiento del Registro se labrará en dos ejemplares, debiendo uno de ellos ser remitido al Distrito Federal, dentro de tercero día para su archivo y la formación de un organismo central que comprenda el conjunto de las inscripciones existentes en el país.

5. En cada sección del Registro habrá un libro diario de entradas, sujeto a lo dispuesto en el art. 43.

6. La Nación y las provincias, dentro de sus jurisdicciones respectivas, responderán directamente por cualquier

deficiencia en los Registros, y del daño que en el desempeño de su cometido causaren por su culpa los funcionarios y empleados. La demanda del particular prescribirá conforme al art. 324, caducando el derecho del Estado para resarcirse, al año de producido el hecho.

TITULO II

Del Registro del Estado Civil

CAPITULO I

Reglas generales

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 4, los registros de estado civil se llevarán en doble ejemplar de un tenor y se dividirán en tres libros, foliados y rubricados, de nacimientos, matrimonios y defunciones.

8. Las actas serán asentadas en los ejemplares del Registro, debiendo el oficial Público recibir personalmente las declaraciones, leerlas a los interesados ante dos testigos, y firmarlas luego, con todos los que pudieren hacerlo, expresando la causa que imposibilitare a cualquiera de ellos. Los testigos habrán de ser mayores, y uno al menos debe saber leer y escribir. El parentesco con los interesados no constituirá impedimento.

9. Las actas deberán asentarse por orden cronológico sin dejar claros entre ellas. Sólo contendrán las enunciaciones exigidas por la ley, y no podrán rectificarse sin previo juicio por mandato del juez competente.

Las actas, como instrumentos públicos, estarán regidas por las disposiciones respectivas del Código Civil.

10. Los registros deberán cerrarse al finalizar cada año y los ejemplares se archivarán en sitios distintos.

11. La autoridad a quien compete la superintendencia con arreglo al art. 1, practicará la inspección de los registros de estado civil, levantándose en cada caso un acta que será depositada en el archivo del Tribunal.

12. Todo delito o contravención, dará lugar al procedimiento de oficio por intermedio del Ministerio Público.

Las partes interesadas podrán perseguir asimismo, a los funcionarios, por cualquier irregularidad cometida. Cuando ésto no fuere posible, la demanda se intentará contra el Ministerio Público, a fin de obtener la inscripción o rectificación.

El fallo que admita la existencia del hecho denunciado se inscribirá en el Registro, para reemplazar el acta omitida, o corregir la irregular.

13. Todo depositario de registros es civilmente responsable por las alteraciones que aparecieren dentro de ellos, salvo su recurso contra los autores.

Cualquier contravención a las reglas del Código o de la presente ley, o de las que se dictaren para reglamentarla, hará incurrir a los oficiales públicos o a los depositarios, por el solo hecho de cometerla, en multa de cien a quinientos pesos moneda nacional, que aplicará el Juez Civil.

CAPITULO II

De los nacimientos

14. Todo nacimiento deberá declararse ante el encargado del Registro local, dentro de los tres días, plazo que podrá extenderse hasta diez en las provincias y treinta en los territorios, siempre que se trate de distritos rurales y que la distancia fuere mayor de veinte kilómetros entre el lugar del parto y el de la Oficina.

Vencidos dichos términos, la inscripción sólo podrá realizarse por mandato judicial.

15. Quedan obligados a declarar el nacimiento:

- 1° El padre, la madre, o sus parientes, en el caso de hijos legítimos, y si fueren ilegítimos, la persona que los hubiere reconocido.
- 2° El facultativo o la partera que asistieren al alumbramiento.
- 3° Cualquier otra persona que se hubiere hallado presente.
- 4° Aquél, en cuya casa o departamento acaeciére el parto.

- 5° El administrador del hospital, hospicio, cárcel, presidio, u otro establecimiento análogo, donde hubiere ocurrido.
- 6° Todo el que hallare algún expósito o abandonado.

16. No será necesario presentar el párvulo antes el Oficial Público, bastando la declaración del artículo anterior; pero aquél podrá exigir al denunciante que certifique su identidad, y cuando tuviere motivo para dudar del hecho, no asentar la partida hasta asegurarse de la exactitud del nacimiento.

17. El acta mencionará :

- 1° El lugar, hora y día del nacimiento. Cuando el parto se hubiere producido en cárcel o presidio, no se hará constar tal circunstancia.
- 2° El sexo, nombre y apellido del niño.
- 3° El nombre, apellido y domicilio del padre y de la madre, si fuere hijo legítimo.
- 4° En el mismo caso, el nombre y domicilio de los abuelos paternos y maternos.
- 5° El nombre, apellido y domicilio del denunciante y de los testigos.

El recién nacido podrá ser inscripto bajo cualquiera de los nombres del santoral; de los que fueren autorizados por la religión del denunciante; de los que fueren usuales, o de los que correspondan a personajes históricos. En caso de duda, resolverá sumariamente el juez, con audiencia del Ministerio Público.

Cuando se tratare de hijo ilegítimo, sólo se indicará el nombre del padre o de la madre que lo hubiere reonocido, con la única excepción que permite el art. 465, inc. 1°, del Código Civil.

Si fuere expósito o abandonado, constará el lugar y día en que se le encontró, su edad aparente, sexo, nombre y apellidos que se le dieran, así como las señas particulares que le distingan, y todas las circunstancias que contribuyan a individualizarle, cuando no hubiere otro medio de identificación. Quien formuló la denuncia, deberá presentar las ropas, documentos y objetos con que se halló al menor, los que se

depositarán en paquete cerrado bajo el mismo número de la partida.

18. Cuando fuere denunciada la muerte de un recién nacido, se extenderá el acta en el libro de defunciones, sin que ello afecte a lo dispuesto en el art. 20 del Código Civil, aunque los testigos depusieren a favor o en contra.

19. Declarado un nacimiento legítimo, no se permitirá impugnar la filiación en el acta, ni por asiento separado, debiendo quedar el punto sujeto a la resolución judicial.

20. En cualquier tiempo será permitido al padre o madre, reconocer a un hijo ilegítimo ante el encargado del Registro, quien levantará el acta respectiva, anotando en la partida de nacimiento tal circunstancia. Las escrituras públicas o las cláusulas testamentarias que establecieren la paternidad o maternidad, serán inscriptos a petición del autorizante o mandato judicial en el Registro del lugar, y se procederá como en el caso anterior.

De igual modo se hará para la legitimación, insertándose nota en las actas de matrimonio y nacimiento.

En todo supuesto, cuando los asientos existieren dentro del territorio de la Nación; pero en Registro distinto, se remitirán los testimonios necesarios para dejar la constancia marginal.

21. Las sentencias que declaren o rectifiquen la filiación legítima, ordenen la legitimación, cambien o reformen el nombre de las personas, serán inscriptas por mandato judicial en el libro de nacimientos, y se practicarán las anotaciones del caso al margen de las actas respectivas.

22. Si el nacimiento ocurriere en buque nacional durante el viaje, el contador si aquél fuere de guerra, y el capitán o patrón en los mercantes, formalizarán el acta de acuerdo con el art. 14, dentro del tercer día de ocurrido el parto, debiendo asentarla en el diario de navegación.

En el primer puerto de arribo, el autorizante deberá depositar dos copias del acta mencionada, en la Prefectura Marítima o en el Consulado argentino, según que las autoridades fueren nacionales o extranjeras. A falta de ellas, la entrega se efectuará en el próximo punto de llegada, donde las hubiere.

Uno de los duplicados será remitido al Ministerio de Marina, quien lo enviará para su inscripción al Registro Civil del domicilio paterno, o de la madre en su defecto. Si no

fuere conocido, o no lo tuviere ninguno de ellos dentro del territorio de la Nación, el acta quedará asentada en la Capital. El segundo ejemplar permanecerá en el archivo de la Prefectura o Consulado.

23. El nacimiento de los hijos de militares en campaña, será registrado en la forma que dispongan los reglamentos. Se remitirán dos copias al Ministerio de Guerra, el cual archivará una, y enviará la otra al Registro, observándose lo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO III

De los matrimonios

24. Se extenderán en el libro de matrimonios:

- 1º Las actas que acrediten su celebración.
- 2º Las sentencias de nulidad.
- 3º Las de divorcio.
- 4º Las que reconocieren la existencia de uniones legítimas, con arreglo al art. 360 del Código Civil.

En los casos de los incs. 2º, 3º y 4º, el juez ordenará de oficio la inscripción en el Registro del lugar donde tuviere su asiento el tribunal. También dispondrá se anote el fallo al margen de la partida de casamiento en los supuestos de los incs. 2º y 3º.

25. En cada oficina de Registro Civil deberá llevarse, aparte del indicado en el artículo anterior, otro libro especial para insertar en él todas las actas de diligencias previas, que se registrarán con expresión de fecha, y de acuerdo con lo ordenado por el art. 343 del Código Civil.

CAPITULO IV

De las defunciones

26. Dentro de las veinticuatro horas de producida la muerte de una persona, su cónyuge, los hijos, y los parientes.

y en su defecto, cualquiera que la presenciare, o en cuyo domicilio hubiere acaecido, deberá declararlo ante el encargado del Registro.

Igual obligación corresponde al que hallare un cadáver abandonado, así como a los superiores o administradores de cuarteles, hospitales, cárceles, u otros establecimientos análogos, en que hubiere ocurrido la defunción.

El oficial público verificará la exactitud de la denuncia en forma adecuada a las circunstancias, cuando tuviere motivo para dudar de aquélla.

27. El facultativo que hubiere asistido a la última enfermedad, y a falta de él, cualquier otro solicitado al efecto, deberá examinar el cadáver y expedir certificación del deceso, con la constancia de la hora en que acaeció y de la causa atribuida al mismo. Este documento se presentará al Registro, junto con la declaración, y cuando no hubiera sido posible obtenerlo, el encargado podrá exigirlo de oficio.

28. El acta se extenderá ante dos testigos que hayan visto el cadáver, presentados por el denunciante, o requeridos de oficio por el encargado del Registro, y expresará en lo posible:

- 1° El sexo, nombre, apellido, nacionalidad, estado, profesión y domicilio del muerto.
- 2° El nombre y apellido del cónyuge, si hubiere sido casado o viudo.
- 3° El nombre, apellido y nacionalidad de los padres.
- 4° La enfermedad u otra causa del fallecimiento que le atribuyan los certificados a que se refiere el art. 27.
- 5° El lugar, día y hora de la muerte. La primera circunstancia no se hará constar cuando el hecho se hubiere producido en cárcel o presidio.
- 6° El nombre, apellido y domicilio del declarante y de los testigos.

29. Cuando no fuere posible establecer la identidad del cadáver, se consignará en el acta cualquier detalle que pueda servir para determinarla en el futuro, así como las circunstancias en que fué hallado y los objetos que se encontraron junto a él, los cuales serán depositados en la oficina en la forma dispuesta en el art. 17.

30. Para los casos de muerte en alta mar y de militares en campaña, se procederá como disponen los arts. 22 y 23.

31. Cuando una persona hubiere desaparecido en tales circunstancias, que su muerte deba ser tenida como cierta, ésta podrá ser inscrita en el Registro a requerimiento de la autoridad judicial que levantó el sumario, aunque el cadáver no se encontrare, ni pudiese establecerse la identificación.

En este caso, toda persona interesada podrá pedir, se declare judicialmente la existencia o la muerte del desaparecido.

TITULO III

Del Registro de Inmuebles

CAPITULO I

Disposiciones generales

32. El Registro de inmuebles consignará el estado del dominio y demás derechos reales sobre tales bienes.

Forman parte de este Registro, el libro de inscripción, los documentos relativos a la misma, el de prenotaciones, el diario y los índices.

33. Cada inmueble será matriculado en el libro de inscripciones, en hoja independiente y bajo número distinto.

Todas las anotaciones ulteriores se harán en la hoja abierta con el primer asiento. Agotado el espacio, o siempre que la claridad lo aconseje, se dejará constancia de la continuación en un nuevo folio del libro, bajo el mismo número de la matrícula originaria.

La hoja correspondiente a cada inmueble será su registro, en el sentido que le asignan el Código Civil y la presente ley.

34. Aparte del libro de inscripciones, se llevarán dos índices, distintos de aquél.

En uno de ellos se asentará cada inmueble inscripto, con expresión del libro y folio en que esté su registro. También se consignará el nombre de quien obtuviere las inscripciones y prenotaciones, así como la naturaleza de ellas.

El otro se establecerá por personas, en orden alfabético con mención del libro en que figure el registro del inmueble y de los derechos, a que corresponden los asientos.

35. Los registros se ajustarán a los modelos aprobados por las disposiciones reglamentarias.

En la primera página, se indicará el número total de las que contiene cada volumen y la fecha en que se abrió, debiendo esta nota firmarla la autoridad judicial encargada de la superintendencia, que también rubricará las hojas.

Cada tomo será numerado separadamente, consignando la circunscripción y el distrito a que corresponda.

36. El Tribunal que ejerza la superintendencia sobre el Registro, conocerá de los reclamos por inobservancia de las formas establecidas, pero sus resoluciones no harán cosa juzgada.

El perjudicado por cualquier inscripción o prenotación indebida, podrá exigir judicialmente que ellas sean canceladas, o que se anote su propio derecho, con arreglo a lo dispuesto en el Tít. II, Secc. II del Libro IV del Código Civil.

La demanda deberá intentarse contra quienes hubieren obtenido los asientos que se procura anular, ante el juez que los ordenó, o el competente en virtud de la situación del inmueble.

37. Los escribanos no podrán autorizar escrituras relativas a los actos que deban inscribirse, sin previa certificación del Registro, de la que resulte el estado del dominio y derechos reales sobre el inmueble, así como la libertad de disponer de quienes deban otorgarlas.

Para la validez de los instrumentos destinados a constituir el dominio o derechos reales, será menester que el autorizante consigne los anteriores propietarios, remontando por lo menos a veinte años, con los títulos respectivos, y que dé fe de haberlos examinado y encontrado en forma legal. Cuando los protocolos se hallaren fuera de su distrito, agregará la atestación de otro notario del lugar donde ellos se encontraren.

38. El escribano, ante quien se hubiere otorgado el instrumento que constituya, modifique, transmita o extinga el dominio u otro derecho real, dejará nota firmada al margen de los testimonios que devuelva al interesado, con mención de las personas, lugar y fecha de la escritura.

El incumplimiento de este artículo será considerado falta grave, y le hará responsable de todo perjuicio.

CAPITULO II

De la inscripción y de los trámites para obtenerla

39. Consiste la inscripción en el asiento que bajo la firma del encargado del Registro, designe dentro de la foja correspondiente al inmueble, el nombre completo de su titular, la naturaleza del derecho que le compete, el día, mes y año en que el asiento se verifica, y la mención del título en cuya virtud se realiza. Con referencia a éste se hará constar la fecha y el funcionario que lo autorizó, así como los demás datos contenidos en el instrumento para determinar el objeto. Consignará también dicha nota, el número de entrada y su data precisa.

Al insertar el nombre del titular se agregará su edad, estado, domicilio y toda circunstancia que tienda a identificarlo, y si fuere casado, se designará el cónyuge.

40. Se inscribirán en el Registro:

- 1° Las escrituras públicas que tengan por objeto constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles.
- 2° El bien de familia.
- 3° Las escrituras constitutivas de sociedades civiles o comerciales, cuando se aportaren bienes raíces.
- 4° Los instrumentos públicos de transacción sobre objetos de la misma naturaleza.
- 5° Los instrumentos relativos a partición de inmuebles, o de herencias, siempre que los hubiere en ellas.
- 6° La declaratoria de herederos, en las sucesiones donde existieren bienes raíces, así como el fallo que las modificare o anulare.
- 7° La cláusula testamentaria que disponga el legado de un derecho real sobre cualquier inmueble, lo mismo que el instrumento en que constare su ejecución por el heredero, o en virtud de auto judicial.

8° Los fallos definitivos dictados en juicios contenciosos, que decidan sobre la existencia, modificación, transferencia o extinción de derechos reales sobre inmuebles, y también los que ordenen se inscriba un contrato en los casos del art. 1451 del Código Civil.

9° Los arrendamientos de bienes raíces por término mayor de un año.

Las servidumbres prediales, serán inscriptas en el folio del fundo dominante y en el del sirviente.

10° Los derechos de aguas.

41. No podrán ser inscriptos:

1° Los bienes del dominio público.

2° La tierra pública.

3° Los demás bienes privados de la Nación, provincias y municipios, mientras estén afectados a un servicio público.

4° Los títulos posesorios, ni los fundados en la prescripción adquisitiva, salvo cuando por sentencia firme se ordene cancelar las inscripciones opuestas.

5° Las informaciones sumarias.

6° Los actos sometidos a revocación, resolución u otras restricciones sobre la subsistencia presente, futura o eventual de los mismos, sin perjuicio de ser prenotados, y con las reservas del art. 56, última parte.

Cuando el precio de venta o la entrega de bienes en permuta, quedasen adeudados, sólo podrá inscribirse el título si mediere hipoteca en seguridad de tales prestaciones.

7° Aquellos actos que versaren sobre títulos no inscriptos con anterioridad, a menos que éstos se presentaren también para su registro.

8° Los que estuvieren asentados a nombre de personas que no fueren el solicitante o su autor, o figurasen incluidos en otra inscripción, o comprendieren a su vez, bienes registrados a favor de terceros.

42. Toda inscripción debe solicitarse por escrito, de acuerdo con los Reglamentos. Están facultados para pedirla:

- 1° El titular del derecho, transmitido o afectado a consecuencia de la inscripción.
- 2° El adquirente.
- 3° Todos aquellos que tuvieren interés en asegurar el derecho que haya de transferirse, modificarse o extinguirse.

El escribano autorizante de un instrumento que deba inscribirse, está obligado a presentar inmediatamente testimonio en forma para tal efecto, juzgándose mandatario de las partes para todos los trámites hasta obtener el asiento, o la prenotación del título en su caso.

Estas reglas se aplicarán a los actos y sentencias judiciales, que podrán ser inscriptos o prenotados por requerimiento directo, siempre que llenaren los extremos exigidos en la presente ley.

43. Los pedidos de inscripción se anotarán en el libro diario tan pronto como fueren presentados, y a renglón seguido uno de otro, en orden correlativo, consignándose en cada caso el nombre del solicitante y el objeto de la petición, así como la hora exacta en que fué recibida. Se dará constancia de ello al interesado, bajo el número correspondiente.

Deberán acompañarse los documentos que hubieren de ser registrados, los que se archivarán, salvo los testimonios de las escrituras públicas. Estos serán devueltos con nota, en la que conte la inscripción efectuada.

44. La inscripción de un inmueble se efectuará en el Registro del distrito donde esté ubicado. Cuando por la situación y área del terreno correspondiere a varios, se hará por el todo en cada uno de ellos, y se dejará constancia de esta particularidad.

Para los fines de la presente ley, se entenderá como inmueble la superficie relativa a cada título. Las ulteriores adquisiciones podrán agregarse al mismo bien, cuando fueren contiguas y lo solicitare el propietario, o así resultare del instrumento a inscribirse.

Si el derecho real que se constituye afectare solamente a una parte del bien, se juzgará esta fracción como un que-

vo inmueble, y se le matriculará en tal concepto, anotándose el desglose en el folio anterior. Para las servidumbres prediales o los derechos del uso y habitación, podrán prescindirse de la nueva hoja, si de ello no resultare inconveniente.

45. El asiento originario de cada folio del Registro deberá referirse a un plano del inmueble, ejecutado con arreglo a una mensura judicial o administrativa, debidamente aprobada. Si ya hubiere Registro Gráfico Oficial, y en él figure el bien bajo el nombre del recurrente, o de sus autores comprobados, bastará tal circunstancia para que pueda inscribírselo.

En la planta urbana de cada distrito, será suficiente que el inmueble se designe con referencia al catastro fiscal, si lo hubiere, y en su defecto, se acompañará un plano firmado por peritos, con determinación de medida, calle y número, u otros datos para ubicarlo e individualizarlo. El encargado del Registro deberá visar el plano.

46. Los extremos enunciados para eximir de la mensura resultarán de certificaciones expedidas por la autoridad respectiva, la cual, además, dará fe de que la cosa no figura en todo o en parte, a nombre de persona distinta del peticionante o de sus autores, y que no existe superposición de títulos. Este documento quedará archivado en el Registro.

Después de sancionada la presente ley, dicho requisito será exigido por el escribano en cada caso, quien lo agregará al protocolo y hará mención detallada del mismo en el cuerpo de la escritura.

47. Cuando sólo se tratare de inscribir la fracción de un bien ya anotado en el Registro Gráfico o en el Catastro urbano, se acompañará plano de la división, tomando como base el del inmueble en su conjunto. La autoridad que deba certificar con arreglo al artículo precedente, lo visará siempre que llevare firma de perito y dejará constancia de ello al expedir aquel documento.

Se aplicará la misma regla a las particiones judiciales, o por escritura pública.

48. Los certificados exigidos en los artículos anteriores, contendrán el número individual del bien que le atribuyan las autoridades respectivas, según su reglamento. Bajo esa designación se efectuará el asiento inicial en el Registro, y

se mantendrá para cada una de las parcelas, con el agregado de letras o indicaciones secundarias en orden sucesivo.

49. El encargado rehusará la inscripción, en caso de no llenarse los requisitos de forma y de fondo exigidos por el Código Civil y la presente ley.

Cuando las dificultades pudieran ser subsanadas por las partes, se les acordará un término para efectuarlo, bajo apercibimiento de caducar el pedido. Podrá solicitarse por el interesado una prenotación, mientras realiza los trámites, o el juez competente se pronuncia sobre las dificultades surgidas para el Registro.

50. Los instrumentos públicos otorgados en el país, si lo fueren dentro de una jurisdicción local diversa del Registro, no serán protocolizados para su inscripción. Bastará con legalizarlos y transcribirlos en los libros.

Para los formalizados en el extranjero, regirá lo dispuesto por el art. 253 del Código Civil.

51. Los instrumentos que hayan de inscribirse, designarán el inmueble a que se refieren, por el número de su matrícula en el Registro, y mencionarán la inscripción anterior correspondiente al título del causante. Cuando no lo hubiere, deberán determinar la cosa con referencia a los certificados exigidos por el art. 46.

La inscripción de un derecho en condominio o comunidad, se hará expresando el interés que corresponda a cada una de las partes.

52. Cuando se trate de actos efectuados, sea por mandatarios, o bien por representantes de personas jurídicas, o sociedades civiles o comerciales, los títulos que los habilitan deberán resultar del instrumento mismo presentado para la inscripción, o en su defecto, de certificado expedido por el Registro respectivo.

53. La calidad de heredero sólo podrá resultar de una declaratoria dictada por el juez de la sucesión. En ningún caso se admitirán procedimientos informativos ante un tribunal distinto.

54. La inscripción de los bienes privados, que pasaren al dominio o servicio público, será cancelada por nota en el folio abierto para aquéllos.

Los inmuebles pertenecientes a empresas ferroviarias, deberán inscribirse en un libro especial para cada una de ellas, y cancelarse los folios anteriores a la adquisición.

55. El encargado del Registro notificará toda inscripción, por carta certificada, al solicitante y al titular inscripto, así como a cualquier persona, cuyo interés aparezca de las constancias existentes.

Si hubiere intervenido escribano, la comunicación será dirigida a éste, como representante de las partes.

CAPITULO III

De la prenotación

56. Corresponde anotar preventivamente, en el libro respectivo:

- 1° Los instrumentos públicos, mediante los cuales, se constituyan, modifiquen, transfieran o extingan, derechos reales sujetos a condición, resolución, revocación o plazo, que impidan el establecimiento firme y actual del dominio o sus desmembraciones.
- 2° La oposición a los asientos contenidos en el Registro.
- 3° Las solicitudes de inscripción que no hubieran prosperado por deficiencias, o bien por reparos procedentes del mismo Registro.
- 4° Las restricciones a la capacidad de disponer, y las medidas conservatorias ordenadas por juez competente para garantizar pretensiones litigiosas, o que dispongan el embargo de un inmueble, o la inhibición del titular.
- 5° El auto declarativo del concurso o la interdicción.
- 6° Los contratos que contengan cláusulas autorizadas por los arts. 927 a 944 del Código Civil.
- 7° La aceptación bajo beneficio de inventario y la separación de patrimonios.
- 8° El derecho reservado por el art. 69 del Código Civil.

Toda prenotación que corresponda a un inmueble, deberá consignarse en nota marginal y en la hoja correspondiente.

La hipoteca, el usufructo, el derecho de uso y habitación, así como los censos, aunque fueran a término, no podrán ser prenotados; pero sí inscriptos con arreglo al art. 40, inc. 1º.

57. Serán aplicables a las prenotaciones las reglas contenidas en el párrafo anterior.

CAPITULO IV

De la cancelación

58. El encargado del Registro podrán cancelar por su propia autoridad:

- 1º Los derechos reales, temporarios o vitalicios, cuando se acreditare el fallecimiento del titular o el transcurso del plazo.
- 2º Los relativos a bienes privados que pasaren al dominio o servicio público.
- 3º Las inscripciones irregulares o contrarias a la ley.
- 4º Las prenotaciones provisionales, cuando dentro del término concedido, la parte no dedujere su reclamo ante el juez competente, o subsanare la deficiencia. A falta del plazo especial, se entenderá que éste es de veinte días.

El último inciso se aplicará al caso en que ocurriere la caducidad de instancia, pero no a los contratos condicionales o sujetos a resolución eventual.

59. Las prenotaciones ordenadas por la autoridad judicial, podrán ser canceladas por disposición de la misma.

TITULO IV

Del Registro de Embargos y Limitaciones a la Capacidad

60. En cada una de las circunscripciones a que se refiere el art. se llevará un registro especial, dentro del cual quedarán anotados:

- 1º Las providencias judiciales que ordenen la inhibición general de una persona para disponer de sus bienes.

- 2° Los embargos. Siempre que se tratare de inmuebles, se prenotarán además, en la foja correspondiente del registro relativo a ellos; y cuando se tratare de ganados o locomóviles se procederá de igual manera en el especial para este género de bienes.
- 3° La declaración de concurso. Si en ella constare algún bien, cuyo registro fuere ordenado por la presente ley, se inscribirá también en éste.
- 4° Los autos de interdicción por causa de insania o sordomudez.

61. Las inscripciones a que se refiere el artículo anterior, consignarán con todas sus letras el nombre de las personas, su edad, estado, domicilio, y si son casados o viudos designarán el cónyuge, así como los demás datos que faciliten la identificación. Expresarán también el nombre del síndico o curador, en su caso, lo mismo que el del causante y herederos, para las aceptaciones beneficiarias o la separación de patrimonios.

62. Las restricciones a la capacidad de administrar y disponer serán inscriptas en el Registro del lugar donde tuviere su asiento el juzgado que las ordenare.

Respecto de los bienes fuera de su jurisdicción, se procederá por vía de exhorto.

63. Se llevará el índice personal, a que se refiere el art. 34. Para los embargos será también obligatorio, el índice real previsto dentro del primer apartado del mismo artículo.

CAPITULO V

Del Registro de personas jurídicas, sociedades y mandatos

64. Deberán inscribirse en este Registro:

- 1° Los instrumentos que constituyan, modifiquen o extingan las personas jurídicas. El asiento contendrá las indicaciones sumarias acerca de su contenido, suficientes para determinar las facultades de disposición y administración relativas a sus asambleas, directores o representantes.

- 2° Los mismos instrumentos en lo que concierne a las simples asociaciones y a las sociedades civiles, con las constancias que prescribe el inciso anterior. Se anotará igualmente el nombre de los administradores, el de los socios con responsabilidad limitada o no, y en el primer caso, el alcance de aquélla.
 - 3° Los mandatos generales y especiales, su modificación, revocación y extinción, así como las facultades que confieren.
 - 4° Los instrumentos en que las mujeres casadas declaran asumir la administración de sus bienes propios o indicados en el art. 425 del Código Civil, los que deberán determinarse. Cuando éstos fueren inmuebles o sometidos a un registro especial, se anotarán en las fojas o asientos respectivos la referencia a esta inscripción.
 - 5° Las sentencias de divorcio, o las que priven de sus facultades al marido o a la mujer, o las limiten, como también los actos que dejaren sin efecto cualquiera de los anteriores, conforme a lo prescripto por el Código Civil.
65. Será de rigor el índice personal, conforme al art. 34.

TITULO VI

Del Registro de Sucesiones

66. Corresponde inscribir en este Registro:

- 1° La iniciación de todo juicio sucesorio.
- 2° Las declaratorias de herederos.
- 3° Las resoluciones que presumen la vacancia.
- 4° Las aceptaciones de cualquier índole, las renunciaciones y el auto que disponga la separación de patrimonios.
- 5° La cesión total o parcial de derechos hereditarios.
- 6° Las particiones de herencias.
- 7° Los testamentos públicos, o aquellos que, otorgados bajo otra forma, presentaren voluntariamente sus autores.

Cuando hubiere inmuebles u otros bienes sometidos a registro especial, se practicarán las anotaciones en la foja o asiento correspondiente.

67. Serán prenotadas las resoluciones judiciales que, a instancia de parte, ordenaren esa medida en las causas sobre petición de herencia.

68. Los instrumentos comprendidos en los inc. 2° y 3° del art. 66, serán inscriptos en el Registro del lugar donde tuviere su asiento el juzgado del cual emanaren.

Si hubiere bienes en otra jurisdicción, se procederá con arreglo al art. 62.

69. Es aplicable a este Registro, lo dispuesto en el art. 65.

TITULO VII

Del Registro Especial para Ganados y Máquinas

70. La Nación y las provincias establecerán en cada municipio, un registro de ganados y de máquinas para la inscripción de los actos jurídicos exigida por el Código Civil, conforme a los reglamentos que se dictaren y bajo la vigilancia y superintendencia que las leyes locales determinen.

71. En el Registro se inscribirán:

- 1° Las marcas, señales, u otro distintivo autorizado para acreditar el dominio de los semovientes, y la clase de ganado a que se apliquen. El asiento contendrá, además, el nombre y la firma del propietario. Si los animales no fueren el fruto de la explotación directa del dueño, se consignará detalladamente el origen de la adquisición, quedando los documentos que la justifiquen archivados bajo el mismo número.

Cuando el justificativo del dominio emanare de autoridad distinta, se hará referencia al instrumento y se dejará en él constancia de la inscripción.

- 2° Toda transferencia de ganado, con la cantidad, marca y señales respectivas. El documento original será archivado en el Registro y deberá llevar la firma del propietario o de su representante.

- 3° Los mandatos para intervenir en los trámites del Registro, pudiendo otorgarse ante el encargado de éste.
- 4° Las declaratorias de herederos, particiones o hijuelas, en cuanto comprendieren ganados por cualquier título.
- 5° Los contratos de sociedades ganaderas o agrícolas, cuando se aportaren semovientes, con designación del instrumento, nombre de los socios, responsabilidad de los mismos, facultades para administrar, como también de lo relativo a la disolución y liquidación.
- 6° Cualquier adquisición de dominio sobre máquinas y locomóviles, debiendo constar el nombre de los otorgantes y la clase, número individual, fábrica y demás circunstancias que permitan determinar el objeto. No se autorizará la inscripción de cosas que no tuvieren fijadas en ellas los datos para identificarlas.
- 7° Las prendas sobre máquinas comprendidas en el apartado anterior. En el asiento deberán figurar el nombre y domicilio de las partes, los bienes afectados con su designación y el número del registro que los comprende, el importe del crédito principal, interés y demás cláusulas estipuladas, e inscribirse asimismo el título del constituyente, todo bajo la firma del encargado y de los contratantes.
El acto pignoraticio podrá otorgarse ante el Registrador, quien certificará la identidad de las personas en la forma que se establece para las escrituras públicas, y pondrá nota firmada, de la inscripción del gravamen en el instrumento de dominio.
- 8° Las prendas sobre ganados, bajo los requisitos del inciso precedente.
- 9° Las limitaciones para administrar y disponer, ordenadas por juez competente, debiendo archiversse el oficio del caso.

72. Quien hubiere adquirido semovientes con marca o señal inscrita a nombre de tercero, deberá presentar al encargado los instrumentos que acrediten su derecho, para el debido registro y archivo de los mismos.

No podrá extraerse ganado del municipio en que se hallare inscripto, sin la certificación que lo autorice, expedida

por el Registrador, en virtud de los documentos que otorgare el propietario.

73. Los hechos y actos que deban ser inscriptos no producirán efectos en cuanto a terceros, mientras no se hubiere procedido a su registro.

74. Los ganados y las máquinas tendrán secciones separadas dentro de cada Registro.

Las copias y certificaciones expedidas por los encargados revestirán el carácter de instrumentos públicos.

75. La Nación y las provincias reglamentarán por ley, las marcas, señales y signos admitidos para establecer la propiedad de los ganados; los requisitos de la marcación o señalamiento y los casos en que será obligatoria la contramarca.

76. En lo pertinente, las disposiciones sobre ganados serán aplicables a los cueros.

TITULO VIII

De la aplicación del Registro

77. Al constituirse el Registro General, quedarán clausurados todos los existentes sobre las materias comprendidas en el mismo.

78. Las inscripciones de derechos reales sobre inmuebles, efectuadas en los registros de la Capital y de las provincias, deberán ajustarse para su validez, a las disposiciones del Código Civil y a las contenidas en la presente ley. Exceptuánse las hipotecas, que serán regidas en cuanto a su anotación por las normas vigentes en el momento de constituirse.

79. Las demás inscripciones ordenadas en esta ley serán válidas, siempre que se ajustaren a las normas existentes cuando fueron cumplidas.

80. Las mensuras aprobadas y los planos catastrales se trasladarán al nuevo registro, y con arreglo a ellos, serán abiertas las inscripciones. Estas llevarán el número que señale en cada caso, la autoridad encargada del catastro topográfico.

81. En los inmuebles urbanos, al pedirse la inscripción, se presentará un gráfico de su planta, con firma de perito

y certificado conforme del catastro urbano, que lo designará bajo el número con que figure o deba figurar en él.

Cuando no hubiere mensura, el plano consignará las dimensiones del inmueble, su ubicación y número, siempre de acuerdo al certificado del catastro.

La solicitud será denegada cuando resultaren superposiciones.

82. Apesar de no hallarse el inmueble incluído en el catastro, ni existir mensura, procederá la inscripción, siempre que de los títulos no surgiera dificultad para individualizar la cosa y que nadie se opusiere al registro. El asiento hará presumir entonces, la existencia del derecho inscripto.

83. En la hoja correspondiente a cada inmueble se dejará constancia detallada de la mensura para los fundos rústicos y de la designación catastral para los urbanos, cuando las hubiere. Los notarios mencionarán dichos datos en los instrumentos que otorgaren.

84. Una ley del Congreso reglamentará el Código Civil y la presente, en lo que se refiere al Registro de inscripciones, a los detalles que habrán de observarse en los asientos, al modo de practicar las mensuras y a la formación del catastro.

1

INDICE

	Página
Antecedentes	IX
Decreto N.º 12.542	IX
Decreto N.º 13.156	X
Cumplimiento de los decretos	XII
Ley N.º 12.183	XIII
Presentación al Poder Ejecutivo	XV

INFORME

TITULO PRELIMINAR	1
-------------------------	---

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

SECCION PRIMERA

DE LAS PERSONAS

TITULO I

De las personas naturales	3
Capítulo I. Del comienzo y fin de las personas naturales ..	3
Capítulo II. De la capacidad	4
Capítulo III. Del nombre	4
Capítulo IV. Del domicilio	5
Capítulo V. De la prueba del nacimiento y de la muerte ..	5

TITULO II

De los menores	6
----------------------	---

TITULO III

De la interdicción	6
--------------------------	---

TITULO IV

De la ausencia	8
Capítulo I. De la declaración de ausencia	8
Capítulo II. De la presunción de fallecimiento	9

	<u>PÁGINA</u>
TITULO V	
De las personas jurídicas	9
Capítulo I. Disposiciones generales	9
Capítulo II. De las corporaciones	10
Capítulo III. De las fundaciones	11
Capítulo IV. De las asociaciones	11
SECCION SEGUNDA	
DE LOS BIENES	
TITULO I	
Disposiciones generales	12
TITULO II	
De los bienes públicos y particulares	13
TITULO III	
Del bien de familia	14
SECCION TERCERA	
DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS	
TITULO I	
De los actos voluntarios	16
Capítulo I. Disposiciones generales	16
Capítulo II. Del error	16
Capítulo III. Del dolo	18
Capítulo IV. De la fuerza y del temor	18
TITULO II	
De los actos jurídicos	18
Capítulo I. Disposiciones generales	18
Capítulo II. De la forma de los actos jurídicos	19
Capítulo III. De la simulación de los actos jurídicos	19
TITULO III	
De las modalidades de los actos jurídicos	20
Capítulo I. De la condición	20
Capítulo II. De los cargos	21
Capítulo III. Del plazo	21
TITULO IV	
De la representación en los actos jurídicos	21
Capítulo I. De la representación en general	21
Capítulo II. De la autorización y de la aprobación	23

	<u>PÁGINA</u>
TITULO V	
De la nulidad de los actos jurídicos	23
TITULO VI	
De la extinción de las relaciones jurídicas	25
SECCION CUARTA	
DEL EJERCICIO Y PRUEBA DE LOS DERECHOS	
TITULO I	
Del ejercicio de los derechos	26
TITULO II	
De la prueba	28
Capítulo I. Disposiciones generales	28
Capítulo II. De los instrumentos públicos	28
§ 1. Disposiciones generales	28
§ 2. De las escrituras públicas	29
Capítulo III. De los instrumentos privados	31
§ 1. Disposiciones generales	31
§ 2. De las cartas y otras pruebas escritas	32
Capítulo IV. De la confesión	33
Capítulo V. De los testigos	34
Capítulo VI. De los otros medios de prueba	35
TITULO III	
De la cosa juzgada	35
SECCION QUINTA	
DE LA PRESCRIPCION	
TITULO I	
Disposiciones generales	36
TITULO II	
De la suspensión	37
TITULO III	
De la interrupción	37
TITULO IV	
Del tiempo de la prescripción	38

LIBRO SEGUNDO

DE LAS RELACIONES DE FAMILIA

SECCION PRIMERA

DEL MATRIMONIO

Página

TITULO I

Régimen de las personas en el matrimonio	40
Capítulo I. Disposiciones generales	40
Capítulo II. De los impedimentos	41
Capítulo III. De las diligencias previas	42
Capítulo IV. De la celebración	43
Capítulo V. De la prueba del matrimonio	43
Capítulo VI. Derechos y obligaciones de los esposos	44
Capítulo VII. Del divorcio	46
Capítulo VIII. De la disolución del matrimonio	50
Capítulo IX. De los matrimonios nulos y anulables	51

TITULO II

Régimen de los bienes en el matrimonio	52
Capítulo I. De las capitulaciones y donaciones prenupciales	52
Capítulo II. De la sociedad conyugal	53
Capítulo III. Administración de la sociedad conyugal	54
§ 1. De la administración del marido	54
§ 2. De los bienes administrados por la mujer	56
Capítulo IV. Disolución de la sociedad conyugal	57

SECCION SEGUNDA

DE LA FILIACION

TITULO I

De la filiación legítima	58
Capítulo I. De los hijos legítimos	58
Capítulo II. De la legitimación	61

TITULO II

De la filiación ilegítima	62
Capítulo I. De los hijos naturales	62
Capítulo II. De los hijos adulterinos e incestuosos	63

TITULO III

De la adopción	63
----------------------	----

TITULO IV

Del parentesco y de la prestación de alimentos	64
--	----

SECCION TERCERA
DE LA PROTECCION DE LOS INCAPACES

	<u>PÁGINA</u>
TITULO I	
De la patria potestad	65
TITULO II	
De la tutela	66
Capítulo I. Disposiciones generales	66
Capítulo II. Del comienzo de la tutela	67
Capítulo III. Administración de la tutela	68
Capítulo IV. Cuentas de la tutela	68
Capítulo V. Terminación de la tutela	69
TITULO III	
De la curatela	69
Capítulo I. De la curatela de los incapaces	69
Capítulo II. De la curatela de bienes	70
TITULO IV	
De los menores emancipados	70
TITULO V	
De la autoridad y vigilancia en lo concerniente a los incapaces ..	71

LIBRO TERCERO
DERECHO DE LAS OBLIGACIONES

SECCION PRIMERA
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

TITULO I	
Del efecto de las obligaciones	72
Capítulo I. Disposiciones generales	72
Capítulo II. De la garantía común para los acreedores	73
Capítulo III. Del ejercicio de las acciones del deudor	75
Capítulo IV. De la revocación de los actos del deudor	76
TITULO II	
De los daños y perjuicios	76
Capítulo I. De la indemnización legal	76
Capítulo II. De la cláusula penal	77

SECCION SEGUNDA DE LAS DIVERSAS CLASES DE OBLIGACIONES

	<u>PÁGINA</u>
TITULO I	
De las obligaciones con relación a su objeto	78
Capítulo I. De las obligaciones de dar cosas ciertas	78
Capítulo II. De las obligaciones de dar cosas inciertas	79
Capítulo III. De las obligaciones de dar sumas de dinero	79
Capítulo IV. De las obligaciones de hacer y de no hacer	80
Capítulo V. De las obligaciones alternativas	80
Capítulo VI. De las obligaciones facultativas	81

TITULO II	
De la pluralidad de acreedores o deudores	81
Capítulo I. De las obligaciones divisibles	81
Capítulo II. De las obligaciones indivisibles	82
Capítulo III. De las obligaciones solidarias	82

SECCION TERCERA DE LA TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I	
De la cesión de créditos	83

TITULO II	
De la transmisión de deudas	83

SECCION CUARTA DE LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I	
Del pago	84
Capítulo I. Disposiciones generales	84
Capítulo II. Del objeto del pago	85
Capítulo III. Del lugar y tiempo del pago	85
Capítulo IV. Del pago por consignación	86
Capítulo V. De la imputación del pago	87
Capítulo VI. Del pago por subrogación	87
Capítulo VII. De la dación en pago	88

TITULO II	
De la novación	88

TITULO III	
De la compensación	89

TITULO IV

De la remisión de la deuda	90
----------------------------------	----

SECCION QUINTA

DEL CONCURSO Y DE LOS PRIVILEGIOS

TITULO I

Del concurso de acreedores	91
----------------------------------	----

TITULO II

Del derecho de retención	93
--------------------------------	----

TITULO III

De las causas de preferencia en el pago de los créditos	94
---	----

SECCION SEXTA

DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I

De los contratos en general	97
Capítulo I. Disposiciones comunes	97
Capítulo II. Del consentimiento	98
Capítulo III. Del objeto de los contratos	99
Capítulo IV. De la forma de los contratos	100
Capítulo V. Del efecto de los contratos	101
Capítulo VI. De los contratos a cargo o a favor de terceros	102

TITULO II

Del enriquecimiento sin causa	103
-------------------------------------	-----

TITULO III

De los actos ilícitos	106
Capítulo I. Disposiciones generales	106
Capítulo II. De los casos de indemnización	107
Capítulo III. Del ejercicio de la acción civil	108
Capítulo IV. De la responsabilidad por hechos ajenos	109
Capítulo V. De los daños causados por animales	110
Capítulo VI. De los daños causados por cosas inanimadas	110

SECCION SEPTIMA

DE CIERTAS RELACIONES OBLIGATORIAS EN PARTICULAR

TITULO I

De la compraventa y de la permuta	111
Capítulo I. Disposiciones generales	111
§ 1. De la capacidad para comprar y vender	111
§ 2. Del objeto de la compraventa	112
§ 3. Del precio	114

	<u>PÁGINA</u>
Capítulo II. De las cláusulas especiales en la compraventa ..	114
Capítulo III. Del efecto de la compraventa	115
Capítulo IV. De la permuta	115
TITULO II	
De la cesión de derechos	115
Capítulo I. Disposiciones generales	115
Capítulo II. Del efecto de la cesión	116
§ 1. De la cesión de créditos	116
§ 2. De la cesión de derechos y acciones reales	117
§ 3. De la cesión de herencia	117
TITULO III	
De las donaciones	118
Capítulo I. Disposiciones generales	118
Capítulo II. De la capacidad para hacer donaciones y recibirlas ..	119
Capítulo III. Del objeto y condiciones de la donación	119
Capítulo IV. De la forma de las donaciones	119
Capítulo V. Del efecto de las donaciones	120
Capítulo VI. De ciertas donaciones en particular	120
Capítulo VII. De la reversión de las donaciones	121
Capítulo VIII. De la revocación de las donaciones	121
TITULO IV	
De la locación	122
Capítulo I. Disposiciones generales	122
Capítulo II. Del efecto de la locación	123
Capítulo III. De la sublocación	125
Capítulo IV. Del término de la locación	125
Capítulo V. Arrendamientos de predios rústicos	126
TITULO V	
De la aparcería	126
TITULO VI	
Del contrato de trabajo	127
TITULO VII	
Del contrato de obra	129
TITULO VIII	
Del corretaje	130
TITULO IX	
Del mandato	131
Capítulo I. Disposiciones generales	131
Capítulo II. Del efecto del mandato	132
Capítulo III. De la cesación del mandato	132

	<u>PÁGINA</u>
TITULO X	
De la gestión de negocios ajenos	132
TITULO XI	
Del depósito	134
TITULO XII	
Del préstamo	134
Capítulo I. Del comodato	134
Capítulo II. Del mutuo	135
TITULO XIII	
De la sociedad	135
TITULO XIV	
De los contratos aleatorios	137
Capítulo I. Del juego y apuesta	137
Capítulo II. De la renta vitalicia	138
TITULO XV	
De la fianza	138
TITULO XVI	
De las transacciones	139
TITULO XVII	
De la evicción	140
TITULO XVIII	
De los vicios redhibitorios	141
TITULO XIX	
De las obligaciones abstractas	141
TITULO XX	
Promesa pública de recompensa	142
TITULO XXI	
De la exhibición de las cosas	142

LIBRO CUARTO
DERECHO SOBRE LAS COSAS

SECCION PRIMERA
DE LA POSESION

	<u>PÁGINA</u>
TITULO I	
Disposiciones generales	143
TITULO II	
De la adquisición y pérdida de la posesión	145
TITULO III	
De las obligaciones y derechos inherentes a la posesión	146
TITULO IV	
De las defensas y las acciones posesorias	147

SECCION SEGUNDA
DE LOS DERECHOS REALES

TITULO I	
Disposiciones generales	149
TITULO II	
De la inscripción y de la prenotación de los derechos reales sobre inmuebles	149
TITULO III	
Del dominio en general	151
Capítulo I. Disposiciones generales	151
Capítulo II. De la adquisición y pérdida del dominio sobre inmuebles	153
§ 2. Del aluvión y la avulsión	154
§ 3. De la edificación y plantación	154
Capítulo III. De la adquisición y pérdida del dominio de cosas muebles	155
§ 1. De la apropiación	155
§ 2. De la especificación y la adjunción	155
§ 3. De la adquisición de los productos y otras partes constitutivas de las cosas	157
§ 4. De la tradición	157
§ 5. De la propiedad de los ganados y máquinas locomóviles	158
Capítulo IV. De la usucapión	159

	<u>PÁGINA</u>
TITULO IV	
De las restricciones y límites del dominio	160
TITULO V	
De las aguas	161
TITULO VI	
Del condominio	162
Capítulo I. Disposiciones generales	162
Capítulo II. De la administración de la cosa común	163
Capítulo III. De la indivisión forzosa	163
Capítulo IV. Del condominio de los muros, cercas y fosos	164
TITULO VII	
Del usufructo	165
Capítulo I. Del usufructo de cosas	165
§ 1. Disposiciones generales	165
§ 2. Derechos y obligaciones del usufructuario	166
§ 3. Derechos y obligaciones del nudo propietario	169
§ 4. De la extinción	170
Capítulo II. Del usufructo de derechos	170
Capítulo III. Del usufructo sobre un patrimonio	171
TITULO VIII	
Del uso y de la habitación	172
TITULO IX	
De las servidumbres prediales	172
Capítulo I. De las servidumbres prediales en general	172
§ 1. Disposiciones generales	172
§ 2. Adquisición de las servidumbres	173
§ 3. Derechos y obligaciones	174
§ 4. De la extinción	176
Capítulo II. De las servidumbres prediales en particular	176
§ 1. De la servidumbre de tránsito	176
§ 2. De la servidumbre de acueducto	177
TITULO X	
De la hipoteca	178
Capítulo I. Disposiciones generales	178
Capítulo II. Del efecto de la hipoteca entre las partes	181
Capítulo III. Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros acreedores	182
Capítulo IV. Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros poseedores	183
Capítulo V. De la extinción de las hipotecas	180
TITULO XI	
De los censos	184

TITULO XII

De la prenda	185
Capítulo I. De la prenda de cosas en general	185
Capítulo II. De la prenda con registro	187
Capítulo III. De la prenda sobre títulos de crédito	188

TITULO XIII

De la anticresis	189
------------------------	-----

SECCION TERCERA

PROTECCION DE LOS DERECHOS REALES

TITULO I

De la demarcación de los inmuebles	190
--	-----

TITULO II

De las acciones reales	191
Capítulo I. De la acción reivindicatoria	192
Capítulo II. De la acción confesoria	195
Capítulo III. De la acción negatoria	195

LIBRO QUINTO

DE LA SUCESION HEREDITARIA

SECCION PRIMERA

DE LA TRANSMISION POR CAUSA DE MUERTE

TITULO I

Del derecho sucesorio	196
Capítulo I. Disposiciones generales	197
Capítulo II. De la aceptación y de la renuncia de la herencia	197
Capítulo III. Del beneficio de inventario	198
Capítulo IV. De la separación de patrimonios	200
Capítulo V. De la indignidad	201

TITULO II

De la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios	202
Capítulo I. De las medidas conservatorias	202
Capítulo II. De la declaratoria de herederos	202
Capítulo III. De la petición de herencia	203

TITULO III

De la pluralidad de herederos	204
Capítulo I. Del estado de indivisión	204
Capítulo II. De la partición	206
Capítulo III. De la colación	207
Capítulo IV. De la división hecha por los ascendientes	209
Capítulo V. Del efecto de la partición	210

TITULO IV

Régimen especial de los sepulcros	211
---	-----

TITULO V

De las sucesiones vacantes	212
----------------------------------	-----

**SECCION SEGUNDA
DE LAS SUCESIONES INTESTADAS**

TITULO I

Disposiciones generales	213
-------------------------------	-----

TITULO II

De la representación	213
----------------------------	-----

TITULO III

Del orden hereditario en las sucesiones intestadas	213
Capítulo I. Sucesión de los descendientes legítimos	213
Capítulo II. Sucesión de los ascendientes legítimos	214
Capítulo III. Sucesión de los cónyuges	214
Capítulo IV. Sucesión de los hijos ilegítimos	215
Capítulo V. Del derecho hereditario de los padres ilegítimos	215
Capítulo VI. Sucesión de los colaterales	216

TITULO IV

De la legítima	217
----------------------	-----

**SECCION TERCERA
DE LA SUCESSION TESTAMENTARIA**

TITULO I

Disposiciones generales	218
-------------------------------	-----

TITULO II

De las formas de los testamentos	219
Capítulo I. Disposiciones generales	219
Capítulo II. Del testamento ológrafo	220
Capítulo III. Del testamento por escritura pública	220
Capítulo IV. De los testamentos especiales	221
Capítulo V. De la apertura y protocolización de algunos testamentos	221
Capítulo VI. De los testigos en los testamentos	222

TITULO III

De la institución y substitución de herederos.....	222
--	-----

TITULO IV

De la capacidad para recibir por testamento.....	223
--	-----

TITULO V

De la revocación de los testamentos.....	223
--	-----

TITULO VI

De los legados.....	224
Capítulo I. Disposiciones generales.....	224
Capítulo II. Del efecto de los legados.....	225
Capítulo III. Del acrecimiento.....	225
Capítulo IV. De la caducidad.....	226
Capítulo V. De la revocación.....	226

TITULO VII

De los albaceas.....	227
----------------------	-----

TITULO COMPLEMENTARIO

De la aplicación de las leyes civiles.....	228
--	-----

LEY SOBRE REGISTRO DE INSCRIPCIONES

TITULO I

Disposiciones generales.....	230
------------------------------	-----

TITULO II

Del Registro del estado civil.....	232
Capítulo I. Reglas generales.....	232
Capítulo II. De los nacimientos.....	233
Capítulo III. De los matrimonios.....	234
Capítulo IV. De las defunciones.....	234

TITULO III

Del Registro de inmuebles.....	235
Capítulo I. Disposiciones generales.....	235
Capítulo II. De la inscripción y de los trámites para obtenerla.....	237
Capítulo III. De la prenotación.....	238
Capítulo IV. De la cancelación.....	239

TITULO IV

Del Registro de embargos y limitaciones a la capacidad.....	239
---	-----

TITULO V

Del Registro de personas jurídicas, sociedades y mandatos	240
---	-----

TITULO VI

Del Registro de sucesiones	240
----------------------------------	-----

TITULO VII

Del Registro especial para ganados y máquinas	241
---	-----

TITULO VIII

De la aplicación del Registro	242
-------------------------------------	-----

PROYECTO DE CODIGO CIVIL

PÁGINA

Título Preliminar	244
-------------------------	-----

LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL SECCION PRIMERA DE LAS PERSONAS

TITULO

De las personas naturales	246
Capítulo I. Del comienzo y fin de las personas naturales ..	246
Capítulo II. De la capacidad	247
Capítulo III. Del nombre	248
Capítulo IV. Del domicilio	248
Capítulo V. De la prueba del nacimiento y de la muerte ..	250

TITULO II

De los menores	251
----------------------	-----

TITULO III

De la interdicción	252
--------------------------	-----

TITULO IV

De la ausencia	254
Capítulo I. De la declaración de ausencia	254
Capítulo II. De la presunción de fallecimiento	255

TITULO V

De las personas jurídicas	257
Capítulo I. Disposiciones generales	257
Capítulo II. De las corporaciones	259
Capítulo III. De las fundaciones	261
Capítulo IV. De las asociaciones	263

SECCION SEGUNDA DE LOS BIENES

	<u>Página</u>
TITULO I	
Disposiciones generales	264
TITULO II	
De los bienes públicos y particulares	266
TITULO III	
Del bien de familia	268

SECCION TERCERA DE LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS

TITULO I	
De los actos voluntarios	270
Capítulo I. Disposiciones generales	270
Capítulo II. Del error	272
Capítulo III. Del dolo	273
Capítulo IV. De la fuerza y del temor	273
TITULO II	
De los actos jurídicos	274
Capítulo I. Disposiciones generales	274
Capítulo II. De la forma de los actos jurídicos	275
Capítulo III. De la simulación de los actos jurídicos	276
TITULO III	
De las modalidades de los actos jurídicos	277
Capítulo I. De la condición	277
Capítulo II. De los cargos	279
Capítulo III. Del plazo	280
TITULO IV	
De la representación en los actos jurídicos	281
Capítulo I. De la representación en general	281
Capítulo II. De la autorización y de la aprobación	283
TITULO V	
De la nulidad de los actos jurídicos	284

TITULO VI

De la extinción de las relaciones jurídicas	287
Capítulo I. Disposiciones generales	287
Capítulo II. De la renuncia	287
Capítulo III. De la confusión	288

SECCION CUARTA

DEL EJERCICIO Y PRUEBA DE LOS DERECHOS

TITULO I

Del ejercicio de los derechos	289
-------------------------------------	-----

TITULO II

De la prueba	291
Capítulo I. Disposiciones generales	291
Capítulo II. De los instrumentos públicos	292
§ 1. Disposiciones generales	292
§ 2. De las escrituras públicas	296
Capítulo III. De los instrumentos privados	300
§ 1. Disposiciones generales	300
§ 2. De las cartas y otras pruebas escritas	303
Capítulo IV. De la confesión	304
Capítulo V. De los testigos	305
Capítulo VI. De los otros medios de prueba	307

TITULO III

De la cosa juzgada	308
--------------------------	-----

SECCION QUINTA

DE LA PRESCRIPCION

TITULO I

Disposiciones generales	308
-------------------------------	-----

TITULO II

De la suspensión	310
------------------------	-----

TITULO III

De la interrupción	311
--------------------------	-----

TITULO IV

Del tiempo de la prescripción	312
-------------------------------------	-----

LIBRO SEGUNDO
DE LAS RELACIONES DE FAMILIA
SECCION PRIMERA
DEL MATRIMONIO

Página

TITULO I

Régimen de las personas en el matrimonio	317
Capítulo I. Disposiciones generales	317
Capítulo II. De los impedimentos	318
Capítulo III. De las diligencias previas	319
Capítulo IV. De la celebración	322
Capítulo V. De la prueba del matrimonio	324
Capítulo VI. Derechos y obligaciones de los esposos	325
Capítulo VII. Del divorcio	328
Capítulo VIII. De la disolución del matrimonio	337
Capítulo IX. De los matrimonios nulos y anulables	337

TITULO II

Régimen de los bienes en el matrimonio	341
Capítulo I. De las capitulaciones y donaciones prenupciales	341
Capítulo II. De la sociedad conyugal	343
§ 1. Principio de la sociedad, aportes y haber social	343
§ 2. Cargas de la sociedad	346
§ 3. De los bienes de la mujer	347
Capítulo III. Administración de la sociedad conyugal	347
§ 1. De la administración del marido	347
§ 2. De los bienes administrados por la mujer	349
Capítulo IV. Disolución de la sociedad conyugal	352

SECCION SEGUNDA
DE LA FILIACION

TITULO I

De la filiación legítima	355
Capítulo I. De los hijos legítimos	355
Capítulo II. De la legitimación	361

TITULO II

De la filiación ilegítima	362
Capítulo I. De los hijos naturales	362
Capítulo II. De los hijos adulterinos e incestuosos	364

TITULO III

De la adopción	365
----------------------	-----

TITULO IV

Del parentesco y de la prestación de alimentos	366
--	-----

SECCION TERCERA

DE LA PROTECCION DE LOS INCAPACES

Página

TITULO I

De la patria potestad.....	370
----------------------------	-----

TITULO II

De la tutela.....	377
Capítulo I. Disposiciones generales.....	377
Capítulo II. Del comienzo de la tutela.....	380
Capítulo III. Administración de la tutela.....	381
Capítulo IV. Cuentas de la tutela.....	385
Capítulo V. Terminación de la tutela.....	386

TITULO III

De la curatela.....	387
Capítulo I. De la curatela de los incapaces.....	387
Capítulo II. De la curatela de bienes.....	388

TITULO IV

De los menores emancipados.....	389
---------------------------------	-----

TITULO V

De la autoridad y vigilancia en lo concerniente a los incapaces.....	390
--	-----

LIBRO TERCERO

DERECHO DE LAS OBLIGACIONES

SECCION PRIMERA

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

TITULO I

Del efecto de las obligaciones.....	392
Capítulo I. Disposiciones generales.....	392
Capítulo II. De la garantía común para los acreedores.....	394
Capítulo III. Del ejercicio de las acciones del deudor.....	395
Capítulo IV. De la revocación de los actos del deudor.....	396

TITULO II

De los daños y perjuicios.....	398
Capítulo I. De la indemnización legal.....	398
Capítulo II. De la cláusula penal.....	399

SECCION SEGUNDA

DE LAS DIVERSAS CLASES DE OBLIGACIONES

TITULO I

De las obligaciones con relación a su objeto.....	400
Capítulo I. De las obligaciones de dar cosas ciertas.....	400

	<u>Página</u>
Capítulo II. De las obligaciones de dar cosas inciertas.....	402
Capítulo III. De las obligaciones de dar sumas de dinero.....	403
Capítulo IV. De las obligaciones de hacer y de no hacer.....	403
Capítulo V. De las obligaciones alternativas.....	404
Capítulo VI. De las obligaciones de pago facultativo.....	405
 TITULO II	
De la pluralidad de acreedores o deudores.....	406
Capítulo I. De las obligaciones divisibles ..	406
Capítulo II. De las obligaciones indivisibles ..	407
Capítulo III. De las obligaciones solidarias ..	408
 SECCION TERCERA	
DE LA TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES	
 TITULO I	
De la cesión de créditos.....	410
 TITULO II	
De la transmisión de deudas.....	412
 SECCION CUARTA	
DE LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES	
 TITULO I	
Del pago.....	414
Capítulo I. Disposiciones generales ..	414
Capítulo II. Del objeto del pago ..	415
Capítulo III. Del lugar y tiempo del pago ..	416
Capítulo IV. Del pago por consignación ..	418
Capítulo V. De la imputación del pago ..	419
Capítulo VI. Del pago con subrogación ..	420
Capítulo VII. De la dación en pago ..	422
 TITULO II	
De la novación.....	423
 TITULO III	
De la compensación.....	423
 TITULO IV	
De la remisión de la deuda.....	425

SECCION QUINTA
DEL CONCURSO Y DE LOS PRIVILEGIOS

	Página
TITULO I	
Del concurso de acreedores	426
TITULO II	
Del derecho de retención	432
TITULO III	
De las causas de preferencia en el pago de los créditos	433

SECCION SEXTA
DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

TITULO I	
De los contratos en general	438
Capítulo I. Disposiciones comunes	438
Capítulo II. Del consentimiento	438
Capítulo III. Del objeto de los contratos	441
Capítulo IV. De la forma de los contratos	442
Capítulo V. Del efecto de los contratos	444
§ 1. Disposiciones generales	444
§ 2. Del efecto de los contratos bilaterales	445
Capítulo VI. De los contratos a cargo o a favor de terceros	449
TITULO II	
Del enriquecimiento sin causa	450
TITULO III	
De los actos ilícitos	453
Capítulo I. Disposiciones generales	453
Capítulo II. De los casos de indemnización	454
Capítulo III. Del ejercicio de la acción civil	457
Capítulo IV. De la responsabilidad por hechos ajenos	458
Capítulo V. De los daños causados por animales	459
Capítulo VI. De los daños causados por cosas inanimadas	460

SECCION SEPTIMA
DE CIERTAS RELACIONES OBLIGATORIAS EN PARTICULAR

TITULO I	
De la compraventa y de la permuta	461
Capítulo I. Disposiciones generales	461
§ 1. De la capacidad para comprar y vender	462
§ 2. Del objeto de la compraventa	463
§ 3. Del precio	466

	<u>PÁGINA</u>
Capítulo II. De las cláusulas especiales en la compraventa	467
Capítulo III. Del efecto de la compraventa	472
Capítulo IV. De la permuta	472
 TITULO II	
De la cesión de derechos	473
Capítulo I. Disposiciones generales	473
Capítulo II. Del efecto de la cesión	475
§ 1. De la cesión de créditos	475
§ 2. De la cesión de derechos y acciones reales	476
§ 3. De la cesión de herencia	476
 TITULO III	
De las donaciones	478
Capítulo I. Disposiciones generales	478
Capítulo II. De la capacidad para hacer donaciones y recibirías	479
Capítulo III. Del objeto y condiciones de la donación	480
Capítulo IV. De la forma de las donaciones	481
Capítulo V. Del efecto de las donaciones	482
Capítulo VI. De ciertas donaciones en particular	482
Capítulo VII. De la reversión de las donaciones	483
Capítulo VIII. De la revocación de las donaciones	484
 TITULO IV	
De la locación	486
Capítulo I. Disposiciones generales	486
Capítulo II. Del efecto de la locación	488
Capítulo III. De la sublocación	495
Capítulo IV. Del término de la locación	497
Capítulo V. Arrendamientos de predios rústicos	499
 TITULO V	
De la aparcería	500
 TITULO VI	
Del contrato de trabajo	501
 TITULO VII	
Del contrato de obra	504
 TITULO VIII	
Del corretaje	507
 TITULO IX	
Del mandato	508
Capítulo I. Disposiciones generales	508

	<u>Página</u>
TITULO XVII	
De la evicción	559
Capítulo I. Disposiciones generales	559
Capítulo II. De la evicción en caso de venta	562
Capítulo III. De la evicción entre permutantes	563
Capítulo IV. De la evicción entre socios	563
Capítulo V. Evicción entre copartícipes	564
Capítulo VI. Evicción entre donantes y donatarios	565
TITULO XVIII	
De los vicios redhibitorios	566
TITULO XIX	
De las obligaciones abstractas	568
TITULO XX	
Promesa pública de recompensa	569
TITULO XXI	
De la exhibición de las cosas	570
 LIBRO CUARTO DERECHOS SOBRE LAS COSAS SECCION PRIMERA DE LA POSESION	
TITULO I	
Disposiciones generales	571
TITULO II	
De la adquisición y pérdida de la posesión	573
TITULO III	
De las obligaciones y derechos inherentes a la posesión	575
TITULO IV	
De las defensas y las acciones posesorias	575
 SECCION SEGUNDA DE LOS DERECHOS REALES	
TITULO I	
Disposiciones generales	579

TITULO II

De la inscripción y de la prenotación de los derechos reales sobre inmuebles	580
--	-----

TITULO III

Del dominio en general	584
Capítulo I. Disposiciones generales	584
Capítulo II. De la adquisición y pérdida del dominio sobre inmuebles	586
§ 1. Disposiciones generales	586
§ 2. Del aluvión y la avulsión	588
§ 3. De la edificación y plantación	589
Capítulo III. De la adquisición y pérdida del dominio de cosas muebles	590
§ 1. De la apropiación	590
§ 2. De la especificación y la adjunción	593
§ 3. De la adquisición de los productos y otras partes constitutivas de las cosas	594
§ 4. De la tradición	596
§ 5. De la propiedad de los ganados y máquinas locomóviles	597
Capítulo IV. De la usucapción	598

TITULO IV

De las restricciones y límites del dominio	602
--	-----

TITULO V

De las aguas	605
--------------------	-----

TITULO VI

Del condominio	607
Capítulo I. Disposiciones generales	607
Capítulo II. De la administración de la cosa común	610
Capítulo III. De la indivisión forzosa	610
Capítulo IV. Del condominio de los muros, cercas y fosos ..	611

TITULO VII

Del usufructo	615
Capítulo I. Del usufructo de cosas	615
§ 1. Disposiciones generales	615
§ 2. Derechos y obligaciones del usufructuario	617
§ 3. Derechos y obligaciones del nudo propietario	624
§ 4. De la extinción	625
Capítulo II. Del usufructo de derechos	626
Capítulo III. Del usufructo sobre un patrimonio	627

TITULO VIII

Del uso y de la habitación	628
----------------------------------	-----

TITULO IX

De las servidumbres prediales	630
Capítulo I. De las servidumbres prediales en general	630
§ 1. Disposiciones generales	630
§ 2. Adquisición de las servidumbres	632
§ 3. Derechos y obligaciones	633
§ 4. De la extinción	636
Capítulo II. De las servidumbres prediales en particular	637
§ 1. De la servidumbre de tránsito	637
§ 2. De la servidumbre de acueducto	638

TITULO X

De la hipoteca	642
Capítulo I. Disposiciones generales	642
Capítulo II. Del efecto de la hipoteca entre las partes	647
Capítulo III. Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros acreedores	648
Capítulo IV. Del efecto de la hipoteca con relación a los terceros poseedores	649
Capítulo V. De la extinción de las hipotecas	652
Capítulo VI. De la cancelación de las hipotecas	652

TITULO XI

De los censos	653
---------------------	-----

TITULO XII

De la prenda	655
Capítulo I. De la prenda de cosas en general	655
Capítulo II. De la prenda con registro	660
Capítulo III. De la prenda sobre títulos de crédito	661

TITULO XIII

De la anticresis	663
------------------------	-----

SECCION TERCERA

PROTECCION DE LOS DERECHOS REALES

TITULO I

De la demarcación de los inmuebles	665
--	-----

TITULO II

De las acciones reales	666
Capítulo I. De la acción reivindicatoria	666
Capítulo II. De la acción confesoria	674
Capítulo III. De la acción negatoria	674

LIBRO QUINTO
DE LA SUCESION HEREDITARIA

SECCION PRIMERA
DE LA TRANSMISION POR CAUSA DE MUERTE

	<u>PÁGINA</u>
TITULO I	
Del derecho sucesorio	676
Capítulo I. Disposiciones generales	676
Capítulo II. De la aceptación y de la renuncia de la herencia	677
Capítulo III. Del beneficio de inventario	680
Capítulo IV. De la separación de patrimonios	684
Capítulo V. De la indignidad	686
TITULO II	
De la seguridad, reconocimiento y ejercicio de los derechos hereditarios	687
Capítulo I. De las medidas conservatorias	687
Capítulo II. De la declaratoria de herederos	689
Capítulo III. De la petición de herencia	690
TITULO III	
De la pluralidad de herederos	691
Capítulo I. Del estado de indivisión	691
Capítulo II. De la partición	695
Capítulo III. De la colación	699
Capítulo IV. De la división hecha por los ascendientes	701
Capítulo V. Del efecto de la partición	704
TITULO IV	
Régimen especial de los sepuleros	705
TITULO V	
De las sucesiones vacantes	706

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS SUCESIONES INTESTADAS

TITULO I	
Disposiciones generales	707
TITULO II	
De la representación	708

TITULO III

Del orden hereditario en las sucesiones intestadas	709
Capítulo I. Sucesión de los descendientes legítimos	709
Capítulo II. Sucesión de los ascendientes legítimos	709
Capítulo III. Sucesión de los cónyuges	710
Capítulo IV. Sucesión de los hijos ilegítimos	711
Capítulo V. Del derecho hereditario de los padres ilegítimos	712
Capítulo VI. Sucesión de los colaterales	712

TITULO IV

De la legítima	713
----------------------	-----

SECCION TERCERA

DE LA SUCESION TESTAMENTARIA

TITULO I

Disposiciones generales	715
-------------------------------	-----

TITULO II

De las formas de los testamentos	716
Capítulo I. Disposiciones generales	716
Capítulo II. Del testamento ológrafo	718
Capítulo III. Del testamento por escritura pública	719
Capítulo IV. De los testamentos especiales	721
Capítulo V. De la apertura y protocolización de algunos testamentos	722
Capítulo VI. De los testigos en los testamentos	723

TITULO III

De la institución y substitución de herederos	723
---	-----

TITULO IV

De la capacidad para recibir por testamento	725
---	-----

TITULO V

De la revocación de los testamentos	726
---	-----

TITULO VI

De los legados	728
Capítulo I. Disposiciones generales	728
Capítulo II. Del efecto de los legados	730
Capítulo III. Del acrecimiento	733
Capítulo IV. De la caducidad	733
Capítulo V. De la revocación	734

TITULO VII

De los albaceas	735
-----------------------	-----

TITULO COMPLEMENTARIO

De la aplicación de las leyes civiles	738
---	-----

LEY SOBRE REGISTROS DE INSCRIPCIONES

TITULO I

Disposiciones generales	740
-------------------------------	-----

TITULO II

Del Registro del estado civil	741
Capítulo I. Reglas generales	741
Capítulo II. De los nacimientos	742
Capítulo III. De los matrimonios	745
Capítulo IV. De las defunciones	745

TITULO III

Del Registro de inmuebles	747
Capítulo I. Disposiciones generales	747
Capítulo II. De la inscripción y de los trámites para obtenerla	749
Capítulo III. De la prenotación	754
Capítulo IV. De la cancelación	755

TITULO IV

Del Registro de embargos y limitaciones a la capacidad	755
--	-----

TITULO V

Del Registro de personas jurídicas, sociedades y mandatos	756
---	-----

TITULO VI

Del Registro de sucesiones	757
----------------------------------	-----

TITULO VII

Del Registro especial para ganados y máquinas	758
---	-----

TITULO VIII

De la aplicación del Registro	760
-------------------------------------	-----

